

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Historia del Derecho**



**TESIS DOCTORAL**

**La administración de justicia real en León y Castilla (1252-1504)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**José Sánchez-Arcilla Bernal**

**Madrid, 2015**

TP  
1980  
148

José Sánchez-Arcilla Bernal



\* 5 3 0 9 8 5 4 1 0 1 \*

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

x-23-268815-4

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA REAL EN LEON Y CASTILLA (1252-1504)



ARCHIVO

Departamento de Historia del Derecho Español  
Facultad de Derecho  
Universidad Complutense de Madrid  
1980



BIBLIOTECA

© José Sánchez-Arcilla Bernal  
Edita e imprime la Editorial de la Universidad  
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía  
Noviciado, 3 Madrid-8  
Madrid, 1980  
Xerox 9200 XB 480  
Depósito Legal: M-38566-1980

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FACULTAD DE DERECHO

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA REAL EN LEON Y CASTILLA  
EN LA BAJA EDAD MEDIA  
(1252-1504)

Tesis doctoral realizada bajo la dirección de  
D. Alfonso García-Gallo, Catedrático de His-  
toria del Derecho de la Universidad Complu-  
tense, presentada por el Lcdo. José Sánchez-  
Arcilla Bernal para la obtención del grado de  
Doctor

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL DERECHO

MADRID 1980





## INDICE

pgs.

Presentación.....	I
Capítulo I: El Rey y el poder político.....	11
El contenido del poder jurisdiccional del Rey.....	55
Capítulo II: La proyección del poder jurisdiccional del Rey.....	110
Capítulo III: La administración de la justicia de la Corte I	
A.- Los Alcaldes de la Corte.....	175
B.- Los Alcaldes de las Alzadas y Adelantado Mayor de la Corte	
1.- Los Alcaldes de las Alzadas.....	263
2.- El Adelantado Mayor de la Corte.....	298
C.- Los Alcaldes de Hijosdalgo.....	316
D.- Los Alcaldes del Rastro.....	342
E.- El Juez de las suplicaciones.....	365
F.- El Juez Mayor de Vizcaya.....	375
Capítulo IV: La administración de la justicia de la Corte II	
La Audiencia. Origen y evolución.....	381
Competencias.....	504
La Audiencia de Ciudad Real.....	526
Capítulo V: La administración de la justicia de la Corte III	
El Consejo Real. Origen y evolución.....	531
Competencias.....	660
Capítulo VI: La administración de justicia territorial	
A.- Los Adelantados Mayores.....	693
B.- Los Alcaldes de Adelantamiento y Merindad.....	784
C.- El Justicia Mayor y los Alcaldes Mayores de Galicia.....	826
Conclusiones.....	832
Bibliografía.....	838

#### ABREVIATURAS UTILIZADAS

A.G.S.	Archivo General de Simancas
A.H.D.E.	Anuario de Historia del Derecho Español
A.H.	Academia de la Historia
A.H.N.	Archivo Histórico Nacional
B.N.	Biblioteca Nacional
C.D.H.R.M.	Colección de Documentos de Historia del Reino de Murcia
C.L.C.	Cortes de los Reinos de León y Castilla
O.R.C.	Ordenanzas Reales de Castilla
R.A.B.M.	Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
R.G.S.	Registro General del Sello.

## PRESENTACION

El objeto de la presente tesis es el estudio de los órganos de la administración de la justicia real en Castilla y León durante la Baja Edad Media, tema que, pese a su importancia, hasta el momento no había sido abordado en su conjunto con la atención que merece ni desde el campo de la Historia general, preocupada actualmente más por las corrientes económicas sociales, ni por los especialistas de nuestra disciplina, quienes, a lo sumo, se han ocupado sólo parcialmente de algunas instituciones, pero sin llegar nunca a integrar cada una de ellas dentro de ese cuadro armónico y perfectamente engranado que es la organización judicial.

Mentiríamos si negásemos rotundamente la existencia de visiones de conjunto sobre el tema aquí tratado. En este sentido merecen ser destacadas las que han ofrecido desde el campo de la Historia del Derecho los profesores A. GARCIA-GALLO (1), J. BENYTO (2), L. GARCIA DE VALDEAVELLANO (3), J. M. PEREZ PRENDES (4), o J. LALINDE (5). Sin embargo eran todavía muchos los problemas por dilucidar, no sólo por la amplitud del tema y la escasez de fuentes, sino también por las recientes aportaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, que obligan a revisar necesariamente muchos problemas hasta ahora no muy bien comprendidos.

- 
- (1) Curso de Historia del Derecho español, Madrid, 1946-50.
  - (2) Historia de la Administración española e hispanoamericana, Madrid, 1958.
  - (3) Curso de Historia de las Instituciones españolas, Madrid, 1970.
  - (4) Apuntes de Historia del Derecho español, Madrid, 1968.
  - (5) Iniciación histórica al Derecho español, 2a. ed. Barcelona, 1979.

El primer obstáculo que nos encontramos al enfrentarnos al estudio de la administración de justicia del Rey en este período es el de su amplitud. - Ello nos lleva forzosamente, dado el carácter del presente estudio, a tener que establecer unos límites cronológicos y unos límites objetivos que sean lo suficientemente amplios como para no desvirtuar en ningún momento el proceso histórico aquí estudiado, pero que al mismo tiempo sean guardados con una escrupulosa rigidez con el fin de ganar en profundidad a la hora de abordar esta compleja problemática.

La reafirmación y potenciación del poder real durante los siglos bajomedievales son factores decisivos a la hora de comprender la proyección de la jurisdicción real en los distintos ámbitos del Reino: central, territorial y local. Sólo el estudio conjunto y pormenorizado de estos tres ámbitos puede darnos una visión exacta de la organización judicial castellano-leonesa en la Baja Edad Media. Pero si el estudio de esta organización desde el ámbito central o de la Corte, pese a las grandes dificultades que presenta, ha podido ser esbozada en sus líneas maestras por M.A. PEREZ DE LA CANAL (6), y más recientemente por D. TORRES SANZ (7), no ocurre lo mismo con la administración territorial y la local, pese a los esfuerzos realizados por PEREZ BUSTAMANTE (8) y de N. GUGLIELMI (9).

De todos estos ámbitos, sin lugar a dudas, el más difícil y complejo, no por su organización en sí, sino por su variadísima tipología y, sobre todo, por su

- 
- (6) La justicia de las Cortes de Castilla durante los siglos XIII al XIV en Historia, Instituciones, Documentos 2 (1975), pgs. 385-481.
  - (7) La Administración Central castellana en la Baja Edad Media, tesis doctoral inédita. Valladolid 1979.
  - (8) El Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474) Madrid, 1976.
  - (9) Los alcaldes reales en los concejos castellanos en Anales de - Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires 1956 y La figura del Juez en el Concejo (León y Castilla) en Melanges René Crozet Poitiers, 1966, vol. II.

escasez de fuentes, es el local. Nosotros, deliberadamente, nos hemos visto obligados a prescindir de este ámbito ante la imposibilidad material que supondría el estudio pormenorizado de la organización judicial en cada una de las ciudades, villas y aldeas del Reino castellano-leonés durante el período de tiempo que abarca la presente tesis, aunque no por ello hayamos dejado de tener presente dicha organización. El estudio de la administración de justicia local requiere, en nuestra opinión, algo más que limitarnos a ofrecer las variantes de ésta en algunos fueros municipales. Estos, en efecto, nos pueden ofrecer en algunas ocasiones -y no todos ellos- un bosquejo del organigrama de la justicia en el momento en que el fuero se otorga o quizás cuando posteriormente se reelabora; pero hasta qué punto un fuero concedido en el siglo X u XI tiene plena vigencia en el siglo XIII o XIV?

Por otra parte, además de los innumera--bles problemas eurísticos que en el estado actual de la investigación presentan muchos de estos fueros y sus familias, desde mediados del siglo XIII hay una incesante y progresiva política por parte de los Reyes encaminada a intervenir activamente en la justicia municipal mediante el envío de "jueces de salario". Estos jueces reales, ante los que las ciudades protestan reiteradamente por su envío, sin duda trastocaron el esquema judicial preexistente con lo que los datos que el fuero en cuestión pudiera ofrecernos para el período por nosotros estudiado ha de ser valorado con sumo cuidado so pena de ofrecer una visión falseada de la realidad. Por ello, para nosotros, sólo es posible el estudio de la organización de la justicia local mediante el estudio de los documentos de aplicación del Derecho de todas y cada una de las ciudades y villas castellano-leonesas, labor ímproba no sólo desde el punto de vista material, dado que gran parte de los archivos municipales se han perdido, que desbordaría con mucho el objeto de una simple tesis doctoral. Una vez realizada esta ingente tarea, restaría solamente agrupar los resultados en los distintos tipos de organización obtenidos para poder ofrecer un panorama real de la administración de justicia local en cada momento dado.

- IV -

No obstante, sin intención de entrar de lleno en la problemática de la justicia local, tanto o más importante que la central o territorial, y plenamente conscientes de las limitaciones antes expuestas, en el capítulo segundo hemos querido ofrecer un panorama general de la organización judicial real de la Corona castellano-leonesa incluyendo el ámbito local, aunque de éste sólo se hayan trazado sus líneas maestras.

Tan problemático como el local se presenta el ámbito territorial en cuanto que la escasez de documentos que nos constaten la existencia de una organización judicial intermedia entre la local y la central, hace que tengamos que movernos continuamente en el terreno de las hipótesis. Por otra parte, la organización territorial de justicia bajomedieval en última instancia puede ser reconducida a la local desde el momento en que los oficiales territoriales no administran justicia, o al menos de un modo permanente, en una sede fija, sino que se caracterizan por su itinerancia por todo el territorio que tienen bajo su jurisdicción, con lo que nos encontramos con los mismos problemas que señalábamos anteriormente que afectan al ámbito local.

Hemos incluido en este estudio, además de la panorámica ofrecida en el capítulo segundo, un esquema general de la administración territorial de justicia, caballo de batalla durante estos últimos años de los estudios de nuestra disciplina. En él nos hemos planteado de nuevo toda la problemática que suscitan Adelantados Mayores y Merinos Mayores en las fuentes legales y documentales citándonos solamente, como así lo requiere el objeto de este estudio, a la administración de justicia. La labor en este terreno del profesor PEREZ BUSTAMANTE ha sido verdaderamente meritoria y de gran utilidad por su copiosísimo aparato documental. Nosotros, por nuestra parte, nos hemos limitado a reinterpretar aquellos puntos oscuros o poco convincentes que en el estado actual de la investigación no pueden ser considerados como definitivos ni mucho menos y que en todo momento se encuentran sometidos a revisión. Somos plenamente conscientes de todo lo que resta por hacer en este campo.

Posiblemente por su importancia y por la mayor abundancia de fuentes, no sólo legales sino también documentales y narrativas, la historiografía se ha ocupado más de algunas parcelas de la administración central de justicia. Hemos citado ya como las más recientes los trabajos de PEREZ DE LA CANAL y de TORRES SANZ. A ellos cabría añadir los ya clásicos de MENDIZABAL sobre la Audiencia (10) y de TORREANA Z sobre el Consejo Real (11), de valor indudable, pero carentes de una perspectiva general e inclinados a la generalización.

Sobre el ámbito central o de la Corte se sostiene prácticamente la totalidad de este estudio al que le dedicamos tres extensos capítulos en los que hemos tratado de abordar -y no siempre con los resultados deseados- toda la problemática que nos ha suscitado cada una de las instituciones allí estudiadas. Muchas son las hipótesis, muchas más son las incógnitas a las que no hemos encontrado una respuesta definitiva que nos llevan a reconocer mejor que nadie las limitaciones del presente estudio.

Lógicamente al tratarse de la administración de la justicia real creímos oportuno partir de la figura del Rey, por desgracia, hasta hoy, sin estudiar entre nosotros, con lo que nuestra labor se hizo más ardua y penosa, pero, en nuestra opinión, era totalmente imprescindible para comprender toda una serie de fenómenos que aparecen nítidamente reflejados en la administración de justicia, ya que ésta, en definitiva, no es más que una prolongación del poder jurisdiccional del Rey.

- 10) Investigaciones acerca del origen, historia y organización de la Real Chancillería de Valladolid: su jurisdicción y competencia en R.A.B.M. 30 y 31.
- 11) Los Consejos del Rey durante la Edad Media, Madrid 1884. Sabemos que recientemente se ha leído en la Universidad de Salamanca una tesis de S. DE DIOS sobre El Consejo Real de Castilla (1385-1522) de la que hemos consultado un resumen recientemente publicado por la dicha Universidad, en espera de su publicación íntegra.



Hemos dejado también, por las mismas limitaciones que antes aludíamos, fuera del objeto de este estudio el complejo mundo de las jurisdicciones exentas -laicas o eclesiásticas- y de las jurisdicciones especiales que si bien, en última instancia, son manifestaciones de la justicia real, merecen estudios aparte, por lo que nos hemos ceñido fundamentalmente a la jurisdicción ordinaria aunque teniendo siempre en cuenta las posibles implicaciones entre una y otras.

En cuanto a los límites cronológicos hemos tomado como punto de partida el comienzo del reinado de Alfonso X para finalizar en 1504, fecha de la muerte de la Reina Isabel. Son dos siglos y medido de duración de un largo proceso que empieza a gestarse en tiempos del Rey Sabio y que sólo verá alcanzada su meta con los Reyes Católicos, precursores de la Modernidad. Como tendremos ocasión de ver no ha sido un proceso lineal ni mucho menos. Sometido a continuas tensiones políticas, el poder real intentará afianzarse una y otra vez frente a los distintos estamentos del Reino con resultados muy diversos y ante circunstancias ciertamente adversas. La semilla plantada por Alfonso X tardará mucho tiempo en dar el fruto esperado, pero al final se consiguió la supremacía del poder real tan deseada por los monarcas castellanos.

Este estudio no pretende ser otra cosa que un punto de partida, un planteamiento inicial de toda una compleja problemática que se cierne en torno al tema de la administración de justicia bajomedieval. Hemos intentado en todo momento no rehuir a ningún tipo de problema y tratar de dar respuestas, con más o menos éxito, a los innumerables interrogantes que nos han salido al paso dentro del método institucional por nosotros seguido, pero desgraciadamente han quedado más cuestiones sin soluciones plenamente satisfactorias, que las que de algún modo haya mos podido esclarecer. Sin pretender tener carácter de definitivo y perfectamente consciente de todas y cada una de las limitaciones de nuestro estudio, hemos intentado, no sabemos si con éxito, ofrecer un tratamiento conjunto de la administración de justicia real castellana, intentando de esta forma suplir una de las numerosas lagunas de nuestra disciplina.

## **C A P I T U L O   I**

**A.- El Rey y el poder político**

**B .- El contenido del poder jurisdiccional del Rey**



## EL REY Y EL PODER POLITICO

La monarquía a lo largo de la Baja Edad Media se constituyó como la forma de gobierno político predominante en toda la Europa Occidental. En una sociedad inestable en donde los precarios equilibrios y las relaciones de fuerza impedían muchas veces la consolidación de estructuras institucionales más estables, el Régimen monárquico se presenta siempre como una institución firme y perdurable. Posiblemente la razón de la consolidación del Régimen Monárquico no sea tanto ese carácter de fondo o reserva que se mantiene inalterable a través del tiempo, ni tampoco el que sea un centro en el que se serene la historicidad de las formas políticas, sino el hecho de que se añade al prestigio secular el ser una forma que respondía y se adaptaba fácilmente a las nuevas exigencias de un período que llevaba a la integración del Estado Moderno a través de la experiencia del absolutismo doctrinal del Derecho Romano.<sup>(1)</sup>

(1) A falta de una monografía que se ocupe de la institución real, para una visión de conjunto de la figura del Rey puede verse a A. GARCIA GALLO: Manual de Historia del Derecho Español, t. I, pgs. 624-648 y 781-807; L. GARCIA DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones españolas, pgs. 423-449; J. BENEYTO: Historia de la administración española e hispanoamericana, pgs. 151-164 y 213-231; J. M. PEREZ-PRENDES: Apuntes de Historia del Derecho español, pgs. 452-459, 463-468 y 681-2; J. GIMENO CASALDUERO: La imagen del monarca en la Castilla del siglo XIV.

La Baja Edad Media va a suponer, en cierta medida, una ruptura con gran parte de la tradición ideológica y jurídica - altomedieval, pero al mismo tiempo que muchos conceptos son puestos en tela de juicio y retocados, otros, en cambio, si bien van a verse afectados por una evolución interna, se mantienen intactos durante los siglos XIII, XIV, y XV, y así, la idea monárquica en España se mantuvo siempre viva. En estos primeros "reinos" o primeras manifestaciones de la monarquía medieval, que surgen a raíz de la invasión musulmana; más que la expresión de un poder carismático de sus jefes sobre el resto de la comunidad<sup>(2)</sup> son la expresión de un aspecto personal de la dominación, constituyendo un poder más intenso que extensivo que coincide con la concepción jerárquica de la sociedad que predomina en Europa en los siglos VIII, IX y X.<sup>(3)</sup>

A medida que estos núcleos iniciales se van consolidando, la fórmula monárquica va a ser enriquecida en parte por toda la tradición filosófica cristiana anterior -que ahora adquiere un nuevo auge-, en parte, y como consecuencia de la anterior, por la concepción teocéntrica de la sociedad.<sup>(4)</sup>

---

(2) La utilización del término "carismático" resulta un tanto inadecuado en el sentido utilizado por M. Weber en su Economía y Sociedad, México 1969, t. II, pgs. 854 y 55, dado el carácter hereditario de la monarquía en estos momentos. Esta forma política inicial destaca más por las relaciones militares y, por tanto, cabría hablar de una "monarquía militar" mejor que "carismática".

(3) O. HINTZE: Esencia y difusión del feudalismo en Historia de las formas políticas, pgs. 38 y 55.

(4) La sociedad se consideraba a sí misma como fundada históricamente por la persona de Cristo y toda su realidad institucional se sustentaba sobre los sacramentos. Sobre ello véase M. GARCIA PELAYO: El reino de Dios, arqueotipo político, Madrid, 1959.

Esta cristianización de la sociedad va a operar de forma decisiva en la transformación del fundamento ideológico de muchos conceptos políticos y jurídicos.<sup>(5)</sup> El poder real pasa de ser una pura y simple realidad de hecho a convertirse en un complejo de ideas, principios, normas superiores no sujetas a las arbitrariedades del "princeps". El ejercicio del poder real se convierte en una función, en un "ministerium" que supone la obligación de ejercerlo bajo unos fines éticos y jurídicos determinados.<sup>(6)</sup> Dios, verdadero Rey,<sup>(7)</sup> ejerce su gobierno sobre la tierra bien directamente, revelándose en su Derecho y en su juicio, o bien indirectamente mediante sus vicarios en la tierra.<sup>(8)</sup> La originaria concepción ascendente del poder, por influjo del cristianismo, va a ser sustituida por la concepción descendente.<sup>(9)</sup>

(5) Para la influencia del cristianismo sobre el Derecho Vid. B. BIONDI: Il Diritto Romano Cristiano, Milán, 1954.

(6) MARONGIU: Un momento típico de la monarquía medieval: el Rey Juez. A. H.D.E. 23 (1953) p. 686.

(7) Para la figura de Dios-Rey, M. GARCIA PELAYO: El Reino de Dios... pgs. 85-86.

(8) Ver más adelante nota no. 12.

(9) Sobre las concepciones ascendentes y descendentes del origen del poder Vid. W. ULMANN: Principios de gobierno y Política en la Edad Media, Madrid, 1971, pgs. 23-28. De hecho las concepciones ascendentes descendentes se encuentran a lo largo de la Edad Media en constante flujo y reflujo. Así en Castilla, por ejemplo, la doctrina del pactismo, o en la Iglesia la doctrina del Conciliarismo que suponen un retorno a la postura ascendente Vid. L. SUAREZ FERNANDEZ Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid, 1977, y Castilla, el cisma y la crisis conciliar. Madrid, 1960.

cuya expresión más clara la encontramos en la fórmula "Rex gratia Dei"<sup>(10)</sup>, fórmula que adoptarán desde muy temprano los reyes castellano-leoneses<sup>(11)</sup> y que pasarán como cláusula de estilo a las Chancillerías de la Baja Edad Media.

Esta expresión, reveladora de que la única fuente del poder real es Cristo, tiene su punto de partida en las fuentes paulinas<sup>(12)</sup>. En base a ellas se afirma que la atribución del oficio real era una "gratia", algo sobre lo que el rey no podía pretender derechos, pero que, al depender de la gracia divina, le sitúa en íntima relación con la Divinidad.<sup>(13)</sup>

(10) Esta fórmula, originaria de Oriente donde se utilizaba desde la primera mitad del siglo V, no pasará a Occidente hasta mediados del siglo VI en el que los obispos se autotitulan "Episcopus Dei gratia". En el siglo VIII será un fenómeno ya corriente. ULMANN: Principios... pág. 121.

(11) Podemos citar a modo de ejemplo: 857, abril 20: "Ego Ordonius Dei gratia rex Hispanie" (S. GARCIA LARRAGUETA: Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, nº 6, p. 21); 923, octubre 21: "Ego humildis et omnium servorum Domini ultimi et tamen Dei Gratia Ordonius rex" (I. RODRIGUEZ LAMA: Colección diplomática medieval de la Rioja, t. II, n. 1, p. 17); 1044, noviembre 2: "Quod ego Garsie Dei gratia" (I. RODRIGUEZ LAMA: Col. dipl. medieval de la Rioja, t. II, n. 4, p. 27); 1067, diciembre 11: "Ego Sanctus Dei Gratia" (J. ALAMO: Colección diplomática de San Salvador de Oña, t. I, n. 53, p. 90); 1075, diciembre 12: "Ego Aldefonsus dei gratia" (FEROTIN: Recueil des chartes de Silos, n. 69, pgs. 103-104). Se recoge también en la documentación de Sancho III y Alfonso VIII, vols. II y III. Igualmente en Alfonso IX (Vid. J. GONZALEZ: Alfonso IX, II) Enrique I (M. MAÑUECO: Documentos de la Iglesia colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, vol. II, p. 51) y en "Ordonius nutu divino princeps". Vid. A. MARAVALL: El pensamiento político en la Alta Edad Media, pgs. 32-33.

(12) San Pablo, Cor. XV, 10: "... gratia Dei sum id quod sum".

Sólo concibiendo esta idea de la "gratia" como piedra angular dentro de la estructura del gobierno teocrático, podemos comprender la función del Rey como lugarteniente de Dios, como "vicarius Dei".<sup>(14)</sup>

Cuando afirmamos que el rey es ministro o vicario de Dios en la tierra, estamos haciendo referencia obligada al origen -

---

(13) /...El empleo de la fórmula "Dei gratia" permite, además señalar otro principio consecuencia de ésta: el principio de la concesión. La idea de la concesión viene a ser la idea de la gracia llevada a la práctica y constituye un elemento vital de todas las formas de pensamiento teocrático, caracterizado, precisamente, por la concesión del gobernante a los súbditos de derechos que de otra manera éstos no hubieran poseído. Vid. ULMANN: Principios... p. 124.

(14) La idea de que el monarca es vicario de Dios arranca de San Pablo y fue formulada ya de un modo explícito por EUSEBIO DE CESAREA quien concibe al emperador como la "imagen" del Rey celeste. El emperador no es Dios, pero sí el vicario o "hyparco" de Dios. De aquí esta concepción pasará al occidente medieval a través del influjo del AMBROSIASTER convirtiéndose en doctrina dominante a partir del siglo IX como señala M. GARCIA PELAYO: El Reino de Dios... p. 30. El texto -atribuido durante mucho tiempo a S. Agustín- habla del rey como un -quasi vicarius!: "Rex enim adoratur in terris quasi vicarius Dei. Christus autem post vicariam impletam dispenationem adoratur in coelis et in terra" ("Questiones Veteris et Novi Testamenti", XCI, en MIGNE: Patrologia Latina, vol. 39, p. 22-3)



sacro de su investigura. Este concepto que arranca de la patristica<sup>(15)</sup>, reafirmado por San Agustín<sup>(16)</sup> va a ser recogido - por San Isidoro.<sup>(17)</sup>

La canonística no se va a plantear de un modo explícito el problema del origen del poder secular, pues, recogiendo la tradición patristica, el origen divino de aquél estaba fuera de toda duda. El gobierno secular es una institución que representa a la autoridad divina hasta el punto que se llega a anatematizar a todo aquel que se resiste al poder real<sup>(18)</sup> como ya expresa

---

(15) Sobre el origen y desarrollo de este concepto por la patristica puede verse R. CARLYLE: A History of medieval political theory in the West, vol. I, cap. XIII, pgs. 147-160, donde, además, se recogen los textos más importantes.

(16) "Etiam talibus tamen dominandi potestas non datur nisi summi Dei providentia, quando res humanas indicat talibus dominis dignas. Aperta de hac re vox divina est, loquente Dei sapientia: "Per me reges regnant, et tyranni per me tenent terram..." (De civitate Dei V, 19, en B.A.C. CLXI-CLXXII, pags. 282-3.

(17) "Dum Apostolus dicat: non est potestas nisi a Deo" quomodo Dominus per Prophetam de quibusdam potestatis dicit: "Ipsi regnaverunt, sed non ex me" (Sententiae, III, 48, en MIGNE: Patrologia Latina, vol. 83 pp. 7-19). La doctrina política en San Isidoro se contiene principalmente en su obra Sententiarum Libri Tres, publicado en MIGNE: Patrologia Latina, LXXXIII, pgs. 537-738: ver libro III, cap. XLVII a LI: Sobre el pensamiento político de San Isidoro de Sevilla: su pensamiento histórico-político y sus relaciones con la historia visigoda, en C.H.E., 8 (1947).

(18) De Synodicalibus Causis, 11, 301: "Si quis potestatis regiae, quae non est iuxta Apostolum, nisi a Deo contumace et inflato spiritu contradicere vel resistere praesumiserit, et

claramente BUCHARDO DE WORMS<sup>(19)</sup>. IVO DE CHARTRES se expresa en sentido parecido al considerar al emperador como vicario de Dios<sup>(20)</sup> y el cardenal DEUSDEDIT basará el principio de obediencia al poder secular precisamente porque es un poder derivado de Dios;<sup>(21)</sup> finalmente INOCENCIO III, comparando la autoridad del Papa y el poder real con dos grandes soles - puestos por Dios en el firmamento, acabará por afirmar la naturaleza sacra del poder secular.<sup>(22)</sup>

- 
- (18) /...eius iustis et rationalibus imperiis secundum Deum et auctoritatem ecclesiasticam ac ius civile obtemperare - noluérít, anathematizetur" (Texto recogido por CARLYLE: A History..., vol. II, p. 146).
- (19) En sus comentarios al Decretum se hace eco de la postura anterior "In libro regnum legitur: Qui non oboedierit - principi, morte moriatur. In concilio autem Agathensi - praecipitur et anathematizetur". Decretum, XV, 23 en MIGNE: Patrología Latina, vol. 140, p. 400-1).
- (20) En su comentario al Decretum cita un pasaje de una carta del Papa Anastasio II: "Pectus clementiae vestrae sacrarum est publicae felicitatis, ut per iustitiam vestram, quam velut vicarium praesidere iussit in terris evangelius apostolicisque praeceptus non dura superbia resistatur, sed per obedientiam quae sunt salutifera compleantur". Decretum, XVI, 16 en MIGNE: Patrología Latina, vol. 161, p. 856).
- (21) Collectio Canonum, IV, 33, 34 (Ed. V.W. VON GLANVEL, Paderborn, 1905).
- (22) "Ad firmamentum igitur coeli, hoc est universalis ecclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, id est, duas magnas instituit dignitates, quae sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas". (Decretales, I, 33, 6).

Los civilistas tampoco van a poner en duda la naturaleza divina del poder. Esta ya se hallaba recogida en varios pasajes de la obra justiniana<sup>(23)</sup> y en sentido se expresan, entre otros, JUAN BASIANO<sup>(24)</sup> y HUGOLINO<sup>(25)</sup>. Admitir tal principio supone, además, el reconocimiento de la existencia de otro Derecho - distinto al civil, es decir, del Derecho divino.<sup>(26)</sup> La supremacía de la Ley de Dios sobre el Derecho Civil va a ser netamente reconocida por los civilistas como PLACENTINO<sup>(27)</sup>, HUGOLINO<sup>(28)</sup> pues el emperador no puede derogar las leyes de su Superior.<sup>(29)</sup>

(23) Entre otros podemos citar: "Deo auctore nostrum gobernantes Imperium quod nobis a caelesti maiestate traditum est" (Cod. 1, 17, 1) y "quia deo imperialem fortunam rebus humanis - deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere" (Cod. 1.17.2).

(24) "Quia propterea Deus de coelis imperatorem constituit in terris, ut per eum tamquam per procuratorem leges factis emergentibus coaptet, ut hic proficiat subjectis, ut j. eo. & qua igitur" (Summa in libro Novellarum. De Instrumentum cautela e fidei. Nov. 73, Ed. AZO, Opeiz Lugduni 1564)

(25) Summa in Digesto. Pref. (Ed. En AZO Opera. Basel 1563).

(26) ROGERIO en su Summa Codicis así lo expresa: "Sed quia jus dicitur aliud divinum aliud humanu, praepincae autem - sunt jura divina quam humana, tractat primam de divino iure" (Summa Codicis, I, I; Ed. en BIMAE Vol I).

(27) El rey no puede ordenar leyes contra Dios ni contra la naturaleza: "Placuit inquam principi ut ius constituitur ita ut non contra dominica statuat vel naturam" (Summa Institutionum, I, 2; Ed. en el Corpus glosatorum Iuris Civilis vol. I).

(28) En el mismo sentido se expresa Hugolino al afirmar que los rescriptos contrarios al Derecho divino o natural han de ser rechazados en los tribunales: "Si iuri naturali vel divino contradixerunt (rescripta) refutantur omnino" .../...

La concepción divina del poder tiene repercusión en la Península desde la época visigoda<sup>(30)</sup> y se mantiene durante la Alta Edad Media<sup>(31)</sup>, revitalizada ahora por los grandes teóricos de la monarquía JUAN DE SALISBURY<sup>(32)</sup>, EGIDO COLONNA<sup>(33)</sup> y JUAN DE PARIS<sup>(34)</sup>, si bien, a falta de un estudio acerca de

(28) /...(Dissensiones Dominorum, 5; Ed. G. HAENEL, Leipzig 1834).

(29) "Sciendum est autem quod si rescriptum, vel privilegium contra ius Dei, apostolarum, evangelistarum, prophetarum indulgeatur, omnino respuitur: quia superiori leges tollere - non potest, cum alias sit proditum, quod par pari imperare non potest: ut ff de recept. arbitr. l. non magistratum; et ff ad Trebellianum l. illae & tempestivum (D. IV. 8.4. aud XXXVI. 1.13.4)..." (AZO, Summa Codicis, I, 22, l. Ed. Lugeluni 1564).

(30) Liber Iudiciorum, tit. preliminar.

(31) "Omnipotens sempiterne Deus, qui famulum tuum fastigio dignatus es sublimare: tribue ei, quaesumus, ut ita in huius saeculi cunctorum in communem salutem disponat, quatenus a tuae veritatis tramite non recedat." (Ritual medieval de coronación de los Reyes, según el código de Cardeña, s. XII, recogido por GARCIA-GALLO; Manual, vol. II. núm. 821, - p. 580).

(32) El rey, "imago divinitatis", es el portador de la espada temporal: "Est ergo, ut eum plerique diffiniunt, principis potestas publica, et in terris quaedam divinae maiestatis imago..." (Polycraticus, IV, 1, ed. Webb, Oxford 1909; "Imago quaedam divinitatis est princeps..."; "Imago deitatis, princeps amandus, venerandus est. (Polycraticus, VIII, 17).

(33) No sólo considera al rey "Minister Dei" (De Regimine Principum, I, 1, 12; ed. Roma 1556; sino que también lo considera casi un semidios: "Decet enim talem esse quasi semideum ut sicut alios dignitate et potentia excellit, sic eos bonitate superet" (De Regimine Principum, III, II, 15).

(34) "Ergo potestas regia nec secundum se, nec quantum ad executionem est a papa: sed a Deo, et a populo regem eligente in persona vel domo" (Tractatus de Potestate Regia et Papali, II, ed. Argentoratum 1618).

esta influencia, parece que el más difundido en Castilla fue EGIDIO, ya tardíamente, a través de A. Castrojeriz. A partir de Alfonso X todos los reyes esgrimirán a su favor este argumento con la finalidad de afianzar el poder real frente a las restantes fuerzas políticas del reino y es recogido insistentemente por la legislación<sup>(35)</sup> y reconocido por la literatura de la época<sup>(36)</sup>.

Esta concepción ministerial y sacra del poder nos reconduce necesariamente a precisar la finalidad del mismo.

La patristica parte de que el hombre está hecho para la sociedad y que por naturaleza es un ser sociable inclinado a amar a sus semejantes. La sujeción de un hombre a otro hombre,

(35) Espéculo 2, 1, pr. y 2, 1, 5; Fuero Real 1, 2, ley única; Partidas, 2, 1, 5; 2, 1, 7 y 2, 13, 1 entre otros. - Cortes de Valladolid 1351, pream. p. 1; Cortes de Toro 1369, pream. p. 164; Cortes de Toro 1371, pream. p. 188; Cortes de Burgos 1379, pream. p. 283; Cortes de Segovia 1390, pream. p. 471; Cortes de Valladolid 1440, pet. 1, pgs. 369-373. Cortes de Olmedo 1445, pream. p. 458; Cortes de Burgos 1453, pream. p. 642; Cortes de Toledo 1462, pream. p. 701; Cortes de Ocaña 1469, pet. 1, p. 767; Cortes de Madrigal 1476, pream. p. 3; Ordenanzas de Córdoba 1485 para la Corte y Chancillería de Valladolid (e. PEREZ DE LA CANAL, p. 443).

(36) Libro de los Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el Rey don Sancho IV: Quién metió los regnos en tu mano, synon veas que eres rey e emperador, verás e conocerás que tienes lugar de Dios" (p. 91); Libro de los cien capítulos (ed. Agapito Rey, 1960): "El rey es senescal de Dios, que tiene su vez y su poder" (p.1); "Dios le fizo merced, e le dio reyno..." (p. 6). Libro de los Estados : "... el estado de emperador vos coge mucho et señaladamente

y por tanto, el gobierno de los hombres sobre los hombres no entra dentro de orden natural del mundo; así San Agustín y Gregorio Magno consideran que el gobierno coercitivo no existía en el estado primitivo del hombre cuando fuè creado, pero que se hizo necesario cuando aquèl pecò; nace, pues, el gobierno como un remedio divino para el pecado y del paso - de un orden "praeter natural" a otro natural, en el que la naturaleza dèbil del "homo fallens" le impone un règimen de sujeciòn para que pueda subsistir el orden y la armonía social. De esta manera San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno y San Isidoro desarrollan la concepciòn de San Irineo de - que el gobierno ha sido puesto por Dios para remediar la desigualdad existente en los hombres, pese a su igual naturaleza, como consecuciòn del pecado<sup>(37)</sup>. Es precisamente en este concepto dondè radica no sòlo la razòn de ser del gobierno - político sino tambièn la finalidad del mismo.

---

(36) "...pues en Dios puso..." (XLVIII, p. 304); "El poder del monarca vien de Dios..." (LXVI, p. 308); Libro infido: Los reyes en la tierra son a semejanza de Dios, et viven en las causas de Dios, et guardan las sos leyes et los mandamientos... dales Dios buenos reyes derechos et piadosos que los mantenga en paz et en justicia" (p. 268).

(37) Vid. R. CARLWILE: A. History..., vol. I, cap. XI, pgs 125-131.

Serà de nuevo un texto de San Pablo el punto de partida de esta concepción y en base al mismo<sup>(38)</sup> no sólo se afirma el carácter divino de la autoridad, como ya vimos, sino que este concepto descansa sobre la suposición de que el Estado recompensará al bueno y castigará al malvado, es decir, sólo procede de Dios aquel poder que mantiene la justicia.<sup>(39)</sup>

---

(38) Epístola ad Romanos 13: "Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem, resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: nam princeps non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa. Dei enim minister est tibi bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis; ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem; cui honorem, honorem. (Texto recogido por GARCIA-GALLO: Manual: vol. II, núm. 584, pgs. 337-8).

(39) San Ambrosio, por ejemplo, en De Officiis ministrorum, I, 28, considera que la justicia y la beneficencia son la "ratio" del Estado y que sólo puede ser considerado ministro de Dios aquel que obra correctamente. Toda la patrística, a excepción de San Agustín, concuerdan en que la finalidad de Estado está en la consecución de la justicia. Cif. CARLYLE: A History... vol. I, cap. XIV, pgs. 161-174.

Esta concepción en torno a la finalidad del poder político que en la Península tiene a San Isidoro<sup>(40)</sup> como su máximo - exponente, a partir del siglo VII, se generaliza y se puede - afirmar que es prácticamente común en todos los autores posteriores<sup>(41)</sup>. Pero al mismo tiempo el carácter ministerial - del rey, influido junto a la doctrina dualista gelasiana<sup>(42)</sup>, hace que éste se encuentre por una parte, en una relación de subordinación con respecto al poder espiritual y por otra, se le encomienda la defensa de la Fè y de la Iglesia. Esta y la consecución y mantenimiento de la Justicia encaminadas a la "utilitas populi" y no en su propio beneficio<sup>(43)</sup> se convierten en las

---

(40) Etymologias IX, 2: "Reges a regendo vocati sicut enim sacerdos a sanctificando, ita et rex a regendo: non autem regit qui non corrigit. Recte igitur faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. Unde et apud veteres, tale erat proverbium. "Rex eris si recte facies, si non facias, non eris". Sobre el pensamiento jurídico de San Isidoro - puede verse M. GARCIA PELAYO: Los conceptos jurídicos fundamentales de San Isidoro de Sevilla en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, núm. 68, (1934).

(41) CARLYLE: A History... vol. I, cap. XVIII, pgs. 221-2.

(42) Durante el período patrístico, dentro de una concepción unitaria de la sociedad cristiana, se había aceptado la - teoría de la dualidad de poderes. La expresión clásica del dualismo se debe a Gelasio I. El Emperador es hijo de la Iglesia y no cabeza suya; su poder temporal es distinto del espiritual que corresponde al Papa, aunque - ambos derivan de Dios y sólo a El Están sometidos; no obstante, el espiritual es más excelente en cuanto que el Papa tiene que rendir cuenta también de los actos de los reyes. Este es el punto de partida de la teoría de las dos espadas. Vid. CARLYLE: A History... vol. I, cap. XV, pgs 190 y ss.; y ULMANN: Principios, cap. 3, pgs. 61 y ss.

(43) De lo contrario incurriría en tiranía. Los puntos de vista que sostienen San Agustín, Gregorio Magno, San Isidoro así como Juan de Salisbury, Juan de París, Egido y Santo



dos funciones primordiales del poder real<sup>(44)</sup>.

El poder real aparece, por tanto, en los siglos altomedievales como rector y ordenador de la comunidad. La superioridad

---

(43) /...Tomàs pueden verse en GIMENO CASALDUERO: La imagen... pgs. 95 y ss. La repercusión práctica en Castilla la encontramos recogida en las Partidas. En Castilla no se sigue la tesis de Juan de Salisbury, predominante en Europa, sino que los autores de las Partidas siguen una postura más radical y absolutista. Al tirano no se le puede resistir ni deponer, aunque sí amonestar (Part. 2,13, 25). La distinción entre rey legítimo y tirano véase en Part 2,1,10.

(44) La finalidad del poder político está siempre en relación con el origen sacro de éste, aunque no todos los autores coinciden a la hora de señalar cual es esa finalidad. Para TOLOMEO DE LUCAS radica en la visión de Dios: "Concluditur ergo ex hoc quod quaelibet res quanto ordinatur ad excellentionem finem, tanto plus participat de actione divina. Huiusmodi autem est regnum cuiuscunque communitatis, seu collegi, sive politicae, sive regalis, sive cuiuscunque conditionis, quia cum intendat nobilissimum finem ut philosophus tangit in I. Politicorum in ipso Divina praeintelligitur actio, et suae virtuti dominorum subicitur regimen... Finis autem ad quem principaliter rex intendere debet in se ipso, et in subditis, est eterna beatitudo, quae in visione Dei consistit. Et quia ista visio est perfectissimum bonum, maxime debet movere regem, et quemcunque dominum, ut hunc finem subditi consequatur: quia tunc optimus regit, si talis in ipso sit finis intentus." (De Regimine Principum, III. 3). Otro punto de vista mantiene EGIDO quien atiende más a la prudencia y a la justicia: "Sciendum quod decet regem maxime suam felicitatem ponere in ipso Deo, quod triplici via videre possumus. Rex enim est homo, - est Dei minister, et est rector multitudinis... Secundo decet principem suam felicitatem ponere in ipso Deo, non solum quia homo est, sed etiam speciali modo est Dei minister... Tertio hoc decet regem ex eo quod est multitudinem

del rey se manifiesta en esta función de protección del reino que le ha sido confiada en base, precisamente, a la consecución de dichas finalidades. La aplicación práctica de esta función protectora implícita de su realeza se traduce en el plano de los hechos en la "Paz del Rey"<sup>(45)</sup>. Para mantener esta

---

(44) /...debet intendere commune bonum... Si princeps est felix diligendo Deum, debet credere se esse felicem operando quae Deus vult: maxime autem Deus requirit a regibus et principibus, ut per prudentiam et legem populum sibi commissum juste et sancte regant." (De Rêgimine Principum, I, 1, 12). También en este sentido insiste JUAN DE VITERBO: "Maxima in omnibus sunt dona Dei a su perna collata clementia, id est, sacerdotium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio utraque procedentia, humanam exornat vitam. Nec multo differunt ab alter utro sacerdotium et imperium; per hoc autem datur intelligi duos gladios, scilicet, spiritualem et temporalem, fuisse sufficientes humano generi ipsa tamen potestas a deo est." (De Regimine Civitatum, 128, en BI MAE, vol. III, p. 266).

(45) La inseguridad que caracteriza a toda la Alta Edad Media hace que la idea de la paz cobre una patética vigencia como señala GARCIA PELAYO. Desde San Agustín la paz es concebida como algo consustancial al género humano y condición indispensable para el cumplimiento de su destino. No podemos olvidar la decisiva intervención del poder espiritual a través de las instituciones de la paz y la tregua de Dios. Recogidas estas, primero, en los concilios de ámbito local, pronto sus conclusiones pasaron por un proceso de universalización que culmina extendiendo la tregua de Dios a toda la cristiandad en 1095. Posteriormente esta extensión es ratificada por los concilios de Letrán de 1123, 1139 y 1179 e incorporada a las colecciones canónicas. (El Reino de Dios... pgs. 149 y ss. principalmente 152-3 y nota II). Pero al mismo tiempo, como señaló en su día WOHLHAUPTER, se produce una secularización de la paz de Dios, que a partir del siglo XII, se extenderá a todo el .....

paz destruida por el pecado, fueron creados, como ya vimos, los príncipes y a ellos se les encomienda la misión de defender las "pax civitatis", la "pax regni", la "pax universalis" que no son otra cosa que la manifestación de la "Pax christiana". Pero esta "Pax" sólo es factible si se le reconoce y garantiza a cada uno lo suyo, es decir, si se consigue la justicia, condición indispensable de la "pax". El Rey se convierte en vicario de Dios para la aplicación de la justicia<sup>(46)</sup>, para la restauración de la paz, por ello es perfectamente comprensible que durante la Alta Edad Media la función del poder político no tenga una naturaleza legislativa<sup>(47)</sup> sino eminentemente judicial<sup>(48)</sup>, la justicia, pues, no va a consistir en establecer

---

(45) /...el territorio castellano-leonés (Vid. la recensión de R. Ríza al trabajo de WOHLHAUPTER: Studien zur Rechtsgeschichte der Gottes und Landfrieden in Spain, Heidelberg 1933). De este proceso también se hace eco J. MALDONADO en su Curso de Derecho Canónico para juristas civiles, Madrid 1968, pgs. 311-12. Véase también H. GIBERT: La paz del Camino en el Derecho Medieval Español, en A.H.D.E. 27-28 (1957-58) pgs 31-852.

(46) Durante el siglo XII algunos juristas tomando como fundamento algunos textos de Derecho Romano asimilan al rey y a sus jueces al sacerdocio en razón de que administran la "santa justicia". Los textos pueden verse en E.H. KANTOROWICZ: Mysteries of State: an Absolutist Concept and its Late Mediaeval Origins in The Harvard Theological Review, XLVIII (1955), p. 74, véase también de este mismo autor, The King's Two Bodies, Princeton 1957, pgs. 107 y ss.; si bien A. MARAVALL señala que este carácter sacerdotal es poco conocido en España (El Pensamiento político, p. 31).

(47) Lo que va a jerarquizar políticamente no son las facultades legislativas sino los derechos jurisdiccionales. Sin duda, como señala también GARCIA PELAYO, la escasa actividad legislativa de la Alta Edad Media se debió también

normas jurídicas nuevas, sino más bien en aplicar las existentes

(49) El Rey acepta el Reino tal como aparece ordenado por la costumbre y conforme a la justicia de sus antepasados<sup>(50)</sup>. La función jurisdiccional del rey se convierte en la más característica del poder real y a través de ella se canaliza toda la vida del Reino. El Rey es ante todo juez<sup>(51)</sup> y sólo a él correspond

---

(47) /...a otras causas: debilidad institucional del poder político, escaso desarrollo de la economía dineraria, inmovilismo social, pero también a la idea de que la ordenación de la justicia es cosa de Dios y no de los hombres (El Reino de Dios... p. 151).

(48) Esta función primordialmente judicial del rey ya la puso de relieve A. MARONGIU en el trabajo citado en nota 6.

(49) Desde la perspectiva de GARCIA PELAYO la Alta Edad Media se caracteriza por una formación espontánea del Derecho. El Derecho se origina lenta y directamente desde el fondo de la realidad social a través del uso y la costumbre de la comunidad. De esta repetición de actos se desprende el principio jurídico más importante de este período: la primacía del Derecho viejo sobre el Derecho nuevo. A medida que avanza la Edad Media este orden jurídico entró en crisis dejando de proporcionar la seguridad jurídica deseada. Las razones de la inseguridad son de diversa índole: desconocimiento de los derechos por existir una primacía de derechos subjetivos, irracionalidad del Derecho fundamentalmente en el aspecto procesal, y, sobre todo, por cambios que se producen en el mismo orden jurídico encaminados a una nueva metafísica del Derecho que llevara a una concepción heliocéntrica de la sociedad. Este proceso puede verse detallado en el trabajo de M. GARCIA PELAYO: La idea medieval del Derecho dentro de su libro "Del Mito y la Razón en el pensamiento político", Madrid 1968, pgs. 66 y ss., si bien alguno de sus planteamientos son discutibles.

(50) GARCIA-GALLO: Manual, p. 639.

(51) Al rey corresponde la mayoría de justicia y en toda la simbología e iconografía de la época representa este carácter

el mantenimiento de la paz y del Derecho, reflejos del orden social, y la regulación de la comunidad con arreglo a unos - criterios de justicia; y sólo de esta manera se llega al fin esencial de la organización política.<sup>(52)</sup> Las monarquías cristianas altomedievales se caracterizan, pues, formal y sustancialmente por una programática e institucional religiosidad en donde el poder real es la fuerza directriz de la sociedad encaminada a la consecución de unos fines y a la conclusión en la - tierra de los ideales de la religión cristiana. Esta concepción de estado ético-religioso es la que a su vez la convierte en una monarquía limitada,<sup>(53)</sup> el poder real dista mucho de ser un poder absoluto sino que, por el contrario, se encontraba sometido

---

(51) /...justiciero mediante en cetro, que representa la vara de la justicia, o la espada que simboliza la jurisdicción. Sobre el valor de las insignias reales pueden verse: L. - GARCIA DE VALDEAVELLANO: Sobre simbología jurídica en la España Medieval en el volumen Homenaje a don José Uranga pgs. 89-134; el trabajo de P.E. SACHARAMM: Herrschaftszeichen und Staats symbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte von dritten bis zum sechszehnten Jahrhundert. Stuttgart, 1954-6, del que hemos manejado la traducción española de Vázquez de Parga: Las insignias de la realeza En la Baja Edad Media Española, Madrid, 1960, correspondiente a España solamente. El Rey es considerado como su mo sacerdote de la Justicia (GARCIA PELAYO: El Reino de Dios... pgs. 218-22) y sus jueces son considerados como "iuris sacerdotes". Pueden verse también los trabajos de GARCIA PELAYO: Mitos y símbolos políticos, pgs. 166-206 y dentro del volumen titulado Del Mito y la Razón..., ya citado, el trabajo La puerta de Capua y la entrada en el Templo de la Justicia, vid. igualmente GIMENO CASALDUERO: La imagen... pgs. 35-39; También en el poema del Cid se nos presenta al Rey como juez (E. HINOJOSA: El derecho en el poema del Cid, en Obras, t. I, pgs. 183-215) y esta tradición pasará a la Baja Edad Media como veremos más adelante.

(52) La finalidad del poder político no sufrirá apenas alteración en el pensamiento bajomedieval aunque se produce una progresiva secularización como ha destacado FERRARI: La secula -

a una serie de limitaciones impuestas por su propia naturaleza.<sup>(54)</sup>

Durante la Baja Edad Media la mayoría de estos conceptos quedan fuera de toda revisión de forma que, incluso, muchos de ellos se enriquecen hasta el punto que la realeza en este periodo queda íntimamente vinculada al Reino llegando a formar, según expresa el propio pensamiento de la época, un auténtico "cuerpo",<sup>(55)</sup> pero al mismo tiempo, tal vez por influen-

(52) /...rización de la Teoría del Estado en las Partidas, en A.H.D.E. n. 11 (1934) pgs 449-456.

(53) A. MARONGIU: Un momento típico... pàgs. 691-2.

(54) En primer lugar por su procedencia divina estaba limitado por la Ley de Dios (ver p. 5 las opiniones de PLACENTINO y HUGOLINO así como las de ROGERIO y AZO en notas 24 y 27 respectivamente). Pero esta vinculación directa con la divinidad suponía, además, una subordinación respecto al poder espiritual del Papa, único intérprete de la ley de Dios (ULMANN: Principios... pàgs. 144 y ss). Estaba limitado también por la propia finalidad del poder político, es decir, la consecución del bien común a través de la justicia, pues de lo contrario incurría en tiranía. El propio carácter de juez, y no de legislador, le obligaba a aplicar y respetar el Derecho existente, y, por tanto, limitaba su actuación. Finalmente la situación del rey frente a las restantes fuerzas del reino (nobleza, clero, ciudades) limitaba, sin duda, el ejercicio del poder por parte del monarca.

(55) Son muchas las metáforas en las que se recoge la idea de íntima unión entre el Rey y el Reino. Posiblemente la más utilizada es aquella que considera al Rey "cabeza" del Reino como expresa el Espèculo: "...deve ser guardado como cabeza, ca así como de la cabeza viene al cuerpo todo sentido e movimiento para obrar, así del rey viene al pueblo todo sanamiento de saber e de conocer..." (Espèculo 2, 1, 4); Fuero Real: "... e puso (Dios) al Rey en su lugar por cabeza, e comienzo de todo Pueblo..." (F. Real, 1, 2, ley única), Partidas: "... E naturalmente dixerón -

cia de esta visión organicista del reino, todas las tierras sometidas bajo el mismo poder real se identifican con el propio rey de forma que éste queda con respecto a la comunidad como - - "señor natural" de la misma<sup>(56)</sup>, si bien ya desde el siglo XIII,

---

(55) /...los Sabios, que el Rey es cabeça del Reyno, ca assi como de la cabeça nascen los sentidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien assi por el mandamiento que nace del Rey, que es el señor e cabeça de todos los del Reyno, se deuen mandar, e guiar, e auer un acuerdo con le, para obedescerle, e amparar, e guardar, e acrescentar el Reyno: onde el es alma e cabeça, e ellos miembros (Part. 2,1,5). Siguiendo esta idea de las Partidas se expresa el rey a los procuradores de las Cortes de Briviesca de 1387 (CLC. II, pág. 483) y Juan II en las Cortes de Olmedo de 1445 (CLC. III, pg. 483). EGIDIO: "Caput et regula aliorum" (De Regimine Principum, I. II, 18) quo totum reginum dirigi debet" (De Regimine Principum, I. II, 18). Otras veces se compara al Rey con el alma del pueblo: Especula ...Dezimos que el rey es alma del pueblo e es señor señalado porque esta fazendo en toller sus yerros de su tierra..." (Espèculo 2, 1, 1); "...que es el alma del pueblo, ca asi como el cuerpo vive por el alma asi el pueblo vive por el rey." (Espèculo 2,1,4). Partidas 2,1,5 (Vid. texto en esta nota). Otras se le compara con un árbol: "Es como árbol de Dios, que tiene gran sombra e guaresçen a la sombra del todo cansado a todo flaco e todo querelloso" (Libro de los cien capítulos, 2) e incluso con un pastor: "El Rey es pastor..." (Libro de los cien capítulos, 2). Las Cortes de Valladolid comparan al Rey con un padre: "...ca bien sabedes que Nos en quanto Rey deve mos aver cerca del nuestro regono, asi como el Padre cerca de su fijo (CLC. IV, pgs 330-1). Sobre el régimen feudal al Régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X, pgs. 89-140, dentro del volumen Estudios de Historia del Pensamiento Español, Madrid, 1967.

(56) JIMENEZ DE RADA: Crònica de España, lib. 9 cap. 14-15:

.../...

y sobre todo en el XIV, la posición del rey no es ya del monarca teocrático sino que en el pensamiento bajomedieval en-

- (56) /... "E de allí fuerónse para Villalpando (Fernando III y su corte), e allí recibienronlo como a señor natural, e salieron los cavalleros de la villa de Toro al Rey e recibienrolo por rey e señor natural..." (Texto recogido por GARCIA-GALLO Manual, II, núm. 879, pgs. 682). También en los textos legales encontramos recogida esta idea. Espèculo: "Otrosi deue seer onrado a su rey onra a Dios e onra a su señor natural..." (2, 2, proe.); Fuero Real: "... e después deben amar, e guardar a los otros sus fijos, como a fijos de su señor natural..." (1, 3, ley única); Partidas: "...E tiene el Rey lugar de Dios, para fazer justicia, e derecho en el Reyno en que es Señor..." (2, 1, 7) "...E deven fiar mas en los suyos que en los estraños por que ellos son sus señores naturales..." (e, 1, 9) Podemos citar igualmente textos de Cortes: Cortes de Madrid 1391: "...tomando mi voz asy como de vuestro Rey e Sennor natural..." (CLC. II, p. 508); Cortes de Valladolid 1440: "...los vasallos subditos e naturales deuen ser tenudos e obligados a seruir, temer, amar, onrrar, obedecer e guardar asu rey e sennor natural..." (CLC. III, 1, pg. 369); Cortes de Olmedo 1445: "...quelos vasallos se puedan nin decian leuantar contra su rrey e sennor natural..." (CLC. III, p. 488). También en las fuentes literarias: "Rey e sennor natural, que en esto se ayuntan dos sennorios: el primer, sennorio del regno; el segundo, sennorio de la naturaleza (Libro de los Castigos e documentos... p. 74). P.E. SCHRMANN ha explicado ampliamente este derecho en su trabajo Daskastilische König und Kaisertum während der Reconquista: "Esa (idea) vela en el rey un señor natural que accedía a la naturaleza real al alcanzar la categoría de heredero. El que recibiese su soberanía por la ascendencia, y el que por ello podía interpretarse el deseo de Dios, eran consideraciones puramente adicionales. El pensamiento español era entonces más sobrio, más realista, que el de los pueblos vecinos. Consideraba la soberanía como una posesión de la que debía disponer el rey legal llegado al trono, y la cual podía dividir. En Castilla se mantenía -para usar la terminología jurídica histórica- el pensamiento patrimonial en forma pura" (Cita tomada de W. F. VON SCHÖEN: Alfonso X de Castilla, Madrid, 1966, p. 33).



tran en juego otras premisas que configuran de forma distinta las relaciones del rey con la comunidad.<sup>(57)</sup> Ahora se intenta - por algún sector de las fuerzas políticas del reino implantar la fórmula que sostiene que el rey es un administrador puesto por la comunidad; no es que se dude del origen divino del poder del príncipe, lo que se discute es el procedimiento por el que ha llegado a obtener dicho poder. Por un lado, el rey defenderá la posición vicarial de que su poder lo recibe inmediatamente de Dios, por el otro lado se oponen a él aquellos que piensan que la autoridad política deriva mediatamente de Dios pero inmediatamente de la comunidad.

El origen de esta idea no es propiamente bajomedieval si no que por el contrario, en el caso concreto de Castilla y León, ya parece que se encontraba vigente durante los siglos altomedievales,<sup>(58)</sup> pero sin duda, es en los siglos XIV y XV -

---

(57) La figura del rey deja de ocupar ese plano de superioridad con respecto al reino que tenía en la Alta Edad Media (Vid. M. GALIZIA: La teoría della sovranità del Medioevo alla Rivoluzione francese, Milán 1951, pgs. 19 y ss); y - para el ámbito que nos ocupa, BARRAU-DIHIGO: Recherches sur l'histoire politique du royaume asturien, Tours, 1921, y MARAVALL: El concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1964, 2a. ed.) aunque si bien es verdad que este fenómeno estuvo atenuado en la Península (A. MARAVALL: El pensamiento político en la Alta Edad Media, pgs. 24-5 dentro del volumen Estudios de Historia del Pensamiento Español, Madrid, 1967.)

(58) A. MARAVALL ha señalado como el rey hispano se confiesa en posesión de una potestad de origen divino a través de la herencia y la elección y como todas las crónicas de la Alta Edad Media hacen referencias a esas dos fuentes -

cuando adquiere mayor profusión en Castilla acompañada del fenómeno de la Recepción.

Fueron precisamente los glosadores quienes al comentar la "lex de imperio" destacaron cómo el príncipe recibía el poder a través de los súbditos. Efectivamente, los juristas del Digesto reconocían como única fuente de la autoridad política - al pueblo romano,<sup>(59)</sup> y la polémica, siempre ceñida a los textos justinianos, se centró para los glosadores en el problema de la potestad legislativa pero que, en definitiva, se podía reducir al problema del origen del poder real<sup>(60)</sup>. Pero lo que

---

(58) /...de poder (El Pensamiento político... pgs. 35-37) Parece pues, que la idea electiva subsistió como tópico político y siempre estuvo presente en el pensamiento ~~altome-~~dieval con independencia de que predominase la hereditaria. Nos encontramos ante la tensión producida por las dos concepciones sobre el gobierno (ascendente y descendente), pero que como señala ULMANN a pesar de que en la práctica la una excluía a la otra, ambas tuvieron vigencia en la Edad Media y aunque predominó la doctrina descendente, ésta no llegó a borrar del todo a su contraria (Principios... pgs. 24 y 27). En último caso el sistema electivo no está documentado en Castilla y León como bien destaca el prof. <sup>A</sup> GARCIA-GALLO en su Manual ... pgs 629 y ss.

(59) Son numerosos los textos, entre ellos señalamos: Dig. 1, 3, 32; 1, 2, 2,; 1, 3, 1 y 2, 1, 4, 1; Gayo Instituciones: 1, 1, 7 y del Código: 1, 14, 4 y 1, 17, 2.

(60) Aunque no entra dentro del ámbito de nuestro trabajo el pormenorizar toda la polémica que a lo largo de dos siglos sostienen glosadores y comentaristas, sí parece oportuno recoger algunas de sus opiniones. En principio la idea que de la fuente de la autoridad política es el pueblo romano es aceptada unánimemente, así, por ejemplo, se expresan -

realmente nos interesa destacar es que pese a que en estos siglos se ha realizado un profundo cambio con respecto a las relaciones del rey con la comunidad<sup>(61)</sup> mediante la aceptación

---

(60) /...IRNERIO (De Aequitate, 2, ed. Fitting obra atribuida por este autor a Irnerio y Summa Codicis o Summa Trecensis, 1, 14, 3, ed. Fitting, Berlin 1894), PLACENTINO, - quien ve al emperador como un vicario del pueblo (Summa Institutionum, 3, 2, ed. Corpus Glossatorum Iuris Civilis, XI vols. Turin, 1966-73, vol. I) y AZO que señala también la intervención del Senado (Summa Codicis, 1, 16, ed. Basel - 1563); pero el problema se plantea a la hora de precisar si el pueblo romano perdió la autoridad al delegarla en el emperador o si, por el contrario, todavía tiene posibilidad de ejercerla, que en el plano de los hechos se traduce en reconocer o no reconocer un valor superior de la ley sobre la costumbre. Es cierto que ya Constantino (Código 8, 52) afirmaba que la costumbre no puede prevalecer contra la ley y que Justiniano reconocía al emperador como único legislador (Código 1, 14, 12), pero hasta qué punto era esta una doctrina generalizada? Es aquí precisamente donde los glosadores difieren. Mientras para IRNERIO (Glosa al Digesto, 3, 32, ed. Besta, Turin 1896), PLACENTINO - (Summa Institutionum, 1, 2) y ROGERIO (Summa Codicis, 1, 2, ed. BIMAÉ, vol. I) la autoridad permanece en el emperador sin posibilidad de ser recuperada por el pueblo, otros, en cambio BULGARO, JUAN BASIANO, AZO y HUGOLINO sostienen que el pueblo, pueda recuperar dicha autoridad. La opinión contrastada de todos estos juristas puede verse en las Dissensiones Dominorum o "Codicis Chisianus", 46 ed. Hänel, Leipzig 1834. En el siglo XIV la polémica está lejos de ser resuelta y así, mientras GINO DE PISTOIA (Comentaria super aureo volumine Codicis Rub. IV, fol. VIII r, ed. Venetiis 1493) mantiene que el "imperium" procede de Dios pero la "auctoritas" del pueblo BARTOLO (Comentaria, 1, 141, 12), en cambio, piensa que el pueblo perdió esta facultad de hacer leyes y de deponer al emperador.

(61) En el sentido de que Dios concede el poder a la comunidad se van a pronunciar los seguidores de Santo Tomás, aunque éste parece que no se definió claramente al respecto, quienes ejercieron una gran influencia en el pensamiento europeo

-no sin resistencia por parte del rey- de la idea del pactismo.<sup>(62)</sup> esta concepción no afecta de hecho al contenido del poder real en su ámbito jurisdiccional sino que, en contra de lo que se pudiera pensar, es precisamente ahora cuando triunfan las premisas del absolutismo real contenidas en el Derecho Romano que desde los tiempos de Alfonso X se habían convertido en la meta de los monarcas castellanos.

---

(61) /...también se expresan en este sentido JUAN DE PARIS, DUNS ESCOTO, MARSILLO DE PADUA, entre otros (GARCIA-GALLO, Manual, I, pgs. 744-5), sin duda en ellos influye de forma definitiva el pensamiento aristotélico que en estos momentos predomina en Europa. Para ello véase ULMANN, Principios ... pgs. 235-55.

(62) Siempre se esgrimió esta idea cuando el poder real se encontraba mermado. Cortes de Ocaña 1469: "...Toda muchedumbre es materia o causa de confusión e de la confusión viene la discusión por la pluralidad de los que contienen e por estos los homes constrennidos por necesidad de enseñorear entre muchedumbre e congregación dellos a uno que las disensiones concordase e por mandado de superioridad los departiese e por su dicho de aqueste fuesen regidos y porque su dñco era rregir conveniente cosa fue que se llamase rey (CLC. III, pet. 1, p. 767). En sentido similar se expresan las Cortes de Madrigal de 1476: "Como toda carne haya corrompido su carrera e es inclinada e cobdicia e por divina permission e rrazon nautral fue hallado por rremedio de muchos inconvenientes e por conservación de la amistad humana que un rrey rrigiese un rreyno y este fuese muy poderoso (CLC. IV, pet. 1, p. 61). Podría pensarse que existe una contradicción entre el pactismo y el absolutismo regio que propugnan las fuentes romanas, pero en realidad, esa contradicción no existe. La idea de contrato es para BODINO precisamente el fundamento del Derecho público y sobre la base contractual (tópica y retórica) se apoya, junto con Dios, el poder político. "La idea de monarquía absoluta viene a superponerse, sin destruirlas, a las

A partir del siglo XIII, pues, y como consecuencia de un amplio movimiento iniciado en la centuria anterior<sup>(63)</sup> una serie de factores de muy diversa índole y procedencia, que a continuación examinaremos, afectan de forma decisiva a la transformación del Derecho y el Estado<sup>(64)</sup> y, como consecuencia, a la

---

(62) /...viejas ideas de contrato y de la costumbre que, regulando las relaciones de los reyes con sus vasallos y súbditos, moderan aquella" (R. MOUSSNIER: Histoire general des Civilisations, vol. IV. Les XVI et XVII siècles, págs. 93 y 99-100). La idea del pactismo estuvo difundida por todos los reinos peninsulares, véase para ello GARCÍA-GALLO: Manual, I, págs. 745-50.

(63) Gran parte de los cambios que se producen en el siglo XIII, sólo son comprensibles a la luz de este movimiento iniciado en el XII, considerado como un auténtico "renacimiento". Vid. CH. C. HASKINS: The Renaissance of the 12 th. Century, Nueva York, 1957, pgs. 5 y ss.

(64) El Estado adquiere una sustantividad propia a raíz del proceso de secularización (véase el trabajo de FERRARI citado en nota 52) al mismo tiempo que se abandona la idea teocéntrica para dar paso a una idea iuscéntrica - como ha puesto de relieve M. GARCÍA PELAYO: La idea medieval del Derecho, págs. 97 y ss.; No obstante, pese al progresivo proceso de secularización, la influencia del Derecho canónico en el campo del Derecho público es todavía decisiva. Véase S. MOCHIONI: Fonti Canonistiche dell'idea moderna dello stato, Milán 1951; J. MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO: Las líneas de influencia canónica en la Historia del proceso español en AHDE 23 (1953) pgs. 467-93; E. GARCÍA DE ENTERRÍA: Dos estudios sobre la ocupación en el Derecho administrativo, Madrid 1955, pgs. 107, entre otros.

del rey, que aprovecharà todos los medios puestos a su alcance para lograr la consolidación del poder real, y, en definitiva la supremacía del mismo con respecto a los demás poderes temporales -imperial y señoriales- e, incluso, del poder pontificio.

A este impulso del poder real contribuye de un modo decisivo el renacimiento y la revalorización de los estudios del antiguo -Derecho<sup>(65)</sup>. Este aporta al pensamiento de la Edad Media la concepción de una autoridad jurídica centralizada en la figura del emperador; pero sin duda cuando los juristas medievales trataban de abandonar el plano teórico y especulativo que les brindaba el estudio de las fuentes justinianeas y se situaban en la realidad política medieval, no podían menos que ver que todo ese poder que el Derecho Romano atribuía al emperador no era otra cosa que un verdadero anacronismo y las Leyes del Digesto o del Código, consideradas como la "ratio scripta", no eran aplicables ni al emperador, ni a los reyes o cualquier otro poder independiente. Fue necesario todo un largo proceso de interpretación, que culminará en la Edad Moderna, hasta conseguir dotar a cada poder -

---

(65) Existe una amplísima bibliografía acerca de este tema, entre la cual destacamos: C.F. SAVIGNY: Storia del diritto romano nel medio evo, trad. italiana de BOLLATI, Torino 1857; VINOGRADOFF: Il diritto romano nell'Europa Medievale, Palermo 1914; P. KOSCHAKER: Europa y el Derecho Romano, Madrid 1935; G. ERMINI: Corso di diritto comune, 3a. ed. Milán 1952; F. CALASSO: Medio evo dell' Diritto, Milán 1951. Dentro de estudios parciales que hacen referencia a este fenómeno cabe citar: C.N.S. WOOLF: Bartolus of Sassoferrato, Cambridge 1913; ERCOLE: L'origine francese di una nova formola bartoliana, en Archivio Storico italiano, n (1915) y del mismo autor Da Bartolo all'Althusio, Florencia 1932; F. CALASSO: I glossatori e la teoria della sovranità, Milan 1957; W. ULMANN: The medieval idea of Law as represented by Luccas de Penna, Londres 1946; E.H. KANTOROWICZ: The King's two Bodies, Princetown 1957.

político independiente con el atributo imperial de la soberanía.<sup>(66)</sup>

Esta consolidación y afianzamiento del poder real se produce, fundamentalmente, en una triple dirección. En primer lugar logran do la independencia, en el ámbito temporal, con respecto del poder pontificio; en segundo lugar, equiparando el poder real al poder im perial y, por tanto, quedando así libre de esa superioridad teórica que ejercía el emperador sobre el resto de los reyes; y, finalmente, tratando de imponer su supremacía con respecto a las distintas fuer zas del reino.

El reconocimiento por parte de los príncipes de origen divino de su poder suponía, a la vez, la justificación del poder papal, y ya desde la segunda mitad del siglo V la doctrina de la plenitud del poder pontificio y la tesis de que el Papa era un órgano mediador<sup>(67)</sup> entre Dios y los hombres estaba ampliamente generalizada<sup>(68)</sup>. De aquí parte la doctrina galasiana<sup>(69)</sup> en el intento de independizar - por completo a la Iglesia de sus realizaciones con el poder secular,

---

(66) Un panorama global de este proceso puede verse en el trabajo de C. N. D. WOOLF: Bartolus of Sassoferrato, especialmente en el capítulo III, Cambridge 1913.

(67) "Iam ergo videtis quis iste servus, qui super familiam consti tuitur, profecto vicarius Jesu Christi, sucesor Petri Christus domini, Deus Pharaonis: inter Deum et hominem medius cons titutus, citra Deum, sed ultra hominem, minor Deo sed major homine..." (INOCENCIO III: Sermonis de diversis, Sermo II en MIGNE, Patrologia Latina, vol. 217, cap. 658).

(68) ULMANN: Principios... p. 61. Sobre los fundamentos y la - primacía del poder pontificio véase este mismo autor y trabajo. pags. 37-56.

(69) El reconocer en una misma sociedad -fundada por Dios- dos principios de autoridad, el gobierno espiritual de los sacerdo tes y el temporal de los reyes, y dos jerarquías de magistra dos, suponía que cualquier conflicto surgido entre estas dos

si bien es verdad que esta concepción dualista, generalmente aceptada durante gran parte de la Edad Media<sup>(70)</sup>, no había sido llevada a la práctica tal como se expresó y las interferencias entre uno y otro poder eran frecuentes. Es precisamente esta independencia total de la iglesia<sup>(71)</sup>, conseguida prácticamente en el siglo XI<sup>(72)</sup> la que conducirá al inexorable enfrentamiento de las investiduras<sup>(73)</sup>,

---

(69) /...jerarquías se tratara de un conflicto de competencias.

El problema radicaba en cuáles eran los límites propios de cada autoridad y sobre lo que cada una de las jerarquías podía legítimamente realizar dentro de los límites de sus competencias. Véase también la nota 42.

(70) ESTEBAN DE TOURNAY: Summa Decretorum, princ.: "In eadem civitate sub eodem rege duo populi sunt, et secundum duos populos duae vitae, secundum duas vitas duo principatus, secundum duos principatus duplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas Ecclesia; civitas rex Christus. Duo populi duo in Ecclesia ordines: clericorum et laicorum. Duae vitae spiritualis et carnalis. Duo principatus: sacerdotum et regnum. Duplex iurdictio: divinum ius et humanum. Redde singula singulis et convenient universa" (Recogido por GARCIA-GALLO, Manual, II, num. 1044, pgs. 873-4); ALANO ANGLICO: glosa "iuris" a las Decretales de Gregorio IX, 2, 28, 7: "... Verius est quod gladium habeat a papa. Est enim corpus unum Ecclesiae, ergo unum solum caput habere debet. Item, Dominus utroque gladio usus est..." (Recogido por GARCIA-GALLO Manual, II, núm. 1047, p. 878).

(71) A esta independencia contribuyen de un modo decisivo, de un lado, la colección denominada "Falsas Decretales", aceptadas como auténticas en el siglo XI, que evidentemente se hicieron para fortalecer la posición de los obispos frente al Rey y al mismo tiempo exaltar la autoridad del Papa (Vid. P. FOURNIER Etudes sur les fauses decretales en Revue d'histoire ecclesiastique de Louvain, vol. VII (1906) pgs. 33. 301. 543 y VIII (1907) p. 19) y de otro las grandes reformas del Cluny (Vid. J. P. WHITNEY: The Reforme of the Church en Cambridge Medieval History, vol. V. cap. I).



que parece concluir en el siglo XIII con la afirmación de la potestad temporal del papado sobre los reyes<sup>(74)</sup>, pero en realidad esta polémica distaba mucho todavía de ser zanjada hasta que la naturaleza

---

/...

- (72) Para las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante este periodo puede verse CARLYLE. A History ... Vol. I, cap. XXI donde se recogen los principales textos.
- (73) Es muy abundante la bibliografía en torno a la polémica de las investiduras. Prácticamente todos los manuales de Historia - Medieval dedican extensos capítulos a ella. Sin ánimo de ser exhaustivo podemos además citar: CARLYLE: A history... vols. IV y V; N. BROOKE: Gregory VII and the First contest between Empire and Papacy en Cambridge Medieval Papalism. The Political Theories of the Medieval Canonists. Londres 1946 y The Growth of Papal Government in the Middle Ages. Londres 1955, además del ya varias veces citado Principios de Gobierno y Política de Edad Media, Madrid, 1971; valioso igualmente es el trabajo de B. TIERNEY: The Crisis of Church and State 1050-1300, Englewood Cliffs, N.J. 1964, quien, además de incorporar una extensa colección de documentos, hace agudos comentarios acerca de los mismos; M. PACAUT: La théocratie. L'Eglise et le Pouvoir au Moyen Age. Paris 1957. También - para la segunda fase del conflicto puede verse: C.H. T. WOOD: Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII, México 1968.
- (74) Ya en este sentido se expresaba no sólo canonistas como RUFINO: "Per hoc ergo videtur, quod summus pontifex, qui beati Petri est vicarius, haber iura terreni regni" (Summa Decretorum P I, d. 22 c.1. Texto recogido por GARCIA-GALLO, Manual II núm. 1043, p. 873) sino también civilistas como PLACENTINO: "ex hoc verbo colligitur quod papa maior est quam imperator..." (Summa Trium Librorum, gl. a filio. Texto recogido por -- CALASSO: I glossatori... p. 103-4). Sin duda alguna de todas las monarquías cristianas europeas del siglo XIII la que se consolida con mayor esplendor es la monarquía pontificia. Los papas de esta centuria se preocupan de continuar, precisar, y aumentar la concepción teocrática desarrollada por Gregorio VII, incluso harán uso de las concepciones y expresiones del Derecho Romano (J. LE GOFF: La Baja Edad Media, vol. XI, dentro de la Historia Universal Siglo XXI, pgs. 230-2).

y extensión del poder temporal del Papa quede, ya en el siglo XV, reducida a una "potestas indirecta".<sup>(75)</sup>

El conflicto de las investiduras apenas tiene repercusión de un modo directo en Castilla y León, preocupados más por las luchas peninsulares y porque no se ha planteado como en Alemania el problema de la iglesias propias del rey, el patrono real, etc., pero sí, en cambio, deja notar y influencia ideológica<sup>(76)</sup> sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIII en el reinado de Alfonso X<sup>(77)</sup>, recogiendo ya de una forma clara esta independen-

---

(75) A ella se llega por la doctrina de la "iurisdictio divisa", por la que las dos mayores dignidades, el papa y el emperador, tenían, cada uno dentro de su ámbito, idéntica jurisdicción pero claramente separadas. Véase MOCHI ONORY: Fonti canonistiche... págs. 162 y ss.

(76) En la Península encontramos defensores de una y otra postura. Así, San RAIMUNDO DE PEÑAFORT, se muestra defensor de la autoridad del Papa en lo temporal: "pape enim habet Dominio utrumque gladium et alterius scilicet, temporalis executionem concedit imperatori" (Summa Iuris, ed. de RIUS SERRA, Barcelona 1945, p. 40. Texto citado por MARAVALL: Del régimen feudal, p. 92). Por el contrario, JUAN HISPANO, por ejemplo, mantiene que la potestas temporal ya no está en manos del Papa pues éste la delegó en el emperador: "Dico, quod nec quod concedendas leges seculares, nec quod aliud exercitium in hiis que ecclesiastica non tangunt, aliquid sibi retinuit dominus papa, postquam ius imperii transtulit in imperatore, nisi in illis locis in quibus super populum iurisdictionem temporale, optinet" (texto recogido por MOCHI ONORY: Fonti canonistiche... p. 225. Traducido al castellano puede verse también en GARCIA -GALLO: Manual II, núm. 1049, p. 879).

(77) En el Espèculo se vislumbra ya esa separación de poderes con cediendo al Papa solamente el "poder del apostoligo" (Esp. 1, 2, 1) y señala que para lo temporal el que tiene lugar de Dios en la tierra es el Rey (Esp. 2, 1, 5).

cia en el ámbito temporal con respecto al Papado por los juristas que elaboraron las Partidas<sup>(78)</sup>, acentuándose este proceso a partir del XIV<sup>(79)</sup> cuando queda la autoridad del Papa circunscrita a materias espirituales o de arbitraje entre los príncipes.<sup>(80)</sup>

---

(78) Las Partidas, haciendo eco de la doctrina de las dos espadas refiriéndose al "Forum internum", separan claramente un poder espiritual que "taja los males escondidos" y que pertenece a la Iglesia, y un poder temporal en mano de Reyes y Emperadores. Mientras la espada espiritual tiende a la universalidad la espada temporal se encuentra visiblemente fraccionada (Part 2, proem.) Se reconoce, igualmente la independencia del Emperador con respecto al Papa al que sólo queda sujeto en las cosas espirituales (Part. 2, 1, 1.).

(79) Así, por ejemplo, a raíz del pleito sobre el Señorío de Vizcaya: "... è de commo el pleito fincara en razon de la jura, è que apelara don Diego (López de Haro) ante el Papa, por esta razon acordaron todos los más que don Diego non podia facer esta apelación, lo uno porque el Rey è todos los sus reinos - de Castilla è de León son esentos de la iglesia de Roma, que non an nin deven aver ninguna juridición por ningun agravamiento que el Rey ficiese... que non podia apelar del para el Papa ni para ante otro ninguno, è que esta esencion guardaron siempre todos los reyes onde èl venia" (Crónica de Fernando IV, año 1305, Crónicas I, p. 139). Idea similar expresa don JUAN MANUEL: "El papa ha poder cumplido en todo lo spiritual... otrosi ha muy grant poder en lo temporal; más cuál o cuánto es este poder, porque yo so de Castiella, et los reys de Castiella et sus reinos son más sin ninguna subjección que otra tierra del mundo, por ende non sè yo mucho desto. Mas los que son del imperio, o a los que esto tañe, ellos se lo vean, ca nos non habemos què adobar en esto, nin nos queremos meter en lo que non hamos de librar" (Libro de los Estados, I, p. 357). No se acepta por tanto la superioridad temporal del Papa, ni siquiera su función de juez de los reinos ver MOCHI ONORY: Fónti canonistiche... pgs. 152-58) ya que los reyes, al considerar que su poder procede directamente de Dios, consideran que sólo han de rendir cuentas ante EL: Cortes de Toro 1371, (CLC. II, pream, p. 203); Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, pet. 3 p. 521); Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III pet. 1, p. 369 y pet. 20 p. 521). En el mismo sentido se expresa Enrique IV. "Espero en la bondad de mi Redemptor ---

Tampoco Castilla ni León llegaron a estar sometidos al Imperio Franco o Alemán, aunque parece que la idea imperial tuvo su repercusión en los siglos IX al XI<sup>(81)</sup>, pero ya a partir del siglo XIII, pese a las protensiones alfonsinas al Imperio, se apoya doctrinalmente la independencia de los reyes con respecto al emperador. La diferencia entre cualquier monarca y el emperador radicaba, de hecho, no en una situación jurídica, sino en una mayor dignidad, en una preminencia honorífica<sup>(82)</sup>, pero que los emperadores, apoyándose en los textos de Derecho Romano, pretenden de algún modo hacerlo efectivo frente al Papado y a los restantes reinos.

Contra esta postura imperial reacciona, como es lógico, su mayor oponente, el Papa, quien secundado por los otros príncipes mantienen la "exemptio imperii" que adquiere carta de naturaleza en el pontificado de Inocencio III con su Decretal "Per venerabilem"<sup>(83)</sup>

(79) /... Jesucristo como justo juez de Reyes..." (GALINDEZ DE CARVAJAL: Crónica de Enrique IV, ed. TORRES FONTES, - cap. 66, pags. 240-1).

(80) Juan I se dirige al Papa para que determine sobre la titularidad del reino de Portugal (Crónica de Enrique III en Crónicas II, pg. 191, donde se recoge el testamento de Juan I).

(81) MARAVAL: Del régimen feudal... p. 93; Sobre la idea del imperio y su polémica véase GARCIA-GALLO: El imperio medieval español, en el vol. "Historia de España. Estudios publicados en la revista Arbor", Madrid 1953, pgs. 108 y ss., en donde se recoge toda la bibliografía sobre el tema, y MARAVALL: El concepto de España en la Edad Media, 2a. ed. Madrid, 1964 pgs. 412 y ss.

(82) MARONGIU: Un momento típico... p. 697. La igualdad en la práctica entre el rey y el emperador ya la habían reflejado ESTEBAN DE TOURNAY en su glosa a la palabra "rex" (Decreto, I, d. 2 c. 4. Texto recogido por GARCIA-GALLO: Manual III, num. 1054 p. 882) y AZO: Item quilibet (rex) hodie videtur eande, potestatem habere in terra sua quam imperator, ergo potuit facere quod sibi placet" (Quaestiones, q. 13. Texto recogido por GARCIA-GALLO: Manual, II, num 1055, p. 882). -

al sentar que el rey no conoce superior en lo temporal<sup>(84)</sup> con lo que, de hecho, quedan equiparados el poder real y el imperial, aunque en realidad la bula se refería al Señor de Montpelier. Pero si en los restantes reinos europeos estas ideas tuvieron diversas alternativas hasta llegar a imponerse, en los reinos peninsulares parece que ya tradicionalmente<sup>(85)</sup> se sostenía la "exemptio imperii"

---

(82) /... Véase también el trabajo de MARAVALL: El Concepto... pg. 459 y ss. Allí se expresa también esa concepción honorífica y limitada en el pensamiento imperial de Alfonso X.

(83) "Insuper quum rex superiorem in temporalibus minie recognoscat" (Decretales de Gregorio IX, 4, 7. Texto recogido por GARCIA-GALLO; Manual II, núm. 1046, p. 876.)

(84) El estricto valor político de la fórmula "rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator", es de origen bartoliano y se generaliza en el siglo XIII. En cuanto a la génesis histórica de la misma véase CALASSO: I glossatori... pgs. 22 y ss. quien rebate el origen francés de la fórmula sostenida por ERCOLE (Da Bartolo all Althusio, pgs. 257 y ss). El análisis de los elementos de la fórmula puede verse en el citado trabajo de CALASSO. (págs. 39 y 55) En cuanto a su alcance, la opinión no es unánime. Por un lado C. N. S. WOOLF y - CALASSO piensan que durante el siglo XIII la fórmula no significa una plena independencia del emperador, sino que el Rey, dentro de su reino, es superior a cualquier otro y ejerce unos poderes delegados. Por el contrario ERCOLE y MOCCHI ONORY sostienen una independencia total con respecto al imperio.

(85) "Praefulget etiam omnimoda libertate Hispania cum in agendis causis civilibus propriis utitur legibus et Hispanorum Rex nulli subditur imperio temporalis". (LUCAS DE TUY: Chronicon Mundi en Hispania illustrata t. IV p. 3 citado por MARAVALL: Del régimen feudal... p. 93) según MARAVALL, el título de "imperator" usado por los reyes hispanos, representa la pretensión de éstos de estar exentos del Imperio Sacro Romano (El Concepto de España... pgs. 403 y ss). El prof. GARCIA-GALLO, en cambio ofrece una interpretación distinta. vid: El Imperio Medieval Español, antes citado.

en base a que los españoles habían ganado su propio imperio con su valor y méritos<sup>(86)</sup>, por lo que la fórmula "rex superiorem non recognoscens"<sup>(87)</sup> es rápidamente aceptada y recogida en *Espèculo*<sup>(88)</sup> *Partidas*<sup>(89)</sup> y otras fuentes literarias,<sup>(90)</sup> convirtiéndose, fundamen-

(86) Así se expresa VICENTE HISPANO: "...Iohannes theutonice, excipe ipso iure exemptos Yspanos, qui karolum non admiserunt, nec euis pares. Sed ego Vincentius dico, quod theutonici per busnā diam perdiderunt impetum. ... Quodlibet enim thigurium sibi - usurpat dominum, et quelibet civitas de dominio cum eis conten- dir. Sed soli Yspani virtute sus abtinuerunt imperium et episco- pos elegerunt, LXIII. d. cum longe. Nonne in francia et in an- glia et in theutonica et in Constantinopoli Yspani dominatur bea- te domine Yspanie, qui dominium pariunt, et dominantes auda- cie et probitatis virtutibus expandunt. Iuvantur ergo Yspani me- ritis et probitate, nec indigent corpore prescriptorum vel con- suetudinum sicut theutonici. Quis valeat numerare, Yspania, laudes tuas? ... (Texto citado por G. POST: "Blessed Lady Spa- in". Vicentius Hispanus and spanish national imperialism in the thirteenth century en Speculum, num. 29 (1954) p. 206) Para la figura de VICENTE HISPANO véase también J. OCHOA: - Vicentius Hispanus, Roma-Madrid 1960, y MOCHIL ONORY: Fonti canonistiche... quienes recogen sus textos más importan- tes.

(87) El análisis y la influencia de esta fórmula en España ha sido estudiado por MARAVALL en El concepto de España... pgs. - 435-6 y más detenidamente en su trabajo Del régimen feudal... pgs. 93 y ss. Véase también de este autor. La teoría española del Estado en el Siglo XVII pgs. 81 y ss. y El Estado Moderno y Mentalidad Social, t. I, pgs. 252-4.

(88) "...e pues que estos las fezieron que avien mayores sobre si, mucho mas las podiemos Nos fazer que por la merced de Dios non aviemos mayor sobre Nos en lo temporal". (*Espèculo* 1,1,3)

(89) Al referirse sobre los poderes de los emperadores dicen "que essos mismos han los reyes en la de sus reynos, e mayores..." (*Partidas*, 2,1,8.)

(90) "Para mientes al estado que tienes, e después que veas que eres rey e emperador, veras e conoceras que tienen lugar de Dios" (Libro de los castigos... p. 91). El infante don JUAN MANUEL tampoco ve una diferencia entre el rey y el emperador

talmente en el siglo XV en uno de los argumentos de mayor peso que esgrimen los monarcas para implantar su absolutismo.<sup>(91)</sup>

A través de este proceso se consiguió equiparar el poder real al poder imperial y, por tanto, a todo "princeps" en su reino se le atribuyeron todas aquellas potestades que el Derecho Romano reservaba al emperador<sup>(92)</sup>. Así, la fórmula inicial de no reconocer

---

(90) /...(Libro de los Estados, I, p. 334) pero es ya en el XV cuando se generaliza por completo este punto de vista. Así BELLUGA afirma la "exemptio" porque los reyes de España ganaron sus reinos de las fauces de sus enemigos: "Et honor imperatori nostro debetur regi in patria, qui imperatorem non recog noscit, quia a faucibus inimicorum regna sua eripuit" (Speculum Principum, Rub. 6, ed. Paris 1530, nùm. 3 fol. VIII, y en el mismo sentido se expresa ALVARO PELAYO: "regna sua ab hostium facibus eruerent" (Speculum Regum, ed. Lisboa 1955, p. 522) Los procuradores de las Cortes de Santa María de Nieva, hablan también de esta independencia: "por donde parece que los Santos Padres que confirmaron a vuestros reynos la libertad e esençon e corona imperial..." (CLC. III, p. 856).

(91) Desde el reinado de Juan II se puede ver esta tendencia. Así, por ejemplo en las Cortes sobre el Real de Olmedo: "e caso que alguna contrariedad ouiese delas vnas leyes a las otras la justa petición e declaración de todo ello solamente pertenesçe avuestra alta sennoria, commo a rrey e soberano sennor non rreconosçiente superior en lo temporal..." (CLC. III, p. 489). Pero en donde se expresa más claramente esta idea es en la cédula en la que da parte Juan II de la prisión de Alvaro de Luna: "ca yo de mi propio motu è cierta ciencia è poderio real absoluto de que quiero usar è uso en esta parte, como Rey è soberano Señor non reconosçiente superior en lo temporal..." (Memoorias de Enrique IV, año 1453, Doc. XXV, p. 45).

(92) En un principio la recepción del Derecho Romano planteaba el problema de que al ser un Derecho reservado al emperador, el reconocimiento de la vigencia de éste por parte de cualquier rey podía interpretarse como una aceptación de la sumisión al Imperio, pero este problema fué resuelto con el desarrollo de la fórmula "rex imperator in regno suo" a la que acabamos de referirnos.

superior en lo temporal queda definitivamente transformada en "rex superiorem non recognoscens est imperator in regno suo",<sup>(93)</sup> siendo ya recogido su sentido en las Partidas<sup>(94)</sup>. De esta forma, sobre la identidad de funciones entre el rey y el emperador, el contenido del poder real se ve enriquecido por los poderes y derechos mayestáticos, los "iura reservata imperii", asignados al emperador romano, pero con la sustancial diferencia de que el emperador carecía de los medios técnicos necesarios para poder hacer efectivo todo ese poder en su imperio, mientras que el rey, en el ámbito de su reino, tenía más medios a su alcance para intentar implantar dicho poder.

El último obstáculo con que se encontraba el poder real para llegar a su total consolidación fue mucho más difícil de salvar y sólo se conseguirá a través de todo un largo proceso de más de dos siglos. Si lograr su independencia con respecto al Papado y al Imperio fue para los reyes castellanos una tarea relativamente fácil ya que, en último extremo, la lucha se desarrollaba más en un plano ideológico que real, no fue así el intento de proyección

---

(93) Véase la nota 82 y los trabajos citados en las notas 63, 64 y 85.

(94) "Vicarios de Dios son los reyes, cada uno en su Reyno, puestos sobre las gentes, para mantenerlas en justicia, e en verdad quanto en lo temporal, bien assi como el Emperador en su Imperio" (Partidas 2, 1, 5); "Sabida cosa es, que todos aquellos poderes que de su Imperio, que essos mismos han los Reyes en la de sus Reynos, e mayores". (Partidas 2, 1, 8); "Emperador o Rey puede facer leyes sobre las gentes de su Señorio..." (Partidas 1, 1, 12). Aunque en principio los atributos de poder son los mismos, en último término parece que el de los reyes es mayor al poseer su potestad a título hereditario en contraposición al emperador que es electivo (Partida 2, 1, 7 y 8). En este sentido véase MARAVALL: Del régimen feudal... p. 100).



del poder real frente a los poderes señoriales y concejiles. Se trata de un proceso complejo en el que el juego político de cada momento y la propia personalidad del rey hacen que el equilibrio de fuerzas incline la balanza, según el momento, hacia uno u otro de los contendientes.<sup>(95)</sup>

El poder real, imbuído ahora por las nuevas concepciones centralizadoras procedentes del Derecho Romano, ha empezado su potencialización, creemos, en los reinados de Alfonso IX<sup>(96)</sup> y Fernando III<sup>(97)</sup> pero es su hijo, Alfonso X, quien inicia una política tendente a la limitación de los poderes señoriales; si -

---

(95) Saldría del objeto de este trabajo detallar este largo proceso político. Para el reinado de Alfonso X véase: BALLESTEROS: Alfonso X el Sabio, Murcia 1963; para el de Sancho IV, - - - GAIBROIS: Historia del reinado de Santo IV, Madrid, 1922-1312) La guerra civil y el predominio de la nobleza, Valladolid 1976; para Pedro II y los Trastámara véase SUAREZ FERNANDEZ en la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XIV y XV y más en concreto su Nobleza y Monarquía, Valladolid 2a. ed. 1975 y Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid, 1977.

(96) id. J. GONZALEZ: Alfonso IX, Madrid, 1944.

(97) Con la concesión del Fuero Juzgo a las distintas ciudades de Andalucía y Murcia que se van conquistando, Fernando III además de lograr una relativa unificación jurídica, está concediendo un Derecho que refuerza la posición del Rey considerablemente al reconocerle a éste la facultad legislativa y el monopolio del nombramiento de jueces (Fuero Juzgo 2, 1, 13).

bien es verdad, ésta, pronto se verá truncada por una fuerte reacción nobiliaria<sup>(98)</sup>, No obstante, se puede decir que prácticamente todos los reyes castellanos, salvo Enrique II mantienen esta línea limitadora de los poderes señoriales fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, incorporando sucesivamente a la Corona<sup>(99)</sup>

---

(98) Crònica de Alfonso X, caps. 20-26. pgs. 15-22 principalmente.

(99) En la Baja Edad Media hay una clara tendencia hacia la objetivización del Reino. Este proceso es perseguido por la doctrina de los dos cuerpos del rey. Según esta, el poder pertenece efectivamente al rey, pero éste no es una persona como las demás pues hay en él un ser de rey o personal real que trasciende a la persona individual y que se extiende hasta que se identifica con la comunidad. (Véase E. H. KANTOROWICZ: The King's two Bodies; caps. V. VI y VII) Esta idea la encontramos ya en Castilla en el siglo XIV: "el rey es persona común y los sus bienes son comunes" (Glosa castellana al Regimiento de Principes, I, p. 304 ed. JUAN BENEYTO, Madrid 1947) y parece generalizada en el siglo XV. Así Juan II se presenta como "Rey e Señor común de todos" (Memorias de Enrique IV, II, doc. XXXVII, p. 69) La Corona se va a constituir en el símbolo - objetivizador y transpersonalizador que permite afirmar la continuidad y superioridad del poder y que se sitúa por encima de la persona de los reyes. Al mismo tiempo se convierte la Corona en un centro autónomo de integración de una pluralidad de derechos materiales e inmateriales en el que se compendia el orden político. En base a estos conceptos nace la idea de la inalienabilidad del Reino. En este sentido se expresa Don Diego López de Haro ante la consulta hecha por Alfonso X: "Que vos fagades mucha honra e mucho bien al infante don Dionis, vuestro nieto, dándole de vuestro aver lo que fuere la vuestra merced... Mas señor, que vos tirades de la corona de vuestros reynos el tributo que el rey de Portugal è su reyno son tenudos de vos facer, yo nunca, señor, vos los aconsejaré" (Crònica de Alfonso X, cap. XIX, pgs. 14-14). Para la Corona véase el trabajo de M. GARCIA PELAYO: La Corona. Estudio sobre un símbolo y concepto político, dentro del volumen Del Mito y la razón... pgs. 14-64).

distintos señoríos<sup>(100)</sup> y al mismo tiempo principalmente por la presión insistente de las ciudades, aliados naturales del rey en esta lucha contra el poder señorial, pidiendo al rey que no enajene las tierras de realengo<sup>(101)</sup>; por otro lado extendiendo la legislación -

---

(100) Así, a finales del siglo XIII se incorpora el señorío de Molina (M. GAIBROIS: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, - vol. I, p. 156). En el siglo XIV será la Tierra de Alava (J. LAN-DAZURI: Historia General de Alava, vol. II, pgs. 113 y ss. y G. MARTINEZ DIEZ: Alava Medieval, vol. II, p. 79) y Vizcaya en 1379 (Crónica de Juan I, cap. 2, pág. 127 y G. MONREAL CIA: Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya, pgs 49-50). Se culmina este proceso con la incorporación a la Corona de los Maestrazgos de las Ordenes Militares ya en el reinado de los Reyes Católicos (L. SUAREZ FERNANDEZ: La España de los Reyes Católicos en Historia de España dirigida por R. MENENDEZ PIDAL, t. XVII, vol. II, pgs. 141-2). Igualmente en 1476 se incorpora el señorío de las Canarias (TORRES CAMPOS: Carácter de la conquista y colonización de las islas Canarias, - discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, 1901).

(101) Son numerosas las peticiones de Cortes en las que se insiste en la inalienabilidad del Reino y de los derechos del Rey: "... nin sse pueda menguar nin enagenar ninguna cosa delos rreg-nos nin delos derechos del Rey" (Cortes de Palencia 1313, CLC, I, 9, pág. 236). También en las primeras Cortes de la mayoría de edad de Alfonso XI se le pide "quelas mis çibdades e villas e los mios castiellos e ffortalezas e aldeas e las mis heredades, quelas non dè e inffançon nin a otro ninguno nin las enegene en otro sennorio ninguno" (Cortes de Valladolid 1325, CLC. I, 10, p. 376). En 1371 los procuradores le recuerdan a Enrique II el anterior precepto de las cortes de Valladolid, a lo que el rey contesta "quelas villas e lugares que fasta aquí auemos dado a algunas personas, que gelas dimos por seruiçios que nos fe-zieron; mas que de aquí adelante nos guardaremos quanto po-diermos delas non dar, et si algunas dieremos, quelas daremos en manera que sea nuestro sseruiçio e pro delos nuestros rreg-nos" (Cortes de Toro 1371, CLC. II, 1, p. 394). De hecho, En-rique II incumplió constantemente esta petición. En el reinado de Juan II se suceden igualmente las quejas y se le pide al rey que no de más mercedes pues "podría acaesçer a aun acaesçió

general del Reino a los señorios y, sobre todo, limitando la jurisdicción señorial al reservarse el rey la mayoría de justicia e implantar de una manera progresiva el ejercicio de la justicia real en menoscabo de la señorial. (102)

---

(101) /...de fecho, que esto tornase e tornava en un grado dapno de mis pueblos" (Cortes de Valladolid 1420, CLC. III, 6, p. 35); "que me plugiese de non dar las mis çibdades e villas, nin los lugares e tierras dellos e de su juredición a personas algunas de qualquier preminencia e dignidad que sean" (Cortes de Burgos 1430, CLC. III, 16, p. 86). En Valladolid se compromete a no enajenar más realengo (Cortes de Valladolid 1442, CLC. III, 1 p. 394) ya que "vuestra fazienda está mucho perdida e destroyda por las grandes e inmensas merçedes que vuestro sennorio ha fecho después que rregno aca" (Cortes de Valladolid 1442 CLC. III, 2, p. 401), aunque siguió incumpliendo a tenor de la petición de las Cortes de Burgos de 1453 de "que non faga donación nin gracia alguna de aquellos que toca a la substancia de nuestra corona e patrimonio" (CLC. III, 26, p. 670). Durante el reinado de Enrique IV se reiteran las quejas en Cordoba 1455 (CLC. III, 5, p. 679), Salamanca 1465 (CLC. III, 18, p. 758) y en Ocaña le suplican al rey "que aya dolor e compasión de vuestra rreal corona e vuestro perdimiento e pobreza, e guardando el juramento que vuestra alteza tiene fecho e lo que quieren las leyes de vuestros rreynos, rreuoque todas las dichas merçedes e donaciones... desde 1464... "por ser contra las leyes de vuestros rreynos e en disminucion de vuestro patrimonio e corona rreal" (Cortes de Ocaña 1469, CLC. III, 4, p. 777). Finalmente, en las Cortes de Madrigal de 1476, después de recordarle a los Reyes Católicos el "pacto e contrato" que Juan II hiciera en las Cortes de 1442, piden que no se consientan las dichas alienaciones y mercedes (CLC. IV, 8, pgs. 59-67). También en su testamento la Reina Isabel hace varias alusiones a este principio: "Por ende, porque la Corona real no quede agraviada ni así mesmo la ciudad de Segovia, a quien el Rey mi Señor e yo avemos jurado solemnemente que nunca dariamos ni enajenariamos lugar alguno de la tierra... e todas las otras cosas (que andan) con el señorío real e no se pueden ni deven apartar del... porque lo suso dicho (la suprema jurisdicción) es inabdicable e ynprescriptible, e no se puede alienar ni apartar de la corona real..." (ALONSO DE SANTA CRUZ: *Crónica de los Reyes Católicos*, ed. MATA CARRIAZO, t. I, pgs. 318-323). Sobre la construcción doctrinal de la inalienabilidad de la corona véase GARCIA PELAYO: *La Corona...* pgs. 40 y ss.

El conducto de que se sirvieron los reyes, junto al asentimiento patronacional que empieza a desarrollarse en los reinos hispánicos<sup>(103)</sup>, para llevar a cabo esta política fue el Derecho Romano, instrumento valiosísimo para la formación y consolidación de unidades políticas fuertes. Se trataba de un sistema jurídico dotado de un gran prestigio científico y, lo que era más importante, ponía en manos de los reyes toda una serie de técnicas y atribuciones - destinadas a robustecer el poder real. La aceptación de este nuevo Derecho<sup>(104)</sup> alteró de modo ostensible la posición del rey con res-

---

/...

- (102) Como ya ha destacado J. L. BERMEJO CABRERO en su trabajo Mayoría de justicia del Rey y jurisdicciones señoriales en la Baja Edad Media castellana, en Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas, II, Santiago de Compostela 1975, pgs. 209-215.
- (103) La idea del amor patrial ya fue estudiada por H. E. KANTO ROWICZ: The King's... pgs. 193 y ss; entre nosotros Vid. MÁ RAVALL: Estado Moderno... pgs. 457 y ss.
- (104) Esta aceptación no fue siempre de un modo pacífico, sino que se producen una serie de tensiones entre el viejo y el nuevo Derecho fundamentalmente por la objetividad que representa el Derecho Romano en contra del carácter eminentemente subjetivo del viejo Derecho (Vid. GARCIA PELAYO: La idea medieval del Derecho..., pgs 129-138). La nobleza, poseedora en gran parte de este Derecho subjetivo, reacciona contra la implantación de medidas concretas inspiradas en Derecho romanizado del Espéculo (Vid. Crónica de Alfonso X, caps. 20, 23 y 24, y GARCIA-GALLO: (Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, en Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, en A. H. D. E. núm. 46, 1976, pgs 626-7)). En el siglo XIV encontramos también manifestaciones de esta tensión. Así, los procuradores de las Cortes de Burgos de 1379 se quejan que "algunos omes de nuestros - sennorios ganan cartas para desatar los ordenamientos que nos (el rey) fezimos en las cortes e ayuntamientos..." (CLC. II, 37, p. 299). En sentido similar se expresan en las Cortes de Briviesca en 1387 (CLC. II, 9, pgs. 371-2)

pecto a sus funciones<sup>(105)</sup> y a sus límites objetivos y subjetivos,<sup>(106)</sup> pero el mayor logro conseguido por la realiza en este proceso de "imperialización"<sup>(107)</sup> es, sin duda, su transformación en rey-legislador impulsado por las Cortes, sin perder por ello su primitiva condición de rey-juez.

El principio, la equiparación jurídico-política entre el rey y el emperador hacia, que en el plano legislativo, el primero en virtud de la "lex imperii" asumiera la facultad exclusiva de legislar. Pero como ya vimos<sup>(108)</sup>, la polémica suscitada por los glosadores y comentaristas de esta ley no acababa de dar una solución definitiva a la controversia, principalmente porque de un lado, un grupo de ellos intentaban atribuir al emperador, o al rey, el monopolio

---

(105) La proyección del poder real se realizó en todos los sentidos y en una gran variedad de facetas cuya descripción saldría del ámbito de este trabajo, por eso, aparte de la jurisdiccional que es la que nos ocupa, podemos señalar, por la influencia decisiva que tiene sobre aquella, la función legislativa que, ahora, se le atribuye al rey. De ésta nos ocupamos a continuación. Para los otros aspectos, militar, hacendísticos, etc. véase las obras citadas en nota 1.

(106) Ya hemos hecho referencia al progresivo proceso de secularización con el que se consigue una mayor independencia del poder temporal con respecto al espiritual. En el campo del Derecho se le ofrece ahora al rey, a petición de las Cortes, la posibilidad de alterar el ordenamiento jurídico mediante la promulgación de normas de carácter general. Desde el punto de vista político paulatinamente las limitaciones que procedían en un primer momento de la Curia y, posteriormente, de las Cortes, va siendo eliminadas ante el empuje del poder real.

(107) Así denomina MARONGIU a este proceso consistente en la negativa de reconocer superior y en la apropiación del título de majestad (Cif. MARAVALL: Estado Moderno... pág. 257).

(108) Sobre la "lex imperii" y la postura que respecto a ella toman algunos juristas véase la nota 60.

de la creación normativa, mientras que otro grupo, posiblemente más atentos a la realidad política de su tiempo, querían ver en la costumbre un residuo de la "potestas leges condendi" de la que el pueblo romano no se había desprendido en su totalidad<sup>(109)</sup>. Esta última concepción expresada en la fórmula jurídica "quod omnes tangit ab omnibus debet probari"<sup>(110)</sup> predomina en Castilla --

---

(109) Todos aceptaban el principio de que el emperador tenía el poder de legislar y que esta autoridad procedía del pueblo romano, pero el aceptar una u otra postura condicionaba de modo definitivo la posición del emperador o rey con respecto a la comunidad; aquí radicaba la importancia del tema. Así, ODOFREDO, siguiendo la tradición de AZO y HUGOLINO, reconocía que "hodie solus princeps potest legem condere... unde non debet consuetudo populi posse leges imperatori tollere...", pero, en un alarde de agudeza que le caracterizaba, a continuación añadía: "Sed signori, hanc solutionem non approbamus, quia sicut olim, populus poterat condere legem sic et hodie potest, unque debet posse consuetudo populi legem tollere, nec obstat quod dicitur quod solus princeps sive imperator potest legem condere, quia illa dictio "solus" excludit singularem personam, non populum, nam populus bene potest hodie legem condere, sicut olim poterat (Comentario, l. 3, 32, ed. Lugdini 1551)... JUAN DE VITERBO, en cambio, sostenía que "Deus subiecit leges imperatori et legem animatam summisit hominibus. Deus sancienti potestatem, Imperatoribus donavit. Deus principatum ingentibus dedit Imperatoribus..." (De Regimine Civitatum, 128 en BIMAÉ, vol. III, p. 266). EGIDIO, por su parte, después de reconocer que la finalidad de la ley está en el bien común ("Nulla est ergo lex quae non sit edita ab eo cuius est dirigere in bonum commune...") da un paso más hacia el absolutismo regio al afirmar que "Quare positiva lex est infra principatum sicut lex naturalis est supra, et si dicatur legem aliquam positivam esse supra principatum, hoc non est ut positiva sed ut in ea reservatur virtus juris naturalis." (De Regimine Principum, 3, 2, 29).

(110) No deben pensarse en un principio democrático tal como lo concebimos actualmente, sino que, como precisa GARCIA PELAYO, la fórmula "quod omnes tangit", no introduce un principio nuevo en el campo político, lo único que hace es legitimar

durante los siglos XIII, XIV y primera mitad del XV, en contra de aquella otra fórmula romana "quod principi placuit legis habet vigorem" en la que se atiende más a la "voluntas principis" y en la que los juristas ven el fundamento y pleno poder del rey.

En el plano de los hechos vemos como Alfonso X, tras equipararse con el emperador, expone en el *Espèculo*<sup>(111)</sup> aquellas razones

(110) /...basándose en el carácter arquetípico del Derecho Romano un principio ya vigente en el período anterior que tiene su origen en el sistema de lealtades vasalláticas y en la concepción del Derecho como patrimonio de la comunidad. Además, desde el punto de vista jurídico-político, "omnes" no significa simplemente todos, sino todos los estamentos o grupos positivamente privilegiados. Consecuentemente -añade GARCÍA PELAYO- "la fórmula puede ser tanto democrática como oligárquica, y en la Baja Edad Media era más lo segundo que lo primero..." (*La idea medieval...* pgs. 123-4, nota 69) Sobre esta fórmula puede verse además: P. S. LEICHT: *Un principio político medieval en Scritti vari di Storia del Diritto italiano*, Milan 1943, vol. I, pgs. 129 y ss.; A. MARONGIU: *L'istituto parlamentario in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1959, pgs. 55 y ss.; En España se ha ocupado de ella MARAVALL: *La corriente democrática medieval en España y la fórmula "quod omnes tangit"* recogido dentro del volumen *Estudios de Historia...* pag. 159 y ss., ya citado, en donde recoge la bibliografía sobre el tema.

(111) *Espèculo*, I, 1, 13: "Por fazer entender a los omes desendudos que nos el sobre dicho rey Don Alfonso, avemos poder de fazer estas leyes, tambien como los otros que las fezieron ante de nos, oy más, queremos por todas estas maneras, por razon, e por fazaña e por derecho. E por razón, que si los emperadores et los reyes, que los imperios et los regnos ovieren, por eleccion, pudieron fazer leys en aquello que tovieron, como en comienda, quanto más nos que avemos el regno por derecho de heredamiento. Por fazaña que non tan solamiente los reyes de España que fueron antiguamente las fezieron, mas condes e jueces, et adelantados que eran de menor guisa, et fueron guardadas fasta en este tienpo. E pues que estos las fezieron que avien mayores sobre si, mucho mas las podenos nos fazer que por la merced de Dios non avemos mayor sobre nos en el tenporal. Por derecho, ca lo podemos probar por las leyes



por las que èl se consideraba investido de la potestad legislativa. Esta también es atribuida al rey en otros textos legales como el Fuero Real<sup>(112)</sup>, y por los juristas que elaboraron las Partidas,<sup>(113)</sup> hasta el punto que la figura del Rey se llega a identificar con la propia ley<sup>(114)</sup>. Pero lo cierto es que tanto el Espèculo, como el Fuero Real<sup>(115)</sup> así como las "Leyes"<sup>(116)</sup>, no aparecen como - -

- 
- (111) /...romanas, e por derecho de santa egleſia, et por las leys d'Eſpaña que fezieron los Godos, en que dize en cada una destas que los emperadores et los reyes an poder de fazer leyes, et de anader en ellas, et de minguar en ellas et de camiar cada que mester ſea. Onde por todas estas razones avemos poder complidamente de facer leyes".
- (112) Fuero Real, 1, 6, 3: "Esta es la razòn que nos moviò para facer leyes..." y 1, 7, 1: "...e ſi pleyto acaesciere, que por eſtè libro no ſe pueda determinar, embienlo a decír al Rey, que les de ſobre aquello ley, porque juzguen; e la ley que el Rey les diere, metarla en eſte libro".
- (113) Partidas, 1,1,12: "Emperador o rey puede facer leyes sobre las gentes de ſu ſeñorio, e otro ninguno no ha poder de las - facer en lo temporal, fueras ende, ſi lo ficieſen con otorgamiento dellos..."
- (114) Libro de los cien capítulos: "El rey faze la ley, el rey mantiene la ley" (p. 3); "Ley y rey ſon dos cosas que han hermandad en uno" (p. 4). En otra ocaſiòn ſe denomina al rey como "ſeñor de la ley" (p. 4).
- (115) Eſpèculo: Intr.: "... por que ſi acaesciere dubda ſobre los entendimientos de las leyes e ſe alzasen a nos que ſe libre la dubda en nueſtra corte por eſte libro que fezimos con conſeio e con acuerdo de los arzobispos e de los obispos de Dios e de los ricos omes ede los mas onrados ſabidores de dèrecho que pidiemos aver e fallar, e otrosi de otros que avie en nueſtra corte e en nueſtro regno". Fuero Real, Intr.: "Hóvimos conſeio con nueſtra Corte, e con los ſabidores del Derecho, è dimosle eſte Fuero..."

expresión unilateral de la "voluntas principis", sino que, tanto en los primeros como en las segundas, la potestad legislativa del Rey esta provocada o confirmada por la intervención del Reino. Vemos, pues, que el elemento esencial de la potestad legislativa radica, - precisamente, en esa coparticipación del rey y el Reino en la elaboración de las leyes característica de la constitución estamental. Estas disposiciones se caracterizan, no obstante, también porque queda reservada exclusivamente al rey la facultad de sancionarlas y promulgarlas en las mismas Cortes<sup>(117)</sup>, con lo que, en último caso, el rey mantenía una posición de supremacía con respecto al Reino. Se trataba de una supremacía de hecho y no de Derecho, - puesto que desde el primer momento el propio Alfonso X había reconocido al sometimiento del rey a las leyes<sup>(118)</sup> y estas sólo -

(116) /... En sentido similar se expresan los primeros ordenamientos de Cortes. Por ejemplo las Cortes de Valladolid de 1258: "Sepades que yo ove mio acuerdo e mio conseio con mios hermanos, los Arçobispos e con los Obispos e con los rricos omnes de Castiella, e de Extremadura e de tierra de León que fueron conmigo en Valladolid, sobre muchas cosas sobeianas que se fazien que eran a danno de nos e de toda mi tierra, e acordaron delo toller e de poner cosas sennaladas e ciertas porque biuades. Et lo que ellos pusieron otorguè yo delo tener e delo fazer tener e guardar por todos mios regnos" (CLC. I, p. 54-4) Pueden verse igualmente: Cortes de Valladolid 1295 y 1299, Cortes de Burgos de 1301, Cortes de Palencia de 1313, Cortes de Burgos de 1315... (CLC. I., pgs. 131, 140, 145, 222, 248.

(117) Sobre las características y distintos tipos de normas, véase el trabajo de A. GARCIA-GALLO: La ley como fuente del Derecho en las Indias en el siglo XVI, en A. H. D. E. 21-22 - (1951-52), principalmente pgs. 620 y ss.

(118) Espèculo, 1, 1, 9: "Todos los omes deven seer tenidos de obedecer las leyes, et mayormente los reyes por estas razones. La primera porque son por las leyes honrados et guardados. La segunda porque los ayudan a complir justicia et derecho, lo que ellos son tenudos de fazer. La tercera porque ellos fazen, que ellas las obedescan primeramente". En sen

podían ser derogadas por otras leyes promulgadas en Cortes<sup>(119)</sup>. El poder legislativo del Rey distaba mucho de aquel poder que la "lex imperii" había otorgado al emperador, pues, como acabamos de ver, se encontraba seriamente limitado en su libre ejercicio por las restantes fuerzas del Reino. El problema radicaba en discernir si el emperador o rey se encontraba realmente sometido a la ley y, en caso de que se afirmara lo contrario, adecuar esta idea a la realidad del Derecho vigente.

En realidad la problemática se suscitaba porque faltaba una visión general de las relaciones entre el rey y el derecho positivo. En esto radicaba la clave de la cuestión pues solo muy tardíamente se construye como "potestas" la facultad de dar leyes. En la Alta Edad Media no fue necesario fijar los términos de la relación dadas el "trascendentalismo jurídico" de este período que hacía inquestionable una oposición de ambos términos. La nueva situación se plantea por la dinamicidad y la correlativa mutualidad de las leyes, así como por la creación de leyes nuevas que no tienen el prestigio ni la inmutabilidad de las antiguas. ¿Qué sucede entonces?

---

(118) /... tido parecido se expresan las Partidas, I, I, 16: Guardar debe el rey las leyes como a su fechora et a su honra. y el Libro de los cien capítulos: "Deue el rey judgar segund ley derecha e non segund su antojança nin segund su voluntad". (p. 9).

(119) Véanse las quejas de los procuradores de las Cortes de Burgos de 1379 contra las cartas "para desatar los Ordenamientos que nos fezimos en las Cortes e Ayuntamientos..." (CLC. II, 37, p. 299) así como las de las Cortes de Bríbiesca (CLC. II, 9, pgs. 371-2). En las Cortes de Córdoba de 1455 se pide que las leyes y ordenamientos se cumplan, salvo si "fueron revocados por Cortes" (CLC. III, 21, p. 694).

Fundamentalmente han sucedido varias cosas. Por un lado hay una tendencia hacia la fijación de las leyes del Reino que no pueden ser alteradas por el Rey porque presuponen y anteceden el poder real. Estas serían, por ejemplo, las leyes que encomiendan al Rey la defensa de la religión, las que establecen la indivisibilidad e inalienabilidad del poder del rey y del reino, las que consagran los principios de representación estamental de las Cortes y fijan las atribuciones básicas de éstas (dar ordenamientos, dar el servicio, etc.) Por otro lado, el reconocimiento en el Derecho Real de una "potestas condendi leges", que pronto se va a tratar de limitar en las Pragmáticas. Al mismo tiempo se ha producido por parte de las Cortes la negativa de reconocer una "potestas tollendi leges" o potestad de dispensar el derecho<sup>(120)</sup> y finalmente, por el desconocimiento puro y simple de las leyes por parte del rey.

Toda esta problemática parte de los civilistas del siglo XIV quienes, preocupados más en la formación de un sistema orgánico<sup>(121)</sup> y armónico, abstraen de las normas particulares los conceptos y principios generales con la intención de que estas construcciones científicas pudieran ser aplicadas al Derecho de su tiempo.

Ya vimos como CINO DE PISTOIA<sup>(122)</sup> distinguía dogmáticamente

(120) Véase nota 118.

(121) Sobre la renovación metodológica de los comentaristas y su aplicación a los textos jurídicos del método aristotélico vid. F. CALASSO: Medio Evo del Diritto, pgs. 563 y ss.

(122) Vid. nota 60.

entre el "Imperium", procedente de Dios, y la "autoritas" del principio que procedía del pueblo<sup>(123)</sup>. CINO se plantea la cuestión de si el emperador ha de observar o no la ley, es decir, si realmente se encuentra por encima de la ley, no se limita a decir - EGIDIO<sup>(124)</sup> que el "princeps" está por encima de la ley positiva, sino que piensa que el emperador está obligado a observar la ley "de honestate"<sup>(125)</sup>. Al no obligar necesariamente la ley al Príncipe, CINO, con esta concepción, dejaba la puerta abierta al absolutismo real, si bien reconoce que el emperador debe cumplir - aquellos pactos que haya establecido con alguna ciudad o particular

---

(123) Ex lege ista quod iura reputant imperatorem Deum seu personam divinam, et hoc merito; quia imperium est a Deo... et ab ipso Deo immediate processit, unde inter Imperatorem et Deum non est ponere medium, ut in authent. constit. quae de dignitate: illud. Nec obstat quod dicitur ut supra l. i. quod lege regia dicitur Princeps creatus; quia hoc est permissione divina; sicut diximus, non est malum in civitate quod non fecerit Dominus; nec est absurdum, quod sic a populo est a Deo, tamquam ab agente universali, sicut aliter dicitur, homo hominem generat; et solu Vel melius dico, quod imperator a populo est, sed imperium cuius praesidatur imperator dicitur divinum, a Deo" (Commentario super aureo... Rub. IV, fol. 8)

(124) Ver texto nota 108.

(125) "... dico ergo, quod imprator est solutus legibus, de necessitate: tamen de honestate ipse vult ligari legibus, quia honor reputatur vinculum sacri iuris..." (Commentaria super aureo... Rub. 14, fol. 25 v.) Ya el planteamiento concreto se remontaba a SANTO TOMAS quien afirmaba que el Príncipe era "legibus solutus" con respecto a la "vis conetiva", ya que solo él puede dar la ley positiva, pero está vinculado a la vía directiva del derecho natural (Cfr. GARCIA PELAYO: La idea del derecho... p. 121, nota 55).

-"barone" <sup>(126)</sup> y que también está sujeto a aquellos límites que comporta la propiedad privada <sup>(127)</sup>. BARTOLO, coincidiendo en algunos aspectos con la opinión de CINO, da un paso más al afirmar que el "princeps" es "legibus solutus" aunque es digno y equitativo que viva de acuerdo a las leyes <sup>(128)</sup>, pero es BALDO quien reconoce

---

(126) CINO se plantea una cuestión que ya había formulado GUIDO DE SUZA "si imperator in ea aliqua pacta cum aliqua civitate vel barone, teneatur ea observare, tam ipse quam eius successor? En contra de lo que pudiera parecer, CINO opina que sí: nam grave est fidem fallere... et naturalia iura suadent pacta servari, et fides etiam, hostibus est servanda...", además porque "ad hoc facit haec lex: quia honestas ligat etiam principem" y, finalmente añade CINO, porque "contractus principis est lex (Commentaria super aureo... Rub. 14, fol. 26 r).

(127) "De facto" el Príncipe no está limitado por la propiedad privada "Sed utrum possit de iure et de potestate sibi per iura concessa, in veritate non potest..." (Commentaria super aureo... Rub. 19, fol. 36 v). Es bien conocida la tesis de M. Weber de que el único límite del poder real es el derecho privado lo que demuestra NICOLINI en La proprietà, il Principe e l'espropriazione per pubblica utilità, Milán 1952.

(128) "Sol. fateor quod ipse (el principe) est legibus solutus, tamen aequum et dignum est quod legibus vivat; ita loquitur hic; unde ipse submittit se legibus de voluntate, non de necessitate. Ita debes intelligere hanc legem. Quaero, quid si imperator facit pactum cum aliqua civitate, utrum teneatur illud pactum servare. Videtur quod non quia est solutus a legibus.. Contrarium est veritas. Nam pacta sunt de jure gentium... Iura gentium sunt immutabilia.. (Comentarios al Código I, 14, 4).

la "plenitud o potestatis"<sup>(129)</sup>. En el siglo XV las opiniones de estos grandes maestros se generalizan y son recogidas prácticamente por la totalidad de los juristas que reelaboran e interpretan las obras de sus predecesores. Así, JASON aporta la interpretación de la fórmula "ex certa scientia"<sup>(130)</sup> y acepta la posibilidad de

---

(129) "Nec obstat quod imperator habeat plenitudinem potestatis, quia verum est quod Deus subiecit ei leges, sed non subiecit ei contractus ex quibus obligatus est..." (Super feudis, Rub. "Natura Feudi", fol. 18 r), ed, Lugdum 1542.

(130) "Et dicit Baldus in Prelud. Feud. in XIII col: Quod in principe est plenitudo potestatis et postquam aliquid vult ex certa scientia nemo potest ei dicere, cur facis ista... Alibi dicit Baldus, quod Papa et Princeps ex certa scientia super ius et contra ius et extra ius omnia possunt". Comentaria in priman Digesti Veteris partem, ed. Augustas Taurinomm 1573. l, 4, l, Tub. Quod Principi. fol. 24 r) En otro comentario al Código añade "... confirmo quia quum princeps aliquid facit ex certa scientia, tollit omne obstaculum juris, secundum Bartulum..." (Comentaria in priman l, 19, l, fol. 40-5). A la vista de estos textos, no coincidimos con la interpretación que el prof. L. SANCHEZ AGESTA hace de esta cláusula en su trabajo "El Poderio real absoluto" en el testamento de 1554, en el vol. Carlos V Granada 1958, pgs. 439-60, en especial p. 442. Para este Profesor la cláusula "motu proprio y ciencia cierta" son -y añadido textualmente- "rubricas que los secretarios y notarios hacen para indicar la libertad y conciencia plena con que la decisión regia se produce... incluso en el supuesto de defectos de forma o privilegios jurídicos opuestos, -del que el rey tiene "ciencia" para hacer esta nueva disposición". Para ello, se basa en la ley 3 del tit. XI. lib. II del Ordenamiento de Montalvo - Efectivamente, esa Ley, procedente de las Cortes de Valladolid de 1442, hace referencia a "nuestro propio motu" interpretándose como la libertad de un acto volitivo del monarca no sujeto a petición alguna; pero dicha ley no hace referencia a la cláusula "ciencia cierta". Para estas cláusulas de origen canónico véase U, NICOLINI. La proprietà, el Principe l'espropiazione per publica utilità. Milán 1952, pgs. 173 y ss.

utilizar por parte del Príncipe la cláusula "non obstante"<sup>(131)</sup>. De esta forma quedaban echados los cimientos del poder absoluto.

Nos apartaría mucho del objeto de este trabajo analizar minuciosamente este complejo proceso histórico que arranca precisamente de la Baja Edad Media y que culmina con la concepción del poder<sup>(132)</sup> soberano característico del Estado Moderno. En este concepto de "soberanía" confluyen todos los aspectos que hasta ahora hemos venido señalando: la concepción divina del poder real y su carácter ministerial, la influencia decisiva del renacimiento y revalorización de los estudios del Derecho Romano como factor primordial para la potenciación del poder real con respecto a los

---

(131) Alegando las opiniones de BALDO y PAULO DE CASTRO que dicen "quia ex defectu voluntatis, quia non presumitur principem aliquid velle, quod sit contra ius; et si aliquid concessit presumitur per importunitatem concessisse et ideo si princeps vellet, posset rescribere contra ius, adiecta clausula non obstante" (Comentaria in priman... l. 191, 7, fol. 43 v) vid. también en NICOLINI: La proprietà... pgs. 161 y ss. la doctrina de los "escriptos contrarius".

(132) Sobre este proceso véanse los trabajos de ERCOLE y WODLF citados en la nota 63. También es imprescindible el trabajo de CALASSO: I glosatori e la teoria de la sovranità y en menor medida el de M. GALIZIA: La teoria della sovranità del Medioevo alla Rivoluzione Francese, también citado ya. Para España véase MARAVALL: Teoría española del estado en el siglo XVII, Madrid 1944; L. SANCHEZ AGESTA: El "poderio real absoluto..." ya citado y El concepto del Estado en el pensamiento español del siglo XVI, Madrid, 1959; Más recientemente MARAVALL rebate las posturas defendidas por SANCHEZ-AGESTA y dedica un extenso capítulo al poder del Estado y la formación del concepto de soberanía en su trabajo Estado Moderno y mentalidad social, Madrid 1972, pgs. 249-310, en especial pgs. 281-2.



restantes poderes temporales y, finalmente, como consecuencia de lo anterior, la intensa labor llevada a cabo por los juristas medievales que pondrán al servicio de los príncipes los medios necesarios para adecuar a la realidad política medieval todos los principios que les proporcionaba un ordenamiento jurídico tan perfecto como centralizador. Pero sin duda alguna, todas estas aportaciones teóricas no hubieran podido trascender al plano - de los hechos en la configuración del Estado Moderno si al mismo tiempo los reyes no hubieran tenido a su alcance un medio eficiente e indiscutible a la vez, a través del cual se pudieran canalizar y hacer factibles todas sus aspiraciones de supremacía, este medio, privativo e inalienable del poder real es: la justicia.

En las páginas siguientes nos detendremos a examinar las características y el contenido del poder jurisdiccional del rey.

B. LA FUNCION JURISDICCIONAL DEL REY

Hasta ahora hemos venido analizando toda una serie de planteamientos generales de muy diversa procedencia que han tenido repercusión en la configuración de la institución real a lo largo de la Edad Media. Fundamentos, unos, de tipo estrictamente religiosos, otros, de tipo político y jurídico, pero que, en definitiva, han trascendido al plano de los hechos de forma decisiva dándole a la figura del Rey un nuevo valor, un nuevo sentido, que se ha puesto de manifiesto en la evolución, muy breve, expuesta en las páginas precedentes y que culmina a finales del siglo XV para el ámbito castellano-leonés que nos ocupa.

Al mismo tiempo de ir exponiendo estos planteamientos generales, hemos tratado de bajar al plano concreto de los hechos y de las fuentes castellanas para comprobar hasta qué punto muchos de estos conceptos tuvieron realmente una repercusión fáctica o si, por el contrario, quedaron reducidos a meros planteamientos teóricos o especulativos.

A partir de ahora, dados los límites del presente estudio - nos centraremos exclusivamente en las fuentes castellano-leonesas, no por ello dejamos de tener presente en todo momento la influencia de aquellas tendencias que pudieron afectar de forma decisiva en la configuración de los órganos judiciales reales, - a las que oportunamente haremos referencia.

Ya hemos visto cómo la finalidad del poder político en la Alta Edad Media configuraba el contenido del poder real de forma

que la función jurisdiccional aparecía como la más característica de las funciones encomendadas al Rey<sup>(133)</sup>. Este se encontraba en la cúspide de la jerarquía judicial y en él residía la máxima "potestas iudicandi"<sup>(134)</sup>, y, así, son numerosos los testimonios en que encontramos al Rey ejerciendo personalmente las funciones judiciales a lo largo de toda la Alta Edad Media<sup>(135)</sup>. Pero al lado de

---

(133) Véase en este mismo capítulo las páginas 14-19

(134) Además de las obras citadas en las notas y , hacen también referencia a este carácter eminentemente judicial del Rey en la Alta Edad Media, los trabajos de E. HINOJOSA: El Derecho en el poema del Cid en Obras de Eduardo de Hinojosa, Madrid 1948, t. I, pgs. 183-215; C. SANCHEZ ALBORNOZ: La Curia Regia Portuguesa, Madrid 1920, pgs 88 y ss. La potestad real y los señoríos en Asturias, León y Castilla, ahora en el volumen Estudios sobre las Instituciones medievales españolas, Madrid 1976, vol. II, pgs. 1279 y ss.; El Palatium Regis Asturleonés en C.H.E. 59-60 (1976), pgs. 38-50 y ss.; N. GUGLIELMI: La Curia Regia en León y Castilla, en C.H.E. 23-24 (1955), pgs. 150 y ss. y 28 (1958).

(135) A modo de ejemplo podemos citar: año 960 en R. ESCALONA: Historia del real Monasterio de Sahagún, Madrid 1782, apend. III, p. 404; año 995 en BARRAU-DIHIGO: Chartes royales leonaises en Revue Hispanique, 10 (1903), p. 439. Véanse también los documentos que recoge SANCHEZ-ALBORNOZ en el apéndice de su trabajo El Palatium..., antes citado, pgs. 78-104; año 1007, E. HINOJOSA: Documentos para la Historia de las Instituciones de León y Castilla, doc. 8, p. 11; año 1137 en RODRIGUEZ LAMA: Colección diplomática medieval de la Rioja, doc. 114, pgs. 1232, SANCHEZ BELDA: Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia, doc. 658, p. 287; año 1237 J. ALAMO: Colec. dipl. San Salvador de Oña, doc. 480, p. 591; año 1243 R. MENENDEZ PIDAL: Documentos lingüísticos de España, doc. 227, pg. 297.

esta justicia que podríamos llamar "pública", lo que más caracteriza a este período altomedieval es, precisamente, un predominio de la justicia "privada"<sup>(136)</sup>, que adquiere una singular relevancia durante los siglos VIII y IX (no tanto por los escasos medios de que dispone el poder real para imponer su justicia como por ese sentir común de la sociedad que entiende que ella es la única que ha de resolver sus problemas sin necesidad de la intervención del Rey) perdurando prácticamente hasta el siglo XI en el que comienza a ser sustituida por la concepción "pública" de la justicia<sup>(137)</sup>. No es que una concepción excluya a la otra, pues ambas perduran durante siglos, sino que el predominio de la una o de la otra - - corresponde a dos períodos claramente diferenciados.<sup>(138)</sup>

Podría pensarse entonces que ese carácter eminentemente - "privado" que predominó y caracterizó gran parte de los siglos altomedievales pudo haber desvirtuado en alguna medida esta función esencialmente judicial del Rey que hasta ahora le hemos venido atribuyendo; nada más lejos de la realidad. La justicia siempre se impartía en nombre del Rey, ya fuera por medio de la Curia

(136) Así lo pone de relieve el profesor GARCIA-GALLO: Curso de Historia del Derecho español, Madrid 1949, pgs. 204 y ss. y el profesor L.G. DE VALDEAVELLANO: Historia de las Instituciones... p.556.

(137) Como señala acertadamente el prof. GARCIA-GALLO, la política de los príncipes siempre tendió hacia una justicia pública. Esta se va a caracterizar por una organización administrativa y judicial estable a la que le son otorgadas unas competencias delimitadas, aunque sean frecuentes los conflictos, y para el ejercicio de estas se irán sustituyendo los primitivos jueces populares por unos jueces técnicos más capacitados. Vid. GARCIA-GALLO: Curso... pgs. 206 y 304 y su trabajo Jueces populares y jueces técnicos en la Historia del derecho español en el volumen La Justicia municipal en sus aspectos histórico y científico, Madrid, 1946, pgs. 53-71.

(138) GARCIA-GALLO: Curso... pgs 204 y ss. y L.G. DE VALDEAVELLANO: Historia Instituciones... pgs. 555-6.

de la Asamblea popular o por medio de algún otro agente real.<sup>(139)</sup>

Otra de las características de la administración de justicia durante los siglos medievales, y que conviene tener siempre presente, es la diversidad de jurisdicciones.

La función jurisdiccional podía transmitirse -y de hecho se transmitía con relativa frecuencia- tanto a señores laicos como eclesiásticos, e incluso, llegó a otorgarse a ciudades, con lo que nos encontramos al lado de la jurisdicción real todo un elenco de jurisdicciones señoriales que, junto a otras jurisdicciones especiales -eclesiástica, mercantil, etc. - conforman una auténtica trama en la que frecuentemente unas y otras entran en conflicto.<sup>(140)</sup>

---

(139) L.G. VALDEAVELLANO: Historia Instituciones... pgs. 556-7.

(140) Un problema de índole política pero de gran trascendencia jurídica es el relativo a las concesiones de jurisdicción. Estas van a ocasionar a lo largo de la Edad Media roces y conflictos continuos. No hay más que ojear las actas de Cortes para ver las continuas quejas. Otro punto de roce son las jurisdicciones especiales en cuanto que van en detrimento de la jurisdicción ordinaria. Tal es el caso de la Mesta (Véase J. KLEIN: La Mesta, Madrid, 1979) en las Cortes de Valladolid de 1293 (CLC. I, 7, p. 122), Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 40, p. 244) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 33, p. 286), Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 63, p. 357), Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 32, pgs. 473-5); Cortes de Soria 1390 (CLC. II, 22, pgs. 309-10)... etc., o de las otras jurisdicciones privativas como la de los alcaldes de la sacas (Cortes de Guadalajara 1390, CLC. II, 14, p. 441), de los alcaldes de los físicos y cirujanos (O.R.C. 2, 15, 18), alcaldes de la aljamas de moros (Vid. - TORRES FONTES: El alcalde mayor de las aljamas de moros en A.H.D.E. 32 (1962), pgs. 131-82) e incluso la jurisdicción del juez de la frontera (Sobre esta curiosa institución véanse los trabajos de J.M. CARRIAZO: Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de Granada en Al-Andaluz 13, (1948), pgs. 35-96; L. SECO DE LUCENA: El juez de la frontera y los fieles del rastro en Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, 7, (1958), pgs. 137-40 y J. TORRES FONTES: El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia en Hispania 78 (1960).

Ante la amplitud que supondría el estudio de cada una de éstas jurisdicciones así como las relaciones y coordinación entre ellas, forzosamente ha sido necesario limitar el objeto de este trabajo a una de ellas, concretamente la real, y aún dentro de ésta, circunscribirnos exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, dejando a un lado, aunque siempre teniéndolas presente, la jurisdicción extraordinaria o delegada y la arbitral, hasta ahora también poco estudiadas entre nosotros.

Antes de entrar a examinar el contenido de la función jurisdiccional del rey es necesario hacer varias precisiones.

Durante la Baja Edad Media, como bien ha señalado el prof. GARCIA-GALLO, la actuación del poder público es concebida en su totalidad como función de justicia<sup>(141)</sup> y, por tanto, no se puede establecer una clara distinción entre lo que hoy entendemos por poder judicial y por poder gubernativo. Postura contraria ha mantenido el prof. GALLEGO ANABITARTE quien ve desde estos siglos bajomedievales una clara distinción entre justicia y gobierno, entre lo contencioso y lo puramente gubernativo. Esta afirmación supone, de un lado, en base a esta distinción de funciones y poderes

---

(141) Alcaldes Mayores y corregidores en Indias en su volumen - Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid 1972, p. 702. Sobre la función de justicia en general puede verse también A. FERRARI: La secularización... ya citado y A. GARCIA-GALLO: La división de las competencias administrativas en España en la Edad Moderna en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Alcalá de Henares 1969, pgs. 289 y ss.

el reconocimiento del control judicial sobre todos los oficiales de la administración incluido el rey, y, de otro lado, el llegar a negar la existencia del Estado absoluto.<sup>(142)</sup>

Esta postura defendida por el prof. GALLEGO ANABITARTE ha sido seriamente discutida no sólo por investigadores procedentes del campo del Derecho Administrativo como el prof. GARCIA DE ENTERRIA<sup>(143)</sup>, sino también por los historiadores del Derecho como el prof. PEREZ-PRENDES<sup>(144)</sup> y más recientemente por el prof. VILLAPALOS<sup>(145)</sup>, quien dentro de la línea de GARCIA DE ENTERRIA, concluye que en último término no tiene sentido hacer una contraposición entre justicia y gobierno como categorías contrapuestas, ya que el gobierno es un aspecto de la justicia o una forma de ella<sup>(146)</sup>. El mismo prof. VILLAPALOS, en un trabajo -

---

(142) Esta es, en síntesis, la postura defendida por el prof. GALLEGO ANABITARTE en su trabajo Administración y jueces: Gubernativo y contencioso, Madrid, 1971.

(143) La formación histórica del principio de autotutela en la Administración en Moneda y Crédito, Homenaje a RUBIO SACRISTAN, vol I, pgs. 63-9 especialmente.

(144) "Facer Justicia" Notas sobre la actuación gubernativa medieval en Moneda y Crédito, 129 (1974) pgs. 17-90, en que rebate la postura de GALLEGO ANABITARTE (p. 25).

(145) Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, Madrid 1976, pgs. 30 y 119-120.

(146) Los recursos... p. 31; si bien más adelante precisa que aunque "no cabe hablar de absoluta separación de ambos aspectos de la justicia, si es claro que existieron materialmente asuntos de gobierno, y asuntos de justicia encomendados a órganos distintos, salvo en casos tardíos y aislados" (p. 119). La diferencia hay que buscarlas más bien en las vías de procedimiento que alternativamente podía optarse ante los recursos de gobierno (vía de expediente o vía de proceso).

posterior<sup>(147)</sup>, ante la dificultad de precisar entre gobierno y justicia, desecha el criterio de delimitación conceptual atendiendo a la naturaleza político-administrativa del gobierno y la procesal de la justicia, para optar por un criterio casuístico a la hora de deslindar qué materias o cuestiones son atribuidas históricamente a los distintos órganos de la Administración<sup>(148)</sup>. Tampoco el prof. GONZALEZ ALONSO, en su trabajo acerca de la gobernación<sup>(149)</sup>, pudo encontrar un criterio delimitativo entre una y otra función.

Efectivamente, una lectura minuciosa de las fuentes bajomedievales no nos permite descubrir una distinción conceptual en la que podamos basarnos para afirmar rotundamente la existencia de una distinción clara de poderes hasta finales del siglo XV, tal como la concebimos actualmente. Si cabe percibir algún tipo de distinción, ésta es poco precisa, como lo demuestra que a menudo en las mismas fuentes existe una visible confusión. - Ello se debe a que la distinción, en último caso, no hemos de buscarla en el poder, sino en la forma de actuación, sea reglada o discrecional. Es, por tanto, perfectamente factible distinguir - como hace el prof. GARCIA-GALLO, entre una justicia "gubernativa" y una justicia propiamente "judicial".<sup>(150)</sup>

(147) Los recursos en materia administrativa en Indias en los siglos XVI y XVII en A.H.D.E. 46 (1976) pgs 5-76.

(148) Los recursos en materia administrativa... p. 15.

(149) Véase su trabajo: Gobernación y gobernadores. Notas sobre la administración de Castilla en el período de formación del Estado Moderno, Madrid, 1974.

(150) Alcaldes Mayores y corregidores... p. 702.



Hecha esta aclaración en torno a la amplitud del concepto de justicia durante la Edad Media, no es necesario insistir en que tanto en el caso de la justicia "gubernativa" como en el de la "judicial" corresponde al Rey o a sus oficiales delegados el ejercicio de la misma. En el ámbito de este estudio nos vamos a ocupar de la justicia estrictamente judicial y más concretamente de los órganos encargados de la resolución de las contenciones que se suscitaban entre los miembros de la comunidad, y no propiamente de la "justicia gubernativa" o "justicia de fecho".<sup>(151)</sup>

El Rey durante la Baja Edad Media conserva el carácter - de "summus iudex" que le caracterizaba en el período anterior y así su función jurisdiccional viene reconocida en un gran número de textos legales<sup>(152)</sup> al mismo tiempo que otras fuentes docu-

---

(151) Así la denomina el prof. PEREZ-PRENDES en su trabajo "Facer justicia"... ya citado, para diferenciarla de la función estrictamente judicial o juzgadora.

(152) En este sentido: "Estas cuatro cosas son naturales al señorío del Rey, que non deve dar a ningund ome, nin las partir de si, ca pertenescen a el por razon del señorío natural: Justicia, Moneda, Fonsadera, é suos yantares" (Fuero Viejo de Castilla, 1, 1, 1.); "...E por que justicia es cosa que da a cada uno su derecho, tenemos que debe seer muy guardada, e muy renuda señaladamente de los reyes. Ca a ellos es dada mas que a otros omes, e ellos la deven mas amar e fazer... (Espéculo, 4, 1, pr.); También se recoge en varios textos de las Partidas: "... por ende nuestro Señor Dios puso otro poder temporal en la tierra, con que esto se cumpliesse, así como la justicia que quiso, que se fiziese en la tierra por mano de los Emperadores, e de los Reyes..." (Part. 2, 1, pr.) "E aun ha poder de fazer justicia, e escarmiento en todas las tierras del Imperio..." (Part. 2, 1, 2); "E los Santos dixeron, que el Rey es puesto en la tierra en lugar de Dios, para cumplir la justicia, e dar a cada uno su derecho" (Part. 2, 1, 5) Igualmente en numerosos textos de Cortes se hace alusión -

tales<sup>(153)</sup>, literarias<sup>(154)</sup>, y narrativas<sup>(155)</sup> dejan también constancia de esta actividad judicial del rey.

---

(152) /... a la función judicial del Rey: "Otrosi acuerda el Rey tomar tres dias en la semana para librar los pleitos..." (Cortes de Zamora 1274, CLC. I, 42, p. 93)"... saluo en los pleytos criminales que fueren en fecho de justicia, tenemos por bien que gelos demanden ante nos..." (Cortes de Valladolid 1293, CLC. I, 4, p. 120); También en sentido similar se expresan las Cortes de Valladolid de 1299 (CLC. I, 1, p. 140), Cortes de Zamora 1301 (CLC. I, 31, p. 159), Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 24, p. 410), el Ordenamiento de Alcalá (2, 1 y 27, 1, 2 y 3), Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, pr.), Cortes de Toro 1371 en donde se recoge la idea de las Partidas: "...la justicia es la noble et alta virtud del mundo, ca por ella se rigen et se mantienen los pueblos en paz et en concordia; et porque especialmente la guarda et el mantenimiento e la execucion della fue encomendada por Dios a los rreyes en este mundo..." (CLC. II, pr. p. 188) o como los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1447 le recuerdan a Juan II que "Es grand cargo de conciencia a vuestra sennoria, ca la principal cosa que por nuestro Señor vos es encomendada es proveer e administrar justicia de vuestros rregnos que non se puede vuestra alteza escusar en non dar a nuestro Señor Dios cuenta dello..." (CLC. III, 20, p. 521).

(153) Es el caso, por ejemplo, de Fernando III quien, ya en los últimos meses de su reinado, ante la imposibilidad de sentenciar personalmente un pleito "por estar flaco e por otras prietas que me acaescieron", pide al Concejo y Cabildo de Salamanca que estén en paz hasta que él o su hijo, el Infante Don Alfonso, salgan para la tierra y vean allí el pleito (F. MARCOS RODRIGUEZ: Catálogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (siglos XII-XV), Salamanca 1962, Doc. 246, p. 54). Muchas veces los reyes parece que sí efectivamente toman parte directa de la resolución de un pleito; es el caso de Alfonso X en 1258 (R. MENENDEZ PIDAL: Documentos lingüísticos de España, Madrid, 1919, doc. 238, p. 315) o en 1262 (Memorial Histórico Español, t. I, Doc. 90, p. 200). Otras veces, al -

.../...

La recepción de los nuevos conceptos procedentes del Derecho Romano, y la correspondiente apropiación de la condición de - -  
 "maiestas" por parte de los reyes<sup>(156)</sup>, no alteró este carácter - -

(153) /...igual que hiciera su padre, delega en su hijo el Infante Don Fernando, como en 1271 (A. CALVO; San Pedro de Es-lonza, Madrid, 1957, Doc. 192, pgs. 330-1). A partir del si-glo XIV la actuación personal y activa del rey en la adminis-tración de justicia es cada vez menor, pero ello no obsta pa-ra que se consideren como los receptores de justicia de Dios. Es el caso de Juan II, quien al dirigirse a la mujer de Alvaro de Luna insiste en que no puede "denegar espresamente la justicia que por Dios me es encomendada en la tierra..." - (Col. Dipl. Enrique IV, Doc. 37, p. )

(154) Las fuentes literarias hacen hincapié en este carácter judi-cial del rey, así el Libro del Caballero y el Escudero del - Infante D. JUAN MANUEL: "Dios puso en el mundo los Reyes et los señores para mantener las gentes en justicia et en de-recho et en paz; les acomendo la tierra para facer esto (cap. XLVIII, p. 255) u otras fuentes doctrinales como el Libro de la Nobleza y Lealtad, cap. XX, p. 198; También BELLUGA alu-de a este carácter como procedente del Derecho divino (Specu-lum Principum, Rub. II, fol. XXIV ).

(155) Los cronistas recogen frecuentemente pasajes en los que - el rey aparece juzgando personalmente: "é el Rey vino se para Toledo é falló y muchas querellas de muertes é robos é fuer-zas é furtos é otros males que facían y..." (Crónica de San-cho IV, cap. p. 82); "...asentabase tres días de la semana a oír las querellas et los pleytos que ante él venían..." (Cró-nica de Alfonso XI, cap. 38, p. 198). A Juan II vemos que le titulan "soberano juez": "... como Rey e Señor, e Soberano juez" (GARCIA DE SANTA MARIA; Crónica de Juan II, año 1421, cap. 24, p. 233) en otro pasaje de la misma crónica - insiste: "...como la justicia deba ser pedida con gran benignidad e homildad al juez o Señor que la ha de administrar, mayormente al Soberano Juez o Señor..." (cap. 25, p. 235-6) En la misma crónica hace referencia a la ejecución personal de la justicia por el rey: "... pero los que bien consideraren en qué tiempo e como esta justicia se fizo por la misma per-sona del Rey, e el buen celo con trabajo que en el hubo e - puso ..." (año 1426, cap. X, p. 434). Todas las crónicas de los - Reyes Católicos hacen referencia al celo que dedicaron a la administración de la justicia: "...Nada se hacía para corre-  
 .../...

eminentemente judicial, sino que, al contrario, se reforzó de forma ostensible. También desde el campo del Derecho Canónico

(155) /... gir los abusos, fuera de ciertas audiencias públicas en que los Reyes oían las quejas del pueblo, como lo hacía la - Reina antes de llegar D. Fernando, sentándose los sábados en el trono a escuchar las reclamaciones de las gentes..." (FERNANDEZ PALENCIA: Crónica de Enrique IV, t. III, año 1476, cap. X, p. 51; "... non dexaron (el Rey y la reina) de entender en los casos de la justicia, a la que mas que ningunos otros príncipes eran inclinados..." (Crónica Incompleta de los Reyes Católicos, XIV, p. 139); "... Como el Rey y la Reina fueron en aquella ciudad luego entendieron en la administración de la justicia, e dieron audiencias públicas, segun lo ficiéron en la ciudad de Sevilla..." (PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, 2a. parte, cap. 78, p. 332, y en el - mismo sentido, también de la misma crónica, cap. 98, p. - 356 y 3a. parte cap. 27, p. 395, cap. 66, p. 443); "... y acaes cio que estando el Rey un viernes, vigilia de la Concepción de la Virgen nuestra Señora, siete dias del lunes de Diciembre - del dicho año de 1492, en la casa del judgado, asentado en jui cio, juzgando e oyendo al pueblo, en lo qual había estado desde las ocho horas hasta las doce..." (BERNALDEZ: Crónica de los Reyes Católicos, año 1492, cap. 116, p. 655-6). SANTA CRUZ en su crónica recoge también este pasaje en el que - hace referencia a un atentado que sufrió Fernando en Barcelona: "... y fue que estando el un viernes en la sala de la casa real, asentado en una silla, oyendo como tenía por costumbre de hacer los viernes las suplicaciones de los pobres para les mandar hacer justicia..." (Crónica de los Reyes Católicos, - año 1492, cap. X, p. 72).

(156) Vid. L. SANCHEZ-AGESTA: El Concepto de Estado... pgs. 81 y ss., y 143 y ss. Véase también MARAVALL: Estado Moderno... pgs. 254-6.

(157) Este autor llega a afirmar que "iudex id est rex". Sobre este autor véase MOCHI ONORY: Fonti canonistiche... p. 130.

se insistió y reconoció este carácter judicial, como hicieran - GIOVANI DE FAENZA<sup>(157)</sup> y HUGUCIO DE PISA<sup>(158)</sup>, con lo que se reafirmaba la preminencia real como suprema jurisdicción del reino<sup>(159)</sup> al considerar al monarca como el último depositario de la "jurisdictio".<sup>(160)</sup>

Pero lo cierto es que al lado de este reconocimiento general de la suprema jurisdicción por parte del Reino se produce, al mismo tiempo, un cierto abandono del ejercicio personal de esta función por parte del rey como puede comprobarse por las reiteradas quejas y peticiones que hacen las Cortes en este sentido<sup>(161)</sup>. Este abandono<sup>(162)</sup>, en forma de delegaciones cada vez más

---

(158) MOCHI ONORY: Fonti canonistiche... pgs. 165-6.

(159) SANCHEZ-AGESTA: El Concepto de Estado... p. 86. Además, señala el citado profesor que la "majestad", como suprema jurisdicción del Rey, representa otra faceta de esa función de vértice del orden del príncipe que no reconoce superior, que no ha mayor, y es mayor en su reino como supremo juez" (p. 87). Véanse los textos citados allí.

(160) Así lo expresa BACQUET al estudiar la jurisdicción de la Edad Media (Traité des droits de justice haute, moyenne et basse en sus Oeuvres, ed. 1664, t.I. pgs. 167 y ss.)

(161) Así se expresan en Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 42, y 44 p. 93), Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 15, y 16, pgs. 176-7) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185); Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 36, p. 196); Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 28, p. 309); Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 22, p. 469); Cortes de Alcalá 1348 (CLC. I, 23, p. 600); Cortes de León 1349 (CLC. I, 21, p. 634); Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 48, p. 28); Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 1, p. 287); Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, 17 p. 329); Cortes de Briviesta 1387 (CLC. II, 5, p. 381); Cortes de Toledo 1490 (CLC. IV, 33, p. 120).

frecuentes, le viene al rey impuesto fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas viene dada por obra de su propia política tendente a concentrar en su persona la suprema instancia del gobierno del Reino con lo que propicia, como señala D. TORRES SANZ<sup>(163)</sup>, la creación de todo un aparato administrativo de gran desarrollo técnico que, unido a la progresiva complejidad de la vida social que se viene produciendo desde el siglo XIII, imponen a la monarquía la obligación de dotarse de un sistema de órganos y oficiales capaces de imponer los nuevos objetivos de la política regia. La segunda, de carácter mucho más técnico, se debe esencialmente a la complejidad que comporta en sí la aplicación del nuevo Derecho Romano que los Reyes intentan implantar; un Derecho altamente tecnificado que obligó al Rey a redondearse de todo un elenco de juristas<sup>(164)</sup> capaces de interpretar y aplicar a la realidad del Reino las nuevas categorías jurídicas.

En este sentido se produce desde el último tercio del siglo XIV, como bien ha señalado el prof. VILLPALOS<sup>(165)</sup> una evolución

---

/....

(162) Vid nota 155.

(163) Quien ha tenido la amabilidad de permitirme consultar su tesis inédita sobre La administración central castellana en la Baja Edad Media, pgs. 29-39.

(164) Sobre los juristas puede verse KANTOROWICZ: The King's Two Bodies, pgs. 101 y ss.; J.A. MARAVALL: 'Los hombres del saber' o letrados y la formación de su conciencia estamental en el volumen Estudios de Historia... pgs. 345 y ss.; M. GARCIA PELAYO: La idea medieval del Derecho en el volumen Del Mito y la Razón..., pgs. 104 y ss.; También el profesor S. MOXO ha hecho referencia a la importancia de los juristas en su trabajo El auge de la burocracia castellana en la Corte de Alfonso XI en el Homenaje a Millares Carlo, vol. II, pgs. 11-42.

(165) Los recursos ... p. 66 y ss.

tendente a considerar a los oficiales reales como "administradores rei publicae", concibiéndose el oficio de jurisdicción como un oficio contrapuesto a los restantes, de forma que aquellos asuntos que afectan a la justicia conmutativa, o de partes, van a ser tratados en los órganos judiciales que ahora se crean, y no por el rey a quien se le reserva sólo el conocimiento de causas muy concretas<sup>(166)</sup>. Ante esta situación podría ponerse en duda la preminencia de justicia que venimos atribuyendo al Rey, pero como bien ha señalado también el prof. VILLAPALOS se trata de una contradicción aparente ya que al rey le corresponde librar siempre aquellas causas que se refirieran a asuntos de justicia distributiva, no conmutativa, en las que no está sujeto a las garantías formales del

---

(166) Veremos más adelante qué casos irán quedando al conocimiento exclusivo del monarca sin ningún tipo de mediación. Ya desde mediados del siglo XIV se pide que los albalaes de justicia que tanto el Rey como la Reina libran no sean obedecidos. En este sentido véanse las Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 14, p. 195); insisten sobre lo mismo las Cortes de Briviesca de 1387 en donde se pide que "todas las cartas que fueren de justicia se enbien a la nuestra Audiencia, salvo sy fuere querella de -- agravio de alguna injusticia que fuere fecha en la nuestra -- Audiencia" (CLC. II, 4, p. 381). En 1390 se pide de nuevo que el Rey ni firme las cartas de justicia (CLC. II, 4, p. 478). En el siglo XV se continúa en esta línea de que el rey "nin su Consejo non se entremetiesen de librar fechos de justicia ceviles nin creminales mas que fuesen femitidos todos a la su Audiencia e chancelleria" (Cortes de Valladolid 1440, CLC. III, 7, p. 383); esto mismo se reitera dos años más tarde (Cortes de Valladolid 1442, III, 27, p. 429). En 1469 cualquier carta, cédula o provisión de justicia relativa al "derecho de partes" es motivo de agravio (Cortes de Ocaña 1469, CLC. III, 16, pgs. 789-99). Toda esta normativa la recogen las Ordenanzas Reales de Castilla en varias leyes (OR. C. lib. 2, tit. 4, leyes 12, 13, 17, 25 y 26).

proceso<sup>(167)</sup>. Todo esto nos revela que la jurisdicción real, lejos de la mera discrecionalidad, estaba sometida a un verdadero juego de reglas de competencia que se irán haciendo cada vez más complejas a medida que la organización judicial real tienda a hacerse privativa en todos los ámbitos -centrales, territoriales y locales- del Reino,

Hechas estas consideraciones vamos a pasar a analizar el contenido de la función jurisdiccional del Rey.

M.A. PEREZ DE LA CANAL, en el único trabajo que hasta ahora ha tratado este tema<sup>(168)</sup> en el ámbito que nos ocupa, se esforzó por esbozar y delimitar esta función jurisdiccional y consideró que el poder judicial real se manifestaba fundamentalmente en siete aspectos<sup>(169)</sup>, pero, posiblemente, la clasificación de los asuntos que corresponde librar al Rey que PEREZ DE LA CANAL propugna no es, a mi modo de ver, del todo satisfactoria.<sup>(170)</sup>

La palabra "mayoría"<sup>(171)</sup> denota fundamentalmente una idea de superioridad; en este sentido ya la vemos expresada así en el

---

(167) Los recursos... p. 68.

(168) La justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, en la revista Historia, Instituciones, Documentos, - núm. 2 (1975), pgs. 385-341.

(169) La justicia en la corte... pgs. 392-3.

(170) PEREZ DE LA CANAL parte de un concepto restringido de "mayoría de la justicia" considerándolo como uno de los aspectos en que se manifiesta el poder judicial y ve en este concepto solamente "el poder de suplir las negligencias u omisiones de los que ordinariamente la tenían a su cargo" (p. 392) y señala cinco casos en los que se produce "mengua de justicia" y por ello el rey determina su intervención (pgs. 393 y ss). El concepto de mayoría de justicia, como veremos a continuación, es mucho más amplio y equivale al poder supremo jurisdiccional del Rey.



Espéculo: "...por la merced de Dios nos avemos mayor sobre nos en lo temporal."<sup>(172)</sup> "Mayoría", según MARAVALL<sup>(173)</sup>, equivale en el pensamiento de Alfonso X, a "sobe ranía", aunque esta palabra no ha de tomarse en el sentido que posteriormente le dará BODIN, sino en el sentido que le dan a esta palabra otros textos peninsulares contemporáneos<sup>(174)</sup> al Rey Sabio que expresan la superioridad del príncipe en "potestas" y en "auctoritas"<sup>(175)</sup>. En las Partidas se hace una precisa enunciación del contenido de esta plena potestad<sup>(176)</sup>, pero que en definitiva, no hace otra cosa que reconocer la atribución al rey de la máxima "potestas judicandi". La mayoría de justicia es la preeminencia que tiene el rey con respecto a todo el Reino como único detentador de la suprema jurisdicción.

Desde luego las fuentes bajomedievales son muy poco explícitas a la hora de explicar conceptos jurídico-políticos y no encontramos una definición concreta de qué se entiende por mayoría de justicia en este período. Ver la mayoría de justicia solamente como esa posibilidad de intervenir el Rey en los territorios de señorío cuando la justicia -que había sido delegada por él- era incumplida

---

(171) /...Sobre el origen de la palabra "mayoría", su evolución y acepciones puede verse A. MARAVALL: Estado Moderno... pgs. 254-7.

(172) Espéculo 5, 14, 11: "...Mas si el emperador o el rey diesen juyzio, ninguno non se puede del alzar... porque ellos non an mayores sobre si quanto en las cosas temporales...". Véase también Espéculo 1, 1, 13 y 2, 14, 1.

(173) Del Régimen feudal... p. 115.

(174) Ya lo emplea en sentido semejante PERE ALBERT. vid. Del régimen feudal... p. 115.

(175) Del régimen feudal... p. 115.

(176) Partidas 2, 1, 2.

("mengua de justicia"), es empobrecer un concepto que, sin duda, abarca muchos más aspectos. La intervención real en los señoríos cuando hay "mengua de justicia" se hace en virtud de la mayoría de justicia del Rey efectivamente, pero el que este problema haya sido tratado en el Ordenamiento de Alcalá sólo con respecto a las jurisdicciones señoriales, no quiere decir que sea la única manifestación de dicha mayoría como suponen PEREZ DE LA CANAL y el prof. J.L. BERMEJO<sup>(177)</sup>.

Ante el silencio de las fuentes sólo nos queda acudir a los teóricos del Derecho para intentar esclarecer este concepto. BELLUGA, ya veía al Rey como "iudex ordinarius et superior"<sup>(178)</sup> del que emanaba toda la jurisdicción<sup>(179)</sup>; pero es un siglo más tarde, ya en el siglo XVI, cuando un jurista de la talla de COVARRUBIAS al tratar de la suprema jurisdicción del rey, identifica, esta

---

(177) El profesor J.L. BERMEJO también define la mayoría de justicia restringidamente como "la posibilidad que siempre le queda al rey de intervenir en los territorios señoriales cuando la justicia no es bien administrada" (Mayoría de justicia del Rey... p. 208). El propio prof. BERMEJO reconoce que el concepto político de "mayoría" que se maneja en el Ordenamiento de Alcalá no está sometido a unos "perfiles estrictos" (p. 209), luego parece tener un sentido más amplio.

(178) Speculum Principum, Rub. 14, fol. 87, v.: "Item adverte quod rex in toto regno est iudex ordinarius et superior tam rationes territorii, cum sit dominus omnium rerum de regno - saltem protectione". Sobre BELLUGA y su obra, véase el trabajo del profesor A. GARCIA-GALLO. El derecho en el "Speculum Principis" de Belluga, en AHDE. 42 (1972) pgs. 189-216.

(179) Speculum Principum, Rub. 22, fol. 108 v.: Scias ergo quod licet antiquitus omnes iurisdictiones essent penes principem, et derivatur in suos regios oficiales et penes illos quibus illarum administrationem commitebat".

potestad con la "mayoría" <sup>(180)</sup>. Esta suprema jurisdicción o "mayoría" no puede ser transmitida a otros <sup>(181)</sup> porque reside siempre - en el rey <sup>(182)</sup>. Por tanto hemos de entender la mayoría de justicia

(180) En el encabezamiento del capítulo IV de sus "Quaestiones - Practicarum" dice: "De summa Regis iurisdictione, quam Maioriam dicimus..." y en el texto insiste de nuevo: "atque ideo semper mansit apud Regem ipsum, iurisdictionem in alios transferentem, haec suprema iurdictio, quam maioriam dicimus..." (Quaestiones Practicarum, cap. IV, en Opera omnia, t. II p. 400. La edición más conocida es la de Salamanca de 1572, pero aquí citamos por la edición de Amberes de 1610. Hay versión castellana parcial de algunos pasajes de la obra de COVARRUBIAS en la Colección "Textos jurídico-políticos" Madrid 1957, con prólogo de M. Fraga Iribarne).

(181) COVARRUBIAS reconoce que aunque el rey, para compensar por algún servicio prestado, pueda conceder a los nobles la jurisdicción y el mero y el mixto imperio para ejercerlos en extensísimos territorios, "eam tamen iurisdictionem, quae apud Regem summa est, cuiusque iure vel queralae, vel prouocationes, aut appellationes a iudicibus inferioribus aliaeque -- causa ad Regem, ut supremum Reipublicae patrem deferentur, nequaquam videtur transtulisse, etiam si usus fuerit verbis hac in re quo ad significationem uberrimis. Hanc etenim iurisdictionem ideo maioriam vocamus, quod ea proprie pertineat ad supremam principatus recognitionem". Además, añade - - - COVARRUBIAS: "...et praeter haec suprema iurdictio est ipsa forma, et substantialis essentia maiestatis Regiae: et ideo impossibile quidem erit in regno, et de regno aliquem esse - exemptum, vel exceptum ab illa..." (Quaestiones Practicarum, cap. IV, p. 400, ed. cit.)

(182) "Ego vero... opinior in hoc regno Castellae... quippe qui utcumque libere absque iure feudi, et feudalís recognitionis, fuerit iurdictio temporalis translata, existimem, penes ipsum Regem supremam maniera iurisdictionem, nec hac censeri in ecclesiasticum praelatum aliquo modo transmissam: et ideo ab Episcopis temporalem iurisdictionem excercitibus ad Regem ipsum est omnino appellandum, nec locus erit Pontificio responso (Quaestiones Practicarum, cap. IV, p. 400).

en este sentido, por lo que cualquier acto que atente a esta preeminencia jurisdiccional del Rey ha de considerarse "mengua de justicia" y es suficiente para dar lugar a la intervención de esta potestad regia.

En base a este planteamiento podemos replantearnos la clasificación que ofrece PEREZ DE LA CANAL a la que antes aludíamos. La mayoría de justicia se manifiesta, para nosotros, fundamentalmente en tres aspectos: En la facultad de entender exclusivamente determinados asuntos ya sea por el objeto o por la calidad de las personas que intervienen en él, en la facultad de corregir o emmendar los fallos de los jueces inferiores y, finalmente, la facultad de dispensar, agotada ya la vía procedimental, y otorgar la "merced real".

La facultad de intervenir privativamente en determinados asuntos bien por que "atañen al rey principalmente por razón de su señorío" o porque se trataba de hechos que producía graves daños al rey y al reino, hace que el poder jurisdiccional del rey intervenga en:

a. Las rentas reales. La competencia del rey para entender de las cuestiones concernientes a sus rentas es consecuencia del reconocimiento de la percepción de dichas rentas como algo inherente al señorío real<sup>(183)</sup>, haciendo exclusiva la competencia de la jurisdicción real.<sup>(184)</sup>

---

(183) Fuero Viejo de Castilla I, I, I.

(184) PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte... pgs. 402-3.

Es muy variada la tipología de asuntos referentes a las rentas y prestaciones económicas, pero podemos apuntar que los pleitos más frecuentes se deben a disputas entre el rey y algún señor -generalmente eclesiástico- acerca de la recaudación de un tributo del que ambos se creen con derecho a percibirlo<sup>(185)</sup>. También son numerosísimas las querellas presentadas por personas eclesiásticas ante el cobro de portazgos, peajes, almojarifazgo<sup>(186)</sup> o por -

---

(185) Así, por ejemplo, las Cortes de Valladolid 1258 (CLC. I, II, p. 56) Son numerosísimas las cartas reales en las que se resuelven querellas de este tipo. Véanse en la Colección Diplomática de Sancho IV, los documentos 120, 121, 129, 134, 147, 354, entre otros. Es interesante el pleito entre la abadesa de la Huelgas y el Merino Mayor de Burgos en 1326 (A. RODRIGUEZ LOPEZ: El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, Burgos 1907, t. II, doc. 140, p. 537) En este mismo sentido la provisión de la Audiencia de Pedro I ordenando a los recaudadores no cobrar a los vasallos de la Orden de Santiago la mitad del servicio de la tierra que pagaban a los de Valladolid, ya que le había sido concedida por merced a dicha orden (A.H.N. Ordenes Militares. San Marcos de León, carp. 375, num. 80 bis), y la provisión de 1353 ordenando a los almojarifes del reino de Murcia que guarden los privilegios del Obispado y cabildo de Cartagena (A. MOLINA: Documentos de Pedro I en la Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia (CDHRM), Murcia 1978, doc. 58 p. 105). Real carta de Sancho IV al Adelantado Mayor de Murcia para que hagan que los almojarifes paguen el diezmo al Obispo (Documentos de Sancho IV, D.D.H.R.M. IV doc. 87, p. 77-8).

(186) Real orden de Fernando IV en la que manda a los recaudadores de la moneda y demás pechos que guarden los privilegios de exención del Obispo, cabildo y clérigos de Cartagena (BENAVIDES: Memorias de Fernando IV, t. II, doc. 35, pgs. 54-5) o la parte del mismo Fernando IV por la que manda a los cegedores de sus pechos, yantares y acémilas, y a los que han de hacer las embregas de los pechos, que no pasen ni quebrantes al Arzobispo de Toledo ni a su iglesia los proveielgios y libertades que les habían concedido sus antecesores (BENAVIDES: Memorias... t. II, doc. 101, p. 144). También la carta de -

los concejos ante la exacción de algún tributo que no le correspondía o su cantidad sobrepasaba lo establecido.<sup>(187)</sup>

b. Los casos de corte<sup>(188)</sup> La gravedad que determinados actos delictivos acarreaban al rey o a la seguridad general del Reino hizo que desde muy pronto el conocimiento y decisión de los mismos fuera de competencia exclusiva del rey y sus jueces de la Corte. Esta tradición, que se recoge ya en el Libro de los Fueros de Castilla<sup>(189)</sup> y en el Espéculo<sup>(190)</sup>, debía ocasionar algunos

---

(186) /...de Pedro I al concejo de Cuéllar sobre el almotanazgo de esta población (Colec. Dipl. de Cuéllar, doc. 108, pgs. 217-9) o la sentencia de los oidores de la Audiencia de Enrique II fallando el pleito promovido por clérigos de Cuéllar contra los arrendadores del impuesto de las doce monedas (Col. Dipl. de Cuéllar, doc. 123, pgs. 248-251) entre otros.

(187) Carta de Alfonso X ante la queja presentada por los representantes del concejo de Oviedo ante el pago de 1.000 maravedies en concepto de fonsadera (M.H.E. t. I. doc. 46, p. 101), o la carta a los almojarifes de Orihuela sobre el exceso de cobro de los censales (Documentos de Sancho IV. CDHRM, IV, doc. 15, p. 11), o las quejas que le presentan los vecinos de Soria al Rey por los recaudos indebidos (BENAVIDES: Memorias... doc. 271, pgs. 404-5). Juan II manda a los arrendadores de las dos monedas foreras que no exijan el pago de las mismas a los vecinos y moradores de Sepúlveda (Colec. Dipl. de Sepúlveda, doc. 114, pgs. 374-78).

(188) Sobre los casos de corte véase el trabajo del profesor A. IGLESIAS FERREIROS: Las Cortes de Zamora 1274 y los casos de Corte, en AHDE, 41 (1971), pgs. 945-71, y el trabajo de PEREZ DE LA CANAL La justicia en la corte... pgs. 397-8.

(189) "Estas tres cosas deue el rey pesquirir auyendo querellosos: de muger forçada, et de omne muerto sobre saluo, et de quebrantamiento de camino" (Libro de los fueros de Castilla, 117, p. 59, ed. Galo Sánchez).

(190) "E deuen judgar (los Adelantados) de los pleitos de justicia fueras ende pleito de riepto, que sea sobre fecho de traicion o aleve. Ca esto non lo puede otro ninguo judgar sinon el rey

conflictos por lo que se decidió en las Cortes de Zamora de 1274 delimitar cuáles eran las causas "que fueron usadas de librar por corte del Rey"<sup>(191)</sup>; en estos mismos términos nos encontramos que son recogidos por las Leyes del Estilo<sup>(192)</sup>, y aunque las Partidas - amplían considerablemente el número de pleitos que, "segund Fuero de España", los demandados han de responder ante el Rey<sup>(193)</sup>

(190) /...o adelantados mayores, mandado gelo el, asi como diximos en la ley ante desta. E otrosi pleito de tregua quebrantada, e seguridad del rey, o pleito de ome que fiziese falsidad en moneda de rey, o en su sello o en su carta, non lo pueden esto jugar los adelantados nin de las comarcas de las - - tierras. Ca estas cosa pertenscen a juyzio del rey..." (Espéculo 4, 2, 12).

(191) "Estas son las cosas que fueron sienpre usadas de librar - por corte del Rey: muerte segura, Muger forzada. Tregua quebrantada. Saluo quebrantado. Casa quemada. Camino quebrantado, Traycion. Aleve. Riepto" (CLC. I, 46, p. 94).

(192) Ley 91. Sobre las leyes del Estilo vid. GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X... p. 653, nota 99.

(193) Partidas 3, 2, 5: "Contiendas, e pleytos y ha, sin aquellos que avemos dicho en la ley ante desta, que son de tal natura, que segund Fuero de España, por razon dellos son tenudos los demandados de responder antel Rey maguer non les demandassen primeramente por su fuero. E son estos: quebrantamiento de camino, o de tregua, riepto de muerte segura, muger forzada, ladrón conocido, o ome dado por encartado de algund concejo, o por mandamiento de los jueces, que han de judgar en las tierras, o por sello del Rey, que alguno ouiese falseado, o su moneda, o oro o plata o algund metal o por razon de otro grand yerro de traycion que quisiesen fazer al Rey, o al Reyno; o por pleito que demandasse huerfano, o ome pobre o muy cuytado, contra algund poderoso de que non pudiesse tambien alcalzar derecho por el fuero de la tierra..."

el carácter doctrinal de esta obra<sup>(194)</sup>, y su entrada en vigor -no sin reservas- en las Cortes de Alcalá de 1348<sup>(195)</sup>, hacen que, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIV no hayan de ser tenidas en cuenta. En cambio en las Ordenanzas mandadas hacer por Fernando IV en 1310<sup>(196)</sup>, recogidas posteriormente en las Cortes de Valladolid de 1312<sup>(197)</sup>, el Rey, además de atribuirse los pleitos que tradicionalmente venía conociendo, deja una puerta abierta al señalar énfaticamente que también conocerá de "los otros pleitos que touiere por bien delos oyr e delos librar bien e derechamente, asi como se librar deben"<sup>(198)</sup>. Esta tendencia a la avocación de un mayor número de pleitos para la jurisdicción de la corte puede ser que haya sido recogida por los juristas que en estos momentos están elaborando las Partidas en la Corte, solo así se comprende la ampliación de los casos de Corte a que antes nos hemos referido.

Esta nueva situación produjo la queja que presentan los procuradores en las Cortes de Medina de 1318<sup>(199)</sup> reiterándose posteriormente en las Cortes de Valladolid de 1351<sup>(200)</sup> y en las de Burgos -

---

(194) Sobre el carácter doctrinal de las Partidas, véase primero el trabajo del profesor GARCIA-GALLO: El "Libro de las Leyes" de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas, en AHDE 21-22 (1951-1952), pgs. 406 y ss. Recientemente el profesor GARCIA-GALLO ha hecho una profunda revisión de toda la problemática que suscitan los textos que han venido atribuyendo a Alfonso X en su trabajo, ya citado, Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, también en AHDE 46 (1976) pgs. 609 y s

(195) Ordenamiento de Alcalá 28, 1.

(196) Ordenanzas de 1310 en BENAVIDES: Memorias... t. II, doc. 510, pgs. 732-3.

(197) Las Cortes de Valladolid de 1312 amplían el ordenamiento anterior en algunos aspectos (CLC. I, pgs. 198 y ss).

(198) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, l. p. 198).



de 1373<sup>(201)</sup>, pero de hecho parece que acaba por aceptarse y generalizarse ya que en las Cortes de Briviesca de 1387 lo que se pide al rey no es que deje de emplazar, como se ha hecho hasta ahora, sino que lo que se pide es que se sancione a aquellos que emplazan maliciosamente para la Corte del Rey con lo que se sigue un gran perjuicio para el emplazado ya que frecuentemente, una ya en la Corte, el emplazador no acude a ella.<sup>(202)</sup>

Ya en el siglo XV se aumentan algunos casos de corte por iniciativa del Rey<sup>(203)</sup>, en cambio no prosperó la solicitud de los procuradores de que se considerara caso de corte los pleitos que los señores promueven contra los que residiendo en realengo poseen heredades en tierras de señorío.<sup>(204)</sup>

c. Incumplimiento de las cartas reales.<sup>(205)</sup> La posibilidad que tiene el Rey de emplazar, previa querella, a todo aquél que incumpla lo dispuesto en una carta real, está en las Leyes del Estilo<sup>(206)</sup>. De acuerdo con esta ley, como señala PEREZ DE LA CANAL<sup>(207)</sup>, a partir de Alfonso XI, en todas las cartas reales se

(199) /... Responde el Rey que si la demanda es forera la enviará al fuero "et si ffallaremos que es de casa del Rey que rrespondan por la Corte" (CLX. I, 18, p. 334).

(200) "A esto rrespondo que tengo por bien e mando que non se den cartas dela mi chançelleria, por que sean enplazados para mi corte algunos dela mi chançelleria, saluo sobre aquellos casos por que derecho deuan ser llamados ala mi corte" (CLC. II, 13, p. 128).

(201) Piden al rey que ningún vecino sea emplazado ante los alcaides de corte "a menos que primera mente fuese demandado ante los alcaides de su fuero e oydo e vençido por fuero e por derecho" a lo que el rey responde "que non den nuestras cartas para enplazar para la nuestra corte, saluo por aquellos casos que se deuen librar por la nuestra corte" (CLC. II, 7, pgs. 260-1).

(202) CLC. II, 12, pgs. 377-8.

incluye además de las cláusulas conminatorias de sanciones, el emplazamiento para la Corte de aquel que incumpliere lo ordenado.<sup>(208)</sup>

d. Actos y delitos realizados en la Corte.<sup>(209)</sup> La regulación especial a la que está sometida la Corte porque "y es la espada de la justicia del señor con que se corta" y "porque es y el señor mayor cuyo es el cuidado de la corte dado de guardar la tierra en paz e en derecho"<sup>(210)</sup>, faculta a los alcaldes de la Corte para conocer cualquier demanda que se le presente en la que el demandado, con independencia de su fuero particular, por el motivo que fuere se encuentre en la Corte en ese momento; solamente se escapan de esta regulación las demandas por deudas en las que el demandado, aun encontrándose en la Corte, si lo solicita, se remite la

---

(203) /... Cortes de Valladolid 1447 (CLC. III, 59, pgs. 568-9).

(204) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 53, pgs. 361-2).

(205) Vid. PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... p. 404.

(206) "Si algun hombre tiene carta del Rey, de merced de donadio o de otra cosa, e ha en la carta del Rey pena puesta de dineros, o de otra cosa quel peche, e alguno pasa contra lo que es otorgado en la carta del Rey, puede ser emplazado para casa del Rey, a querella de aquel a quien fue otorgada la merced del Rey" (Ley 34).

(207) La justicia en la corte... p. 404.

(208) Las cláusulas utilizadas son todas parecidas: "Et si algunos ho alguno lles quisieren yr ho pasar contra esto que yo mando, mando auos los juyzes et alcalldes quelos peyndredes por la dicha pena et la guardedes para fazer della lo que y mandare, et al Conçello de Ouiedo ho asus vezinos ho aquel quier dellos quelos enplazan que aparescan ante mi do quier que yo sea del día que los enplazaren quince dias so pena de çient maravedis... (Real cédula de Alfonso XI, de mayo 15 de 1332, VIGIL: Cole. Dipl. del Ayuntamiento de Oviedo, doc. 113, pgs. 184-5). Véase en la misma colección diplomática los documentos 128, 130 y 142.

demanda ante el alcalde del lugar<sup>(211)</sup>.

Los contratos realizados en la Corte eran considerados, en caso de incumplimiento, como materia de competencia de los alcaldes de la misma<sup>(212)</sup> así como las demandas presentadas por escribanos, abogados u otros oficiales en concepto del impago de sus derechos por los pleitos que sostienen ellos en la Corte<sup>(213)</sup>. En otro tipo de actos, previo pacto, si se ha realizado en casa del Rey, la parte obligada puede efectuar el cumplimiento de su obligación en la casa del Rey" que es lugar comunal a todo"<sup>(214)</sup>. No obstante, las Cortes se muestran reacias en todo momento e insisten que se - guarde lo dispuesto por Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá<sup>(215)</sup> y que "ningunt vezino de çibdat nin villa nin de otro lugar non fuese enplazado ante los alcalles de la corte, a menos que primera mente fuese demandado ante los alcalles de su fuero e oydo e vençido por fuero e por derecho"<sup>(216)</sup>.

Por la misma razón cualquier acto delictivo cometido en la Corte automáticamente queda bajo la competencia de los alcaldes reales, ya sea un delito grave por el que se merezca la pena de -

---

(209). /... Vid. PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... pgs. 412-3.

(210) Espéculo 2, 14, 1.

(211) Leyes del Estilo 7.

(212) Leyes del Estilo 35.

(213) Leyes del Estilo 33.

(214) Leyes del Estilo 193.

(215) Ordenamiento de Alcalá 2, 1.

(216) Cortes de Burgos 1373 (CLC. II, 7, pgs. 260-1).

muerte<sup>(217)</sup>, o por hurto<sup>(218)</sup>, aunque el acto punible se haya realizado en tierra de señorío en la que en ese momento se halla la Corte.<sup>(219)</sup>

La jurisdicción real era también privativa en todos aquellos casos en los que, con independencia del objeto, por razón de la persona o por cualidades inherentes a ella, el rey hacía prevalecer su mayoría de justicia. Así el Rey era juez ordinario de los siguientes pleitos y agravios:

a. Pleitos de eclesiásticos. Desde la Alta Edad Media encontramos documentada la intervención del Rey en aquellos pleitos, generalmente sobre términos o sobre conflictos jurisdiccionales, en los que se ven afectados los intereses de algún prelado, abad, Orden Militar y, en general, cualquier clérigo<sup>(220)</sup>. En la

---

(217) Leyes de Estilo 97.

(218) Leyes del Estilo 109.

(219) Leyes del Estilo 120.

(220) Véase por ejemplo, el pleito suscitado entre Velasco Nuñez y Nausti Díaz de un lado y el alcalde de Celanova del otro acerca de unos vasallos del Monasterio (HINOJOSA: Documentos para la Historia... doc. 8, p. 11) o el pleito entre el concejo de Sepúlveda y el Monasterio de Sacramenia sobre los derechos de pasto y leña (J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. II, doc. 461, p. 791) o el pleito sobre términos que Alfonso IX sentencia en favor del Monasterio de Ribera (J. GONZALEZ: Alfonso X t. II, doc. 493, p. 595), y en el mismo sentido el pleito que falla Fernando III a favor del Monasterio de Oña en conflicto con el concejo de Mijangos (ALAMO: Colec. Dipl. San Salvador de Oña, doc. 480, p. 591) entre muchos.

Baja Edad Media son igualmente innumerables los pleitos que encontramos de este tipo<sup>(221)</sup> y son continuas las quejas presentadas por las fuerzas realizadas por personas eclesiásticas contra legos : constituyendo una mengua de la justicia real.<sup>(222)</sup>

b. Pleitos de Hijosdalgos<sup>(223)</sup>. Tradicionalmente desde la Alta Edad Media en la Curia Regia se vienen ventilando todos los pleitos entre nobles<sup>(224)</sup>, y, por tanto, todos aquellos pleitos especiales de los hijosdalgo que requerían la aplicación de su propio fuero, como los pleitos suscitados entre hijosdalgos con cualquier otro estamento de la sociedad eran sometidos y fallados por la jurisdicción real.<sup>(225)</sup>

---

(221) Véase la querella resuelta por Alfonso X entre el Monasterio de San Clemente de Toledo y el concejo de Talavera por la edificación de un puente sobre el Tajo (M.H.E. I. doc. 61, p. 131-2) o la carta del propio Alfonso X envía al concejo de Badajoz en razón de la jurisdicción sobre los testamentos por la que se pugnaban con los jueces eclesiásticos (M.H.E. doc. 121, pgs. 265-6). En sentido similar la carta de Sancho IV al Adelantado Mayor de Murcia notificándole que los pleitos de censos correspondía librarlos al Obispo (CDHRM. Documentos de Sancho IV, doc. 77, p. 70). En la colección diplomática de Sancho IV de M. GAIBROIS encontramos gran cantidad de pleitos de este tipo, así la querella presentada por el Obispo de Cartagena contra el concejo de Murcia porque los oficiales del concejo se entrometían en su jurisdicción (GAIBROIS: Sancho IV . III, doc. 4, p. 23, y muy similares los documentos 6 y 178, pgs. 3 y 178). Pueden verse igualmente los agravios presentados por idénticas causas en las Cortes de Burgos de 1315 (CLC. I, 10, p. 296) y Toro 1371 (CLC. II, 7, p. 246).

(222) Vid. PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... pgs. 394-

(223) Vid. PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... pgs 394 y 401-2.

(224) Vid. N. GUGLIELMI: La Curia Regia... pgs. 169 y ss.

(225) El ejemplo más claro lo muestra el pleito que el Cid lleva ante la Corte contra los infantes de Carrión (Vid. HINOJOSA: El Derecho en el poema del Cid, ya varias veces citado.

En la nueva organización de la administración de justicia que Alfonso X propugna en el Espéculo, vemos como el Rey también puede delegar esta función jurisdiccional en otro alto funcionario de justicia, en el Adelantado Mayor<sup>(226)</sup>. No vamos a entrar ahora en el análisis y problemas que este oficial suscita porque de él nos ocuparemos más adelante, pero sí interesa destacar que tanto en los pleitos de eclesiásticos, que vimos anteriormente, como - en los pleitos de "riepto", "entre rico ome e otro sobre heredamien to o sobre otra cosa", "que fuesen de grandes omes, asi como entre ricos omes y ordenes" y "pleitos entre concejos sobre términos y otros pleitos" "granados", los puede fallar el Adelantado Mayor "por mandado del rey"<sup>(227)</sup>. Esto quiere decir que todo estos pleitos corresponden a la jurisdicción real, pero esta podía ser delegada solamente, en estos casos, al Adelantado Mayor.

Las vicisitudes a que estará sometida la figura del Adelantado Mayor -que veremos oportunamente- y la desnaturalización de su primitivo carácter eminentemente judicial, hará necesaria la - creación de otro funcionario especializado para la resolución de los pleitos entre señores, con lo que se dará paso al "alcalde de los fijosdalgo" del que también nos ocupamos más adelante. No obstante, pese a la creación de estos funcionarios judiciales, ante la importancia del asunto, nos han quedado testimonios de la intervención directa del Rey en este tipo de pleitos<sup>(228)</sup>.

---

(226) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11.

(227) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11; véase también las Ordenanzas sobre la manera de sentenciar pleitos a los alcaldes de Valladolid en M.H.E. doc. 65, t. I, pgs. 139-44).

(228) Véase, por ejemplo, el pleito sobre el Señorío de Vizcaya del que se hace eco la Crónica de Fernando IV, cap. 13, pgs. 137-9.

Producía frecuentemente la intervención de la jurisdicción real las menguas de justicia que se ocasionaban a los vasallos de señorío por la actuación de los señores o sus oficiales. En prácticamente todas las concesiones el Rey, en virtud de su suprema jurisdicción o mayoría, se reserva la posibilidad de hacer justicia si ésta no se cumple<sup>(229)</sup>. Parece que la regla general, a tenor de la petición 19 de las Cortes de Valladolid de 1325<sup>(230)</sup> era que los agravios de los señores o sus oficiales eran vistos en primera instancia en "las ciudades y villas donde antes solían venir", salvo en aquellos casos en que se ha concedido también a los señores la posibilidad nombrar sus oficiales y administrar justicia.<sup>(231)</sup>

---

(229) Son innumerables los documentos al respecto. La cláusula que suele ir redactada en los siguientes términos: "Otrosi que si ellos non ficiessen justicia que la tengamos nos", o parecidos, puede verse entre muchos, en la confirmación que hace Fernando IV de una carta de Sancho IV en la que concede el lugar de Mondéjar (BENAVIDES: Memorias... doc. 66, pgs. 94-5). En la misma colección véanse los documentos 79, 80, 120 y 230. A veces el Rey se reserva la justicia cuando hace concesión a una Orden Militar; en este sentido véase el privilegio rodado de Fernando IV haciendo donación a la Orden de Santiago y a su maestro Juan Osorez de la villa y castillo de Medinasidonia (A.H.N. Ordenes Militares. Uclés, cajón 222, num. 5 traslado de 1309), en términos similares otra carta de Fernando IV en A.H.N. Ordenes Militares. Uclés, cajón 365, núm. 11. Sobre la mengua de justicia en los señoríos y su regulación en el Ordenamiento de Alcalá ver J.L. BERMEJO: Mayoría de Justicia del Rey..., ya citado.

(230) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 19, p. 382).

(231) Esto supondría la existencia de señoríos totalmente inmunes.

El régimen de las Cortes de Alcalá<sup>(232)</sup> se confirma en las Cortes de Toro de 1371<sup>(233)</sup> y en las de Burgos de 1379<sup>(234)</sup>, pero la solución definitiva parece darse en las Cortes de Guadalajara de 1390<sup>(235)</sup> en las que se estableció que todos los agravios procedentes de tierras de señorío podían ser vistos en alzada por los alcaldes del rey, pero previa petición de reparación del agravio por parte del vasallo ante el señor o su lugarteniente.<sup>(236)</sup>

c. Pleitos de concejos. Otro de los tipos de pleitos que podía conocer el Adelantado Mayor "por mandado del Rey" eran los pleitos "entre concejos sobre términos y otros pleitos"<sup>(237)</sup> por lo que originariamente el Rey viene conociendo este tipo de pleitos; y, efectivamente, en la Alta Edad Media, encontramos al Rey fallando estos pleitos en los que se ve afectado un concejo, generalmente en pugna con algún monasterio<sup>(238)</sup> o con algún otro -

---

(232) J. L. BERMEJO: Mayoría de justicia... pgs. 269 y ss.

(233) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 5, p. 205).

(234) Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 14, pgs. 282-3).

(235) Cortes de Guadalajara 1390 (CLC. II, 9, pgs. 430-2). Quedan fuera de esta regla las apelaciones de los territorios de las Ordenes Militares.

(236) Este sistema parece que, sin duda, prosperó a tenor de las referencias que encontramos en la Crónica de Juan I: "E el rey declaro esto en esta manera que todos los pleitos de los señoríos se librasen ante los alcaldes ordenarios de la villa o lugar que era donadío de señor o caballero, fasta que diesen sentencia; e si la parte se sintiese agraviada, apelase al señor de la tal villa e lugar, e si el señor no le ficiere derecho o le agraviase, entonces pudiese apelar ante el rey" (Crónica de Juan I, cap. 13, p. 141).

(237) Espéculo, 4, 2, pr.



concejo<sup>(239)</sup> en torno a la fijación de los términos de uno y otro.

En la Baja Edad Media se multiplicarán este tipo de pleitos<sup>(240)</sup> si bien otras veces el agravio se ha producido por la incorporación al patrimonio regio de tierras a las que el Concejo cree tener

---

(238) /... Así Alfonso VIII en 1193 fija los deslindes y derechos de pastos y leña entre el Monasterio de Valbuena y el concejo de Cuéllar (J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. III, doc. 616, p. 96) Alfonso IX, que falla en favor del Monasterio de Meirá la posesión de Bouzas del Rey (J. GONZALEZ: Alfonso IX, t. II, doc. 572, pgs. 666-7) o del mismo rey fallando en 1226 sobre los términos de Coedo en favor del Monasterio de Ribera (J. GONZALEZ: Alfonso IX t. II, doc. 493, p. 595).

(239) Alfonso VIII en 1208 fija los términos entre Segovia y Madrid (J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. III, doc. 814, p. 429) Otras veces el Rey se limita a confirmar la concordia que sobre sus términos han realizado los concejos; véanse las concordias entre el concejo de Guadalajara y el de Uceda así como la verificada entre Cuéllar y Peñafiel, ambas confirmadas por Alfonso VIII (J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. III, docs. 814 y 815, pgs. 429-31) Puede verse también la sentencia de Fernando III sobre el pleito sobre los montes entre Cevico, Navero y Dueñas (MENENDEZ PIDAL: Documentos lingüísticos... doc. 227, p. 297).

(240) Véase la Real cédula de Sancho IV de 1289 resolviendo un conflicto entre los concejos de Cuéllar, Fuente Pelayo y Aguila-fuente (Col. Dipl. de Cuéllar, doc. 41, p. 95) También de Sancho IV, en términos semejantes, puede verse en la Colección diplomática de este Rey el doc. 6, p. 3, Alfonso XI determina también un conflicto de términos en favor de Carmona (Cole. Dipl. de Carmona p. 29). El pleito que falle el juez comisario enviado por el infante Don Fernando para solventar las diferencias que acerca de sus términos tenían Cuéllar y Peñafiel (Colec. Dipl. de Cuéllar, doc. 160, pgs. 322-373), o la petición que a Juan II en 1453 le hace el concejo de Sepúlveda para que le fueran restituidos los lugares de Castilnovo, Riofrio y Fontanar, en posesión del concejo de Riaza (Colec. Dipl. de Sepúlveda, doc. 177, pgs. 592-4).

derechos sobre ellas<sup>(241)</sup>; pero la mayoría de estos pleitos se van a ventilar, no por medio de la jurisdicción civil ordinaria, sino que se van a tramitar y resolver por medio de jueces comisarios designados por el rey para cada caso concreto.<sup>(242)</sup>

También se acudía a la jurisdicción real cuando se perturbaba la jurisdicción civil o criminal que correspondía a los concejos, generalmente por la acción de algún oficial real u otros "oficiales"

---

(241) Es el caso, por ejemplo, del largo pleito que mantenían el Rey y el concejo de Segovia por la incorporación al patrimonio regio del Real de Manzanares por Alfonso X (COLMENARES: Historia de Segovia, t. I, pgs. 431 y ss).

(242) Véase, por ejemplo, la sentencia de los jueces comisarios que a propósito del pleito sobre el Real de Manzanares, citado en la nota anterior, recogía en COLMENARES: Historia de Segovia, t. I, p. 432. Estos agentes extraordinarios y temporales están encargados de ejercer esta justicia reservada en los términos y dentro de las funciones y competencias que le atribuían las "letras de comisión." Este fenómeno, que HUNT ZE denominaría "revolución comisarial" (vid. El comisario y su significación en la historia general de la Administración dentro del volumen titulado Historia de las formas políticas, Madrid 1968, pgs. 155-193) se desarrollará en Castilla en el siglo XV fundamentalmente para este tipo de pleitos. Véase también la sentencia del juez comisario que falló el pleito entre los términos de Madrid y Paracuellos en 1426 y 1427 (RODRIGUEZ SOLER: Madrid, sus pleitos y los letrados de la Villa, pgs 80-4), pero donde tendrán su mayor auge este tipo de jueces es en el reinado de los Reyes Católicos en que se generaliza para todo tipo de -pleitos, basta ver el Tumbo de los Reyes Católicos los documentos t. I, no. 125, p. 236; t. II, 167, p. 21; 175, p. 32 y ss.; 322 pgs 387-90; t. III, 59, pgs. 80-1; 83, pgs. 115-7; 196, pgs. 247-8; T. IV, 1991, pgs. 250-3) entre muchos. Es interesante el pleito de términos suscitado en 1480 entre la villa de Cáceres y Vasco de Porcallo recogido por A. FLORIANO: Documentación histórica de Archivo Municipal de Cáceres, doc. 143, p. 83.

del concejo<sup>(243)</sup>; ante el entorpecimiento que por algún motivo se produzca en la exacción de pechos reales<sup>(244)</sup> y, sobre todo, cuando mediante una "carta desaforada" el rey atenta contra algún derecho.<sup>(245)</sup>

d. Pleitos de los oficiales. En principio los oficiales reales debían cumplir la regla general de presentar la demanda que ellos tuvieran ante el juez competente por el fuero del demandado<sup>(246)</sup> pero muy pronto, como bien señala PEREZ DE LA CANAL<sup>(247)</sup>, empezaron a conseguir de los jueces de la corte cartas de emplazamiento para ella ocasionando grandes perjuicios para los demandados. Ante esta situación las Cortes elevan sus quejas al Rey repe-

---

(243) Véase el conflicto que se suscita entre alamines y almotacenes en Sevilla que resolverá en 1337 Alfonso XI (GUICHOT: Historia del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, t. I, p. 252). Juan I resuelve la queja presentada por los jurados sevilanos contra el alcalde mayor porque no les permitían entrar en la casa de la justicia ni enterarse de qué pleitos y asuntos se estaban librando (MILLARES CARLO: Libro de los Jurados en AHDE. 4 (1927), p. 464). Juan II sentencia en favor del concejo de Carmona declarando que en las contribuciones de monedas y predios, las apelaciones sean del Ayuntamiento y no vayan en alzada al alcalde mayor de Sevilla (Col. Dipl. de Carmona, p. 52).

(244) En un albalá de Enrique III se inserta el nombramiento de juez comisario para fallar el pleito suscitado entre los alcaides, alguacil y veinticuatro de Sevilla de una parte, y los jurados de la misma de otra para resolver determinadas cuantías (MILLARES CARLO: El Libro de los Jurados, p. 467)

(245) Vid. VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 82-95.

(246) Este principio viene recogido por el Fuero Viejo de Castilla 3, 1, 2, 3, 4; por el Espéculo 4, 2, 9 y 4, 4, 11; Fuero Real 2, 1, 1 y 2; Leyes del Estilo 7, 35; Igualmente en las Partidas 3, 2, 32 y 3, 3, 4. Las Cortes de Zamora de 1274 diferenciaban los pleitos foreros de los pleitos del Rey (CLC. I, 27, p. 91).

(247) La justicia en la Corte... p. 399

tidas veces<sup>(248)</sup> hasta que la pretensión de los oficiales de ventilar sus pleitos en la corte se vió satisfecha por una Real Provisión de Juan II en 1410<sup>(249)</sup>, confirmada en las Cortes de Palenzuela de 1425<sup>(250)</sup>.

En 1438, los procuradores le solicitan a Juan II, que ante las contínuas cartas de emplazamiento para la Audiencia que ganaban algunos de los oidores, tuviera por bien que todos los oidores y oficiales de la Chancillería emplazaran a sus demandados ante el Consejo para que allí se librasen los pleitos, ya que del otro modo los que emplazaban "son casi juezes e partes"<sup>(251)</sup>. El Rey en su respuesta no hace alusión alguna al Consejo por lo que hay que pensar que no accedió a esta petición, en cambio estableció un límite de cuatro mil maravedies por el que cualquier pleito inferior a esta suma no podía ser emplazado a la Corte<sup>(252)</sup> y se prohibió que los familiares de los oficiales pudieran traer sus pleitos a la Chancillería "saluo en los casos de corte"<sup>(253)</sup>.

(248) Cortes de Valladolid 1293: "Tenemos por bien que los nuestros oficiales, que ouieren en nuestra casa si algunos le fizieren tuerto andando ellos en nuestra corte o en nuestro seruiçio, queles vengan rresponder para nuestra casa e sen iudgados por aquel fuero de aquellos logares onde son. Pero si acaeçiere queles fizieren tuerto morando ellos alla en los logares, queles rrespondan alla e les cumplan de derecho por su fuero" (CLC. I, 14, p. 124); Cortes de Burgos 1301: "Otrosi quando que por demandas foreras que ayan los mios ofiziales contra los delas villas que non sean enplazados para mi corte mas que sean demandados por su fuero, saluo si el contraito fuer fecho en la mi corte, o por otras cosas que yo deua librar en mi corte" (CLC. I, 8, p. 147). En sentido parecido se expresan las peticiones de las Cortes de Burgos de 1345 (CLC. I, 7, p. 487). Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá intenta corregir estos abusivos emplazamientos, muchos de ellos maliciosos (Ordenamiento de Alcalá 2, 1, y 2) pero las quejas se le repiten a Enrique II en Burgos -- (CLC. II, 7, p. 260) y a Juan I en Palencia en 1388 (CLC. II, 13, p. 418).

(249) Libro de Bulas y Pragmáticas... fol. 47 v-r.

(250) CLC. III, 29, p. 69.

(251) CLC. III, 25, p. 331-2.

Pero sin duda la gran mayoría de pleitos que se ventilan en la Corte son aquellos en los que los oficiales no son demandantes sino demandados por cometer agravios en el ejercicio de su función. Se trata, pues, de una categoría intermedia que puede ser clasificada en razón de la persona o de la materia (el mal gobierno) pero que, en definitiva, dado que se trata de materias que sólo pueden ser realizadas por personas de determinado rango o condición, no afecta a la hora de la intervención de la jurisdicción real que, tanto en uno como en otro caso, es privativa.

Ya en las Leyes del Estilo se recogía la posibilidad de que mal se ante el Rey contra el oficial que desempeñaba mal su oficio <sup>(254)</sup> o contra el alcalde real que incumplía una carta regia <sup>(255)</sup>, y de ahí el que en las ordenanzas de 1310 uno de los pleitos que se reserva el Rey para librar con sus alcaldes son, precisamente, "los pleytos que demandaren a los oficiales de mi casa, en razón de la justicia, é en ninguno de sus oficios" <sup>(256)</sup>, que será recogido dos años más tarde por las Cortes de Valladolid <sup>(257)</sup>.

---

(252) Para evitar el posible fraude que pudiera haber al poner una suma mayor de la cuantía verdadera del pleito se obligaba a realizar juramento ante el prelado de la Audiencia, o en su defecto ante el Chanciller.

(253) CLC. III, 25, p. 332

(254) Leyes del Estilo 55.

(255) Leyes de Estilo 135.

(256) BENAVIDES: Memorias... doc. 510, p. 733.

(257) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, p. 198).

Igualmente las partidas recogían la posibilidad de querellarse contra los jueces que hayan cometido algún "yerro" o "tuerto" mientras desempeñaban su oficio, del que eran merecedores de "muerte o perdimiento de miembro"<sup>(258)</sup>, pues "deuenlo recabdar, e embiar al Rey".<sup>(259)</sup>

De hecho, como ha señalado el prof. GARCIA MARIN<sup>(260)</sup> los oficiales del reino se encuentran constantemente sometidos a distintos medios de control, ya sea por el propio rey o por agentes extraordinarios a los que el monarca ha encomendado esta tarea supervisora, pero pese a esta preocupación por parte de los reyes las querellas agravándose por los actos de gobierno de los distintos oficiales son innumerables<sup>(261)</sup>. No obstante, cabe distinguir entre los actos delictivos cometidos por el oficial con independencia de la función que ocupan (robo, injuria, adulterio, etc.), y aquellos otros actos inherentes al oficio que desempeñan.

---

(258) Partidas, 3, 4, 6. En este precepto se recoge el llamado "juicio de residencia". Sobre esta institución véase: L.G. de VALDEAVELLANO: Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 153 (1963). Hace referencia también J. GARCIA MARIN: El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla 1974, pgs. 317 y ss.; J. LALINDE ABADIA: Los medios personales de gestación del poder público en la historia española, Madrid 1970, pgs. 181 y ss. Recientemente el profesor B. GONZALEZ ALONSO ha publicado la primera parte de una monografía dedicada a esta figura: El juicio de Residencia en Castilla, en AHDE. 48 (1978) pgs. 193-247.

(259) Si no es merecedor de pena de muerte o mutilación se prevé otro procedimiento que no se substañcia ya en la corte del Rey sino en el lugar en donde había desempeñado el cargo.

(260) El oficio público... pgs. 308 y ss.

La mayor parte de las querellas están fundadas en una extralimitación de funciones en el ejercicio del oficio que ocupan, con lo que la competencia real era privativa. A partir de la citada pragmática de 1410, todas las demandas ya sean civiles como criminales presentadas contra los oficiales de la Casa y Corte y la Corte y Chancillería, debían ser resueltas en la Audiencia.

El segundo gran aspecto en el que se manifiesta la mayoría de la justicia del Rey es en la posibilidad de enmendar, como juez superior que es de todo el reino, las sentencias que "por razón que la malicia, eta la cobdicia, et la torpedat, et la necedat de los iuezes menores"<sup>(262)</sup>. Así lo viene reconociendo el Espéculo<sup>(263)</sup> el Fuero Real<sup>(264)</sup>, las leyes del Estilo<sup>(265)</sup>,

(261) El profesor VILLAPALOS, en su trabajo ya citado, Los recursos... nos ofrece una variada tipología de estos agravios. Véase principalmente pgs. 97 y ss.

(262) JACOBO DE LAS LEYES: Flores del Derecho 3, 2, 2, (M.H.E. tomo II).

(263) El Espéculo 5, 14, 13, admite la alzada "omisso medio" por que "el rey a señorío sobre todos los otros judgadores ca son puestos por su mano, e puede judgar a ellos, quanto más puede judgar aquella alzada". El mismo Espéculo como ya vimos reconoce la mayoría de justicia del Rey cuando afirma que del juicio del Rey nadie se puede alzar porque no tiene "mayoral" sobre sí en las cosas temporales (Espéculo 5, 14, 11).

(264) Fuero Real, 2, 13, 3.4.5. y 6.

(265) Leyes del Estilo 162. Además de reconocer la posibilidad de llegar en alzada hasta el Rey, consideran que si esto no se cumple se "mengua" la justicia del Rey.

las Partidas<sup>(266)</sup>, el Ordenamiento de Alcalá.<sup>(267)</sup>

Saldría mucho del objeto de este trabajo entrar a caracterizar y analizar la apelación<sup>(268)</sup>, pero interesa tener presente algunas consideraciones.

Ya hemos hecho referencia a que la suprema jurisdicción es la forma y esencia de la majestad real y, por tanto, en principio nadie del Reino está exento de ella. Al ser la mayoría de justicia algo esencial al rey, éste no puede conceder - "de iure" el derecho de la suprema potestad y de apelación - pues, en palabras de COVARRUBIAS, "est etenim maxime contrarium regiae dignitati, quod sub eius principatu locus, vel homines sint, quibus non liceat, nec sit precisum ius Regem ex

---

(266) Partidas 3, 23, 17 y 18 que siguen prácticamente de forma literal al Espéculo.

(267) Ordenamiento de Alcalá 13, 4. También en documentos de aplicación y crónicas encontramos al Rey conociendo las - alzadas: "Yo vista la allçada e oydas las rraçones de ambas partes fallé que el personero de los omes de Alga~~de~~ que se alçó mal e el juys que judgo bien e confirme so juyzio... (CALVO: San Pedro de Esclonza año 1271, mayo 8, doc. 192, pgs. 330-1) También véase GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc 383, pgs. 247-9) y la Crónica de Alfonso XI (caps. 8 y 20, pgs. 176 y 188 respectivamente).

(268) Para ello puede verse G. SALVIOLI: Storia della procedura civile e criminale dentro de la Storia del Diritto Italiano vol. III, Milán 1925 (reimpresión 1969) dirigida por P. DEL GIUDICE. Más en concreto puede verse también A. PADOA SCHIOPPA: Richerche sull'apello nel Diritto Intermedio, Milán 1967: En España se ha ocupado de ella G. VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 280-90 y en el aspecto que nos interesa PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte... pgs. 40408.



causa appellationis adire"<sup>(269)</sup>. Por consiguiente las concesiones de jurisdicción y de mero y mixto imperio suponen exclusivamente el conocimiento de las causas en primera instancia, nunca en segunda o en apelación. Pero "de facto" jueces inferiores al Rey, por mandato suyo o por privilegios, pueden conocer de las apelaciones, y de igual manera ocurre con algunos señores.

Efectivamente, desde mediados del siglo XIII encontramos toda una gama de oficiales a los que el Rey, por su mandato, ha facultado para el conocimiento de las apelaciones de jueces inferiores. Es el caso de los Adelantados Mayores<sup>(270)</sup>, de los - alcaldes de la Corte<sup>(271)</sup>, hasta el punto que se llegarán a crear unos alcaldes de las alzadas para el desempeño exclusivo de esta función<sup>(272)</sup>. Más tarde, como veremos luego, las alcaldías de las alzadas desaparecerán y recaerá esta función sobre la Audiencia y sobre el Consejo Real que, mediante un "fictio iuris", son considerados como si fuesen la misma persona, el "alter ego" del Rey, y de sus fallos, por tanto, no cabe otra posible apelación.

El Rey ha delegado en sus oficiales, pero no se ha desprendido, esta facultad inherente del señorío real. Cabe entonces plantearnos en qué términos podía ser concedida por el Rey la facultad de conocer las apelaciones a quienes el monarca hacía donación de un heredamiento. Desde luego ni el Espéculo ni el Fuero Real hacen alusión alguna a la posibilidad de que el Rey

---

(269) *Practicarum Quaestiones*, cap. IV, p. 400.

(270) Espéculo 4, 2, 11 y 12.

(271) Espéculo 4, 2, 11. Cortes de Zamora 1274 (CLC. I. p. 90)

(272) Cortes de Zamora 1274 (CLC. 19, p. 90); más adelante nos ocuparemos de estas alcaldías.

pueda conceder el conocimiento de las alzadas en un señorío. Por lo general, el Rey, al hacer concesión de la jurisdicción se reserva, como ya dijimos, en virtud de su Mayoría de Justicia la facultad de intervenir en caso de que aquella sea menguada, pero lo cierto es que se encuentran, si bien es verdad no muy abundantes, concesiones reales que llevan explícitamente la facultad de conocer las apelaciones en los señoríos".<sup>(273)</sup>

Las Partidas no reconocen la posibilidad de donación de las alzadas y, a nuestro juicio, en contra de lo que opina PEREZ DE LA CANAL<sup>(274)</sup>, no mantienen un criterio contradictorio

---

(273) Véase por ejemplo el privilegio de Alfonso X concediendo a su hermano Sancho, arzobispo de Toledo, la facultad de nombrar alcaldes y jurados a la villa de Santander, de la que era abad (.H.E. Doc. 38, pgs. 80-81). Véase también la sentencia de 1294 suscitada por un pleito entre el concejo y el Monasterio de Sahagún en la que Sancho IV falla "que la primera alçada sea para el abbat, para sus vicarias, y dende para nos" (GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 511, p. 354). En la concesión a García Álvarez de Toledo del Señorío de Valdecorneja y Oropesa por Enrique II, se concede "la justicia civil e criminal e alzadas e mero e mixto imperio" (documento publicado por S. MOXO: Los Señoríos. En torno a una problemática para el estudio del Régimen señorial en Hispania 95 (1964) apéndice documental, II, p. 402).

(274) "Las Partidas -dice el citado autor- mantuvieron acerca de este punto un criterio contradictorio, pues en tanto en un lugar admiten la donación de las alzadas, aunque con efectos limitados a la vida del cedente y de los sucesores que la confirmasen, en otro se establece terminantemente que "las alzadas deven ser para el rey que fizo la donación e para sus herederos" (La justicia en la Corte... p. 405).

En ellas, recogiendo la más pura tradición romana<sup>(275)</sup> se sostiene el principio de la Mayoría de la Justicia de Rey reflejado, precisamente, en el conocimiento por el Rey de las alzadas de los pleitos suscitados en los heredamientos<sup>(276)</sup>. Tampoco creo, como pretende el citado autor<sup>(277)</sup>, que la petición de las Cortes de Valladolid de 1325 haga referencia a las donaciones de poder conocer las alzadas y qué el Rey allí las

---

(275) Así se expresa, por ejemplo BALDO, al plantearse este problema: "Item si Imperator concedat alicui homines suos, non tantum videtur alineanare: quantum adhuc retinet maioritatem (Consilia, 333, vol. primum, ed. Venetia 1580).

(276) Partida 2, 15, 5: "E aun por mayor guarda del Señorío, establecieron los sabios antiguos, que quando el Rey quiesse dar eredamientos a algunos, que non lo podiese fazer de derecho, a menos que non retouiesse y aquellas cosas que pertenescen al Señorío: assi como que fagan de llos guerra, e paz por su mandado; e que vayan a la hues te; e que corra y su moneda, e gela den ende, quando gela dieren en los otros lugares de su Señorío; e que le fin que y justicia enteramente, e las alçadas de los pleytos..." Partida 5, 4, 9: "Pero no se entiende, que el da ninguna de aquellas cosas que pertenescen al Señorío del Reyno señaladamente asi como moneda o justicia de sangre. Mas si todas estas cosas fuessen puestas, e otorgadas en el preuillejo de la donacion: entonce bien passaria al logar, o a la persona, a quien fuese fecha tal donacion saluo ende de, que las alçadas de aquel logar, deuen ser para el Rey que fizo la donación, e para sus herederos".

(277) PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... p. 405.

confirma<sup>(278)</sup>. Lo que están pidiendo los procuradores al Rey es que retire los alcaldes que han sido puestos en las aldeas ubicadas en los alcóces y términos de ciudades y villas, así como en aldeas de behetría, solariego y abadengo, que "de iure" no les correspondía tener, ya que los pleitos de dichas aldeas debían ser librados por los alcaldes de las respectivas ciudades o villas en cuyo término estuvieran sitas las susodichas aldeas. Se hace excepción de aquellos territorios de señorío que tienen jurisdicción exenta y que, por tanto, los oficiales judiciales son puestos por el Señor.<sup>(279)</sup>

En las donaciones que los reyes hacían de heredamientos, la regla general era que el monarca siempre se reservaba la facultad de intervenir en caso de "mengua de justicia"<sup>(280)</sup> y la concesión de jurisdicción, aunque sea propiedad y por razón del territorio, y la del mero y mixto imperio, ha de entenderse

---

(278) "Otrosi alo que me pidieron por merçed quelas aldeas que sson en las alfoçes e en los terminos delas mis çibdades e villas, e las aldeas sson behetrias e solariegos e abbadengos, e an de venir a juiçio alas mis çibdades e villas, e aquellos cuyas sson las aldeas ponen en ellas escriuanos, e alcalles e abenidores, que atales alcalles e escriuanos e atales abenidores que sean tirados ende; ca esto se pierde la jurediçion delas mis çibdades e villas, en enagenasse la mi justiça, e los mios merinos e los alcalles e las otras justiças que andudiern por mi, que non consientan que atales offiçiales commo estos usen delos dichos offiçios, e que uayan affuero e a juiçio allo do ffueron en tiempo delos rreyes onde yo uengo; et si usar quisieren de los offiçios, queles recabden los cuerpos e quanto les ffallaren, ssaluo los caualleros e omes buenos delas çibdades e delas villas que an priuilegios e cartas delos rreyes onde yo uengo, en queles dieron sennorio apartado (CLC. I, 9, pgs. 375-6).

(279) Ver texto de la nota anterior.

(280) Vid nota 229.

siempre en cuanto a la primera instancia y nunca en cuanto a las apelaciones.<sup>(281)</sup>

Esta situación parece que no esta perfectamente aclarada y por ello Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá trata de salir al paso, ya que pese a la prohibición expresan que hacen los textos de "algunos libros de las partidas, é en el fuero de la leys, é façannas, é costumbre antigua de España, é Ordenamientos de Cortes" de hacer donación de aquellas atribuciones inherentes al Señorío Real, existen, de hecho, tales privilegios<sup>(282)</sup>, por ello el Rey reafirma su posición en virtud de su mayoría podrá "facer justicia si los Sennores la menguaren", por tanto, si aun cuando por vía de privilegio -como de hecho los hay- ha sido concedida a algún señor la facultad de conocer las primeras alzadas, siempre queda la posibilidad, si alguna de las partes se considera agraviada por el fallo del señor, de acudir a la jurisdicción real.

Pero parece que la solución alfonsina no tuvo todo el efecto deseado y la situación debió agravarse más a raíz de la guerra civil entre Pedro I y Enrique II a tenor de la petición que a éste último le presentan los procuradores en las Cortes

---

(281) "Hodie autem in dubio cessante privilegio vel consuetudine, iurisdictio cohaeret persona regiae, ut probavi supra cap. I et ideo quando rex Castellae concesserit castrum, villam, aut quemlibet alium locum an concessa videatur iurisdictio, et merum imperium, vil an redditus, e iura regalia: spectanda sunt verba concessionis, et standum est dispositioni dictae legis regie, quae est nova at elegantissima decisio, plura dubis, quae iure communi erant, exterminas. In cuius legis vera praxi addendum est semper, nullius etiam latissimis et amplissimis verbis comprehendit, ut suprema dictio, vel re cognitio Regi nostro Castellae debita, concessa videatur: quia illa avelli et separari a persona regia, non

de Toro<sup>(283)</sup>. En esta no se hace ninguna alusión a que los señores conozcan las apelaciones, sencillamente se quejan de que no llegan a los alcaldes de la Corte las alzadas de las sentencias que dictan los alcaldes de señorío como era "usado e acostumbrado enel tienpo del Rey don Alfonso", porque a ello se oponen al parecer, algunos señores<sup>(284)</sup>. En este mismo sentido vuelven a insistirle a Enrique II siete años más tarde en Burgos.<sup>(285)</sup>

---

(281) /...potest (NÚÑEZ DE AVENDANO: De exenquendis mandatis regnum Hispaniae, Salamanca 1564, cap. V, fol. 63v) o también: "Concessio iurisdictionis, meri et mixti imperii, etiam in proprietatem et ratione territorii, intelligitur quo ad primam instantiam, non autem in secunda, nec quo ad causas appellationis. Hoc etenim ius cognoscendi de causis appellationum in dubio non censetur concessum, sed competit (COVARRUBIAS: Quaestiones Practicarum, cap. IV, p. 402).

(282) Ordenamiento de Alcalá 27, 3.

(283) Cortes de Toro 1371: "ante seyendo usado e acostubrado enel tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, ante e despues, quelas alçadas delas sentençias que se fazen delos alcalles delos tales sennorios que benien ante alos nuestros alcalles dela nuestra corte, et eso mesmo las querellas delos tales alcalles para lo oyr e librar". (CLC. II, 5, p. 205).

(284) Cortes de Toro 3171 "...algunos grandes omes delos nuestros rregnos que no dexauan husuar la nuestra juredición e sennorio rreal en sus lugares" (CLC. II, 5, p. 205).

(285) "...quelos vezinos e moradores dellos (los lugares de señorío) quisieren apelar delas sentençias que contra ellos fueron dadas por los sennores dellos o por los sus alcaldes, sentiendose dellas por agraviados, por ante nos o para ante los nuestros alcaalles, quello puedan fazer" (CLC. II, 14, pgs. 282-3).

La resistencia de la nobleza a conceder las alzadas por una parte, y la impotencia del Rey frente a ella por otra, llevaron a Juan I a reconocer esta situación de hecho en las Cortes de Guadalajara de 1390. A partir de este momento todos los vecinos y moradores de los lugares de señorío que se sientan agraviados por la sentencia dada por el alcalde del señorío de la que quepa apelación, tendrá que acudir previamente en apelación ante su señor o el lugarteniente de éste, salvo en aquellas villas o lugares que por costumbre y "segund siempre se vsó" llevaban sus causas a determinadas ciudades o villas en primera i instancia. Sólo una vez cumplido esto si aún se sentían agraviados por el fallo otorgado en apelación por el señor, cabía recurrir a la jurisdicción real y a sus alcaldes <sup>(286)</sup>. Vemos, por tanto, como la posibilidad de conocer las apelaciones por parte de los señores, que hasta el momento era algo excepcional, se ha convertido en la regla general del sistema, es decir, - a partir de 1390 todos los señores, sin discriminación, que tenían jurisdicción sobre algún territorio podrán conocer las primeras alzadas de su señorío. De esta forma quedaba zanjado un problema que parecía insalvable. Juan I, bajo la excusa de querer "tenplar el rrigor dela dicha ley", ha accedido a las aspiraciones señoriales de lograr una mayor inmunidad en sus territorios.

No podemos precisar hasta qué punto se cumplió lo dispuesto en la ley de Guadalajara, pero lo cierto es que ha de pasar más de medio siglo antes que volvamos a tener en las Cortes quejas acerca de la negociación de otorgar apelaciones ante -

---

(286) Cortes de Guadalajara 1390 (CLC. II, 9, pgs. 430-2).

el Rey por parte de los señores. Efectivamente, los procuradores de las Cortes de Valladolid, protestan a Juan II de que "ante vuestra merçet nin corte nin Chançelleria non viene pleyto de ninguna çibdat nin villa de sennorio, enlo qual son mucho agrauados vuestros subditos e naturales e en grant menguamiento de vuestra jurediçion rreal"<sup>(287)</sup>, a lo que el Rey contesta que se cumpla la ley que su abuelo dió en Guadalajara. En definitiva aunque esta ley suponía en parte una mengua de la jurisdiccion real, reconocía en última instancia la mayoría de justicia del Rey.

Ante este abuso por parte de los señores jurisdiccionales se acudirá a una vía prevista en la Partidas<sup>(288)</sup> según la cual, pese a establecerse en este cuerpo legal que la alzada se ha de interponer "subiendo de grado en grado" cabe la posibilidad de "tomar primera alçada para el Rey", fundamentada precisamente en que "el Rey ha Señorío sobre todos, e puedelos judgar" es decir, se fundamenta la apelación "omisso medio" en la "Mayoría de justicia del Rey. Esta alternativa de apelar "omisso medio", fué, por tanto, la contrapartida ante los abusos señoriales y parece generalizarse a partir de mediados de siglo XV de forma que llegó a convertirse en la vía común de recurrir contra las sentencias de los alcaldes de señorío como recogen

---

(287) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 27, pgs. 428-9).

(288) Partidas 3, 23, 18: "...Pero si alguno quisiese luego tomar la primera alçada para el Rey, ante que passasse por los otros Juezes, dezimos que bien lo puede fazer. E esto, porque el Rey ha Señorío sobre todos, e puedelos judgar". Este precepto no hace otra cosa que recoger prácticamente a la letra, otro igual que se contenía en Espéculo 5,14,13.



la Peregrina<sup>(289)</sup> y otros autores posteriores.<sup>(290)</sup>

De cualquier modo esta medida no acabó con los obstáculos que los señores jurisdiccionales ponían a sus vasallos para im-

---

(289) "Omissis mediis. In locis dominorum Castelle primo ad dominos eius loci et postea ad reges appellat. E quod sit pena domini non permittetis ad regem appellari... et sic in Castella ubi potest omissio medio appellari ad principem..." (B. GARCIA: Peregrina a compilatore glosarum dicta Boni-facia, 1498, fol. 46 v).

(290) Así se expresan, por ejemplo, GREGORIO LOPEZ: "Sed an etiam in terris magnatum, et dominorum appellatur ad Regem, omissio tali domino; per istam legem videtur quod sic, et licet lex Ordin. Regis Joan I in Guadalajara, hera MCCCXC. dicat primam appellationem interponenda, ad dominos villarum, del eorum locum tenentem, et inde ad Regem: procedet, nisi et quis velit appellare ad Regem, omissio domino et ita servatur in practica... (Glosa a "Rey" de Partidas 3, 23, 18), COVARRUBIAS: "Quamvis iure regio domino oppidorum ex d.l. Guadalaiaara, aliove legitimo titulo ius habeant primarum appellationum, que a iudicibus ordinariis proponuntur: potuerunt tamen subditi liberi omissio medio ad regem eiusque; curiam provocare... Sic sane apud Regia Castellani suprema tribunalia passim admittuntur appellationes, quae sunt et proponuntur, etiam omissio medio nobilium dominorum iurisdictionem habentium tribunalis, cuius quidem tribunalis cognitio pertinet ad eas appellaciones, quae fuerint ad id tribunalis delatae. Haec autem praxis potuit originem ducere a regia lege partitarum, quae permittit appellaciones ad Regem deferri, ad eiusque curiam omissio medio: quem ad modum decisum extat in l.18, tit. 23, part. 3". (Quaestiones Practicarum, cap. Iv, p. 403), o ALFONSO DE AZEVEDO: "Itidem notandum est quod de iure civili non licet appellare omissio medio etiam ad Imperatorem... de iure vero regio appellari potest omissio medio, ad Regem, qui est ordinarius in toto regno..." (Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regias constitutiones, t. II, p. 432, ed. Lyon 1737).

pedir que acudieran a la jurisdicción real<sup>(291)</sup> ni tampoco por ello se abandonó por parte de los Reyes la costumbre de seguir concediendo señoríos que llevaban la facultad de conocer las primera alzadas, si bien en ellos ya se encuentra una fórmula más completa de reserva de justicia en la que expresamente se recoge la posibilidad de acudir ante la Audiencia y Chancillería de los fallos dados por el señor o su alcalde mayor.<sup>(292)</sup>

---

(291) "...deviendo ser fáciles en otorgar las apelaciones, respetando y reverenciando a los Consejos y Chancillerías Reales: y vemos que de ordinario procuran (los señores) que no se apele para ante los dichos Superiores, y tienen odio y ojariza a los que apelan ante ellos, y para retener las causas usan de industrias, moderando las penas, y facilitando los sucesos: en lo qual el Rey es defraudado en sus penas fiscales que le pertenecen de lo que sentencia sus jueces, como adelante diremos, y su jurisdicción es disminuida, y a los vasallos no se les administra devidamente justicia: los quales podran alegar por esto justa causa de miedo contra los señores, y ellos ser condignamente punidos, sin que se puedan ayudar de la dicha ley de Guadalupe para esto, por que la jurisdicción que por ella se les da es acumulativa, para que se pueda apelar al Señor, o al Rey, y no privativa; como quiera que el Rey que la concedió no se privó de la potestad de desagraviar a los que apelassen ante el, o ante sus tribunales" (CASTILLO DE BOVADILLA: Política para corregidores y señores de vasallos, t. I, lib. II, cap. 16, num. 81, p. 461, ed. Amberes 1704, reimpr. Madrid 1978).

(292) "...e retenemos en Nos la soberanía de nuestra justicia real, e que las apelaciones de vos e vuestro alcalde mayor, vayan ante Nos e ante nuestro oidores de la nuestra Audiencia e Chancillería a que Nos fagamos e mandemos facer -

En todo caso lo que ahora nos interesa realmente poner de relieve es que en todo momento, pese a las quiebras que se hayan podido producir ya sea por vía de privilegio o por abuso por parte de los señores jurisdiccionales, se reconoce al Rey la suprema potestad jurisdiccional según la cual puede revisar los fallos de todos los jueces inferiores.

Finalmente hemos de hacer también referencia a la concesión que por vía de privilegio los reyes han concedido a determinadas ciudades para que puedan conocerse en ellas las distintas apelaciones sin tener necesidad de acudir a la Corte<sup>(293)</sup>, pero ello no obsta para que los habitantes de dichas ciudades puedan en todo momento renunciar a dicho privilegio y acudir "omisso medio" ante la jurisdicción real de la Corte.

---

(292) /...justicia en el dicho lugar cada que nos fuere pedida e Nos vieremos que cumple a nuestro servicio de la mandar facer" (1494, Concesión de los Reyes Católicos del Señorío de Gor. A.G.S. Patronato Real 59-13). Fórmula muy parecida emplean los Reyes Católicos en una concesión al Marqués de Villena en 1492 (Vid. MOXO: Los Señoríos. En Tor no... apend. VI, p. 411).

(293) Es el caso, por ejemplo, de Sevilla (vid. J. GUICHOT Y PAROY: Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 1896, 2 vol. t. I, p. 78; SANZ ARIZMENDI: Organización social de Sevilla en el reinado de Alfonso XI, Sevilla 1902, pgs. 19 y ss. y E. SAEZ: Ordenamiento sobre Administración de Justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360 en AHDE 17 (1946), pgs. 712-50) por privilegio de Alfonso X (vid. BENAVIDES: Memorias..., doc. 245, pgs. 371-2); Concesión semejante hizo Alfonso X a Murcia (CASCALES: Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia, Murcia 1621, fol. 47. El documento puede verse publicado en M<sup>2</sup>H.E. t. I, doc. 128, p. 279) En otros casos, al conceder el Rey el fuero de una villa a otra, generalmente la primera apelación se resuelve en la villa de procedencia del

El último aspecto en el que se manifiesta y se hace más patente la supremacía jurisdiccional o mayoría de Justicia del Rey es en la facultad de poder dispendar aquellas sentencias firmes que hubieran visto agotados los distintos grados de apelación o, incluso, los fallos dictados por el propio monarca.

Esta vía de "merced" y ~~no~~ de justicia estrictamente, está fundamentada en razones de equidad para el "templamiento de la rezedumbre de la justicia"<sup>(294)</sup>, y está encaminada a la revisión de una decisión inapelable. Podría pensarse, como ya señaló el prof. VILLAPALOS<sup>(295)</sup>, que la suplicación o "vía de merced" supone revisar la legalidad de una sentencia, pero, para el citado autor, es precisamente este último aspecto lo que le da recurso su carácter esencialmente judicial ya que lo que va a ser objeto de revisión no es un acto cualquiera, sino una sentencia, y ello sólo puede realizarse bajo las garantías del proceso.

---

(292) /...Fuero. Es el caso de Villaviciosa, Pola de Siero, Nava, Luarca y otras villas a las que se les concede el Fuero de Benavente; en el privilegio de concesión aparece expresamente que la primera apelación se hará en Benavente y de ahí al Rey (vid. M. SANGRADOR Y VITORES: Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias, Oviedo 1866, reimpresión 1975, pgs. 109-112).

(294) Partidas 3, 24, 1; La Peregrina dirá "ut rigor temperet iustitiae" (fol. 473 v.).

(295) Los recursos... p. 291.

El Rey, como ya hemos tenido ocasión de ver, es "supremus iudex" y, como tal, no tenía ningún superior judicial que pudiera revisar sus decisiones, pero, al mismo tiempo, la obligación por parte del Rey de hacer justicia a sus súbditos configuró el recurso de suplicación de tal forma que, pese a ser planteado por merced, se resolvía formalmente con los trámites y garantías procesales. (296)

La "vía merced" ya viene recogida en el Espéculo<sup>(297)</sup>, pero al contrario que las Partidas, no se le dedica un título concreto para su regulación. La razón, a nuestro juicio, radica en que el texto del Espéculo ha llegado a nosotros incompleto, bien porque no se terminara de redactar la obra, bien porque se ha perdido los libros restantes<sup>(298)</sup>. Basamos tal afirmación en una referencia que hace el propio texto legal que remite el propio título a unas leyes que no se encuentran en el Espéculo<sup>(299)</sup>. Efectivamente, nos encontramos con que a continuación de la citada ley, el Espéculo regula las alzas acabando en la ley 23 sin hacer la más mínima referencia a la "merced". Pero si acudimos a las Partidas, podemos observar cómo precisamente a continuación del título 23 de la Partida 3a. dedicada a

---

(296) Los recursos... p. 291.

(297) Espéculo, 5, 14, 11 y 12.

(298) Sobre ellos véase a A. GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... pgs. 636-7, nota 61.

(299) Espéculo 5, 14, 11: "...E el emperador o el rey puede caber tal ruego, si quisiere fazer merced en la manera que adelante mostraremos en este título, en las leyes que fablan en esta razon..."

regular las alzadas, se encuentra un título exclusivo en el que se recoge la "vía merced". Esto nos lleva a suponer que posiblemente el Espéculo recogiera también la regulación de dicha vía que, por desgracia para nosotros, desconocemos si fue recogida por las Partidas inspirándose, como en otras tantas cosas, en aqué<sup>lo</sup> o si, por el contrario, éstas suponen una auténtica innovación en este punto. No obstante, en último extremo, lo que nos interesa destacar es que ya en el Espéculo, aunque desconozcamos su regulación, se recoge una serie de casos en los que, ante la inapelabilidad de la sentencia, cabe acudir al rey por merced.<sup>(300)</sup> Posteriormente sera recogido por el Fuero Real<sup>(301)</sup> Leyes del Estilo<sup>(302)</sup> y Partidas<sup>(303)</sup>, al igual que algunos ordenamientos de Cortes añadirán requisitos de menor importancia.<sup>(304)</sup>

En principio, dada la naturaleza y excepcionalidad del recurso, éste sólo competía a la persona del Rey, si bien, como tendremos ocasión de ver, esta facultad fue delegada a algunos jueces de la Corte con lo que la suplicación perdió ese carácter excepcional para convertirse en un recurso ordinario, ante lo que reaccionan las Cortes, pues "las supricaciones se deuen fazer al rey solamente et en la su merçed es delas rreçcbir si viere que cunple o non"<sup>(305)</sup>. El Rey accede a que "non aya en la mi Corte alcalle nin oydor ordinario delas supricaciones" y

---

(300) No cabe apelación del Rey, o del tutor del mismon, ni del Rey menor de edad, de los "jueces de avenencia" y otros caos que se recoegen en Espéculo 5, 14, 11. Tampoco cabe apelación del fallo del Adelantado Mayor de la Corte como expresa el Espéculo 5, 14, 12.

(301) Fuero Real 1, 2<sup>a</sup> 1.

"quando alguno supricare, que paresca ante mi enel tienpo que se contiene en la ley que el Rey don Alfonso mio padre", "no obstante, Pedro I se reserva la facultad de encomendar el libramiento de la suplicación "a qui yo touiere dpor bien", o bien librarla él personalmente como corresponde.<sup>(306)</sup>

A finales del siglo XIV se atribuirá el conocimiento de las suplicaciones a la Audiencia<sup>(307)</sup>, aunque en determinados casos cabía la posibilidad de suplicar por segunda vez ante la persona del Rey<sup>(308)</sup>. Tres años más tarde se autorizó la posibilidad de interponer, en pleitos muy graves de gran cuantía económica, una segunda suplicación ante el Rey en la que al recurrente se le obligaba depositar una fianza de mil quinientas doblas para que "la malicia de aquellos que soplican por alongar los pleitos non aya lugar", perdiendo dicha cantidad si "fuere fallado quela dicha sentençia de los dichos oydores fue bien dada confirmando la-<sup>(309)</sup>

---

(302) /...Leyes del estilo 51, 30, 171, 172, 173.

(303) Partidas 3, 23, 1.2.3.4.5 y 6.

(304) Cortes de Zamora 1301 (CLC. I, II, pgs. 154-5), Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 36, p. 205), Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, II, p. 237).

(305) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 35).

(306) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 35).

(307) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, pgs. 384-6).

(308) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, pgs. 384-6).

(309) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, pgs. 476-9).

Pero además de aquellos casos en los que, agotada la vía de las apelaciones, sólo cabía acudir a la merced real, había que recurrir a esta vía cuando el rey con un acto suyo agravaba a cualquier corporación o particular<sup>(310)</sup>, y cuando decimos un acto del Rey tenemos que incluir también los actos del Consejo Real que, como tendremos ocasión de ver, sólo son objeto de suplicación debido a la naturaleza jurídica del propio Consejo considerado como la persona del Rey.

Finalmente había que acudir a la vía de merced para pedir el resarcimiento de cualquier agravio que se hubiese recibido por los oficiales reales<sup>(311)</sup> y, como señala PEREZ DE LA CANAL<sup>(312)</sup>, los reyes usaron frecuentemente de este poder correctivo ante las quejas suscitadas por la actuación de sus distintos oficiales.

---

(310) Fuero Real 1,2,1; véase también PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte... pgs. 41-2.

(311) Partidas 3, 24, 2.

(312) La justicia en la corte... pgs. 410-11.



109 61

## CAPITULO II

La proyección del poder jurisdiccional del Rey

### LA PROYECCION DEL PODER JURISDICCIONAL DEL REY

En el capítulo anterior veíamos desde una amplia panorámica el cambio que supuso la transición de la Alta a la Baja Edad Media de cara a la configuración del poder real. Veíamos los factores que contribuyeron a esta evolución; las diferentes alternativas a las que estuvo sometido tal poder hasta conseguir una independencia frente al Papado y frente al Imperio; las limitaciones ya sean religiosas, jurídicas o políticas que condicionaban la actuación del Príncipe, y, finalmente, los medios de los que éste disponía para poder hacer frente a estas limitaciones.

Veíamos también como el carácter de "supremus iudex", característico de la finalidad del poder real, se vio reforzado por los principios autocráticos procedentes del Derecho romano-canónico y como su indiscutible poder jurisdiccional fue el medio más eficaz para el fortalecimiento y consolidación del poder real frente a las distintas fuerzas políticas del Reino.

En un segundo apartado nos deteníamos a esbozar el contenido de la suprema jurisdicción o "mayoría de justicia" del Rey señalando aquellos casos en los que el Rey, ya fuera por razón de la materia o por razón de la persona, hacía prevalecer su jurisdicción.

Ahora, en este segundo capítulo, nos vamos a detener a estudiar la proyección del poder jurisdiccional del Rey en los diferentes ámbitos del Reino, el central, el territorial y el local, como cauce a través del cual la realiza castellana verifica su consolidación y su centralización político-administrativa poniendo las bases del "Estado absoluto" que adquirirá su plenitud en los siglos XVI, XVII y XVIII.

El simple esquema administrativo de los siglos alto-medievales sufrió también una profunda transformación como consecuencia del proceso de robustecimiento del poder real. La Curia, el órgano de participación de algunos sectores de la Comunidad en el gobierno del Reino, ha entrado en crisis; el monarca tiende a concentrar y supervisar personalmente cualquier tipo de decisión. La participación de los distintos estamentos del Reino queda plasmada entonces en otra institución que adquiere verdadero auge en los siglos XIII y XIV: las Cortes. Sólo cuando éstas comienzan a dar síntomas de ineficacia, las ciudades, aprovechando una coyuntura favorable, pretenden más una participación activa mediante su inclusión en el Consejo Real, pero su intervención será efímera como tendremos ocasión de ver.<sup>(1)</sup>

(1) Sobre este punto en concreto trataremos más adelante en el capítulo dedicado al Consejo Real.



La tendencia por parte de los monarcas, muy clara ya a partir de Fernando III, de acaparar e intervenir en toda actuación política va a propiciar necesariamente el desarrollo de todo un aparato administrativo, cada vez más tecnificado y complejo impuesto por el creciente auge de la vida social<sup>(2)</sup>, que llega a convertirse en una entidad propia por encima de la comunidad. Para llegar a conseguir estos fines, el Monarca necesariamente ha de dotarse de un complejo cuadro de órganos y oficiales, "un nivel técnico de actuación de carácter auxiliar", encaminado a cubrir las necesidades de la nueva realidad político-administrativa.<sup>(3)</sup>

Saldría del objeto del presente estudio entrar a pormenorizar en el concepto de "oficio" y sus elementos configuradores<sup>(4)</sup>, así como toda la problemática que se cierne en torno a la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción delegada,<sup>(5)</sup> baste

- 
- (2) Sobre este fenómeno véase el trabajo de HASKINS, ya citado, The Renaissance of the 12 th, Century. Para el ámbito que nos ocupa y en aspectos más concretos, pueden verse los trabajos de M. del C. CARLE Mercaderes en Castilla (1252-1512) en CHE 21-22 (1954); L.G. DE VALDEAVELLANO: Orígenes de la burguesía medieval, Madrid 1969 y El mercado, apuntes para su estudio en León y Castilla durante la Edad Media, Sevilla, 1975, 2a. ed.
- (3) En este sentido se expresa TORRES SANZ: La administración central castellana en la Baja Edad Media, tesis doctoral inédita, pgs. 35-9.
- (4) Al respecto véase el trabajo del profesor GARCIA MARIN: El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media Sevilla, 1974.
- (5) Véase también GARCIA MARIN: El oficio público... pgs. 36-46.

señalar aquí que el Rey, centro imputador de toda jurisdicción ante la imposibilidad de ejercerla personalmente en todos y en cada uno de los territorios, ciudades y villas del Reino, desde muy pronto, siguiendo la tradición romana, se ha visto en la necesidad de delegar la potestad jurisdiccional que en él reside, y así, la justicia, ya sea en el ámbito local o en el central, se administró siempre en nombre del Rey como tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior.

Los monarcas castellanos, durante la Baja Edad Media son plenamente conscientes de la finalidad de su poder y aún más, son plenamente conscientes de que sólo pueden fortalecer su poder a través de una rígida y eficaz administración de justicia<sup>(6)</sup>, por ello, desde el reinado de Alfonso X asistimos a un progresivo fortalecimiento de los poderes y órganos judiciales que culmina dos siglos y medio más tarde en el reinado de los Reyes Católicos tras un lento y costosísimo proceso al que se oponían los distintos estamentos del Reino.

La proyección de la "mayoría de justicia" del Rey se produce en una triple dirección intentando abarcar todos los ámbitos del Reino, por ello, con independencia de que en los

---

(6) En el aparato judicial, posiblemente más que en ninguno de los otros resortes del estado, es donde se encuentra en el período que ocupa nuestro estudio, la solidez y la posición del monarca respecto a los distintos estamentos del Reino. En los capítulos siguientes tendremos ocasión de ver la relación que existe de efecto- causa entre el poder real y su organización judicial.

capítulos sucesivos nos ocupemos fundamentalmente del ámbito central y territorial como objetos del presente estudio, hemos creído oportuno ofrecer una panorámica general de cómo se fué configurando la administración de la justicia real ordinaria en cada uno de los ámbitos, central, territorial y local hasta llegar a formar una uniforme estructura orgánica con sus reglas de competencias -avocatorias e inhibitorias- perfectamente delimitadas, sometida en todo momento a unas garantías lejos de cualquier arbitrariedad.

Lógicamente, en el primer ámbito en que se manifiesta esta proyección de la justicia del Rey es en la Corte.

Durante la Alta Edad Media el Rey y su Curia han venido juzgando las causas que ante el Monarca se presentaban en sus desplazamientos por el Reino. Generalmente, ante una controversia, el Rey designaba entre los miembros de la Curia unos "iudices" para entendieran del pleito aunque éste apareciera siempre fallado por el Rey. Pero la presencia en la Corte del Rey de "jurisperitos", es decir, técnicos en Derecho, hizo que desde el siglo XII, tal vez antes, la designación de tales "iudices" recayera sobre aquellos, siendo sustituidos los antiguos curiales en estas funciones.<sup>(7)</sup>

---

(7) Véase más adelante el Capítulo III, notas 20, 21, 23 y 24.

Es en el reinado de Alfonso X cuando definitivamente queda estructurada y remodelada la justicia de la Corte. Posiblemente gran parte de las reformas alfonsinas ya se habían fraguado en el reinado de su padre, Fernando III, pero ahora, Alfonso X, imbuído por los principios fuertemente centralistas procedentes del Derecho Romano-canónico, se lanza definitivamente a la reforma de la Administración. Es difícil precisar el alcance de esta reforma. Los estudios acerca de la organización administrativa de los últimos siglos del alto medievo no nos permiten valorar de un modo satisfactorio y precisar exactamente lo que supuso de cambio la reforma de la Administración propugnada por el Rey Sabio en el *Espéculo*. Este texto legal nos muestra un aparato administrativo perfectamente coherente y delimitado funcionalmente al servicio del Monarca, si bien son todavía muy patentes en muchas ocasiones los vínculos personales de fidelidad.

En lo concerniente a la Administración de Justicia, el *Espéculo* nos ofrece un esquema judicial perfectamente graduado en cuyo vértice se encuentra, como es natural, el Rey, pero al mismo tiempo nos testimonia la actuación de una serie de oficiales que desempeñan su función judicial en el ámbito de la Corte.

Inmediatamente después de la figura del Rey se halla el Adelantado Mayor de la Corte. Oficial ciertamente enigmático en cuanto que, pese a la enorme importancia que tal oficio le confería desde el momento en que de su fallo "ninguno non se puede alzar del", las fuentes documentales, narrativas

y legislativas, a excepción del propio Espéculo no nos han dejado constancia de su existencia. Se trataba del oficial de mayor categoría del Reino<sup>(8)</sup>, y por ello de su sentencia no cabía alzada, aunque bien se podía pedir "merced al rey".

Descendiendo en la pirámide judicial nos encontramos con los "Adelantados mayores de las comarcas". De estos oficiales el Espéculo nos da un carácter mixto en cuanto que aparecen configurados como oficios que desempeñan su jurisdicción tanto en la Corte como en los territorios "onde son adelantados". Por ello, se les faculta a nombrar lugarteniente que se encargará de librar los pleitos que a él llegaren en su ausencia. De la existencia de estos Adelantados Mayores de las comarcas tenemos abundantes testimonios en todo tipo de fuentes. Sin embargo de su actuación en la Corte como jueces de alzada de los alcaldes de Corte no nos ha llegado sentencia, ni referencia alguna que nos pueda confirmar lo dispuesto en el Espéculo al respecto; tan sólo desde los primeros años del reinado de Alfonso X aparecen Adelantados Mayores de la Frontera, Castilla o León confirmando en los documentos reales. Sin duda, este carácter mixto de oficial de la administración central y territorial simultáneamente muy pronto quedó circunscrito al último de estos ámbitos, si nos atenemos a la abundante

---

(8) Espéculo 5, 14, 12: "E esto es por la meioria que a sobre todos los oficiales del regno".



documentación que ha llegado hasta nosotros.<sup>(9)</sup>

Los Adelantados Mayores aparecen en el Espéculo como los jueces de alzada por antonomasia. En la Corte entienden de las alzadas interpuestas de las sentencias dictadas por los "alcaldes de casa del Rey"; en los territorios, son jueces de apelación de los fallos de los "adelantados menores" o "de las merindades".<sup>(10)</sup>

Finalmente, en el mismo ámbito de la Corte, nos encontramos con los "alcaldes de la Corte" o "de casa del Rey".<sup>(11)</sup> Estos alcaldes de Corte son, sin duda, los herederos de los "iudices curiae" altomedievales. Sorprendentemente el Espéculo no nos delimita cuales eran las competencias de estos alcaldes, no obstante debemos suponer que conocerían de los "casos de corte" y actuarían como jueces de apelación en los lugares en los que se estableciera la Corte en sus desplazamientos por el Reino.

El esquema judicial propugnado por Alfonso X en el Espéculo parece que se mantuvo sin alteraciones durante más de una década. A finales de los años sesenta, sin que podamos determinar exactamente que causas le movieron a tomar tal medida, el Rey ha suprimido el sistema de Adelantamientos en Castilla y en León restaurando el antiguo oficio de Merino Mayor en estas circunscripciones. Esta supresión no ha sido del agrado de parte de la

(9) Gran parte de ella ha sido recogida por el profesor R. PEREZ BUSTAMANTE en su reciente trabajo El Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474), Madrid 1976.

(10) Así aparecen denominados en Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 12.

(11) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 5.

gran nobleza castellana que, junto con otras quejas concernientes a la administración de justicia,<sup>(12)</sup> reacciona y se levanta contra el Rey.

Este levantamiento dió al traste con parte del esquema judicial que se estableció en el Espéculo y su plasmación práctica fue recogida en las "problemáticas" Cortes de Zamora de 1274.<sup>(13)</sup> En ellas, se mantenía intacta para Castilla la organización judicial que establecía el Espéculo, poniéndose de nuevo al frente de tal circunscripción un Adelantado Mayor, en cambio para León, Extremaduras, Toledo y Andalucía desaparecía el Adelantado Mayor como juez de apelación para instaurarse un tribunal colegiado formado por tres "omes buenos entendidos e sabidores" quienes eran los encargados de conocer en la Corte en grado de apelación los fallos dictados por los Alcaldes de Casa del Rey.

No tenemos datos que nos permitan constatar si fue en su totalidad puesto en práctica lo dispuesto por las Cortes de 1274, pero en lo concerniente al Adelantado Mayor de Castilla así como al tribunal colegiado de "omes buenos entendidos e sabidores", tenemos muchas reservas.

Desde finales del siglo XIII aparece dentro del cuadro de oficiales de la Corte la figura del "alcalde de las alzadas"

---

(12) Véase la Crónica de Alfonso X, caps. 23, 24, 25 y 26. pgs 19-23.

(13) Sobre la autenticidad y valor práctico de estas Cortes nos pronunciamos en el capítulo siguiente.

En principio se podrían pensar en que se trata de un sucesor de esos alcaldes de alzadas que se establecían en Zamora, pero lo cierto es que este nuevo alcalde actúa unipersonalmente, en contra de la colegialidad de los anteriores, y hay uno al frente de Castilla y otro para León.

Es característico de la organización judicial desde mediados del siglo XIII la designación de alcaldes de Corte en razón a su tierra de origen, estableciéndose generalmente el mismo número de alcaldes para cada una de las circunscripciones. La razón de esta diversidad de alcaldes de corte, o de alzada en su caso, viene dada por la diversidad jurídica de cada una de estas regiones. La división entre unos "pleitos foreros" y "pleitos del rey" hace que necesariamente en la Corte se encuentren "omes sabidores" del Derecho de cada una de las regiones de la Corona. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIV, y sobre todo ya en el siglo XV, a raíz del Ordenamiento de Alcalá, esta división de alcaldes de Corte en razón de su territorio o "provincia" empieza a carecer de sentido por la entrada en crisis de los Derechos locales, cada vez menos aplicados, con lo que la distinción entre unos pleitos en los que se aplica el Derecho del Rey ("casos de corte") y unos pleitos en los que se aplica el correspondiente Derecho local - - ("pleitos foreros") ha dejado de tener razón de ser. La primacía cada vez mayor del Derecho real territorial, la creación de órganos jurisdiccionales con competencia sobre el territorio de la -- Corona sin distinción (La Audiencia) y un mayor intervencionismo en la esfera local por parte del monarca, ha ido desdibujando esa distinción inicial de los pleitos, por ello, desde finales del siglo XIV, los alcaldes de la Corte han perdido también la denominación de su territorio de origen para quedar como "alcaldes

de las prouincias" genéricamente, y ya en el siglo XV como "alcaldes de Corte y Chancillería".

Otro fenómeno de gran importancia de cara a la administración de justicia de la Corte es la integración definitiva de los alcaldes de Corte y alzada en la Chancillería. A partir de este momento, documentado ya en tiempos de Sancho IV aunque quizás se sucedía desde el reinado anterior, se va a producir una distinción, todavía no muy clara pero que en el siglo XV se plasma definitivamente, entre la Casa y Corte del Rey, y su Corte y Chancillería. Ambas son consideradas como "Corte"; en una se encuentra el rey en persona, en otra el sello del Rey.

Esta separación supone, en cierta medida, una escisión de la Administración central; por un lado el Rey, sus oficiales domésticos y el sello de la "poridat", y por otro, la Chancillería con toda la administración judicial de la Corte, que a partir de ahora quedan identificadas hasta el punto que el término "Chancillería" se tomará como sinónimo de "tribunal".

Pero la separación material del Rey y su Corte en la Chancillería y sus alcaldes no impide que el Rey, máximo juez del Reino, siga conociendo de los pleitos que se le van presentando en sus desplazamientos por los distintos territorios de la Corona, sino que, por el contrario, los procuradores insisten una y otra vez en las Cortes, ante el abandono por parte de los monarcas, que el Rey se siente en público a librar las peticiones de justicia personalmente.

Dada la imposibilidad de asesorarse de su cuerpo técnico de alcades de Corte, el Rey, mal conocedor de la complicada técnica del Derecho Romano-canónico dominante, se ve obligado,

quizás también por tener que ocuparse de asuntos políticos de más trascendencia, a delegar y comisionar entre aquellos que le acompañan y asesoran en sus "audiencias públicas" el conocimiento de los litigios que ante él son presentados. Estos "oydores", que actúan comisionados para cada caso concreto, muy pronto se convertirán en jueces con jurisdicción ordinaria ante el acopio de causas que llegan ante el Rey. De esta forma nació la Audiencia.<sup>(14)</sup>

La Audiencia real nace no como un tribunal en el que se ventilan exclusivamente asuntos de justicia, sino que, por la propia naturaleza de la misma, la Audiencia conoce peticiones de justicia y de gobierno, es decir, aquellas mismas peticiones que el Rey hubiera librado personalmente como juez superior del Reino. En este sentido la Audiencia es considerada mediante una ficción jurídica como si fuera la misma persona del Rey y sus fallos son, por tanto, inapelables.

Es difícil precisar el momento de creación de la Audiencia. Posiblemente, al igual que ocurre con tantas otras instituciones, esta situación de hecho, que venía produciéndose muy frecuentemente en el reinado de Alfonso XI, tardó en ser regulada y valorada por los contemporáneos, hasta que Enrique II, en las célebres Cortes de Toro de 1371, remodeló -no sabemos hasta que punto- la justicia de su Corte y dotó de una planta fija y un "reglamento" a la Audiencia real.

---

(14) Sobre este proceso nos detenemos más detalladamente en el Capítulo IV.

A partir de este momento, la Audiencia ha quedado ya configurada como un Tribunal de justicia, que conoce los pleitos en primera instancia por "petiçiones, et non por libellos nin por demandas", su forma de proceder es, por tanto, sumaria y de sus fallos no cabe "alçada nin suplicaçion".

Sin duda, las notas más características de este Tribunal radican en su actuación colegiada, frente a la unipersonal de los alcaldes de Corte y de Alzada; en su carácter de tribunal de primera y única instancia de causas civiles, en contraposición al carácter mixto de jueces de primera instancia y de apelación de los alcaldes, así como por sus competencias tanto civiles como criminales; y, finalmente, en su competencia territorial sobre todo el Reino, frente a la todavía mantenida designación en las Cortes de Toro de 1371 de los alcaldes por "prouinçias".

Otras notas también diferencian a la Audiencia de los alcaldes de la Corte. Así, por ejemplo, desde el punto de vista procedimental, la Audiencia libraba conforme a un procedimiento sumario de origen canónico y característico de los jueces delegados, mientras los alcaldes lo debían hacer de acuerdo a todas las formalidades solemnes y a todos los trámites procesales del "ordo iudiciario". Por otra parte, como hemos dicho, del fallo de la audiencia era el fallo del Rey, en cambio, de las sentencias dictadas por los alcaldes de Corte cabía apelación ante el alcalde de las alzadas mayores de la Corte y, de éste, suplicación ante el juez de las suplicaciones.

De la separación del Rey de sus alcaldes de la Corte, nace también otra figura de la administración central de justicia. Nos estamos refiriendo al alcalde del rastro.

Los pleitos del rastro del Rey venían siendo librados por los alcaldes de la Casa del Rey, pero la imposibilidad de acompañar éstos al Rey en sus desplazamientos continuos por todo el Reino, dió lugar a que se creara o tal vez deagajara de los alcaldes de Corte, un nuevo tipo de alcaldes con competencia privativa en el rastro del Rey, cuya principal misión sería mantener el orden público en la Corte y en un radio de cinco leguas alrededor de ella. Es un alcalde, por tanto, con competencias fundamentalmente de tipo criminal, aunque parece que en algún momento conoció también de pleitos civiles.

Para completar el esquema. y antes de seguir adelante, tenemos que hacer alusión forzosa a dos oficios judiciales más de la Administración Central: los alcaldes de fijosdalgo y el juez de las suplicaciones.

Según el Espéculo, eran competencia de los Adelantados, Mayores, de los territorios los pleitos que se suscitaban entre los "grandes omes así como entre ricos omes". La condición de nobleza de estos Adelantados les facultaba para poder conocer de los pleitos de los hombres de tal condición. Pero suprimidos los Adelantados por Alfonso X para León y Castilla, los pleitos de los fijosdalgo posiblemente pasaron a jurisdicción de los alcaldes de Corte. Es por ello por lo que en 1272 la nobleza castellana solicita que de entre los alcaldes de Casa del Rey haya dos de condición fijosdalga, además de que fuera restaurado el régimen de Adelantamientos.

Las Cortes de Zamora de 1274, como vimos, restablecía para Castilla el Adelantado Mayor con lo que en parte quedaban satisfechas las pretensiones nobiliarias, pero al no establecer para León el mismo esquema judicial, se concedió que de los alcaldes que habían de acompañar continuamente al Rey en sus desplazamientos, uno fuera "cauallero" pero siempre y cuando conociera bien el "Libro del Fuero".<sup>(15)</sup>

Las fuentes no nos permiten conocer con exactitud, por escasos datos que poseemos, a qué vicisitudes estuvieron sometidas estas alcaldías desde finales del reinado de Alfonso X y durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV, pero a tenor de la petición que en 1317 hacen a la Regente doña María de Molina de que nombre alcaldes de fijosdalgos que anden en la Corte del Rey, debemos suponer que fueron suprimidos con anterioridad. Sin embargo, a partir del primer tercio del siglo XIV, encontramos a los alcaldes de fijosdalgo actuando en la Corte como oficiales de justicia ordinarios integrados en la Chancillería como el resto de los alcaldes de la Corte.

En cuanto al juez de las suplicaciones, es más difícil precisar su aparición. En principio sólo al Rey competía resolver por "merced" todos aquellos casos que, habiendo agotado la vía judicial, se presentaban al Rey por alguna de las partes que se consideraba lesionada por la sentencia del juez real. No obstante

---

(15) Suponemos que se trata del Fuero de los Fijosdalgo. Sobre ello tratamos en el Capítulo III al estudiar los alcaldes de los Fijosdalgo.



esta tarea fue muy pronto delegada por los monarcas castellanos y ya en las Leyes del Estilo se hace mención expresa a una persona que en la Corte "oye la suplicación".<sup>(16)</sup>

No sabemos si se trata de un juez ordinario encargado de oír sólo y expresamente las suplicaciones o si se trataba más bien de un juez "ad hoc" para cada caso concreto con lo que ya no podríamos considerarlo como un oficial ordinario de la Corte, pero lo cierto es que las fuentes son muy poco expresivas al respecto. Sin embargo, el oficio de juez de las suplicaciones debió adquirir entidad propia como oficio ordinario de la Corte si nos atenemos al tratamiento que del juez de las suplicaciones hacen el Ordenamiento de Villarreal<sup>(17)</sup> y el Ordenamiento de Alcalá.<sup>(18)</sup>

En el reinado de Alfonso XI han quedado ya claramente echados los cimientos de la organización judicial central castellana, pero es labor de Enrique II la remodelación y estructuración como un cuadro orgánico perfectamente engranado.

Los Tratámara aprovechan las viejas instituciones y potencian otras nuevas como la Audiencia y los alcaldes del rastro. La Audiencia pierde definitivamente su facultad de conocer asuntos

---

(16) Leyes del Estilo 171 y 172.

(17) Ordenamiento de Villarreal (Ed. GIBERT en AHDE 25 (1955), p. 719).

(18) Ordenamiento de Alcalá 14, 1 y 2, 20, 1.

de gobierno para quedar como el más alto tribunal del Reino en asuntos civiles al constituirse como tribunal de apelación de los jueces inferiores. Paralelamente los antiguos alcaldes de Corte están sufriendo una transformación semejante desde el momento en que empiezan a actuar colegiadamente. Los alcaldes del rastro quedan definitivamente separados de la Corte y Chancillería para acompañar al Rey en sus desplazamientos.

Desde finales del siglo XIV podemos considerar que la planta de la Corte y Chancillería está plenamente reglada a raíz de las modificaciones y delimitaciones de competencias de Juan I en los Ordenamientos de Briviesca y Segovia. Sin embargo muy pronto el Consejo Real, órgano al que precisamente en estos años se le ha dado un nuevo carácter decisorio en todos los "fechos del rregno" como limitador del poder real, empieza a conocer contiendas entre partes no solo por vía de gobierno mediante el expediente, sino también pleitos de justicia, en menoscabo de la Audiencia y otros órganos judiciales.

El siglo XV se caracteriza por la crisis de los tribunales de la Corte y Chancillería, es decir, de la Audiencia y los viejos alcaldes de Casa del Rey o de las provincias que a partir de ahora, como dijimos, se denominan de "Corte e Chancellería".

La crisis de la Audiencia y de los Alcaldes de Corte y Chancellería arranca del reinado de Enrique III. No sabemos precisar qué motivos movieron a este monarca a suspender de oficio y abrir expediente mediante pesquisa a todos los señores

de su Audiencia, quedando al frente de ésta un sólo oidor, como nos atestigua la crónica de este Rey y documentos de aplicación del Derecho.<sup>(19)</sup> Parece que muerto el Rey los Regentes devolvieron a la Audiencia su antigua planta como recoge la crónica de Juan II, pero lo cierto es que el mal entendimiento entre los Regentes supuso de hecho una división de la administración central que afectaría sin duda a la administración de justicia de forma que, llegado Juan II a su mayoría de edad, las primeras Cortes que se reúnen en Madrid denuncian el Rey el deplorable estado en que se encuentra la justicia de su Corte en particular su Audiencia y Chancillería.

A partir de este momento son casi continuas las quejas de los procuradores encaminadas a que se restaure el orden de la Audiencia. Son quejas de todo tipo, desde la Audiencia se halla desprovista de oidores, pasando por los cohechos y sobornos a los que se someten los pocos oidores que residen en ella hasta la localización de la propia Audiencia y Chancillería para la que se pide un lugar fijo o al menos unos circuitos conocidos durante el año para que en todo momento cualquier súbdito pueda conocer en donde se encuentra el Tribunal más alto del Reino.

Qué ocurre realmente? Por qué ese abandono o desinterés de Juan II hacia la Audiencia?. La respuesta hay que buscarla, en nuestra opinión, en un hecho que ya se viene produciendo

---

(19) Sobre ello, véase el Cap. IV en el que tratamos de la Audiencia.

desde el reinado anterior y que ahora se ha generalizado podríamos decir de un modo "abusivo". El hecho al que nos referimos es el conocimiento por parte del Consejo Real de pleitos entre partes en forma de proceso y no de expediente.

Sin entrar ahora a pormenorizar sobre el origen y evolución del Consejo Real al que le dedicamos un extenso capítulo, si conviene anticipar que el Consejo Real se va a reestructurar en 1385 ante una situación muy concreta y difícil por la que atraviesa el Reino castellano-leonés aunque muy pronto alterará su estructura estamental para ir convirtiéndose en un órgano eminentemente técnico de libramiento de asuntos con facultad decisoria en muchos de ellos. El Consejo Real aparece como un órgano fundamentalmente de gobierno sin competencias judiciales pero que paulatinamente se irá avocando hasta convertirse en un auténtico órgano de la jurisdicción ordinaria.

Juan II en 1419 ha establecido una clara distinción entre el Consejo "privado o secreto" y el Consejo "público"; en éste último se ventilan generalmente los asuntos de justicia que el Consejo viene conociendo ya sea de oficio mediante el envío de jueces comisarios o a instancia de parte. El conocimiento de tales pleitos de justicia va en detrimento, lógicamente, de la jurisdicción ordinaria de la Audiencia y de los alcaldes de Corte y Chancillería. Al Rey, por tanto, y sobre todo a las facciones nobiliarias que controlan el Consejo, les interesa que determinados tipos de asuntos sean vistos en el Consejo sobre el que ejercen mayor influencia por ello hasta cierto punto es comprensible que Juan II no tome las medidas necesarias para restablecer el orden en la Audiencia.

En 1428 se dictan una serie de medidas encaminadas a restringir el conocimiento de los asuntos de justicia en el Consejo Real, ordenando que sean devueltos a la Audiencia y a los alcaides de Corte todos aquellos pleitos pendientes o que por comenzar se hallaban en el Consejo, pero en dichas disposiciones<sup>(2o)</sup> el Rey se reserva la facultad de intervenir en aquellos pleitos tanto civiles como criminales que cumple a su servicio que sean oídos y librados en la Corte. Esta reserva de jurisdicción de hecho facultaba al Consejo a intervenir en todos aquellos pleitos que estimara oportuno con lo que se venía a reconocer implícitamente la facultad del Consejo de entender en asuntos de justicia. Y así, el Consejo público comienza a denominarse en este primer tercio del siglo XV como "Consejo de la Justicia".

El Consejo de la Justicia, que debemos identificar con el Consejo Real, en contraposición al Consejo secreto o privado se convierte, pese a su carácter extraordinario, en un órgano de la jurisdicción ordinaria en el que se ventilan ya sea por vía de expediente o de gobierno, ya sean por vía de justicia o de proceso, prácticamente todos los asuntos del Reino, por ello las reiteradas peticiones de los procuradores en las distintas Cortes del reinado de Juan II no están encaminadas tanto a que se resuelva una mala administración de justicia -puesto que justicia

---

(2o) Pueden verse en Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 47v-49v

se estaba administrando- como a que la administración de justicia no estuviera monopolizada en un órgano eminentemente político como el Consejo en el que las presiones de unos y otros podían atentar a los principios más elementales de seguridad jurídica y de independencia de los jueces.

En esta misma línea se dirige la política de Enrique IV en los primeros años de su reinado en los que dota al Consejo de una nueva Ordenanza en 1459 en la que por primera vez se le reconoce a éste órgano explícitamente la facultad de conocer por proceso asuntos de justicia así como el envío de jueces comisarios y pesquisidores ya sea de oficio o a instancia de parte.

Sin embargo, los turbulentos acontecimientos que caracterizaron la segunda década del reinado de Enrique IV y la guerra civil en que quedó inmersa Castilla a raíz de su muerte, no fue óbice para que, una vez restaurada la paz por los Reyes Católicos, fuera alterada la organización castellana de justicia. Por el contrario, Isabel y Fernando pusieron el máximo celo en la restauración del sistema judicial.

En este sentido las primeras medidas se toman en las Cortes de Madrigal, no finalizada aún la guerra civil, que se ven completadas con las de las Cortes de Toledo de 1480. En éstas, se restablece en el Consejo la Ordenanza que diera Enrique IV en 1459 con algunas pequeñas modificaciones. Es decir se restablece un Consejo Real con muy amplias competencias, entre ellas las judiciales, por el que se canalizaba todo

el gobierno y la justicia del Reino. Eran tantos y de tantas calidades los pleitos y causas que se trataban en el Consejo nos cuenta PULGAR<sup>(21)</sup>, que los del Consejo no tienen tiempo de librar los asuntos que debían ventilarse por expediente.

Esta inflación, de asuntos de justicia que se presentaban en el Consejo, llevó a los Reyes a remodelar y potenciar la Audiencia que desde principios de siglo había quedado relegada a un segundo plano. Para ello los Reyes Católicos dictan en ese mismo año de 1485 las primeras Ordenanzas de la Audiencia, que al año siguiente son ligeramente retocadas en una ordenanza posterior, hasta llegar a la Ordenanza definitiva de 1489.<sup>(22)</sup>

En las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 quedaban delimitadas las competencias del Consejo y las de la Audiencia en materia de justicia. A partir de este momento el Consejo conocería solamente en las causas de expediente, residencias, pesquisas, las apelaciones de las residencias, pesquisas y cartas ejecutorias de causas vistas en el Consejo y las apelaciones de las causas civiles que se presentaren de las sentencias dictadas por los alcaldes de casa y corte. Finalmente se mantiene una reserva de jurisdicción por la que el Consejo podía intervenir "en otras cualesquier cosas que vieremos que cumple a nuestro servicio en que nos les mendarenos especialmente entender e conocer e determinar".

---

(21) Crónica de los Reyes Católicos, ed. BAE. 3a. parte, Cap. 53, p. 43o.

(22) Puede verse en Bulas y Pragmáticas, fols. 49v y ss.

De esta forma la Audiencia en cierto modo quedaba restablecida como el más alto Tribunal del Reino de la jurisdicción real ordinaria, compartiendo esta preminencia en algunos aspectos con el Consejo Real que era el Tribunal ordinario para determinado tipo de cuestiones que forzosamente se tenían que ventilar ante el Consejo.

De hecho la Audiencia estaba en relación de subordinación con respecto al Consejo. En primer lugar la Audiencia estaba obligada a cumplir y obedecer todas las cartas y mandamientos del Consejo<sup>(23)</sup> y generalmente los Reyes encomendaban al Consejo el conocimiento del recurso extraordinario de la segunda suplicación o de las "mil quinientas" que se interponía de las sentencias dictadas por los oidores en grado de revista. Pero además, según la reserva de jurisdicción a la que antes nos referíamos, el Consejo podía intervenir y de hecho lo hacía con relativa frecuencia, avocándose para sí el conocimiento de pleitos correspondientes a la jurisdicción ordinaria mediante el envío de jueces comisarios o pesquisadores, con lo que quedaba suspendida cualquier posible intervención de la Audiencia o de cualquier juez de la jurisdicción ordinaria competente.

También en cuanto al modo de proceder la Audiencia se encontraba en condición de inferioridad con respecto al Consejo desde el momento en que en este órgano se podían conocer los pleitos por vía de expediente y por vía de proceso, mientras que a la Audiencia sólo le estaba permitido conocer por vía de proceso.

---

(23) Véase la Real Cédula de 30 de agosto de 1497 en la que tras recordar lo dispuesto en la Ordenanza del Consejo de 1480 por la que las cartas dadas por el Consejo han



El segundo de los ámbitos en que se proyecta la jurisdicción real, y posiblemente el mas difuso y conflictivo, es el territorial. Si durante la Alta Edad Media parece claro que existe un concepto de administración central como conjunto de órganos de gobierno y justicia que se hallan por encima de todas las circunscripciones del Reino, no ocurre lo mismo con la organización territorial.<sup>(24)</sup> Esta empieza a configurarse en Castilla y León en el siglo XII<sup>(25)</sup> y adquiere su consolidación en el XIII bajo el reinado de Fernando III.<sup>(26)</sup>

El impulso definitivo e innovador se debe a Alfonso X. Hasta entonces al frente de cada Reino se encontraba un Merino Mayor y así, a la llegada de Alfonso X al trono, se mantienen Merinos Mayores en Castilla, León, Galicia y Murcia. La novedad la vamos a encontrar en la amplia circunscripción de la "Frontera" al frente de la cual el Rey Sabio ha nombrado un Adelantado que aparece documentado desde 1253.

---

(23) /...de ser obedecidas como si fuesen firmadas por los Reyes, les manda al Presidente y oidores de la Audiencia que conozcan los pleitos de términos que les había remitido el Consejo y que previamente la Audiencia se había negado a conocer (Recopilación de las Ordenanzas de la Audiencia de Valladolid, fols. 120r-121r).

(24) Sobre estos aspectos véanse los trabajos de SANCHEZ-ALBORNOZ: Imperantes y Potestates en el reino asturleonés en CHE 45-46 (1967) y Homines Mandationis y Iuniores, también en CHE 53-54 (1971).

(25) Véase PEREZ BUSTAMANTE: El gobierno... pgs. 51 y ss. en donde recoge los principales documentos.

(26) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 53.

Desconocemos si al frente de la Frontera había con anterioridad algún otro oficial real, pero los documentos no nos han aclarado este punto concreto, por ello parece que se debe a Alfonso X la creación de una nueva y amplia circunscripción territorial a la que el Rey ha dado un régimen totalmente - distinto al de los restantes territorios de la Corona.

Tampoco podemos precisar de donde tomó como modelo Alfonso X el régimen de Adelantamiento, pero éste ya aparece en el primer texto legal que se promulga en este reinado, en el Espéculo.

Posiblemente el éxito de este sistema nuevo, que tal vez se impuso en la Frontera a modo de ensayo, fue lo que llevó al Rey Sabio a sustituir a los Merinos Mayores de Castilla, León, Galicia y Murcia por Adelantados Mayores.

En el Espéculo ambos oficiales aparecen con caracterizaciones bien distintas. Mientras el Merino Mayor tiene un carácter de ejecutor de la justicia, los Adelantados Mayores caparecen como oficiales juzgadores<sup>(27)</sup>. Además, como dijimos en las páginas precedentes, el Adelantado es un oficial que desempeña indistintamente sus funciones judiciales en la corte y en el territorio del cual se encuentra a su frente.

---

(27) Esta diferencia ya la puso de relieve el profesor PEREZ PRENDES en su trabajo "Facer justicia". Notas sobre la actuación gubernativa medieval, ya citado. PEREZ BUSTAMANTE (El Gobierno... pgs. 151 y ss) por su parte no coincide con el citado profesor y considera que el Merino Mayor tenía facultades judiciales propiamente dichas.

No vamos a entrar ahora en el estudio pormenorizado de las distintas alternativas que a lo largo del siglo XIII tuvieron el régimen de Adelantamientos y Merindades pues de ello nos ocupamos en el último capítulo del presente estudio. Lo que ahora nos interesa destacar es la política vacilante que caracteriza a la segunda mitad del siglo XIII en lo concerniente a la Administración territorial. Hay territorios como la Frontera y Murcia en los que el régimen de Adelantamientos se ha consolidado y triunfa plenamente, en cambio en Castilla León y Galicia se produce una alternancia<sup>(28)</sup> y a veces coincidencia de ambos oficios dado que el distinto carácter de uno y otro -juzgador y ejecutor- permiten la existencia de ambos en un mismo Reino.

De cara a la administración de justicia ni decir tenemos la importancia que supone que en un momento dado se encuentre al frente de determinada circunscripción un Adelantado Mayor o un Merino Mayor, puesto que el primero puede conocer judicialmente en grado de apelación de las sentencias dictadas por los jueces inferiores de dicha circunscripción y, por el contrario, los Merinos<sup>no</sup> pueden conocer, en principio, ninguna causa judicial, con lo que se ha de acudir a los alcaldes de Casa del Rey directamente.

La restauración del régimen de Adelantamientos en Castilla y León durante el reinado de Fernando IV fue sin duda no muy bien acogida por las ciudades que se encuentran en estos momentos en su máximo apogeo y no ven con agrado la imposi-

---

(28) Esta alternancia ya la destacó PEREZ BUSTAMANTE:  
El Gobierno... pgs. 63 y ss.

ción de un órgano de justicia, como es el Adelantado, intermedio entre los órganos locales y el Rey. Por otra parte, los continuos abusos llevados a cabo por los Adelantados y los Merinos que están a su servicio dan lugar a las enérgicas quejas que los procuradores presentan al Monarca. Primer de un modo parcial, refiriéndose sólo a Castilla, en las Cortes de Valladolid de 1307<sup>(29)</sup> y posteriormente de un modo general en las Cortes de 1312.<sup>(30)</sup>

Las protestas de las ciudades hacen que el Rey tome las medidas oportunas y a partir de ese momento se le designan a cada Adelantado alcaldes de casa del Rey para que sean éstos los que juzguen los pleitos en presencia del Adelantado<sup>(31)</sup>. De esta forma los Adelantados perdían la facultad de juzgar ellos personalmente; la función jurisdiccional originaria se comienza a transformar en una función fundamentalmente política.

Sin embargo, la muerte de Fernando V supone de nuevo una ruptura en el régimen de la administración territorial de Castilla y León en los que desaparece el régimen de Adelantamientos, no así en Galicia, Murcia y la Frontera, para volver el antiguo sistema de Merinos, pero la novedad más destacable radica en que ahora los Merinos Mayores de Castilla

---

(29) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 2, p. 186 nota 1)

(30) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, pets. 59 y ss. pgs. 211 y ss.)

(31) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I. 66. p. 213).

y de León, continuarán llevando alcaldes reales consigo en sus desplazamientos por sus territorios para administrar justicia.

El sistema se ratifica en las Cortes de Madrid de 1329 en las que se dispone expresamente que han de acompañar a los Merinos Mayores dos alcaldes "que ssean dela casa del Rey" y que no hayan sido dados a petición de los Merinos<sup>(32)</sup>. Además de las funciones estrictamente judiciales de los alcaldes, éstos han de comunicar al Rey "comme usan los merinos mayores de su ofiçio" para que si no obra de acuerdo a las funciones de su cargo, el rey lo escarmiente.

Disposición semejante se establece en las mismas Cortes para el Adelantado Mayor de la Frontera que a partir ahora habrá de ir acompañado de dos "alcaldes que ssean dela comarca".<sup>(33)</sup>

Con independencia de que más adelante profundicemos sobre esta imposición a Merinos y a los Adelantados de alcaldes para que ejerzan la función de justicia, lo que interesa destacar es que se ha producido "de facto" una equiparación entre Merinos y Adelantados Mayores precisamente en aquel aspecto que distinguía más claramente las funciones de uno y otro oficial, es decir en el de juzgar. Por otra parte se ha

---

(32) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11 pgs. 406-7.)

(33) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 19. p. 409).

creado de un modo estable, con independencia de que la circunscripción se una Merindad o un Adelantamiento, un nivel intermedio de administración de justicia representado por los alcaldes de adelantamiento o de merindad.

No podemos precisar hasta qué punto este tribunal territorial era de carácter itinerante o si, por el contrario, permanecía fijo, pero algunas referencias que nos han dejado las Cortes de Madrid de 1329 y 1339 a que los presos que el Merino Mayor (o los Merinos que andan por él) hayan hecho sean conducidos a los "alcalles dela cabeza dela merindat"<sup>(34)</sup>, nos hace pensar en una posible sede fija de este tribunal territorial, con independencia de que en cualquier momento el Merino Mayor pueda llevar consigo a tales alcaldes en sus desplazamientos por las tierras de su circunscripción, pero aquella no aparece documentada.

Las fuentes tampoco nos especifican las competencias de estos alcaldes de merindat o de adelantamiento, pero hemos de suponer que actuarían fundamentalmente como jueces de apelación tanto para lo civil como para lo criminal de los fallos dictados por los jueces y alcaldes de las ciudades y villas de su territorio. Parece que también podían conocer pleitos en primera instancia. Como es lógico, quedarían fuera de sus competencias los casos de corte y aquellos otros pleitos que, bien por su naturaleza o por la condición de las partes, pertenecía su libramiento a los tribunales de la Corte.

---

(34) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 18, p. 409) y Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 7, p. 462).

En los nuevos reinos que se han ido integrando a la Corona castellano-leonesa -Toledo, Sevilla, Jaén y más tarde Algeciras (Murcia constituye una excepción)- no se ponen al frente de cada uno de ellos un Adelantado o un Merino como en los viejos reinos, sino que parece que todos ellos quedan comprendidos bajo la jurisdicción del Adelantado Mayor de la Frontera, denominado posteriormente de Andalucfa.<sup>(35)</sup>

En cada una de las cabeceras de estos nuevos reinos han sido nombrados, siguiendo una organización semejante a la de - Toledo, unos Alcaldes Mayores<sup>(36)</sup>. Desconocemos si del fallo de cada uno de estos Alcaldes Mayores se podía acudir en apelación a los alcaldes del Adelantado, que parecen residir de modo estable en Sevilla desde el reinado de Alfonso XI<sup>(37)</sup>, o como se estructura orgánicamente la administración de justicia en cada uno de estos reinos,<sup>(38)</sup> pero la documentación consultada no nos -

(35) Véase al respecto PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 352-78.

(36) Sobre los Alcaldes Mayores y Alcaldes de Adelantamientos véase el trabajo del profesor GARCIA-GALLO: Alcaldes Mayores y Corregidores en Indias en sus Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid 1972, pgs. 695-741 en el que, pese a ocuparse fundamentalmente de la organización indiana, parte de la situación castellana.

(37) Sobre la organización judicial de Sevilla véase GUICHOT Y PARODY: Historia del Excmo. Ayuntamiento de la muy noble, leal, heróica e invicta ciudad de Sevilla, Sevilla 1896, especialmente el t.I en donde se recoge además dos ordenamientos de justicia concedidos por Alfonso XI a dicha ciudad y más en concreto puede verse también a A. ALVAREZ JUSUE: La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados en Archivo Hispalense 60 (1953) 2a. época, pgs. 17-50.

(38) Ciertamente aunque cada vez hay más preocupación por parte de los historiadores en general de profundizar en el estudio de las instituciones locales, desgraciadamente salvo escasas excepciones, los trabajos que se han dedicado a su estudio son escasos y en gran parte muy deficientes

permite esclarecer estos puntos en concreto. Mucho más clara aparece esta organización en el Reino de Murcia en el que claramente el Adelantado y sus Alcaldes actúan como el más alto tribunal del Reino en cuanto que de sus fallos sólo cabe ya suplicación ante el Rey<sup>(39)</sup>; en el mismo sentido, el Ordenamiento de Alcalá establecía que del fallo del Adelantado de la Frontera sólo cabía suplicación también ante el Rey<sup>(40)</sup>. Ello nos hace suponer, dado que Sevilla tenía el privilegio de resolver en la misma ciudad sus suplicaciones<sup>(41)</sup> que las sentencias

---

(38) /...Ello limita mucho el objeto del presente estudio en cuanto que, ante la imposibilidad de acudir directamente a cada uno de los archivos locales en busca de la documentación por las lógicas limitaciones temporales y materiales a las que está sometido un estudio de este tipo, nos vemos obligados a tener que dejar planteados muchos interrogantes sin resolver o a caer en el inevitable mal de generalizar.

(39) Ordenamiento de Alcalá 14,1. Sobre la organización de la justicia del Reino de Murcia es muy esclarecedora la Provisión de la Audiencia de Pedro I dictada por una petición presentada por el concejo de dicha ciudad ante el conflicto entablado entre los alcaldes del concejo y el Adelantado (Vid. CERDA: Para su estudio sobre los Adelantados Mayores de Castilla en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1971, aped. doc. 6, p. 213. También publicado por MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 48, pgs. 81-83) Según esta provisión los alcaldes ordinarios de la ciudad conocían de cualquier tipo de pleitos civiles y criminales y de ellos cabía alzada ante el alcalde de las primeras alzadas y de esta cabía una segunda alzada ante el alcalde de las segundas alzadas. De este fallo solo cabía ya acudir al Rey. Los alcaldes de primera y segundas alzadas eran los alcaldes del Adelantado.

(40) Ordenamiento de Alcalá 14,1.

(41) Véase Cap. I, nota 293.



a las que se refiere el Ordenamiento de Alcalá dictadas por el Adelantado de la Frontera -por sus alcaldes- que son susceptibles de suplicación ante el Rey son aquellas otras sentencias que el Tribunal del Adelantamiento ha visto en apelación pero que no son procedentes de Sevilla. Son acaso las sentencias de apelación de las que han dictado anteriormente los Alcaldes Mayores de Córdoba, Jaén y Algeciras?. Tal vez, pero no lo sabemos.

En cuanto al Reino de Toledo podemos decir que dada la peculiaridad de los distintos tipos de población que en ella convivían y el incuestionable peso del Arzobispado, parece que fueron factores decisivos a la hora de que no se configurara una administración de justicia territorial en base al régimen de Adelantamiento o de Merindad<sup>(42)</sup>. En la ciudad se encontraba un Alcalde Mayor del Rey que tenía jurisdicción ordinaria no sólo en la ciudad sino también sobre todo el territorio del arzobispado entendiendo de las alzadas o apelaciones procedentes de las sentencias dictadas por los jueces y alcaldes de las villas de Castilla la Nueva pobladas a "Fuero de Toledo" (Talavera, Escalona, Maqueda, Madrid y otras)<sup>(43)</sup>. Hemos de suponer que del fallo del Alcalde Mayor de Toledo cabría la posibilidad de acudir en alzada a la Corte.

(42) Sobre la administración de justicia en Toledo, aparte de los escasos datos que aportan ALCOCER (Historia o descripción de la Imperial ciudad de Toledo, Toledo 1554) o MARTÍN GAMERO (Historia de la ciudad de Toledo, Toledo 1862), hace referencia a ella el profesor GARCÍA-GALLO en su trabajo Los fueros de Toledo en AHDE 45 (1975) y más recientemente la profesora María Luz ALONSO en sus trabajos La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de los castellanos de Toledo y La revisión de la sentencia "según costumbre de Toledo" ambos en AHDE 48 (1978)

(43) María Luz ALONSO: La perduración... p. 344.

Nos encontramos, pues, que hacia mediados del siglo XIV se halla plenamente configurada una administración de justicia territorial ya sea en régimen de Merindad (Castilla León y Galicia) o en régimen de Adelantamiento (Murcia y la Frontera) que corre a cargo de unos alcaldes, en principio de designación real, sobre los que recae exclusivamente la función de administrar justicia sin que para ello intervenga el Merino Mayor o el Adelantado Mayor correspondiente. Estos han quedado, en el aspecto judicial, relegados a un segundo plano cobrando mayor importancia su función política. De esta forma, a nivel territorial, se ha impuesto totalmente la jurisdicción real.

Se puede decir que este sistema es el que perdura ya a lo largo de toda la Baja Edad Media, aunque muy pronto, como veremos a continuación, a partir de la segunda mitad del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV esta organización se va a ver alterada por la intervención cada vez más frecuente en el ámbito ciudadano de un nuevo oficial extraordinario de justicia de amplias competencias, nos estamos refiriendo al corregidor.

En el último ámbito en que se proyecta la jurisdicción real y en el que se le ofrece mayor resistencia, es, sin duda, en el ámbito local.

A lo largo del siglo XIII las ciudades han ido adquiriendo una importancia trascendental para la vida del Reino y han

ido consolidando las instituciones urbanas que habían iniciado su desarrollo tres siglos antes<sup>(44)</sup>. Durante la Alta Edad Media se ha venido produciendo un movimiento de emancipación paulatina del municipio con respecto al poder real. Al mismo tiempo el "concilium" o asamblea general de vecinos se constituye como el pilar más sólido y único de la ciudad frente al poder del "palatium" impuesto a través de unos funcionarios de designación real ("dominus villae", juez, sayon). A medida que la asamblea general de vecinos aumentaba, se hacía más difícil el funcionamiento ordinario de la misma con lo que necesariamente se llegó a tener que delegar de entre sus miembros a unos magistrados, quienes bajo el control más o menos directo de la asamblea, juzgaban y resolvían los problemas que se planteaban en la comunidad; de esta forma el "concilium" quedó como un órgano supervisor de la gestión de sus magistrados y reunía en pleno muy excepcionalmente.

(44) Sobre el régimen municipal en España, sin ánimo de ser exhaustivo, puede consultarse SACRISTAN: Municipalidades de Castilla y León, Madrid 1877; DANVILA: El Poder Civil en España, Madrid 1885, t. I; E. HINOJOSA: Origen del régimen municipal en León y Castilla y más reciente Ma. C. CARLE: Del Concejo Medieval castellano-leonés, Buenos Aires 1968 y J. GAUTIER DALCHE: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media, Madrid 1979 desde una perspectiva general. En cuanto a la evolución de las instituciones urbanas y su regulación pueden verse: L. SUAREZ FERNANDEZ: Evolución histórica de las Hermandades castellanas en CHE 16 (1951); ALVAREZ MORALES: Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid 1974; R. GIBERT: El Derecho municipal de León y Castilla en AHDE 31 (1961) y Libertades rurales y urbanas en León y Castilla durante la Edad Media en Les Libertés urbaines et rurales du XIe au XVe siècle Bruselas 1968 (Colección "Histoire", nº 19) y más concretamente, del mismo profesor, puede verse El Concejo de Madrid, I. Su organización en los siglos XII al XV, Madrid 1949. Hemos consultado también un gran número de histori-

A medida que los concejos iban adquiriendo fuerza, mayor era la oposición a los delegados del poder real en el mismo y se vuelcan para conseguir una sustitución de los oficiales reales por sus magistrados municipales. Lógicamente se produce un forcejeo entre el poder real y el poder municipal cuyo resultado final no fue siempre el mismo en todas partes pues si bien en algunos concejos se puede decir que la intervención real quedó prácticamente anulada, en otros, por el contrario, los oficiales reales jugaron un papel decisivo en la política municipal.

El estudio de la administración de justicia y, por tanto, la intervención real en ella en cada uno de los municipios castellano-leoneses supondría tener que acercarnos al caso concreto y a las circunstancias específicas que dieron lugar a una mayor o menor intervención del poder real en cada concejo. Ni que decir tiene que ello constituye una tarea impropia no sólo material sino también temporalmente en busca de archivos municipales, muchos de ellos hoy perdidos, para que de esta forma pudiéramos establecer una imagen real de la administración de justicia. Por otra parte, el estudio de los fueros municipales en el tema en cuestión, si bien puede ser muy esclarecedor, quizás no sea del todo exacto para gran parte del período bajomedieval desde el momento en que todavía son muchos los problemas de tipo eurístico

---

(44) /...locales en las que se aportan datos concretos de la organización municipal del lugar en cuestión y cuyo valor histórico, en algunas de ellas, no es ciertamente recomendable, pero no dejan de ser interesantes por la riqueza de datos que en ellas se contienen. Nos remitimos al apéndice bibliográfico.

que presentan nuestros fueros castellano-leoneses y, por otra parte, es difícil precisar hasta qué punto muchos preceptos que tiene su origen en el siglo X, XI y XII, aunque hayan sido recogidos en redacciones posteriores, tienen una aplicación práctica en el siglo XIII o en el XIV en el que los derechos locales han entrado en una inexorable crisis.

Pese a estas limitaciones y dificultades, que debemos tener siempre presente, intentaremos dar, como hemos venido haciendo a lo largo de este capítulo, un panorama de la intervención real en materia de justicia a nivel local, que si bien somos plenamente consciente de su inexactitud, nos puede dar no obstante una visión aproximada de como se produjo este fenómeno.

A simple vista el esquema de las instituciones municipales de las ciudades de León y Castilla se presenta uniforme en lo esencial, es decir, del seno de la asamblea o "concilium" se toman unos magistrados en mayor o menor número, según la importancia de la ciudad, que se distribuyen las funciones gubernativas, judiciales, administrativas, económicas y militares del Concejo generalmente durante un año.

En el siglo XII, como destaca GAUTIER DALCHE<sup>(45)</sup>, se pueden destacar tres grandes áreas según la mayor o menor -

---

(45) Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media, p. 344.

intervención del poder real. La primera, que comprendería los territorios situados al norte del Duero, en el que la ciudad era administrada por un agente del señor, un merino. La segunda área, que correspondería a la Meseta, las ciudades están dirigidas por un juez, asistido por los alcaldes. El poder real está representado también por el Merino, pero éste no interviene en la administración de la ciudad. Finalmente, Toledo, que dada su peculiar composición de la población y modo por el que fué incorporado, conserva prácticamente idéntica la organización ciudadana y que ahora sus magistrados son nombrados por el Rey. Este modelo, sin duda por ser el más favorecedor a los intereses regios, fue el que se aplicó en el siglo XIII a las ciudades andaluzas que se fueron reconquistando, aunque en ellas se dieron también magistrados que dependían del concejo.

Durante los siglos XII y XIII hay una corriente tendente a limitar cada vez la intervención regia en los asuntos urbanos por parte de las ciudades, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIII la tensión se radicaliza al acentuar el monarca su autoridad sobre las ciudades e intervenir en el nombramiento de magistrados ciudadanos en virtud de su poder real.

Las figuras del "senior", "tenens" o "dominus villae"<sup>(46)</sup>

---

(46) Sobre el "dominus villae" véase el trabajo de N. GUGLIELMI El "dominus villae" en Castilla y León en CHE 19 (1953)

delegados del Rey en una villa o ciudad, que lo encontramos frecuentemente en los fueros de finales del siglo XI otorgados por Alfonso VI a Logroño, Sepúlveda, Miranda de Ebro y en los fueros del siglo XII y principios del XIII (Cuenca, Ledesma, Zamora y Madrid, entre otros), desaparece en la segunda mitad del siglo XIII (47), principalmente porque al monarca no le interesa ya tener estos "tenentes" desde el momento en que no es el Rey sino el "dominus" el que percibe las rentas por los servicios de la ciudad. Por otra parte, al ser confiadas en tenencias varias ciudades al mismo "senior", indefectiblemente el poder efectivo de éste sobre cada una de ellas era cada vez menor o, incluso, podía ocurrir que una ciudad dependiera de varios "tenentes". De esta forma, el abandono del poder real por un lado y la poca efectividad del "dominus villae" por otro, fueron cada vez más favoreciendo los deseos de una mayor autonomía. La esfera de acción del agente real fue siendo reducida paulatinamente en favor de las magistraturas municipales y la actuación del merino<sup>(48)</sup> limitada y reglada.

En las ciudades del norte del Duero es donde el "dominus villae", llamado ahora prestamero, conserva mayores prerrogativas quien suele delegar sus poderes en un juez y un merino, pero al sur del Duero, en las ciudades de la Meseta, a partir del siglo XII el poder jurisdiccional del "dominus villae" ha prácticamente

---

(47) Maria C. CARLE: Del Concejo medieval... p. 132.

(48) Sobre el merino véase SINUES: El Merino, Zaragoza, 1954.

desaparecido<sup>(49)</sup> y solo en algunas ciudades de la Extremadura leonesa conserva un juez<sup>(50)</sup> con funciones muy delimitadas. Paralelamente, el Rey va concediendo a diferentes concejos la prerrogativa de confeccionar una lista de la que será elegido por el monarca el juez<sup>(51)</sup> o la de nombrar directamente el concejo, sin intervención real, su juez, como es el caso del Fuero de Soria o el de Cuenca.<sup>(52)</sup>

Las magistraturas concejiles nacen, en parte, tomando como modelo los antiguos agentes reales del "dominus villae" (juez, alcaldes, merinos, sayón) que ahora, como consecuencia de concesiones reales, pasan a ser nombrados por el concejo<sup>(53)</sup> por ello, la tipología de estructuras municipales es muy variada desde el momento en que viene dada en base a normas particulares que regulan cada caso concreto; unas veces se conservarán y coexistirán los oficiales reales, otras veces éstos desaparecerán o su actuación en el ámbito municipal ha quedado reducida al cobro de las multas, de ahí que un mismo oficial pueda tener, según el Fuero que estemos estudiando, competencias muy diversas.

---

(49) GAUTIER DALCHE: Historia urbana... p. 350.

(50) Sobre la figura del juez, véase N. GUGLIELMI: La figura del Juez en el Concejo (León, Castilla. Siglos XI-XIII) en Mélanges René Crozet, II, Poitiers, 1966, pgs. 1003-1024.

(51) GUGLIELMI: La figura del juez... pgs. 1005-6.

(52) GUGLIELMI: La figura del juez... p. 1106.

(53) Sobre las magistraturas concejiles vid. Ma. C. CARLE: Del Concejo medieval, pgs. 109-131.



De cara a la administración de justicia son fundamentalmente dos las figuras que merecen nuestra atención: el juez y el alcalde; otros oficiales ejecutores, como el merino o el sayón, escapan del objeto del presente estudio.

Dejando ahora de lado las funciones políticas de gobierno y militares que algunos fueros le atribuyen al juez<sup>(54)</sup>, nos interesa destacar sus competencias judiciales. Estas se extendían a causas tanto civiles como criminales en primer instancia como en apelación<sup>(55)</sup>. La apelación se ventilaba los viernes en presencia del juez y todos los alcaldes quienes colegiadamente, suponemos, revisarían las sentencias dadas por ellos individualmente con anterioridad.<sup>(56)</sup>

Los alcaldes, en cambio, eran los oficiales de justicia por excelencia y su función principal era la de juzgar. Su número oscila, aunque generalmente suelen ser dos o cuatro, y sus competencias son civiles y criminales; de sus fallos se acudía, como hemos visto, al "corral de los alcaldes" los viernes en apelación y de ahí al Rey.<sup>(57)</sup>

Toledo, en cambio, suponía una excepción a este régimen que venimos describiendo. La variada naturaleza de su población (mozárabes, castellanos y francos) suponía no sólo tres derechos

---

(54) Véase N. GUGLIELMI: La figura del juez... pgs. 100 y ss.

(55) GUGLIELMI: La figura del juez... pgs. 1018-9.

(56) GUGLIELMI: La figura del juez... p. 1018.

(57) Maria C. CARLE: Del Concejo medieval... p. 115.

distintos, sino también tres organizaciones judiciales distintas<sup>(58)</sup>. Como es sabido Toledo, aunque era calificada de "concejo", durante los siglos XII y XIII careció de "concilium" o asamblea, - pues esta institución era desconocida por los mozárabes. Muy pronto el contingente franco fue perdiendo fuerza quedando la ciudad dividida en dos grandes comunidades. la mozárabe, la más importante y la castellana.

Toledo estaba gobernado por oficiales nombrados por su Rey, por ello, al ser conquistada por Alfonso VI y aportar nuevos y variados contingentes humanos, el Rey respetó la organización preexistente, dándole una similar a castellanos y francos, y se limitó a reemplazar a los antiguos oficiales musulmanes por oficiales designados por él. Al frente de cada una de las dos comunidades principales se nombró un alcalde mayor que entendían de las apelaciones de las sentencias dictadas por los otros alcaldes inferiores de la ciudad, también divididos para mozárabes y castellanos.

Fernando III se inspiró en parte en la organización toledana al reorganizar las nuevas ciudades andaluzas que fue reconquistando.

En Sevilla se podían distinguir dos tipos de cargos municipales: aquellos que dependían del Rey, el alguazil mayor y los alcaldes mayores, y otros nombrados por el concejo u oficiales menores<sup>(59)</sup>. Los alcaldes mayores, al igual que en Tolero eran

---

(58) Véanse los trabajos citados en nota 42.

(59) Véanse los trabajos citados en ota 37.

la jerarquía judicial más alta de la ciudad entendiéndolo en grado de apelación todos los pleitos civiles y criminales fallados por los jueces inferiores de la ciudad y su territorio.

Se puede decir que en la primera mitad del siglo XIII las instituciones de gobierno ciudadanas se hallan plenamente consolidadas. En principio cualquier vecino podía participar de una forma u otra en la gestión de los asuntos municipales, aunque la realidad es bien distinta.<sup>(60)</sup> El "concilium", salvo en Toledo y las ciudades andaluzas, ha ido paulatinamente asignándose las atribuciones que antiguamente correspondían al delegado real y a sus oficiales y, lo que es más importante, ha conseguido que esos oficiales sean propuestos o nombrados por el propio concejo de entre sus componentes. Queda aún en algunos concejos la figura del juez<sup>(61)</sup>, aunque con atribuciones ciertamente muy limitadas como en el caso de Cuenca en el que se encuentra en relación de inferioridad con respecto a los alcaldes locales<sup>(62)</sup>. También en el siglo XIII perviven alcaldes de nombramiento real<sup>(63)</sup>, pero en general podemos afirmar, salvo las excepciones antes mencionadas, que en la mayor parte de las ciudades y villas la administración de justicia se encuentra en manos de oficiales locales a la llegada al trono de Alfonso X.

---

(60) Ver al respecto el trabajo de A. BO y C. CARLE: Cuando empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas en CHE. 4 (1946)

(61) GUGLIELMI: La figura del juez... pgs. 1005 y ss.

(62) CARLE: Del Concejo medieval... p. 113. Véase también el trabajo de N. ALCALA ZAMORA CASTILLO: Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Universidad Nacional Autónoma de México 12 (1950) pgs. 281-373.

(63) Ya lo puso de relieve N. GUGLIELMI en su estudio Los alcaldes reales en los concejos castellanos en Anales de Historia Antigua y Medieval. Buenos Aires, 1956. pgs. 79-109.

La política tendente al restablecimiento del poder real en los distintos ámbitos del Reino inspirada en los principios romano-canónicos de la Recepción no se hace esperar. La manifestación práctica de esa política viene recogida en nuevo texto legal, que tal vez se empezara a preparar en el reinado de Fernando III pero que adquirirá vida en los primeros años del reinado de Alfonso X. Nos estamos refiriendo al Espéculo.

El "Libro del Fuero" o "Fuero del Libro", identificado recientemente por mi maestro el profesor GARCIA-GALLO con el Espéculo<sup>(64)</sup>, siguiendo la más pura tradición romana, atribuye exclusivamente al Rey la facultad de nombrar los jueces de las ciudades<sup>(65)</sup>. De este cuerpo legal se hicieron concesiones a varias ciudades y villas castellanas<sup>(66)</sup> como fuero subsidiario pero que de hecho, ante la obsolescencia de los antiguos fueros, era el que se venía aplicando. En cualquier caso, nos han quedado varios testimonios de la política intervencionista

---

(64) Véase el trabajo, ya citado, Nuevas observaciones... en AHDE 46 1976. Véase también la nota 27 del siguiente capítulo.

(65) Espéculo 4, 2, pr.: "...Los alcalles, que son puestos para judgar las e las villas, non los deve otro ninguno poner sinon el rey".

(66) Aun en el caso de que no se aceptara la teoría del profesor GARCIA-GALLO en torno a la identificación del Espéculo con el Fuero que se concede a Escalona, Peñafiel, Niebla, Soria, Sahagún, etc., como subsidiario, y por tanto se sostenga, como se ha hecho tradicionalmente, que se trata del Fuero Real, no se alteraría lo que venimos afirmando pues el Fuero Real dispone también que "Ningun ome no sea osado de juzgar Pleytos, si no fuere Alcalde puesto por el Rey". (Fuero Real 1, 7, 2).

del monarca quien se atribuye de nuevo la facultad de nombrar oficiales suyos en ciudades y villas. Es el caso de Aguilar de Campóo<sup>(67)</sup>, León<sup>(68)</sup>, Escalona<sup>(69)</sup> o Murcia<sup>(70)</sup> entre otras<sup>(71)</sup>.

Posiblemente la reacción que se produce en 1272 contra el nuevo texto legal por parte de la nobleza, afectada también por el creciente e incesante intervencionismo regio en el ámbito jurisdiccional, frenó la designación de jueces y Alcaldes por parte del Rey. Sin embargo, en el reinado de Sancho IV se intensifica notablemente la política de envío de oficiales reales de justicia a las ciudades más importantes, ya sean jueces o alcaldes. Los encontramos en Salamanca, León, Toledo Haro, Zamora, Avila, Burgos, entre las más importantes.<sup>(72)</sup>

- 
- (67) "Et doles et otorgoles... que ayan dos Alcaldes et un Merino de la villa de Aguilar quales yo pusiere, o aquellos que regnaren despues de mí en Castiella et en Leon, et que judguen los Alcaldes la villa et todos los terminos por este fuero, que les yo do, et el Merino que ffaga su officio" (Fuero de Aguilar de Campóo, otorgado por Alfonso X en 1255 en Memorial Histórico Español, t. I, doc. 27, p. 57).
- (68) En 1257 encontramos a Alfonso Muñoz Cuerno, "Juyz del Re de León" Se sabe por las protestas del Cabildo que Alfonso X nombró para León un "Juez de soldada", quitando los jueces del Foro (Véase ESTEPA: Estructura social de la ciudad de León (siglos XI-XIII), León 1977, pgs. 474-5).
- (69) Véase la carta que Alfonso X dirige a Escalona en 1269: "Et otro si, para la justicia di vos fuero aquel mas cierto e mas derecho que yo pud haver, e si mejor pudiere, mejor vos dare; et di vos alcaldes, e justicias como vos me lo demandastes, et diles soldadas porque la ficiesen derechamente e sin cobdicia e sin tuerto" (Memorial Histórico Español, t. I, doc. 115, p. 252).
- (70) Memorial Histórico Español, t. I, doc. 128, p. 279.
- (71) Según se deduce del texto de las Cortes de Valladolid de 1258: "e que non ayan hy alcaldes ningunos pora judgar en las cofradias, sinon los que fueren puestos del Rey en las villas o por el fuero... (CLC. I, 36, p. 61).

Lógicamente, ante esta política intervencionista, que Sancho IV debió llevar a cabo muy intensamente, reaccionan las ciudades y protestan los procuradores de las Cortes de Palencia de 1286 por lo que el Rey dispone "tirar los iuyzes e los alcalles e las justiçias que auia puestas en las villas e los otros mayores que andauan por la tierra, a que llauan guardianes" y que fiará su justicia" en omnes buenos de cada villa que la ffagan por mí"<sup>(73)</sup>. El Rey, no obstante, se reserva la posibilidad de enviar "juyz o justiçia o alcalde" siempre y cuando "el conçeio o los mas del lugar" se lo pidieren, que él se lo dará del reino de donde fuere la villa y perteneciente al señorío real"<sup>(74)</sup>

Con toda seguridad esta posibilidad de intervenir cuando el concejo "los mas del lugar" fué la que dejó abierta la puerta para seguir interviniendo en el ámbito local mediante el envío de jueces y alcaldes<sup>(75)</sup>, y así los procuradores del reino de León en las Cortes de Valladolid de 1293 piden de nuevo a Sancho IV que les quitase "los juyzes de salario que auyan de fuera e que les diésemos -dice el Rey- jurados e alcaldes e juyzes de sus villas segunt cada uno los deue auer por su fuero"<sup>(76)</sup>. El Monarca, al igual que dispusiera en las Cortes de Palencia, responde que tiene por bien retirar los dichos jueces y de que tengan alcaldes, jurados y jueces de sus villas"

(72) /... Véase M. GAIBROIS: Sancho IV, t. III, docs, 17, 21, 64, 102, 117, 182, 215, 258, 292, 311, 346, 373, 383...passim.

(73) Cortes de Palencia 1286 (CLC. I, 4, p. 96)

(74) Cortes de Palencia 1286 (CLC. I, 4, p. 96)

(75) Como lo prueban documentos de años posteriores a estas Cortes. Véanse los documentos de la nota 72.

(76) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 4, p. 120).

saluo en aquellos logares do nos pedieren juyzes de fuera el conçeio o la mayor partida del conçeio"<sup>(77)</sup>. Se concede, además, tal como se había pedido también por las ciudades, que los juyzes que "ouieron de fuera" o jueces de salario -como ahora se les denomina- que tuvieron de cinco años hasta la fecha, "vayan cada unos aquellos logares so fueron juyzes e escoian dos omes buenos daquel logar, vno que tome el conçeio e otro que tome el que fue juyz quelos oyan sobrello e que esten y treynta dias a conplir de derecho ante aquellos dos omes buenos alas querellas que dellos dieren, saluo en los pleytos criminales que fueren en fecho de justia, tenemos por bien que delos demanden ante nos"<sup>(78)</sup>. Es decir, se dispone que los jueces de salario se sometan a juicio de residencia<sup>(79)</sup>, juicio que a partir de ahora se generaliza ya al que habrán de someterse todos los jueces reales despues de finalizado el período en el que han desempeñado su oficio como medio de control y garantía de que no se extralimitaron en sus funciones de justicia.

Pero el problema verdaderamente se nos presenta en la facultad que se reserva el Rey de intervenir mandando jueces o alcaldes reales siempre que el conçeio "o la mayor partida del conçeio" se lo pida. En principio parece que está clara la limitación, pero, se cumplió realmente esta disposición o

(77) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 4, p. 120)

(78) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 4, p. 120)

(79) Sobre el juicio de residencia véase L.G. de VALDEAVELLA NO: Las Partidas y los orígenes medievales de los juicios de Residencia en BRAH. 153, cuaderno 2, Madrid 1963, y más recientemente B. GONZALEZ ALONSO: El juicio de residencia en Castilla. I: Origen y evolución hasta 1480 en AHDE 48 (1978).

bastaba que cualquier miembro del concejo lo solicitara para el que Rey enviara sus jueces?. Sin duda, creemos, debió ocurrir esto último con bastante frecuencia.

Una vez más, pese a lo dispuesto en las Cortes, se prosiguió designando jueces reales para las villas y ciudades, medida que continuaron los regentes en la minoría de Fernando, aunque ahora la intervención de la Hermandad limitara esta prerrogativa regia<sup>(80)</sup>. De cualquier manera, los procuradores vuelven a presentar sus quejas en las Cortes de Zamora de 1301 para que les diesen "sus juyzes e alcaldes del ffuero quando melo pidiesse todo el conçeio ola mayor partida"<sup>(81)</sup>. Petición que se reitera, ante el cado omiso del Rey a lo dispuesto con anterioridad, en las Cortes de Medina de 1305<sup>(82)</sup> y en las de Valladolid de 1312<sup>(83)</sup>.

---

(80) En un privilegio rodado fechado en Valladolid el 15 de abril de 1299, Fernando IV se dirige a todos los merinos jueces, justicias, alcaldes "e a todos los otros aportellados que estan por nos en las villas e en los lugares" (AHN. Sec. Clero, carp. 1358, nº 8).

(81) Cortes de Zamora 1301 (CLC. I, 6, p. 153).

(82) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 5, pgs. 170-1).

(83) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 81, p. 216).



La única posibilidad que tienen los Reyes de implantar su autoridad en unas ciudades que cada día adquieren mayor fuerza en el juego político del Reino y en las que empiezan a producirse distensiones en el seno de las mismas por las distintas oligarquías municipales que aspiran al control del concejo, es la de enviar jueces reales.<sup>(84)</sup>

Pero el problema de los jueces de salario no sólo se reduce a un problema de orden público y de mengua de justicia de los correspondientes alcaldes locales, sino que comportan también un problema de tipo económico en cuanto que era la ciudad la que debía, en muchos <sup>(85)</sup>casos, correr con el salario del juez y abonar sus soldadas.

La muerte de Fernando IV no supone ni mucho menos un cambio en lo que respecta a esta situación de hecho. En los primeros años de la minoría de Alfonso XI volvemos a encontrar en las Cortes peticiones encaminadas a que se nombren "juyzes e alcalles por nuestros ffueros" y que "quando quisierdes auer juyzes de ffuera parte que vos los de quando los pedierdes todos ho la mayor partida"<sup>(86)</sup>. Queja que se le presenta de nuevo a

(84) Es el caso de Toro (BENAVIDES: Fernando IV, doc. 189 pgs. 26506), Oviedo (VIGIL: Col. Dipl. del Ayuntamiento de Oviedo, doc. 76, p. 117) o León (A.G.S. Registro General del Sello, leg. mayo 1485, fol 2 que contiene un traslado de 1302) en las que aparecen documentados jueces reales por estos años.

(85) Véase la carta que por este motivo la Reina doña María ha de enviar a Gonzalo Ruiz, Alcalde Mayor de Toledo y alcalde por la Reina en Toro para que la soldada del juez "cuando yo lo hi pusiere de fuera, pechen todos en ella" (G. CALVO FLAGERO: Historia de la Ciudad de Toro, Valladolid 1909, p. 162).

(86) Véanse Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 22, p. 226) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 21, p. 279), Cortes de Carrión 131 (CLC. I, 29, p. 311) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 51

Alfonso XI en las primeras Cortes de su mayoría de edad<sup>(87)</sup>. El silencio de las Cortes sucesivas del reinado de Alfonso XI nos hace pensar en que las ciudades acabaron por amitir la intervención regia en la justicia local y desistieron en su intento de restaurar sus alcaldes foreros. Así, en las Cortes de Madrid de 1339 la designación de alcaldes ordinarios en las ciudades y villas se toma ya como un hecho irreversible y no se pide que sean retirados, como se solicitaba anteriormente, sino que cumplan debidamente con su función judicial e incluso "entiendan de los pleitos referente a los oficiales y a las rentas reales"<sup>(88)</sup>; solamente, diez años más tarde, en la última Cortes reunidas por Alfonso XI insistirán los procuradores para que no sean nombrados "jueces de salario" en las ciudades, villas y lugares, "saluo quando nos los demandaden los conçejos o la mayor parte dellos, por que algunos jueces de salario que fueron puestos en las nuestras çibdades sin ser demandados por los conçejos, resçeberon las çibdades e villas muy grand dapno, lo uno por grand pobreza e dapno, e lo al por que algunos dellos jueces usaron del ofiço con grand codiçia e con dapno del pueblo".<sup>(89)</sup>

Es bien significativo que lo que están pidiendo los procuradores no es que sean repuestos sus antiguos alcaldes foreros, sino que, a nuestro entender, se está pidiendo una vez más una garantía para que sólo sean enviados jueces de salario en

(87) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, II. pgs. 376-7)

(88) Cortes de Madrid 1339: "Por que uos pedimos merçet, ssenno que tangades por bien de mandar quelos vuestros alcaldes ordinarios que estodieren en las uuestras çibdades e villas e lugares, oyan e libren con los escriuanos publicos dende todos los pleytos que acaesçieren tan bien entre los uuestrros rrecabdadadores e cogedores delos uuestrros derechos e rrenats e pechos quales ssean, como oyen e libran todos los otros pleytos que vienen antellos" (CLC. I, 27, pgs. 471-2)

(89) Cortes de León 1349 (CLC. I, 8, p. 630)

aquellos casos en que el concejo o la mayor parte de él así lo solicite. Parece que las ciudades que hasta el momento se han visto libres de la presencia de Alcaldes de salario quieren salvar todavía su organización municipal libre de toda intervención regia. Pero la respuesta del monarca, aparentemente conforme a lo pedido por las ciudades, nos muestra claramente cuáles son las intenciones regias: "non dar juez, salvo quando lo pedieren todos o la mayor parte dellos o quando entendieremos dello poner que cumple para nuestro seruiçio por algun menguamiento que aya en alguna villa dela nuestra justiçia"<sup>(90)</sup>. Es decir, el Rey ha ampliado la posibilidad de intervenir en las ciudades mediante el envío de jueces de salario no solo como hasta ahora se había venido regulando a petición del concejo -aunque no se cumpliera-, sino que desde este momento se le reconoce la facultad de mandar dichos jueces sin necesidad de pedirlo el concejo, siendo suficiente que considerara que se ha producido alguna mengua en su justicia. El régimen de alcaldes o jueces de salario quedaba ya plenamente consolidado.

A partir de ahora las ciudades, ante la inutilidad de las quejas, solo se preocuparán de delimitar el ejercicio y las condiciones de dichos jueces. En este sentido, en las Cortes de Toro de 1371, los procuradores vuelven de nuevo a sus viejas aspiraciones esperanzados en que la nueva dinastía les devuelva

---

(90) Cortes de León 1349 (CLC. II, 8, p. 630)

sus alcaldes y justicias de fuero, reiterando las peticiones de Cortes anteriores, pero previendo el caso de que esto no suceda solicitan que los jueces de fuera "gelo dieseamos por vn anno e non mas, e que fuese ome bueno çibdadano o de villa e pertenesçiente para auer el ofiçio, et que tal fuese del rregno onde fuese la çibdat o villa o lugar que nos pediesen el dicho juez".<sup>(91)</sup> En años sucesivos se piden nuevas condiciones para los jueces de salario. En las Cortes de Soria de 1380 se hablan de "lugares do es costumbre que pongamos nos -dice Juan I- los alcalles",<sup>(92)</sup> pero si el Rey ha de nombrar en algùn lugar "alcalle de fuera parte" que sea "abonado e non poderoso" para que les mantuviera sus fueros y libertades.<sup>(93)</sup> En sentido similar, cinco años más tarde, se solicita que no sean arrendadas dichas alcaldías.<sup>(94)</sup>

La intervención real en el ámbito de la justicia local es un hecho. Se mantienen todavía los alcaldes foreros en algunas localidades<sup>(95)</sup> pero sin duda en aquellas en las que el interés de intervenir por parte de la Corona es prácticamente nulo. Por una parte, a raíz del Ordenamiento de Alcalá se puede decir que los días de los Derechos locales se hallan contados. Por otra parte, las reformas municipales alfonsinas encaminadas a transformar el concejo abierto en concejo cerrado o regimiento para poder ejercer en él una mayor fuerza y control, favorecerán esta política intervencionista de los Reyes. Es el caso de Sevilla<sup>(96)</sup>

(91) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 8, p. 207)

(92) Cortes de Soria 1380 (CLC. II, 1, p. 301)

(93) Cortes de Soria 1380 (CLC. II, 1, p. 301)

(94) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, 4, pgs. 322-3)

(95) Cortes de Soria 1380 (CLC. II, 1, p. 301)

(96) Véase ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, Madrid 1796 t. II, pgs. 74 y 93 y GICHOT Y PARODY: Historia del Excmo. Ayuntamiento... pgs. 96, 99, 103 y 110, ya citada

Avila<sup>(97)</sup>, Segovia<sup>(98)</sup>, Murcia<sup>(99)</sup>, Jerez de la Frontera<sup>(100)</sup>,  
Burgos<sup>(101)</sup> o Madrid<sup>(102)</sup>.

Desde luego son muchos los problemas que presentan los jueces de salario<sup>(103)</sup>. En primer lugar, aparte de que parece totalmente incuestionable su condición de jueces, se nos plantea la cuestión de su coexistencia con los jueces foreros. Anulaban la jurisdicción forera o actuaban solamente en un plano de superioridad como jueces de apelación? Parece más bien deducirse por las incesantes quejas de los procuradores que suspendían la actuación de los jueces foreros<sup>(104)</sup> puesto que si se hubieran tratado de simples jueces de apelación, a las ciudades más que perjudicarles les hubiera favorecido la presencia de un juez real con lo que se hubieran ahorrado posiblemente un desplazamiento a la Corte al poder ser revisada en la misma ciudad las sentencias de sus alcaldes foreros.

- 
- (97) J. MAYORAL FERNANDEZ: El Municipio de Avila, Avila 1958, p. 30.
- (98) COMENARES: Historia de la Insigne ciudad de Segovia, Segovia 1637, pgs. 272-3.
- (99) J. TORRES FONTES: El Concejo murciano en el reinado de Alfonso XI, en AHDE 23 (1953, p. 13)
- (100) RALLON: Historia de Jerez de la Frontera, Jerez 1890-1894 t. II, p. 351.
- (101) J. GARCIA SAINZ DE BARANDA: La ciudad de Burgos y su Concejo en la Edad Media, Burgos 1967, t. II, pgs. 66 y ss
- (102) GIBERT: El Concejo de Madrid... p. 124.
- (103) Ver al respecto estos planteamientos hechos por el profesor B. GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano 1348-1808, Madrid 1970, pgs. 27 y ss.
- (104) En este sentido se manifiesta el profesor GIBERT: Historia general del Derecho... p. 51, si bien esta opinión no la comparte el profesor L.G. DE VALDEAVELLANO para quien administraban justicia juntamente con los alcaldes foreros, (Curso de Historia de las Instituciones... pgs. 567-8).

Igualmente se nos plantea la cuestión del Derecho que aplicaban estos "jueces de fuera". Aplicaban el Derecho real o se atenían a lo dispuesto en el fuero? Posiblemente en este aspecto se libraría de acuerdo al fuero local hasta 1348. Piénsese, y en ello nos basamos para sostener esta afirmación, ya que en 1286 cuando las ciudades protestan por primera vez - contra el envío de jueces reales, Sancho IV dispuso que tales jueces fueran del "reyno onde fuere el julgado"<sup>(105)</sup> y en sentido parecido se expresan Fernando IV en 1305<sup>(106)</sup> y los regentes en 1313<sup>(107)</sup>. Además, hemos de suponer que de no haber sido guardados los fueros, los procuradores hubieran expresado las quejas en este sentido en los distintos ordenamientos de Cortes. Creemos que aquí tampoco cabría entender que por el hecho de ser enviado a una ciudad o villa un alcalde de salario, perdiera sentido la distinción entre "pleitos foreros" y "pleitos del rey". Esta distinción afecta solamente en cuanto que hay determinados tipos de pleitos que por su gravedad o por la condición de alguna de las partes (riepto), debían ser vistos personalmente por el Rey en su Corte, por lo que, desde nuestro

---

(105) Cortes de Palencia de 1286 (CLC. I, 4, p. 96)

(106) Cortes de Medina 1305 (CLC. I, 5, p. 171)

(107) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 2,, p. 226).

punto de vista, esta distinción, que como es sabido se mantiene el Ordenamiento de Alcalá, implícitamente está ratificado nuestra afirmación de que los alcaldes de salario entendían de los pleitos foreros según lo dispuesto en el correspondiente fuero.

Finalmente nos encontramos también con el problema de la duración y la localización de los mencionados jueces. En cuanto a la duración ya hemos visto que hasta las Cortes de Toro de 1371 no se hace mención expresa a un período de tiempo -en este caso un año- que nos pueda indicar la duración de este oficio. En principio, estos alcaldes de salario parece que tienen un carácter de jueces delegados extraordinarios que se enviaban ante situaciones muy concretas y que cuya duración dependería de la voluntad real. No son jueces comisarios, ya que la delegación de estos se reduce al pleito o pleitos que expresamente se reconocían en su carta de comisión con lo que no podían intervenir en todo tipo de pleitos, son jueces extraordinarios en cuanto que su actuación se sale de la legalidad establecida en el Fuero, que no reconoce sus competencias, pero son al mismo tiempo ordinarios en cuanto que tienen una delegación de la jurisdicción ordinaria por parte del Rey.

No todas las ciudades y villas tuvieron la presencia de jueces de salario. Hemos hecho mención de algunas en el reinado de Sancho IV<sup>(108)</sup> en el de Fernando IV<sup>(109)</sup> y también sabemos que

---

(108) Véanse los documentos de la nota 72

(109) Véase nota 84.

los había en Zamora<sup>(110)</sup>, Cáceres<sup>(111)</sup> o Sahagún<sup>(112)</sup> entre otras, en el reinado de Alfonso XI. Son, por tanto, ciudades de Castilla y de León. El problema no se planteaba en Toledo, Murcia o las ciudades de Andalucía en las que el control de la administración de justicia era efectivo por parte del Rey o su representante el Adelantado Mayor. Es por ello por lo que el envío de jueces de salario se dirige fundamentalmente al Reino castellano-leonés, en donde los privilegios municipales han ido paulatinamente desplazando las facultades jurisdiccionales del Rey y por tanto, en donde esta penetración de la jurisdicción real se hace más reacia y penosa.

Es precisamente aquí, en el ámbito local, en estos municipios en donde el Rey encontrará los primeros obstáculos que se oponen a la proyección de su jurisdicción que, en definitiva, es la proyección de su poder, pero los objetivos de la política autoritaria y centralista de Alfonso XI se van cumpliendo inexorablemente. A finales de su reinado puede decirse que los alcaldes de salario se extienden por gran parte de las ciudades y villas de León y Castilla, y para asegurar aun más su control, el Rey revitaliza la figura de unos antiguos oficiales castellanos: los veedores<sup>(113)</sup>. Estos tienen funciones eminentemente

- 
- (110) VIGIL: Col. Dipl. Ayuntamiento de Oviedo, doc. 114, p. 186 y U. ALVAREZ MARTINEZ: Historia general civil y eclesiástica de la provincia de Zamora, Zamora 1889, p. 247.
- (111) FLORIANO CUMBREÑO: Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres, Cáceres 1934, t. I, p. 241.
- (112) VIGNAU: Indice de los documentos del Monasterio de Sahagún, Madrid 1874, doc. 298, p. 274.
- (113) Sobre estos oficiales véase GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... pgs. 29-30 y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), Murcia 1974, pgs. 55-6.



supervisoras y fiscalizadoras de los oficiales que desempeñan cargos de justicia y en ocasiones actúan enmendando (enmendadores) las actuaciones de los jueces que han podido perjudicar a cualquier miembro de la comunidad.<sup>(114)</sup>

De todos estos oficiales extraordinarios el que acabará por extenderse y arraigar hasta convertirse en un auténtico oficial de la jurisdicción ordinaria es el corregidor.<sup>(115)</sup>

Es difícil precisar el origen de esta figura<sup>(116)</sup> y las noticias que nos han llegado de él en su primera etapa no nos permiten caracterizarlo debidamente y diferenciarlo de otros jueces reales<sup>(117)</sup>. Tras la protesta de los procuradores en las Cortes de Alcalá de 1348 sobre algunos "corregidores de los pleitos de la justicia" que fueron enviados a "algunos obispos e ciudades e villas e lugares de los nuestros reynos"<sup>(118)</sup> parece que esta figura -y el silencio de las fuentes es muy significativo al respecto- dejó de actuar o si se envió algún nuevo corregidor fue para algún caso aislado<sup>(119)</sup>; no así los jueces de salario que siguen actuando, como hemos visto en las páginas precedentes.

- 
- (114) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... p. 30 y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... p. 55.  
 (115) Sobre el corregidor veánse las dos extensas monografías dedicadas a él de los profesores GONZALEZ ALONSO Y BERMUDEZ AZNAR citadas en las notas anteriores. Puede verse en ellas toda la bibliografía anterior sobre esta institución que tanto arraigo llegó a tener en Castilla.  
 (116) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... pgs. 31 y ss y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 56 y ss.  
 (117) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... p. 33.  
 (118) Cortes de Alcalá 1348 (CLC. I, 47, p. 608)  
 (119) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... p. 35 y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... p. 59.

Son escasas las noticias de corregidores en los dos reinados siguientes<sup>(120)</sup>, no así en el de Juan I en el que las referencias y alusiones son más abundantes y expresivas<sup>(121)</sup>, pero será en el reinado de Enrique III cuando los corregidores adquieran su definitiva proyección y se puede decir que se generaliza el régimen de corregimientos.<sup>(122)</sup>

Qué móviles impulsaron a Enrique III a esta política de implantar estos oficiales de justicia?. Fundamentalmente creemos, que se trata de una medida íntimamente ligada a la propia personalidad del Monarca. Tras los tres años de profunda crisis que caracterizaron la minoría de Enrique III, el joven Rey muy pronto da muestras de unas excelentes dotes políticas y un espíritu enérgico e inflexible<sup>(123)</sup>. El Rey se dispone a finalizar con la situación caótica que se extiende por todo el Reino; para ello se sirve de estos oficiales a los que dota de amplias competencias no sólo judiciales sino también gubernativas.<sup>(124)</sup>

(120) Ninguna del reinado de Pedro I y alguna del de Enrique II (BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 59-61.

(121) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... p. 37 y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... p. 62.

(122) Es bien expresivo al respecto el mapa que incluye en su trabajo el profesor BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 65-6.

(123) Véase L. SUAREZ FERNANDEZ: Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III de Castilla, Madrid, 1954.

(124) Son significativas las palabras de LOPEZ DE AYALA en su Crónica cuando muy enfáticamente sintetiza la labor de este monarca: "E fue este Rey Don Enrique muy justiciero, e puso corregidores en todos los logares de su Reyno, en tal manera que todos avian miedo del" (Crónica de Enrique III año 1406 suplementos a la Crónica p. 247). Véase también el trabajo de E. MITRE: La extensión del régimen de Corregidores en

Enrique III ha puesto al frente de cada una de las principales ciudades ya sean de León, Castilla, Andalucía o Murcia un Corregidor<sup>(125)</sup>. El régimen se generaliza mucho más en el reinado de sus sucesores Juan II y Enrique IV<sup>(126)</sup> hasta el punto que ya en el siglo XV estos jueces extraordinarios se han convertido en ordinarios.<sup>(127)</sup>

El éxito de esta institución radicaba en el amplio espectro de competencias con que los Reyes dotaron al corregidor<sup>(128)</sup> con lo que el intervencionismo real en la esfera local quedaba plenamente manifiesto al convertirse el corregidor en la piedra angular de la ciudad y su comarca.

Resulta ciertamente problemática la delimitación de las competencias de los corregidores en su primera etapa, es decir, hasta el reinado de Enrique III. Son, indiscutiblemente, como lo corrobora el texto de las Cortes de Alcalá de 1348<sup>(129)</sup>, jueces, pues

(124) /...el reinado de Enrique III de Castilla, Madrid, 1969. Los móviles que impulsaron a Enrique III, para el profesor MITRE, son tres fundamentalmente. El intento de acabar con las pugnas ciudadanas encabezadas por facciones nobiliarias que habían contribuido a la corrupción y crisis de la administración municipal; la lucha contra el monopolio de cualquier poder que se opusiera a la corona, y finalmente, el restablecimiento del orden y la justicia en los territorios de sus Reinos.

(125) Podemos citar, entre las más importantes, Burgos, León Salamanca, Toro, Zamora, Guadalajara, Sevilla, Córdoba Jaén, Murcia (Vid. BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 64-5).

(126) GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... pgs. 38-4 y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 65-

(127) En las Cortes de Salamanca de 1464 los procuradores llegaron a afirmar, no sin exageración, que "en todas las cibdades e villas ay corregidores" (CLC. III, 4, p. 751).

claramente se les denomina "corregidores de los pleitos de justicia"<sup>(130)</sup>, y, en este sentido, en años posteriores queda totalmente ratificada su condición de oficiales con jurisdicción<sup>(131)</sup>.

Sin embargo, el carácter de excepcionalidad se debió encerrar la actuación de los corregidores hasta tiempos de Enrique III, hace que no afectara su intervención al esquema general de la administración de justicia de un modo ostensible. Esta quedaría sólo alterada en aquellos lugares y por el tiempo en que el corregidor verifica sus competencias judiciales.

El problema se nos plantea cuando el régimen de corregidores se extiende por la Corona castellana en tiempos de Enrique III y su carácter de excepcionalidad se convierte en normalidad. La actuación de los corregidores supone en este caso la alteración de todo el organigrama judicial local y territorial del siglo XIV al entrar en conflicto de competencias, en unos casos, al desplazar, en otros, a los viejos oficiales de justicia.

El Corregidor tiene competencias judiciales que comprenden el mero y mixto imperio, jurisdicción civil y criminal, alta y baja<sup>(132)</sup>, pudiendo intervenir de oficio o a instancia de parte y al que, en ocasiones, se le daba el carácter de juez comisario para

(128) /...Sobre las competencias del corregidor véase GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano... pgs. 60 y ss. y BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 164-196.

(129) Cortes de Alcalá 1348 (CLC. I, 47, p. 608)

(130) Tanto GONZALEZ ALONSO (El Corregidor Castellano... p. 61) como BERMUDEZ AZNAR (El Corregidor en Castilla... p. 1<sup>a</sup>) admiten este innegable carácter judicial.

(131) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333); Ordenanzas del Consejo Real de 1390 (Santa Cruz Ms. 25, fol 295v); Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 5, p. 14); Cortes de Ocaña 1422 (CLC. III, 2, p. 37); Cortes de Palenzuela 1425 (CLC: III, 3o, pgs. 69-7o) passim.

(132) BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 173-5

algún caso concreto o de juez pesquisidor.<sup>(133)</sup>

Ante estas amplias facultades, el problema se nos presenta ciertamente vítrioso, y debemos cuestionarnos, al igual que hacíamos con los jueces de salario, si la actuación del corregidor suponía la suspensión de la jurisdicción de los alcaldes forens u otros alcaldes reales (mayores, menores o, incluso, los mismos de salario), o, si por el contrario, la jurisdicción de éstos no se veía afectada directamente.

Es este, uno de los puntos más espinosos y en el que el estado actual de la investigación no permite una respuesta definitiva, como ya señalaba el profesor GONZALEZ ALONSO<sup>(134)</sup>. Por su parte, el profesor BERMUDEZ AZNAR, considera que el corregidor "ha acumulado en sí" las alcaldías locales.<sup>(135)</sup> Pero el problema se complica más desde el momento en que no podemos precisar, a falta de estudios que nos esclarezcan este punto, cuales eran las competencias territoriales de los corregidores, es decir, la cuestión quedaría reducida a si los corregidores son oficiales reales de la administración local -porque se reduce su jurisdicción a la ciudad para la que ha sido nombrado- o si, por el contrario, los corregidores pueden ser considerados oficiales

(133) BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 177-8

(134) Recoge el profesor GONZALEZ ALONSO las opiniones de los autores que se han pronunciado al respecto. La mayoría de estos (SACRISTAN, GIBERT, FONT RIUS) coinciden en pensar que los jueces reales desplazaron a los de fuero, pero ante la falta de datos, es ciertamente peligroso generalizar (El Corregidor castellano... pgs. 62-3).

(135) El Corregidor de Castilla... p. 179.

de la administración territorial por cuanto sus competencias no solo se limitan al ámbito estrictamente ciudadano y sus alrededores sino que se extendían a un amplio territorio.

Parece, sin embargo, y no por ello dejamos de tener muchas reservas a falta de más estudios que se ocupen del ámbito local, que las competencias jurisdiccionales de los corregidores eran más territoriales que estrictamente locales. Y cuando hablamos de "ambitos territoriales" no queremos referirnos a las grandes circunscripciones que formaban los reinos como Castilla, León, Murcia, sino que, precisamente ante la poca operatividad que tenían los alcaldes mayores de Adelantamiento o Merindad por su amplio territorio jurisdiccional, ahora, en el siglo XV, buscando una mayor efectividad de la administración de justicia, las grandes circunscripciones aunque nominalmente permanecen junto a los alcaldes mayores de cada una de ellas, son desde un punto de vista judicial "fragmentadas" en distintos corregimientos. Sería el caso, por ejemplo, de las Asturias de Santillana.<sup>(136)</sup>

Por otra lado, no deja de ser muy significativo, como ya bien destacó el profesor GARCIA-GALLO<sup>(137)</sup>, los rasgos comunes que existen entre los alcaldes de adelantamiento y corregidores hasta el punto que en ocasiones los contemporáneos los - --

(136) Véase al respecto el reciente trabajo del profesor PEREZ-BUSTAMANTE: Sociedad, Economía, Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de Santillana (s. XIII-XIV), Santander 1979, principalmente pgs 231 282 . Enportante aportación al estudio del corregidor ha hecho el profesor PEREZ BUS TAMANTE. En este trabajo en donde publica un registro de todas las actuaciones de dicho Oficial y de su Alcalde. Este registro será publicado completo en breve por el mismo profesor en obra aparte.

(137) Alcaldes Mayores y Corregidores... p. 709.

confundan e incluso las recopilaciones castellanas hagan un tratamiento indiscriminado de ellos.<sup>(138)</sup> De esta forma tendríamos a los corregidores con competencia sobre la ciudad generalmente importante- en que tiene su sede y sobre un amplio territorio que la circunda; en aquellas otras zonas rurales que se escapan a la jurisdicción del corregidor serían competentes los alcaldes de adelantamiento que recorren el territorio.

Puede ocurrir, no obstante, que el corregidor sea nombrado para una ciudad, cabeza de Reino, -Toledo, Sevilla, Córdoba o Jaén- que se caracterizaban por tener al frente de ellas un Alcalde Mayor, distinto, por tanto, a los que acompañaban a los Adelantados Mayores y Merinos Mayores; en este caso, el corregidor o el asistente<sup>(139)</sup>, dejaban en suspenso la jurisdicción de los Alcaldes Mayores, que tenían competencias territoriales. Caso similar ocurre se nombra corregidor para una demarcación territorial en la que existe también Alcaldes Mayores, como las Asturias de Santillana, en cuyo caso, estos quedarían en suspenso ante la llegada del Corregidor, como ha señalado recientemente PEREZ-BUSTAMANTE.<sup>(140)</sup>

(138) GARCIA GALLO: Alcaldes Mayores y Corregidores... p. 709, nota 45.

(139) Sobre esta figura véase BERMUDEZ AZNAR: El Asistente en los Concejos castellanos bajomedievales en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1971.

(140) Sociedad, Economía, Fiscalidad... pg. 262.

Todo ello nos lleva, y con esto volvemos a nuestro planteamiento inicial, pensar que los corregidores, desde el momento en que tienen jurisdicción sobre un territorio más o menos amplio, no pueden reasumir las alcaldías locales, sean foreras o de salario, sino que se han de servir de ellas o, en su caso, nombrar sus alcaldes<sup>(141)</sup> que actuaban en su lugar durante su ausencia y en aquellos lugares donde el corregidor lo creyera oportuno.

Los corregidores, si damos por válida la hipótesis que acabamos de exponer serían también jueces de apelación de los fallos dados por los alcaldes de las villas del corregimiento y de sus propios alcaldes.<sup>(142)</sup>

En cuanto a las razones por las que los Reyes optaron por sustituir a los Alcaldes Mayores por Corregidores vienen dadas por la propia naturaleza y las amplias competencias del oficio. Además, las Alcaldías Mayores acabaron por politizarse y caer en manos de las principales familias de las oligarquias ciudadanas con la que la primitiva finalidad de las mismas, es decir, el control de la administración de justicia por parte del Rey, pronto quedó reducido a un control nominal.

---

(141) Véase PEREZ BUSTAMANTE: Sociedad, Economía, Fiscalidad... pgs. 262-3. en donde cita varios alcaldes de corregidor.

(142) Mientras el profesor GONZALEZ ALONSO (El Corregidor castellano... p. 63) piensa que los corregidores desplazaron a los alcaldes de fuero y se erigen en jueces de primera instancia, para el profesor BERMUDEZ AZNAR (El Corregidor en Castilla... pgs. 179-90) el corregidor conoce sentencias en grado de apelación.



Tras la profunda crisis que supuso la última década del reinado de Enrique IV y la guerra civil durante los primeros años del reinado de los Reyes Católicos, se comprende - que éstos, los últimos "reyes juzgadores"<sup>(143)</sup> incrementaran notablemente el régimen de corregidores<sup>(144)</sup> una vez finalizada la contienda civil en 1480. Aquel carácter de excepcionalidad que suponía el envío de un corregidor, se ha convertido en el régimen general, ganando, como señala el profesor GONZALEZ ALOSO<sup>(145)</sup> la jurisdicción real en extensión y profundidad; se han convertido en pieza clave de la justicia y gobernación del Reino.

Los Reyes Católicos, plenamente conscientes de que para conseguir un estado fuerte es necesaria una justicia fuerte, desde muy pronto se preocuparon de regular el régimen jurídico de los corregidores que culmina con la Pragmática de 9 de Julio de 1500 en la que se contienen los Capítulos para Corregidores y jueces de residencia; el corregidor ha quedado convertido en el juez real por antonomasia.

---

(143) Así los denomina el profesor BENEYTO: La gestión de la magistratura moderna en AHDE 23 (1953), p. 66.

(144) Así nos relata PULGAR que "El Rey y la Reyna acordaron en aquel año de enviar corregidores a todas las ciudades y villas de todos sus reynos donde no los habían puesto" (Crónica de los Reyes Católicos, año 1480, cap. 115, p. 432).

(145) El Corregidor castellano,... p. 78

El reinado de los Reyes Católicos supone, desde el punto de vista de la administración de justicia, el fin de un largo proceso de más de dos siglos y medio iniciado por Alfonso X, reemprendido por Alfonso XI, pero que sólo llega a consolidarse en las puertas de la Modernidad. Ha sido un proceso arduo, tortuoso y en el que las vicisitudes políticas jugaron, en ocasiones, un papel fundamental.

### C A P I T U L O    I I I

La administración de la Justicia de la Corte I

- A.- Los Alcaldes de la Corte
- B.- Los Alcaldes de las Alzadas y el Adelantado Mayor de la Corte
- C.- Los Alcaldes de Hijosdalgo
- D.- Los Alcaldes del Rastro
- E. - El Juez de las suplicaciones
- F.- El Juez Mayor de Vizcaya

A. LOS ALCALDES DE LA CORTE

Desde el siglo pasado se ha venido hablando del "Tribunal de la Corte" pero lo cierto es que ninguna de las fuentes bajomedievales, ya sean legislativas, documentales o narrativas, utilizan tal denominación. Las fuentes, por el contrario, hablan o bien de "alcaldes que son puestos para juzgar los pleitos cada día en la corte",<sup>(1)</sup> haciendo referencia al lugar donde realizan su función; o bien de "mios alcalles",<sup>(2)</sup> "alcalles de mi corte",<sup>(3)</sup> o "alcalles del Rey en la ssu corte".<sup>(4)</sup> Otras veces se les distinguirá por la provincia sobre la que ejercen su jurisdicción y así tenemos "alcaldes de Castilla",<sup>(5)</sup> "alcaldes de las Estremaduras",<sup>(6)</sup> "alcaldes de la tierra de León",<sup>(7)</sup> "alcaldes de las Estremaduras y del Reino de Toledo",<sup>(8)</sup> "alcaldes de Andalucía",<sup>(9)</sup> "alcalles de cada una de las comarcas",<sup>(10)</sup> o sencillamente "alcalles de las provincias".<sup>(11)</sup> Igualmente a veces se les denomina "alcalles ordinarios",<sup>(12)</sup> sin más, hasta que ya en el siglo XV parece predominar el nombre de "alcaldes de corte e chancillería",<sup>(13)</sup> aunque no de modo definitivo.<sup>(14)</sup> Es, por tanto, un

- 
- (1) Espéculo 4, 2 pr. y Partidas 2, 9, 18.
  - (2) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 2, p. 198)
  - (3) Cortes de Palencia 1286 (CLC. I, 8, p. 97)
  - (4) Sentencia de 20 de septiembre de 1346 en T. DOMINGO PALACIOS. Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid. t. I, p. 285.
  - (5) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 17, 9. 89).
  - (6) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 9, p. 122-3).
  - (7) Crónica de Fernando IV, cap. XIII, p. 137.
  - (8) Cortes de Medina del Campo 1318 (CLC. I, 21, p. 335).
  - (9) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 11, p. 340)
  - (10) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34).
  - (11) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 2, p. 13).
  - (12) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190).
  - (13) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 53, p. 419).
  - (14) En las Cortes de 1480 encontramos "alcaldes de la cárcel e de la nuestra chancillería" (CLC. IV, 42, p. 126).

anacronismo la utilización de la palabra "tribunal" y, aunque funcionalmente sea mucho más esclarecedora puede conducirnos a equívocos desde el momento en que en la Corte no existía un solo "tribunal" sino que cada uno de los alcaldes ya fueran de las provincias, de las alzadas o de los fijosdalgo, juzgaban en un principio unipersonalmente con lo que, en todo caso, nos encontraríamos con tantos tribunales como alcaldes hubiera en la Corte, de ahí el que prefiramos omitir dicha terminología.

Los precedentes de los alcaldes de corte habrá que buscarlos sin duda, en la Curia Regia.<sup>(15)</sup> Desde la Alta Edad Media el Rey viene apoyando su incipiente actuación política en las fuerzas del reino, representadas en este momento, por la Curia Regia.

No es momento ahora de analizar aquí la importancia que esta institución tuvo durante toda la Alta Edad Media<sup>(16)</sup> pero sí es importante destacar la misión consultiva que ésta tuvo en el juego político y cómo esta función consultiva se manifiesta, principalmente, en tres vertientes: una política, otra legislativa, y finalmente, otra judicial.<sup>(17)</sup>

---

(15) En este sentido se expresan C. SANCHEZ-ALBORNOZ: La Curia Regia Portuguesa, pgs. 89-90 y sus discípulos L. G. VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones... pg. 561 y N. GUGLIELMI: La Curia Regia... p. 167.

(16) Sobre la Curia véanse los trabajos de SANCHEZ-ALBORNOZ: La Curia Regia Portuguesa y El Palatium Regis asturleonés, ya citados, y el de N. GUGLIELMI: La Curia Regia... también citado.

(17) GUGLIELMI: La Curia... p. 161.

Dentro de esta actuación judicial, que es la que a nosotros nos interesa, la Curia entendía de los problemas útiles para el orden interno del Reino. Unas veces su actuación era estrictamente consultiva, otras su intervención era sencillamente confirmatoria y, también podía ocurrir que de entre sus miembros el rey nombrara "iudices" para que entendieran de algún caso concreto que se planteaba ante la Curia.<sup>(18)</sup> Sin duda esta actuación judicial de la Curia tuvo que ser de cierta importancia; basta recordar la función eminentemente judicial del rey en este período, y así desde el siglo XII vemos desarrollar al monarca una intensa actividad judicial con participación de la Curia en los viajes realizados por el Reino.<sup>(19)</sup>

La presencia de "jurisperitos" en la Curia<sup>(20)</sup> y la designación de "iudices", que seguramente recaía sobre aquellos, para la resolución de los casos que se presentaban ante la Curia, hizo posiblemente que con el tiempo adquirieran el carácter de jueces permanentes; por eso, desde el siglo XII, nos encon-

(18) GUGLIELMI: La Curia..., p. 159-60.

(19) GUGLIELMI: La Curia..., p. 148.

(20) Desde el siglo XI encontramos referencias a los "iudices curiae"; así del año 1056: "Tunc rex mandavit suo iudice Annaia Annaiaz ut iudicasset has supradictas assertiones. Mox in presentia regis et magnatorum palatii iudicavit predictis iudex ut presentassent sibi testamenta sum testibus ex utrisque partibus et illis visis daret iudicium" (GARCIA LARRAGUETA: Colec. Dipl. Catedral de Oviedo, doc. 18, p. 183). En el siglo XII, en 1188, encontramos confirmando a "iudices regis" (J. GONZALEZ: Alfonso IX, t. II doc. 5 p. 15), y del mismo reinado pero ya a principios del XIII, encontramos otros confirmantes como "iudices regis" (J. GONZALEZ: Alfonso IX, t. II doc. 383, p. 497).

tramos ya con algunos personajes que aparecen confirmando privilegios y exenciones como "iudices regis"<sup>(21)</sup>. No obstante, pese a que estos "iudices" eran los que de hecho juzgaban, el fallo final aparecía siempre como otorgado por el propio Rey.<sup>(22)</sup>

Desconocemos el número de estos "iudices regis" o "alcaldes regis"<sup>(23)</sup>, pero por el contexto, al ser generalmente nombrados en plural<sup>(24)</sup>, podemos tal vez vislumbrar una actuación

(21) 1219, noviembre 4, Leon: "...invis peritos et curiam et indices Segionis insimul convocant" (J. GONZALEZ: Alfonso IX, t. II, doc. 383, pgs. 497-8). También Vid N. GÜGLIELMI: La Curia Regia... pg.

(22) Así, por ejemplo, la sentencia dada por Fernando II en 1178 en el pleito entre el monasterio de Eslonza y algunos vecinos de Villasabariego sobre la iglesia de este lugar - (CALVO: San Pedro de Eslonza, doc. 119, p. 295) o la sentencia de Fernando III sobre el pleito que sostenían el abad de Valladolid y el concejo de Tudela sobre la propiedad de la aldea de Tovilla en 1226 (J. MAÑUECO: Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, t. II, doc. 23, pgs. 120-23); sentencia de 1276, diciembre 23 de Alfonso X (A.H.N. Clero. San Salvador de Oña, cap. 136, num. 6).

(23) En varios documentos aparecen con esta denominación: "super hanc contentionem iudicaverunt alcaldí domini regis" (año 1196, J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. III, docs. 822 y 829, pgs. 441 y 452, respectivamente).

(24) Año 878: "In presentia nostri domini Adephonsi principis... vel iudicum Gatoni et Hermigildi... Nos quidam iudices, sicut a nostro domno ordinatum habuimus, hanc causam ordinare ac providere..." (España Sagrada, t. XVI, p. 424); año 1178: "Tunc rex una cum his qui tunc in eius curia eran iudices electi, scilicet cum Roderico Fredinandi, Pelagi Tabaladielo, iudicaverunt..." (CALVO: San Pedro de Eslonza, doc. 119, p. 295) año 1186: "Statui... ut constitutis utrisque

colegiada de dos o más jueces. En cuanto a sus competencias tampoco podemos aventurar mucho; posiblemente, tratándose de una delegación del rey, y siendo éste el que en última instancia aparece dictando sentencia, podemos pensar que podían entender en primera instancia de aquellos casos reservados al conocimiento exclusivo del rey, así como los que se producían en el lugar en donde estuviera radicada la Corte en ese momento. Actuarían, quizás, también en segunda instancia como jueces de apelación de los otros jueces del Reino.

Esta situación parece que perdura durante el reinado de Fernando III<sup>(25)</sup> hasta que su hijo, Alfonso X, institucionaliza

(24) /III. partis advocatis, auditum curie mee subirent. Huius ergo cause iudices fuerunt Fernandus Didaci, magister militie sancti Jacobi, et Pelagius Taulatello, Garcias Fernandi et Petrus Arnaldi legionensis decanus, Didacus Beiro et domnus Grimaldo (ESCALONA: Historia del Monasterio de Sahagún, pág. 554). Año 1220: "et adiudicatum fuit ante me, in mea curia, per meos iudices..." (J. GONZALEZ: Alfonso IX. t. II doc. 391, p. 505). En el Poema del mío Cid, el Rey designa dos jueces para que fallen la contienda entre el Cid y los infantes de Carrión: "Alcaldes sean desto el Conde don Anrrich e el conde don Rremond" (HINOJOSA: El drecho del poema... p. 200). No obstante encontramos algún documento en el que parece que solo se designa un juez; año 1175: "Venerunt ad Curiam Adefonso regis ante presentiam ipsius. Et precepit Rex comiti don Gomez, ut iudicaret iudicium istud, et iudicavit comes coram Rege et aliis honoratis viris qui aderant (BERGANZA: Antigüedades de España, t. II, p. 386). En sentido similar los documentos 822 y 829 recogidos por J. GONZALEZ en su Alfonso VIII, citados en la nota anterior.

(25) "Comperta quoque veritate, per inquisitionem scriptam et ad nos delatam a predistis inquisitionibus, de consilio baronum nostrorum, et iudicium curie nostrae, atque aliorum prudentu, virorum..." (MANUECO: Documentos de la Iglesia Colegial... t. II, doc. 23, pgs. 120-23). Véase también



estas alcaldías dentro de ese programa de reformas que el Rey Sabio intenta implantar los primeros años de su reinado. Por tanto, la primera regulación minuciosa que se hace de estas alcaldías de la corte la encontramos en el *Espéculo* y no en las Cortes de Zamora de 1274 como generalmente se viene afirmando. (26)

---

(25) /...la sentencia de J. MONTAZGOS (MARTIN LAZARO: Colección diplomática municipal de Béjar, Madrid, 1921, doc. 1, pág. 290).

(26) Desde el siglo padado se viene afirmando que estas alcaldías se instituyeron en las Cortes de Zamora de 1274. F. MARTINEZ MARINA no aventuró nada en torno al origen de los alcaldes de la Corte, sólo se limitó a apuntar enfáticamente que "en Zamora en 1274 Alfonso X da un ordenamiento para organizar el Juzgado de la corte y fijar la autoridad, número, cualidades y circunstancias de estos supremos magistrados..." (Teoría de las Cortes, 2a. parte, p. 278). Tampoco se plantea el problema COS GAYON: La Administración Pública de España, Madrid 1851, p. 103; El primero que afirma que los alcaldes de la Corte fueron constituidos en 1274 es M. COLMEIRO en su Curso de Derecho Político, Madrid 1873, p. 562 y lo reitera en De la constitución y el Gobierno de los reinos de León y Castilla, Madrid 1855, t. II, p. 255; y esta misma opinión la sostuvo M. DANVILA, El poder civil en España, I, p. 466, ninguno de los dos fundamentan su afirmación. Otros autores, sin entrar tampoco en el fondo de la cuestión han hecho referencia a las citadas alcaldía, ya sea desde el campo de la Historia general, como M. LAFUENTE, (Historia General de España, t. IV, p. 469) o desde la Historia del Derecho como ANTEQUERA (Historia General del Derecho Español Madrid, 1900, p. 609) o MARICHALAR y MANRIQUE (Historia de la Legislación... Madrid, 1862, vol. III, p. 88). En este siglo encontramos de nuevo autores como S. MIN GUIJON (Historia del Derecho Español, Barcelona 1925, cuade: no 11, p. 235) quien sostiene, también sin fundamental, la institución de los alcaldes de corte en 1274. No se pronunciaron en este sentido A. GARCIA-GALLO (Historia del Derecho Español, Madrid, 1949, p. 308; y más recientemente en su trabajo Las Audiencias en Indias, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1975, p. 363), J. BENEYTO (Historia de la Administración española e hispanoamericana, -

Efectivamente en el Espéculo -y ahora no vamos a entrar en el fondo de la problemática que esta fuente suscita, porque en definitiva, no afecta de modo trascendental a lo que ahora nos importa<sup>(27)</sup> se regula la actuación de todos los jueces del

---

(26) /... pgs 284-5) L.G. DE VALDEAVELLANO (Historia de España, Madrid 1968, t. II. p. 632 y en su Curso de Historia de las Instituciones españolas, 3a. ed. Madrid, 1973, p. 562) o R. GIBERT (Historia General del Derecho Español, Madrid, 1973, p. 47). Sorprende, en cambio, que un trabajo monográfico como el de M.A. PEREZ DE LA CANAL (La justicia en la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, en la revista Historia, Instituciones, Documentos, ya citado) no haga referencia ni se plantee el problema del origen de estas alcaldías. Ha sido el prof. VILLAPALOS quien acertadamente, ya apuntaba y admitía la existencia de este tribunal con anterioridad a las Cortes de 1274, apoyándose en los textos de las Cortes de Valladolid de 1258 (Los recuros... pgs. 252-3) y parece que llega a relacionarse el origen con el Espéculo. D. TORRES SANZ (La Administración Central castellana en la Baja Edad Media, tesis inédita ya citada, p. 347 y ss), aún admitiendo la referencia que de los alcaldes se hace en el Espéculo, no se define por una postura concreta concluyendo que "las fuentes no permiten retrotraer la aparición de estos oficiales mucho más allá del reinado de Alfonso X (p. 349).

(27) El Prof. GARCIA-GALLO recientemente ha revisado minuciosamente toda la obra legislativa de Alfonso X en su trabajo ya citado Nuevas Observaciones... en AHDE 46 (1976) pgs. 620 y ss. En este trabajo se modifica lo que ya mi maestro, el profesor GARCIA-GALLO, había sostenido en otro estudio, revolucionario en su tiempo, en el que ponía al día el estado de la investigación acerca de las Partidas y propugnaba allí una sugestiva hipótesis sobre la formación de las Partidas en base a sucesivas redacciones del texto inicial del Espéculo (Vid. GARCIA-GALLO: El "Libro de las Leyes" de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas, en AHDE, 21 (1951), pgs. 345-528). En un auténtico alarde de agudeza y conocimiento de los textos alfonsinos el prof. GARCIA-GALLO da un giro sustancial a toda la obra legislativa que venía atribuyéndose a Alfonso X. En primer lugar, identifica el "Fuero del Libro" o "Libro del Fuero" con el Espéculo en base a que cuando se alude al "Fuero del Libro" en disposiciones concretas antes de 1272, no -

Reino y, entre ellos, la de los "alcaldes que son puestos para juzgar cada día en la corte"<sup>(28)</sup>. Este cuerpo legal regula detalladamente la designación<sup>(29)</sup>, juramento<sup>(30)</sup> condiciones requeridas para el desempeño del oficio<sup>(31)</sup>, recusación<sup>(32)</sup> y funciones<sup>(33)</sup> de estos jueces, en cambio, desconocemos el número de estos alcaides en los que ya se vislumbra una cierta competencia por -- territorios.<sup>(34)</sup>

(27) /...coinciden con el Fuero Real, sino con el Espéculo, y además, por otras referencias precisas y exactas que se hacen de este texto. Las referencias al Fuero Real o "Fuero de las leyes" sólo se encuentran a partir de 1290. Por tanto sería el Espéculo, y no el Fuero Real, el texto que Alfonso X concede como fuero subsidiario a Sahagún, Niebla, So<sup>ria</sup>, Peñafiel Atienza, etc. Contra este texto reacciona la nobleza en 1272 por lo que Alfonso X ha de ceder a las pretensiones nobiliarias. Esta argumentación lleva al prof. GARCIA-GALLO a posponer considerablemente la fecha de elaboración de otro texto, atribuido hasta ahora a Alfonso X el Fuero Real o "Fuero de las Leyes". De este texto se comienza a tener referencias en la Corte a partir de 1290, lo que lleva a concluir al prof. GARCIA-GALLO que el "Fuero de las Leyes" se trata de una reelaboración hecha en la Corte con finalidad legislativa durante el reinado de Sancho IV y, al mismo tiempo, pero con una finalidad doctrinal, se está reelaborando otro texto, el "Libro del Fuero de las leyes" que será el que llegará a nosotros con el nombre de las Partidas.

(28) Espéculo 4,2, pr.

(29) Espéculo 4,2,1.

(30) Espéculo 4,2,3.

(31) Espéculo 4,2,1.

(32) Espéculo 4,2,2.

(33) Espéculo 4,2,7; 4,2,13; 4,2,14; 4,2,15.

(34) Espéculo 4,2,11. "oyen las alzadas de aquellas tierras que el rey les señale".

No sabemos hasta qué punto se llegó a poner en práctica todo este sistema judicial de la corte que propugnaba el Espéculo, pero pese a la parquedad de las fuentes, parece que si llegó a fraguar a la vista de las Cortes de Valladolid de 1258 que hacen referencia a unos "alcaldes" que actúan en "casa" del Rey con unas competencias específicas<sup>(35)</sup> y, cuatro años más tarde, en un pleito de términos que se le presenta a Alfonso X, éste manda a Don Durand "nuestro alcalde" a verificar la partición de los términos.<sup>(36)</sup>

Uno de los puntos de fricción que supuso la reacción nobiliaria de 1272 era, precisamente, concerniente a la administración de la justicia. Es difícil precisar hasta qué punto esta revuelta supuso una ruptura con el sistema judicial del Espéculo o no, pero el cuaderno de las Cortes de Zamora de 1274, tal como ha llegado a nosotros, más que instaurar "ex novo" está matizando y completando lo que ya se había regulado en el Espéculo referente a los "alcaldes de la corte".

En las Cortes de Zamora se efectúa una distribución de las alcaldías por territorios<sup>(37)</sup> -que ya en el Espéculo se apuntaba<sup>(38)</sup> dando a cada uno de ellos, no sabemos con arreglo a qué criterio, un número determinado de alcaldes. Como el Espéculo no especificaba el número de alcaldes de corte que residían en ella, no podemos saber si el ordenamiento de Zamora supone una auténtica novedad en este aspecto; tampoco aquél -

(35) Cortes de Valladolid 1258 (CLC. I, 9, p. 56). Con anterioridad a esta fecha solo hemos encontrado una sentencia de Alfonso X de 1255, junio 20 en la que al final añade: - "Johan Johannes la fizo por mandado de Miguel Ferrant, alcalde del Rey (A.H.N. Ordenes Militares. Calatrava, - carp. 1o3, núm. 1o).

cuerpo legal nos hace referencia alguna a que los alcaldes actuaran por turnos. Desde luego lo primero que choca en el Ordenamiento de 1274 es la desigualdad de alcaldías -23 en total- que se atribuye a cada uno de los territorios: 9 a Castilla, 8 a León y 6 a las "Extremaduras"; y decimos que choca porque en los restantes ordenamientos de Cortes que se darán a lo largo de los siglos XIV y XV, todas las provincias, Castilla, León y Extremaduras, están igualadas en número de alcaldes que, procedentes de cada una de ellas, van a librar sus pleitos en la Corte.

Posiblemente ésta desigualdad sea más aparente que real si tenemos en cuenta la dinámica del sistema de turnos que el mismo Ordenamiento regula.<sup>(39)</sup>

Los alcaldes de Castilla eran nueve<sup>(40)</sup> pero tenían que ir siempre tres con el Rey<sup>(41)</sup> de modo que se turnaban cada cuatro meses. Los alcaldes de León, en cambio, eran ocho<sup>(42)</sup> de los cuatro que tenían que andar continuamente en casa del Rey,

---

/...

(36) M.H.E. t.I, doc. 89, pgs. 195-200.

(37) CLC. I, 17, pgs. 89-90.

(38) Espéculo 4, 2, 11.

(39) CLC. I, 17, pgs. 89-90.

(40) CLC. I, 17, pg. 89.

(41) CLC. I, 17, pg. 90.

(42) CLC. I, pg. 89.

pero la diferencia radica no sólo en el turno semestral<sup>(43)</sup>, sino también en que de estos cuatro alcaldes de León uno era caballero, por lo que su actuación estaba reservada a los pleitos de los hijosdalgo<sup>(44)</sup> y por tanto, de hecho, para los pleitos, digamos "ordinarios", sólo hay tres alcaldes como en Castilla. Nos queda entonces el problema de las Extremaduras. El Ordenamiento zamorano no hace referencia a cuántos alcaldes de estos territorios han de ir continuamente en casa del Rey como hace para Castilla y León, ni cuánto tiempo han de estar. Ante este problema no nos queda más opción que movernos en el terreno de las hipótesis. Rechazada en principio la posibilidad de que los seis alcaldes de las Extremaduras estuvieran todo el año en la Corte, nos quedan las alternativas de que o bien su estancia en la corte era cuatrimestral con lo que habría entonces tres turnos con dos alcaldes en cada turno, o lo que habría entonces tres turnos con dos alcaldes en cada turno, o también podría pensarse no en turnos cuatrimestrales, como los de Castilla, sino en turnos semestrales, como los de León, con los que habría dos turnos de tres alcaldes. Nos inclinamos más a pensar que se utilizaría esta última fórmula ya que esta manera siempre habría tres alcaldes de cada uno de los territorios en la Corte con el Rey; lo único que variaría serían los turnos (cuatrimestral para Castilla y semestral para León y Extremaduras) y no habría una discriminación entre las provincias.

(43) CLC. I, 17, p. 89-90. Se deduce del propio texto.

(44) CLC. I, 17, p. 90: "E que los quatro alcaldes del regno de Leon que han sienpre a andar en casa del Rey, que sea uno cavallero que sepa bien el fuero del Libro e la costumbre - antigua". Sobre el alcalde caballero volveremos al tratar de los alcaldes de los hijosdalgos.

Ya sólo quedaría cuestionarnos el por qué de esta diferencia en los turnos entre unas y otras provincias, pero ciertamente es difícil encontrar una respuesta satisfactoria. Tal vez la mayor estancia de la Corte en tierras castellanas, y, por consiguiente, dada la dificultad de los desplazamientos para los alcaldes de León y Extremaduras que se les compensaría con un turno de mayor duración...

Lo cierto es que a partir de este Ordenamiento de 1274 se van a mantener siempre el mismo número de alcaldes y el período de estancia en la Corte será el mismo para cada una de las regiones. <sup>(45)</sup>

Pero posiblemente lo más notable que recoge el Ordenamiento zamorano es el distinto sistema judicial que se establece para Castilla y para León. A qué se deben estas diferencias? Es cierto que todavía durante el siglo XIII cada Reino conserva su organización y de hecho las Cortes se siguen reuniendo separadamente pero no deja de ser una incógnita que, por ejemplo en León desaparecen los Adelantados y en Castilla no. Dejando ahora a un lado el tema de los Adelantados que veremos más adelante, interesa destacar que el sistema judicial que se recoge en Zamora para Castilla coincide exactamente con el -

---

(45) Así lo regulan las Ordenanzas de 1310 (BENAVIDES: *Memorias...* doc. 510, p. 733), las Cortes de Valladolid de 1312 (CLC. I, 2, p. 198), Las Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 4, p. 338); Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 33) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190), Cortes de Briviera 1387 (CLC. II, 28, p. 389).

mismo que años antes Alfonso X estableciera en el Espéculo<sup>(46)</sup>. Por qué triunfa este sistema en Castilla y en León nó?. Desde luego desde el plano que ahora estamos viendo, es decir, los alcaldes de corte, en principio tanto en el sistema leonés como en el castellano se mantienen; el problema se suscita a nivel de conocimiento de las alzadas por eso, nos limitamos ahora a dejar planteada la cuestión puesto que más adelante volveremos sobre ella.<sup>(47)</sup>

Nos queda también la incógnita de qué sistema se seguiría en las Extremaduras ya que el Ordenamiento hace ninguna alusión a él. El de Castilla?. El de León?. Sólo sabemos que los tres "omes buenos" encargados de librar las alzadas tienen jurisdicción sobre León, Extremaduras, Toledo y Andalucía.<sup>(48)</sup> Esta equiparación con respecto a las alzadas supone que Extremaduras, Toledo y Andalucía seguían el mismo sistema - que se establece para León?. Por qué Toledo y Andalucía no tenían alcaldes de Corte como los otros territorios?. No lo sabemos ni podemos aventurar una respuesta satisfactoria a la luz de la escasa documentación que nos ha llegado del final del reinado de Alfonso X.

(46) Espéculo 4, 2, pr.; 4,2,5; 4,2,11; 4,2,12; 5,4,14; 5,4,17; Ver cuadros núm.

(47) Ver en este capítulo el apartado correspondiente a los alcaldes de las alzadas.

(48) CLC, I, 2o, p. 9o.



Finalmente, el Ordenamiento de 1274 mantiene el modo de actuar unipersonal de cada uno de estos alcaldes de la Corte en la misma línea del Espéculo<sup>(49)</sup>. Recoge también su obligatoria condición de legos<sup>(50)</sup> y el horario a que se deben atender los jueces<sup>(51)</sup> y la prohibición de juzgar en iglesias y cementerios<sup>(52)</sup>. Hemos de suponer que estas disposiciones de carácter general aunque en el cuaderno sólo vayan referidas a Castilla tendrían validez tanto para los alcaldes de León como de las Extremaduras. A los alcaldes se les dotará también de escribanías propias para el mejor desempeño de sus funciones.<sup>(53)</sup>

Parece que durante los primeros años del reinado de Sancho IV este sistema que hemos venido describiendo se ha mantenido en lo que respecto a los alcaldes de la Corte<sup>(54)</sup>. Tenemos

(49) Espéculo 4, 2, 14, aunque "si quieren pueden tomar algunos con los que oyan (los pleitos) con ellos e con quien se conseien". No obstante el Ordenamiento de 1274 no dice nada a este respecto.

(50) CLC. I, 17, p. 90. El Espéculo no se había pronunciado en este aspecto por lo que hay que suponer que en este punto el Ordenamiento de Zamora supone una variación.

(51) CLC. I, 17, p. 90: "...de guisa que sean y a la misa matinal, o esten y en verano fasta que sea dicha la misa mayor dela tercia, e en invierno fasta medio día...". Véase al respecto Espéculo 4, 2, 15: "ca deven se levantar de buena mañana, e comenzar a oyr los pleitos de que saliere el sol fasta medio día. E esto desde mediado octubre deve comenzar a esa ora misma, e oyr los pleitos fasta que el tercio del día sea pasado".

(52) CLC. I, 17, p. 90. "e que non judguen en yglesia ni al cementerio".

(53) CLC. I, 17, p. 90: "e que ayan sus escrivanos quelos ayuden a librar sus pleitos".

(54) Véase por ejemplo, GAIBROIS: Sancho IV, t. II, pgs. 152-3 y t. III, doc. 319, p. 201. Véase también los textos de la nota siguiente.

algunos testimonios que nos permiten afirmar este punto<sup>(55)</sup>, aunque, ciertamente, no sean muy numerosos. Es posible también que prosiguiera el sistema de turnos<sup>(56)</sup> y, sobre todo, se insiste en que se guarden celosamente las competencias territoriales<sup>(57)</sup>. Pero la nota más característica de este reinado, si bien pudo ya haberse producido en los últimos años de Alfonso X, es la vinculación definitiva de los alcaldes de la Corte a la Chancillería<sup>(58)</sup>; y al mismo tiempo se produce una progresiva desvinculación de la persona del Rey con dicho organismo.

(55) Cortes de Palencia 1286 (CLC. I, 8, p. 97). Cortes de Valladolid 1293, ordenamiento a los concejos de Castilla en donde se pide que los alcaldes de las Extremaduras y León no emplacen ni juzguen a los de Castilla (CLC. I, 14, p. 112) y de igual manera en el ordenamiento dado para Segovia y Madrid, en las mismas Cortes, se pide que los de las Extremaduras sean sólo juzgados por sus alcaldes (CLC. I, 9, p. 123). Los del reino de León se expresan en el mismo sentido (CLC. I, 11, p. 123). También en otro texto de las mismas Cortes de 1293 el Rey consiente que el infante Don Fernando pueda tomar yantar "quando andudiere por la tierra en nuestro logar e traxiere consigo alcaldes para facer iusticia e derecho...". (CLC. I, 5, p. 109).

(56) En apoyo de esta afirmación sólo hemos encontrado una referencia en el Registro de la Chancillería de 1284 que dice: "a alfonso ferrandez alcalde del Rey por su quitación de quatro meses a rrazon de VI mr. cada dia, DCCXX mr. de la guerra, angelos a dar garcia alvares alcalde de Toledo et johan garcia e Rodrigo alfonso... (GAIBROIS: Sancho IV, t. II, pgs. 152-3). Un alcalde del Rey con quitación en la Corte ha de ser, creemos, un alcalde de Corte. Ya vimos, además, que en las Cortes de Zamora de 1274 se establecía un turno cuatrimestral para los alcaldes de Castilla.

(57) Cortes de Valladolid 1293. Ordenamiento a los concejos de Castilla (CLC. I, 14, p. 112). Ordenamiento a los concejos de León (CLC. I, 11, p. 123). Ordenamiento a los concejos de Segovia y Madrid (CLC. I, 9, p. 123) antes citados.

(58) Testimonio de ello nos da la crónica de Sancho IV: "e de jo (el Rey) al Conde en Castilla, e dejó con él al obispo de

Este fenómeno se debe, fundamentalmente, a dos razones: por un lado el requisito de que las sentencias y ejecutorias de los alcaldes tuvieran que llevar el gran sello del Rey, custodiado en la Chancillería, lo que hace totalmente necesaria la proximidad entre ambos órganos<sup>(59)</sup>; por otro lado, la complejidad cada vez más creciente de la burocracia hacen muy lentos los desplazamientos de la Chancillería, por lo que el Rey, en busca de una mayor movilidad, se dotará de una nueva Chancillería en la que se empiezan a despachar la mayor parte de los

---

(58) /...Astorga é al dean de Sevilla, que era su notario mayor en Castilla, con la chancillería, porque librasen todos los pleitos de la tierra..." (Crónica de Sancho IV, cap. IV, p. 76); "...é mandó (el Rey) que la su chancillería é todos sus oficiales que se fuesen para Burgos porque librasen y todos los pleitos que en la tierra acaescieren" (Crónica de Sancho IV, cap. VI, p. 80); "e dejó y la chancillería, porque librasen todos los pleitos de la tierra..." (Crónica de Sancho IV, cap. VII, p. 82). De esta identificación entre "tribunal" y Chancillería la puso de relieve también el prof. VILLAPALOS: Los recursos ... p. 256. Puede verse también al respecto la distinción que hizo en su tiempo F. MENDIZABAL: Investigaciones acerca del origen, historia, y organización de la Real Chancillería de Valladolid: su jurisdicción y competencia en RABM 30 y 31 (1913-1914) pgs. 61 y ss.

(59) Este fenómeno fue ya señalado por E. S. PROCTER en su trabajo "The castilian Chancery during reing of Alfons X, Oxford 1934, pgs 46-48 y por L. SANCHEZ BELDA: La Chancillería castellana durante el reinado de Sancho IV (1284-1295) en AHDE, 21-22 (1951-1952), pgs. 217-18, Falta entre nosotros un trabajo de conjunto acerca de la Chancillería. Además de los citados, se ocupan de esta institución María - S. MARTIN POSTIGO: La Chancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959; L. PASCUAL MARTINEZ: Notas para el estudio de la chancillería castellana en el siglo XIV en Miscelanea Medieval Murciana, vol. IV, Murcia 1978.

asuntos de gobierno<sup>(60)</sup> dando paso así a la Chancillería secreta o de la "poridat"<sup>(61)</sup>. La antigua Chancillería quedará relagada a la expedición de los documentos más solemnes y, sobre todo, de las sentencias de los alcaldes de la Corte que residían en ella<sup>(62)</sup>. Es a partir de ahora cuando la palabra Chancillería se comenzará a usar como sinónimo de tribunal de justicia.

Tampoco parece que en el reinado de Fernando IV el esquema fundamental se viera afectado desde el punto de vista institucional aunque sí sufrirá algunas vicisitudes, debidas más a los turbulentos y difíciles años de la minoría que a una crisis de la institución.

Las sucesivas insurrecciones de la nobleza en 1295 y - 1296 debieron afectar al aparato institucional de la corte; sólo de esa manera es explicable la petición hecha por los procuradores en las Cortes de Valladolid de 1298 encaminada a la restauración de los alcaldes de la Corte<sup>(63)</sup> "tantos e tales que sean para ello". Un año más tarde, en las Cortes de 1299, se reitera esta petición.<sup>(64)</sup> El prof. L.G. DE VALDEAVELLANO sostiene que también el ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1299 quedó sin cumplir<sup>(65)</sup>, pero lo cierto es que hay algunos

(60) SANCHEZ BELDA: La Chancillería castellana... pgs. 217-18

(61) SANCHEZ BELDA: La Chancillería castellana... pg. 218.

(62) PROCTER: The castilian... pg. 123.

(63) Cortes de Valladolid 1298 (CLC. I, 7, p. 138).

(64) Cortes de Valladolid 1299 (CLC. I, 8, pg. 144).

(65) Curso de Historia de las Instituciones... p. 563.

testimonios que parecen indicar lo contrario. Así, por ejemplo, la carta plomada de Fernando IV de 1300 por la que recibe bajo su protección a Nuño Fernández, Chaciller de la Infanta Isabel<sup>(66)</sup> el mismo sentido de la petición 29 de las Cortes de Burgos de 1301<sup>(67)</sup>, así como las expresivas referencias de la Crónica de Fernando IV<sup>(68)</sup> y algún otro documento en que parece confirmando Pero Lopez de Fontecha "alcalde del rey"<sup>(69)</sup>. A la vista de estos datos no podemos negar la existencia de una actividad judicial en la Corte, posiblemente no con toda la regularidad que el Reino hubiera deseado, pero no olvidemos que por estos años se ha producido un tercer levantamiento de la nobleza.

En las Cortes de 1307 se insiste en el mal funcionamiento de la administración de justicia y se toman una serie de medidas para reordenarla. En primer lugar, ante el abandono por parte del rey en la administración personal de la justicia, se pide al rey que tome un día de la semana "qual touiere por bien" para que se sienta a librar los pleitos y que tome alcaldes "que anden cada día en la mi corte".<sup>(70)</sup> Como interpretar este texto?. No creo que deba interpretarse como una petición

(66) 1300, febrero, 29, R.A.H. Colec. Salazar doc. 47812, M-10, f. 88.

(67) CLC. I, 29, pg. 159.

(68) Crónica de Fernando IV, cap. XIII, pgs. 137 y ss.

(69) 1304, agosto 10 (BENAVIDES: Memorias... doc. 290, pgs 430-1).

(70) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185).

para que se nombren alcaldes ante un vacío institucional, sino que, posiblemente, a lo que está aludiendo la petición no es tanto a que ponga alcaldes porque no los haya -acabamos de ver pruebas de actividad judicial en la corte- sino que se está haciendo hincapié en la condición de esos alcaldes, "caballeros e omes buenos delas villas" que no sean de "Orden, nin que ffuera de los mios rregnos"<sup>(71)</sup>, es decir, se está pidiendo una garantía en el desempeño de la administración de justicia así como que los alcaldes tengan carta de naturaleza en los reinos e insistir que no sean clérigos. En una palabra, se está pidiendo que se cumpla todo lo establecido en los ordenamientos de Cortes anteriores con respecto a la administración de justicia. Por eso el rey contesta que cuando el "catare omes buenos para alcaldes" lo hará "desta guisa que melo piden".<sup>(72)</sup>

Ante la separación material que existe entre el rey la Chancillería, es decir, de su aparato judicial, se insiste que los alcaldes "anden cada día en la mia corte et que les de buenas soldadas".<sup>(73)</sup> Igualmente se reitera "que cada alcalde libre las cartas segund la tierra onde ffuere" y "non libre carta ninguna de la villa onde ffuere morador"<sup>(74)</sup>, prohibición, ésta última, encaminada sin duda a conseguir una actuación más independiente de los alcaldes.

---

(71) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185): "a lo que me dixerón que unas delas cosas que ellos entendían, por quela mi tierra es que una delas cosas que ellos entendían, por quela mi tierra es pobre e agraviada que es por que en la mi casa e en los mios rregnos no ha justicia segund deue. Et la manera por que ellos entendien por que se puede fazer es que tome yo caualleros e omes buenos delas villas delos mios rregnos, que anden cada dia en la corte..."

(72) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185).

(73) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185).

(74) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 3 p. 186).

Todas estas medidas encaminadas al mejor funcionamiento de la justicia de la casa del Rey, fueron quizás, el preludio de las Ordenanzas de 1310<sup>(75)</sup> recogidas y ampliadas en las Cortes de Valladolid de 1312.<sup>(76)</sup>

En primer lugar se va a recoger la práctica de que el rey se siente un día a la semana en lugar público a oír los pleitos "tomando conmigo -dirá el rey- los mros alcaldes e otros omes bonos de mi corte",<sup>(77)</sup> al mismo tiempo que se hace una enumeración de los pleitos en que los alcaldes de la corte van a tener competencia privativa.<sup>(78)</sup>

No sabemos hasta qué punto las 23 alcaldías que se habían constituido en Zamora en 1274 se mantuvieron (posiblemente en estos últimos años se habría alterado el esquema), pero ahora, en 1312, se van a reducir sólo a 12 las alcaldías, distribuidas en igual número es decir cuatro, entre Castilla, León y Extremaduras. Estas alcaldías se servirán semestralmente de forma que siempre habrá seis alcaldes permanentemente en casa del rey.<sup>(79)</sup> Los alcaldes van a quedar definitivamente vinculados a la Chanchillería al recibir su soldada y quitación de ella.<sup>(80)</sup>

(75) Pueden verse estas Ordenanzas en BENAVIDES! Memorias... doc. 51o, pgs 732-38 y en la B.N. Ms. 5741.

(76) Las Cortes de Valladolid alteran y añaden algunos puntos con respecto a las Ordenanzas de 1310 (CLC. pgs. 197 y ss).

(77) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, p. 198).

(78) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312. (CLC. I, 2, p. 128).

(79) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312. (CLC. I, 2, p. 198).

(80) Ordenanzas 1310, p. 733, y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 3, p. 199).

Las Ordenanzas de 1310 son de importancia capital para la administración de justicia pues en ellas se recoge, además de lo visto anteriormente, un auténtico reglamento del oficio de -alcalde: su remuneración<sup>(81)</sup>, responsabilidades<sup>(82)</sup>, derechos<sup>(83)</sup>, prohibiciones<sup>(84)</sup>, así como la asignación de un escribano.<sup>(85)</sup>

Finalmente hemos de hacer referencia a dos alcaldes de casa del rey "que especialmente libren todos los pleitos, e las cartas de los preladados, de las ordenes..." a los que se hace referencia en dos documentos de 1311<sup>(86)</sup>. Quiénes eran estos alcaldes?. A tenor de los textos puede pensarse que se trata de dos alcaldes con una jurisdicción especial totalmente independiente de los restantes alcaldes de la corte, pero, al no tener más noticias de estos alcaldes que los dos documentos citados, tampoco se puede descartar la posibilidad de que todos los restantes alcaldes de la corte se escogieran dos para librar exclusivamente los pleitos y caras de los preladados y las Ordenes militares.

---

(81) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 3, p. 199).

(82) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 33, p. 205).

(83) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 5, p. 199).

(84) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (XLC. I, 40, p. 206).

(85) Ordenanzas 1310, p. 734 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 6, p. 199).

(86) BENAVIDES: Memorias... docs. 541 y 543, pgs. 793-5 y 789-91; si bien es verdad que se trata de dos documentos muy parecidos.



Al igual que ocurriera en el reinado anterior, los primeros años de la minoría de Alfonso XI se caracterizan por la inestabilidad política y turbulencia. Aparecen tres pretendientes a la regencia (Don Juan el de Tarifa, Don Juan Manuel y Don Pedro) por lo que hasta 1325 en que el Rey obtiene su mayoría de edad, las pugnas entre las facciones de los regentes van a ser constantes.

Ya en las primeras Cortes del reinado, celebradas por el infante Don Juan, encontramos una petición en el mismo sentido, creemos, que la que se había propuesto en las Cortes de Valladolid de 1307, es decir, se solicita que "en casa de nuestro sennor el Rey que ssean y puestos alcalles e escriuanos delos rregnos et estos sean omnes buenos e fforeros que teman a Dios e al Rey e asus almas e guarden a cada uno so derecho..."<sup>(87)</sup> Significa esta petición la inexistencia de alcaldes de corte?. Admitir esta posibilidad significaría la negación de la efectividad de la Ordenanza de 1310 y de las Cortes de Valladolid de 1312. No obstante creemos que cabe otra interpretación. Al morir Fernando IV, posiblemente con la llegada de los

---

(87) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 19, p. 226). La petición recoge, además, cómo han de actuar los citados alcaldes: "Et que los alcaldes que libren los pleitos bien e derecha mente e que non tomen algo nin presente ninguno por rrazon delos pleitos que libraren, et sse ffuere ffallado por verdat assi como deue quello toman, quelos echen dela corte por enffamados e perjuros e que non ssean mas alcalles nin escriuanos nin ayan nunca offiçio nin onrra en casa del Rey, et demas que pechen las quitaçiones que tomaren enese anno dobladas, et porque estos alcalles e escriuanos mas conprida miente puedan servir que ayan sus soldadas e sus quitaçiones enla chancelleria".

tutores se produciría una renovación de los oficios de la Corte y más aún, a tenor de lo regulado por las Ordenanzas de 1310 y las Cortes de 1312 las alcaldías son renovadas semestralmente<sup>(88)</sup> con lo que no ha de extrañarnos entonces que, muerto el rey y agotado el plazo, se le presente al regente la alternativa de elegir nuevos alcaldes, y ante esta situación, las Cortes le recuerdan las condiciones que han de reunir los alcaldes encargados de administrar la justicia en la corte.<sup>(89)</sup>

Tras arduas negociaciones en la concordia de Palazuelos se reconocen como regentes a los infantes Don Juan y Don Pedro, encomendándose la custodia del Rey a su abuela doña María de Molina, concordia que sería ratificada por las Cortes de Burgos de 1315. La existencia de dos regentes supone la división de los alcaldes de la corte<sup>(90)</sup> pero lo que complica más la situación es el texto de las Cortes de Carrión de 1317 en el que se da a entender que hay alcaldes no sólo con cada uno de los tutores sino también en la casa del Rey.<sup>(91)</sup> Pero lo verdaderamente no-

(88) Ordenanzas 1310, p. 733 y Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 2 p. 199).

(89) CLC. I, 19, p. 226.

(90) "...seyendo mostrado a los tutores o aquel quier dellos o alos alcalles del Rey que andudieren con ellos... (Cortes de Burgos 1315, 3, p. 250).

(91) "Otrosy alo que nos pedieron que en casa de nuestro ssennor el Rey e en las nuestras casas de cada vnos de nos los tutores que anden y tales alcalles e escriuanos del Rey para librar los pleitos..." (CLC. I, 5, p. 302); "Otros alo que nos pedieron en rraçon delos pleitos que acesçen ante los alcalles de que naçian apellaçiones para antel Rey, et los alcalles otorgantes las apellaçiones et mandagelas dar, et ponen plaço alas partes quelos uayan seguir para ante nuestro ssennor el Rey et las aprtes que apellan toman sus apelaciones, et las unas partes van antel Rey et las otras paresçien ante nos (los tutores)..." (CLC. I, 38, p. 314).

table de esta reunión es el control que sobre todo el aparato judicial va a ejercer la Hermandad frente a los tutores ya que será ella la que de entre sus miembros designará los alcaldes reales.<sup>(92)</sup>

En Carrión se insiste en que los alcaldes sean cada uno de la región, sin duda por ser mejores conocedores del Derecho de cada una de ella, y que cada alcalde sólo conozca de los pleitos de su territorio.<sup>(93)</sup> Por primera vez se hace alusión a unos alcaldes del Reino de Toledo para que "libren sus pleitos et sus cartas ssigunt sus ffueros e vsos assy commo lo ouyeron en tiempo delos otros rreys";<sup>(94)</sup> y al año siguiente, en las Cortes de Medina, encontramos de nuevo referencia a unos alcaldes "naturaleza delas Estremaduras e del rregno de Toledo".<sup>(95)</sup> Parece, a la vista de estos datos, que se ha producido la inclusión en la plantilla de los alcaldes de la Corte de unos alcaldes para librar los pleitos del Reino de Toledo, pero poco debieron durar ya que cuatro años más tarde en las reformas que se hacen en las Cortes de Valladolid de 1322 han desaparecido estos alcaldes de Toledo. Posiblemente hayan sido -

---

(92) "que sean y connusco en darlos aquellos omnes buenos quela hermandat diere para ello..." (CLC. I, 5, p. 302). En esta petición se repiten todos los preceptos de las Cortes anteriores referentes a los alcaldes: condición personal, respecto a la competencia territorial, sanciones, etc.

(93) CLC. I, 5, 302-3.

(94) CLC. I, 5, p. 303 "... e alos del rregno de Toledo que ayan alcaldes del rregno de Toledo queles libren sus pleitos et sus cartas ssigunt sus ffueros e vssos assy commo lo ouyeron en tiempo delos otros rreys; ". Esta última frase es verdaderamente desconcertante ya que hasta este momento no hemos encontrado referencias de alcaldes privativos del Reino de Toledo en la Cortes, salvo la regulación que se hiciera en Zamora en 1274 respecto a los "tres omes buenos entendidos e sabidores delos fueros" que oían las "alzadas de toda la tierra" (CLC. I, 19, p. 90). Posiblemente se trató de algún

incluidos dentro de los alcaldes de Extremaduras.<sup>(96)</sup>

En 1322, como acabamos de ver, se produce una remodelación de las alcaldías de la Corte. La novedad más importante es la elevación del número de alcaldías a veinticuatro distribuidas en seis para Castilla, seis para León, seis para Extremadura y seis para Andalucía que aparece ahora como región independiente con alcaldes propios<sup>(97)</sup>. Esta nueva división tal vez pueda relacionarse con la situación política del momento. Muerta doña María de Molina tan sólo un año antes, faltos los reinos de un poder aglutinador lo suficientemente fuerte, cada uno de los tutores se han establecido en una región: don Felipe en Andalucía, don Juan en León y don Juan Manuel en Toledo y sus correspondiente Extremadura. Sólo el riguroso control que ejerce la Hermandad sobre los tutores ha evitado que la administración de justicia sea más caótica.

---

(94) /...ardid de tipo político que le presenta a los tutores los toledanos para obtener una alcaldía propia de su reino en la corte.

(95) CLC, I, 21, p. 335.

(96) No podemos precisar si la inclusión se hizo con los alcaldes de Andalucía o los de Estremaduras, pero el hecho de que en Cortes posteriores, Extremaduras y Toledo forman un bloque nos hace suponer que quedaron excluidos en las Extremaduras (Vid. Cortes de Valladolid 1351, CLC. II, 58 p, 34 y Cortes de Toro 1369, CLC. II, 6, p. 166).

(97) CLC. I, 4, p. 338.

En esta nueva reorganización se reducirá el turno de seis a cuatro meses<sup>(98)</sup> y los alcaldes acompañaran al Rey, no a los tutores<sup>(99)</sup>, de forma que siempre estén continuamente dos alcaldes de cada región con el Rey, quienes cobrarán sus "soldadas" de la Chancillería.<sup>(100)</sup>

Con la mayoría de edad, en 1325, Alfonso XI no parece alterar el esquema judicial hasta ahora visto. Se repiten en esta Cortes de Valladolid las peticiones que ya se hicieran en las Cortes de 1313<sup>(101)</sup> y de 1322<sup>(102)</sup> versadas sobre las condiciones personales que han de reunir los alcaldes de la corte<sup>(103)</sup>. Muy pronto Alfonso XI muestra síntomas de gran energía y encamina sus esfuerzos al robustecimiento del poder real. Ese mismo año suprime las Hermandades, instrumento de rebeldía municipal, si bien tendrá que acceder cuatro años más tarde a ordenar "la justicia en la mi casa e en todas partes de mi sennorio"<sup>(104)</sup>. Se le solicita, como ya se le hiciera a su padre que se siente dos días a la semana en lugar público donde puedan ver y llegar hasta él los querellosos, pero tomando con él los "alcalles e omes buenos de mio conseio e dela corte para oyr el lunes las petiçiones e las querellas" que le presentaran de los oficiales de su casa como de los otros, y el viernes que oiga -

(98) "Et destos caualleros e ommes bonos, que anden conel Rey, los ochos quatro meses, e los otros ocho quatro meses, e los otro ocho otros quatro meses" (CLC.I, 4, p. 338)

(99) "Et estos caualleros e ommes bonos que ssean en guarda de nuestro ssennor el Rey" (CLC.I, 4, p. 338).

(100) CLC.I, 9, p. 339.

(101) CLC. I., 19, p. 226.

(102) CLC. I, 48, p. 350.

(103) CLC. I., 2, p. 373.

(104) CLC. I, 1, p. 402.

los presos y los rieptos.<sup>(105)</sup> Parece, efectivamente, que al menos durante algún tiempo esto se llevó a cabo<sup>(106)</sup> aunque esta actuación personal del rey debió relajarse con los años a tenor de la petición de los procuradores en las Cortes de 1339 en donde se reitera la solicitud de que se sienta uno o dos días a la semana para librar los pleitos.<sup>(107)</sup>

Vemos, pues, que existe una preocupación constante - durante estos reinados para que el rey imparta justicia -siempre acompañado de sus alcaldes- aunque la realidad es que la desvinculación del Rey con su Chancillería impidió la participación efectiva del rey en las tareas de justicia. Como veremos más adelante, en los últimos años del reinado de Alfonso XI, precisamente cuando se va a producir in verdadero auge de burócratas y juristas<sup>(108)</sup>, las delegaciones de esta función jurisdiccional del Rey darán lugar a la creación de un nuevo órgano judicial que con el tiempo se llegará a convertir en el más alto tribunal del Reino, nos referimos, naturalmente a la Audiencia.

---

(105) CLC. I.L. p. 402.

(106) Véase la ~~sentencia~~ de 1331, enero 6: "...Et visto en como sobre esto parecieron ante mí los procuradores de amas estas partes e fue leida y publicada ante ellos las dicha pesquisa e los privilegios et cartas que sobre esta razon fueron presentados. Et visto todas las otras razones que amas estos partes dixieron et razonaron fasta que en-- cerraron razones et pidieron sentencia. Et avido mi - acuerdo... Fallo... (MINGUELLA: Historia de la Diócesis de Sigüenza, t. II, doc. 69, pgs. 487-8.

(107) Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 22, p. 469.

En las Cortes de Valladolid de 1351, únicas del reinado de Pedro I, se denuncia por los procuradores las continuas - intromisiones en el libramiento de los pleitos que los alcaldes de un reino hacen y por ello "viene desto ala tierra dapno por quanto los alcalles de cada vnna de sus villa an"<sup>(109)</sup>. Posiblemente estas intromisiones eran, en muchos casos, totalmente necesarias ante la ausencia de las cortes de los alcaldes de alguno de los reinos, por ello se establece un sistema de sustituciones para suplir a aquellos alcaldes que por un motivo u otro se hallen fuera de la corte.<sup>(110)</sup>

Como novedad de este reinado debemos hacer aquí referencia a un "alcalde del rastro"<sup>(111)</sup> pero que por el contexto parece deducirse que se trata de un alcalde de corte, no sabemos de qué región, al que se le ha designado competencia exclusiva de los casos que se producen en el rastro del Rey. Hasta ahora estos pleitos, sin duda, venían siendo librados por los alcaldes de corte, pero posiblemente el aumento de estos pleitos del rastro hizo necesario la designación de uno de los alcaldes para estas tareas. Por otra parte, este alcalde del rastro retiene su atribución de seguir librando las alzadas de la comarca de donde es alcalde.<sup>(112)</sup>

---

(109) CLC. II, 58, p. 34.

(110) CLC. II, 58, p. 34.

(111) CLC. II, 58, p. 34 "...Et el alcalle del rrastro que libre los pleytos que acaesçieren en la mi corte e otrossy que pueda oyr e librar los pleytos delas alçadas e delas cartas dela comarca onde fuere alcalle".

(112) Ver nota anterior.

Lo que resulta más difícil precisar es de qué rastro se trata. El rastro del Rey? El rastro de la Corte y Chancillería?. Desde luego al tratarse de un alcalde de Corte es lógico pensar que se trata del rastro de la Chancillería donde, como ya hemos visto, residen los alcaldes de la Corte. Pero también cabe la posibilidad que, en sus desplazamientos, el Rey, cuando se ausenta de la Corte, lleve consigo a este alcalde para librar los pleitos que se producen en el rastro del Rey, siendo, posiblemente, ésta una de las causas por las que se establece el sistema de sustituciones al que antes hemos hecho referencia. No obstante lo que interesa señalar aquí es cómo se ha producido una separación de las atribuciones originarias de los alcaldes de Corte que, como veremos más adelante, dará lugar a otro tipo de alcalde que, al igual que los de la Corte, desarrollará sus funciones dentro del ámbito de la misma pero ya con total independencia con respecto a los primeros.

Sin duda los efectos de la guerra civil debieron repercutir extraordinariamente en la administración de justicia si atendemos a las críticas y quejas que presentan al primer Trastámara los procuradores de las Cortes de Toro de 1369.<sup>(113)</sup>

Se insiste, como ya se hiciera en Valladolid en 1351, en la competencia por regiones o reinos y se repite, casi al

---

(113) CLC. II, 4, y 5, p. 166.



al pie de la letra, el sistema de sustituciones que dieciocho años antes estableciera Pedro I.<sup>(114)</sup> Lo que resulta novedoso en el Ordenamiento de Toro es la reaparición de los alcaldes de Andalucía. Realmente no podemos precisar exactamente qué es lo que ha ocurrido con estos alcaldes. Sabemos que aparecieron en las Cortes de Valladolid de 1322; aparentemente debían seguir durante todo el reinado de Alfonso XI, pero nos sorprende que en las Cortes de Valladolid de 1351 no se haga ninguna referencia a ellos a la hora de establecerse el sistema de sustituciones, en cambio en Toro, que parece copiar el texto de 1351, sí vemos que aparecen las alcaldías de Andalucía y se limita a decir, sin especificar, que cuando los alcaldes de Andalucía no estuvieran en la Corte "que libren los otros alcalles como solien"<sup>(115)</sup> Qué alcaldes eran éstos?. No lo sabemos. Tampoco sabemos si la copia del cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1351 que han llegado a nosotros es exacta o si el copista omitió la referencia a los alcaldes de Andalucía en un descuido. Posiblemente estas alcaldías de Andalucía siguieron existiendo y su no alusión en las Cortes de 1351 se trata de un error del copista que con posterioridad copiara el Ordenamiento. Nos queda también la incógnita de cuáles era los alcaldes que sustituía a los de Andalucía en ausencia de éstos. Ante la ambigüedad del texto,<sup>(116)</sup> no podemos inclinarnos por uno u otro

---

(115) "Et los alcalles del Andaluzia que libren enel Andaluzia e non otros ningunos. Et quando los alcalles de Andaluzia non fueren enla nuestra corte, que libren los otros alcalles commo solian". (CLC. II, 6, p. 167).

(116) Ver nota anterior.

otro sentido, solamente señalar que también estaba prevista la sustitución en caso de ausencia de los alcaldes de Andalucía.

Donde va a comenzar a ser patente la tarea reformadora de Enrique II, es dos años más tardes, en las Cortes de Toro de 1371. Allí el Trastámara remodela la estructura de la administración de justicia de su Corte reduciendo, en primer lugar, el número de alcaldes de Corte a ocho<sup>(117)</sup>, e igualmente se han suprimido los turnos cuatrimestrales<sup>(118)</sup> pues seguramente estos no se vendrían cumpliendo.

Los ocho alcaldes quedan distribuidos en dos para Castilla, dos para León, dos para Extremaduras y uno para Andalucía y otro para el Reino de Toledo. La reducción de estas alcaldías se debe, sin duda, a que a partir de ahora con la reorganización de la Audiencia<sup>(119)</sup> la Corte se ve dotada de todo un complejo sistema judicial en el que ya se van vislumbrando poco a poco unas competencias especiales para cada uno de ellos. Esta multiplicidad de órganos supone un aumento de jueces en la Corte y por consiguiente un aumento en las quitaciones que debían solventar la Chancillería Real. Esta y la situación precaria de la Hacienda Real, no repuesta del todo a raíz de la guerra civil, fueron, quizás, las causas de esta reducción de alcaldes de Corte.

---

(117) "Otro si ordenamos et tenemos por bien que aya en la nuestra cortes ocho alcalles ordenarios: dos de Castiella, et dos de Leon, et vno del rregno de Toledo, et dos delas Extremaduras, et vno dela Andaluzia..." (CLC. II, 2, p. 190).

(118) Es significativo que cobren su quitación anualmente: "Et que estos dichos alcalles dela nuestra corte, por quelo pasen bien et vsen delos dichos ofiçios syn cobdiçia mala alguna, que aya cada vno dellos de quitacion en cada anno quinze mill mr..." (CLC. II, 2, p. 192).

(119) Véase más adelante páginas

Por otra parte, es novedad también que el Reino de Toledo tenga su alcalde independiente de los de las Extremaduras<sup>(120)</sup>; se reitera el sistema de sustituciones de dos años antes<sup>(121)</sup> y sobre todo se especifica la competencia en materia criminal compartida con los alcaldes del rastro<sup>(122)</sup>. También se establece la distinción e incompatibilidad entre oidores y alcaldes de corte para que "mas desenbargada miente puedan vsar delos dichos ofiçios"<sup>(123)</sup>.

Juan I dirigió todos sus esfuerzos a la reafirmación de la dinastía, instaurada apenas hacía diez años, y alentó formidablemente la centralización política.<sup>(124)</sup> Fue un reinado breve pero en el que las Cortes tuvieron una asiduidad e importancia excepcional para la estructura institucional del Reino.

(120) CLC. II, 2, p. 190.

(121) CLC. II, 6, pgs. 166-7 y CLC. II, 2, p. 190.

(122) "Et quelos dichos alcalles dela nuestra corte delas dichas prouinçias que libren los pleitos criminales con los dichos alcalles del rastro et vayan dos dias cada ssemana, martes et viernes, alas carçeles a librar los dichos pleitos; et si la nuestra chançelleria non estodiere a do nos fueremos, quelos dichos alcalles ordinarios delas dichas prouinçias dela nuestra corte que libren los dichos pleitos criminales et los dichos presos, en las dichas carçeles ssegunt dicho es de ssuso; et quelos dichos alcalles, non estando y la nuestra nchançelleria, que libren los pleitos criminales con los dichos nuestros alcalles dela nuestra corte o con algunos delos que sse y acaesçieren, et si non, quelos libren ellos solos". (CLC. II, 2, pgs. 190-1).

(123) "et que estos que fueren alcalles en la nuestra corte, que non ssean oydores..." (CLC. II, 2, p. 190).

(124) Sobre la política de Juan I de SUAREZ FERNANDEZ los capítulos correspondientes a la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XIV, pgs. 203-346 y más recientemente, también del mismo autor Historia del Reinado de Juan I de Castilla, Madrid 1977.

En lo que respecta al tema que ahora nos ocupa vemos como en las primeras Cortes de reinado los procuradores piden al Rey que sea aumentado el número de los alcaldes de las Extremaduras "comme syenpre ouo"<sup>(125)</sup> Posiblemente, por razones que desconocemos, solamente se encontraría en la Corte uno, o tal vez ninguno, de los alcaldes de las Extremaduras y, como acabamos de ver, en Toro Enrique II había designado dos alcaldes para esta provincia.<sup>(126)</sup>

En las citadas Cortes se solicita al Rey que lleve consigo la Chancillería o que al menos esté en tal lugar que al menos "sea comunal a los delos nuestros rregnos"<sup>(127)</sup> para que puedan ser mejor librados los pleitos "ante los nuestros alcalles que andan en ella et por la nuestra abdiencia". El Rey se limita a dar el beneplácito pero no sabemos nada al respecto sobre la decisión que tomó: si llevar la Chancillería consigo o la de designarle un lugar "comunal" a todos los reinos. Hay que señalar que a partir de este momento la Audiencia y los alcaldes de la Corte van a quedar definitivamente unidos llegando a formar éstos una sala aparte dentro de la Chancillería con exclusivas competencias criminales. Este proceso de asimilación había comenzado en el reinado de Enrique II al reorganizar

---

(125) Cortes de Burgos 1379: "Otrosy nos pedieron merçed que mandasemos que delas Estremaduras ouiese enla nuestra corte dos alcalles como syenpre ouo" (CLC. II, 35, p.299)

(126) CLC. II, 2, p. 190; ver nota 115.

(127) "Otrosy nos pedieron por merçed que mandasemos quela nuestra chançelleria ande connusco o que esté en tal lugar que sea comunal a los delos nuestros rregnos, por que puedan auer delas las cosas queles cumplieren mas syn costa e por que se libren los pleitos ante los nuestros alcalles que andan enella et por la nuestra abdiencia. Et quelos non encomendamos a otras - personas algunas". (CLC. II, 27, p. 296).

la Audiencia con unas competencias específicas y su correspondiente aparato burocrático. A partir de Enrique II se empieza a ver un tratamiento conjunto de alcaldes y oidores<sup>(128)</sup> unas veces y otras de forma global se hace referencia a todo el personal de la Chancillería.<sup>(129)</sup>

Las Cortes de Briviesca de 1387 suponen la vuelta al sistema de turnos semestrales que Enrique II había abandonado en Toro<sup>(130)</sup>. La razón de la vuelta a este sistema hay que buscarla una vez más en razones de tipo económico. El desastre de Aljubarrota se va a notar considerablemente en los postreros años del reinado de Juan I.<sup>(131)</sup> Ocupando los ingleses parte de los reinos y en una situación política muy delicada, al Rey sólo le preocupa mejorar su situación económica por lo que es totalmente comprensible la reducción del presupuesto de los oficiales de la Corte. Esto lo consigue estableciendo de nuevo el sistema de turnos. Aparentemente el número de alcaldes sigue siendo el mismo para cada tierra (dos de Castilla, dos de León, dos de Extremaduras, uno de Toledo y otro de Andalucía), pero

---

(128) Véase, por ejemplo, el texto de la nota anterior en la que dentro de la Chancillería se incluyen los "alcaldes que andan en ella" y la "nuestra abdiencia". "Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno delos nuestros oydores nin delos nuestros alcalles..." (CLC. II, 2o, p. 386); "Otrosy alo que nos pidistes por merçet en fecho delos oydores e alcalles que vacaren o renunciaren..." (CLC. II, 34, p. 390).

(129) "Otrosy alo que nos dicieron quelos nuestros oydores e alcalles e escriuanos e otros ofiçiales dela nuestra casa e dela nuestra chançellería..." (CLC. II, 13, p. 418) Interesa destacar cómo cada vez se más clara la diferencia entre los oficiales de la Casa del Rey (casa y corte) y los oficiales de la Chancillería (corte y chancillería).

al reducir a la mitad el tiempo quedan, de hecho, reducidas a la mitad las quitaciones, ya que ahora en vez de estar dos alcaldes de cada tierra -o uno en el caso de Toledo y Andalucía- continuamente en la Chancillería, con esta nueva restructuración sólo estarán cuatro alcaldes durante seis meses y otros cuatro los restantes, por lo que sólo cobrarán por el tiempo de seis meses y no por un año completo.<sup>(132)</sup>

La aplicación de este sistema supone que al tener que estar durante los primeros seis meses el alcalde del Reino de Toledo y en los restantes el alcalde de Andalucía, tanto en uno como en otro período los de Toledo y, en su caso, los de Andalucía, están durante seis meses sin alcalde en la Corte, con lo que suponemos que habría que acudir de nuevo al sistema de sustituciones que se estableciera en Toro en 1371.<sup>(133)</sup>

(130) Véase CLC. II, 2, p. 190.

(131) Sobre las consecuencias de Aljubarrota y la situación política y económica a raíz del desastre vid. L. SUAREZ FERNANDEZ: Juan I, pgs. 205. y ss.

(132) "Otrosy alo que nos pedistes por merçet que por quanto los alcales dela nuestra corte son ocho, que mandasemos quelos quatro syruan los (seys) meses del anno, e los otros quatro otros seys mesés. Aesto rrespondemos que nos plaze, e mandamos e ordenamos quelo fagan e cunplan asy enesta manera: vno de tierra de Castilla, e otro de tierra de Leon, e otro de Estremadura, e otro de tBledo, e que siruan los seys meses del anno; e los otros seys meses quelos siruan el otro alcale de Castilla, e el de Leon, e el otro de Estremadura, e el otro de Andaluzia; e qual quier dellos que non seruieren e non continuaren sus seys meses, que aya la pena delos sobredichos oydores" (CLC. II, 28, p. 388-9).

(133) CLC. II, 2, p. 191.

A partir de ahora y concorde con la política de potenciación que de la Audiencia y el Consejo Real está llevando a cabo Juan I, el nombramiento de alcaldes y oidores se hará a través de una terna que le presentarán al Rey los restantes - oidores de la Audiencia y otra que le presentan los del Consejo Real para que de entre ellos el Rey escoja la persona adecuada para ocupar la alcaldía. Este sistema, en último término, supone una limitación a la libre designación por parte del Rey de sus jueces. <sup>(134)</sup>

Este proceso culminará en las Cortes de Segovia en - donde el Rey acabará por desentenderse definitivamente de las funciones judiciales "ordinarias". <sup>(135)</sup>

A partir de este ordenamiento hemos de puntualizar, para evitar equívocos, que los alcaldes del rastro, de los que nos ocuparemos más adelante, empiezan a denominarse "alcaldes de corte" <sup>(136)</sup> en contraposición a los alcaldes de cada una

(134) "Otrosy alo que nos pidiste por merçet en fecho delos oydores e alcalles que vacaren o rrenunciaren los ofiçios o los perdieren. Aesto vos rrespondemos que nos plaze quela dicha abdiencia nombre tres omnes, e los del nuestro consejo otros tres por que nos delos vnos e delos otros escojamos aquel que fallaremos que fuere mas sufiçiente para ellos (CLC. II, 34, p. 390).

(135) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 473).

(136) "... ordenamos e mandamos que vno delos alcalles dela nuestra corte quando nos aqui fueremos, e quanto nos aqui non fueremos vn alcale delos dela çançelleria..." (CLC. II, 5, p. 481); "...o en absencia destos, que tome vno delos alcalles dela nuestra corte o de la nuestra çançelleria o de aqui dela dicha çibdat..." (CLC. II, 5, p. 482). En el Ordenamiento de Segovia el Rey está reorganizando la Chancillería, por ello aparecen con su nombre los alcalles de cada una de las provincias, en cambio no parece ningún alcalde "de corte" (rastro) porque, sin duda éstos están en la Casa del Rey no en la Chancillería.

de las tierras que son denominados "alcaldes de las provincias"<sup>(137)</sup> o "alcaldes de Corte e Chancilleria"<sup>(138)</sup> nombre que se generaliza en el siglo XV. La distinción, ya señalada por PEREZ DE LA CANAL<sup>(139)</sup>, que recoge el Ordenamiento segoviano<sup>(140)</sup> puede explicarse en base a que se le dota ahora a la Chancilleria de un rastro propio<sup>(141)</sup>. El cambio terminológico se debe también sin duda a que a partir de ahora, como acertadamente ha señalado el prof. GARCIA-GALLO<sup>(142)</sup>, se ha producido una escisión de la Corte del Rey y, por un lado, nos encontramos con la "casa y corte", es decir, allí donde el Rey reside habitualmente, y por otro, la "corte y chancillería", como conjunto de órganos auxiliares del Rey en donde residen sus órganos de administración de justicia.

---

(137) El mismo ordenamiento de Segovia utiliza indistintamente ambos nombre, o "alcaldes de las provincias" (CLC. II, 2, p. 473) o "alcaldes de la nuestra chancilleria" (CLC. II, 4, p. 476) e incluso les denomina también "alcaldes ordinarios" (CLC. II, 4, 478).

(138) Si bien coexiste con el de "alcalde de las provincias"; así por ejemplo, véase Cortes de Toledo de 1436 (CLC. III, 32, p. 300). La denominación de "alcalde de Corte e Chancillería" la empezamos a encontrar a mediados del siglo XV (CLC. III, 53, p. 449); CLC. III, 20, 9 523; entre otros).

(139) La justicia en la Corte... p. 419.

(140) Véase la nota 136.

(141) "Otrosi por quela tierra e termino dela çibdat de Segouia s3a mejor guardada de danno que podr3a rresçibir, defendemos que ninguno non sea osado de posar enlas aldeas nin enlas comarcas de ennderredor de Segouia fasta allende de çinco leguas, sin nuestro mandado espeçial... (CLC. II, 5, p. 481).

(142) Las Audiencias en Indias... p. 367.



El cambio se ha producido en estas Cortes de 1390 ya que tres años antes, en las Cortes de Briviesca, todavía no se ha producido esta diferenciación<sup>(143)</sup>. Cabe entonces preguntarnos si esta generalización que se ha producido en su denominación -"alcaldes de las provincias" o sencillamente "alcaldes de corte y chancillería"- afectó sustancialmente a la distribución de competencias por territorios como hasta ahora han venido actuando estas alcaldías. Lo cierto es que a partir de este momento ya no se vuelve a hablar de "alcaldes de León" o "alcaldes de Castilla". Cuando las fuentes utilizan el término "alcaldes de las provincias" no especifican ni cuantas son ni cuáles son estas provincias. No podemos precisar si realmente subsistió la competencia territorial o si el nombramiento se haría con independencia de la carta de naturaleza de cada alcalde. Posiblemente estos alcaldes han ido perdiendo su competencia estrictamente territorial referida a cada una de las regiones para ganar una competencia general para todo el Reino como la que disfrutaban los oidores de la Audiencia.

Poca alteración sufrió la organización de la justicia en los primeros años del reinado de Enrique III caracterizado por las luchas nobiliarias en las que las distintas facciones

---

(143) Cuando en la petición 28 se habla de los "alcaldes de la nuestra Corte" se está haciendo una clara referencia a los alcaldes de las provincias o "tierras", ya que a continuación las enumera (CLC. II, 28, p. 388-9).

pugnan por hacerse con el poder, pero que repercutieron a la larga en las distintas instituciones del Reino<sup>(144)</sup> que, a la llegada al trono de Juan II, se encuentra inmerso en una profunda crisis. La inesperada muerte de Enrique III abrirá un nuevo período de regencia en manos de la reina madre doña Catalina y de Fernando de Antequera. En el reinado de Juan II se librará la última fase de la pugna entre la monarquía y la nobleza".<sup>(145)</sup>

Alcanzada la mayoría, Juan II, pronto empieza a dar muestras de gran energía, pero la situación es difícil. En 1419 las Cortes muestran al Rey la desoladora situación en que se encuentra la administración de justicia, en especial la Audiencia<sup>(146)</sup>. Pero iguales defectos son predicados de los alcaldes de las provincias<sup>(147)</sup>, al parecer sin cubrir. El rey nombra ocho alcaldes que se distribuirán en dos turnos de seis meses y estarán bajo el control del Chanciller mayor<sup>(148)</sup>. Las alcaldías -

---

(144) Fundamentalmente en el Consejo Real y en la Audiencia como ya tendremos ocasión de ver.

(145) Esta situación la ha dejado perfectamente reflejada L. SUAREZ FERNANDEZ en su Nobleza y Monarquía, 2a. ed. Valladolid 1975.

(146) CLC. III, 1, p. 11.

(147) "... que por quanto en el oficial de los mis alcalles de las prouinçias ay esos mesmos defectos que los sobre dichos de la dicha audiencia..." (CLC. III, 2, p. 13). Los defectos de que adolecía la Audiencia eran en primer lugar, que se hallaban sin cubrir los oficios de oidores por lo que se había solo dos, uno e incluso ningún oidor; en segundo lugar que aun en el poco tiempo que estaban libraban muy pocos pleitos dejando muchos pendientes.

(148) CLC. III, 2, p. 13.

quedan con competencia exclusiva para los criminales<sup>(149)</sup> y por primera vez se hace referencia a que la actuación de estos alcaldes se desarrolla en la "carcel"<sup>(150)</sup>. No podemos precisar - hasta qué punto se llevó a cabo lo ordenado por el Rey, dado que seis años más tarde, en las Cortes de Palenzuela<sup>(151)</sup>, los procuradores se quejan de que lo establecido por el Rey en las Cortes de Madrid respecto a la Audiencia y a las alcaldías no ha sido cumplido en su relevo semestral, pero al menos sabemos que en 1423 éstos alcaldes estaban desarrollando su actuación como nos muestra el escrito de recusación que se presenta - contra ellos en un pleito en el que se demanda al Condestable Ruiz de Dávalos.<sup>(152)</sup>

Una vez más las Cortes muestran su descontento ante la situación en que se encuentra la justicia de la Corte reiterando en 1433 las peticiones que hicieran en Madrid y en Palenzuela años antes<sup>(153)</sup>, pero el dato más destacable en lo que respecta a las alcaldías que ahora nos ocupan es que por primera

---

(149) CLC. III, 2, p. 13.

(150) "...es mi merçed e ordeno e mando que se guarde en la dicha mi carçel, segund e por la forma e manera que de suso se contiene que se guarde en la mi audiençia... para lo qual ordeno e mando que luego de presente -- siruan e continuen oyendo e librando los pleitos dela dicha carçel el doctor...; e conplidos los dichos doze meses, yo entiendo deputar dende en adelante quales delos dichos alcalles siruiran e continuaran en la dicha carçel otro tanto tienpo por esta mesma rregla..." (CLC. III, 2, p. 13).

(151) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, p. 51-2).

(152) El pleito puede verse en el Ms. 13-236 de la B.N., fol. 76 y ss.

(153) CLC. III, 1, pgs. 161-3.

vez en un Ordenamiento de Cortes se utiliza para designar el lugar de actuación de estos alcaldes el término "Audiencia de la cárcel", si bien, como veremos a continuación, hay claros indicios para pensar que esta situación no es una novedad introducida por este Ordenamiento.

Qué significa realmente esta "Audiencia de la Cárcel?". Ya hicimos referencia a la actuación colegiada prevista en el Ordenamiento de Toro de 1371 entre los "alcaldes de las provincias" y los "alcaldes del rastro", quienes irían dos días a la semana, martes y viernes, a las "carceles" a librar los pleitos criminales<sup>(154)</sup>. Por tanto, esta actuación colegiada está referida exclusivamente a las causas criminales sin hacer ninguna alusión a las causas civiles. Cabe pensar, pues, que estos alcaldes de las provincias o "alcaldes ordinarios" siguen actuando como tribunales unipersonales a la hora de librar las alzas de las distintas tierras o provincias que llegan a ellos en segunda instancia. Desde luego el texto no es muy expresivo y apenas nos revela algún dato más, salvo la posibilidad de seguir actuando ante la ausencia de los alcaldes del rastro. Por otra parte, esta costumbre de reunirse en la cárcel para librar los pleitos parece que tampoco es novedad de este Ordenamiento, ya que al menos desde dos años antes, existe una escribanía de la cárcel con independencia total de las restantes escribanías judiciales<sup>(155)</sup>. No obstante, el texto de Toro nos deja abiertos y sin contestar varias interrogantes. Cuántos alcaldes se reunían en la cárcel?. Se reunían sólo aquellos alcaldes de la provincia

(154) Véase el texto en la nota 122.

(155) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 12, p. 168).

a la que correspondía aplicar el derecho del reo?. Pero lo que nos interesa aquí resaltar es que los alcaldes de las provincias han dejado su carácter de jueces unipersonales en los asuntos criminales.

Por qué se ha producido esta transformación?. Desde luego no deja de ser expresivo que este cambio se haya producido precisamente en las Cortes de Toro de 1371, en las que Enrique II dispuso "reordenar la justicia de su Corte; pero es que, además, es precisamente en éste Ordenamiento cuando se reorganiza la Audiencia real como un órgano colegiado. La Audiencia, como veremos en su momento, se constituye en 1371, como tribunal que conoce exclusivamente de causas civiles en primera y única instancia y con la característica fundamental señalada ya por el prof. GARCIA-GALLO<sup>(156)</sup>, de actuar colegiadamente<sup>(157)</sup>. Cabe entonces la explicación que para aquellos pleitos de tipo criminal que correspondían privativamente a la jurisdicción real -casos de corte-, Enrique II constituyera un órgano paralelo a la Audiencia con los alcaldes que tradicionalmente venían conociendo los pleitos criminales.

A la luz de estos datos es comprensible, desde el momento que se ha impuesto una actuación colegiada, que poco a poco estas alcaldías hayan ido perdiendo su denominación por su tierra de origen -Castilla, León, etc.- para quedar simplemente como alcaldes de las "provincias".

(156) Las Audiencias en Indias... p. 365.

(157) "...et quelos juyzios et las cartas que dieren et libraren, quelos judguen et los den todos en vno o la mayor parte dellos, o alo menos los dos dellos" (CLC. II, 1, p. 189).

Esta actuación colegiada la tenemos más documentada en el siglo XV. En este sentido la ya citada petición de las Cortes de Madrid de 1419 a la que el rey contestará nombrando ocho alcaldes para que "continuen oyendo e librando los pleitos dela dicha cárcel".<sup>(158)</sup> Las referencias que nos hacen las Ordenanzas de Illescas de 1429<sup>(159)</sup>, las Ordenanzas de Segovia de 1433<sup>(160)</sup> y otros textos posteriores<sup>(161)</sup>. No ha de extrañarnos

---

(158) Ver nota 150.

(159) Insertadas en las Ordenanzas de Medina del Campo de 1433, véanse en T. DOMINGO PALACIOS: Documentos Villa de Madrid, t. II, p. 64.

(160) En las Ordenanzas Reales de Castilla, 2, 6, 5 y 7 se recoge un Ordenamiento de Juan II, dado en Segovia en 1433, en el que se hace referencia a la "audiencia de la cárcel".

(161) Así, por ejemplo, en la sentencia compromisaria de 1465 se ve claramente esta colegialidad: "que los alcaldes del dicho señor Rey e de la su corte e chancilleria algunas veces no son concordes en las sentencias que han de dar o en otros juicios que han de facer..."; cuando esto ocurra se ha de diputar un oidor lego para que vaya a la "dicha carcel del dicho señor Rey e de la de su corte e chancilleria" (Col. Dipl. Enrique IV, doc. 109, cap. XCII, pgs. 429-30). En el R.G.S. se recoge una carta a los alcaldes de la cárcel de la Corte, a petición de los hijosdalgos de las villas y lugares de la provincia de Guipúzcoa, para que admitan al procurador de Lope de Bedaynza y de Martín, su hermano y ante el los parezcan para declarar en la causa que se sigue sobre robo y malos tratos (R.G.S. llo5, fol. 274; año 1476). Igualmente en las Cortes de Toledo de 1480 se hace referencia a "los alcaldes de nuestra cárcel en la nuestra corte e chancillería..." (CLC. IV. 42, p. 126). Finalmente hacen también alusión las Ordenanzas de la Audiencia de Córdoba 1485: "Otrosí ordenamos e mandamos que la nuestra casa de audiencia... e junto con la dicha carcel se depute en la dicha casa una sala en que fagan audiencia del crimen los dichos nuestros alcaldes e que vengán cada día e fagan audiencia de -

pues, que en base a esta actuación colegiada a modo de la Audiencia propiamente dicha, encontremos en los textos el término "Audiencia de la cárcel" para denominar al lugar donde vienen realizando su actuación los alcaldes de las provincias, a quienes -como ya dijimos- desde mediados del siglo XV, se les comienza a llamar también "alcaldes de Corte e Chancillería". (162)

En 1438 Juan II hace una nueva reducción de alcaldías. Ahora serán solamente seis alcaldes los que permanecerán en la Audiencia de la cárcel quienes se dividirán en turnos cuatrimestres a lo largo del año, es decir, tendrán que estar siempre presentes dos alcaldes, y ante la posibilidad de enfermedad o ausencia de alguno de ellos, el mismo Rey en su Cédula nombra un alcalde suplente que cubrirá la baja del otro alcalde. (163)

---

(162) /... cárcel de lo que tovieren que fazer, y la fagan, en la dicha sala e non en otra parte" (ed. Perez de la Canal, p. Las Ordenanzas de Piedrahita de 1486 lo recogen al pié de la letra (vid. Perez de la Canal, p ) al igual que las Ordenanzas de 1489 (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. LIII r). En la Audiencia de Ciudad Real también actuarán colegiadamente los alcaldes (Ordenanzas de la Audiencia de Ciudad Real, 1494, en - Bulas y Pragmáticas, fol LXI, r).

(162) Vod. textos de la nota anterior.

(163) B.N. Col. Burriel, Privilegios Reales... 1435-1438, fol 19o y ss: "Yo el Rey fago saber a vos el mi Chanceller mayor, é oidores de la mi Audiencia, é Alcaldes de la mi Corte é Chancillería que yo queriendo, que la mi Audiencia de la carcel sea bien, é continuamente servida segund cumple a servicio de Dios, é mio a execucion de la mi justicia es mi mfo de mandar e mando, é ordeno por la presente que vos los dhos mos Alcaldes de la dha mi Corte e Chancelleria sirvades los dhos

En el reinado de Enrique IV pueden distinguirse dos etapas claramente diferenciadas. En la primera de ellas, que llega hasta 1463, el Rey comienza con muy buenos auspicios y se mantiene el orden general del Reino con una política hábil de la que son firmes pilares el Marqués de Villane, el Condestable Lucas de Iranzo, Beltrán de la Cueva. Pero pronto la nobleza manifestará su descontento y a partir de 1463 se abre un gran período de crisis del que sólo se saldrá en el reinado de los Reyes Católicos.

La estable situación de los primeros años del reinado<sup>(164)</sup> no debió de alterar el esquema judicial que Juan II organizara, aunque al comienzo de los años sesenta se presentan las primeras quejas en las Cortes de Toledo. Allí se pide al Rey que consejeros, oidores y alcaldes sean bien pagados "pues en procurar sacar todos los libramientos pierden todo el tiempo o la mayor parte, y pues tienen cargo de vuestra justicia no es razón que se ocupen de otra cosa"<sup>(165)</sup>. El Rey reorganiza la -

---

(163) /...vios oficios, é continuedes en ellos por vias personas en cada un año de aquí adelante dos Alcaldes cada quatro meses en esta guisa: los primeros quatro meses los mis Alcaldes Gonzalo Pantoja e Jan Sanchez de Velasco Gomez e el Bächiller Alphonso Fernandez de León, e los terceros quatro meses los Bachilleres mis Alcaldes Johan Sant Pedro, é Ruy Fernandez de Salamanca, é el Bächiller Diego Díaz mi Alcalde que quede para suplir e servir en lugar de qualquier de los sobre dhos mis Alcaldes que fuese ocupado de impedimento de dolencia, o embiandole Yo a algunas partes complierades a mi servicio, é por otro legitimo impedimento...".

(164) "Vista la gobernación del Reino e administración de la justicia que andaba en tanta orden, como mucho sosiego, -



justicia de la Audiencia y designará tres alcaldes que actuaran anualmente<sup>(166)</sup> con lo que se reducían las alcaldías a la mitad.

La medida no debió ser del todo satisfactoria porque lo cierto es que tan solo tres años más tarde, en la sentencia compromisaria de 1465, ante las continuas quejas que suscitaban las sentencias de los alcaldes, se ordena que uno de los oidores legos de la Audiencia vaya a la cárcel a librar con ellos los pleitos criminales y sin la presencia del oidor los alcaldes quedan incapacitados para librar dichos pleitos.<sup>(167)</sup>

(164) /...sin turbación de cosa alguna, el Rey se hallaba descuidado y contento" (Crónica de Enrique IV, cap. XXXVI, p. 119) Esta situación la refleja también el título preliminar de la Crónica Incompleta de los Reyes Católicos (pgs. 47-53).

(165) Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, 1, 702-3).

(166) "A vos rresponde que mi intençon e voluntad syenpre fue e es: quela mi chançelleria e asy mismo la justicia de mi casa e corte e de todos los mis rregnos sea bien administrada e essecutada, e ami me plaze por que mejor de aqui adelante se faga, diputar dos meses ante del fin de cada vn año... e tres alcalles que syruan en ella todo el anno syguiente desde primer día del anno fastael fin del, e por que estos sean bien pagados e por falta de mantenimientos non ayan de dexar de rresydir a seruir continuamente todo el anno enla dicha mi avdiencia e chançelleria ami plaze queles sean pagados los mrs... (CLC. III, 1, p. 703).

(167) "Otrosi: por quanto somos informados que los alcaldes del dicho señor Rey é de la sua corte e chancillería algunas veces no son concordés en las sentencias que han de dar o en otros juicios que han de facer, e algunas veces las partes que ante ellos con tienden ó alguna de ellas rehusa por sospechosos a los dichos alcaldes algunos dellos, en tal manera que las sentencias o provisiones de los dichos alcaldes por las cabsas susodichas no son administradas como deben; por ende proveyendo en ello e porque los fechos creminales en la carcel del dicho señor Rey e de

La sentencia compromisaria regulará también el número de alcaldes y restablece el sistema anterior a las Cortes de Toledo, 3s decir, el que estableciera Juan II en 1438; de nuevo serán seis alcaldes que actuaran en dos turnos semestrales<sup>(168)</sup>.

Todavía serán alteradas más de una vez las alcaldías en este reinado volviendo al sistema de tres alcaldías anuales en 1469<sup>(169)</sup>, y, sin duda al menos, al número de ocho antes de finalizar el reinado en 1474.<sup>(170)</sup>

---

(167) /...la su corte e chancilleria vayan como deben, é los pleiteantes alcancen su justicia, ordenamos e mandamos que cada e quando lo susodicho aconteciere, que el Perlado e oidores que residieren a la sazón en la abdiencia del dicho señor Rey, deputen entre si un oidor lego que vaya a la dicha cárcel a estar con los dichos alcaldes a ver e librar con ellos los pleitos criminales. e que los dichos alcaldes no los puedan librar nin determinar sin el dicho oidor" (Sentencia compromisaria de 1465, Col. Dipl. Enrique IV, doc. 109, cap. 92, pgs. 429

(168) Sentencia compromisaria 1465, Col. Dipl. Enrique IV, doc. 109, cap. 47, pgs. 400-1.

(169) El Rey reconoce la deprorable situación en que se hallaba la Justicia: "...yo tu e la mi corte e chancilleria en los tienpos pasados bien proueyda de perlado e oydores e alcaldes fasta el tienpo quelos escandlos o mouimientos se començaron en estos mir rreynos, e despues aca vos otro: vedes bien que yo no puede mas hazer ni los tienpos me han dado mas lugar, pero agora que confiado en la misericordia de Dios espero que podre dar alguna buena orden e rreoformacion en estos mis rreynos.. e yo he dado cargo alos muy rreuerendos padres don Alonso de Fonseca arçobispo de Seuilla, e don Pedro de Mendoça, obispo de Sigüença, quellos nombre e deputen vn perlado e seys oydores... e que esten tres alcaldes". (CLC. III, 1, p. 70)

(170) De ello tratamos a continuación.

La situación a la llegada de los Reyes Católicos no puede ser más precaria. Enrique IV ha dejado tras sí un reino destrozado y un clima de guerra civil latente, pero la política enérgica y reformadora de Isabel y Fernando no se hará esperar. El primer paso se dará en las Cortes de Madrigal en las que los procuradores, después de quejarse del desorden y abundancia de nombramientos que diera Enrique IV piden que se reduzcan los alcaldes de las provincias a ocho "e rreuocar todas las otras que allende deste número son acresçentadas". La respuesta de los Reyes no puede ser más explícita: "por ende ordenamos que de aquí adelante sean... nueue alcaldes de prouincia para rresidir en la nuestra corte e chançilleria"<sup>(171)</sup>. No sabemos si con anterioridad a 1476 había más de ocho alcaldes. Las fuentes al respecto apenas nos dan noticias, pero a tenor de la petición sobrepasaban el número de ocho. Por qué los Reyes Católicos escogen nueve?. No lo sabemos. Supone esto un nuevo sistema de turnos?. Cómo se articularían estos?. Las fuentes no nos dejan otra opción que movernos en el plano de las hipótesis. Posiblemente la designación de nueve alcaldes de las provincias significaría un sistema de turnos, posiblemente cuatrimestrales, dado que desde 1438 el número de alcaldes de provincias que han de estar en la audiencia de la cárcel ha sido de dos con turno cuatrimestal<sup>(172)</sup> y siempre que se ha producido alguna alteración de este número o bien ha sido para aumentar el número de seis, pero con turnos semestrales<sup>(173)</sup>, o

(171) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV. 14, p. 73).

(172) Véase el texto de la nota 163.

(173) Sentencia compromisaria de 1465, Col. Dipl. Enrique IV, doc. 109, cap. 47, pgs. 400-1.

reducirlos a tres con turnos anuales<sup>(174)</sup>. Cabría entonces cuestionarnos de dónde han sacado los procuradores de las Cortes de Madrigal el número de ocho alcaldes. Sólo caben dos opciones; o bien se han tenido que remontar al Ordenamiento de Madrid de 1419, vigente -según creemos- hasta 1438, en el que como vimos se nombraban ocho alcaldes para librar los pleitos de la dicha "carcel"<sup>(175)</sup> o han tomado este número de alguna reforma de Enrique IV posterior a 1469, que, como sabemos por las protestas de los procuradores de las Cortes de Santa María de Nieva<sup>(176)</sup>, aumentó de forma excesiva los nombramientos judiciales de su corte. Quizás esta última alternativa sea la más factible dado el lapso de tiempo que separa la primera de las Cortes de 1476.

No sabemos tampoco qué motivos llevaron a los Reyes Católicos a reducir, cuatro años más tarde, las alcaldías al número de tres<sup>(177)</sup> y a restablecer la anualidad<sup>(178)</sup>, pero tal vez

(174) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 1, p. 770).

(175) CLC. III, 2, p. 13.

(176) "Otrosy muy poderoso sennor, allende de las otras merçedes que vuestra alteza ha fecho en ynmensas e ynmoderadas contias, ha fecho por vias yndirectas muchos esentos de pedidos e monedas con ofiçios y abdienciãas e de alcaldias e de secretarias e escriuanias de camara, dadas a personas que no siruen estos ofiçios ni tienen abilidad para ello, pero gozan de sus escusados... por ende suplicamos a vuestra alteza que tase vn numero çierto de oydores e alcaldes... (CLC. III, 6, p. 845-6) El Rey contesta que revocará, aparte de otras cosas, los titulos de "abdiencias" y "alcaldias" dados a partir de 15 de septiembre de 1464 hasta el momento, pero las fuentes en ningún momento nos indican qué número de alcaldes había ni cuántos quedaron en su oficio.

(177) "Otrosy, por quanto no quimos mandado e hordenado que enla nuestra corte e chancilleria estouiese un prelado e tres oydores e tres alcaldes... (CLC. IV, 36, p. 121).

(178) CLC. IV, 37, p. 121.

la incomodidad de los turnos cuatrimestrales haya influido en el cambio de parecer de los Reyes. En estas mismas Cortes de Toledo se regula la forma de actuar de los "alcaldes de la carcel", en los que la colegiación sigue como nota característica y se prevé que, en caso de que faltaren uno o dos de ellos, se tomará el número de oidores legos hasta suplir el número de tres. Cabe, igualmente, posibilidad de suplicación de la sentencia que dieran estos alcaldes para ante ellos mismos en los casos en que hubiere lugar.<sup>(179)</sup>

Las primeras Ordenanzas que regulan minuciosamente la actuación de la "Corte y Chancillería de Valladolid" dedican varios apartados a los "alcaldes de la nuestra carcel de la dicha corte e chancillería", como las propias ordenanzas les denominan.<sup>(180)</sup> En ellas, al igual que las dadas un año más tarde en Piedrahita, se hace referencia a la competencia exclusivamente criminal de las citadas alcaldías<sup>(181)</sup> de modo que hay

---

(179) "E esta misma horden e forma de proceder e sentenciar mandamos que la guarden los dichos nuestros alcaldes dela carcel e dela nuestra chancillería, que han de ser tres, tomando delos oydores legos el número que dellos faltare..."

(180) Estas Ordenanzas de 1485, así como las de 1486 han sido publicadas por M. A. PEREZ DE LA CANAL en el trabajo, ya varias veces citado, La justicia de la Corte... pgs. 443-81. Siempre que hagamos referencias a ellas citamos por la edición de este autor y la capitulación que el mismo ha puesto a las referidas Ordenanzas. Ambas Ordenanzas, aunque en muchos capítulos son idénticas, tienen pequeñas variantes. La primera de ellas, dictada en Córdoba en 1485 no indica ni el día ni el mes en que fueron dadas. Las de 1486 -de las que no nos han llegado los primeros capítulos- omite el cap. 37 de las de 1485, añade, en cambio otros - (cps. 11, 13, 14, 36, 57, 65, y 67) y retoca simplemente otros (cps. 9, 33, 43, 50).

(181) Ordenanzas 1485, cap. 2 y cap. 4.

una prohibición expresa de conocer los pleitos civiles que en primera instancia les puedan llegar a la ciudad y villa donde resida la Chancillería<sup>(182)</sup>. Se regula igualmente que ha de haber una sala dentro de la Audiencia para que en ella libren los alcaldes diariamente<sup>(183)</sup>. Se les impone, al igual que los restantes miembros de la Chancillería, la obligación de residir en ella durante el año en que ocupa el oficio y se regula un sistema de control y sanciones para el que incumpla la ordenanza.<sup>(184)</sup>

Las definitivas Ordenanzas de 1489 para la Chancillería de Valladolid introducen algunas innovaciones<sup>(185)</sup> con respecto a las anteriores, aunque mantienen prácticamente intacto

---

(182) Ordenanzas 1485, cap. 4

(183) Ordenanzas 1485, cap. 19, Ordenanzas 1486, cap. 24

(184) Ordenanzas 1485, cap. 7; Ordenanzas 1486, cap. 8

(185) Las terceras Ordenanzas que se dan para la Audiencia y Chancillería de Valladolid fueron dadas el 24 de marzo de 1489 en Medina del Campo y están reproducidas en el Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 49r-60v; prácticamente son las mismas de Piedrahita en 1486. De éstas se han suprimido cinco capítulos (10, 11, 13, 14 y 37), se han añadido tres nuevos (caps. 25, 58 y 60) y el cap. 8 ha sido objeto de una refundición. Aunque son recogidas estas ordenanzas en distintas reimpresiones posteriores como en la Recopilación de las Cédulas y Provisiones, visitas y Ordenanzas, que los Señores Reyes Católicos de memoria gloriosa y su Magestad el Emperador y Rey Don Carlos, su nieto, nuestro señor, an embido y an proveído para esta su Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, y de los Autos y Mandamientos que para la buena administración de la justicia y expedición de los negocios se han hecho y mandado guardar por los Señores Presidente y Oydores de la dicha Audiencia, Valladolid 1545 y la Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de su Magestad que reside en la Villa de Valladolid, Valladolid 1566, nosotros citaremos siempre por el Libro de Bulas y Pragmáticas.

lo esencial de la institución regulado en las anteriores Ordenanzas de 1485 y 1486, es decir no se altera el número de tres <sup>(186)</sup>alcaldes anuales, se mantienen sus competencias <sup>(187)</sup>y su actuación colegiada <sup>(188)</sup>, siendo sustituidos, en caso de ausencia o recusación, por los oidores que el Presidente designe <sup>(189)</sup>. A propósito de la actuación colegiada, las Ordenanzas del 89 establecen que en las sentencias en las que se seguía muerte, mutilación o cualquier otra pena corporal así como de vergüenza pública o tormento, las sentencias han de ser dadas por unanimidad, mientras que para las restantes sentencias es suficiente el voto de dos de los <sup>(190)</sup>alcaldes. Si las sentencias que se requiere

---

(186) Ordenanzas 1489, fol. 5o v.

(187) Ordenanzas 1489, fol. 5o v y r.

(188) Ordenanzas 1489, fol. 5o v., ver nota siguiente.

(189) "e si alguno o algunos dellos fueren absentes o recusados o por otra manera ynpedidos, se auan de juntar o junten con el alcalde o con los alcaldes que quedaren un oydor, o dos, o tres fi tantos fueren menester, quales el nuestro presidente e oydores para ellos, por manera que sienpre sean tres en determinar y sentenciar (Ordenanzas 1489, fol. 5o v.)

(190) "Pero por escusar dilaciones e gastos e fatigas de nuestros subdiros e naturales. e porque mas breuemente se espidan los negocios: ordenamos e mandamos que en las sentencias de muerte natural o mutilación de miembros, o de otra pena corporal o de vergüenza publico o de tormento; ayan de ser o sen todos tres votos conformes en uno, e no menos: e en las otras sentencias, o mandamientos dende abaxo: e otrosi en todos los otros autos delas vnas causas e delas otras: baste que sean los votos delos dos dellos conformes: pero que firmen todos tres: e si no ouiere dos votos conformes, que recurran a la audiencia para que le den un oydor: o si acesciere que en las causas suso dichas en que todos tres votos han de ser conformes no se conformaren, si entre ellos fuere oydor o oydores: ordenamos e mandamos que vengan ala nuestra audiencia, e en ella se vea, platique o determine en qualquier delas dichas salas por los dichos alcaldes, o alcaldes juntamente con los dichos nuestros oydores! e lo que la mayor parte acordare e determinare, -

unanimidad no hay acuerdo y entre los alcaldes se haya librando un oidor, se dispone que la sentencia ha de ser llevada a la Audiencia a que sea determinada en cualquiera de las Salas. Si por el contrario no hay acuerdo entre los tres alcaldes, el Presidente diputará un oidor para que se junte con ellos y si el oidor dicho no se conforme con dos de ellos, la sentencia se lleva a la Audiencia como en el caso anterior.<sup>(191)</sup>

Lo que nos interesa destacar es que se ha supeditado la actuación de los alcaldes de las provincias en los pleitos que implican una mayor gravedad, a la Audiencia, órgano de justicia eminentemente civil, con lo que ésta queda colocada en la cúspide de la organización judicial, si bien como veremos en su momento, comparte, de hecho, esta situación con el Consejo Real.

Por otra parte, se insiste en las Ordenanzas en la prohibición de conocer determinados pleitos<sup>(192)</sup>, en la residencia obligatoria y el correspondiente control en caso de su incumplimiento<sup>(193)</sup>, así como en la costumbre de los oidores, en caso de

---

(190) /...que aquello uala: pero si los tres que no se conforman, fueren todos alcaldes solamente: en tal caso el nuestro presidente e oydores, den vn oydor que se junte con los dichos tres alcaldes: e si el dicho oydor no se conforme con ellos o con los dellos, que vengan en tal caso ala nuestra audiencia: e alli se determine por la mayor parte, segun de suso es dicho, e todos los otros autos de proceso baste que concurran dos alcaldes (Ordenanzas 1489, fol. 50 v.)

(191) Véase texto de la nota anterior.

(192) Ordenanzas 1489, fol. 50 r.

(193) Ordenanzas 1489, fol. 51 v.



que una alcaldía se halle vacante, de nombrar alcalde hasta que llegue a la Chancillería el nuevo alcalde nombrado por el rey.<sup>(194)</sup>

Finalmente hemos de hacer referencia a los alcaldes de una nueva Chancillería de Ciudad Real. Esta es creada por los Reyes Católicos en 1494 ante el "mucho trabajo que la jente del Andalucía recebia en ir a la chancillería de Valladolid con sus pleitos, por ser tan largo camino".<sup>(195)</sup> Esta nueva Chancillería, que tiene su jurisdicción sobre "todas las ciudades, villas y pueblos que estubiesen del Rio Tajo hacia mediodía, do se comprendia toda Estremadura y el Andalucía, y el reino de Granada, y el de Murcia, con la Mancha de Aragón",<sup>(196)</sup> no tiene la misma estructura que su homónima de Valladolid.

Ciertamente sorprende que sólo sean designados dos - alcaldes en la nueva Chancillería,<sup>(197)</sup> en contra del número de tres que hasta ahora se ha venido manteniendo. A qué se debe esta reducción?. Efectivamente en cuanto al resto de la Audiencia sólo se ha dotado de una sala de oidores, en contraposición de las dos salas existentes en Valladolid, medida hasta cierto -

(194) Recogido también en las Ordenanzas de 1485, cap. 21; Ordenanzas de 1486, cap. 26 y Ordenanzas de 1489, fol. 54 v.

(195) SANTA CRUZ: Crónica de los Reyes Católicos, año 1494, cap. XXV p. 126. En el preámbulo de las Ordenanzas se expresan los Reyes en términos parecidos (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 61 v.)

(196) SANTA CRUZ: Crónica de los Reyes Católicos, año 1494, cap. XXVI, p. 129.

(197) "Otrosi ordenamos e mandamos, que en la dicha nuestra Corte e Chancillería aya dos alcaldes que conozcan delas causas criminales delos reynos e comarcas e tierras de yuso contenidas por simple querella, en primera instancia del lugar donde estouieren..." (Ordenanzas 1494, fol. 61 r)

punto comprensible dado que se ha producido un desdoble de Chancillerías y posiblemente bastaría la creación de una sola sala para las necesidades. Pero en el caso de los alcaldes la situación es distinta puesto que ya no se trata de crear toda una sala. Posiblemente la respuesta venga dada por un criterio de economía. Los alcaldes de la corte y chancillería, como ya hemos venido repitiendo, actúan colegiadamente y, en base a esta necesidad, por tanto el número mínimo para que tenga lugar la actuación colegiada es de dos, justamente los alcaldes que se nombran para Ciudad Real.

Al igual que se preveía en Valladolid, en caso de discrepancia en el voto de una sentencia entre los dos alcaldes, el Presidente diputaba un oidor para dictaminar ya por mayoría la resolución del pleito<sup>(198)</sup>. Se les designan también sus competencias<sup>(199)</sup> y queda sustancialmente intanco el régimen general que se estableciera para la Chancillería de Valladolid.

#### Competencias

Los alcaldes de la Casa del Rey o de la Corte nacen con la función específica de juzgar, es decir su atribución más

---

(198) Ordenanzas 1494, fol. 61 r.

(199) Ordenanzas 1494, fol. 61 r.

característica es la de "facere cumplimiento de derecho" mediante la resolución de las contiendas que susciten entre los miembros de la comunidad.<sup>(200)</sup>

Sorprendentemente el Espéculo, pese a regular detalladamente otros muchos aspectos concernientes al personal juzgador, no delimita de un modo claro cuales son las competencias privativas de los "alcalles que son puestos para judgar cada día en la corte". En principio, este texto legal sólo en dos pasajes hace referencia a las competencias de los alcaldes que ahora nos ocupan. El primero de ellos les faculta para conocer de "las alzadas de aquellas tierras que el rey le señale"<sup>(201)</sup> y el segundo, muy énfaticamente, apunta que el Rey los ha puesto para "judgar todos los pleitos"<sup>(202)</sup>. Qué pleitos son éstos?. Este interrogante es el que vamos a intentar dilucidar.

En primer lugar la misma denominación que hace el Espéculo de estos alcaldes ("puestos para judgar los pleitos cada día en la corte") denota de por sí una intensa actividad judicial permanente que se escapa a la mera competencia de

---

(200) Son numerosísimos los textos que hacen referencia a esta función juzgadora de los alcaldes de la Corte. Así por ejemplo, podemos citar entre muchos: Espéculo, 4, 2, pr.; Leyes de Estilo 7, 14, 15, 29, 30, 45, 141... Partidas 3, 4, 1 y 3, 18, 26. También se hace alusión a esta función en muchos ordenamientos de Cortes: Cortes de Valladolid 1258 (CLC. I, 9, p. 56); Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 17, y 18, p. 90); Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 5, p. 109); Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 2, p. 186); Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, p. 198)... entre otros.

(201) Espéculo 4, 2, 11.

(202) Espéculo 4, 2, 2.

entender las alzadas que viniesen de las tierras. Por otra parte, ya vimos como desde la Alta Edad Media, el Rey designaba unos "iudices curiae" para que entendieran de aquellos pleitos que corresponden ser librados exclusivamente por la jurisdicción real<sup>(203)</sup> por lo que, una vez institucionalizados los alcaldes en el Espéculo, cabe suponer que seguirían conociendo en primera instancia de todos estos pleitos aunque el Espéculo no les atribuya esta competencia de un modo explícito. En cambio sí el Espéculo atribuye la competencia de algunos de estos pleitos a otro alto funcionario judicial, al Adelantado Mayor, con lo que el horizonte de las competencias queda algo más definido, pues si bien el Adelantado Mayor queda como juez de los pleitos entre nobles, concejos, y en general los "pleitos granados"<sup>(204)</sup>, sin duda, los otros casos de corte deben haber quedado como competencia, en primera instancia, de los alcaldes de la Corte. Desde luego, aunque las fuentes de estos años del reinado de Alfonso X no son muy ricas en datos a la hora de darnos un panorama acerca de la administración de justicia en la Corte, parece que, a tenor del texto de las Cortes de Valladolid de 1258 puede afirmarse que los alcaldes de la Corte tienen asignadas unas amplias competencias, pero bien delimitadas, en primera instancia<sup>(205)</sup>. También las leyes del

---

(203) Ya vimos en su momento cuales eran estos pleitos; nos remitimos ahora al cap. I, págs.

(204) Espéculo 4, 2, pr.

(205) Cortes de Valladolid 1258 (CLC. I, 9, p. 56). "Manda el Rey que todos los querellosos que asu casa venieren que vayan a los alcaldes, e si el pleyto ei en quelos alcaldes entienden o que puedan librar que gelo libren leugo, e si el pleyto fuere pora el Rey que gelo muestre."

Estilo nos han dejado varios testimonios acerca de esta competencia de los alcaldes de la Corte,<sup>(206)</sup> pero lo incierto de su fecha no permite afirmar que precisamente alguno de estos estilos sean de los primeros años del reinado de Alfonso X<sup>(207)</sup>. No obstante no es aventurado afirmar que los alcaldes de corte conocerían en primera instancia aquellos casos de corte que no estaban reservados a la competencia del Rey, o por su mandato, del Adelantado Mayor. Por otra parte, debido a las vicisitudes a que estuvo sometida esta institución -que veremos en su momento- lógicamente en aquellos períodos en los que no hubo Adelantados cabe pensar que las competencias de los casos de corte reservados a él fueron ejercidas por los alcaldes de Corte. Además, muy pronto la figura del Adelantado queda configurada como un oficial eminentemente territorial con lo que su ausencia de la Corte, aunque pueda nombrar lugarteniente, hace más difícil su competencia para estos casos. Finalmente, en 1310, los adelantados se van a ver desprovistos de ejercer personalmente sus competencias judiciales con lo que definitivamente pasan a mano de los alcaldes de Corte sus atribuciones.

---

(206) Leyes del Estilo 45, 91, 7, 9.

(207) No se ha podido precisar con exactitud la fecha de estas leyes, pero en todo caso no parece que sean posteriores a 1312. En la rúbrica que precede a esta colección de leyes dice que se recogen "la costumbre de la Corte de los Reyes de Castilla, del Rey don Alfonso, e después del rey don Sancho, su hijo, e dende acá". En base esto las Leyes del Estilo se han datado en vida de Fernando IV muerto en 1312. Vid. GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... p. 653, nota 99.

Esta competencia, perfectamente delimitada a partir de las Cortes de Zamora<sup>(208)</sup> se ve incrementada años más tarde cuando las Cortes de Burgos de 1301 avonan a la jurisdicción real las demandas que se susciten por los "tuertos e por los dannos" que los oficiales reales, en el ejercicio de su oficio, den a lugar<sup>(209)</sup>. Vemos, pues, que la competencia material de los alcaldes estaba reducida en primera instancia a los asuntos de tipo criminal, competencia que, por otra parte, los caracterizará a lo largo de todo el período estudiado, aunque en algún momento, sin duda extralimitándose de sus competencias, hayan conocido de causas no estrictamente criminales.<sup>(210)</sup>

Pero pese a esta competencia criminal característica, es posible que conociesen, hasta la creación de los alcaldes del rastro, de aquellas causas civiles que se suscitaban en el rastro de la Corte, así, por ejemplo, las que acaecieran por motivos de abastecimiento de la Cada del Rey.<sup>(211)</sup>

Ya vimos como todavía en 1351 el alcalde de Corte - tiene encomendado el conocimiento de los pleitos del rastro<sup>(212)</sup> con lo que podemos afirmar que por lo menos hasta esta fecha

---

(208) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 46, p. 94).

(209) Cortes de Burgos 1301 (CLC. I, 7, p. 147)

(210) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 12, pgs. 171-2).

(211) Véase la sentencia de 1340 dictada por Juan Fernández, "doctor en decretos, alcalde del Rey en la ssu Corte", mandado pagar la harina que se tomó para aprvisionar al Rey Alfonso XI (A. MILLARES CARLO: Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, serie segunda Madrid 1932, t. I. doc. 10, pgs. 31-39).

(212) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34).

conocen tales pleitos sin distinción, ya sean civiles como criminales. Pero el problema se plantea cuando una vez creados los alcaldes del rastro con competencias propias no sabemos si éstos quedan vinculados al lugar donde reside el Rey o, si por el contrario, se integran al ámbito de la Corte. Sin entrar ahora en un tema, sobre el que más adelante volveremos, sí se puede adelantar que, desde nuestro punto de vista, los alcaldes del rastro quedan vinculados a la persona del Rey por la necesidad de que éste vaya acompañado de jueces técnicos en sus continuos desplazamientos por el Reino, dada la separación material que, como ya vimos, desde el reinado de Sancho IV se está produciendo de hecho entre el Rey y su Chancillería. Luego no sería aventurado afirmar que los alcaldes de las provincias o de Corte y Chancillería seguirían conociendo de las causas que acaecieran en el rastro de la Chancillería.

Esta hipótesis viene reforzada por uno de los capítulos de las Ordenanzas de Córdoba de 1485 dadas para la Audiencia y Chancillería de Valladolid. En ellas se hace una prohibición expresa de que "non puedan conosçer nin conosçan en primera instançia, ellos ni algunos de ellos (los alcaldes) de pleitos algunos çeviles de la çibdad o villa o lugar donde estouiere la nuestra corte e chancilleria con cinco leguas en derredor, quedándoles enteramente, como les dexamos, su jurisdicción sobre lo criminal así en la nuestra corte e chancillería como fuera de ella"<sup>(213)</sup>. Esta prohibición de las Ordenanzas

---

(213) Ordenanzas 1485, cap. 4.

hasta esta fecha sin precedentes, está privando claramente a los alcaldes de una facultad que, sin duda, venían ejerciendo a la luz del texto, porque, si bien les ha desprovisto de una de sus competencias, a continuación, enfáticamente, dice, "les dexamos", su típica jurisdicción sobre lo criminal.

No sabemos si las Ordenanzas de 1486 alteraron o mantuvieron este capítulo, dado que el manuscrito que ha llegado a nosotros está incompleto y faltan precisamente estos primeros capítulos en los que, al menos en las de 1485, se recogía esta prohibición, pero hemos de suponer, dada la gran similitud entre ambas, que las Ordenanzas del 86 recogerían este capítulo.

Los pleitos civiles del rastro, por tanto, al quedar fuera de la competencia de los alcaldes<sup>(214)</sup> y de los oidores<sup>(215)</sup>, serían librados, mientras estuvieron vigentes estas Ordenanzas, es decir, hasta 1489, por el "fuero del reo ante su juez ordinario" y después, ya en apelación, podían ir ante los oidores, "salvo si la causa fuere contra corregidor o alcalde ordinario o otro oficial de tal lugar e sobre caso en que pueda ser con\_venido durante el tiempo de su oficio."<sup>(216)</sup>

Las Ordenanzas de 1489 introducen una importante innovación con respecto a las anteriores. Al contrario de lo que

---

(214) Ordenanzas 1485, cap. 4.

(215) Ordenanzas 1485, cap. 5.

(216) Ordenanzas 1485, cap. 5.



disponen las de 1485 y 1486, ahora no se prohíbe a los alcaldes que conozcan en primera instancia los pleitos acaecidos en el rastro, sino que aquéllos "no puedan conocer ni conozcan en grado de apelación de pleytos algunos ciuiles que venga de fuera delas cinco leguas del logar donde estouiere la dicha nuestra audiencia" y "ni puedan los dichos alcaldes embiar pesquisidores fuera delas cinco leguas como antiguamente se solia fazer"<sup>(217)</sup>. Se mantiene la prohibición de que los oidores oigan tales causas civiles en primera instancia por el "grand empacho" que esto trae a la expedición de los negocios de la Audiencia, pero ahora, tales demandas se pueden presentar no sólo siguiendo el fuero del reo ante su juez ordinario, sino que también las Ordenanzas dan la opción de que sea presentada "ante los alcaldes dela nuestra corte e chancelleria"<sup>(218)</sup>. Por tanto vemos como los alcaldes han recobrado su competencia para librar los pleitos civiles del rastro.

Però sin duda la competencia más importante y característica de estos alcaldes, en primera instancia, es la de conocer los "casos de corte" y causas criminales, que, debido a los grandes perjuicios que acarreaban al reino, no podían ser

---

(217) Ordenanzas 1489, fol. 5o r.

(218) Ordenanzas 1489, fol. 5o r.

librados por sus correspondientes "jueces foreros", sino que hacían imprescindible la intervención de la jurisdicción real. Esta competencia viene reconocida desde las Cortes de Zamora de 1274<sup>(219)</sup> y reiterada a lo largo de los siglos XIV y XV en varias ocasiones.<sup>(220)</sup>

De los fallos que dan en primera instancia los alcaldes de Corte cabe, según la época, alzada a distintos jueces. En el sistema que se propugna en el Espéculo cabía alzada ante el Adelantado Mayor de la tierra correspondiente<sup>(221)</sup> y este mismo esquema se mantenía en Castilla a tenor de lo dispuesto en las Cortes de Zamora de 1274<sup>(222)</sup>. Pero para el Reino de León, Extremaduras, Toledo y Andalucía, a partir de esta fecha, no se acude al Adelantado sino que las alzadas serán vistas por "tres omes buenos entendidos e sabidores delos fueros"<sup>(223)</sup>. Sin entrar ahora en el tema de los alcaldes de las alzadas, de los que nos ocupamos a continuación, sí, en cambio, podemos decir que mientras las alcaldías de la corte se configuraron como "tribunales" unipersonales, siempre hubo posibilidad de revisar su fallo ante el alcalde de las alzadas de la Corte. La desaparición de éste a finales del siglo XIV o principios del XV<sup>(224)</sup>

---

(219) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 46, p. 94).

(220) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 12, pgs 171-2) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, 198); Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 57, p. 442); Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190); Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 2, p. 13); Sentencia compromisaria de 1465 (Col. Dipl. Enrique IV, doc. 109, cap. 92, pgs. 429); Ordenanzas 1489, fol. 50v).

(221) = Espéculo 4, 2, 11.

(222) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 20, p. 90).

(223) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 19, p. 90)

(224) La última referencia que tenemos de esta institución es de las Cortes de Segovia de 1390 (CLC. II, 3, p. 474).

coincide con la potenciación de la Audiencia que había iniciado Juan I<sup>(225)</sup> y con el carácter colegiado que, como ya vimos, había instaurado Enrique II en 1371<sup>(226)</sup> dió al traste con esta institución, con lo que la "audiencia de la cárcel" quedaba prácticamente equiparada a su homónima, pero con la exclusiva competencia criminal y, por tanto, de sus fallos sólo cabría suplicación ante la Audiencia.<sup>(228)</sup>

Pero los alcaldes de la Corte inicialmente eran competencias para conocer aquellos pleitos que por vía de apelación llegaban procedentes de los alcaldes o jueces de los distintos territorios<sup>(229)</sup>. El Espéculo no hace distinción alguna sobre la cualidad de dichos pleitos por lo que hemos de suponer que se trataban, indistintamente, causas civiles o criminales. Hemos de tener presente que hasta la creación de la Audiencia a finales del reinado de Alfonso XI, los alcaldes de la Corte constituyen el más alto órgano judicial del Reino, de ahí la importancia a la hora de conocer cualquier tipo de pleitos; aún más, - creada ya la Audiencia, ésta, como tendremos ocasión de ver, durante mucho tiempo no conocerá las apelaciones de los territorios que iban, como hemos dicho, ante los alcaldes de Corte.

---

(224) /... Véase más adelante las páginas que dedicamos al estudio de este alcalde.

(225) Esta revalorización de la Audiencia se hace patente en las Cortes de Briviesca de 1387 y se reafirma en las de Segovia de 1390 (CLC. II, 3, p. 473).

(226) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 473).

(228) A partir de 1432 también se suprime la suplicación ante la Audiencia: "que de aquí adelante vos los dichos mis oidores non podades entremetter nin entremettades de oyr ni ber ni librar ni detterminar engrado de Apelacion ni suplicación ni agrabio ni nulidad ni enotro grado ni manera alguna que sea o se pueda de qualquier causas questtiones e pleitos criminales que ante los mi Alcaldes

Esta competencia en segunda instancia de los alcaldes de la Corte está explícitamente recogida también en el tantas veces citado Ordenamiento de Zamora, tanto para Castilla como para León y Extremaduras. No obstante, creemos, que esta facultad de conocer en apelación los pleitos de los territorios fué, de hecho, muy poco ejercida por los alcaldes de Corte, fundamentalmente en lo civil. Esto se debe, principalmente, a nuestro juicio, en primera lugar, al enorme costo que supone el trasladarse a la corte -no olvidemos, todavía itinerante- con lo que ya en principio aquellos pleitos que no fueran de una cuantía ciertamente importante no debían llegar nunca en apelación a la Corte. En segundo lugar, hemos de tener presente la posibilidad, desde luego siempre más asequible, de acudir al Adelantado Mayor de la tierra o a su lugarteniente y, a partir de 1310, a los alcaldes de Adelantamiento. Finalmente hay que tener presente que parte de las ciudades del Reino, las de mayor importancia, como Toledo, Sevilla o Murcia, en las que posiblemente pudieran surgir más pleitos, tenían privilegios de conocer en la misma ciudad las apelaciones que sus jueces con lo que, sin duda, restarían un buen número de causas que, de otra forma, hubieran tenido que librarse en la Corte.

A principios del siglo XV parece que han perdido esta posibilidad de conocer la apelación las causas civiles de los territorios, estableciéndose definitivamente, al tomar plenamente

---

(228) /...de la mi Audiencia de la Carzel de la mi Casa e Corte e Chanceleria aian seido o sean ttratados..." (1432, junio 25, Pragmática de Juan II para que los oidores de la Audiencia no se entremetan ni traigan a sí los pleitos pendientes ante los alcaldes de la cárcel. Col. Burriel. Ms. 13105. fols 106 v-r - 107 v).

el carácter de Audiencia de la cárcel, sus competencias para librar en apelación para las causas criminales. De este fallo sólo cabe suplicación ante los mismos alcaldes<sup>(230)</sup>, aunque, como ya regulan las Ordenanzas de 1485, si alguna de las partes lo piden, puede juntarse con los alcaldes un oidor para revisar el proceso en grado de revista.<sup>(231)</sup> Las Ordenanzas de 1489 recogen un caso en el que dada la gravedad de la pena, ante la imposibilidad de que los votos de los alcaldes sean unánimes, se dipute un oidor para sentender; si pese a ello no se consigue el acuerdo se acudirá a una de las Salas de la Audiencia en donde oidores y alcaldes determinarán conjuntamente por mayoría.<sup>(232)</sup>

Caían fuera de las competencias de los alcaldes de la Corte y Chancillería aquellas que eran reservadas al Consejo Real<sup>(233)</sup> y las causas criminales del Reino de Galicia, atribuidas como veremos, a unos jueces especiales mandados para el dicho Reino, hasta 1494 en que los alcaldes de Corte y Chancillería pueden conocer en apelación las sentencias que han sido dictadas por el gobernador y alcaldes mayores de Galicia que implican pena de muerte, mutilación o destierro superior a diez años.<sup>(234)</sup>

(229) Espéculo, 4, 2, 11.

(230) Pragmática de Juan II de 1432 citada antes en nota.

(231) Ordenanzas de 1485, cap. 4.

(232) Ordenanzas de 1489, fol. 50 v.

(233) Tales como las apelaciones de los juicios de residencia, las apelaciones de las cartas ejecutorias libradas por el Consejo y de las pesquisas ordenadas por el Rey o el Consejo (Ordenanzas de 1489, fol. 49 r.). Las competencias del Consejo las veremos más adelante.

(234) "Otro si que delas sentencias o mandamientos que los dichos nuestros alcaldes mayores con el dicho nuestro gouernador dieren o fizieren en qualesquier causas criminales

Los Alcaldes de la Corte, como hemos visto a lo largo del período que nos ocupa el presente estudio, han venido denominándose también por el respectivo territorio del que procedían hasta el siglo XV, y aún en él conservaron el nombre genérico de "alcaldes de las provincias". Esto quiere decir que, además de una competencia material de la que acabamos de hacer referencia, había una competencia específica en razón del territorio.

Hasta ahora, la parte de la historiografía<sup>(235)</sup>, ha señalado que la distribución territorial de los alcaldes de Corte arranca del Ordenamiento zamorano de 1274. Pero lo cierto es que en el Espéculo parece ya vislumbrarse unas ciertas competencias territoriales<sup>(236)</sup>, no obstante los interrogantes que se ciernen con respecto a los alcaldes de casa del Rey en este cuerpo legal no nos permiten llegar a conclusiones definitivas. En primer lugar porque desconocemos el número de alcaldes de casa del

---

(234) /...que si por ellos se infiriere muerte o mutilación de miembro o destierro perpetuo o de diez años o dende arriba que destos tales pueda auer e aya apelación para ante los nuestros alcaldes dela carcel de la nuestra corte e chancilleria enel caso que lugar ouiere apelación" (Bulas y Pragmáticas, fol. 97 r.)

(235) Los autores que han hecho referencia a los alcaldes de la Corte no se han planteado el problema del origen de la distribución territorial de competencias, ni siquiera PEREZ DE LA CANAL en su monografía, ya tantas veces citada, aunque sí señala que la exigencia de que los alcaldes fueran originarios de las diversas regiones del Reino venía determinado por la vigencia de los fueros locales (La justicia... p. 418). Tampoco TORRES SANZ ha profundizado en la cuestión y se limita a señalar que "En la reunión de Zamora de 1274 se constituyeron veintitres alcaldías, repartidas desigualmente entre Castilla, León y Extremadura, quizás con la intención de adecuarlas a las respectivas densidades demográficas (nueve, ocho y seis respectivamente)" (La Administración Central castellana... p. 349).

(236) Espéculo, 4, 2, 11.

Rey y, por tanto, ni a modo de hipótesis podemos hacer una posible distribución por territorios. Posiblemente estos alcaldes estaban nombrados por el Rey sin atender a la carta de naturaleza de cada uno de los reinos, pero el conflicto suscitado en el intento de conocer cualquier tipo de pleitos por la jurisdicción real, hizo que en Zamora se delimitaran específicamente qué pleitos eran considerados privativos de la jurisdicción real -pleitos del rey- y qué pleitos habían de librarse por el respectivo derecho local -pleitos foreros-. Esta distinción, a nuestro juicio, fué la que llevó a la necesidad de una distribución territorial atendiendo a la carta de naturaleza de los alcaldes, cosa, por otra parte, perfectamente lógica pues si, como acabamos de ver, los alcaldes tenían que librar en apelación los fallos procedentes de los jueces inferiores de cada uno de los territorios o Reinos, debían ser buenos conocedores de los derechos de cada una de estas regiones, pues, a tenor del propio Ordenamiento, sólo se aplicaría el Derecho regio en los "pleitos del Rey", y necesariamente tendrían que aplicar el Derecho local correspondiente a la hora de dictar la sentencia en apelación. Así aunque el Ordenamiento no lo diga expresamente para los alcaldes de las regiones, en cambio para los tres "omes buenos" designados para conocer las alzadas de León, Andalucía, Extremaduras y Toledo, se señala que han de ser "entendidos e sabidores delos fueros"<sup>(237)</sup>. Con más razón los alcaldes procedentes de cada uno de los territorios han de ser buenos conocedores del Derecho de cada uno de los reinos.

---

(237) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 19, p. 90).

Esta delimitación de competencias territoriales se mantuvo durante el siglo XIII y XIV y es preocupación constante por parte de los reinos quienes, ante la intromisión de los alcaldes de un territorio en el conocimiento de los asuntos de otro, elevan sus quejas al rey. Tal es el caso de las Cortes de Valladolid de 1293<sup>(238)</sup>, Cortes de Valladolid de 1307<sup>(239)</sup>, Cortes de Carrión de 1317<sup>(240)</sup>, Cortes de Valladolid de 1351<sup>(241)</sup> y Cortes de Toro de 1369<sup>(242)</sup>. El problema se nos presenta en el siglo XV. La última referencia que tenemos en que se hayan nombrado alcaldes específicos de cada una de las regiones o de las "prouinçias", como les llama el propio Ordenamiento<sup>(243)</sup> data del cuaderno del "ayuntamiento" o Cortes de Segovia de 1390<sup>(244)</sup>. En él se nombran alcaldes para Castilla, León, Toledo, Extremaduras y Andalucía y suponemos que, sin duda, este ordenamiento se llevó a la práctica. Pero la muerte de Juan I al año siguiente y las escasas referencias que hemos encontrado de los primeros años del reinado de Enrique III<sup>(245)</sup>, no nos permiten aclarar la cuestión. Suponemos que se mantendría intacta la organización judicial de la Corte al menos al principio de su reinado. Lo que no podemos precisar es si la medida que tomó Enrique III de suspender a los oidores de su Audiencia<sup>(246)</sup> se

- 
- (238) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 14, p. 112)
  - (239) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 3, p. 186)
  - (240) Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 5, pgs. 302-3).
  - (241) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34-5).
  - (242) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 6, p. 166-7).
  - (243) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 2, p. 473)
  - (244) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 474)
  - (245) En un alcala de 1394, febrero 20, para que la Audiencia determine los pleitos pendientes en ella sin embargo de cualquier comisión, aparece Diego García de San Roman titulado como "lugarteniente de alcalde de toda Castilla". Ello nos hace pensar que la pervivencia de las alcaldías



extendió también a los alcades de las provincias, dejando un alcalde único al igual que hiciera con Juan Gonzalez de Acevedo en la Audiencia, pero lo cierto es que a partir de este momento ya no encontramos más a los alcaldes nombrados por cada una de las provincias de origen. Ya hicimos referencia a que - a lo largo del siglo XV se les denominara o "alcaldes de las provincias" sin especificar- o, ya muy adentrado el siglo, "alcaldes de Corte e Chancelleria". Cabe, entonces, cuestionarnos si los alcaldes han perdido su competencia estrictamente territorial que hasta ahora hemos visto.

Por un lado, es muy significativo que ya no se vuelva hacer mención expresa a cada una de las provincias <sup>(247)</sup> y, desde mi punto de vista, ello se debe fundamentalmente a dos fenómenos. En primer lugar a la configuración que se les da a los alcaldes de una auténtica "audiencia" -"audiencia de la carcel"- a modelo de la Audiencia de lo civil en la que en ningún momento se exigió carta de naturaleza de sus miembros, sino que los oidores lo eran para todos los reinos de la Corona. La actua-

(245) /...en este reinado (Libro Bulas y Pragmáticas, fol. 46 r-v

(246) Crónica de Enrique III, año 1406, cap. 19, p. 286 y Crónica de Juan II, año 1407, cap. 16, pgs. 282-3.

(247) Efectivamente, a partir de ahora se utiliza o bien de forma genérica (Cortes de Madrid 1419, CLC. III, 2 p. 13; Cortes de Toledo 1436, CLC. III, 32, p. 300; Sentencia compromisaria de 1465 en Col. Dipl. de Enrique IV, doc. 109, cap. 52, p. 408) o se utiliza, como ya hemos señalado, otras denominaciones como "alcaldes de Cortes e Chancelleria" o alcaldes de la nuestra carcel".

ción colegiada suponía, además, una mayor garantía en el desenvolvimiento del proceso. Y en segundo lugar, y posiblemente este segundo factor llegó a condicionar o a facilitar la aceptación del primero, es que ya a principios del siglo XV no tiene sentido la dicotomía "pleitos del Rey" y "pleitos foreros". El Ordenamiento de Alcalá, con la correspondiente reafirmación de la Mayoría de Justicia del Rey y el Orden de prelación de fuentes propugnado en éste,<sup>(248)</sup> supuso un durísimo golpe para los derechos locales<sup>(249)</sup> quedando la aplicación de éstos a unos pocos casos. La aplicación a partir de 1348 del Derecho real y del Derecho profundamente romanizado de las Partidas hacían carecer de sentido la actuación en la Corte de unos alcaldes especializados en derechos locales. Los alcaldes de la provincias han perdido, a nuestro juicio, esa competencia estrictamente territorial de cada región, adquiriendo una competencia general sobre todos los territorios de la Corona. Les quedará sólo el calificativo de "provincias" como vestigio de sus antiguas competencias territoriales.

---

(248) Ordenamiento de Alcalá 28, 1.

(249) Las causas de la decadencia de los Derechos locales ya las puso de relieve el prof. GARCIA-GALLO en su trabajo Crisis de los derechos locales y su vigencia en la edad moderna, en Cuadernos de Derecho francés, 10, II, Barcelona, 1955, pgs 69-81. Estas causas, son fundamentalmente, cuatro: En primer lugar la integración de las ciudades y pueblos en una comunidad más amplia que abarca a todos ellos borrando el particularismo anterior, el fortalecimiento del poder público; el intervencionismo real de la vida local mediante el nombramiento de jueces y dediciendo las apelaciones ante el tribunal real y, finalmente, su enfrentamiento al Derecho Común.

Finalmente, los alcaldes de Corte conocían también en apelación todas aquellas sentencias dictadas por los alcaldes de los señoríos en las que alguna de las partes se consideraba agraviada por el fallo. Este régimen se debió mantener al menos hasta el reinado de Alfonso XI y posiblemente durante el de su hijo Pedro I<sup>(250)</sup>. Ya hicimos referencia en su momento a esta manifestación de la Mayoría de justicia del Rey por la que, en virtud de su suprema jurisdicción, se reservaba conocer siempre en última instancia las apelaciones procedentes de los señoríos. No sabemos exactamente cuando los alcaldes de la Corte comenzaron a librar este tipo de apelaciones, pero dado que, como hasta ahora hemos visto, los alcaldes entienden prácticamente de todos aquellos pleitos o causas que han de ser librados por la jurisdicción real<sup>(251)</sup>, no es aventurado afirmar que los citados alcaldes vienen conociendo las sentencias procedentes de los jueces de señorío desde su institucionalización en el Espéculo.

---

(250) "... algunos omes delos nuestros rregnos que non - dexauan husuar la nuestra juredición e sennorio rreal en sus lugares deziendo que nos nin la nuestra justia que no tenemos que beer en ello; non seyendo ello asy commo ellos dezien, ante seyendo vsado e acostumbra- do enel tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, ante e despues, quelas alçadas delas sen- tençias que se fazen delos alcalles delos tales sennorios que benien antealos nuestros alcalles dela nuestra corte, et eso mesmo las querellas delos tales alcalles para lo oyr e librar..." (Cortes de Toro 1371, CLC. II, 5, p. 205).

(251) Espéculo 4, 2, 4 y 5, 14, 14.

Esta competencia es reafirmada años más tarde por el propio Enrique II en Burgos<sup>(252)</sup> y por su hijo Juan I en 1390<sup>(253)</sup> si bien, como también ya vimos<sup>(254)</sup>, esta ley supuso una alteración en el sistema ya que hacía necesaria, antes de acudir a la jurisdicción real, la apelación ante el señor. A tenor de las protestas de los procuradores los señores debían negar frecuentemente a los habitantes de sus señoríos la posibilidad de acudir en apelación a los alcaldes de la Corte, o de aquellas villas o ciudades en las que estaba enclavado el señorío y que por "uso o costumbre" veían en primera instancia los pleitos<sup>(255)</sup>. Sobre todo a partir de lo dispuesto por Juan I en las Cortes de Guadalajara se agudizó el problema, como bien expresan las Cortes de Valladolid de 1442<sup>(256)</sup>, y serían escasísimos aquellos pleitos que llegarían a la Corte en apelación procedente de los señoríos.

- 
- (252) "...quelos vezinos e moradores dellos (los lugares de señorío) quisieren apelar delas sentençias que contra ellos fueren dadas por los sennores dellos o por los de sus alcalles, sentiendose dellas por agraiados, para ante nos o para ante nuestros alcalles, quello puedan fazer;" (CLC. II, 14, 14, pgs. 282-3).
- (253) "...Et si dela sentençia del sennor o del su alcale o alcalles se sentieren agraiados que puedan apellar para ante nos o para ante los nuestros alcalles..." (CLC. II, 9, pgs. 430-1).
- (254) Véase cap. I, págs.
- (255) Además de las peticiones de las notas 250, 252 y 253 puede verse la de las Cortes de Ocaña de 1422 (CLC. III, 14, p. 44).
- (256) "...bien sabe vuestra merçet en commo tiene ordenado por ley de ordenamiento que todas las apellaçiones delas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos e senorios vayan avuestra corte, lo qual non se guarda por quelos sennores non dan logar aello.. (CLC. III, 27, pgs. 428-9).

Es ciertamente muy significativo que MONTALVO en su Ordenamiento no haya recogido una ley de la importancia de la de Guadalajara, pero lo que realmente sorprende es que sí haya recogido en su repertorio "Secunda Compilatio"<sup>(257)</sup>. Significa esta omisión la inaplicabilidad de la Ley?. Caben varias hipótesis para contestar a este interrogante.

En primer lugar es sabido por todos que el Ordenamiento confeccionado por MONTALVO no recibió sanción oficial por los importantes defectos de que adolecía<sup>(258)</sup>, pero en este caso concreto no cabe la posibilidad de pensar en un desconocimiento por parte del autor de la dicha ley, ya que como hemos dicho, en su "Secunda Compilatio", obra casi coetánea de la anterior, MONTALVO recoge la ley de Guadalajara. En cambio sí se recoge en el Ordenamiento<sup>(259)</sup> -por cierto atribuyéndola erróneamente a Enrique III- la ley dispuesta en Burgos por Enrique II en la que se insistía que de las sentencias dadas por los alcaldes de señorío se había de acudir en apelación ante los alcaldes de la Corte.<sup>(260)</sup> La inclusión de esta ley, anterior a la de Guadalajara, nos hace pensar en una omisión voluntaria

---

(257) A. DIAZ DE MONTALVO: Secunda compilatio segum et ordinatorium regni Castellae, Salmanticae, 1485, fols. 14v-15.

(258) GARCIA-GALLO: Manual, I, p. 402.

(259) Ordenanzas Reales de Castilla, 3, 16, 14 (a partir de ahora ORC)

(260) CLC. II, 14, pgs. 282-3.

por parte de MONTALVO de la citada ley de 1390. Sin duda alguna ésta suponía en cierta medida un menoscabo de la jurisdicción real ya que suponía establecer como régimen general a todos los señores el que éstos pudieran conocer las apelaciones de sus señoríos. Esta omisión voluntaria hubiera supuesto una reacción por parte de aquellos que se considerasen lesionados en sus derechos, pero que sepamos no conocemos ninguna referencia de alguna protesta por parte de los señores jurisdiccionales. Efectivamente el Ordenamiento no tuvo sanción oficial, con lo que no hubiera cabido protesta, pero de hecho debido a su utilidad al parecer los Reyes Católicos ordenan que en cada pueblo tengan un ejemplar de él<sup>(261)</sup>. Cabe también otra posible interpretación de la ausencia de la ley de 1390 en las Ordenanzas Reales de Castilla. MONTALVO está haciendo su obra con una finalidad fundamentalmente práctica, por ello no se limita a recoger las leyes siguiendo un orden estrictamente cronológico sino que las agrupa sistemáticamente, retoca, modifica y pone al día -no siempre con acierto-, por lo que se puede pensar que el autor haya eliminado aquellas leyes que están absoletas, es decir, recoge solamente el Derecho que se aplica en ese momento. Así se explicaría que la ómitiera en las Ordenanzas y la incluye en el repertorio. A todo esto debemos añadir que ninguna de las sucesivas ordenanzas que dan los Reyes Católicos para su Audiencia y Chancillería se hace mención expresa a quien corres

(261) Ordenanzas de Corregidores dadas por los Reyes Católicos:  
 "E asimismo faga que en la dicha arca esten las Siete Partidas e las leyes del Fuero e los Ordenamientos e Pragmáticas, porque aviendolas mejor se pueda guardar lo contenido en ellas" (Bulas y Pragmáticas, fol. 110 )

ponde conocer las apelaciones procedentes de los señoríos, con lo que el interrogante queda aún mucho más lejos de ser resuelto satisfactoriamente. Cuál fué la verdadera intención de MONTALVO?. No la sabemos, por tanto es ciertamente difícil precisar qué ha ocurrido con las apelaciones de los señoríos con lo que, a falta de más datos, hemos de movernos en el terreno de las suposiciones.

Sabemos por el texto de las Cortes de Valladolid de 1442 que Juan II manda que se cumpla la ley de las Cortes de Guadalajara de 1390<sup>(262)</sup>. Los procuradores no se quejan de que los señores conozcan las primeras apelaciones sino de que no se conceden las apelaciones para la Corte. Suponemos que de lo que se protesta es de que no se conceden las segundas apelaciones, prueba de ello es que el Rey manda que se guarde precisamente la ley de Guadalajara por lo que, al menos hasta mediados del siglo XV, está en vigor. Pero la política restrictiva de los poderes señoriales llevada a cabo por los Reyes Católicos fué tal vez la que indujo a MONTALVO a la supresión de la ley de las Ordenanzas Reales. Por otra parte, ante el abuso por parte de los señores de negar sistemáticamente las apelaciones para la Corte, los habitantes de los señoríos debieron abandonar la posibilidad de realizar la apelación "gradatim"

---

(262) "Aesto vos rrespondo que mi merçet es e mando que se guarde la ley rreal fecha por el Rey don Iuan mi avuelo que Dios de santo parayso enlas Cortes de Guadalajara, que fabla en este caso so la pena en ella contenida" (CLC. III, 27, p. 429).

para acudir a la apelación "omisso medio"<sup>(263)</sup> es decir, acudir directamente en apelación al Rey como preveían en Espéculo<sup>(264)</sup> y las Partidas<sup>(265)</sup>. Esta práctica, reconocida y admitida por los tratadistas del siglo XVI<sup>(266)</sup> debió generalizarse como da a entender GREGORIO LOPEZ<sup>(267)</sup>, y, en virtud de ella, se acudiría en

---

(263) Sobre la posibilidad de acudir al Rey sin necesidad de agotar los grados o instancias intermedias sólo se ha ocupado, si bien de modo parcial, entre nosotros G. VILLAPA LOS: Los recursos... pgs. 216 y ss. La posibilidad de recurrir "omisso medio" no estaba admitida por el antiguo Derecho Romano por lo que pasa al Derecho Secular procedente del Canónico que sí admitía la posibilidad de acudir directamente al Papa sin pasar por los jueces intermedios. Así lo recogía ya el Decretum (Decretum magistri Gratiani, secunda pars. causa II, quaest. VI ed. Friedberg, Leipzig 1879) y el fundamento de esta actuación radicaba en que el Papa era juez superior ordinario de toda la cristiandad: Papa qui ordinarius est cunctorum" (HOSTIENSE: In secundum decretalium librum commentaria. De officio legati. c.L., fol. IIov. ed. Turin 1578) si bien, como veremos en la nota siguiente, se recoge por el Espéculo a mediados del siglo XIII.

(264) "Agraviándose alguno del juyzio quel diere su judgador, puedese alzar del al otro que sea su mayoral. Pero el alzada deve ser fecha en esta manera, subiendo de grado en grado todavia del menor al mayor, non dexando ninguno entremedias... Pero si quiere luego tomar alzadas para el rey ante que pasase por los otros judgadores, dezimos que bien lo puede fazer. E esto es porque el rey e señorio sobre todos los otros judgadores, ca son puestos por su mano, e puede judgar a ellos, quanto mas puede judgar aquella alzada" (Espéculo 5, 14, 13).

(265) Partidas 3, 23, 18 que coincide casi a la letra con el texto del Espéculo contenido en la nota anterior.

(266) Véase en el capítulo I las principales opiniones en torno a este problema, principalmente las notas

(267) Vid. Capítulo I, nota 296.



apelación a los órganos judiciales de la Corte, ya sea la Audiencia para los asuntos civiles o los alcaldes de Corte y Chancillería para los asuntos criminales.

Pero además de las competencias estrictamente judiciales, los alcaldes de Corte tienen otras atribuciones. Unas relacionadas íntimamente con la función de justicia a ellos atribuida, y otras que se salen del ámbito específico de la administración de justicia.

Dentro de las primeras podemos destacar toda una serie de atribuciones que el Espéculo asigna a los alcaldes de la Casa del Rey: cuando se presenta un pleito ante ellos deben comprobar si este es presentado por los "señores del pleito" o por "personeros" y, si es por éstos, comprobar sus credenciales para ver si están conforme a derecho<sup>(268)</sup>, si no es así cualquier actuación que el alcalde hiciera entre las partes con tales personeros es nula<sup>(269)</sup>; son los encargados de dar "vozeros" a las partes si éstas se lo piden o si él entendiera que alguna de ellas no "es sabidor de razonar su pleito"<sup>(270)</sup>; pese al carácter unipersonal de las alcaldías, el Espéculo faculta a los alcaldes, si quieren, a tomar consejeros para oír los pleitos "e con quien se conseien" pero estos consejeros han de ser "sabidores de derecho, e de que no aya sospecha que ayudaran alguna de las partes"<sup>(271)</sup>; están los alcaldes igualmente obligados a "fazer conprir los juyzios"

---

(268) Espéculo 4, 2, 7.

(269) Espéculo 4, 2, 7.

(270) Espéculo 4, 2, 13.

(271) Espéculo 4, 2, 14.

y "si ellos non los podieren fazer conprir, deven lo mandar a los otros que son puestos para fazer justicia, asi como los merinos o alguziles, o otros que la an poder de fazer, que los cumplan con poder del rey"<sup>(272)</sup>; están facultados para apremiar a los "alcaldes de avenencia" en la resolución de los pleitos que éstos tengan que librar.<sup>(273)</sup>

Desde el último tercio del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV va quedando configurada la actuación de los alcaldes en orden a otras competencias que les son atribuidas. Así, les es encomendada la tarea de supervisar todas las cartas de emplazamiento<sup>(274)</sup>, son encargados de tomar juramento a los abogados<sup>(275)</sup>, en otros casos, dada la importancia del pleito que se está solventando en la corte, reciben las pruebas de las partes.<sup>(276)</sup> Sin duda la creciente importancia que éstos fueron adquiriendo dentro del cuadro de oficiales de las Cortes, les hizo que en ocasiones se produjeran casos de intrusismo en sus competencias estrictamente judiciales y contra ello protestan los procuradores de las Cortes de Valladolid<sup>(277)</sup>. Dentro de este mismo orden de -

(272) Espéculo 4, 2, 15.

(273) Espéculo 4, 2, 18.

(274) "...e que non passen cartas por el mio sello dela poridat nin por los otros mios siellos para enplazar nin para prender nin para tomar a ninguno lo que ouiere por ninguna cosa que digan que aya ffecho, sinon ffuere dada o vista del alcalde de mi corte que sea del ffuero por hu se deuiera judgar, saluo ende si ffuere cosa mucho apresurada que tannere contra mio sennorio" (CLC. I, 8, p. 97).

(275) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 21, p. 90) y Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 3, p. 403).

(276) Véase, por ejemplo, el pleito que recoge la Crónica de Fernando IV, cap. 13, pgs. 137 y ss.

(277) "Otrosi tengo por bien e mando que ningún alcalde nin escriuano non libre ninguna cosa en la mi corte delo que pertenesçe al offiçio del alcaaldia o del escriuano ssaluo los que aqui sson nonbrados, e estos que libren en la manera que dicho es.." (Cortes de Valladolid 1312, CLC. I, 40, p. 206).

cosas, son numerosas las protestas de las ciudades contra las "cartas desaforadas" que libran los alcaldes de Corte.<sup>(278)</sup>

En las Cortes de Madrid de 1329 se les encomienda la tarea de ejercer el control junto al Rey sobre los restantes - oficiales de justicia del Reino<sup>(279)</sup>, pero al mismo tiempo se establece que en las sentencias dadas por ellos se comporten la pena de "matar", "lisiar" o "prender", necesitan para su ejecución el visto bueno del monarca.<sup>(280)</sup>

Otra importante actuación que frecuentemente es encomendada a los alcaldes de Corte es la de realizar pesquisas<sup>(281)</sup>

---

(278) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 3. p. 186); Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 33, p. 205); Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 23, p. 309); Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 12, p. 341).

(279) CLC. I, 22, p. 410.

(280) CLC. I, pgs. 430-1.

(281) "...è porque tan ligeramente non lo pudieron saber, dejaron y a don Tel Gutierrez, alguacil deste rey don Fernando, é Esteban Domingo de Avila, alcaldes del Rey, é mandaron-les que ficiesen la pesquisa..." (Crónica de Fernando IV, p. 113); "Et por esto el Rey, desque y fue, mando a los alcales de su Corte que sopiesen el estado de la cibdat: et por las cosas que fallaron que fueron fechas fueron presos algunos de la cibdat" (Crónica de Alfonso XI, cap. 45 p. 201); "a lo que me pidieron por merced que mande a los myos merynos e alcaldes que sepan e pesquiran de los logares e eglesias que los caualleros e otros omnes tienen por fuerza..." (MINGUELLA: Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, t. II. doc. 64, p. 473) Véase también en MINGUELLA (Opus cit., t. II, doc. 69, pgs. 487-8) y Crónica de Alfonso XI (cap. 80, p. 222) en el mismo sentido.

o bien actuar, en otras ocasiones, como jueces comisarios.<sup>(282)</sup>

A menudo los encontramos actuando como asesores del Rey en cuando éste imparte justicia personalmente<sup>(283)</sup>, o ante un caso controvertido que pide asesoramiento.<sup>(284)</sup> Esta actuación de los alcaldes como consejeros reales en materia de justicia fue frecuentísima y viene dada por el desconocimiento por parte de los reyes

(282) Véase la sentencia de Alfonso XI de octubre 18 de 1345 dada a raíz del pleito suscitado entre la villa de Illescas y la Iglesia de Toledo: "et yo mande a los mis alcaides que los oyesen de llano et sin luego et sin otra figura de juicio et que viesen las cartas et los recabdos que las partes touiesen et oyesen lo que desir quisiesen et lo que y fablesen que me lo dixiesen et a mas las aprtes presentaron ante los mis alcaides privilegios et otros recabdos et dixieron et razonaron lo que desir et rasonar quisieron et lo que y paso et lo que se deve a faser de derecho..." (Col. Burriel Ms. 13098, fols. 66 y ss).

(283) Esta función asesora parte de la Alta Edad Media en la que, como ya vimos, en el seno de la Curia existían unos "iurisperitos" que tenían como finalidad el asesoramiento del Rey en materias jurídicas (vid. N. GUGLIELMI: La Curia... p. ). Esta tarea asesora ya fué destacada por PEREZ DE LA CANAL (La justicia en la corte... p. 418) y más recientemente por TORRES SANZ (La administración central... p. 361). Efectivamente, son numerosos los textos que nos hacen referencia esta función: Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 44 y 45, pgs. 93 y 94), Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185), Ordenanzas de 1310 (Memorias de Fernando IV, doc. 90, p. ) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, p. 198) en las que además, se establece que el Rey se asesorará de sus alcaides en las cartas de perdón (CLC. I, 31, p. 204), Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 1, p. 402).

(284) Véase el pleito que se recoge en la Crónica de Fernando IV acerca del señorío de Vizcaya en el que el Rey se asesora para saber "lo que avia de facer segund fuero e derecho" y finalmente, antes de dar el fallo, el Rey de nuevo toma consejo (Crónica de Fernando IV, cap. 13, pgs. 137 y ss).

de los distintos derechos locales de los Reinos en un primer momento, y, posteriormente, cuando triunfa el derecho Romano-cánónico, por alto nivel de tecnificación que requeriría el conocimiento de éste, que lo situaba más lejos del alcance de cualquier persona ajena a estos conocimientos.

Fuera ya de las atribuciones estrictamente judiciales o de aquellas que indirectamente tengan conexión con la administración de justicia propiamente, a veces, encontramos a los alcaldes asesorando en la elaboración de las leyes<sup>(285)</sup>. Esto se debe a que actúan como asesores en virtud de sus conocimientos del Derecho por lo que su participación en la elaboración de las leyes se hacía, creemos, totalmente imprescindible.

Finalmente creemos oportuno hacer referencia al Derecho que aplican los alcaldes de la Corte. En principio, el Espéculo es muy explícito a la hora de señalar que todos los alcaldes "non deven judgar por otro libro sino por este"<sup>(286)</sup>, y, efectivamente, como ya acertadamente señaló el prof. BERMEJO<sup>(287)</sup>, no hay la menor duda acerca de que el Espéculo se utiliza como ley en la Corte.

Pero la reacción nobiliaria de 1272, que posiblemente estuviera secundada por el descontento popular ante la implantación de un nuevo Derecho bien distinto del tradicional que incidía

---

(285) Aparecen ya en el preámbulo de las Cortes de Zamora de 1274: "Sobre el consejo quel Rey demandó a los perlados e a los religiosos e a los recos omes e a los alcaldes..." (CLC. I, pream. p. 87); Cortes de Alcalá 1348, en el preámbulo del Ordenamiento aparecen los alcaldes (CLC. I, p. 501), Cortes de Toro 1371 (CLC. II, pream. p. 189)

(286) Espéculo 4, 2, 16.

muy directamente en la vida jurídica al ser el único aplicado por los jueces reales, llevó a Alfonso X a una reconsideración de su "política legislativa" que quedó plasmada en el tantas veces citado ornamento de la Cortes de Zamora de 1274.

A partir de esta fecha se hace una clara distinción entre los pleitos del rey o "casos de corte" y los "pleitos foreros". En los primeros se aplicaría la ley real, es decir, el Espéculo, mientras que para los segundos, aunque se librarán en la Corte, se aplicaría los respectivos derechos locales<sup>(289)</sup>. Se comprende entonces por qué es precisamente en el Ordenamiento zamorano en donde se comienzan a designar los alcaldes procedentes de cada una de las regiones del Reino, punto en el que el Espéculo había guardado el más absoluto silencio puesto que, como acabamos de ver, era preceptivo la aplicación de este cuerpo legal con independencia de la procedencia de cualquiera de los pleitos. En la Corte, por tanto, se aplicarían dos Derechos, el real, para los casos reservados a la jurisdicción real, y los Derechos locales para aquellos pleitos que, en vía de apelación, llegaban ante los alcaldes de Corte.

No obstante, las Cortes de Zamora no nos han despejado todas las incógnitas. Cuando éstas hacen referencia a los alcaldes de León, apuntan muy enfáticamente "E que los quatro alcaldes del regno de León que han siempre a andar en casa del

---

(287) J.L. BERMEJO: En torno a la aplicación de las Partidas Fragmentos del Espéculo en una sentencia real de 1261. en Hispania 114 (1970), pgs. 69 y ss.

(288) Nuevas observaciones... p. 623.

(289) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 27, y 45, pgs. 91 y 94)

del Rey, que sea uno cavallero atal que sepa bien el fuero del libro e la costumbre antigua"<sup>(290)</sup>. A qué cuerpo legal o texto se está haciendo referencia?. Una vez más sólo nos es posible movernos en el terreno de las hipótesis.

La terminología que recoge el texto es sin duda equívoca y genérica. Con ella se puede estar haciendo referencia a cualquier "fuero" que, sencillamente por su extensión, estaba recogido en un libro o volumen, en contraposición a otros fueros que, por su brevedad, estaban plasmados en una "carta" o pergamino, pero el hecho de que, como nos dice el texto, este fuero esté recogido en un "libro", ya nos está indicando al menos que se trata de un texto relativamente extenso.

Tradicionalmente se ha venido afirmándose, en base a la vigencia del Liber Iudiciorum en el Reino de León, que el texto al que se hace referencia es el "liber"<sup>(291)</sup>. No obstante - a raíz del último trabajo del prof. GARCIA-GALLO en el que se cuestiona toda la obra legislativa alfonsina<sup>(292)</sup>, podría también sostenerse, basándonos en la equiparación que nuestro maestro hace entre el Espéculo y "Fuero del libro" o "libro del Fuero"<sup>(293)</sup> que se trata del Espéculo, argumento que, por otra parte, vendría apoyado por la obligatoriedad que este texto impone de ser aplicado por todos los jueces. Esta afirmación vendría también reforzada por una petición que los procuradores del Reino de León le hacen a Sancho IV en las Cortes de Valladolid de 1293 de "quelos alcaides del regno de Leon iudgassen en nuestra casa los pleytos e las alçadas que y veniesen por el Libro judgo de León e non - por otro ninguno"<sup>(294)</sup>. La petición nos muestra claramente que los

(290) Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 17, pgs. 89-90).

(291) Así se expresan MARCIHALAR Y MANRIQUE: Historia de la Legislación... t. III, p. 88; S. MINGUIJON: Historia General del Derecho español... p. 47.

alcaldes del Reino de León sitos en la Corte están aplicando un Derecho distinto al Fuero Juzgo. Pero la identificación de este "Libro del Fuero" al que hace referencia el texto de Zamora con el Espéculo nos llevaría a una contradicción abierta a la distinción entre pleitos foreros y pleitos del Rey. Pero antes de seguir adelante, estimo necesario hacer una importante precisión.

El texto zamorano sólo hace referencia a que uno de los alcaldes de León "sepa bien el fuero del libro e la costumbre antigua" y, precisamente, el alcalde que ha de reunir tal cualidad ha de ser el alcalde "cavallero". Por qué sólo el alcalde de caballero?. Una interpretación simplista de la cuestión podría hacernos pensar que se exige tal condición en virtud de que se da por supuesto de que los restantes alcaldes son conocedores del Derecho, cosa que, tal vez precisamente por la condición de caballero más lejana de una actividad cultural, no se dé con facilidad entre los de este estamento y por ello se haga especial hincapié, en que sea conocedor del Derecho. No obstante, a nuestro juicio, el problema es mucho más complejo.

En primer lugar, ya hicimos referencia <sup>(295)</sup> a que en realidad los ocho alcaldes del reino de León que se repartirían su -

---

(292) /...Nos estamos refiriendo al trabajo ya varias veces citado Nuevas observaciones ... en AHDE 46 (1976).

(293) Nuevas observaciones... pgs. 62o y ss.

(294) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 9, pgs. 122-3).

(295) Ver en este mismo capítulo pgs.



estancia en la Corte en turnos semestrales, no eran ocho, sino seis "alcaldes", digamos "ordinarios", y dos, uno cada semestre "cavallero". Si a este dato unimos el que nos proporciona la Crónica de Alfonso X acerca de las pretensiones de los nobles a raíz de la reacción de 1272 entre las que figura "que ninguno non oviese poder de los juzgar sinon ome fijosdalgo, e que para esto ouiese dos alcaldes fijosdalgo en la corte del Rey",<sup>(296)</sup> parece que el horizonte queda mucho más claro. Alfonso X ha accedido a las pretensiones nobiliarias. Para ello en Castilla pone un adelantado Mayor que, como más adelante tendremos ocasión de ver, puede conocer los "pleitos granados" y los "grandes fechos de la Corte" -entre ellos el riepto- y que por la importancia de su cargo, éste recae siempre sobre una persona de alta condición. Pero para el reino de León no se nombra un Adelantado Mayor por lo que el Rey sabio para acceder a la petición nobiliaria nombrará en su corte alcaldes "cavalleros" para fallar las cuestiones que entre los hijosdalgo se puedan suscitar.

A la vista de estos datos pienso que se ha de rechazar la identificación del "fuero del libro" a que hacen referencia las Cortes de Zamora con el "Liber" o Fuero Juzgo, así como la identificación con el Espéculo o "fuero del Libro", para inclinarnos, salvo algún dato que pruebe lo contrario, a pensar que la frase "fuero del libro" se está utilizando de una forma -

---

(296) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.

genérica pero que al ir referida a un alcalde de condición "cavallero" bien puede identificarse con el Fuero de los fijosdalgo de León.

Hacia 1290, como señala el prof. GARCIA-GALLO<sup>(297)</sup> se empiezan a encontrar referencias a un nuevo texto que, sin duda, se está aplicando en la Corte; nos referimos al "Fuero de las Leyes"<sup>(298)</sup>. Desconocemos cuales fueron los motivos que llevaron a sustituir el Espéculo por este nuevo texto, pero lo que interesa destacar ahora es que prosigue una clara diferenciación entre los pleitos que se han de librar por los Derechos locales y los pleitos que se ventilan por el Derecho regio.

El Fuero de las Leyes, lo mismo que el Espéculo, incluía un precepto por el que hacía oblogatoria la aplicación del mismo a todos los jueces. No ha de extrañarnos pues, que entre los jueces de la Corte hubiera una tendencia a la aplicación de este texto cuando se trataran de pleitos foreros. Ante esta situación de hecho es tal vez por lo que protestan los procuradores del reino de León y piden al Rey que los alcaldes de León residentes en su casa apliquen el "Libro judgo" de León e non otro ninguno".<sup>(299)</sup> Dada la fecha de la petición, y siguiendo fielmente al prof. GARCIA-GALLO, es muy posible que ese otro texto por el que no quieren los procuradores que juzguen los alcaldes de León sea el Fuero Real y, desde luego, ha de entenderse que sólo se aplicaría el Fuero Juzgo en los pleitos foreros.

---

(297) Nuevas observaciones... pgs. 651 y ss.

(298) Texto conocido por todos como el Fuero Real.

(299) Cortes de Valladolid 1293 (CLC. I, 9, pgs. 122-3).

El Ordenamiento de Alcalá con el orden de prelación de fuentes establecido en él<sup>(300)</sup> y la consiguiente crisis de los Derechos locales<sup>(301)</sup> hizo que con el tiempo desapareciera la distinción entre los pleitos foreros y los pleitos del rey dado que acabó por imponerse en la Corte la aplicación exclusiva del Derecho real a principios del siglo XV.

---

(300) Ordenamiento de Alcalá 28, 1.

(301) GARCIA-GALLO: La crisis de los derechos locales... pgs. 76. Véase también Cap. I nota.

B. ALCALDES DE LAS ALZADAS Y ADELANTADO MAYOR DE LA CORTE.

1. Los Alcaldes de las Alzadas

Al igual que nos ocurriera cuando nos enfrentamos con el estudio de los alcaldes de la Corte, nos encontramos con que hasta época muy reciente la historiografía apenas nos ha proporcionado datos suficientes para llegar a un mejor conocimiento de esta institución. En el mejor de los casos, los autores se limitan a darnos a conocer la existencia de estas alcaldías pero sin llegar en ningún momento a caracterizar la figura que nos ocupa<sup>(302)</sup>. Cabe solamente destacar el trabajo de PEREZ DE LA CANAL tantas veces citado<sup>(303)</sup> y, más recientemente, la tesis de D. TORRES SANZ en la que se profundiza más rigurosamente en la problemática que suscitan los alcaldes de las alzadas, al mismo tiempo que propugna varias sugestivas, pero no menos discutibles, hipótesis de trabajo<sup>(304)</sup>.

---

(302) Sin ánimo de ser exhaustivo podemos citar a SANTAYANA BUSTILLO Los magistrados y tribunales de España, Zaragoza 1745, p. 299; COS GAYON. Historia de la Administración pública de España en sus diferentes ramos de Derecho político, Diplomacia, Organización Administrativa y Hacienda, desde la dominación romana hasta nuestros días, Madrid, 1851, p. 104; M. COLMEIRO: De la constitución..., pág. 255 y Derecho Político... p. 562; DANVILA: El poder civil... p. 166; MARICHALAR y MANRIQUE: Historia de la legislación... t. III, pgs. 88 y 235; S. MINGUIJON: Historia del Derecho Español... p. 235; L.G. DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones, pgs. 562; J. LALINDE: Iniciación Histórica al Derecho español, Barcelona 2ª ed. 1978, p. 415.

(303) La justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, pgs 419-20. Se limita a destacar en líneas muy generales la evolución de las alcaldías de las alzadas.

El primer problema que se nos plantea a la hora de pormenorizar en el estudio de los alcaldes de las alzadas es, como en otras tantas instituciones, el de encontrar el origen próximo o remoto con el que podamos entroncar la citada alcaldía en tiempos inmediatamente anteriores al período que nos ocupa o, si por el contrario, nace esta institución en los siglos bajomedievales ante la necesidad provocada por una nueva situación de hecho.

Si a la hora de estudiar los alcaldes de la Corte pudimos encontrar una solución de continuidad entre los "iudices curiae" y las alcaldías institucionalizadas por Alfonso X en el Espéculo, no ocurre así con los alcaldes de las alzadas, porque, que sepamos, en la Curia altomedieval no existió nunca un juez encargado de revisar los fallos de los "iudices curiae", fenómeno, por otra parte, perfectamente comprensible dado que, como vimos, aunque el litigio era solventado por los "alcaldes regis", el fallo final aparecía siempre dado por el mismo Rey por lo que no era posible acudir a un juez superior que revisara el dictado del monarca. (305)

---

(304) /... La Administración central castellana en la Baja Edad Media Tesis doctoral inédita), pgs. 364-79.

(305) Supone una excepción a este régimen general el privilegio que desde el siglo X tenían los leoneses de apelar las sentencias dadas en la Corte al Tribunal del Libro leonés. En el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso IX, se seguía todavía esta práctica. Véase, por ejemplo, la apelación que del fallo del Rey hace el cabildo de Santiago en 1223: "Et tunc dominus rex iudicavit cum sua curia quod at eo ferrent iudicium. Tunc Petrus Oiduarii dicens se esse grauatum appellavit ad librum..." (J. GONZALEZ: Alfonso IX, t. II, doc. 426, p. 542-3). Sobre esta institución volveremos más adelante.

Las nuevas necesidades institucionales de la Corona castellana a raíz de su expansión por Andalucía y Murcia en el reinado de Fernando III se vieron satisfechas por todo un programa de reformas que prevía Alfonso X en el *Espéculo*.

Estas reformas afectan de modo sustancial a la administración de la justicia, fundamentalmente a nivel central y territorial. El texto legal alfonsino no recoge, en cambio, ningún oficial judicial al que le denomine "alcalde de las alzadas" o cualquier otra denominación similar que denote unas facultades encaminadas exclusivamente para el conocimiento en apelación de los fallos dados por los alcaldes de la Casa del Rey que, como acabamos de ver en las páginas anteriores, sí venían caracterizados en el *Espéculo*. Esta facultad de conocer las alzadas estaba atribuida a otros oficiales, a los Adelantados Mayores, a los que, con independencia de que más adelante nos ocupemos detalladamente de ellos, tenemos que hacer forzosamente ahora alusión para una mejor comprensión de la figura de los alcaldes de las alzadas.

El *Espéculo* recogía la posibilidad de acudir en apelación a los Adelantados Mayores de los territorios, de las sentencias dictadas por los alcaldes de la Corte<sup>(306)</sup>, con lo que, en principio, podría pensarse en estos Adelantados como un posible antecedente de las alcaldías de las Alzadas. Pero con el fallo de los Adelantados de los territorios no quedaba agotada la vía judicial pues cabía aún otra apelación ante el Adelantado Mayor de la Corte.<sup>(307)</sup>

---

(306) *Espéculo* 4, 2 pr. y 4, 2, 11.

(307) *Espéculo* 5, 14, 14.

Este enigmático oficial quedaba, pues, en la cúspide de la pirámide judicial al establecer el Espéculo la irrecurribilidad de sus fallos de los que, en último caso, sólo cabía "pedir merced al rey"<sup>(308)</sup>. Cabe cuestionarnos, a la vista de estos datos, si podemos considerar a estos Adelantados, ya sean de los territorios o el de la Corte, como antecedentes de los alcaldes de las Alzadas.

A nuestro juicio, la alcaldía de las alzadas bajo ningún concepto se puede equiparar, en primer lugar, a los Adelantados de las comarcas. Estos aparecen configurados en el Espéculo como unos oficiales que desempeñan su función judicial en el ámbito de la Corte y en el territorio donde cada uno de ellos es Adelantado<sup>(309)</sup>. También "por mandado del rey" pueden juzgar los "grandes fechos en corte del rey" o aquellos otros pleitos que corresponden ser juzgados por el rey personalmente tales como los "rieptos", pleitos entre ricos hombres sobre heredamientos, pleitos de términos etc.<sup>(310)</sup>, con lo que nos encontramos que, además de su condición de juez de apelación, conoce, aunque sea por delegación del Rey, pleitos en primera instancia - y entre ellos - los pleitos de hijosdalgos- por lo que no es aventurado suponer que se

---

(308) Espéculo 5, 14, 12.

(309) Espéculo 4, 2, 11: "Otrosi si alguno se agraviase del juyzio de los alcalles de casa del rey, e se alzare a estos adelantados que diximos, deven los ellos oyr e librar, siendo en la corte. E esto mismo dezimos que deven fazer en los pleitos que se alzaren a ellos de aquella tierra onde fueren adelantados, quier sean en la corte, quier en esta tierra misma".

(310) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11.

trate de personas de alto rango, nobles<sup>(311)</sup> para que puedan conocer las causas suscitadas entre los de su estado. Pero además la intensa actividad que de los Adelantados tenemos documentada como oficiales territoriales<sup>(312)</sup> hace que su actividad judicial en la Corte no sea todo lo frecuente que se pudiera desear, aunque si bien es verdad que el Es péculo, en previsión a estos casos, les faculta para nombrar lugartenientes en la Corte.<sup>(313)</sup>

La aparición de los Adelantados Mayores en Castilla al frente de las grandes circunscripciones territoriales del Reino viene a coincidir con la fecha que recientemente se ha atribuido al Espéculo<sup>(314)</sup> por lo que, en principio, no creo que haya objeción alguna en admitir que, en lo que respecta a los Adelantados Mayores, las disposiciones del Espéculo fueron puestas en la práctica por Alfonso X.

Mucho más conflictiva y problemática es la figura del Adelantado Mayor de la Corte<sup>(315)</sup>. Oficial totalmente distinto a los Adelantados Mayores de los territorios<sup>(316)</sup>, se encuentra, según dijimos, por encima

---

(311) Véase al respecto las listas de Adelantados Mayores publicadas por R. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474), Madrid, 1976.

(312) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno..., t. II, docs. 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19...

(313) Espéculo 4, 2, pr.: "Pero si estos adelantados mayores quisieren dexar otros en su logar, puedenlo fazer desta guisa, dandolos el rey, e otorgando gelo."

(314) Para el prof. GARCIA-GALLO el Espéculo puede datarse entre 1255-60 Vid. Nuevas observaciones... p. 623.

(315) Sobre ella trataremos más adelante a la hora de estudiar los Adelantados.

(316) Así se desprende de la lectura de Espéculo 5, 14, 14.



de los restantes oficiales de justicia del Reino, incluidos los Adelantados, Mayores de los territorios, por lo que puede revisarse en última instancia todas las sentencias de los jueces inferiores y su fallo, se equipara al del rey<sup>(317)</sup>. Actúa asesorado no colegiadamente, de "omes sabidores de fuero e de derecho, e entendudos, e de buen seso natural, e los trae sienpre"<sup>(318)</sup>.

El problema adquiere visos de insolubilidad desde el momento en que no nos han llegado mas noticias acerca de este alto óficial, que las recogidas en el Espéculo y, posteriormente en las Partidas<sup>(319)</sup>. A lo largo de todo el siglo XIII y XIV no hay un solo documento en que aparezca fallando el Adelantado Mayor de la Corte o, simplemente, confirmando algún privilegio. Este silencio de las fuentes documentales es el que ha llevado a poner en tela de juicio la existencia real de dicho Adelantado a algunos autores<sup>(320)</sup>, pero lo cierto es que en el estado actual de la investigación nada nos permite concluir en favor o en contra de la existencia real del Adelantado Mayor de la Corte. No obstante, no deja de llamar la atención que, si bien parece que el Espéculo fue llevado a la práctica por Alfonso X en algunos aspectos judiciales —————→

(317) Espéculo 5, 14, 12: "E por esto bien asi como non se puede ninguno alzar de los juyzios del rey segunt dixiemos en la ley ante desta, otrosi non se púdde alzar del juyzio del adelantado mayor de su corte, e maguer faga alzada, non vale, ca todo ome deve sospenhar que sus juyzios son derechos, e buenos e conplidos."

(318) Espéculo 5, 14, 12.

(319) Partidas 2, 9, 19 y 3, 22, 3.

(320) Mientras el prof. VILLAPALOS duda de su existencia (Los recursos... p. 254) PEREZ BUSTAMANTE lo identifica con los adelantados Mayores de los territorios (El gobierno pgs. 66-67) Por su parte TORRES SANZ considera que se trata de "una elaboración teórica que, como tal y salvo parcialmente, careció en absoluto de efectividad práctica" (La Administración central... pgs. 370-1)

(Adelantados Mayores de los territorios, alcaldes de Corte, etc.), no conozcamos ningún documento en el que se nombre o designe a alguien Adelantado Mayor de la Corte. Sin entrar ahora en el fondo de esta cuestión, que trataremos en su momento más detenidamente, lo que nos interesa destacar es si el Adelantado Mayor de la Corte pudo ser de algún modo antecedente de las alcaldías de las Alzadas.

Verdaderamente es difícil, ante los escasísimos datos que poseemos, brindar una solución concluyente. En primer lugar porque el oficio de Adelantado Mayor de la Corte que se recoge en el Espéculo es, desde mi punto de vista, distinto al "Sobrejuez" que recogen las Partidas; ambos tienen algunos puntos comunes, pero su realidad responde a dos momentos bien diferenciados. Mientras el Adelantado Mayor de la Corte que regula el Espéculo, con independencia ya de que se llegara a hacer efectiva su designación o nó, es un oficial "ordinario" integrado dentro de los cuadros de la Administración central de la Corte, el Sobrejuez de las Partidas está caracterizado precisamente por todo lo contrario, por la interinidad<sup>(321)</sup>, aparte de otros pequeños matices que en su momento veremos. Es decir, las Partidas, pese a su carácter doctrinal<sup>(322)</sup>, a la hora de describir la Administración de la Corte están tomando la realidad de ese momento en el que no existe un oficial permanente al que se le han encomendado exclusivamente la resolución de las Alzadas, sino que éstas son encomendadas por vías de comisión a cualquier otro oficial con lo que adquiere el carácter de "extraordinario". A este oficial le llaman las Partidas "Sobrejuez" por su superioridad con respecto a los restantes jueces. Esta superioridad y el que

(321) Partidas 2, 9, 19: "Alçanse los omes muchas vegadas, agrauiandose los juyzios que dan contra ellos los judgadores de la corte; e acaesce algunas veces, que los non puede el Rey oyr por si priessas que ha: e conviene que ponga otro en su lugar."

(322) GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... páhs. 651 y ss.

de su fallo no quepa alzada<sup>(323)</sup> es lo que hace que los redactores de las Partidas, que están manejando el Espéculo, vean en el Sobrejuez gran similitud con el Adelantado Mayor de la Corte que regula el Espéculo de ahí que digan que al Sobrejuez, "aun" es decir, "todavía" le llaman adelantado de la Corte, sin duda porque los redactores están recordando la vieja figura del Adelantado Mayor de la Corte que recogió el Espéculo.<sup>(324)</sup>

Creemos, por tanto, que la figura del Sobrejuez que se recoge en las Partidas no sirve de modelo para la configuración de los alcaldes - de las alzadas, sino más bien todo lo contrario. Es decir, los redactores de las Partidas están tomando como modelo a un alcalde al que se le encomienda la resolución de una alzada por el rey y, precisamente por esto, de su fallo no cabe apelación alguna, sino acudir por vía de merced al Rey; al construir doctrinalmente esta figura la denominan - "Sobrejuez", apelativo, por otra parte, que no aparece en ninguna fuente documental, aunque para una mayor comprensión especifican su gran similitud con el Adelantado Mayor de la Corte, término mucho más generalizado -recuérdese la existencia de Adelantados Mayores en los territorios- que el más técnico de "Sobrejuez". Puede servir de sustento a nuestra argumentación un hecho muy significativo. Cuando Alfonso XI en 1348 hace la promulgación oficial de las Partidas en las Cortes de Alcalá de Henares, aunque no trate de imponerlas, bien se podría pensar

---

(323) Partidas 3, 22, 3. No deja de llamar la atención que en este texto de Partidas no se habla, como en Partidas 2, 9, 19, de Sobrejuez, sino que sólo alude al Adelantado Mayor de la Corte.

(324) Partidas 2, 9, 19: "...E tal oficial como este, llamanle sobrejuez porque el ha de emendar los juyzios de los otros judgadores: e aun le llaman adelantado de la corte, porque el Rey lo adelanta poniendo el Rey en su lugar, para oyr las alçadas..."

que pondría en práctica el modelo de administración que se recoge en las Partidas y con él la figura del "Sobrejuez". Esto no es necesario. Al menos desde 1346<sup>(325)</sup> existen alcaldes de las alzadas en la Corte, por lo que es, a nuestro entender, totalmente innecesario nombrar un oficial que desempeñe las mismas competencias de otro oficial existente.

Los alcaldes de las alzadas, pues, nacen ante una necesidad muy concreta: la imposibilidad material, sea por el motivo que fuere<sup>(326)</sup>, por parte del Rey de administrar personalmente la justicia, en este caso - conocer las alzadas. Para ello, sin renunciar por completo a su potestad jurisdiccional, se rodea de todo un elenco de oficiales en su Corte en los que delega la facultad de conocer las apelaciones (Adelantados - Mayores de los territorios y Adelantado Mayor de la Corte), pero, desaparecidos éstos, acude por vía de comisión a sus alcaldes de la Corte quienes se encargan de librar cada caso concreto, pero con el tiempo acabarán por convertirse en el escalón más alto de la organización judicial de la Corte.

No obstante son muchos los interrogantes que se ciernen en torno a los alcaldes de las alzadas, pues si desde el punto de vista de sus competencias, parece que se hallan equiparados al Adelantado Mayor de la Corte, algunos textos -el Ordenamiento de Zamora de 1274 y el Ordenamiento de Alcalá<sup>(327)</sup> - los equiparan más a los Adelantados de los territorios. El estado actual de la investigación y datos que poseemos no nos

(325) Ordenamiento de Villa Real 1346, cap. I, publicado por R. GIBERT en A.H.D.E. 25 (1955) pgs. 703-729).

(326) Esta imposibilidad viene dada o bien por ausencia del monarca de la Corte, o por el abandono de administrar justicia personalmente, baste recordar las reiteradas peticiones de las Cortes en este sentido, o por la propia incapacidad técnica de desconocer el Derecho

permiten despejar todas las incógnitas con la certeza deseada, por ello necesariamente nos hemos visto obligados a dejar la cuestión planteada en muchos casos sin poder dar una solución definitiva. Cómo se ha producido entonces la aparición de las alcaldías de las alzadas?

Ya hemos hecho referencia en repetidas ocasiones a la reacción nobiliaria de 1272 que llevó al traste, al menos en parte, a la organización judicial que Alfonso X propugnaba en el Espéculo, y cómo la plasmación práctica de las pretensiones nobiliarias quedaron, al parecer reflejadas en el Ordenamiento zamorano de 1274. Allí queda trastocado, en parte, el sistema judicial instaurado en el Espéculo. Mientras Castilla sigue fiel, al menos aparentemente<sup>(328)</sup> al texto alfonsino, León, las Extremaduras, Toledo y Andalucía alteran ostensiblemente la organización judicial preexistente.

¿Qué ha ocurrido realmente? Por qué se mantienen los Adelantados en Castilla? Por qué se crean "ex novo" tres alcaldes para las alzadas de los restantes territorios? Ciertamente son muchos los interrogantes que se ciernen en torno a la cuestión.

En primer lugar porque apenas conocemos el alcance real que tuvo la reacción nobiliaria de 1272. La conocemos a través de los escasos datos que nos proporcionan la Crónica de Alfonso X y el

---

(326) /...de la tierra o el complicado Derecho Romano.

(327) Ordenamiento de Zamora 1274 (CLC.I, 19, y 29, p. 90) Ordenamiento de Alcalá.

(328) Decimos aparentemente porque, como tendremos ocasión de ver al ocuparnos de los Adelantados, no hemos encontrado documentalmente probada la existencia del Adelantado Mayor de Castilla que se recoge en las Cortes de Zamora.

prólogo del Fuero Viejo. En ella sólo se hace referencia a unas cuestiones muy concretas, efectivamente relacionadas con la administración de justicia<sup>(329)</sup> pero que, en definitiva, no nos despejan las incógnitas que nos suscita el Ordenamiento de Zamora, sino todo lo contrario, puesto que, precisamente, una de las pretensiones nobiliarias es que el Rey quite los Merinos y ponga Adelantados; entonces, Por qué no ha puesto Adelantados en León?. Pero dejando a un lado el tema concreto de los Adelantados, sobre el que más adelante volveremos, podemos seguir cuestionándonos otro tipo de problemas. Significa acaso, a la luz del texto de Zamora, que la reacción afectó solamente a uno de los reinos?. Se opusieron las ciudades leonesas a la pretensión nobiliaria de implantar un Adelantado? Se reaccionó solamente en León contra el sistema del Espéculo?.

Por otra parte, desgraciadamente no ha llegado a nosotros el cuaderno de peticiones de las Cortes de Zamora<sup>(330)</sup>, pues seguramente en ellas encontraríamos respuesta a muchos de nuestros interrogantes, por lo que no nos resta más alternativa que movernos en el terreno de las suposiciones.

---

(329) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.

(330) No se conserva el original de las Cortes de Zamora, ni siquiera en copia. El ordenamiento que publicó la Academia de la Historia dentro de las Cortes de León y Castilla como Cortes de Zamora de 1274 se trata, sin duda de una copia de un extracto del ordenamiento de las citadas Cortes hecho muerto ya Alfonso X como lo prueban el encabezamiento ("Sobre el consejo que el Rey demandó a los prelados e a los religiosos e a los ricos omes...") y algunos otros pasajes ("el rey non gelo de-mando"... "diables el rey") en los que se hace referencia al Rey en pretérito y en tercera persona. En su forma de presentación ningún documento de la Curia o Cortes se presenta con estas características formales. El rey aparece siempre hablando en primera persona y aquí no.

La reacción de 1272, aunque sólo hayan llegado a nosotros las quejas sobre unas cuestiones muy concretas, de hecho supuso un re\_vés a la política legislativa de Alfonso X y un triunfo, en definitiva de los derechos locales y privilegios señoriales<sup>(331)</sup>. Supuso también como ya vimos, la delimitación de aquellas causas en las que solamente se podía aplicar el Derecho de la Corte ("casos de corte"), es decir, el Espéculo, mientras que en las restantes prevalecían los derechos locales ("pleitos foreros"). Pero el que en Castilla se haya mantenido el mismo modelo de organización judicial que estaba en el Espéculo no quiere decir que este texto legal siga vigente en este Reino, dado que el Ordenamiento de 1274 se da para todos los reinos y, por tanto, la división entre "pleitos foreros" y "pleitos del Rey" es válida también para Castilla.<sup>(332)</sup>

Tal vez las concesiones que desde muy temprano Alfonso X ha venido haciendo del "Fuero del Libro" como derecho complementario del viejo Derecho castellano<sup>(333)</sup> haya facilitado la aceptación en este Reino del sistema judicial y, por el contrario, chocó más con la tradición jurídica del Derecho leonés y con los derechos evidentemente privilegiados de las Extremaduras y la Frontera.

---

(331) GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones..., p. 620 y ss.

(332) El ordenamiento zamorano al hacer mención expresa de los pleitos que se han de "librar por corte del Rey" no hace distinción para los reinos.

(333) GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... p. 621.

No podemos precisar si Alfonso X no accedió en el Reino de León a las pretensiones de los nobles de poner Adelantados o si, por el contrario, fueron las ciudades y villas leonesas las que no aceptaron un Adelantado. A primera vista parece contradictorio. Por un lado se reacciona contra un sistema judicial impuesto por el Rey, y cuando se le pide que lo restaure, éste no lo concede. Desde 1268 en León<sup>(334)</sup> y 1269 en Castilla<sup>(335)</sup> se han suprimido los Adelantados, que sepamos, por iniciativa del Rey; es, por tanto, perfectamente explicable, dada la alta condición social de los Adelantados -casi siempre nobles-, que estos pidan al Rey que quite los Merinos y ponga Adelantados<sup>(336)</sup>. Por ello nos inclinamos más a creer que el Rey, posiblemente apoyado por las ciudades y villas leonesas, no accediera a nombrar Adelantado en León y quedó de esta forma alterado el sistema judicial.<sup>(337)</sup>

La cuestión entonces se debatía en que los castellanos tenían una instancia judicial más, con lo que para ello se creó un tribunal colegiado "ex novo", que no tiene antecedente en la Corte, con competencia exclusiva para librar las alzadas.<sup>(338)</sup>

---

(334) T. GONZALEZ. Colección de privilegios de la Corona de Castilla t. VI, págs. 138-140. vid. también PEREZ BUSTAMANTE. El Gobierno... t. I, p. 69.

(335) R.A.H. Col. Salazar, 9-16, p. 521; igualmente ver PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. I, p. 69.

(336) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.

(337) Así queda expresa en el Ordenamiento de Zamora de 1274 en el que se hace una clara diferencia entre Castilla y el resto de los territorios de la Corona (CLC. I., 19, p. 90)

(338) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 19, p. 90).



Pero todavía nos queda pendiente otro interrogante que cuestiona remos antes de la creación en 1274 de las alcaldías de las alzadas. De saparecidos los Adelantados Mayores como hemos dicho en 1268 y 1269 Quienes libraban las alzadas? .

La escasa documentación que nos ha llegado del reinado de Alfonso X apenas nos permite vislumbrar la trayectoria y las vicisitudes a que estuvieron sometidas las estructuras judiciales de la Corte y de los territorios en estos años del siglo XIII. No podemos precisar si Alfonso X llegó a tomar alguna medida concreta para la resolución de las alzadas - una vez desaparecidos los Adelantados mayores de Castilla y de León. Tal vez se instauró algún tribunal colegiado que luego sirviera de modelo al recogido por las Cortes de Zamora, pero esta hipótesis parece poco probable. Nos inclinamos a pensar que este vacío institucional quedó suplido por la actuación por vía de comisión de los alcaldes de Corte quienes, como vimos, conocían en primera y segunda instancia determinados pleitos. No obstante nos queda la duda de que, indiscutiblemente al suprimirse los Adelantados se ha suprimido una instancia judicial, por lo que tampoco podemos desechar la hipótesis de que se haya nombrado uno o varios jueces para estos casos concretos; tal vez recayera sobre la enigmática figura del Adelantado Mayor de la Corte pero, no lo sabemos.

Por ello es ciertamente difícil intentar encontrar en la Corte un antecedente próximo del origen de los alcaldes de alzadas que se recogen en las Cortes de 1274. Pero si tenemos en cuenta que estos tres "omes buenos" han de ser "entendidos e sabidores delos fueros", en base a que tienen que conocer las alzadas de los "pleitos foreros", bien

puede pensarse que se haya tomado como ejemplo el famoso "Tribunal del Libro" de León, que había sido suprimido años antes por - el mismo Alfonso X, caracterizado por su actuación colegiada, - aunque, en el caso del "Tribunal del Libro" eran cuatro los jueces y no tres.<sup>(339)</sup>

La primera nota destacable de estos "tres omes buenos" en contraposición no sólo a los Adelantados, que como dijimos entendían de las alzadas hasta su supresión, sino también con respecto a los alcaldes de la Corte, es su colegialidad. Esta supone, en principio, una mayor garantía procedimental para las partes en cuanto que se requiere para la obtención del fallo la unanimidad de los alcaldes citados y si aquella no se consigue, se reunirán los alcaldes de alzadas con los restantes alcaldes, salvo aquél de quien procede la apelación, para dictaminar sobre el pleito.<sup>(340)</sup> Desde luego hemos de suponer que se reunían solamente los alcaldes de Corte de la región de donde procede el pleito y que, en caso de que se hayan tenido que reunir todos los alcaldes, el voto de la sentencia ya sería por mayoría y no por unanimidad.<sup>(341)</sup>

---

(339) Véase para la composición del Tribunal del Libro los trabajos citados en nota 352.

(340) "E si por aventura oviere y alguna alzada en que se non puedan avenir, que llamen y a los otros alcaldes de que non se alzaron que vean quales dizen lo mejor" (Cortes de Zamora 1274, CLC.I, 19, p. 90).

(341) La colegiación de estos alcaldes lleva a TORRES SANZ a expresarse en los siguientes términos: "Estas consideraciones sobre la naturaleza del juzgado creado por el Rey Sabio permiten, en nuestra opinión, afirmar que además de ser tribunal de alzadas, constituía un primer ensayo de lo que -

La otra nota característica viene dada por su competencia territorial que comprende León, las Extremaduras, Toledo y - Andalucía, también en contraposición a los alcaldes de la Corte, por lo que la competencia territorial de los alcaldes de las alzas se extiende a todos los territorios de la Corona, a excepción de Castilla. <sup>(342)</sup>

El Ordenamiento de Zamora no deja muy en claro la posibilidad de recurrir del fallo de los alcaldes de las alzas cuando se han constituido en tribunal, digamos "extraordinario", ya que sólo se recoge el caso de que el pleito no lo puedan librar ante la falta de acuerdo de todos los alcaldes, en cuyo caso tendrían que mostrar el pleito al Rey <sup>(343)</sup>. No obstante, aunque no se haya reco-

---

(341) /...acabaría siendo la Audiencia" (La administración central... p. 374) Forzosamente tenemos que discrepar con la postura de TORRES SANZ; sin entrar ahora en un análisis minucioso sobre la Audiencia, de la que nos ocupamos más adelante, sí en cambio podemos adelantar que ni por su origen, naturaleza ni competencias, no creemos que se pueda hacer un paralelo, ni siquiera remoto, entre los alcaldes de las alzas de 1274 (sin entrar ahora en el problema de su existencia real o no) y la Audiencia en base a la colegiación de ambos tribunales. La Audiencia nace ante otras necesidades: durante más de medio siglo libra en primera y única instancia, no en apelación; la Audiencia tiene competencia sobre todo el territorio de la Corona...

(342) "e esto tiene el Rey por bien que se enel regno de Leon e en las Extremaduras e en Toledo e en toda la Andaluzia" (Cortes de Zamora 1274, CLC. I, 20, p. 90).

(343) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 20, p. 90).

gido en el Ordenamiento, en virtud de la mayoría de justicia del Rey, hemos de dar por seguro que del fallo de los alcaldes de alzada, ya sea cuando intervienen ellos solamente o en reunión con los restantes alcaldes, cabe alzada para ante el Rey.

Una vez más, la escasísima documentación de los últimos años del reinado de Alfonso X no nos permite poder constatar si los alcaldes de las alzadas instaurados en las Cortes de Zamora llegaron a establecerse o si, por el contrario, quedaron reducidos a un proyecto que jamás se puso en práctica. Porque lo cierto es que en el reinado de Sancho IV ha sido alterado el esquema; al parecer ya no existe -si alguna vez existió- un tribunal colegiado de alcaldes para librar las alzadas de León, Extremadura, Toledo y Andalucía, sino que existe un alcalde de alzada para cada una de estas regiones <sup>(344)</sup>.

A qué se debe este cambio? Existió realmente el tribunal colegiado de Zamora? Forzosamente a la hora de plantearnos la problemática de los alcaldes de las alzadas hemos de tener siempre presente la figura del Adelantado mayor de los territorios, pues, como ya sabemos, a él competían las alzadas procedentes de las comarcas con lo que, aunque son dos instituciones bien distintas y en ningún momento equiparables, salvo que coinciden en esta función, a nuestro juicio, la presencia de unos viene, en algunos momentos, condicionando la existencia de los otros.

---

(344) Véase la sentencia de 15 de noviembre de 1291 en la que aparece un alcalde, Durant Sanchez, a quien el rey le manda "librar las alçadas de estremadura en mio logar" (MINGUELLA: Historia de la Diócesis de Sigüenza, ... doc. 383, pgs. 247-50) o la petición de las Cortes de Valladolid de 1293 en las que se le pide al Rey que no sea clérigo el que tuviera que librar "las alçadas de Castiella" (CLC, I, 20, p. 113).

Vimos también cómo en Zamora se ponía en el más alto escalón judicial, sólo por debajo del Rey, al Adelantado Mayor en el reino de Castilla, pero hé ahí lo curioso que no tenemos documentada la existencia de tal Adelantado en los años inmediatamente posteriores a las Cortes de Zamora por lo que nos hace suponer que, al menos en este punto concreto, el Ordenamiento no se cumplió.<sup>(345)</sup>

Tampoco nos han llegado sentencias en las que documentalmente podamos probar la existencia real del tribunal de alcaldes de alzadas que establecieron las Cortes zamoranas con lo que el interrogante acerca de la aplicabilidad de dicho Ordenamiento se hace aún mayor.

Cabe entonces preguntarnos, si no hay Adelantados desde 1268 en León<sup>(346)</sup> y 1269 en Castilla<sup>(347)</sup> hasta 1285-87 para desaparecer de nuevo hasta 1293<sup>(348)</sup>, si no ha llegado a realizarse la idea de los alcaldes de alzadas de Zamora quién conocía entonces las apelaciones de los alcaldes de la Corte?.

En nuestra opinión, no los hay. Me explico. Creemos - en todo este tiempo en el que no han sido nombrados Adelantados no ha habido en la Corte unos alcaldes que hayan desempe-

---

(345) De ello nos ocupamos al tratar de los Adelantados.

(346) Ver nota 334.

(347) Ver nota 335.

(348) Véase M. GAIBROIS: Sancho IV, doc.499 p.343 y PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 238.

ñado las competencias de aquellos en los que respecta al conocimiento de las alzadas de los Alcaldes de la Corte, es decir que no ha habido alcaldes con la exclusiva competencia de conocer las apelaciones, sino que éstas han sido resueltas por vía de comisión real por algún otro alcalde de la Corte. Y así encontramos una sentencia real de 1291 que es librada en alzada por "Durant Sanchez mio alcale -dice el Rey- a quien yo mande librar las alçadas de estremadura en mio lugar"<sup>(349)</sup> y tan sólo dos años más tarde, cuando los procuradores de Castilla se dirigen al Rey para que "clerigo non ouiesse de librar las alçadas de Castiella", el Rey contesta que "quando acaesçiere de librar algunan alçadas que nos ayamos de librar, acomendar lo emos a qui touieremos por bien"<sup>(350)</sup> Por ello se comprende también que en 1299, las Cortes reunidas en Valladolid le piden al Rey que les "diese quien oyese las alçadas" en su corte.<sup>(351)</sup>

A la vista de estos datos no podemos afirmar otra cosa que la inexistencia en la Corte de unos alcaldes exclusivamente destinados para conocer las apelaciones de los Alcaldes de Corte; a éstos, exceptuando lógicamente aquel alcalde del que se apela, por vía de comisión era encomendada por el Rey la facultad de conocer dichas apelaciones. Igualmente hemos de suponer que en aquellos años en los que se restauraba el oficio de Adelantado, competía a éste el libramiento de las susodichas alzadas.

---

(349) "alçosse para ante mi (el rey) e él (el alcalde de la Corte) diol la alçada. Et al plazo que puso a las partes paresçieron con ella ante durant sánchez mio alcale a quien yo mande librar las alçadas de estremadura en mio logar"

Es, por tanto, a finales del siglo XIII, exactamente en 1299, cuando parece que queda institucionalizada en la Corte como un oficial independiente de los otros alcaldes la figura del alcalde de las alzadas. No obstante, antes de proseguir con la evolución del mismo, creemos necesario hacer algunas precisiones acerca de una institución que tiene íntima relación con el problema de las apelaciones de las sentencias de la Corte del Rey. Nos estamos refiriendo al Tribunal del Libro.

Saldría del ámbito de nuestro trabajo el entrar a analizar el origen y actuación de este "Tribunal del Libro de León"<sup>(352)</sup>

---

(349) /...(MINGUELLA: Historia de la Diócesis de Sigüenza... doc. 383, pgs. 247-50).

(350) Cortes de Valladolid 1293 (CLC.I, 20, p. 113)

(351) Cortes de Valladolid 1299 (CLC.I, 14, p. 144).

(352) Hicieron referencia a este Tribunal del Libro M. RISCO: España Sagrada, Madrid 1786, t. 35, apend. 12, pgs. 434-49 y también en su Historia de la ciudad y corte de León Madrid 1792 (ed. facsimil Madrid 1978, pgs 143 y ss); - SANGRADOR: Historia de la Administración de justicia y del antiguo Gobierno del Principado de Asturias, Oviedo (ed. facsimil, Oviedo 1975, pgs. 120 y ss). Se ocupó igualmente de él C. SANCHEZ-ALBORNOZ: El "juicio del Libro" en León durante el siglo X en AHDE I (1924), pgs 382-90; Posteriormente han hecho referencia en sus manuales o obras de carácter general, A. GARCIA-GALLO: Curso de Historia del Derecho, p. 209, y en el "Fuero de León" en A.H.D.E. 39 (1969), págs. 136-8; BENEYTO: Historia de la Administración... pág. 189; L.G. DE VALDEAVELLAN: Curso de Historia de las Instituciones... p. 568; J. LALIN DE: Iniciación... p. 416; R. GIBERT: Historia general del Derecho Español... p. 22; y C. ESTEPA: La estructura social de la ciudad de León León 1977, pgs. 472 y ss.

pero sí nos interesa destacar el prestigio y la actividad que éste desarrolla hasta mediados del siglo XIII<sup>(353)</sup>. Posiblemente esta actividad y prestigio fueron precisamente los que llevaron a Alfonso X a la supresión de dicho Tribunal en fecha que desconocemos<sup>(354)</sup>. Sin duda, la existencia de un órgano judicial - ajeno a la jurisdicción real e, incluso, por encima de ella, - puesto que de los fallos de la Corte podía recurrirse a este - Tribunal, hicieron molesta para él su presencia por lo que - acabó siendo suprimido o, al menos, dejó de conocer las alzas procedentes de la Corte.

En principio, si el esquema judicial de las Cortes de Zamora se hubiese llevado a la práctica, se hacía ya totalmente innecesaria la apelación al "Liber", pero puestas en duda la existencia real de dichas alcaldías, es más difícil precisar lo que realmente ocurrió. De cualquier manera me inclino a - pensar que, al igual que para Castilla y Extremaduras, se daría comisión a algún alcalde de la Corte procedente de León para que conociera de las apelaciones.<sup>(355)</sup>

---

(353) Véase por ejemplo la apelación al libro hecha por el Cabildo de Santiago de la sentencia dada por Alfonso IX en 1223, citada en nota 305.

(354) M. RISCO: Historia de la ciudad y corte... p. 144 y - SANGRADOR: Historia de la Administración... 121.

(355) El ordenamiento dado a las peticiones de los concejos de León en las Cortes de Valladolid de 1293 no hace referencia alguna, como el ordenamiento a los concejos de Castilla, de ningún alcalde que libre las alzas, pero - nos inclinamos a pensar en la existencia de otro alcalde que libra las alzas para León por la referencia que encontramos en los cuadernos de cuentas de la Chancillería de Sancho IV en 1294; "Otrosi les mandan contar esto que aqui sera dicho: Las alzas de tierra de León et de Asturias que dió el Rey a Esteban Perez Merino, et por la - mengua de la Chancelleria del rey recibe por esta razon, mandaronles contar III mil mrds. (M. GAIBROIS: Sancho IV t. II, p. 36)



RISCO nos proporciona la noticia de que en 1282 el Tribunal está desarrollando su actividad<sup>(356)</sup>, pero sin duda Sancho IV es reacio, al igual que su padre, a admitir un Tribunal situado por encima del propio Rey, y las alzadas segúan siendo encomendadas a antiguos oficiales reales.<sup>(357)</sup>

Pero muerto Sancho, los concejos leoneses se apresuran a pedirle a tutores, en las primeras cortes del reinado de Fernando IV, "que las apelaciones de nuestra casa de los concejos de los rregnos de Leon e de Gallizia que uayan al Libro Judgo de León", porque así "se solie vsar en tienpo del Rey don Alfonso que vençeo la batalla de Merida et de don Fferrando su fijo"<sup>(358)</sup>. El Rey -los tutores- acceden y así vemos que esta misma disposición se inserta en sendos privilegios que se otorgan por esos mismos días de 1295.<sup>(359)</sup>

---

(356) M. RISCO: Historia de la ciudad y corte... p. 155.

(357) En la nota 355 hemos citado un documento en el que encontramos que el Rey ha concedido la facultad de conocer las alzadas de León y Asturias a Esteban Perez, Merino. Efectivamente, Esteban Perez desempeña el oficio de Merino Mayor de León y Asturias de 1287 a 1289 (Vid. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 235) pero el estado de cuentas de la Chancillería es de 1294, es decir, cinco años más tarde de haber desempeñado el oficio de Merino Mayor. Un año antes, en 1293, el oficio de Merino Mayor de León y Asturias lo está desempeñando Pedro Fernandez Cabeza de Vaca (M. GAIBROIS: Sancho IV, t. III. "doc. 499 p. 343") por lo que hemos de suponer que a Esteban Perez al que no sabemos por qué razón se le continúa titulando Merino, se le ha otorgado el oficio de Alcaldía de las alzadas de aquellas tierras en las que había desempeñado ya un oficio y de las que, sin duda, estaría más familiarizado con su Derecho. TORRES SANZ (La administración

Las fuentes apenas nos hacen más referencias a esta institución leonesa y aunque RISCO recoge toda una serie de casos -del siglo XIV- en los que se acude en apelación al Tribunal -del Libro<sup>(360)</sup>, éstos no son apelaciones procedentes de fallos dados en la Corte, sino que proceden de distintos concejos de la tierra de León.

Pero la restauración del privilegio de poder recurrir de los fallos de la Corte al "Libro Judgo", ciertamente fué efímera pues tan sólo cuatro años más tarde, los propios procuradores del reino de León son los que piden que se les dé alguien que oyese las alçadas en mi corte<sup>(361)</sup>. A qué se debe este cambio de parecer? No lo sabemos.

---

(357) /...central... p. 375) sostiene que en 1312 se nombra un alcalde de las alzadas mayores de la Corte para Castilla y Extremadura "sin duda porque las apelaciones leonesas tenían tradicionalmente un destino característico, el Tribunal o juicio del Libro". No podemos coincidir en este punto con el citado autor a la luz del texto de las Cortes de Valladolid de 1299 en el que claramente le están pidiendo al Rey que se dé un alcalde de alzadas para León (CLC.I,14,p.144) con lo que la tradicional apelación al Libro carecía de sentido.

(358) Cortes de Valladolid 1295 (CLC.O,1,p.131).

(359) BENAVIDES: Memorias... docs. 13 y 19, pgs. 23 y 36 respectivamente.

(360) M. RISCO: Historia de la ciudad y corte... p. 155.

(361) "Otrosi me pidieron que se diese quien oyese las alçadas en mi corte. A esto uos respondo, que lo tengo por bien, e uos dare para ello aquel ome que entendieren que sera para ello" (Cortes de Valladolid 1299, CLC.I,14,p.144).

De esta forma, creemos, quedarán institucionalizados los alcaldes de alzadas en la Corte, uno para León y otro para Castilla y Extremadura<sup>(362)</sup>, aunque no sabemos exactamente cuando se nombra el de estas regiones. No obstante estas alcaldías debieron de estar sometidas a diversas alternativas, pues en 1305 encontramos de nuevo al Rey comisionando a Juan Guillén "mio alcale a quien yo mande que la viese e librase (la alzada) en mio logar"<sup>(363)</sup> lo que nos hace suponer que quedarían suprimidas estas alcaldías. Por otro lado, las leyes del Estilo nos hacen referencia a un "oydor de las alzadas"<sup>(364)</sup> con lo que está denotando la existencia de un oficial especializado para el para el conocimiento de las alzadas; pero la fecha incierta de

---

(362) En un mandato de 1304 en el que Fernando IV prohíbe a Alfonso Muñoz o a cualquier otro fijodalgo que compren los heredamientos que el Monasterio de Oña tiene en Támara, y que penetren en los mismos perjudicando a sus vasallos, al final nos encontramos la siguiente rúbrica: "Yo Ferrnandes la ffeis escriuir por mandado de Ferrnan Ordonnes, alcale mayor de las alçadas de Castiella e de Estremadura en la Corte del Rey..." (A.H.N. Sección - Clero, carp. 307, num. 4. Inserto en la confirmación hecha por el mismo Fernando IV en julio de 1312).

(363) Véase la Real ejecutoria de Fernando IV sobre el pleito que sostenían el convento de Santo Domingo de Caleruega por un lado, y un vecino de Medina de Pomar por otro, con motivo de las rentas de las Salinas de Añana, Poza y Rono (F. MARTINEZ: Colección diplomática del Real convento de Santo Domingo de Caleruega, Vergara 1931, doc 63, pgs. 67-70).

(364) Leyes del estilo, 154: "... y el que se alzo en casa del Rey del juicio del alcale del Rey, que libró por alzada, y fuese vencido ante aquel que oyese las alzadas..." También la ley 22: "... e si se alzare del juicio del Alcalde que juzga en casa del Rey, debe parescer ante el Oydor de las alzadas al plazo cierto..."

los "estilos" no nos permiten inclinarnos en uno u otro sentido, aunque bien pudiera localizarse sobre estos años, dado que en 1311 nos encontramos un "alcalde mayor de las alzadas de nuestra corte"<sup>(365)</sup>. Por tanto, a nuestro parecer, en estos primeros años del siglo XIV se ha pasado de dos alcaides de alzadas (uno para León y otro para Castilla y Extremadura) a un sólo alcalde en el que no se distingue región de origen.

Tal vez por esta reducción es por lo que las cortes elevan a Rey la petición de que tenga "por bien auer vn alcalde delas alçadas mayores de mi corte en Castiella o en Estremadura, assi como lo ouieron siémpre los rreys onde yo uengo..."<sup>(366)</sup>

Fernando IV accede a la petición de los procuradores nombrando a Pero Lopez de Padiella "alcaides delas alçadas" pero no se especifica si lo es sólo para Castilla y Extremadura. El que en el resto del Ordenamiento no se haga referencia a un alcalde de alzadas para León, nos hace pensar que, aunque la petición haya partido de Castilla y Extremadura, el Rey, siguiendo la tradición de los años anteriores, haya nombrado sólo un alcalde con competencia para conocer todas las apelaciones sin distinción de regiones. En cualquiera de los casos

---

(365) Así parece signada al final de la declaración de nulidad del convenio y concordia que se hizo por Diego Lopez de Haro, Señor de Vizcaya, y su hijo, en favor del Infante don Juan y doña María su mujer, sobre el Señorío de Vizcaya, Orduña, Balmaseda y las Encartaciones: "... e otorgamosle por Señor de Vizcaya e por alcalde mayor de las alzadas de nuestra corte..." (BENAVIDES: Memorias... doc. 585, pgs. 777-79).

(366) Cortes de Valladolid 1312 (CLC.I, 78, p. 215).

no tenemos testimonios de los primeros difíciles años de la -  
 minoría de Alfonso XI que nos puedan esclarecer algún punto  
 en la evolución de la figura que nos ocupa. Hemos de esperar  
 a los últimos años del reinado, pacificado el reino en su aspec-  
 to interior y exterior, cuando Alfonso X se lance de lleno a -  
 las tareas reformistas.

Es precisamente en uno de estos Ordenamientos de fina-  
 les del reinado en donde encontramos de nuevo referencia a -  
 los alcaldes de las alzadas, dentro de esa reestructuración y  
 reorganización que Alfonso XI inicia en el Ordenamiento de -  
 Villareal<sup>(367)</sup>. Allí encontramos citados entre los oficiales de  
 justicia de la Corte a "los alcaldes de las alzadas", sin pre-  
 cisar nada más, por lo que lo primero que podemos pensar  
 es que hay más de uno<sup>(368)</sup>; en idénticos términos se expresan  
 igualmente las Cortes de Alcalá de Henares<sup>(369)</sup>. Una vez más  
 la falta de datos nos impiden enjuiciar de modo satisfactorio  
 la actuación de los citados alcaldes y su posible distribución  
 por regiones o reinos, pero en todo caso, no creemos que haya  
 habido una continuidad en la institución dado que en los restan-  
 tes ordenamientos de Cortes anteriores a 1346 en los que se -

---

(367) Vid. R. GIBERT: El Ordenamiento de Villa Real 1346 en  
 A.H.D.E. 25 (1955), pg. 703.

(368) Ordenamiento de Villareal. 1, ed. GIBERT.

(369) Ordenamiento de Alcalá, cap. XXVI, (CLC. I, p. 513)

regula la administración de justicia de la Corte no se hace ninguna mención al alcalde de las alzadas<sup>(370)</sup>, esto es lo que nos hace suponer que el oficio de alcaldía mayor de las alzadas se restableció en 1346 o en los años inmediatamente anteriores a esta fecha<sup>(371)</sup>.

Tan sólo nos queda la duda de si estas alcaldías mayores de las alzadas restauradas en estos últimos años del reinado de Alfonso XI fueron configuradas como alcaldías colegiadas o si, por el contrario, sus titulares actuaban unipersonalmente. Nos inclinamos a pensar, dada la finalidad de las mismas, que actuarían unipersonalmente en base a unos criterios territoriales que actualmente desconocemos.

Tenemos que poner de nuevo en duda la pervivencia de los alcaldes de alzadas en el reinado de Pedro I, fundamentalmente porque el único texto en que parece que pueda hacerse alusión a esta alcaldía, es, a mi modo de ver equivoco.<sup>(372)</sup>

---

(370) Así por ejemplo las Cortes de Carrión de 1317, las de Valladolid de 1322, Valladolid 1325, Madrid 1329.

(371) No coincidimos en este punto con TORRES SANZ (La administración central ..., p. 376) quien ve una continuidad de las alcaldías de las alzadas hasta mediados del siglo XIV, en que, según este autor, se clausura una etapa de la vida institucional del tribunal de alzadas ante la emergencia de la Audiencia.

(372) "Et el alcalde del rraastro que libre los pleytos que acaesçieren en la mi corte e otrossy que pueda oyr e librar los pleytos delas alçadas e delas cartas dela comarca onde fue re el alcalde" (Cortes de Valladolid 1351, CLC. II, 58, p. 34).

En base a este texto PEREZ DE LA CANAL<sup>(373)</sup> y más recientemente TORRES SANZ<sup>(374)</sup> mantienen la asignación del conocimiento de las alzadas de la corte al "alcalde del rastro" opinión, desde mi punto de vista, discutible.

En primer lugar, se deduce del texto del Ordenamiento, que el alcalde del rastro no es un oficial independiente de los restantes alcaldes al que se le haya asignado una competencias específicas, sino que más bien -y esto ya lo señala TORRES SANZ<sup>(375)</sup> - se trata de un alcalde de la Corte al que le ha sido asignada, además de sus competencias como tal, la facultad de conocer los pleitos del rastro, competencia, por otra parte, que venía siendo atribuída a los alcaldes de la Corte. Lo que ya no está tan claro en el texto es si a este alcalde se le ha atribuído además el conocimiento de todas las apelaciones que pudieran suscitarse a raíz de los fallos dados por los otros - alcaldes de Corte, o, si el texto se refiere a que, pese a conocer los pleitos del rastro, puede seguir conociendo las alzadas procedentes de la comarca de la que él es alcalde, es decir, que aunque conozca los pleitos del rastro no pierda su calidad de alcalde de la Corte.

Nos inclinamos más por esta última interpretación porque nos parece inimaginable, por mucha propensión que haya a reducir los cuadros de la oficialidad<sup>(376)</sup>, o que en un mismo

---

(373) La justicia en la corte... p. 420.

(374) La administración central... p. 376.

(375) La administración central... p. 377.

(376) Como afirma TORRES SANZ: La administración central... p. 376.

oficial recaiga el conocimiento de tres instancias totalmente distintas, máxime si se tiene en cuenta que del fallo del alcalde del rastro podía caber apelación ante el alcalde de las alzadas con lo que el mismo juez revisaría su propio fallo en distintas instancias con lo que, de esta forma, se atentaba inexorablemente contra los principios más elementales de seguridad jurídica. Todo ello nos obliga a pensar, en contra de la opinión de PEREZ DE LA CANAL Y TORRES SANZ, que las alcaldías de las alzadas quedaron suprimidas como oficios independientes como aparecen claramente en los ordenamientos de Villa Real y Alcalá; en todo caso, se acudiría a la vía de la comisión para resolver cualquier litigio que, en un momento dado, se hubiera suscitado.

Han de pasar veinte años hasta que volvamos a tener noticias de los alcaldes de las alzadas. Efectivamente, en las célebres Cortes de Toro de 1371, de tanta importancia para la administración de justicia, Enrique II dá nueva vida a esta alcaldía <sup>(377)</sup>.

---

(377) "Otrosi que aya en la nuestra corte vn alcalle delos fijos dalgo e otro delas alçadas, et el delas alçadas que sirua el ofiçio por si mesmo" (Cortes de Toro 1371, - CLC.II,2,p.191). Además, las Cortes de Toro de 1369 en las que también se remodelan algunos aspectos de la justicia de la corte, no hacen ninguna mención al alcalde de las alzadas por lo que nos lleva a pensar que en 1371 se ha producido una restauración de esta alcaldía.



Aparece ahora configurada como una alcaldía independiente de las restantes y, desde luego, unipersonal. Tenemos que discrepar de TORRES SANZ<sup>(378)</sup> cuando sostiene que con los - Trastámara el alcalde de las alzadas quedó reducido "a ser un escalón más en la vía de los recursos judiciales ante la regulación precisa de la Audiencia como verdadero tribunal supremo y colegiado". La Audiencia, como tendremos ocasión de ver, es un tribunal que durante muchos años libra en primera y única instancia una serie de pleitos muy concretos en función de la naturaleza de los mismos por lo que, pese a la indudable importancia de aquélla, no es en estos momentos la cúspide de la pirámide de la organización judicial, ésta es - ocupada por el alcalde de las alzadas<sup>(379)</sup>. Tendremos que esperar al reinado de Juan I para que éste, en la nueva reestructuración que realice de la administración de justicia, faculte a la Audiencia a conocer en grado de suplicación la sentencia confirmatoria del alcalde de las alzadas.<sup>(380)</sup>

---

(378) La administración central... p. 377.

(379) En Toro se prohíbe que haya un juez apartado para - las suplicaciones de modo permanente en la Corte, sólo cuando se produzca ésta, el Rey dará un juez para ese caso concreto (CLC.II,2,p.191). La vida judicial queda agotada con el fallo del alcalde de las alzadas, aunque se pueda acudir a la vía de merced de la sentencia del citado alcalde.

(380) Cortes de Briviesca 1387 (CLC.II,18,pgs. 384-5).

Tres años más tarde, en el importantísimo ordenamiento de Segovia, encontramos nombrado a Gomez Ferrandez de Toro como "alcalde delas alçadas", con lo que, sin duda, podemos afirmar la continuidad de la institución<sup>(381)</sup>. Pero a partir de esta fecha no hemos vuelto a encontrar referencia alguna a la citada institución en ningún otro texto.<sup>(382)</sup> A qué se ha debido esta desaparición? Ciertamente es difícil de explicar.

---

(381) Cortes de Segovia 1390. (CLC. II, 2, 3, pgs. 272-4).

(382) TORRES SANZ (La administración central... p. 377) - mantiene que la alcaldía de las alzadas "se mantendría invariable durante toda la Baja Edad Media". Sustenta esta afirmación en tres textos (nota 63, p. 463): las Cortes de Toro de 1371, las Ordenanzas Reales de Castilla, 2, 4, 31 y, finalmente, otro de las Cortes sobre el Real de Olmedo de 1445. A mi modo de ver esta afirmación merece alguna puntualización. Admito el texto de Toro de 1371, pues, como vimos, en este ordenamiento Enrique II restaura la figura del alcalde de las alzadas como oficial ordinario dentro del cuadro administrativo de la Chancillería. El texto de las ORC me parece ya más problemático. Las ORC 2, 4, 31 están recogiendo la ley de las Cortes de Segovia de 1390 (CLC. II, 2, p. 272-3), que por cierto MONTALVO atribuye erróneamente a las Cortes de Guadalupe de ese mismo año, con lo que nos pone en la encrucijada de o bien admitir la vigencia de dicha ley en 1484 con el correspondiente reconocimiento de la existencia de dicho oficial en esa fecha, o bien admitir dicha ley como una de las leyes que recopiló MONTALVO sin estar en vigencia. Desde luego el silencio que guardan las fuentes legales y documentales acerca del alcalde de las alzadas durante el siglo XV nos hacen pensar en la última posibilidad. Sólo un texto, el tercero que cita TORRES SANZ, parece que puede referirse al alcalde mayor de las alzadas, cuando al Rey titula a Pero Diaz de Toledo como "mi alcalde mayor de las alçadas e mi oydor e rrefrendario e alcalde mayor del dicho Principe mi hijo" (CLC. III, p. 456). Sigo creyendo que a lo largo de todo un siglo

En primer lugar no hemos encontrado datos de este alcalde en el reinado de Enrique III aunque esto no es óbice, claro está, para no admitir su existencia; pero ya es mucho más chocante en Juan II en la reorganización de la justicia de la Corte que lleva a cabo en las Cortes de Madrid de 1419, silencie esta alcaldia.

A nuestro juicio, dos han sido los motivos que han podido influir en la crisis del alcalde de las alzadas. El primero bien pudo ser la lamentable situación por la que atravesó la justicia de la Corte en el reinado de Enrique III a la que ya nos hemos referido. La segunda, por el auge y prestigio, cada vez mayor, que está adquiriendo la Audiencia desde finales del siglo XIV que lo llevará a convertirla en la "llave de la justicia çevil de todos mis rregnos"<sup>(383)</sup> y, por tanto, conociendo de todas las apelaciones de los jueces inferiores en materia civil, mientras que, como ya vimos, en materia criminal surge, como máximo tribunal, la Audiencia de la cárcel.

---

(382) /...es ciertamente muy poco un dato para afirmar la continuidad de la institución, máxime si tenemos en cuenta la gran cantidad de documentos que del siglo XV nos han llegado referentes a la administración de justicia. Fué restaurada momentáneamente esta alcaldía? No lo sabemos, pero en último caso aquella habría desaparecido en 1485 con las Ordenanzas de la Audiencia en las que se silencia significativamente su existencia.

(383) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 11-2).

### COMPETENCIAS

Pese a las alternativas y vicisitudes a las que estuvieron sometidos los alcades de las alzadas no resulta difícil delimitar sus competencias y atribuciones.

En principio se trata de unos alcaldes que tienen como única y exclusiva competencia el conocimiento de las apelaciones que susciten los fallos de los otros alcaldes de la Corte del Rey. Como tales se hallan situados por encima del resto de los oficiales judiciales de la Corte inmediatamente por debajo del Rey. Así nos los describe el discutido Ordenamiento de Zamora<sup>(384)</sup>, pero dejando ahora aparte el problema de la aplicabilidad o inaplicabilidad real del citado Ordenamiento, la realidad es que ya sea por comisión en algunos casos, ya sea porque se ha designado un oficial concreto para esta finalidad, encontramos desde finales del siglo XIII hasta finales del siglo XIV un alcalde al que se le encomienda revisar los fallos de los restantes jueces de la Corte sin que, en principio, se haga una distinción entre las causas civiles y las criminales<sup>(385)</sup>. En todo caso, y tan sólo en una primera etapa, a la única limitación a la que están sometidos es aquella que viene dada por la respectiva competencia territorial de cada uno de los alcaldes de la alzada, habiendo, como ya tuvimos ocasión de ver,

---

(384) Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 19, p. 90).

(385) No hemos encontrado ningún texto en el que se pueda hacer una distinción, sino que, por el contrario, siempre son de competencias muy generales. Véanse: Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 19, p. 90); el documento citado en nota 344; Cortes de Valladolid 1293 (CLC.I, 20, p. 113); el documento citado en nota 355; Cortes de Valladolid 1299 (CLC.I, 14, p. 144); documento de la nota 362; Cortes de Toro 1371 (CLC.II, 2, p. 191).

un alcalde para las apelaciones de Castilla y Extremadura y otro para el Reino de León.

Esta distinción, probada documentalmente <sup>(386)</sup>, está en contradicción con la distribución territorial que propugnaba para las alzadas el Ordenamiento de 1274 que, como se recordará, reunía dentro de una amplia circunscripción sobre la que tenían competencia los "tres omes bonos" nada menos que más de las tres cuartas partes de la Corona, es decir, León, Extremadura, Toledo y Andalucía. Nos es muy difícil llegar a encontrar una respuesta satisfactoria y convincente para explicar tal cambio; en un primer momento las Extremaduras se agrupan con León y a finales del siglo XIII aparecen o bien juntamente con Castilla <sup>(387)</sup> o de modo independiente <sup>(388)</sup>. Razones de economía por una parte, y el escaso número de sentencias que llegaran verdaderamente a agotar la vía judicial, hicieron, quizás, que los reyes fueran más propicios al nombramiento de un sólo alcalde comisionado para el asunto concreto, o, en un segundo momento, dos alcaldes con muy amplias circunscripciones territoriales. Finalmente triunfa la idea de un sólo alcalde para -

---

(386) Cortes de Valladolid 1293 (CLC.I, 20, p.113); M. GAIBROIS: Sancho IV, t. II, p. 36; Cortes de Valladolid 1200 (CLC. I, 14, p.144); A.H.N. Sec. Clero. Carp. 307, núm. 4.

(387) A.H.N. Sec. Clero, Carp. 307, núm. 4.

(388) MINGUELLA: Historia de la Diócesis... doc. 383, pgs. 247-250).

todo el ámbito territorial de la Corona<sup>(389)</sup>.

Hemos de suponer, aunque las fuentes no hagan mención expresa, que para los alcaldes de las alzadas regía el mismo estatuto jurídico común a los restantes alcaldes de la Corte en lo concerniente a obligaciones, derechos, salario, quitación, etc., y hasta que desaparecen, los encontramos encuadrados dentro del conjunto de oficiales que sirven asiduamente en la Chancillería<sup>(390)</sup>.

---

(389) Así aparece en las Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 191) y en Segovia 1390 (CLC. II, 2, p. 272-3).

(390) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 191) y Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 2, p. 272-4).

## 2. El Adelantado Mayor de la Corte

Hasta ahora, a lo largo del presente trabajo, hemos hecho referencia en varias ocasiones al Adelantado Mayor de la Corte, por ello, y como oficial que desempeñaba su actuación dentro - del ámbito de la Corte - como indica su propio nombre para di- ferenciarlo de otros adelantados que actúan en los territorios-, consideramos necesario detenernos en el estudio de esta enigmá- tica figura.

Es curioso cómo la mayoría de los autores del siglo XIX que se han ocupado de aspectos institucionales han ignorado la figura del Adelantado Mayor de la Corte<sup>(391)</sup>. Más recientemente en obras generales dedicadas al estudio de las instituciones co- mo las de BENEYTO<sup>(392)</sup> y G. DE VALDEAVELLANO<sup>(393)</sup> al ocupar- se de la administración de Justicia hacen mención al Adelanta- do Mayor de la Corte. Igualmente son varios los manuales de Historia del Derecho en los que se apunta la existencia de este alto oficial de la Corte<sup>(394)</sup> hasta que la historiografía más moder- na ha prestado más atención al estudio de esta conflictiva - -

---

(391) Así, por ejemplo, ni MARTINEZ MARINA, pese a su gran conocimiento de las fuentes, ni COS GAYON, ni COLMENEI- RO hacen referencia al Adelantado Mayor de la Corte. So- lamente DANVILA (El poder civil... p. 186) y SANGRADOR (Historia de la Administración de justicia... p. 78) recogen el dato de su existencia.

(392) Historia de la Administración española... p. 240.

(393) Curso de Historia de la Instituciones... pgs. 494 y 562.

(394) S. MINGUIJON: Historia del Derecho... cuaderno 11, pág. 240; W. LALINDE: Iniciación... p. 417.

institución<sup>(395)</sup>.

El primer texto legal en que encontramos la figura del Adelantado Mayor de la Corte es en el Espéculo, pero sabemos por otras fuentes, anteriores al código alfonsino, que en la Corte existían ya unos oficiales a los que se les denominaba "adelantados" con funciones específicas de juzgar como nos muestra el Libro de los Fueros de Castilla.<sup>(396)</sup>

Era alguno de estos adelantados el Adelantado Mayor de la Corte?. No lo sabemos ni podemos precisar, ante el estado actual de la investigación, hasta qué punto pueden ser identificados esos adelantados de los que nos ha dejado noticia el Libro de los Fueros de Castilla y los adelantados que Alfonso X ha regulado en el Espéculo. Sólo sabemos con certeza que, tanto los unos como los otros, tienen específicas funciones de administración de Justicia, por ello nos inclinamos a pensar que los Adelantados Mayores que se recogen en el Espéculo fueron tomados de estos adelantados preexistentes a dicha fuente, aunque sea ciertamente difícil llegar a conocer si son una fiel plasmación o si, por el contrario, Alfonso X configuró de alguna manera el oficio de Adelantado que se recoge en el Espéculo.

---

(395) PEREZ BUSTAMANTE: El gobierno y la administración territorial... p. 66 y ss.; y D. TORRES SANZ: La administración central... p. 367 y ss.

(396) "Et fue a casa del Rey, e mostrado a don Diago que era adelantado del Rey, e a los otros adelantados que eran en casa del Rey, et julgaron... (Libro de los Fueros de Castilla, 3)



Los juicios que ha merecido el Adelantado Mayor de la Corte han sido muy variados y por ello hemos creído necesario detenernos a valorar detenidamente estas opiniones.

La mayoría de los autores que han hecho referencia al Adelantado Mayor de la Corte o que han tratado alguno de los aspectos concretos de los Adelantados, no han entrado a cuestionarse ni a valorar la figura del Adelantado Mayor de la Corte<sup>(397)</sup>, a lo sumo, como en el caso del profesor G. VILLAPALOS, quien tras sostener que la redacción del Espéculo es "enormemente confusa"<sup>(398)</sup>, pone seriamente en dudas la existencia de tal Adelantado que, en todo caso, "debió ser muy efímera"<sup>(399)</sup>.

PEREZ-BUSTAMANTE ha sido el primero que ha abordado de plano la compleja problemática que se cierne en torno a los Adelantados Mayores. Para este autor, los Adelantados Mayores que se recogen en el Espéculo 4,2, pr. y 4,2,11 son exactamente los mismos que el que se recoge en el Espéculo 5,14,12<sup>(400)</sup>. No obstante, desde nuestro punto de vista, creemos que cabe otra interpretación de los textos.

---

(397) Además de los trabajos citados en notas 392, 393 y 395 podemos citar los del profesor J. CERDA: Adelantados Mayores y el Concejo de Murcia en Primera semana de estudios Murcianos, Murcia 1961, pgs. 189-225 y Notas para un estudio sobre los Adelantados Mayores en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1970, pgs. 183-221 el trabajo del profesor PEREZ PRENDES: "Facer justicia..." y el de PEREZ DE LA CAÑAL: La justicia en la Corte... ya citados ambos.

(398) Los recursos... p. 254.

(399) Los recursos... p. 254.

(400) El gobierno... p. 66 y ss.

En primer lugar PEREZ-BUSTAMANTE sostiene que los Adelantados que se recogen en Espéculo 4,2 pr. y 4,2,11 "quedan presentados en las leyes que le contemplan como el órgano judicial permanente de la Corte"<sup>(401)</sup>, por lo que se trata de "un oficio de la Administración Central, creado para desempeñar la función judicial propiamente dicha"<sup>(402)</sup>. Nosotros en cambio, no vemos tan claramente esa "permanencia en la Corte". El Adelantado Mayor que regulan los textos citados del Espéculo es un oficial que desempeña sus funciones de administrar justicia indistintamente en la Corte o en los territorios de los que es Adelantado. Estos Adelantados sólo oirán en apelación las sentencias procedentes de los alcaldes de la Corte "seyendo ellos mismos y en la corte"<sup>(403)</sup>, porque es que estos Adelantados Mayores también conocen en apelación los fallos de los jueces de la tierra donde son Adelantados "quier sean en la corte, quier en esta tierra misma"<sup>(404)</sup>.

Este pequeño matiz, pero, en definitiva, característico del Adelantado Mayor de los territorios, al ser pasado por alto por PEREZ-BUSTAMANTE, hace que este autor piense en la permanencia de los dichos Adelantados en la Corte y, por ello, los identifica con el Adelantado Mayor de la Corte que -

---

(401) El gobierno... p. 66

(402) El gobierno... p. 66.

(403) Espéculo 4,2, pr. En sentido parecido se expresa Espéculo 4,2,11: "Otrosi si alguno se agraviare del juyzio de los alcalles de casa del rey, e se alzare a estos adelantados que dixiemos, deven los ellos oyr e librar, siendo en la corte".

(404) Espéculo, 4,2,11,

regula el Espéculo 5,14,12.<sup>(405)</sup>

TORRES-SANZ, en su tesis doctoral ya tantas veces citada, se plantea también el problema del Adelantado Mayor y -  
traza una línea evolutiva que el mismo califica de "confusa " y "que acaso no pasó del nivel teórico"<sup>(406)</sup>

Para este autor, la evolución de los Adelantados mayores viene representada por dos momentos bien definidos por el Espéculo y por las Partidas respectivamente, habiendo entre ambos las Leyes de los Adelantados Mayores que, para TORRES SANZ, no son otra cosa que un "intento oficioso de matizar y desarrollar el Espéculo".

TORRES SANZ, al contrario que PEREZ BUSTAMANTE, interpreta los citados textos del Espéculo captando el doble -  
ámbito de actuación de los Adelantados Mayores de la tierra ya sea en la Corte, ya sea en el territorio del que está al -  
frente, pero se inclina por creer que el Espéculo sólo se trató de un "proyecto" en virtud del cual se institufan los mencio-  
nados Adelantados, por ello se inclina a pensar que los Adelantados ocuparon principalmente un oficio territorial ante la dificultad de desempeñar un oficio con niveles, ámbitos y -

---

(405) PEREZ-BUSTAMANTE reitera esta misma idea al mantener que el Adelantado Mayor que se recoge en las Cortes de Zamora de 1274 es el Adelantado Mayor de la Corte -  
(El Gobierno... p. 77)

(406) Así se les denomina también en Espéculo 4,2,13.

ubicaciones dobles, y "también por la palmaria incongruencia en que significativamente el citado texto legal incurre más adelante al mencionar sin lugar a dudas a un Adelantado Mayor de la Corte único (frente a la pluralidad de los anteriores) y superior (a él se pueden alzar de las sentencias territoriales, lo que no puede interpretarse sino como una corrección posterior y teórica del oficio (de los oficios más bien) esbozados en los títulos II y IV del Espéculo"<sup>(407)</sup>.

Para TORRES SANZ las Partidas "empalman" sin forzamiento alguno con ese singular Adelantado Mayor de la Corte recogido en el Espéculo y ofrecen una solución bien distinta al diseñar un oficio único, al que también le llaman "Sobrejuez", punto culminante de la organización judicial. Oficial, por otra parte, diferenciado de los Adelantados territoriales que aparecen bosquejados por "trazos más humildes" pues ya no constituyen la cumbre de la organización judicial, ni son jueces de rieptos.

TORRES SANZ continúa diciendo que "la consideración minuciosa de esta figura, tal como aparece delineada en los textos legales, permite observar su dispersión caracterológica, coetánea o posterior, en varios oficios judiciales mucho menos pretensiosos en su configuración real"<sup>(408)</sup>, para acabar concluyendo

---

(407) La Administración central... pgs. 365 y ss.

(408) La Administración central... pgs. 365-7.

que "este diseño obtenido a partir de la construcción que de la figura del Adelantado Mayor de la Corte hacen los citados monumentos jurídicos, no es otra cosa que una elaboración teórica que, como tal y salvo parcialmente, careció en absoluto de efectividad práctica; es decir, como sostiene Villapalos, este oficio según queda perfilado en muchos textos no existió nunca, aunque es preciso reconocer que las citadas disposiciones de las Partidas y su realidad judicial contemporánea se aproximan bastante a este tema".<sup>(409)</sup>

Antes de seguir adelante creemos necesario hacer algunas puntualizaciones a las posturas que hasta ahora hemos venido exponiendo.

En primer lugar, y sin entrar ahora más en el tema de los Adelantados Mayores de la tierra, sobre los que volveremos más adelante, el principal problema que se le presenta a TORRES SANZ es que no encaja la figura del Adelantado Mayor de la Corte que regula el Espéculo y por ello ha de salir al paso interpretándolo como una corrección posterior y teórica de los Adelantados territoriales.

Este argumento, a mi modo de ver, es insostenible dado que es verdaderamente impensable que en un cuerpo legal de la categoría y perfección del Espéculo, sus redactores corrigieran una figura al final del texto sin tener en cuenta lo dispuesto en el libro II, máxime cuando el mismo cuerpo -

---

(409) La Administración central... p. 368.

legal en una misma ley -y ésta la cita TORRES SANZ- hace referencia a los Adelantados Mayores de la tierra y al Adelantado Mayor de la Corte.<sup>(410)</sup>

Por otra parte, el citado autor, para caracterizar la figura del Adelantado Mayor abstrae unas características del Espéculo, de las Leyes de los Adelantados Mayores y de las Partidas<sup>(411)</sup>, sin tener en cuenta la valoración de cada una de estas fuentes que corresponden claramente a momentos y finalidades distintas de las que no podemos prescindir, ya que sin esto es difícilmente comprensible la evolución del sistema judicial castellano.

Además si nos ponemos a analizar los textos referentes al Adelantado Mayor de la Corte vemos cómo algunas de las características que atribuye TORRES SANZ a los Adelantados mencionados no las encontramos. Efectivamente, si ~~hemos~~ detenidamente las leyes que hacen referencia al Adelantado Mayor de la Corte tanto en el Espéculo como en las Partidas, este oficial lo encontramos situado a la misma altura que el Rey en la pirámide judicial, ocupando el más alto escalón en la misma, y así cualquier particular se puede alzar indistintamente para ante el Rey o para ante el Adelantado Mayor de la Corte.<sup>(412)</sup> Lo que yo no veo tan claro es que el Adelantado

---

(410) La Administración Central... pgs. 370-1

(411) Espéculo 5,14,14.

(412) La Administración central... pg. 368

Mayor de la Corte actúe en representación del monarca y resuelva en primera y única instancia las contiendas trascendentes en consideración a las partes y a la materia<sup>(413)</sup> como pretende TORRES SANZ, pues tanto en el Espéculo<sup>(414)</sup> como en las Partidas<sup>(415)</sup> la única competencia que aparece atribuida al citado Adelantado es la de conocer pleitos en alzada. Es decir, TORRES SANZ identifica funcionalmente al Adelantado Mayor de la Corte con los Adelantados mayores de la tierra que estos sí pueden conocer en primera instancia aquellos pleitos "granados" y "grandes fechos de la corte" por mandado del Rey<sup>(416)</sup>.

Tampoco coincide con TORRES SANZ cuando afirma que el Adelantado Mayor de la Corte es un tribunal de las apelaciones de los alcaldes de la Corte" ("engarce funcional directo e inmediato") equiparándolo en su cometido al alcalde de las alzadas -que, por cierto, no recoge el Espéculo-, puesto que cuando el citado cuerpo hace referencia a los "Mayores"<sup>(417)</sup> por éstos sólo se puede entender los Adelantados Mayores de la tierra pues como recoge el propio cuerpo legal<sup>(418)</sup>, éstos entienden de las apelaciones procedentes de las sentencias dictadas por los alcaldes de Corte cuando están en ella, y si no, están

---

(413) Espéculo 5,14,14

(414) La Administración Central... pgs. 368-9

(415) Espéculo 5,14,14.

(416) Partidas 2,9,19.

(417) Espéculo 4,2, pr. y 4,2,11.

(418) Espéculo 5,14,14.

facultados para dejar en la Corte un lugarteniente que juzgará en su lugar<sup>(419)</sup>.

No veo tampoco que al Adelantado Mayor de la Corte pueda considerársele como un precedente de la Audiencia<sup>(420)</sup>, ya que este tribunal, como veremos más adelante, tiene una naturaleza jurídica bien distinta y, precisamente, en su origen la Audiencia no es un tribunal de alzada, sino de primera instancia y de sus fallos no cabe suplicación ante el juez de las suplicaciones. La Audiencia, por otra parte, se caracterizará por la colegialidad a la hora de tomar sus decisiones, en cambio el Adelantado Mayor de la Corte aparece como tribunal unipersonal, con independencia de que lleve "consigo omes sabidores de fuero e de derecho, e entendudos, e de buen seso natural, e los trae siempre"<sup>(421)</sup>. El que vaya acompañado de técnicos para asesorarle no es excluyente de la unipersonalidad, máxime cuando, seguramente, este oficio sería ocupado por algún hombre de gran linaje -como así recogerán luego las Partidas- con lo que es muy probable que no fuera técnico en Derecho y de ahí que requiera el asesoramiento.

A la vista de estos datos y opiniones, creemos que han sido fundamentalmente dos las causas que han llevado a planteamientos, desde mi punto de vista, erróneos tanto del Adelantado Mayor de la Corte como de los Adelantados Mayores de la tierra.

---

(419) Espéculo 4,2, pr. y 4,2,11.

(420) Espéculo 4,2,pr.

(421) La Administración central... p. 369.



En primer lugar el tratamiento unitario que se le ha venido dando a los diferentes cuerpos legales (Espéculo, Leyes de los Adelantados Mayores y Partidas) sin distinguir diferentes etapas y sin atender a una posible evolución de la institución dentro de los propios textos legales con lo que se puede incurrir en confusiones que, después, son difícilmente explicables. Y en segundo lugar, una creciente tendencia a generalizar sin tener en cuenta los distintos estadios de la evolución que sufre una institución a través del período estudiado.

Intentaremos, pues, ahora caracterizar la figura del Adelantado Mayor de la Corte y encuadrarlo dentro del sistema judicial bajomedieval castellano que estudiamos.

En nuestra opinión, el Espéculo recoge tres tipos de Adelantados bien diferenciados:

-Unos Adelantados Mayores" que, como acabamos de ver desempeñan sus funciones judiciales indistintamente en la corte y en la tierra donde son Adelantados a los que hacen referencia la Ley 11, tit. II, lib. IV y el proemio del mismo título y libro.

-Unos "Adelantados menores" o "adelantados de las merindades"<sup>(422)</sup>, "que an de judgar las merindades o otras tierras como señala el lib. IV, tit. II, pr.

---

(422) Espéculo 5, 14, 12 y Partidas 3, 23, 17.

-Un Adelantado Mayor de la Corte al que se hace alusión en Espéculo 5,14,12 y 5,14,14.

Son varios los argumentos que nos hacen pensar en el Adelantado Mayor de la Corte como un oficial totalmente distinto a los restantes Adelantados.

En primer lugar, cuando el Espéculo hace referencia a los Adelantados Mayores (de los territorios) siempre lo hace en plural, dando a entender de que existen varios, y sin especificar el número. Por los textos se deduce igualmente que se les ha encomendado una "tierra" sobre la que ejercen la máxima jurisdicción. En cambio, el Adelantado Mayor de la Corte aparece siempre en singular y sin ningún territorio encomendado, más bien todo lo contrario, su función se ejerce exclusivamente en la Corte.

En las leyes del Espéculo en las que se hace referencia a las competencias de los Adelantados Mayores, no se especifica si de sus sentencias es posible recurrir con una nueva alzada, por lo que hemos de entender que salvo que se haya agotado la vía por tres apelaciones sucesivas, es posible recurrir del fallo de los Adelantados Mayores de los territorios. En contraposición, como regula Espéculo 5,14,12 del fallo del Adelantado Mayor de la Corte sólo cabe pedir "merced" al Rey.

Mientras que de los Adelantados Mayores el Espéculo no nos hace ninguna referencia al modo en que han de administrar la justicia, del Adelantado Mayor de la Corte nos ha dejado -

noticias de que llevaba consigo hombres "sabidores de fuero e de derecho" y que "los trae sienpre"<sup>(423)</sup>.

Finalmente es el texto del Espéculo 5,14,14 el que nos - da, en nuestra opinión, el argumento definitivo cuando al regu- lar las alzadas diáfananamente señala que se trata de dos oficia- les distintos: "Otrosi dezimos, que si alguno se alza del juyzio del adelantado que el rey oviese puesto en alguna su tierra que judgase las alzadas de aquella comarca, para antel el rey, o para antel adelantado mayor de su corte, eso mismo puedelo fazër, e el adelantado mayor de aquella comarca deve dar al- zada, si fuere cosa que la deva aver, para el rey o para el adelantado mayor" y aún insiste el mismo texto: Pero si algu- no se agraviare del juyzio del adelantado de aquella comarca do oviere juredicion de judgar, e el pleito oviere venido prime- ramente antél por alzada, e an estado dadas en aquel pleito tres sentencias acabadas por la una parte, dadas acordadamien- te de tres judgadores, cada judgador por sí, dando el judgador menor la una, e despues su mayoral confirmandola por alzada, e despues otro mayoral que es segundo fallando que avie bien judgado, en tal caso no deve el adelantado de aquella tierra dar alzada para ante el adelantado mayor de la corte".<sup>(424)</sup>

---

(423) Espéculo 5,12,12.

(424) Espéculo 5,14,14.

Por qué el Espéculo hace referencia sólo en el libro V al adelantado Mayor de la Corte?. Ciertamente choca que un oficial de tal alto rango sólo sea tratado casi, digamos, de pasada, y sólo en el título de las alzadas. Existió en realidad este oficial?.

Al referirnos a los alcades de las alzadas planteábamos allí parte de la problemática que suscita la figura del Adelantado Mayor de la Corte en torno a su existencia real y decíamos que hoy por hoy; ante el estado actual de la investigación, el problema parece verdaderamente insoluble. Existen tan sólo un argumento a favor de su existencia: las dos leyes del Espéculo que le mencionan y su posterior referencia en las Partidas, - aunque, a mi modo de ver, no se trate exactamente del mismo oficial. En contra de su existencia está el argumento de que no hay un sólo documento a lo largo de la Baja Edad Media - que haga mención o alusión a este Adelantado Mayor de la Corte o a algún oficial que se pudiera identificar con él.

Efectivamente puede pensarse que realmente serían muy pocas las sentencias que llegarían ante tal alto oficial, máxime cuando sólo era posible apelar dos veces, y que, por ello, no nos han llegado a nosotros los fallos del Adelantado Mayor de la Corte, pero, precisamente por ser pocas y dada la importancia de los pleitos que debían llegar ante él, choca más que no se hayan conservado estas sentencias. Alguna de las Leyes del Estilo quizás?. No sabemos.

Entre el Adelantado Mayor de la Corte que se recoge en

el Espéculo y el Sobrejuez de las Partidas hay las suficientes diferencias como para percibir que son dos oficiales distintos, aunque con competencias muy similares.

Hasta ahora hemos venido viendo como el Adelantado Mayor de la Corte queda caracterizado en el Espéculo como el más alto oficial del Reino en lo que se refiere a materia de justicia, salvando al Rey claro está; en cuanto a las cualidades personales que se le exigen, el texto alfonsino se limita a señalar que ha de ser "entendido e verdadero"<sup>(425)</sup>, y por ello ha de llevar siempre consigo "omes sabidores de fuero e derecho, e entendidos, e de buen seso natural"<sup>(426)</sup>; tiene como única competencia en apelación las sentencias dadas por los Adelantados Mayores de la tierra "si fuere cosa que la deva aver, para el rey o para el adelantado mayor"<sup>(427)</sup> con la peculiaridad que del fallo que dicte el Adelantado Mayor de la Corte no cabe alzada "ca todo ome deve sospechar que sus juyzios son derechos, e buenos, e conplidos"<sup>(428)</sup>, no obstante cabe pedir de su fallo "merced" al rey, quien puede librarla personalmente o mandar al mismo Adelantado "que lo enderece"<sup>(429)</sup>.

En las Partidas, el Sobrejuez parece tener otro carácter. Mientras en el Espéculo el Adelantado Mayor de la Corte denota un carácter de oficial "ordinario" o de plantilla -

---

(425) Espéculo 5,14,12.

(426) Espéculo 5,14,12.

(427) Espéculo 5,14,14.

(428) Espéculo 5,14,12.

(429) Espéculo 5,14,14.

dentro del cuadro administrativo de la Corte, en las Partidas la primera nota que se destaca del Sobrejuez es su interinidad: "e acaese alguna vez que los non puede el Rey oyr por si - (los agravios de los juicios de los jueces de la Corte), por priesas que ha e conviene que ponga a otros en su lugar". (430)

En segundo lugar, las Partidas denominan a este oficial en primer término "Sobrejuez", aunque a continuación añaden "a aun le llaman Adelantado de la Corte, por que el Rey lo adelanta poniendolo el Rey en su lugar, para oyr las alzadas". (431) En el Espéculo el Adelantado Mayor de la Corte aparece como un oficial con autonomía propia (432) y no está colocado como el Sobrejuez en el lugar del Rey. En nuestra opinión el Sobrejuez aparece como un juez delegado por el Rey para conocer de determinadas alzadas cuando el monarca no pueda librarlas. Lo que ha ocurrido es que los redactores de las Partidas han tenido delante el texto del Espéculo y al coincidir en ambos oficiales que no cabe nueva alzada de sus fallos, han visto en el Sobrejuez semejanza al viejo Adelantado Mayor de la Corte del Espéculo y por ello después de denominarle Sobrejuez añaden "e aun le llaman Adelantado de la Corte".

Pero todavía hay más diferencias. Las Partidas exigen como condición para desempeñar el cargo, además de ser honrado, "ha menester que sea de gran linaje, e muy leal, entendido e sabidor". Por su parte el Espéculo, como acabamos -

---

(430) Partidas 2, 9, 19.

(431) Partidas 2, 9, 19.

(432) Espéculo 5, 14, 12.

de ver, no sólo silencia la procedencia del Adelantado Mayor en cuanto a su linaje -que debía ser bueno sin duda- sino que le exigía el asesoramiento de "omes sabidores de fuero e derecho": Las Partidas, en cambio, le exigen un tecnicismo ("sabidor") como condición para desempeñar el cargo, aunque si bien es verdad, en otro texto de Partidas se da a entender que el Sobrejuez va acompañado "siempre de omes sabidores de derecho".<sup>(433)</sup>

Por último nos resta ver las competencias. Tanto Espéculo al hablar del Adelantado Mayor de la Corte como las Partidas al recoger el Sobrejuez, nos dicen que de sus respectivos fallos no cabe alzada<sup>(434)</sup>, por lo que en este sentido se encuentran equiparados el Adelantado Mayor de la Corte y el Sobrejuez; pero, si como hemos visto, el Sobrejuez está capacitado para sustituir al Rey -cosa que no está el Adelantado Mayor- y lo ha de "escusar del esfuerzo de los grandes pleitos", podemos afirmar que el Sobrejuez actúa por delegación en todos aquellos pleitos, no sólo de alzadas, sino también en aquellos pleitos - que corresponde librar al rey en primera instancia, con lo que las diferencias entre uno y otro son mayores.

El Sobrejuez de las Partidas se encuentra con las mismas objeciones que hacíamos del Adelantado Mayor de la Corte en

---

(433) Partidas 3, 23, 17.

(434) Espéculo 5, 14, 12 y 5, 14, 14, y Partidas 3, 23, 19.

cuanto que no encontramos ni un sólo documento, ni siquiera a partir de su promulgación en 1348, en que aparezca la palabra "Sobrejuez", aunque si bien en verdad dado el carácter fundamentalmente doctrinal de esta obra es perfectamente comprensible que no se haya tomado el modelo arquetípico del Sobrejuez para implantarlo en la Administración de la justicia de la Corte. Creemos, por el contrario, que se ha producido el fenómeno inverso; es decir, los redactores de las Partidas han tomado como modelo la realidad jurídica de su tiempo y se han inspirado en la figura del alcalde de las alzadas para la elaboración doctrinal del Sobrejuez.



### C. LOS ALCALDES DE HIJOSDALGO

Ciertamente son muy escasos los datos que acerca del alcalde de los hijosdalgos nos ha proporcionado nuestra historiografía<sup>(435)</sup> por lo que el estudio de la citada institución se hace verdaderamente arduo, y si, además tenemos en cuenta las poquísimas referencias de las fuentes legales y documentales de la Baja Edad Media nos han dejado sobre los alcaldes de hijosdalgos, se comprenderá la complejidad y dificultad que supone la reconstrucción de su línea evolutiva.

---

(435) SANTAYANA BUSTILLO (Los magistrados... p. 301-3) atribuye el origen de esta alcaldía a un suceso acaecido en tiempos de Alfonso VIII en unas cortes celebradas en Burgos. J. PEREZ Y LOPEZ en su Teatro de Legislación no dice nada acerca del origen, sólo se limita a recoger la legislación acerca de los mismos. COS GAYON (Historia de la Administración pública... p. 104) se limita a atribuirle la creación del alcalde de los hijosdalgos a Enrique II; por su parte COLMEIRO (Derecho Político... p. 562) sostiene la creación de los mismos por Alfonso X en base a los pasajes de la Crónica de dicho Rey. El prof. G. de VALDEAVELLANO (Curso de Historia de las Instituciones ... pgs. 563) sin plantearse el problema de cuando surgieron, se limita a recoger los datos de las Cortes de 1329 y que se instituyeron en Briviesca en 1387. PEREZ DE LA CANAL (La justicia en la Corte ... 424-5) sin llegar a profundizar en el tema se limita a apuntar las líneas maestras de su evolución. La tesis doctoral de TORRES SANZ (La administración central... pgs. 380-9) es el primer trabajo en el que se abordan distintos los problemas que suscitan las alcaldías de los hijosdalgos y se intenta dar solución a los mismos.

Es imposible llegar a fijar con exactitud el momento en que tienen su punto de partida los alcaldes hijosdalgo. Forzosamente hemos de remontarnos al período altomedieval y acudir, al igual que hiciéramos al estudiar los alcaldes de la Corte, al seno de la Curia Regia. Integrada, como sabemos, por nobles laicos y eclesiásticos<sup>(436)</sup>, en ella se han librado los pleitos que se suscitaban entre la nobleza. Para la resolución de éstos se procedía de la misma manera que vimos al ocuparnos de los alcaldes de la Corte. Es decir, se elegían unos "iudices curiae" a propósito para que conocieran del caso concreto, quienes, finalmente, daban a conocer los resultados de sus diligencias al Rey para que éste dictaminara en uno u otro sentido<sup>(437)</sup>.

El amplio plan de reformas concebido por Alfonso X - afectaba de una manera muy directa a la organización de la Corte y con ella a toda la estructura judicial. Los esquemas rudimentarios de la Curia altomedieval van a ser sustituidos por un compejísimo cuadro de oficiales con atribuciones y competencias bien delimitadas. Así, los pleitos de los hijosdalgo,

---

(436) Sobre la composición de la Curia véase SANCHEZ ALBORNOZ: La Curia Regia Portuguesa... pgs. 38 y ss. y N. GUGLIELMI: La Curia Regia... pgs. 120 y ss.

(437) Un ejemplo significativo nos lo da el Poema del Mío Cid: "Alcaldes sean desto el conde don Anrrich y el conde don Rremond" (E. HINOJOSA: El derecho en el poema... p. 200).

privativos de la jurisdicción real como "iudex supremus" del Reino, pueden ser conocidos por los Adelantados Mayores que se colocan al frente de las grandes circunscripciones territoriales del Reino<sup>(438)</sup>.

Esta competencia de los Adelantados para juzgar "los grandes fechos en la Corte del Rey" parece que se encuentra limitada a la delegación del Rey para conocer el caso concreto<sup>(439)</sup>, con lo que nos recordaría la tradición altomedieval de la Curia de elegir jueces "ad hoc" ante una controversia.

No nos ha llegado, que sepamos, ningún testimonio documental en el que tengamos constancia de que un Adelantado Mayor haya librado alguno de estos grandes "fechos de la Corte"

---

(438) Espéculo 4,2, pr.: "...Los Adelantados mayores, que deven judgar los grandes fechos en corte del Rey, asi como los rieptos, o de pleito, que sea entre un rico ome e otro, sobre heredamientos, o sobre otra cosa, o pleito que sea entre un conceio, e otro sobre terminos o sobre otros pleitos granados. Otrosi pleitos que fuesen de grandes omes, asi como entre ricos omes e ordenes, o conceios, que oviesen pleitos con ordenes o con ricos omes. Ca todo esto deven ellos judgar por mandado del Rey...; Espéculo 4,2,II: "...E dezimos primeramente, que los adelantados mayores deven judgar los grandes pleitos en la corte del rey por su mandado los que el non podiere oyr o non quisiere, asi como el pleito riepto, o de otras demandas que fuesen entre omes poderoros..."

(439) Véase textos de la nota anterior.

no por ello hemos de negar la credibilidad al texto del Espéculo, máxime si tenemos en cuenta que serían ciertamente - muy escasos los pleitos de envergadura que debían ser librados por este procedimiento. Tampoco debemos olvidar, dado que se trataba de una delegación o mandato del Rey, que éste podía en todo momento conocer personalmente -generalmente asesorado- de todos estos pleitos inherentes a su mayoría de justicia. (440)

Una vez más será la reacción nobiliaria de 1272 la que nos proporcione la primera referencia a unas alcaldías específicas para los pleitos de hijosdalgo. Efectivamente, una de las quejas que le presentan al Rey Sabio es "que ninguno non oviese poder de los juzgar si non ome fijosdalgo, e que para esto oviese dos alcaldes fijosdalgos en la corte del Rey" (441)

---

(440) Son resueltos por Rey personalmente muchos de estos litigios entre nobles. Véase, por ejemplo, La colección de "fazañas" del Ms. 431 de la Biblioteca Nacional, publicada por F. SUÁREZ en AHDE (1942-43) pgs. 579-92, en las que encontramos las expresiones "et el rey julgó" (fazaña 3), "Et fallo el Rey" (fazaña 8), "Et fallo el rey et los fijosdalgos de la corte" (fazaña 12), "Et el rey llamó a los fijosdalgos et a los alcalles et tomo su acuerdo sobre ello" (fazaña 19), "Et el rey pregunto a todos los fijosdalgos" (fazaña 15), "Et fallo el Rey et los fijosdalgos" (fazaña 17)...

(441) La Crónica de Alfonso X es ciertamente oscura, como en otros tantos pasajes, en este punto. Las peticiones de la nobleza al Rey Sabio vienen recogidas concretamente en dos capítulos de la misma (23 y 25). En el primero, y ciñéndose ahora al punto concreto que nos interesa, una de las causas de agravios es que el Rey "non traia en su corte alcaldes de Castilla que los juzgasen" (cap. 23, p. 20). El Rey responde que "a lo que dicen de los alcaldes, pero que tenía por bien de poner otros que fuesen de Castilla" (cap. 24, p. 20). Sin duda este pasaje está refiriéndose a que ponga alcaldes de fijosdalgos y no alcaldes "ordinarios" o de Corte.

Contestando en Rey "que lo que pedían que oviesen alcaldes fijosdalgo que los juzgasen, que le placía e lo tenía por bien commo quiera que ninguno de los reyes que fueron antes que él nunca trajo en su casa alcalde fijodalgo, nin los otros ofi\_ cios de su casa nunca los reyes los dieron a los fijosdalgos, asi como el rey gelos avía dado..."(442)

Como interpretar estos textos? Llegaron realmente a crearse estas alcaldías? Intentaremos responder a estos in\_ terrogantes.

En primer lugar, como acabamos de ver, en el Espécu\_ lo se posibilitaba a los Adelantados Mayores para conocer los "rieptos" así como los pleitos "que sea entre un rico ome e otro, sobre heredamientos, o sobre otra cosa"<sup>(443)</sup>, con lo que podemos afirmar, no sin temor a equivocarnos, que los Ade\_ lantados, aunque sea por delegación vienen actuando como jue\_ ces en las causas de fijosdalgo.

También hicimos referencia a cómo, por motivos que des\_ conocemos, desde los años 1268 y 1269 han desaparecido de sus respectivas regiones los Adelantados Mayores de León y Castilla. La supresión de los Adelantamientos supuso, por - tanto, la supresión de los jueces encargados de librar las -

---

(442) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 21-1.

(443) Espéculo 4,2, pr.

las contiendas entre nobles, por lo que éstas debieron ser comisionadas por el Rey a otros jueces de condición no "fijodalga".

Ante esta situación, es perfectamente comprensible que las pretensiones nobiliarias vayan encaminadas hacia la restauración de los Adelantamientos<sup>(444)</sup> y aún más, dado que aquellos se están configurando como oficios eminentemente territoriales, para que no haya posibilidad de que se encomiende a un no hidalgo la facultad de librar sus litigos, se le pide a Alfonso X que nombre dos alcaldes fijosdalgo en su Corte. No se está pidiendo, por tanto, al Rey la creación "ex novo" de dos alcaldías sino que nombre dos hijosdalgo entre sus alcaldes aunque como el propio Rey reconoce "que ninguno de los reyes que fueron antes que el, nunca trajo en su casa alcalde fijodalgo"<sup>(445)</sup>. Pero lo realmente sorprendente es la segunda parte de la contestación del monarca: "nin los otros oficios de su casa nunca los reyes los dieron a los fijosdalgos, así como el rey gelos avia dado".

---

(444) Crónica de Alfonso X, cap. 25, pgs. 21-2.

(445) Que los alcaldes de la Corte deben de estar librando los pleitos de los hijosdalgos debe ser un hecho, a tenor del texto de la Crónica ya que, como acabamos de ver, cuando le piden al Rey que lleve alcaldes que los juzguen éste contesta que él ya traía buenos alcaldes, es decir, que no le hacían falta más alcaldes, pero accede a que sean de condición fijodalga como piden los nobles".

Què quieren decir estas palabras de Alfonso X? Què ofi\_ cios eran aquellos que nunca los reyes dieron a los fijosdalgo?.

Para nosotros resultan totalmente desconcertantes las pa\_ labras del Rey Sabio, pues sólo hay que hacer un simple repa\_ so por la diplomática altomedieval para comprobar que pràcti\_ camente la totalidad de los fficios de la Casa del Rey se hallan ocupados por la màs alta y escogida nobleza del Reino, ya sea laica o eclesiàstica. Sin ir màs lejos pueden verse los privile\_ gios rodados del propio Alfonso X.

Sólo cabe, desde nuestro punto de vista, una posible in\_ terpretaciòn: que esos oficios a los que se està refiriendo el Rey que nunca habían ocupado los fijosdalgo, se trate de las alcaldías de la Corte.

Si nos fijamos detenidamente en el texto, lo que se le està pidiendo es que haya "dos alcaldes fijosdalgo", es decir, que dentro del conjunto de alcaldes de la Corte, dos sean de tal condición para que libren así los pleitos de los hijosdalgos; no se le pide, pues, la creación de dos nuevas alcaldías sino que sencillamente a la hora de cubrirlas, dos de ellas, lo - sean por hijosdalgos. Hasta este momento, la elección de - alcaldes de Corte se debe hacer, con toda seguridad, no aten\_ diendo a la condición social, de la persona como puede ocurrir en otro oficio, sino que, dada la función del mismo, la elec\_ ción se haría en base a los conocimientos tècnicos de dicha persona en Derecho; por ello, es perfectamente admisible -

pensar que no serían nombrados alcades de condición hijodalgo por la poca inclinación, salvando las excepciones, que por parte de la nobleza hay hacia los estudios jurídicos.

De esta manera, sólo identificando esos oficios a los - que se refiere la crónica con las alcaldías de la Corte, podemos encontrar una explicación lógica a la respuesta de Alfonso X a las pretensiones nobiliarias.

Parece que la reacción de 1272 tuvo su repercusión - práctica en el terreno normativo en el ordenamiento que concediera Alfonso X en las Cortes de Zamora de 1274, y allí, en nuestra opinión y en contra de los que pueda parecer,<sup>(446)</sup> quedaron plasmadas las pretensiones señoriales.

Ya vimos al estudiar los alcaldes de las alzadas cómo en el Ordenamiento zamorano quedan establecidos -con independencia de que se cumplieran o no- dos esquemas judiciales bien distintos. El de Castilla, que seguía fielmente la

---

(446) TORRES SANZ (La administración central... p. 381) sostiene que las Cortes de Zamora guardan silencio respecto a estas alcaldías y por consiguiente que la petición nobiliaria no fue atendida. Con independencia de - que luego se haya llevado a la práctica o no, lo que no podemos pasar por alto son dos realidades que recogen las Cortes zamoranas: la restauración del Adelantado - Mayor de Castilla -que puede librar los pleitos de los fijosdalgos- y la instauración de un "alcalde caballero" con esta finalidad.



organizaci3n establecida en el Esp3culo<sup>(447)</sup>, y el de Le3n, Es-  
tremaduras, Toledo y Andaluc3a que se separaban visiblemente de aqu3l.<sup>(448)</sup>

En Castilla nos encontramos con que parte de las peticiones nobiliarias son atendidas en cuanto que podemos ver - que se restaura la figura del Adelantado Mayor<sup>(449)</sup>; en Le3n, en cambio, no se restablece el Adelantado sino un tribunal colegiado de alzadas, pero, y hasta ahora no ha sido destacado por nadie, de los alcaldes de Corte que han de andar continuamente con el Rey del Reino de Le3n, uno ha de ser caballero<sup>(450)</sup> es decir, de condici3n hijodalgo.

---

(447) Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 20, p. 90)

(448) Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 19, y 20, p. 90)

(449) Cortes de Zamora 1274 (CLC.I, 20, p. 20)

(450) Cortes de Zamora 1274: "E que los quatro alcaldel del regno de Le3n que han siempre d andar en casa del Rey, que sea uno cavallero atal que sepa bien el fuero del libro e la costumbre antigua." (CLC.I, 17, pgs. 89-90). - V3ase en este mismo cap3tulo el apartado dedicado a los alcaldes de corte en donde hacemos referencia al sistema de turnos establecido en las Cortes de Zamora.

Una vez mäs tenemos que cuestionarnos el alcance de la reacciön nobiliaria. Se pidió que se restauran solo en Castilla los Adelantados? Se pidieron los alcaldes hijosdalgos sólo para León? Fueron peticiones para todo el Reino?. No lo sabemos, no obstante creemos que puede darse una solución a modo de hipótesis.<sup>(451)</sup>

- 
- (451) Una vez mäs nos encontramos ante una situación contradictoria. Por un lado, parece que la reacciön se refiere sólo a Castilla a la luz de los datos que nos aporta la Crònica de Alfonso X: "otrosi que el Rey non traia en su Corte alcaldes de Castilla que los juzgasen" (cap. 23, p. 20), a lo que el Rey contesta "que tenía por bien de poner otros que fuesen de Castilla" (cap. 24, p. 20). Este dato, junto a la peticiön de que quite los Merinos y ponga Adelantados como parece deducirse que hace el Rey en el Ordenamiento de 1274, nos puede hacer pensar de que sólo afectò la reacciön a Castilla. Pero lo cierto es que es precisamente en León donde aparecen los alcaldes Caballeros y no pone Adelantado para este Reino. Por los datos que nos proporciona la Crònica, fueron nobles de los mäs altos linajes de Castilla y León los que se opusieron al Rey: los Gonzalez de Lara, Rodriguez de Lara, Ruiz de los Cameros, Ruiz de Castro, Gomez de Aza, Diaz de Asturias (Vid. S. MOXO: De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformaciön nobiliaria castellana en la Baja Edad Media en "Cuadernos de Historia", 3 - (1969), pgs. 1-209) por lo que nos inclinamos a pensar que fuè un movimiento general y no circunscrito sólo a uno de los Reinos. Además, la Crònica cuando recoge por segunda vez los agravios presentados al Rey ya no hace referencia a un reino en particular, sino que a la hora de plantearle el problema de los alcaldes de fijosdalgos se hace de un modo general: "que ninguno non oviese poder de los juzgar sinon ome fijosdalgo, e para esto que oviese dos alcaldes fijosdalgo en la Corte del Rey (cap. 25, p. 22). Pero mucho mäs significativa es, a nuestro entender, la siguiente peticiön pues se hace en comùn para los dos reinos: "e porque el Rey tenía puestos sus merinos en las Merindades de Castilla e de León.." (cap. 25, p. 20). Admitiendo pues que la reacciön fuè general nos queda igualmente sin contestaciön de que. Porquè se adoptaron soluciones distintas para los diversos reinos? No lo sabemos.

Para el reino de León el problema de los alcaldes de hijosdalgos viene resuelto desde el momento en que el Rey accede a que de los cuatro alcaldes de Corte que semestralmente libran los pleitos en la Casa del Rey, uno es caballero. Es decir, como ya vimos al tratar de los alcaldes de la Corte, de los ocho alcaldes procedentes del Reino de León, dos son caballeros por lo que hemos de suponer que están destinados a conocer los pleitos suscitados entre hijosdalgos. No obstante, el Rey, haciendo hincapié en la necesidad de que sea conocedor o técnico en Derecho, impone como condición "que sepa bien el fuero del libro".<sup>(452)</sup>

---

(452) De qué fuero se trata? Tradicionalmente y basándose en la vigencia del Liber en León se ha mantenido que ese "fuero del libro" se trata del Fuero Juzgo. Así se han expresado MARCIALAR Y MANRIQUE (Historia de la Legislación... t. III, p. 88), MINGUIJÓN (Historia del Derecho Español... cuadernos II, p. 235) y más recientemente el prof. GIBERT (Historia General del Derecho español... p. 47). A la hora de tratar el Derecho que era aplicado en la Corte ya hicimos allí hincapié de que ese "fuero del libro" no podía ser identificado en principio ni con el Espéculo, ni con el Fuero Juzgo, sino que habría que identificarlo con el Fuero de los Fijosdalgos. Nos basamos para llegar a tal afirmación en los agravios que le presentan los nobles a Alfonso X en 1272. Se quejan de que "los fueros que el Rey diera (Espéculo?) a algunas villas conque los fijosdalgos comarcaban, que apremiaban a ellos e a sus vasallos en guisa que por fuerza avian de ir a aquel fuero"; el Rey responde que "oviesen los fijosdalgos sus fueros segund que lo ovieron en tiempo de los otros reyes, e si el Rey diera fuero a alguna cibdad o villa con quien ellos comarcasen, que los fijosdalgos non fuesen juzgados por el si non quisiesen" (Crónica de Alfonso X, caps. 23 y 24, p. 20) y más adelante reitera el Rey "que si algun rico ome o caballero o otro fijodalgo avia del alguna querella, que el le queria facer derecho segund el fuero antiguo que los otros reyes usaron con sus fijosdalgos..."

Para Castilla, en cambio, no se nombran alcaldes de hijosdalgos como en León, con lo que, aparentemente, podría pensarse que la petición a que hace referencia la crónica sobre el nombramiento de alcaldes de hijosdalgos sólo se refería al reino leonés, pero creemos que el problema quedó también resuelto para Castilla desde el momento en que se nombraba para ella un Adelantado Mayor al que el Rey, como ya vimos, podía comisionar para juzgar los "grandes fechos de la Corte" y entre ellos, los pleitos de los hijosdalgos.

De esta forma, creemos, quedaban satisfechas las pretensiones señoriales y zanjado el problema, pero al igual que ocurría con los alcaldes de las alzadas, el silencio de las fuentes no nos han permitido constatar la existencia de esos alcaldes caballeros del Reino de León, lo mismo que del Adelantado Mayor de Castilla. No podemos precisar exactamente qué razones impidieron llevar a la práctica estas reformas. Desde

---

(452) /... (cap. 24, p. 21). Se aplicaría, pues, su respectivo fuero de los Fijosdalgos en cada uno de los Reinos Ast, cuando a principios del XIV se le pide a María de Molina, a la sazón regente, que restablezca los alcaldes de fijosdalgos, piden que los dichos alcaldes -ouyan los ffijosdalgis ssigunt que se contiene en los quadernos de los ffijosdalgos, et que esto sea en Castilla ssigunt que lo an de ffuero, et en el rregno de León ssigunt que lo an de ffuero los del rregno de León" (CLC.I, 33, p. 313).

luego hay que tener presente, y tal vez esta sea una de las causas, que a partir de 1275 la situación del reino es ciertamente muy crítica. La guerra de Granada, desencadenada desde 1273, adquiere unas proporciones alarmantes y los reveses son numerosos, sobre todo a partir de la muerte del regente Don Fernando de la Cerda<sup>(453)</sup>. A ello ahora hay que añadir los problemas sucesorios entre los hijos de Don Fernando y el infante Don Sancho.

Tal vez es aventurado pensar en un vacío institucional desde 1274, máxime si tenemos en cuenta que hay momentos en que prospera de nuevo régimen de Adelantamientos<sup>(454)</sup>; a nuestro juicio, los pleitos de hijosdalgos o bien se han venido librando por el propio Rey a quien, en definitiva corresponde conocer de ellos, o se ha designado por vía de comisión a algún noble para que conozca el caso concreto<sup>(455)</sup>; pero ya resulta más problemático, ante el silencio de las fuentes, afirmar la existencia de un alcalde con jurisdicción privativa sobre los hijosdalgos dentro del cuadro de oficiales de la Chancillería durante estos años del siglo XIII.<sup>(456)</sup>

---

(453) Crónica de Alfonso X... cap. 64, p. 51.

(454) Encontramos Adelantados Mayores en León de nuevo a partir de 1293 (PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 238) y en Castilla en 1287 y más tarde a partir de 1297 (PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 345).

(456) Es significativo que ni las Ordenanzas de 1310 y el desarrollo de éstas en las Cortes de 1312 hagan mención a las citadas alcaldías. No olvidemos que durante el reinado de Sancho IV y sobre todo en el de Fernando IV, se restablece el régimen de Adelantados. vid. nota 41o.

Tendremos que esperar hasta muy avanzada la minoría de Alfonso XI, en las Cortes de Carrión de 1317, para que de nuevo la nobleza pida a la regente, María de Molina, que les den "alcaldes ffijosdalgos que anden en la corte del Rey et - que ouyan los ffijosdalgos ssigunt que se contiene en los quadernos de los ffijosdalgos"<sup>(457)</sup>. La petición se hace tanto para Castilla como para León<sup>(458)</sup>, pero desconocemos cuantos alcaldes fueron designados por reino<sup>(459)</sup>. Como es lógico - aplicaban sus respectivos fueros de hijosdalgos<sup>(460)</sup>.

Desconocemos hasta qué punto llegaron a arraigar<sup>(461)</sup> - estas alcaldías de fijosdalgo dado que en 1329 se le reitera ahora ya a Alfonso XI, que "en los alcaldes que tengo ordenados que andan de cada día en la mi cassa, que anden y algunos ffijos dalgo que sea tales que sepan sseruir a Dios e ami offiçio"<sup>(462)</sup>. Se le pide al rey que sean bien pagadas sus - -

(457) Cortes de Carrión 1317 (CLC.I, 33, p. 313)

(458) Cortes de Carrión 1317 (CLC.I, 33, p. 313)

(459) Al menos serían dos. vid. F. SUAREZ: La Colección de "fazañas..." principalmente las fazañas 13 y 19.

(460) Cortes de Carrión 1317 (CLC.I, 33, p. 313) y F. SUAREZ: La colección de "fazañas"..., fazaña 19, pgs. 590-1.

(461) Sin duda podemos afirmar que hasta 1326 al menos hubo alcaldes de hijosdalgos o quizás hasta 1327. En las fazañas recogidas en la ya citada colección de la Biblioteca Nacional encontramos que aparece como Merino Mayor de Castilla Garcilaso. Si consideramos que este Garcilaso al que se refiere el texto es el hijo del Almirante de Castilla Pedro Laso de la Vega, debemos necesariamente fechar la fazaña con anterioridad a 1327, fecha en la que, como nos atestigua la Crónica de Alfonso XI fué asesinado en Soria (Crónica de Alfonso XI, cap. 80 p. 222) e igualmente lo encontramos confirmando hasta

quitaciones es decir, lo que equivale a que sean incluidos dentro del cuadro de oficiales de justicia de la Corte, así como se les hacen extensivos aquellos preceptos de carácter general - comunes a todos los alcaldes de la Corte<sup>(463)</sup>.

Tampoco podemos saber si a partir de 1329 hubo una continuidad de la institución o no, pero lo cierto es que no volvemos a encontrar referencia alguna a las alcaldías de los fijosdalgos en el reinado de Alfonso XI, ni siquiera en los ordenamientos renovadores de Villareal, Segovia o Alcalá de Henares. Ello nos hace suponer que existía, sin duda, por parte de Alfonso XI una natural animadversión a las jurisdicciones privativas de los nobles, fenómeno, por otra parte, perfectamente comprensible si tenemos en cuenta toda la política tendente a potencializar el poder real que está

---

(461) /...esa fecha algunos privilegios (ESCALONA: Sahagún, apend. 3, doc. 288, p. 647; MINGUELLA: Ha. de la Diócesis de Sigüenza, t. II, doc. 31, p. 413 y PÉREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 342). Creemos, por tanto, que entre 1325 (en el que está fechada la fazaña núm. 10 de la citada Colección) y 1327 fueron supridos los alcaldes de hijosdalgos.

(462) Cortes de Madrid 1329 (CLC.I, 2, p. 402).

(463) Cortes de Madrid 1329 (CLC.I, 2, p. 402).

siendo llevada a cabo por Alfonso XI<sup>(464)</sup>.

La ausencia de esta institución en los últimos años del reinado de Alfonso XI viene corroborada por la petición que hicieran a su hijo en las únicas Cortes de su reinado. El cuaderno de las Cortes de Valladolid no recoge exactamente en qué términos se le hizo la petición a Pedro I, pero sí podemos deducirla por la contestación del monarca.

Posiblemente se le pidió que nombrara dos -o quizás más- alcaldes de los fijosdalgo, tal vez en base a la división de los reinos<sup>(465)</sup>. Pedro I, fiel continuador de la política de su padre en este punto y llevándola posteriormente a extremos -insospechados, se muestra reacto a las jurisdicciones nobiliarias, no obstante accede en parte a la petición imbuido por ese espíritu de innovación y consentimiento característico de todo Rey recién subido al trono; por ello se explica la contestación del monarca que "fallè que en tiempo delos reyes onde yo vengo, non fue vso nin costunbre de auer mas de vn alca<sup>l</sup>le de los fijos dalgo, tengo por bien que de aqui adelante en la mi corte non aya màs de vn alca<sup>l</sup>le delos fijos dalgo"<sup>(466)</sup>.

---

(464) No deja de ser curioso que en el cuaderno de las Cortes de Madrid de 1329 se envió al concejo de Niebla se contiene una petición de los procuradores de Toledo solicitando la concesión de un alcalde fijodalgo natural del Reino de Toledo que ande en la Corte "para guardar ssu derecho delos ffijos dalgo de Toledo e de ssu regno" (CLC.I, 58, p. 442). El Rey responde con una evasiva. No sabemos nada acerca de este alcalde del Reino de Toledo que suponemos que si llegó a fraguar, correría la misma suerte que los restantes.

(465) En las Cortes de Valladolid de 1351 se mantienen las alcaldías por provincias (CLC.II, 58, p. 34).

(466) Cortes de Valladolid 1351 (CLC.II, 58, p. 34).



Este alcalde de los fijosdalgo aparece con competencia exclusiva sobre los pleitos de los hijosdalgo<sup>(467)</sup> y se le prohíbe expresamente poner en su lugar a ningún otro estando él en la Corte.<sup>(468)</sup>

En el ordenamiento que Pedro I otorga a los hijosdalgos en las mismas Cortes de Valladolid ratifica la existencia de los alcaldes al disponer que toda demanda que algún hidalgo tuviera contra otro se presentara en la Corte ante su alcalde de los hijosdalgo y no ante los alcaldes de la Corte<sup>(469)</sup>. Pero lo sorprendente de este ordenamiento es que sólo está referido a Castilla y no se hace mención alguna a León. Se ha perdido tal vez el ordenamiento de León? No lo sabemos con seguridad, pero hemos de pensar que existió otro ordenamiento paralelo destinado a los fijosdalgos de León.<sup>(470)</sup>

(467) "et que este oya los pleytos delos fijos dalgo, aquellos que fue husado e acostunbrado de librar" (Cortes de Valladolid 1351, CLC.II, 58, p. 34).

(468) "...e que los oya e los libre por sy et que non pueda poner por si otro alcalde en quanto fuere en la mi corte" (Cortes de Valladolid 1351, CLC.II, 58, p. 34).

(469) Cortes de Valladolid 1351 (CLC.II, 14, p. 138).

(470) TORRES SANZ (La administración central... nota 76, p. 456) sostiene que, al menos en un primer momento, el privilegio de la jurisdicción privativa no alcanzó a todos los hidalgos y así da a entender, basándose seguramente en la petición que hicieran los toledanos en 1329, que los hidalgos de Toledo se hallaban fuera de dicha jurisdicción. Desde luego es ciertamente problemática la cuestión de si se extendieron a los restantes terrenos conquistados del Sur los fueros de los Fijosdalgos. A nuestro entender, dado el carácter eminentemente personalista de dichos privilegios creemos que se extendieron allí a donde se dirigieron los hidalgos, ya sean de Castilla o de León. La petición toledana la entendemos como un intento de obtener los del reino de Toledo un privilegio más, para equipararse a los de Castilla y León que tenían su correspondientes alcaldes en la Corte.

No podemos precisar con exactitud la duración que tuvo el mencionado alcalde durante el reinado de Pedro I ya que tan sólo un documento, que nosotros sepamos, hace mención a Johan Ferrand de Finestrosa mio alcalde en la mi corte de los fijos dalgo de todos mis rregnos...<sup>(471)</sup>, pero dado que en el mismo año 1354 estalla la primera rebelión de la nobleza castellana contra el Cruel es fácil suponer que la alcaldía tuvo una existencia efímera.

Como sabemos, en la primavera de 1366 se inicia en Castilla una larga y cruenta guerra civil que acabará tres años más tarde con el regicidio de Montiel. La guerra significaba algo más que las pretensiones de un bastardo al trono, la guerra significaba mucho más: el enfrentamiento entre una monarquía de tipo personalista con el creciente deseo de la nobleza por tomar parte directamente en las tareas políticas del Reino.

Por ello Enrique II, defensor de las pretensiones nobiliarias, mucho antes de finalizado el conflicto tiene entre sus oficiales de justicia un alcalde de los fijosdalgs<sup>(472)</sup>. Acabada la contienda, cuando se dispone a reorganizar toda la justicia de su Corte mantiene invariable la alcaldía<sup>(473)</sup>, incorporada a los tribunales de la Chancillería.

---

(471) Puede verse publicado en L. V. DIAZ MARTIN: Los oficiales de Pedro I de Castilla, Valladolid 1975, apén 6, p. 117 y A. L. MOLINA: Documentos de Pedro I en C.D.H.M. Murcia 1978, Doc. 69, pgs. 126-7.

(472) Cortes de Burgos 1367 (CLC.II,14,p.160).

(473) Cortes de Toro 1371 (CLC.II,2,p.191).

Juan I, monarca también muy innovador en materia de justicia, elevó el número de alcaldes de los fijosdalgos a dos en fecha que no podemos precisar pero sin duda antes de 1387. En esta fecha, ante la reducción que se hace de todos los oficiales de la Corte, se pide al monarca que los dichos alcaldes actúen dividiéndose el año en semestres<sup>(474)</sup>, sistema que, por otra parte, se mantiene ya a lo largo de toda la Baja Edad Media<sup>(475)</sup>, hasta el reinado de los Reyes Católicos<sup>(476)</sup>.

En cuanto a la actuación de los alcaldes de los fijosdalgos, coincidimos con TORRES SANZ<sup>(477)</sup> en el desarrollo de -

---

(474) "Otrosy alo que nos pidiste por merçet quelos dos al-  
calles delos ffijos dalgo siruiesen cada anno seys meses  
cada uno rregidente enla dicha abdiencia" (Cortes de Bri-  
viesca 1387, CLC.II, 27, p. 388).

(475) Cortes de Segovia 1390 (CLC.II, 3, p. 473); Cortes de To-  
ledo 1462 (CLC.III, 9, p. 709). La sentencia compromisa-  
ria de 1465 sorprendentemente no hace ninguna mención  
a los alcaldes de los hijosdalgos, pero posiblemente se  
ha tenido que producir algún cambio dado que la citada  
sentencia de los alcaldes de fijosdalgos", (Col. dipl. Enri-  
que IV, doc. 109, p. 466).

(476) No podemos precisar si con anterioridad a los Reyes -  
Católicos se estableció la anualidad de las alcaldías de  
los hijosdalgos, pero en las sucesivas ordenanzas de la  
Audiencia y Chancillería, dado el carácter anual de los  
otros jueces, hemos de suponer que quedaron bajo este  
mismo régimen.

sus funciones judiciales de modo unipersonal<sup>(478)</sup>, salvo en un caso concreto en el que, por la gravedad que comporta el delito -traición o alevé por ríepto-, se constituye un tribunal -extraordinario<sup>(479)</sup> de actuación colegiada.

La actuación colegiada será ya la ordinaria en tiempo de los Reyes Católicos en donde nos encontramos a los alcaldes de los fijosdalgos librando las cartas de hidalguía conjuntamente con el notario de la provincia correspondiente<sup>(480)</sup>. Este fenómeno de la colegialidad viene dado, sin duda, por influencia de los otros tribunales de la Audiencia y Chancillería, es decir, la Audiencia para lo civil y la Audiencia de la cárcel para lo criminal que, junto al Consejo de la justicia, nos están mostrando una clara tendencia a la constitución en órganos colegiados de los más altos tribunales del Reino.

---

(478) Las fuentes no nos permiten señalar con exactitud en qué momento los alcaldes de los fijosdalgos han empezado a conocer las causas colegidamente. Si tenemos en cuenta el dato que nos proporciona la sentencia compromisoria de 1465 al referirse a la "escribanía de la - - audiencia de los alcaldes de los fijosdalgos", podemos conjeturar que esta actuación colegiada es anterior al reinado de los Reyes Católicos, pero ningún dato nos permite señalar cuando se ha producido el cambio.

(479) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, 15, p. 489).

(480) Véase por ejemplo en el Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, 5 vols., Sevilla 1929-1968, ed. dirigida por R. Carande y J.M. Carriazo, la carta de franqueza de Johan de Montañós. (Tumbo Reyes Católicos III, 95-96) o el pleito por el que Juan de Ortiz de Ar-

### Competencias

Son varias las cuestiones que hemos de plantearnos a la hora de señalar las competencias de los alcaldes de los fijosdalgos.

En primer lugar, hasta mediados del siglo XIV, durante ese período en el que la continuidad de las alcaldías se halla como ya vimos, sometida a muchas vicisitudes, podemos destacar que existe una delimitación de competencias desde el punto de vista territorial bien diferenciada entre Castilla y León<sup>(481)</sup>, sin duda determinada por los distintos fueros de Fijosdalgo que poseían cada una de estas regiones. Ello nos lleva forzosamente a cuestionarnos qué ocurría con los fijosdalgos no naturales de estos reinos, es decir, los de las Estremaduras, Toledo, Andalucía. Se extendieron los fueros de fijosdalgos a estas regiones?. Qué fuero se concedió?. El estado de la investigación no nos ha permitido encontrar una respuesta a estos interrogantes. No obstante, hemos de suponer, que seguramente, se produjo un trasbase de los fueros de fijosdalgos a los restantes territorios de la Corona.

---

(480) /...chaga había de probar ser hidalgo notorio (Turnbo de los Reyes Católicos, IV, pgs. 10-12).

(481) Esta diferencia ya venía regulada en el Ordenamiento de Zamora de 1274 (CLC.I, 19 y 20, p. 90). Igualmente la encontramos en la petición de las Cortes de Carrión de 1317 (CLC.I, 33, p. 313).

A partir de Pedro I parece que se produce una tendencia hacia una competencia sobre todos los territorios de la Corona desde el momento en que sólo hay un único alcalde<sup>(482)</sup> y, persiste durante toda la Baja Edad Media. El único matiz lo podemos encontrar ya en el reinado de los Reyes Católicos en el que los alcaldes de hijosdalgo a la hora de resolver las cartas de hidalguía se reúnen con el notario de la provincia correspondiente.<sup>(483)</sup>

Mucho más conflictiva es la delimitación de las competencias materiales de los alcaldes que nos ocupan. ¿Qué tipos de pleitos conocían? ¿Tenían competencias criminales?.

Realmente es difícil precisar con exactitud cuáles eran las competencias de estas alcaldías dada la parquedad de las fuentes, pero no obstante bien por vía de exclusión o por los escasos datos que tenemos, intentaremos establecer una tipología de competencias.

En primer lugar, y ello viene dado por la propia naturaleza de las alcaldías, los alcaldes de los hijosdalgos tienen también una limitación de competencias desde el punto de vista personal desde el momento en que sólo pueden conocer pleitos en los que son parte los hijosdalgos. Por, tanto caían fuera de su jurisdicción todo pleito que no tuviera estas características, incluyendo los pleitos "mixtos", es decir, -

---

482) Cortes de Valladolid 1351 (CLC, II, 58, p. 34)

(483) Véanse textos de la nota 480.

aquellos en los que sólo una de las partes fuere fijodalgo.<sup>(484)</sup>

Quedaban excluidos también fuera de las competencias de los alcaldes de fijodalgo los casos de corte<sup>(485)</sup> así como todas aquellas demandas sobre cualquier acto cometido en la corte.<sup>(486)</sup> Creemos, pues, que hasta mediados del siglo XIV - las competencias de los alcaldes de los hijosdalgos serían - fundamentalmente de tipo civil, y desde luego, las causas de hidalguía. Conocerían igualmente pero ya en grado de apela-

---

(484) Dada la naturaleza eminentemente privilegiada de esta jurisdicción sólo se podía acceder a ella si las partes tenían auténtico derecho a ella. En el mismo sentido se expresa TORRES SANZ (La administración central... p. 388).

(485) En contra de lo que sostiene TORRES SANZ (La administración central... p. 388) que los citados alcaldes conocen de los casos de Corte, creemos, por el contrario, que, dada la gravedad que aquellos suponían se ventilaban ante los alcaldes de Corte. Sólo podemos citar como excepción el riego, pero de una forma muy relativa, dado que éste correspondió ser librado siempre por el Rey (o Adelantado Mayor por delegación).

(486) "A lo que me pidieron por merced que mande a los mis alcaldes de la mi corte que por querellas que dan los fijodalgo los unos delos otros por cosas que no - sean fechas aquí en la mi corte, que sean demandados ante los alcaldes delos fijodalgo, que son aquí en la mi corte o ante cualquier dellos" (Cortes de Valladolid 1351, CLC, II, 14, p.138), luego "a sensu contrario" - las querellas por cosas que son hechas en la corte se salen de la jurisdicción de estas alcaldías, e irán a la jurisdicción del rastro.

ciòn, las sentencias de otros alcaldes de hijosdalgo de nivel inferior. (487)

A partir de mediados del siglo XIV, a raíz de la creación de la Audiencia, debieron mermarse las competencias

- 
- (487) Existían a nivel inferior alcaldes de hijosdalgos? Las fuentes consultadas apenas nos dan noticias de unas alcaldías de hidalgos a nivel inferior en la Corte. Así las Cortes de Zamora de 1274 muy enfáticamente recogen: "Otrosi tiene el Rey por bien que en los lugares - del regno de Leòn o de Gallizia do suele aver juezes e alcaldes cavalleros quelos aya y; mas que non sean malfechores e que sepan judgar derechamente" (CLC. I, 36, p. 92) Son estos jueces y alcaldes caballeros un grado más de la escala judicial?. Por qué sólo en Leòn y Galicia? Se refiere el ordenamiento a la condición del alcalde o a una jurisdicción privativa de los nobles? Quizás nos pueda despejar algo más la incògnita un dato que nos proporciona una carta de 1298 de Fernando IV en la que manda que cualquier morador de la villa de Briones, aunque sea hidalgo no se excuse de oontribuir en los pechos ni tengan más alcalde que el elegido por el concejo. En las quejas que se presentan al Rey sobre los hidalgos dicen: "è mas que han (los fijosdalgos) Alcalde suyo, è que non quieren responder nin facer derecho alguno ante el Alcalde de la villa..." El Rey, ante la situación creada, responderà: "mando a todos los fijosdalgos... que hayan todos un Alcalde aquel que el concejo pusiere, segùn dice su privilegio a que fueron poblados, è yo les conirme..." (BENAVIDES: Memorias... doc. llo, p. 156). A la luz de este dato podríamos afirmar la existencia de una jurisdicción para hidalgos a nivel local, pero hasta qué punto esta situación era general? Por qué en las distintas organizaciones no se hacen referencias a estas jurisdicción especial? Ciertamente son muchos los interrogantes que se nos ciernen en torno a esta cuestión que se complica aún más si atendemos a la petición que le hacen a Alfonso XI para que mandase que el Merino



de los susodichos alcaldes quedando pràcticamente reducidas sus atribuciones al conocimiento de las causas de hidalguia porque si bien es verdad que parece que se les concede facultad para conocer los rieptos<sup>(488)</sup>, el libramiento de tales pleitos se hace bajo la supervisiòn del Rey o de algùn miembro del Consejo<sup>(489)</sup>.

Finalmente nos queda plantearnos aún una cuestiòn. Cabía alzadas del fallo de los alcades de hijosdalgo? Hemos de suponer, pese al silencio que guardan las fuentes al respecto, que sí era posible apelar del fallo de los alcaldes de hijosdalgo.

---

(487) /...Mayor de Castilla lleve un alcalde de fijodalgo con èl (F. SUAREZ: La colecciòn de "fazanas"...., - fazaña 19, pgs. 590-1). No sabemos si se llegó a otorgar esta peticiòn pero desde luego si hubo en algùn momento, al nivel que fuere -local o territorial- unos jueces de hijosdalgo inferiores, hemos de suponer que de su fallo cabría apelaciòn ante el correspondiente de la Corte.

(488) Los rieptos son siempre reservados al Rey (Espéculo 4,2, pr.; Cortes de Zamora 1274, CLC.I, 45, p. 94; Cortes de Valladolid 1312, CLC.I, 1, p.198; Leyes del Estilo 91; Partidas 3, 3, 5...

(489) Cortes de Madrid 1391: "Otrosy sy acaesçiere caso de trayçiòn o de aleve por rrepto, digase ante el Rey e los del du Consejo o algun dellos e libren lo los alcaldes delos fijosdalgos con acuerdo de cauallero o del Consejo fasta la execuçion" (CLC.II, 15, p. 489). Conviene tener en cuenta que ya en estos momentos el Rey se ha desentendido de la Administraciòn Personal de justicia, no obstante mantiene su supervisiòn como bien puede verse en el texto.

Debido a las vicisitudes a que estuvieron sometidas no sólo estas alcaldías, sino también las otras instituciones judiciales de la Corte -Adelantados, alcaldes de las alzadas-, dependerá, lógicamente, de la estructura judicial que haya en la corte en cada momento para poder - establecer ante quién era factible interponer la apelación.

Suponemos, salvo las reservas que expusimos acerca del Adelantado Mayor de la Corte, que las apelaciones de las sentencias de los alcaldes de los hijosdalgos se interpondrían ante el alcalde de las alzadas<sup>(490)</sup>. Desaparecido éste, la facultad de conocer las alzadas recaería en la Audiencia, atribución, por otra parte, que ya le viene asignada en las distintas ordenanzas de la Audiencia.<sup>(491)</sup>

---

(490) Véase en este mismo capítulo el apartado de los alcaldes de las alzadas.

(491) Ordenanzas de 1485, cap. 26; Ordenanzas 1486, cap. 31; Ordenanzas 1489, fol. 54 v.

D. ALCALDES DEL RASTRO

La idea altomedieval de una paz especial a la que es-  
 tà sometida el àmbito geogràfico de la Corte<sup>(492)</sup> y el recono-  
 cimiento de èsta como fuero comunal del Reino<sup>(493)</sup> contri-  
 buyeron decisivamente a la idea del rastro. Esta se encuen-  
 tra ya recogida en el Espèculo en el que ya se distingue -  
 un àmbito espacial caracterizado por estar sometido a una  
 regulaciòn excepcional con respecto al resto del Reino.<sup>(494)</sup>

La principal consecuencia de esta regulaciòn consis-  
 tia en que la mera presencia del Rey en un determinado -  
 lugar dejaba en suspenso cualquier otro poder jurisdiccio-  
 nal en un radio de cinco leguas, por tanto, la presencia de  
 una persona en la corte facultaba a los alcaldes de èsta a  
 conocer en primera instancia de cualquier acto ilícito o ne-  
 gocio que se efectuara dentro de ese radio con independen-  
 cia de aquellos otros jueces que, de no darse esta circuns-  
 tancia, serían competentes para conocer tales actos.<sup>(495)</sup>

---

(492) Fuero Viejo de Castilla 1,2,3.

(493) PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte...  
 pgs. 412-3.

(494) Espèculo 2,14,2: "mandamos que venga seguro desde  
 cinco leguas ante de aquel logar o es el Rey"....

(495) Leyes del Estilo 7,33,35,97,109,121,193.

El Espéculo, pese a tener presente esta regulación excepcional a que está sometida la corte del Rey, no emplea nunca la palabra "rastros". Esta la encontramos por primera vez en otra fuente, casi coetánea del Espéculo, - utilizada en el sentido que venimos señalando<sup>(496)</sup>, generalizándose prácticamente a partir de este momento a lo largo de toda la Baja Edad Media, en la que los reyes reafirman y reiteran una y otra vez la protección especial a que está sometida su corte.<sup>(497)</sup>

La resolución de los pleitos del rastro ha atravesado tres etapas bien diferenciadas. En la primera de ellas, en la que todavía no encontramos a un oficial con estas - competencias atribuidas de un modo definido, los pleitos que se suscitan en el rastro del rey son librados, como ya vimos, por los alcaldes de la Corte. En una segunda etapa encontramos con que ya existe dentro de los alcaldes de la Corte una cierta especialización encaminada a la resolución de los pleitos acaecidos en el rastro, pero advertimos claramente que todavía no se ha producido una separación de oficios, sino que, por el contrario, el alcalde encargado

---

(496) Cortes de Valladolid 1258; "Tienen por bien que ningún omme non ande en el rastro del Rey sinón con su sennor o querelloso..." (CLC.I, 7, p. 56).

(497) Véase por ejemplo, las Cortes de Burgos de 1308 - "Otrosí tengo por bien e mando que ningún non mate ni fiera en la villa ni en el lugar do yo estuviere ni a cinco leguas en derredor, ni a desafiado, ni a enemigo, ni por otra razón ninguna que ninguno diga que ha derecho de lo facer si non quealquier que lo ficie-re, que lo maten por ello" (BENAVIDES: Memorias... doc. 408, pgs. 605-7). En el mismo sentido se expresan las Cortes de Valladolid 1312 (CLC.I, 76, p. 215) y Toro 1371 (CLC.II, 18, p. 186).

de librar los pleitos del rastro conserva su condición de alcalde de la Corte. Finalmente, la última fase vendría dada por la creación del alcalde del rastro como oficial con un ámbito jurisdiccional bien diferenciado del de los restantes alcaldes de la Corte.

La primera referencia que nos dan las fuentes en torno a los alcaldes del rastro<sup>(498)</sup>, que podemos considerar tardía en relación a los otras alcaldías que hasta el momento hemos venido estudiando<sup>(499)</sup>, la encontramos en las Cortes de Valladolid de 1351 en las que Pedro I, contestando a las peticiones que le formulan los procuradores, dispone que "Et el alcalde del rastro que libre los pleytos que acaescieren en la mi corte e otrosy que pueda oyr e librar los pleytos delas alçadas e las cartas de la comarca onde fuere alcalde".<sup>(500)</sup>

A primera vista ya podemos advertir que se trata de un alcalde en el que recae la competencia de los pleitos

---

(498) ...Ciertamente las noticias que nos proporciona nuestra historiografía acerca de las alcaldías del rastro son escasas; se limitan a señalar su existencia MARTÍNEZ MARINA: Teoría de las Cortes... pgs 281-3; L. G. de VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones, pgs. 563-4; G. VILLAPALOS: Los recursos... p. 256; A. GARCIA-GALLO: Las Audiencias en Indias... p. 387; PEREZ DE LA CANAL: (La justicia en la corte... p. 418-9) señala las líneas maestras de su evolución, siendo TORRES SANZ (La Administración central... p. 393-400) quien se detiene más a analizar la problemática de estas alcaldías.

(499) Mientras los alcaldes de corte, alcaldes de las alzas y alcaldes de fijosdalgo tienen sus primeros balbuceos a mediados del siglo XIII, las alcaldías del rastro tienen su punto de partida a mediados del XIV.

(500) Cortes de Valladolid 1351 (CLC.II, 58, p. 34).

que se susciten en el rastro y, ademàs, conserva su carácter de alcalde de la Corte o de "las comarcas" como se denominan también en este ordenamiento<sup>(501)</sup>.

Ya vimos a la hora de estudiar los alcaldes de la Corte cómo estos venían conociendo de los pleitos acaescidos en el rastro y por ello, a la luz de este texto, podemos vislumbrar que se està produciendo ya claramente una especialización dentro de los alcaldes de la Corte para el conocimiento exclusivo de los pleitos del rastro del Rey. Por ello, tal vez no sea exacto afirmar que la alcaldía del rastro nace en las Cortes de 1351<sup>(502)</sup>, porque, aunque el texto parece aludir a un alcalde ya preexistente en la Corte, al conservar èste su naturaleza de alcalde de Corte no podemos considerarlo como una institución independiente que nace "ex novo" a partir de este momento. Tal afirmación equivaldría prácticamente a sostener que las alcaldías del rastro se crearon al mismo tiempo que los alcaldes de Casa del Rey, puesto que entonces no percibimos què diferencia puede haber entre el alcalde de 1351 con los alcaldes regulados por el Espèculo casi cien años antes.

---

(501) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34).

(502) En este sentido se expresan PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte... p. 418 y TORRES SANZ: La Administración central... p. 394.

Creemos pues, que en 1351 no existe aún una instancia judicial autónoma con esas competencias específicas. Las Cortes de 1351 no hacen otra cosa que corroborar esta afirmación al facultar al citado alcalde para seguir librando "los pleytos delas alçadas e las cartas de la comarca - onde fuere alçalle". Hasta este momento no sabemos con arreglo a què criterios se han venido distribuyendo entre los alcaldes de la Corte los distintos pleitos que suscitaban en el rastro del Rey. No podemos precisar si existía un turno o si dependía de que el rey estuviera en uno u otro reino para que de esta forma librasen los litigios al caldes del reino en el que se encontrara el rey. Posiblemente, dada la insistencia por parte de las Cortes que los alcaldes no se entrometieran a librar pleitos de otras regiones, suponemos que debió utilizarse este último procedimiento.

Por otra parte, el texto de las Cortes de Valladolid aunque no es lo suficientemente explícito, a nuestro entender, está recohiendo una situación de hecho muy clara: hay un alcalde de Corte al que se le ha asignado, además de sus competencias como tal, la facultad de conocer los plei tos del rastro. Ello quiere decir que supone un cambio con respecto al sistema que se venía aplicando para la resolución de este tipo de cuestiones; ahora será solamente uno de los alcaldes de Corte el encargado de este tipo de pleitos; por eso es por lo que el Rey insiste en que aunque "libre los pleytos que acaescieren en la mi corte" que puedan seguir desempeñando su alcaldía de comarca, es decir, - "oyr e librar los pleytos delas alçadas e las cartas de la comarca onde fuere alçalle".

A qué se debió tal cambio? PEREZ DE LA CANAL apuntó que tal vez se produjo como consecuencia del hecho de residir en lugares distintos el rey y la corte y Chancillería<sup>(503)</sup>. Efectivamente, ya vimos como al menos desde el reinado de Sancho IV se está produciendo continuamente la separación del Rey de la Chancillería, no obstante debemos pensar que, pese a la separación material entre el Rey y su Chancillería, el monarca llevó consigo algún alcalde con que pusiera asesorarse y librar los pleitos de su rastro. Pero si el Rey se encuentra separado de la Chancillería cómo conjugar el desempeño de dos oficios -alcalde de rastro y alcalde de corte- en dos lugares distintos?.

Han de pasar dieciocho años para que las fuentes consultadas nos proporcionen un nuevo dato sobre el alcalde del rastro. Pero ahora, parece que el alcalde del rastro ha adquirido autonomía propia, pues, pese a que el texto de las Cortes de Toro de 1369 está prácticamente copiando a la letra el texto de Valladolid de 1351<sup>(506)</sup>, en Toro ya no se hace referencia a que el alcalde del rastro pueda seguir

---

(503) PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la corte... pgs. 418-419 y se hace eco también de esta afirmación TORRES SANZ: La Administración central... pgs. 393-394.

(504) Baste ver, por ejemplo, la gran cantidad de documentos de Pedro I que son sellados por su "sello de la po\_rridat", con lo que está desmostrada esta separación con su Chancillería, vid. MOLINA, Documentos de Pedro I .. docs. 88, 90, 95, 97, 99, 100, 104, 105, 110, passim...

(505) Cortes de Valladolid 1351: "pero ssy acaescier que en la Corte non fuere alcalde de Castiella por que sean ydos a algunas partes por mio mandado, que quando ellos no fueren en la mi corte, que libren los pleytos e las -



oyendo las alzadas de la comarca en donde es alcalde, sino que muy enfáticamente el texto se limita a disponer que "el alcalde del rastro que libre los pleitos que acaes- çieren en la nuestra corte"<sup>(507)</sup>. Si esta omisión la interpreta- mos como voluntaria y no como un error del copista, no nos queda más alternativa que admitir que la creación del alcalde del rastro como oficial de la Corte con unas com- petencias específicas y privativas e independiente de cual- quier otra alcaldía de la Casa del Rey, se debe a Enrique II.<sup>(508)</sup>

Bien pronto el mismo Enrique II, dentro de esa - "ordenación de la justicia" de la corte realizada dos años más tarde en las Cortes de Toro de 1371, aumenta el nú- mero de alcaldías del rastro a dos<sup>(509)</sup>; quedan, como es -

---

(505) /... cartas de Castiella los alcalles delas Estrema- duras de Castiella que fueren en la mi corte. Et si los alcalles de tierra de León non fueren en la mi corte o alguno dellos, que libren los pleytos de tierra de León los alcalles de Castiella o qual quier dellos. Et asi los alcalles delas Estremaduras non ffueren en la mi corte, que libren los pleytos e las cartas delas - Estremaduras e del rregno de Toledo los alcalles de Castiella. Et si los alcalles delas Estremaduras, non fueren en la mi corte, que libren los pleytos e las cartas los alcalles o el alcalde que fincare" (CLC. II, 58, p. 34).

(506) Compárese Cortes de Valladolid 1351, pet. 58 (CLC: II, p. 34) con Cortes de Toro 1369, pet. 6 (CLC. II, pgs. 166-167).

(507) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 6, p. 166)

(508) Diferimos, pues, aquí, con TORRES SANZ (La Admi- nistración central... p. 395) quien cree que esta autono- mía no se produce hasta dos años más tarde en las Cortes de Toro de 1371.

lógico, equiparados a los alcaldes de Corte<sup>(510)</sup> y se hace prohibición expresa para que "mas desenbargada miente puedan vsar delos dichos ofiçios, et por que es nuestra - corte" de que no puedan ser oidones de la Audiencia.<sup>(511)</sup>

A partir de 1390 los alcaldes del rastro cambian de denominación<sup>(512)</sup> llamándoseles "alcaldes de corte" en contraposición, los antiguos alcaldes de corte o de las provincias, se les denominará "alcaldes de Corte y Chancillería" o mantendrán el de "alcaldes de las provincias"<sup>(513)</sup>

---

(509) /...

Cortes de Toro 1371: "et otrosi que aya dos alcalles del rrastro que siruan los oficios por si mesmos et libren los pleitos del rrastro" (CLC.II, 2, p. 190).

(510) "et que estos fueren alcalles en la nuestra corte" (CLC.II, 2, p. 190)

(511) Cortes de Toro 1371 (CLC.II, 2, p. 190).

(512) Cortes de Segovia 1390: "... ordenamos e mandamos que uno de los alcalles de la nuestra corte quando nos aqui fuere, e quando nos aqui no fuere, un alcalde de los dela chancelleria..." (CLC.II, 5, p. 481)  
El texto contrapone claramente unos alcaldes de corte que van con el Rey y unos alcaldes de la chancillería. Esta distinción ya la señalaron PEREZ DE LA CANAL; La justicia de la corte... p. 419 y el prof. GARCIA-GALLO: Las Audiencias en Indias... p. 366.

(513) Así se les denomina en el propio ayuntamiento de 1390 (CLC.II, 2, pgs. 472-473).

Este cambio terminológico se debe, sin duda, a que a partir de ahora, como bien señaló el prof. GARCIA-GALLO<sup>(514)</sup> se ha producido definitivamente una clara escisión entre la "casa y corte", es decir, allí donde el rey reside habitualmente, y la "Corte y Chancillería", como conjunto de órganos administrativos y judiciales auxiliares del rey.<sup>(515)</sup>

Desconocemos, por falta de datos, la suerte que - - corrieran los alcaldes de corte en el reinado de Enrique III pero no deja de sorprender que en el ordenamiento de las Cortes de Madrid de 1419, en que Juan II reorganiza la justicia de la Corte, no aparezcan los mencionados alcaldes, aunque no por ello podemos afirmar rotundamente un vacío institucional.<sup>(516)</sup> Quizás éste se llegó a producir en algún momento y por ello Juan II en unas ordenanzas de Medina del Campo fechadas en 1431<sup>(517)</sup> dispone que "en la mía casa y corte anden continuamente dos alcaldes, los cuales sean

---

(514) Las Audiencias en Indias... p. 365.

(515) De cualquier forma no deja de llamar la atención de que tan sólo tres años antes, en las Cortes de Briviesca (CLC.II, 28, p. 389) -en donde todavía la denominación de alcalde de corte" está referida a los - "los alcaldes de las provincias"- no se haga ninguna mención a los alcaldes del rastro.

(516) En un pleito que en 1423 se sigue en la corte contra Rui Lopez de Avalos, Condestable de Castilla, encontramos a Pedro Alfonso de Valladolid "nuestro alcalde en la nuestra corte", pero sin que por ello podamos identificarlo con un "alcalde de corte" o un alcalde de "corte y chancillería" B.N. Ms. 13.236, fol 174 v.

(517) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 94.

tales quales cumple a mi servicio e a execucion de la mi  
justicia"<sup>(518)</sup>.

PEREZ DE LA CANAL silencia la evolución de los al  
caldes de corte o del rastro a partir de 1390<sup>(519)</sup>, no así -  
TORRES SANZ quien, tras apuntar la posibilidad de que -  
las alcaldías de casa y corte pudieron constituir el germen  
de la posterior Sala de Alcaldes de Corte, afirma que "no  
parece fácil ni contrastarlas ni homologarlas con las tradi-  
cionales alcaldías del rastro ante el hermetismo indescifra-  
ble de las fuentes"<sup>(520)</sup>, pero desde nuestro punto de vista -  
creemos que es factible admitir una continuidad entre los -  
alcaldes de casa y corte y los antiguos alcaldes del rastro  
o corte, como se les denominaba en 1390.

---

(518) Estas ordenanzas fueron recogidas posteriormente por las ordenanzas de Guadalajara de 1436. Estas pueden verse publicadas en DOMINGO PALACIOS: Documentos del Archivo general de la villa de Madrid, t. II, pgs. 273 y ss. y en Libro de Bulas y Pragmáticas, fols 89 r-93 v; hay copia de ellas en la Colección Burriel, B. N. Ms. 13106. Aparecen redundadas en la Crónica de Juan II, año 1436, cap. 6, pgs. 529-32; Crónica del Halconero, cap. 216, pgs. 236-45 y en la Refundición de la crónica del Halconero, cap. 117, pgs. 206-13. Manejar estas últimas puede inducir a errores como a TORRES SANZ (La Administración central ... p. 396) quien, sin tener en cuenta que en Guadalajara se recopilan las ordenanzas de Medina de 1431, fecha el establecimiento de estos alcaldes en 1436.

(519) La justicia de la Corte ... p. 419

(520) La Administración central ... p. 396.

No podemos precisar, ante los datos que hemos consultado, a qué vicisitudes estuvieron sometidas las citadas alcaldías en el reinado de Enrique III y los primeros años del de Juan II. Tal vez, al igual que ocurriera con otras instituciones, los alcaldes de corte entrarían en crisis por lo que Juan II en 1431 no hace otra cosa que revitalizarlos. Los alcaldes de casa y corte no son, como deja entrever TORRES SANZ<sup>(521)</sup>, un tribunal especial distinto con un modo de proceder peculiar, sino que, a nuestro entender, las ordenanzas están estableciendo dos cosas bien distintas. En primer lugar, el restablecimiento de los viejos alcaldes del rastro o de corte, que ahora y más de acuerdo con la terminología de mediados del siglo XIV en base a donde van a desempeñar su actuación, se les denomina "alcaldes de casa y corte" y, en segundo lugar, que estos alcaldes, además de las competencias y atribuciones propias que correspondían a las antiguas alcaldías, pueden inquirir a los transgresores de las Ordenanzas de Segovia por medio del proceso sumario que acarrea la comisión que el rey les ha otorgado para ello<sup>(522)</sup>.

---

(521) La Administración central ... p. 398.

(522) "Ordeno e mando que en la mi casa e corte anden continuamente dos alcaldes, los quales sean tales - quales cumple mi servicio, e a execución de la mi justicia, e que sigan por sus personas los oficios. Yten, que los dichos alcaldes tengan cargo de ynquirir contra los trasgresores de las ordenanças mandan; que para esto les sea dada una comisión para que lo puedan fazer e fagan symplemente e de plano sin escripto e figura de juyzio, sabida solamente la verdad. E que no haya dello soplicaçion ny apelaciòn ni agravio ni nulidad, salvo para ante mi e no para ante los oydores de la mi audiencia, ni para ante otro alguno". (Bulas y Pragmáticas, fol. 95 )

El argumento en que nos basamos para sostener esta solución de continuidad no es sólo la contraposición que - entre alcaides de casa y corte y alcaides de chancillería - que se recoge en las citadas ordenanzas<sup>(523)</sup>, sino que tan sólo dos años más tarde, en las Cortes de Madrigal de 1438, los procuradores denominan a los alcaides que ahora nos ocupan "alcaides de corte e rrastro"<sup>(524)</sup>, prueba de que todavía sigue presente la idea de las alcaldías del rastro.<sup>(525)</sup>

Una vez más el silencio de las fuentes nos impiden poder delimitar con precisión la línea evolutiva de los alcaides de casa y corte de quienes, salvo una referencia - que nos han dejado las Cortes de Burgos de 1453<sup>(526)</sup>, no volvemos a tener noticias hasta el reinado de Enrique IV.

---

(523) Bulas y Pragmáticas, fol 92 v.

(524) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 44, p. 350)

(525) Idea que, por otra parte, la encontramos presente en todo lo que queda del siglo XV. Incluso alguna vez encontramos con que se redunda aún más en tal denominación y así, se les llega a llamar "alcalde de casa, corte y rastro". Véase el nombramiento al respecto que en 1475 se le da al licenciado Juan de la Fuente (R.G.S. 105, fol. 76).

(526) Cortes de Burgos 1453 (CLC. III, 10, pgs. 657-8)

Se trata de un texto de las Cortes de Toledo de 1462<sup>(527)</sup> TORRES SANZ, ha querido ver en este texto dos figuras distintas entre los alcaldes de las Ordenanzas de 1431-1436 y "los alcaldes de campo" de las Cortes de Toledo<sup>(528)</sup>. Es precisamente el término "alcalde de campo" el que, a mi parecer, le lleva a un equívoco, porque para nosotros los "alcaldes de campo" que se recogen en la petición primera de

---

(527) Cortes de Toledo 1462: "e tengo asy mesmo deputados alcaides de campo que anden continuamente dentro delas çinco leguas dela mi corte para que llamen atodos los delos vandos delas çibdades e villas de mis rregnos - e para pugnir e castigar todos los rruidos e escandalos que en ellas nasçieren, e porque todas aquestas cosas mejor se fagan e guarden e cumplan e mi justicia sea bien conplida e esecutada, yo quiero diputar e diputare luego una persona de buena conçiencia ami fiable, que tenga cargo en mi corte de solliçtar a los del Consejo e alcales de la mi corte e campo, que cada uno en lo que es a su cargo faga lo que deve e cumpla e esecute la justicia" (CLC. III, 1, p. 704).

(528) "La lectura atenta de la primera petición y correlativa respuesta de Enrique IV en las Cortes de Toledo de 1462 autorizaría una cónfusa distinción entre unos alcales de corte y un alcalde de "campo", distinción que en el mismo pasaje luego oscurece; aquellos serían los creados en 1436 y éstos los tradicionales del rastro, - aunque desde luego ambos estarían insertos en la Corte como instancia judicial diferenciada de la Cancillería; resulta, no obstante, curiosa la peculiar denominación de "alcales de campo" usada por Enrique IV como sinnimo de alcalde del rastro irrepetida antes y después de esta fecha, dictada quizás por el deseo de clarificación terminológica" (La Administración central... p. 396-7). Sin embargo, el mismo autor, dos páginas después afirma que las alcaldías del rastro son asimilables y homologables a las alcaldías de casa y corte (La Administración central ... p. 399).

de las Cortes de Toledo son los mismos a los que se referían las ordenanzas de 1431 y 1436. Lo que ocurre es que se está utilizando una terminología amplia que a nosotros, a más de cinco siglos vista, nos puede parecer confusa pero que cualquier hombre del siglo XV tiene bien clara ya que, en definitiva, lo que se están diferenciando son dos ámbitos de actuación bien distintos; por una parte la casa y corte del Rey y, por otra, la corte y Chancillería. Prueba de ello es que en el mismo texto de las Cortes de Toledo, tan sólo unas líneas más abajo, ya se están denominando a estos alcaldes de otro modo; se les denomina "alcaldes de la mi corte e campo". Y aún más, en la petición novena de las mismas cortes encontramos de nuevo el término "alcaldes de la nuestra casa e corte". (529)

Creemos que es concluyente a la hora de identificar los alcaldes de casa y corte con los viejos alcaldes del rastro el texto de las Cortes de Madrigal de 1476 en el que claramente en la misma petición se denomina a la misma institución de ambas formas. (530)

El número de alcaldías de casa y corte se vio sometido también a diversas alteraciones. Así, durante todo el reinado de Juan II se mantuvo el número inicial de dos

---

(529) Cortes de Toledo 1462 (CLC.III, 9, p. 709)

(530) Cortes de Madrigal 1476: "...debiendo hauer solamente dos alcaldes de vuestra casa e rraastro ... por ende ordenamos que de aqui adelante sean quatro alcaldes para rresidir en la nuestra casa e corte ..." (CLC. IV, 14, p. 73).



alcaldes que la estableciera Enrique II en Toro en 1371<sup>(531)</sup>.  
 En el reinado de Enrique IV se aumentó a tres<sup>(532)</sup> y se man  
 tuvo esta cifra hasta el reinado de los Reyes Católicos.

---

(531) No me parece correcta la posibilidad que señala TORRES SANZ (La Administración central... p. 398) de que Juan II hubiera elevado el número de alcaldes del rastro a cuatro. Los alcaldes del rastro o de casa y corte son dos hasta el reinado de Enrique IV, quien como sabemos incrementó o<sup>s</sup> tensiblemente todos los oficios de la Corte, y por ello las Cortes de Madrigal solicitan a los Reyes Católicos que reduzca los "alcaldes de casa y rastro" a su antiguo número de dos. La utilización del Ordenamiento de MONTALVO ha inducido al error a TORRES SANZ. MONTALVO en Ordenanzas reales de Castilla 2, 15, 13 ha recogido dos disposiciones. En primer lugar recoge el texto de las Cortes de Toledo de 1480 (CLC. IV. 34, p. 120) en el que se reiteraba el aumento a cuatro de las alcaldas de casa y corte que establecieran los Reyes Católicos en Madrigal (CLC. IV, 14, p. 73). A continuación, MONTALVO hace una refundición del texto de las Ordenanzas de Guadalajara de 1436 en las que se ordenaba que hubiese dos alcaldías (ver texto en nota 522). Por tanto, MONTALVO, al refundir las Ordenanzas está poniéndolas al día señalando cuatro alcaldías. Pero lo ciertamente incomprensible es que al hacer la refundición MONTALVO ha convertido la actuación que por vía de comisión encomendaba Juan II a los alcaldes de casa y corte para - inquirir y penar a los transgresores de las Ordenanzas de Segovia, nada más y nada menos que el modo de actuación ordinaria de los alcaldes de casa y corte.

(532) Sentencia compromisaria 1465 (Col. Dipl. Enrique IV doc. 109, cap. 45, p. 399).

A estos monarcas solicitan los procuradores de las Cortes de Madrigal que sean reducidos a dos, como originariamente se habfa establecido, los alcaldes de casa y corte pero los Reyes no sólo no acceden a esta petición, sino que, además incrementan el número de alcaldes que van a "residir en la nuestra casa e corte" hasta llegar al número de cuatro. <sup>(533)</sup>

### COMPETENCIAS

Las competencias de los alcaldes del rastro estaba delimitada por la propia limitación del rastro del Rey sobre el que tenían jurisdicción privativa <sup>(534)</sup>. Por tanto - cafan, en principio, dentro de sus competencias todos - aquellos pleitos civiles o criminales que se suscitaban en el dicho rastro. <sup>(535)</sup> No obstante, hemos de suponer que - la mayoría de los pleitos que librarán los dichos alcaldes serían de índole criminal <sup>(536)</sup> dado que sobre ellos recaía

---

(533) Cortes de Madrigal 1476 (CLC.IV, p.4, p. 73) reiterado en la Cortes de Toledo 1480 (CLC.IV, 34, p.120)

(534) La extensión del rastro se mantuvo invariable durante toda la Baja Edad Media y consistía en un círculo imaginario de cinco leguas de radio en torno a donde se alojaba el Rey (Espéculo 2, 14, 2; BENAVIDES: Memoorias... dos. 408, pgs. 605-7; Cortes de Valladolid - 1312, CLC.I, 76, p. 215.

(535) Leyes de estilo 7, 33, 35, 97, 109, 120 y 193; Cortes de Valladolid 1351 (CLC.II, 58, p. 34) y Cortes de Toro 1371 (CLC.II, 2, p. 190); "Otrosí los tres alcaldes de su corte librabán fuera del palacio Real las querellas e demandas civiles e criminales que ante ellos se movían y entendían en la justicia e sosiego de la corte" (PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, 2a. -- parte, cap. 95, p. 354).

la responsabilidad del mantenimiento de la paz en el rastro del Rey<sup>(537)</sup> pero sin que podamos desechar las civiles<sup>(538)</sup>.

Desde que los alcaldes de corte adquieren autonomía propia con respecto a los alcaldes de la Corte son equiparados a dichos alcaldes a todos los efectos<sup>(539)</sup> a excepción del conocimiento de las apelaciones que procedían de las distintas provincias, y si alguna vez llegaron a conocer las apelaciones, sin duda extralimitándose de sus funciones, la reacción por parte de las Cortes no se hace esperar solicitándole al rey "quelos alcalles que son en nuestro rastro que non conozcan de otros pleitos, saluo delos del rastro como sienpre se uso; e non se entremetan a librar pleitos de apellaciones nin de procesos nin nuestras cartas sobre otras cosas, saluo para los pleitos que perteneçen al rastro...".<sup>(540)</sup>

Una de las notas que hasta ahora no ha sido destacada por ningún autor es la de la actuación colegiada de los alcaldes de casa y corte.

---

(536) /...

Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190), Cortes de Guadalajara 1390 (CLC. II, 1, p. 425), Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, 1, p. 704), Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 42, pgs. 124-6).

(537) Cortes de Valladolid 1447 (CLC. IV, p. 128).

(538) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 45, p. 128).

(539) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190).

(540) Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 36, p. 299).

Desconocemos si con anterioridad a 1371 los Alcaldes de corte, sobre quienes recaían las competencias de los pleitos del rastro, llegaron a actuar colegiadamente o no. Nos inclinamos, no obstante, por una respuesta negativa basándonos, en primer lugar, en el carácter de alcaldía unipersonal que hasta esa fecha caracteriza a los alcaldes de las provincias o territorios y, en segundo lugar, porque tanto del texto de las Cortes de Valladolid de 1351 como el de las de Toro de 1369 deducimos que se trata de un solo alcalde el que está comisionado para la resolución de los pleitos del rastro<sup>(541)</sup>. Pero vimos como muy pronto Enrique II convirtió en dos las alcaldías del rastro y, lo que es mucho más significativo, estableció la actuación colegiada entre los alcaldes del rey los alcaldes del rastro para la resolución de los pleitos criminales por lo que han de ir "dos días cada semana, martes et viernes, alas cárceles a librar los dichos pleitos"<sup>(542)</sup>. Pese a este mandato, seguramente pensando en dotar a estos órganos judiciales de una mayor operatividad, el propio Rey previó que si él está ausente de la localidad en la que se halla la Chancillería -y por tanto los alcaldes del rastro - van con él y no pueden reunirse para librar colegiadamente con los alcaldes de la comarcas- tanto unos como otros

---

(541) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34) y Cortes de Toledo 1369 (CLC. II, 6, p. 166).

(542) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, p. 190).

alcaldes pueden continuar sus tareas judiciales<sup>(543)</sup>. Lo que no especifica el texto es que si en los casos en los que no pueden reunirse a librar alcaldes de las provincias y alcaldes del rastro, tanto unos como otros han de seguir cumpliendo la obligación de librar colegiadamente. En nuestra opinión creemos que sí en virtud de la importancia de los pleitos criminales, como ya tuvimos ocasión de ver cuando planteamos el problema de la "audiencia de la cárcel" al tratar de los alcaldes de corte o de los territorios.

La separación cada vez más frecuente entre el Rey y su Chancillería debió abortar este proyecto real y en la práctica, alcaldes de las provincias en su Audiencia de la cárcel por un lado, y los alcaldes del rastro con el Rey por otro, actuarían colegiadamente entendiendo de las causas criminales. No obstante el texto de las Cortes de Toro parece indicar que esta colegiación sólo era preceptiva en los pleitos criminales por lo que hemos de suponer que en las causas civiles -que se librarían los restantes días de la semana- los alcaldes actuaban unipersonalmente.

El ordenamiento dispone que cualquiera de los alcaldes (y aquí está haciendo trato unitario entre ambos tipos de alcaldes) puede recibir la "querrela o acusación" pero luego se la dará al escribano para que la notifique a los restantes alcaldes que en la corte estuvieron "e que dende

---

(543)Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 2, pgs. 190-1).

en adelante todos quatro alcaldes conoscan dela causa"<sup>(544)</sup>  
 Se insiste en la importancia de la colegialidad desde el momento en que la misma ley prevé la ausencia de alguno de los alcaldes; han de sentenciar los quatro juntos, o al menos tres de ellos, pero nunca menos. En caso de que el número sea inferior a tres, el Consejo pondrà otras tantas personas de entre ellos mismo hasta completar el número de tres.<sup>(545)</sup>

A la hora de abordar el problema de la recurribilidad de las sentencias de los alcaldes del rastro hemos de tener presente las distintas etapas que señalabàmos al principio de este apartado.

Mientras los pleitos del rastro fueron solventados por los alcaldes de corte, aunque las fuentes guarden silencio al respecto, hemos de suponer que del fallo dado de una sentencia de un pleito acaecido en el rastro, cabía apelación ante el Adelantado Mayor correspondiente o el alcalde de las alzadas de la corte, según exista uno u otro de estos oficiales.

Configurado el alcalde del rastro como un oficio autónomo desde 1369, y sobre todo dada la separación entre el Rey y la Chancillería se nos presenta el problema de que al acompañar los alcaldes del rastro al Rey, éste no lleva consigo oficiales de justicia de rango mayor que puedan

---

(544) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 42, pgs. 124-6).

(545) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 42, pgs. 125-6)

conocer en apelación dicha sentencia con lo que nos encontráramos ante la encrucijada de que si se apela del fallo de los alcaldes del rastro habría que acudir a la Chancillería con el consiguiente retraso y encarecimiento del pleito. Posiblemente esta última solución fue la menos factible dado que en el mismo rastro se hallaba el Rey, - máximo juez, es más lógico pensar en que del fallo de los alcaldes del rastro se acudiría ya directamente a la persona del Rey o, en un momento posterior, a su Consejo.

Los alcaldes del rastro o de "casa y corte", como se les viene denominando en el siglo XV, en virtud de lo dispuesto por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480, quedan constituidos en una auténtica audiencia paralela a la "Audiencia de la cárcel" que desarrolla su actividad en el lugar en que se halle la Chancillería<sup>(546)</sup>. Y de cimos que quedan constituidos en una auténtica Audiencia porque, a partir de este momento, del fallo dictado por los alcaldes de casa y corte no cabe apelación "salvo suplicación para ante ellos mismos en el caso que derecho lo gar oviere".<sup>(547)</sup>

Las Cortes de Toledo para los fallos sobre pleitos de materia civil arbitrarán otra solución. Hasta este momento, las sentencias dictaminadas por los alcaldes de casa y corte en asuntos civiles "se interpusieron las apelaciones

---

(546) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 42, p. 126)

(547) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 42, p. 126).

para los nuestros oydores"<sup>(548)</sup>, pero ahora, seguramente atendiendo a criterios de economía procesal, se dispone que - las apelaciones de las sentencias en materia civil dadas por los alcaldes de casa y corte se interpongan ante el Consejo.<sup>(549)</sup>

Esta relación de los alcaldes de casa y corte con el Consejo Real viene dada por la separación material del - Rey y su Chancillería, de ahí que sea más factible la relación con el Consejo Real, órgano que acompaña siempre al Rey en este período que no con la Audiencia. Por ello - se puede advertir una participación del Consejo en diversas esferas íntimamente relacionadas con los alcaldes de casa y corte.<sup>(550)</sup>

Pero además de su competencia específica de juzgar los pleitos del rastro, en ocasiones, les era encomendada la tarea de juzgar pleitos por comisión<sup>(551)</sup> con lo que, dada

---

(548) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 45, p. 128)

(549) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 45, p. 128)

(550) Véase, por ejemplo, interviene el Consejo en el nombramiento de alcaldes (Cortes de Briviesca 1387, CLC. II, 34, p. 390) igualmente dos doctores del Consejo acuden tres días a la semana a la cárcel de la Corte a librar los pleitos criminales con los alcaldes (Cortes de Toledo de 1462, CLC. III, 1, p. 704).

(551) Ya vimos como en las Ordenanzas de 1436 se les comisionaba para inquirir contra los transgresores de las Ordenanzas de Segovia. Estas ordenanzas, que para TORRES SANZ son "inidentificables" (La Administración Central. . p. 400) bien pudiera tratarse de las



la profusión que adquirió esta modalidad en el siglo XV, las competencias, de hecho, se veían incrementadas de un modo ostensible. Este fenómeno es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que los alcaldes de casa y corte son los más cercanos a la persona del Rey, pero además como ya tendremos ocasión de ver al ocuparnos del Consejo Real, una de las atribuciones más características del Consejo en materia de justicia es, precisamente, el envío de jueces - comisarios cuyo nombramiento se hacía entre los alcaldes de casa y corte.<sup>(552)</sup>

Fuera de sus competencias estrictamente judiciales, encontramos, en ocasiones a los citados alcaldes dando publicidad a las leyes en el ámbito de la corte.<sup>(553)</sup>

---

(551) /...ordenanzas de 20 de octubre de 1433 (Un traslado de ellas puede verse en A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas, leg. 1, fols. 123-9). Las Cortes de Toledo de 1480 recogen claramente estas dos formas de actuación: "...E sy se ouiere de dar emplazamiento para fuera de nuestra corte en los casos de que puedan conocer, conuiene a saber, dentro delas cinco leguas por vía ordinaria e allende de las cinco leguas por comisión..." (CLC. IV, 42, p. 125). Véase también la carta real de comisión a los alcaldes de la corte, nombrándoles para conocer ciertos pleitos que se tramitaban ante un oidor que estaba ausente recogida por F. ARRIBAS: Un formulario documental del siglo XV de la Cancillería real castellana. Valladolid 1964, p. 95.

(552) Así, por ejemplo, Juan II designa jueces comisarios a los "alcaldes de casa y corte" para inquirir cualquier transgresión de las Ordenanzas de Segovia (Vid. Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 95).

(553) Bulas y Pragmáticas, fol. 182, v y Cortes de Santa María de Nieva 1473 (CLC. III, 15, p. 866).

E. EL JUEZ DE LAS SUPLICACIONES

Con la apelación no acaban los recursos que las partes podían interponer en una cuestión litigiosa<sup>(554)</sup> sino que - antes de que pase la sentencia a cosa juzgada cabía interponer el recurso de suplicación.

El recurso de suplicación era un medio de impugnar actos firmes y se concedía en atención a la posible "iniquitas" que pudiera producir aquella sentencia que hubiera agotado la vía de las apelaciones<sup>(555)</sup>, por lo que ha de ser considerado más una vía de merced que de justicia.

En primer lugar hemos de señalar que el Espèculo no regula de modo expreso la vía de "merced" como hacen el Fuero Real o las Partidas, pero el silencio de este Còdigo alfonsino se debe, a nuestro entender, no a una omisión de sus redactores sino a que el Espèculo, tal como nos ha llegado a nosotros, al menos en su libro V està incompleto.

Nos basamos para sostener esta afirmación en una referencia muy concreta que el propio Espèculo en su último libro, título 14, ley 11, cuando al disponer que los fallos del rey no cabe alzada y si acudir por vía de merced.

---

(554) Sobre la apelación véase VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 280-91.

(555) VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 290-1.

muy ènfaticamente añade: "...e el rey puedele caber tal ruego, sil quisiere fazer merced en la manera que adelante mostraremos en este titulo, en las leyes que fablan en esta razòn..." <sup>(556)</sup> Como es sabido, el libro V del Espèculo finaliza regulando las alzadas pero no se hace mención alguna màs referente a esta vía de merced <sup>(557)</sup> por lo que no podemos precisar en què consistía exactamente ni en què tèrminos se hallaba regulada esta vía extraordinaria.

No obstante, el propio Espèculo nos ha dejado varios pasajes en los que de modo implícito podemos hacernos una idea acerca de lo que se disponía en relación a la vía de merced. Así, cuando dispone que no cabe alzada del fallo del Adelantado Mayor de la Corte añade: "Pero bien puede pedir merced al Rey o al enperador, que vea si a al guna cosa de enderezar o de mejorar en aquello que judgò el Adelantado mayor de su corte, e que faga y aquello que toviere por bien e por derecho" y el mismo texto añade: "E el emperador o el rey puedelo fazer caber tal ruego sil quisiere fazer merced, mas non deve dar logar a otro que lo faga porque es grant gracia..." <sup>(558)</sup>

---

(556) Espèculo 5, 14, 11.

(557) Véase el capítulo I, el apartado referente a las suplicaciones.

(558) Espèculo, 5, 14, 14.

A la luz de este texto podemos, en principio, afirmar que sólo al Rey compete conocer las suplicasiones o la merced aunque la ley no es taxativa en su prohibición, sino que deja esta posibilidad a la voluntad del monarca.

En otra ley del mismo Espèculo en la que se reitera la posibilidad de acudir por vía de merced del fallo del Adelantado Mayor de la Corte recoge esta opción por parte del Rey, quien o bien libra él personalmente la petición de merced o puede mandar "al adelantado que lo enderece o - meiore el aquel juyzio"<sup>(559)</sup>. Pero lo que nos interesa realmente destacar es que en el Espèculo no se recoge ningún oficial que tenga como competencia el conocimiento de las suplicasiones; sólo por vía de delegación el Adelantado Mayor de la Corte puede revisar su propio fallo.

El Fuero Real tampoco hace mención expresa a la suplicación ni mucho menos alude algún oficial que estuviera encargado de su conocimiento; tan sólo recoge un curioso procedimiento en el caso de que el Rey cometiera algún "yerro para pedirle merced"<sup>(560)</sup> pero en ningún caso se recoge, como en el Espèculo, la suplicación como recurso judicial encaminado a la revisión de una sentencia definitiva.

---

(559) Espèculo 5, 14, 14.

(560) Fuero Real 1,2, ley única.

Ante el desentendimiento del Rey de administrar justicia personalmente, el recurso de suplicación debió desarrollarse por los cauces de la práctica. Así, nos encontramos con que las Leyes del Estilo recogen una importantísima novedad que hasta el momento ningún otro cuerpo legal había regulado; en los Estilos aparece ya claramente esta delegación por parte del Rey de sus tareas judiciales, no sólo de las ordinarias sino también de la vía de "merced", por ello se hace por primera vez mención expresa al "que oye la suplicación".<sup>(561)</sup>

No podemos precisar, por falta de datos, cuando se produjo exactamente esta nueva situación de hecho, ya que las Leyes del Estilo -de las que falta un buen estudio-, debido a su amplitud cronológica (desde el reinado de Alfonso X al de Fernando IV) no permiten aproximarnos a la fecha, pero, en nuestra opinión, esto debió ocurrir posiblemente en el reinado de Alfonso X.<sup>(562)</sup>

Es de suponer que el Rey delegara en la Corte a una persona encargada de librar las suplicaciones. Sobre quién recaía esta función? No lo sabemos. Tal vez el Adelantado Mayor de la Corte, quizás algún alcalde de Corte...

---

(561) Leyes del Estilo 172, 171.

(562) Alfonso X concedió a Sevilla el privilegio para que sus vecinos librasen en la ciudad todos sus pleitos en cualquier instancia, incluida la suplicación. Véase la confirmación de este privilegio en BENAVIDES: Memorias... doc. 245, pgs. 371-2.

En las Partidas la suplicación va a tener un planteamiento sustantivo distinto, pues se recoge ya como un recurso judicial autónomo.<sup>(563)</sup>

Curiosamente este cuerpo legal -del que tantas veces hemos aludido a su naturaleza eminentemente doctrinal- atribuye al Sobrejuez la facultad de oír las suplicaciones<sup>(564)</sup>, pero sin duda la realidad es bien distinta.

En 1310, posiblemente ante las quejas de que el Rey se desentendía de la administración de justicia, Fernando IV confecciona un ordenamiento encaminado a la reorganización de la justicia de su corte<sup>(565)</sup>, ampliado por las Cortes de Valladolid de 1312<sup>(566)</sup>, en el que dispone que se sentará un día a la semana -los viernes- en lugar público con sus alcaldes para oír las suplicaciones. No sabemos hasta qué punto el Rey llegó a cumplir su ordenamiento, pero creemos que su muerte y la difícil situación en la que quedó el Reino tras ella, supuso un cambio ostensible.

---

(563) Partidas 3, título 24 y VILLAPALOS: Los recursos... p. 294.

(564) Partidas 3, 22, 3 y 3, 23, 19. Esta es otra de las diferencias que existen entre el Adelantado Mayor de la Corte del Espéculo y el Sobrejuez de las Partidas.

(565) BENAVIDES: Memorias... p. 732

(566) CLC. I, 1, p. 198.

No sabemos si a lo largo del reinado de Alfonso XI se volvió a elegir jueces "ad hoc" para el conocimiento de las suplicaciones, pero lo cierto es que a finales de este reinado se han producido cambios importantes en la organización judicial de la Corte.

En el ordenamiento de Villareal se recoge la figura del juez de las suplicaciones<sup>(567)</sup> como juez ordinario que desempeña sus funciones dentro del cuadro administrativo de la Corte. Es más, el propio texto de Villareal<sup>(568)</sup> parece aludir a la existencia de más de un juez de las suplicaciones. En sentido muy parecido se van a expresar igualmente varias leyes del Ordenamiento de Alcalá.<sup>(569)</sup>

No obstante no podemos delimitar exactamente la naturaleza de estos jueces de suplicación. Inspirados tal vez en el Sobrejuez de las Partidas? Posiblemente sí pero no podemos constatarlo.

Lo que es evidentemente incuestionable es que en estos últimos años del reinado de Alfonso XI el juez o jueces de las suplicaciones quedaron configurados como jueces ordinarios y el recurso de suplicación debió generalizarse como un recurso más y acudirse a él frecuentemente.

---

(567) Ordenamiento de Villareal... (ed. GIBERT en AHDE 25, p. 719.)

(568) Ordenamiento de Villareal, 1, p. 719.

(569) Ordenamiento de Alcalá 14, 1 y 2; y 20, 1.

Ante este abuso tal vez va encaminada la petición - que los procuradores hacen a Pedro I de que "non aya en la corte ni alcale ni oydor ordinario de las suplicaciones"<sup>(570)</sup> Pero creemos que la petición en sí no va tan encaminada contra el recurso de suplicación, sino que más bien lo que se persigue es una mayor seguridad procedimental y jurídica al impedir que un oidor o alcalde pueda revisar el fallo que el mismo ha dado en una instancia inferior, en grado de suplicación; por ello se insiste en que no concurra en el juez de las suplicaciones la condición de alcalde de corte u oidor de la Audiencia.

En cualquier manera el Rey se reserva la facultad de conocer las suplicaciones o de encomendarlo "para quelo libre a qui yo touiere por bien"<sup>(571)</sup>. No obstante, lo verdaderamente destacable de este ordenamiento es que aquél sobre el que recaiga la delegación regia de conocer la suplicación, Pedro I le manda que el pleito lo "bea con los otros alcales dela mi corte llamando y letrados, e quelo libren con acuerdo e con consejo dellos todos o dela mayor parte commo fallaren por fuero e por derecho".<sup>(572)</sup>

Se introduce así, pues, el principio de la colegialidad en las suplicaciones, pero lo que no podemos precisar es en qué medida actuaba, frente a los restantes alcaides y

---

(570) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 34-35).

(571) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 35.)

(572) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 58, p. 35).



letrados, el juez de la suplicación. Presidía la reunión de los alcaldes y letrados? Decidía su voto en última instancia? No lo sabemos.

Hemos de destacar también, a tenor de lo dispuesto en el ordenamiento, que la suplicación ha dejado de ser un recurso esencialmente fundado en la equidad<sup>(573)</sup> para convertirse en un recurso judicial que se falla de acuerdo a "fuero e por derecho".

No parece que el advenimiento de la nueva dinastía alterara de modo substancial el régimen de las suplicaciones que estableciera Pedro I<sup>(574)</sup>, sino que Enrique II apenas

---

(573) "ut rigor temperet iustitiae" (Peregrina, fol. 478)

(574) TORRES SANZ (La Administración central ... p. 392) sostiene que con la llegada de Enrique II, "por oposición apasionada al estado de cosas del reinado de su antecesor" ... "produjo la aparición momentánea del juez de las suplicaciones como oficio fijo y ordinario". Para sostener tal afirmación se basa en un texto de las Cortes de Toro que reza: "... Otrosí cada uno de los notarios e el juez delas suplicaciones que puedan escoger e tomar sendos escriuanos..." (CLC. II, 17, p. 169). Creemos que este puede ser interpretado en otro sentido considerando que no se hace una abscripción fija de un escribano al dicho juez (como ve TORRES SANZ) con lo que sí podría afirmarse su permanencia, sino que, a mi modo de ver, el texto esta recogiendo la posibilidad ("que puedan escoger") de tomar escribanos, es decir, cuando se designe un juez de las suplicaciones podrá escoger un escribano para el pleito. Si el juez de la suplicación fuera un oficio "fijo y ordinario" se le hubiera asignado, como hace el mismo texto de Cortes, el escribano pertinente ("Otrosí que los alcaldes de corte que aya cada uno dos escribanos...")

variò el sistema llegando incluso casi a repetir literalmente las palabras de su hermano recogidas en las Cortes de Valladolid de 1351 <sup>(575)</sup> en lo que respecto a la forma de actuar del juez de las suplicasiones (añadiendo sólo la presencia de los abogados). Lo que sí resulta una novedad con respecto a Valladolid es que se ha omitido la facultad de escuchar el Rey personalmente las suplicasiones. Se ha desentendido de oír las suplicasiones definitivamente?. Es difícil llegar a dar una respuesta ante el silencio de las fuentes pero hemos de inclinarnos a pensar que el Rey en todo momento se reservò la facultad de conocer personalmente este tipo de pleitos.

En las mismas Cortes de Toro, en el ordenamiento dado para Sevilla <sup>(576)</sup>, además de confirmàrsele a la ciudad el viejo privilegio que gozaban de poseer en la ciudad un juez propio de las suplicasiones, encontramos un dato de suma importancia.

Los procuradores de Sevilla se quejan al Rey de que "algunos delos vuestros oidores quese entremeten de conosçer aoyr desto (las suplicasiones), "es decir, las sentencias dadas por el juez de las suplicasiones de Sevilla. Este dato es ciertamente interesante desde una doble perspectiva. Por un lado denota la insistente y continua preocupaciòn, palpable a lo largo de toda la Baja Edad Media, de llegar al juicio

---

(575) Comparése las Cortes de Valladolid 1351, pet. 53, p. 34-5 con las Cortes de Toro 1371, pet. 2, p. 191.

(576) Ver Nota 562.

del Rey. Por otra parte encontramos por primera vez - a la Audiencia conociendo causas procedentes de otros tribunales, sin duda extralimitándose de sus competencias, - en apelación.

La crisis del juez de las suplicaciones coincide con el auge de la Audiencia. Esta crisis se manifiesta en la preocupación de hallar un juez independiente, y no un mero comisionado del Rey. La solución la encontraremos en - Briviesca en donde la Audiencia quedará como único tribunal competente para conocer las suplicaciones<sup>(577)</sup>, y de modo excepcional el Rey.<sup>(578)</sup>

---

(577) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 11, y 18, pgs. 376-7 y 384-6).

(578) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, pgs. 476-9).

F. EL JUEZ MAYOR DE VIZCAYA

Pocas son las noticias que encontramos acerca del origen del Juez Mayor de Vizcaya. La historiografía, ya sea antigua<sup>(579)</sup> como la más reciente<sup>(580)</sup>, apenas ha profundizado en su estudio, si bien es verdad que las fuentes no son muy explícitas al respecto y es difícil, a la luz de los datos que poseemos, llegar a emitir un juicio definitivo. Tal vez por ello esta figura haya sido pasada por alto por autores como MARTINEZ MARINA<sup>(581)</sup>, COLMEIRO<sup>(582)</sup> y DANVILA<sup>(583)</sup> a la hora de tratar la administración de Justicia en sus obras de carácter general. Ya en este siglo han hecho referencia a esta institución MENDI ZABAL<sup>(584)</sup> y GARCIA-GALLO<sup>(585)</sup>, ocupándose más concreta-

---

(579) G. DE HENAO: Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria... enderezadas principalmente a descubrir las de las tres provincias Cantabras Vascongadas, Salamanca 1689-1691, 2 vols.

(580) F. SAGARMINAGA: El gobierno y el régimen foral del Señorío de Vizcaya, Bilbao 1928-1935, 4 vols.; J. ITRURIO: Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, Bilbao 1939; D. ARETIO: El gobierno universal del Señorío de Vizcaya. Cargos y personas que lo desempeñaron. Juntas, Regimientos y Diputación, Bilbao 1943; y Los vascos en la Historia de España, Bilbao 1959.

(581) Teoría de las Cortes...

(582) De la constitución ... y Derecho Político...

(583) El poder civil...

(584) Investigaciones acerca del origen... pgs. 257-8.

(585) Las Audiencias en Indias... pgs. 365-66.

mente de èl J. MARTIN RODRIGUEZ, en una pequeña monografía<sup>(586)</sup>, PEREZ DE LA CANAL<sup>(587)</sup> y màs recientemente TORRES SANZ<sup>(588)</sup>.

La incorporaciòn del Señorío de Vizcaya a la corona de Castilla en 1379<sup>(589)</sup>, en el reinado de Juan I, da lugar a la apariciòn en la Corte de un Juez con jurisdicciòn privativa sobre el Señorío.

Algunos autores<sup>(590)</sup> han querido ver el origen de esta instituciòn en un Juez que residía en la villa de Bermeo al que iban todas las apelaciones de los otros alcaldes del señorío<sup>(591)</sup>, y de èl, aún se podía, en última instancia, apelar al Señor.

Al recaer el Señorío en la persona del Rey de Castilla, este esquema, que al parecer se mantuvo hasta esa fecha, sufre inevitables alteraciones. Parece que la Sala

---

(587) La justicia en la corte... pgs. 427-8.

(588) La Administraciòn central... pgs. 362-4.

(589) Crònica de Juan I, cap. 2, p. 127, véase también G. MONREAL: Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya, Bilbao 1974.

(590) W. DE HENAO: Averiguaciones..., t. I, p. 231 y SARMINAGA: El gobierno... t. I, p. XI.

(591) Véase, por ejemplo, el privilegio de 1300 que don Diego Lopez de Haro, Señor de Vizcaya en el que da fueros de poblaciòn a la villa de Bilbao: "...et -

de Vizcaya quedò instituida en 1385<sup>(592)</sup>, pero lo cierto es que hasta 1390 no tenemos noticias acerca de la existencia de este Juez especial encargado de oír las apelaciones procedentes de la tierra de Vizcaya<sup>(593)</sup>. Pero lo que realmente importa destacar no es tanto la posible conexiòn con el juez de Bermeo como la integraciòn o creaciòn de un Juez que se va a insertar en el aparato judicial de la corte y, como ya señalò el prof. GARCIA-GALLO<sup>(594)</sup>, que da equiparado en funciones a los restantes alcaldes de los territorios de la Corona.

El silencio de las fuentes consultadas apenas no dejan ver si la figura del Juez de Vizcaya se viò afectada por

---

(591) /...que hayades vuestros alcaldes, et jurados... por que cumplades de derecho a todo ome que vos lo quier demandar con alzada que pueda tomar la parte que se agraviare para ante los alcaldes et omes buenos de Bermeo, et dende fuera para ante mi" (BENAVIDES: Memorias... doc. 16o, pgs. 218-9).

(592) MARTIN RODRIGUEZ: Figura històrico-jurídica... p. 644. Este autor se basa para dicha afirmaciòn a MENDEZ SILVA: Catálogo real y genealógico de España. He tratado de comprobar este dato pero me ha sido im posible localizar la citada obra.

(593) Crònica de Juan I: "e aun agora, magüer es vuestra (Vizcaya), non consienten que Alcalde vuestro los juzgue e oyga sus apelaciones, salvo que ayan Alcalde apartado en la vuestra corte para ella" (Crònica de Juan año 1390, cap. II, p. 127).

(594) Las Audiencias en Indias... p. 366.

algún cambio sustancial<sup>(595)</sup> ya que en los Ordenamientos de Cortes, tan ricos en referencias a la administración de justicia, hasta 1462 no hacen alusión a él<sup>(596)</sup>. Muchos más testimonios nos han llegado del reinado de los Reyes Católicos<sup>(597)</sup> en el que se regula la institución dentro de las sucesivas Ordenanzas que para organizar la Audiencia se han venido dictando<sup>(598)</sup>, siendo ahora cuando se le da el apelativo de "Juez Mayor de Vizcaya"<sup>(599)</sup>. Si hasta ahora las referencias a este Juez han sido escasas y poco sabemos de su actuación, en las Ordenanzas de la Audiencia podemos conocer algo más acerca de sus funciones y atribuciones. Se le otorga la categoría de oidor<sup>(600)</sup> e incluso conocemos el caso de Alfonso Sanchez de Hermosilla que ostentaba el oficio de oidor y el de Juez de Vizcaya simultáneamente.<sup>(601)</sup>

(595) Del reinado de Juan II tenemos algunos datos que hacen referencia a este Juez. Así dos sentencias de 1426 y 1427 en la que encontramos al Juez Mayor de Vizcaya que es, además, corregidor de Madrid, librando por comisión unos pleitos de términos (vid. J. RODRIGUEZ SOLER: Madrid, sus pleitos y los letrados de la villa, pgs. 80 y 82-84). También la Crónica, en 1429, menciona al Doctor Alonso García Cherrino, Juez Mayor de Vizcaya, procurador Fiscal y del Consejo (Crónica de Juan II, año 1429, cap. 22. p. )

(596) Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, 9, p. 709).

(597) R.G.S. 1480, marzo 28, fol. 328 en contramos a Alfonso Sanchez Hermosilla, "oydor y Juez de Vizcaya". Cinco años más tarde lo encontramos de nuevo desempeñando este oficio (R.G.S. 1485, marzo 2, fol. 119).

(598) Ordenanzas de Córdoba 1485: 6, 7, 22, 23; Ordenanzas de Piedrahita 1486: 7, 8, 27, 28 y Ordenanzas de Medina del Campo 1489 (Libro de Bulas y Pragmáticas, 5o v05lv y 54).

(599) Ver notas anteriores.

(600) MARTIN RODRIGUEZ: Figura histórico-jurídica... p. 647.

### COMPETENCIAS

El Juez de Vizcaya tiene competencia exclusiva para resolver en apelación todos aquellos pleitos procedentes - del Señorío de Vizcaya<sup>(602)</sup>. Desconocemos si conocía de algún tipo de pleitos en primera instancia, como, por ejemplo los casos de corte que se produjeran en el Señorío o cualquier otro tipo de pleito que correspondiese privativamente a la jurisdicción real, pero la equiparación con los alcaldes de la Corte nos inclina a pensar que tendría las mismas competencias que éstos. Es de suponer que de la sentencia del Juez Mayor de Vizcaya cabría suplicación al Rey hasta 1485 en el que las Ordenanzas de Córdoba disponen que la suplicación de la sentencia del Juez Mayor de Vizcaya sea ventilada por el Presidente de la Audiencia o "si èl non quisiere conosçer de ella, que se prosiga en qualquier de nuestras audiencias donde el dicho presidente mas quisiere, pero que concluso el pleito para en grado de suplicación sea traído el proçeso a la nuestra audiencia ante los oidores de la sala donde el dicho presidente quisiere que se vea, e allí se vea e se ordene la sentençia, e la firmen los oidores, para que el nuestro presidente - como juez de las suplicaciones la pronuncie en grado de

---

(601) /...  
Vid. nota 598.

(602) Crònica de Juan I, año 1390, cap. 2, p. 127 y Fuero de Vizcaya, tit. 1. leyes 13-16 y 19.



suplicaçion e la firme, e de tal sentençia non aya suplicaçion nin otro grado alguno para la impugnacion nin para ella conosçer"<sup>(603)</sup> No obstante, en las Ordenanzas de Medina del Campo, se prevee la posibilidad de una segunda suplicacion o de las "mil y quinientas" en los casos en que es ta se pueda admitir.<sup>(604)</sup>

---

(603) Ordenanzas de Córdoba 1485: 22; Ordenanzas de Piedrahita 1486; cap. 27. Ordenanzas de Medina del Campo (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 54 v.

(604) Ordenanzas de Medina del Campo 1489 (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 54 v.

#### CAPITULO IV

#### LA AUDIENCIA

#### CAPITULO IV

#### LA AUDIENCIA

Uno de los problemas más vidriosos y difíciles que se le presentan al estudioso de cualquier institución es, sin lugar a dudas, el de precisar el origen de la misma y delimitar con exactitud el momento en el que la institución aparece configurada de tal manera que adquiere entidad propia, en base a una regulación jurídica provocada por determinadas situaciones de hecho de muy variada índole.

Nos encontramos, pues, ante una difícil encrucijada, máxime si tenemos en cuenta que las situaciones de hecho se producen, generalmente, casi imperceptiblemente para los coetáneos y puede transcurrir, a veces, un gran lapso de tiempo hasta que sean valoradas y, posteriormente, reguladas por el Derecho.

Ha sido la opinión generalizada durante mucho tiempo - que la Audiencia<sup>(1)</sup> fue una creación de Enrique II en las Cortes

---

(1) Sobre la Audiencia y Chancillería puede verse, entre otros: A. CORNEJO: Diccionario histórico y forense del Derecho Real de España, Madrid 1779, voz "Chancillería", pgs. 134-40 y voz "Corte", pgs. 200-2; J. SEMPERE Y GUARINOS: Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las Chancillerías de Valladolid y Granada, Granada 1976 y Historia del Derecho Español, Madrid, 1846, pgs. 304, 307-17 y 390-98; F. MARTINEZ MARINA: Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla y especialmente sobre el código de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, Madrid 1808, pgs. 57-9, 67, 146-54 y

de Toro de 1371. En este sentido se han manifestado autores antiguos como HUGO DE CELSO<sup>(2)</sup>, COVARRUBIAS<sup>(3)</sup>, G. DE MONTERROSO<sup>(4)</sup>, MARTINEZ MARINA<sup>(5)</sup>, SEMPERE Y GUARINOS<sup>(6)</sup>,

- 
- (1) /.....177-78 y Teoría de las Cortes o grandes Juntas nacionales de los reinos de León y Castilla, Madrid 1813, t. II pgs 248-332; M. COLMEIRO: Curso de Derecho Político, Madrid 1873, pgs. 560-69; M. DAVILA: El Poder civil... t. I. pgs. 165-7 y 533-35; F. MENDIZABAL: Investigaciones acerca del origen, historia, organización de la Real Chancillería de Valladolid, en Revista de Archivos y Bibliotecas y Museos 30 (1914) pgs. 61-72, 243-64, 737-52 y num. 31 (1914) pgs 95-112 y 459-67; E. MAYER: Historia de las Instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los siglos V al XV, Madrid 1926, t. II pgs. 26, 41 y 70-82; N. GUGLIELMI: La Curia Regia... num. 23-24, pgs. 157-267 y num. 28 pgs. 43-101; J. M FONT RIUS: voz "Audiencias" en Diccionario de Historia de España, t. I. pgs. 404-6; L. G. DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones... pgs. 559-67; R. GIBERT: voz "Audiencias" en Gran Enciclopedia Rialp t. III, pgs. 349-51; M. A. PEREZ DE LA CANAL: La Justicia de la Corte... pgs. 420 y ss.; A. GARCIA-GALLO: Las Audiencias en Indias... pgs. 359-432 y más recientemente D. TORRES SANZ: La Administración central... pgs. 401-29.
- (2) Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de Castilla abreviadas y reducidas en forma de repertorio decisivo, Medina del Campo 1553, p. 67.
- (3) Practicarum quaestiones... cap. V, p. 469.
- (4) Practica Civil y Criminal... Madrid 1603, fol. 5.
- (5) Teoría de las Cortes... t. II, p. 292.
- (6) Observaciones... p. 37, e Historia del Derecho... p. 394.

y siguiendo a estos CHAPADO<sup>(7)</sup>, BARRIO Y MIER<sup>(8)</sup>, MENDIZABAL<sup>(9)</sup> PISKORSKI<sup>(10)</sup>, hasta llegar a los más recientes como BENEYTO<sup>(11)</sup>, G. DE VALDEAVELLANO<sup>(12)</sup>, L. SUAREZ<sup>(13)</sup>, R. GIBERT<sup>(14)</sup> y L. PASCUAL MARTINEZ<sup>(15)</sup>. Si bien es verdad que no faltan autores quienes confunden la Audiencia con otras instituciones<sup>(16)</sup> o silencian su origen.<sup>(17)</sup>

En los últimos años, a la luz de nuevas investigaciones, esta postura ha sido objeto de revisión. Así el prof. GARCIA-GALLO<sup>(18)</sup> en un reciente trabajo a propósito de las Audiencias en Indias<sup>(19)</sup>, no da por cierta ninguna fecha al respecto. PEREZ DE LA CANAL<sup>(20)</sup> tampoco precisa fecha viendo el origen de la Audiencia en el conjunto de personas que asesoraban al Rey cuando éste impartía justicia.

(7) Historia General del Derecho... p. 609.

(8) Historia del Derecho Español. p. 221-2.

(9) Investigaciones... p. 65.

(10) Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520, Barcelona 1930, p. 187, si bien es verdad, este autor señala que con anterioridad a esa fecha se encontraba citada por las Cortes de 1338 (?) y 1369 (p. 22).

(11) Historia de la Administración... pgs. 285-6.

(12) Curso de Historia de las Instituciones... p.

(13) Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XV, pgs. 260-1.

(14) Enciclopedia Rialp, "voz" "Audiencia", t. III, p. 349.

(15) La Cancillería de la Corte Castellana durante el Reinado de Enrique II, p. 180-1, ya citado, y reitera esta misma afirmación en su otro trabajo Notas para un estudio de la cancillería castellana en el siglo XIV, en M.M.M. IV, p. 184.

Ha sido el profesor VILLAPALOS<sup>(21)</sup> el primero que, apoyándose documentalmente, adelantó el origen de la Audiencia al reinado de Pedro I<sup>(22)</sup> y dejó abierta la posibilidad de que tal vez existiera en el reinado anterior. Opinión similar ha sostenido DIAZ MARTIN<sup>(23)</sup>, para quien la labor institucionalizadora que caracterizó a las Cortes de Toro de 1371 recogió, además de lo legislado por Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá, todo aquello que había ido surgiendo en el reinado de Pedro I.<sup>(24)</sup>

- 
- (16) /...Así P. CANTOS BENITEZ: Escrutinio de maravedises, y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes, Madrid 1763, pgs. 82 y ss. Para este autor la Audiencia es creación de Juan II, p. 80; ANTEQUERA: Historia de la Legislación, p.
- (17) DANVILA: El poder civil... p. 533.
- (18) En un primer momento sostenía, con la mayoría de los autores, la creación de la Audiencia por Enrique II, véase, por ejemplo, su Curso de Historia del Derecho Español, p. 309 y Alcaldes Mayores y Corregidores en Indias en sus Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 1972, pgs. 707-8.
- (19) Las Audiencias en Indias, pgs. 364-5.
- (20) La justicia en la Corte... p. 421.
- (21) Los recursos... p. 258.
- (22) BENAVIDES en una nota de la colección documental de las Memorias ya hizo hincapié en ello al encontrarse con una ejecutoria de la Audiencia de Pedro I: "Es la ejecutoria más antigua que hasta ahora ha llegado a mi noticia se haya despachado por la audiencia del Rey, pues anteriormente se libraban por sus alcaldes" (Memorias, p. 600)
- (23) Los Oficiales de Pedro I, p. 35, nota la.
- (24) "Caso similar el de la Audiencia, que aunque también se debe al primer Trastámara su plena institucionalización, se observa perfectamente una completa actividad en el reinado anterior" (vid. nota anterior).

Finalmente, TORRES SANZ<sup>(25)</sup> aporta documentación<sup>(26)</sup> por la que se puede afirmar sin lugar a dudas la existencia de un órgano al que se le comienza a denominar en las propias - fuentes "Audiencia" en el reinado de Alfonso XI.

El documento más antiguo que hemos encontrado al respecto, data de junio de 1346<sup>(27)</sup>, no obstante, creemos que no es posible precisar con exactitud una fecha ya que, probablemente, al igual que ocurre con otras instituciones, ésta no nació de un modo deliberado, es decir, por una norma que "ex nihilo" tenga por objeto la creación de la nueva institución, sino que, por el contrario, el nacimiento de la Audiencia se trata más bien del lento resultado de una evolución de órganos anteriores que han de adecuarse a la realidad del momento ante unas nuevas situaciones de hecho. En todo caso, y en esto coincido plenamente con TORRES SANZ, podemos afirmar que, al menos desde los últimos años - del reinado de Alfonso XI, en la Corte hay un nuevo organismo con funciones todavía no bien delimitadas al que se le viene denominando "Audiencia" y a sus miembros "oydores", y que es - sin lugar a dudas el origen del Tribunal de la Audiencia. Negar esta afirmación sólo sería posible para aquel historiador que me todológicamente utilice los criterios de la más pura dogmática - jurídica y se desentienda de la problemática que regula el Derecho en un momento dado. Ciertamente, la Audiencia que recogen

---

(25) La Administración central... pgs. 407-8.

(26) Se echa de menos la falta de un estudio a fondo del reinado de Alfonso XI, de capital importancia, creemos, para el desarrollo institucional bajomedieval castellano. La escasa documentación publicada Alfonso XI junto a la insuficiencia de la Crónica del dicho Rey -interrumpida en los años de las reformas alfonsinas, nos hacen seriamente dificultoso y oscuro los últimos años de este monarca.

los documentos de Alfonso XI y Pedro I no es la misma que remoda Enrique II en Toro o la Audiencia eminentemente técnica de los Reyes Católicos, pero no por ello debemos negar una continuidad entre ellas. Las situaciones y problemas que la vida social plantea a al hombre son siempre los mismos, aunque, al variar alguna de sus circunstancias, la solución jurídica de estos problemas pueda ser alterada. No podemos olvidar que cada institución tiene su evolución propia y por ello puede verse sometida a distintas regulaciones, que caracterizarán cada una de sus etapas, pero en ningún caso podemos dejar de tener presente ni la realidad social que ha dado lugar a la institución ni aquellos u otros diferentes aspectos y problemas implícitos en la situación de hecho y en las distintas valoraciones que determinan su regulación.

Qué situación de hecho ha dado lugar al nacimiento de la Audiencia?. Hasta ahora los que se ha preocupado de su estudio han dado distintas respuestas a este interrogante, pero antes de entrar a analizar cada una de las hipótesis hemos de hacer una importante precisión.

---

(27) /...A. UBIETO ARTETA: Colección diplomática de Cuéllar, Segovia 1961, doc. 106, pgs. 215-6. Hemos insistido en la documentación inédita existente en el Archivo Histórico Nacional sobre estos años, pero la búsqueda, hasta el momento, ha sido infructuosa.



La voz "audiencia" durante los siglos bajomedievales tiene distintas acepciones. En primer lugar, en el sentido más amplio del término, "audiencia" es el acto de oír cualquier - exposición oral o petición con independencia de que sea judicial o no<sup>(28)</sup>. Por tanto, "fazer abdiencia" está haciendo referencia a la acción de oír esas peticiones por parte de las personas u órgano competente<sup>(29)</sup> a las que se les designa, como ya señaló el profesor GARCIA-GALLO<sup>(30)</sup> con el nombre propio del oficio que desempeñan, sea el rey o cualquier otro oficial. Es a partir de mediados del siglo XIV cuando nos empezamos a encontrar el término "audiencia" para designar a un órgano concreto que es competente para conocer determinados asuntos<sup>(31)</sup>. Por extensión todo aquel que está en "audiencia" y es competente para - conocer del asunto, se le denomina "oydor"<sup>(32)</sup>, nombre genérico que acabará por hacerse específico para designar a aquellas personas pertenecientes al Tribunal de la "Audiencia".

(28) S. COVARRUBIAS: Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid 1611 voz "Audiencia": dar audiencia, oír al informante", p. 167.

(29) Cortes de Zamora 1301: "si algunas cartas sacares desafortadas dela mi casa sin abdiencia..." (CLC. I, 8, p.153) "Mandamos que algunos non cayan en plazo nin es sennal nin en rrebeldia ante los alcalles fasta que el alcalle se leuante dela abdiencia. Et si el alcalle feziere dos abdiencias ante de comer, la parte que paresçiere enla segunda abdiencia non sea auido por rrebelde nin caya en enplazamiento nin en sennal nin en rrebeldia. Et eso mismo sea guardado si el alcalle feziere dos abdiencias despues de comer e la paresçier enla segunda" (Ordenamiento de Alcalá, 2, 3).

(30) Las Audiencias en Indias, p. 362.

El profesor VILLAPALOS<sup>(33)</sup> ha visto una continuidad entre el Tribunal de la Chancillería (alcaldes de Corte) y la Audiencia, pues considera que la Audiencia funciona con los mismos elementos que aquél.<sup>(34)</sup> Sostiene, igualmente, a modo de hipótesis - que el término "Audiencia" fué extraído del modelo romano-canónico de la "Episcopalis Audientia"<sup>(35)</sup>, al que hay que añadir la imagen de los tribunales de la Curia Romana.<sup>(36)</sup>

El profesor GARCIA-GALLO<sup>(37)</sup>, por su parte, considera - que "la Audiencia es un nuevo órgano desgajado del antiguo Consejo real, que nada tiene que ver con el antiguo tribunal de los alcaldes de la corte". Para el citado profesor la Audiencia surge cuando "al sentarse el rey públicamente todas las semanas para oír las peticiones de sus súbditos, o recibirlas por escrito, dada la variedad de ellas, se hace necesario para mejor decisión separar las que son de gobierno o merced de las que se refieren a hechos de justicia civil o criminal, y diferenciar las personas

(31) /... Así por ejemplo, véase: T. DOMINGO PALACIOS: Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, t. I, pgs. 317-9; Colección diplomática de Cuéllar, doc. 108, pgs. 217-8; A.H.N. Sec. Clero, carp.: 3501, núm. 3; MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 38, pgs. 68-9; Academia de la Historia, Colección Morales, t. 16, fol. 331, A.H.N. Ordenes Militares, San Marcos de Leon, carp. 375, num. 80; Academia de la Historia. Colección Salazar, D-9, fol. 141 v-r entre otros.

(32) Partidas 2, 18, llo: "...a alçose al Rey, e amas las aprtes vinieron en juyzio ante Nos, Ferrand Yuañes el Gallego, e Domingo Yuañes, Oydores, e Judgadores de las alçadas de Casa del Rey..."

(33) Los recursos... pgs. 257-60.

(34) Los recursos... pgs. 258 y especialmente 259-60.

(35) Los recursos... pgs. 260.

(36) Los recursos... p. 260.

(37) Las Audiencias en Indias... pgs. 364-5.

que han de asesorar al rey en unas y otras".<sup>(38)</sup> Es decir, el profesor GARCIA-GALLO hace más hincapié en una distinción de funciones, por una lado gobierno y merced que quedarían - bajo las competencias del Consejo real, por otro las de justicia.

PEREZ DE LA CANAL también considera que la Audiencia tiene su origen en el conjunto de personas que asesoraban al rey cuando éste ejercía por sí mismo la justicia, pero ante la necesidad de atender otros asuntos tuvo que desentenderse de administrar personalmente la justicia y "en tales casos los que le acompañaban en esa tarea realizarían por sí solos la audiencia".<sup>(39)</sup>

TORRES SANZ va mucho más lejos pues considera que el origen de la Audiencia es el resultado práctico de una proyección parcial del Adelantado Mayor de la Corte, que, como vimos en su momento, para este autor este oficial constituía la "plasmación teórica de las necesidades que, en orden a la administración de justicia, se plantearon a la monarquía castellana bajo-medieval".<sup>(40)</sup> No obstante, para este autor, los factores que determinaron la "emergencia histórica de la Audiencia" fueron la administración personal de la justicia por parte del Rey, rodeado

---

(38) Las Audiencias en Indias... pgs. 364-5.

(39) La justicia en la Corte... p. 421.

(40) La Administración central... p. 401.

de juristas asesores y la tendencia a la colegialidad como principio inspirador de las actuaciones judiciales al más alto nivel, sin olvidar el lógico y habitual apartamiento del monarca de las tareas judiciales.<sup>(41)</sup>

En realidad creemos que las opiniones de estos cuatro autores son ciertas, pero, a mi modo de ver, comprenden sólo algunos de los aspectos que incidirán en el nacimiento de la Audiencia, por ello, consideramos necesario hacer algunas puntualizaciones.

En primer lugar hay un hecho esencial, sin el que no es posible comprender el nacimiento de la Audiencia; este hecho, al cual ya nos hemos referido varias veces, es la separación material que hay entre el Rey y sus órganos judiciales de la Corte. Esta ruptura se había producido ya desde el reinado de Sancho IV y se debía esencialmente a razones de operatividad por parte del Rey, quien con un reducido número de oficiales (cancillería de la poridat) podía dar mayor agilidad y rapidez a sus continuos desplazamientos por el Reino, y también a razones de seguridad jurídica y economía procesal para las partes.

Producida esa ruptura, no podemos olvidar en ningún momento que el Rey es el máximo juez del Reino y como tal ha de administrar justicia a todo aquel que se la demande, como fina-

---

(41) La Administración central... p. 405.

nidad fundamental que es, de su propio poder<sup>(42)</sup>. Cabían entonces dos alternativas. O bien el rey ha de llevar consigo algunos alcaldes de la Chancillería para que administren o le asesoren a la hora de impartir justicia, como de hecho pudo ocurrir, pero que, en definitiva, se restablecía la falta de operatividad; o bien aquellos litigios que llegaban al rey en sus desplazamientos por el reino tenía que librarlos él personalmente, pero dado sus escasos conocimientos de técnica jurídica, se veía precisado de asesoramiento entre aquellos cercanos a su persona<sup>(43)</sup>. Por tanto, - en nuestra opinión, no existe ningún entronque posible entre los alcaldes de Corte -unidos a la Chancillería- y la Audiencia aunque ello no sea óbice de admitir que en aquellos casos en los que coincidía la persona del Rey con la estancia de la Chancillería, los alcaldes de ésta actuaran como asesores cuando el Rey impartía justicia personalmente.

---

(42) Baste recordar la insistencia con que una y otra vez las Cortes le piden al Rey que dedique algún día a la semana para librar los pleitos: Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 42, y 44, pgs. 93-4), Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 15 y 16, p. 176), Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1. 185), Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 36, p. 205), Cortes de Madrid 1329 -- (CLC. I, 1, p. 402), Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 22, p. 469).

(43) Las fuentes nos hacen referencia a "hombres buenos e sabidores de derecho" que acompañan al rey, bien diferenciados de sus alcaldes de Corte (Cortes de Valladolid 1307, CLC. I, 1, p. 185; Cortes de Valladolid 1312, -- CLC. I, 1, p. 198; Cortes de Valladolid 1322, CLC. I, 4, p. 338; Cortes de Madrid 1329, CLC. I, 1, p. 402; Crónica de Fernando IV, cap. 13, pgs. 137 y ss. y Crónica de Alfonso XI, cap. 139, pg. 265).

Por tanto, creemos, que la Audiencia surge ante una - necesidad, ante una situación de hecho muy concreta que viene determinada por el reconocimiento general por parte de toda la comunidad de la suprema jurisdicción, o mayoría de justicia, del Rey, que hace que, con independencia de que se pueda acudir a sus alcaldes en la Chancillería, cualquier miembro de la comunidad pueda presentarse directamente ante el monarca solicitando el restablecimiento de acuerdo a derecho de una situación jurídica que considera lesionada, ya sea por el Rey o sus oficiales, o por cualquier otro miembro de la comunidad.

Esta necesidad de administrar justicia personalmente separado de su cuerpo técnico de alcaldes de Corte, es lo que se lleva al monarca a pedir asesoramiento de aquellos otros oficiales y consejeros<sup>(44)</sup> que le acompañan habitualmente en sus desplazamientos y que están presentes en la "audiencia" pública. Sin duda alguna necesariamente no tenían que participar todos - aquellos miembros que estuvieran presentes, sino que hemos de

---

(44) Por ello creemos que es correcta la afirmación que hace el profesor GARCIA-GALLO cuando dice que la Audiencia es un "órgano nuevo desgajado del antiguo Concejo Real" (Las Audiencias., p. 364). Por Consejo Real no debemos entender el órgano técnico que se institucionaliza a finales del siglo XIV, sino que hemos de interpretarlo como el conjunto de personas que con independencia de su condición social o conocimientos técnicos, han servido en todo tiempo de asesores al Rey para la resolución de cualquier tipo de cuestiones ya sean de justicia, de gobierno, militares o de merced.

suponer que sólo aquellas personas que por sus conocimientos técnicos o por la confianza que el propio Rey tuviera depositada en ellos, serían los consultados para resolver cada caso concreto.<sup>(45)</sup>

La consulta real podía limitarse a una persona o a varias, siendo esta última alternativa, pensamos, la más común dado que, como acabamos de ver, siempre que en las Cortes se insiste que el Rey haga justicia personalmente, aparece acompañado de sus alcaldes y de otros "omes buenos e sabidores" en los que se está pensando para que actúen de asesores técnicos en derecho en las causas que son presentadas al monarca. Lo que ocurre es que al estar ausentes los alcaldes de la corte, serán los "omes buenos e sabidores"<sup>(46)</sup> quienes actuarán al lado del Rey prestándole su asesoramiento. Aquí precisamente radica, desde nuestro punto de vista, el origen de la actuación colegiada que caracterizará a lo largo de toda la Edad Media a la Audiencia, con independencia de que el fallo aparece siempre dado en nombre del Rey como si él mismo hubiera dictado sentencia sin el concurso de ninguna otra persona.<sup>(47)</sup>

---

(45) Prueba de estas afirmaciones es que de los dos primeros oidores de que tenemos noticias, ninguno es alcalde de corte, sino que uno, Ferrant Sanches, es Notario Mayor de Castilla, y el otro, Johan Estevanez, es el Canciller del Rey (Colección Diplomática de Cuéllar, doc. 106, p. 215-6)

(46) Ciertamente la expresión es muy ambigua. Quiénes son estos "omes buenos e sabidores"? Son letrados que actúan como consejeros sin oficio de alcaidía? Desde luego el adjetivo "sabidores" están haciendo referencia a que son técnicos o peritos en derecho; sabemos, también que uno de los rasgos más característicos de estos siglos bajomedievales es el incremento de la complejidad administrativa

La primitiva "Audiencia" la hemos de buscar, por tanto, -y en ello coincidimos plenamente con los autores antes citados- en la reunión conjunta del Rey con sus asesores que tenía lugar públicamente al menos un día a la semana<sup>(48)</sup> para librar las -peticiones" que ante él se presentaran.

No obstante, a tenor de las repetidas e insistentes peticiones por parte de las Cortes, no es difícil imaginar que el -

- 
- (46) /...y con ello una potenciación, dentro del círculo cortesano, de los juristas, clérigos y hombres versados en Derecho en quienes el Rey deposita su confianza por encima de su condición social o calidad nobiliaria, anteponiéndose sus aptitudes personales, con lo que, de hecho, se contrarresta la influencia que hasta entonces había ejercido la nobleza (Vid. S. MOXO: La sociedad política castellana en la época de Alfonso XI en Cuadernos de Historia, anexos de Hispania, núm. 6, pgs. 187-326).
- (47) Fenómeno similar ya vimos que sucedía en la Curia Regia en la que resolvía los "Iudices curiae" pero el fallo aparecía siempre dado por el Rey.
- (48) Esta periodicidad se ve alterada con el tiempo. En las Cortes de Zamora de 1274, se establecieron en tres los días que el rey se sentaría públicamente a librar los pleitos, lunes, miércoles y viernes (CLC. I, 42, p. 93). Ya en las Cortes de Medina de 1305 le piden que tenga por bien "que un día o dos de la semana" se sienta a oír las querellas (CLC. I, 15, p. 176), para que tan sólo dos años más tarde, en las Cortes de Valladolid de 1307, sea sólo un día "qual yo -dice el rey" touiere por bien" (CLC. I, 1, p. 185). Ese día es fijado en el viernes por las Cortes de Valladolid de 1312 (CLC. I, 1, p. 198), pero en el reinado de Alfonso XI ha sido de nuevo aumentado a dos días en las Cortes de Madrid de 1329 (CLC. I, 1, p. 402), no obstante, diez años más tarde, ante el caso omiso por parte del Rey, le dan a optar entre uno o dos días a la semana (Cortes de Madrid 1339, CLC. I, 22, p. 469). Definitivamente parece quedar establecido en un día por los textos de las Cortes de Alcalá de 1348 (CLC. I, 23, p. 600-1) y de León 1349 (CLC. I, 21, p. 634).



Rey no cumplía con esta obligación con la frecuencia deseada por el Reino y por ello, a menudo, dada la trascendencia de su función judicial, le insisten una y otra vez en que ha de ejercer personalmente su condición de juez.<sup>(49)</sup>

El desentendimiento paulatino por parte del Rey del ejercicio personal de la función judicial ante la necesidad de atender otros asuntos de mayor importancia de política interna, fué, posiblemente, la causa que motivó al Rey a comisionar a aquellos que sin duda le venían asesorando cuando él impartía justicia personalmente, a seguir conociendo de los pleitos y peticiones que se presentaban en su "audiencia" aunque él no se hallara presente.

Es ciertamente muy significativo que en los primeros documentos que hemos encontrado referentes a la Audiencia se haga en todos ellos especial hincapié en el carácter de su - -

---

(49) Así Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 42, y 44, p. 93) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 15 y 16, pgs 176-7); Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 1, p. 185); Cortes de Valladolid 1512 (CLC. I, 36, p. 196); Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 28, p. 309); Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 22, p. 469); Cortes de Alcalá 1348 (CLC. I, 23, p. 600); Cortes de León 1349 (CLC. I, 21, p. 634); Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 48, p. 28); Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 1, p. 287); Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, 17, p. 329); Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 5, p. 381) y Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 33, p. 120).

su actuación delegada del Rey<sup>(50)</sup>, siendo especialmente esclarecedora al respecto una provisión en la que Alfonso XI comunica al concejo de Cuéllar que quedaban libres de entregar los 360 maravedies que les había reclamado anteriormente como faltos de entregar por la fonsadera correspondiente al año 1340<sup>(51)</sup>. En ella en la que se narran las circunstancias del pleito, se hace referencia a cómo los procuradores del concejo de Cuéllar fueron a la corte "ante Ferrant Sanchez, notario mayor de Castiella e Johan Estevanez, nuestro chanceller, oydores, por nuestro alvalá de comisión de los pleytos y debadas...", insistiéndose al final de la misma de que "Ferrant Sanchez, notario mayor del rey en Castiella, e Johan Estevanez, chanceller del dicho señor oydores delos dichos pleytos por alvala del rey, la mandaron dar de parte del dicho Señor".

Salvo estos tres documentos señalados, ha sido para nosotros verdaderamente infructuosa la búsqueda de pruebas documentales en los años inmediatamente anteriores y posteriores que pudieran aportarnos algún dato más al respecto, pero sin

---

(50) Véase la carta de Alfonso XI fechada en 1346, al concejo de Madrid ordenándole repartir la suma de 3.700 mrvds. para pagar a los procuradores de la villa con motivo de la colocación en su término de unos mojones. (MILLARES: Documentos del Archivo general de la Villa de Madrid, serie II doc. 13, pgs. 49-51) o fechada también el mismo día y año la provisión de Alfonso XI dando licencia a la villa de Madrid para el establecimiento de una escuela de gramática y pensiones de su profesor (T. DOMINGO PALACIOS: Documentos del Archivo general de la villa de Madrid, t. I pgs. 297-9). En ambas reza al final: "...los oydores del audiencia del Rey la mandaron dar de parte del dicho sseñor".

(51) Colección diplomática de Cuéllar, doc. 106, pgs. 215-6.

lugar a dudas esta actuación delegada o "extraordinaria" perdió el carácter de excepcionalidad que venía dado por la ausencia del Rey en la Audiencia para convertirse en el modo ordinario de librar los pleitos y peticiones que ante ella se presentaban. - Así, dos años más tarde se puede ya afirmar que la Audiencia viene desempeñando estas funciones permanentemente, con reuniones diarias, a tenor de lo dispuesto por las Cortes de Alcalá de 1348, en las que se le pide al Rey que para que los pleitos fueran mejor librados se sienten un día a la semana "a librar las peticiones que los de la nuestra audiencia guardan para nos en el libramiento que ellos hacen, et que este día fuese cierto, por que lo supiesen e nos apresentasse sus peticiones". (52)

El texto, a mi modo de ver, no puede ser más claro al respecto, pues en él vemos una periodicidad manifiesta en las reuniones de la Audiencia, <sup>(53)</sup> que se hacen en ausencia del Rey y, lo que es más importante, se ve que existe una delimitación de competencias: todas las peticiones se presentan en la Audiencia pero hay unas -no sabemos cuáles- que los de la Audiencia reservan para que sean libradas exclusivamente por el Rey.

---

(52) Cortes de Alcalá 1348 (CLC. 23, pgs. 600-1).

(53) Es difícil precisar si las reuniones son diarias o cada tres días. Me inclino a pensar que son diarias por que en primer lugar le dan opción al Rey para que él elija el día que más le convenga y en segundo lugar, el propio rey, después de señalar el lunes como el día que tiene por bien sentarse en la Audiencia, añade: "et quando este dia non nos pudieremos asentar por algun embargo que acaesca, asentarnos hemos otro dia dela semana en emienda deste" (CLC.I, 23, pgs. 600-1), es decir, cualquier otro día sin especificar si es miércoles o viernes.

Desde luego es imposible, a la luz de los datos que poseemos, precisar cuando se ha producido la independencia de actuación entre la Audiencia y el Rey. Los documentos antes citados de 1346 nos están ya señalando que se está produciendo la escisión, que en 1348 parece que ya es un hecho<sup>(54)</sup>, actuando la Audiencia como órgano con entidad propia al que el Rey asiste tan sólo un día a la semana.

No obstante, pese a las limitaciones documentales que tenemos, creemos que se pueden destacar algunas de las características de esta Audiencia primitiva.

En primer lugar, dado su carácter delegado, la Audiencia actúa como si fuera el propio Rey quien estuviera librando<sup>(55)</sup> los asuntos, por tanto, en este sentido, la Audiencia equivale a la persona del Rey; así en las cartas y provisiones aparece el Rey hablando en primera persona como si hubiera sido el Rey en persona el que hubiera resuelto la petición, pero al final de la carta nos encontramos con que "los oydores del audiencia del Rey la mandaron dar de parte del dicho ssennor".

---

(54) Además del texto de las Cortes de Alcalá citado en las notas anteriores, véase el emplazamiento que hacen ante el Rey Alfonso XI los de la audiencia con motivo de un pleito entre los señores de Torrejón y el concejo de Madrid: "...Et en la nuestra audiencia fallaron que devien seer enplazados los dichos sancho de velasco e johan sanchez e los de velasco que y parescieren personalmente... (DOMINGO PALACIOS: Documentos del archivo general de la Villa de Madrid, t. I, pgs. 317-19).

(55) Así aparece en los tres documentos que hemos citado de 1346. Véase notas 50 y 51.

Esta primera característica es fundamental para comprender las competencias de la Audiencia en esta primera fase de su evolución.

La Audiencia no nace como un órgano estrictamente judicial, sino que, dada la naturaleza de la situación que provocó su nacimiento, en ella se presentaban peticiones que hoy calificaríamos de "gobierno", es decir peticiones que no persiguen el resarcimiento de derecho lesionado. Ello se debe fundamentalmente al amplio concepto de justicia vigente en la Edad Media que comprende no sólo la justicia entre partes o conmutativa, sino también la justicia distributiva que no requiere la substanciación de un proceso. Por ello no ha de extrañarnos encontrar en esta primera fase de la evolución de la Audiencia junto a causas estrictamente judiciales<sup>(56)</sup> otras en las que sencillamente se solicita licencia para establecer una escuela de gramática,<sup>(57)</sup> o se presentan quejas contra la mala administración del concejo,<sup>(58)</sup> o que se perdonen las penas en las que hayan incurrido las mujeres y las hijas de los fijosdalgo que no habían guardado la ordenanza de paños de Alfonso XI,<sup>(59)</sup> o incluso la petición del concejo de Murcia sobre la forma a seguir en la distribución del agua para

---

(56) Colección diplomática de Cuéllar, doc. 106, pgs. 215-6.

(57) DOMINGO PALACIOS: Docs. Archivo Villa de Madrid, T.I. pgs. 297-9, citado ya en nota 50.

(58) Véase la provisión de 1352 de Pedro I ordenando a los - hombres buenos del concejo de Murcia para que se nombra- ra una ponencia de cuatro hombres para que estudiaran las cuentas y gastos del concejo, ante la queja de algunos ve- cinos de que no se empleaban públicamente (TORRES FON- TES: El Concejo murciano en el reinado de Pedro I, en C.H.E. 25-6(1957), p. 270-1 y en MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 38, pgs. 68-9).

(59) MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 41, p. 72-3.

el cultivo del arroz en la huerta, para que no se sembrase -  
 arroz en más de la décima parte de la propiedad<sup>(60)</sup>. Es decir,  
 la Audiencia, precisamente por ser considerada mediante una  
 "fictio iuris" la propia persona del Rey, conoce de todas aque-  
 llas causas que pertenecen y debèn ser libradas por el Rey, ya  
 sean de gracia, gobierno o justicia. Sólo hay algunas peticio-  
 nes, que desconocemos, que en la Audiencia guardaban para -  
 el Rey "enel libramiento que ellos ffazen".<sup>(61)</sup>

Finalmente, hay que destacar también desde un primer  
 momento la colegialidad como nota caracterfstica de la Audien-  
 cia que mantendrá hasta nuestros días<sup>(62)</sup>. Aunque no sepamos  
 la estructura de la Audiencia en estos primeros años de los -  
 reinados de Alfonso XI y Pedro I, es ciertamente significativo  
 que las referencias de los documentos a los oydores estan siem-  
 pre en plural, lo que denota una actuación colegiada de los -  
 miembros de la Audiencia.<sup>(63)</sup>

---

(60) MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 43, pgs. 75-6.

(61) Cortes de Alcala 1348 (XLX. I, 23, pgs. 600-1).

(62) La colegialidad sufrió un momento de crisis en el reinado  
 de Enrique III como tendremos ocasión de ver, pero sal-  
 vo esta situación de total excepcionalidad, podemos sin  
 lugar a dudas señalarla como una nota característica que  
 luego se hará extensible a otros tribunales de la Corte,  
 como vimos al referirnos de los alcaldes de Corte en el  
 capítulo anterior.

(63) Así, ver los documentos ya citados en las notas 50, 51, 52  
 y 54.

La última cuestión que nos quedaría por plantearnos en torno al origen de la Audiencia es la de su denominación. Por qué se le denomina Audiencia?. Si tomamos la palabra en su acepción más amplia no cabe la menor duda que tal denominación le sería dada tomando como referencia su finalidad funcional de oír las peticiones.

La primera vez que hemos encontrado la palabra "audiencia" en un texto legal es en las Cortes de Zamora de 1301 en las que se alude a cartas desaforadas que salen de casa del rey "sin abdiencia"<sup>(64)</sup>. No podemos precisar exactamente qué tipo de audiencia se trata, pero el texto, a nuestro entender, está haciendo una clara referencia a que antes de que salgan las cartas de casa del Rey haya una audiencia para comprobar si aquellas son conforme a derecho o si, por el contrario, atentan contra los privilegios, usos, costumbres y franquezas de los concejos.

Mucho más claro es a mi modo de ver el texto de las Cortes de Valladolid de 1325. En él se pide al Rey que los castillos, fortalezas, aldeas y términos de las ciudades que han sido tomados, se restituyan a las ciudades y villas a quienes pertenecían. El Rey tiene por bien la petición y las manda a tornar alas çibdades o villas o logares onde ffueron tomadas o sse alçaron, sin otro audiencia e sin otro alongamiento, e lo al que algunos tienen en otra manera tengo por bien delos oyr luego lana mente sin figura de juizio e librarle he sin prolon-

---

(64) Cortes de Zamora 1301 (CLC. I. 8, 153).

gamiento, et juro delo guardar"<sup>(65)</sup>. El texto no puede ser más explícito ya que no sólo está aludiendo claramente a que a que - aquellos que tengan en su poder algún castillo, fortaleza o aldea por algún otro título jurídico serán oídos rápidamente, sino que también recoge el texto el modo en que el Rey libraré la causa es decir, "lana mente" sin figura de juicio e sin prolongamiento". Este texto tiene una importancia capital porque, como veremos más adelante, una de las notas características de la - - Audiencia es, precisamente, a resolución de las peticiones por medio de un procedimiento sumario.

Pero además de esta situación de hecho provocada por la necesidad de delegar en otras oficiales, que innegablemente se viene produciendo, podemos cuestionarnos si a la hora de - valorar esa situación y, posteriormente, regularla jurídicamente se toma como modelo alguna otra institución semejante o si, por el contrario, la Audiencia castellana nace sin la influencia de otras instituciones que paralelamente vienen desempeñando funciones similares.

El prof. VILLAPALOS, desechando por poco convincente la teoría de que la denominación de la Audiencia le fue atribuida como referencia a la función de escuchar los pleitos, por vía de hipótesis, apunta que el término se extrajo de su correspondiente modelo romano-canónico, más concretamente de la -

---

(65) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 7, p. 375).



"Episcopalis Audientia".<sup>(66)</sup>

Esta institución, recogida ya en el Código Teodosiano, fué ampliamente comentada por los juristas medievales<sup>(67)</sup> y nace, como es sabido, ante la necesidad de evitar que los litigios de los cristianos sean librados ante jueces paganos, por lo que éstos se sometían voluntariamente al fallo del obispo<sup>(68)</sup>.

(66) Los recursos... p. 260. Sobre la "Episcopalis Audientia" puede verse P. de FRANCISCI: Per lo svolgimento della episcopalis audientia, Roma 1915; B. BIONDI: Il Diritto Romano Cristiano, Milan 1954, t. I, pgs. 435-461; H. JAGER: Justinien et l' "episcopalis Audientia" en la Rev. His. du Droit Français et étranger, IV, 38 (1960) pgs. 235-262 y el más reciente trabajo de G. VISMARA: Episcopalis Audientia. L'autorità giurisdizionale del Vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italino al secolo nono, Milan, 1973.

(67) Así, por ejemplo, IRNERIO en la Summa Trecensis, l. 4 "De Episcopalis Audientia", núm. 3 (ed. Fitting, Berlin 1894, pgs. 259 y ss). ROGERIO en su Summa Codicis, l. 4, (en BMAE, I, p. 54), PLACENTINO: Summa Codicis I, 4, De. Espisc. aud.

(68) Es controvertida en este punto la naturaleza de la jurisdicción del Obispo. Mientras DE FRANCISCI (Per lo svolgimento... p. 20) y posteriormente JAGER (Justinien et... pgs. 215-6 y p. 231) insisten en que la Episcopalis Audientia se trata de un Tribunal de arbitraje ("Celle-ci se presente comme un fonction d'arbitrage de l'evêque dans les litiges civiles, une institution de l'Eglise antique où les pouvoirs spirituels et temporels risquaient de s'enchevêtrer"), para VISAMARA, quien examina detenidamente todos los pasajes de la patrística, el Obispo en la controversia civil no ejercitaba una actividad de carácter arbitral sino una actividad "sotto forma de giurisdizione elettiva concorrente con quella dei magistrati secolari e per adire la quale si richiedeva per tanto dalle costituzioni imperiali il consenso delle parti" (Episcopalis Audientia... p. 82).

Basta ver cualquiera de los trabajos que se han ocupado de estudiar la *Episcopalis Audientia*<sup>(69)</sup> para concluir que ni por su origen, naturaleza, finalidad o procedimiento podemos ver en ella un entronque, ni siquiera remoto, con la Audiencia medieval. Posiblemente lo único que ésta heredó de aquella fué su denominación de "Audiencia" que, como bien demostró JAGER al estudiar la semántica y etimología de la palabra, le vino dada al sentarse en público el Obispo para oír a los litigantes.<sup>(70)</sup>

No obstante creemos, y esto ya lo puso también de relieve el prof. VILLAPALOS<sup>(71)</sup>, que a la hora de institucionalizar la Audiencia se tuvo en cuenta, sin ningún género de dudas, el modelo de la "Audiencia del Papa", denominada posteriormente Rota Romana.

Los procuradores de las Cortes de Ocaña de 1469 señalaron ya cómo los reyes "pusieron nombre de oydores por exemplo de aquellos que en el sacro palacio apostolico oyen e determinan las causas, y del ayuntamiento destos se hallo el nonbre de audiençia"<sup>(72)</sup>. Efectivamente, si nos detenemos a estudiar las características, naturaleza, evolución y origen de la Rota Romana, no podemos llegar a otra conclusión que la que venimos propugnando, es decir, que la Audiencia del papa se tuvo como modelo a la hora de configurar la Audiencia real castellana.

---

(69) Ver nota 66.

(70) Justinien et l'Episcopalis Audientia, pgs. 221 y ss.

(71) Los recursos,... p. 260.

(72) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, I, p. 768).

Aunque ciertamente es difícil encontrar el origen de este Tribunal pontificio,<sup>(73)</sup> ya que, como ocurre en otras tantas instituciones, se fué configurando a lo largo prácticamente de todo un siglo, sí podemos destacar cómo a partir de Eugenio III y, sobre todo, de Alejandro III, la actividad judicial que se desenvuelve en Roma está marcada visiblemente por tres directrices: el desarrollo del Derecho Canónico posterior al Decreto de Graciano, el renacimiento de los estudios de Derecho Romano y una creciente actividad reformadora tendente a una centralización más acentuada por parte del Santo Tribunal.

Desde el pontificado de Urbano II encontramos en la Corte pontificia unos "cappellani papae" a quienes, junto a los cardenales, se les confiaba la instrucción de las causas que correspondían exclusivamente a la jurisdicción apostólica, aunque si bien es verdad la sentencia, al igual que las causas de mayor importancia, quedaban reservadas personalmente al Pontífice. Con el tiempo, éste llegó a autorizar que los "cappellani" dictaran por sí las sentencias, siempre y cuando estuvieran de acuerdo con los cardenales, aunque aquellas estuvieran sometidas, en última instancia, a la confirmación papal. Este sistema, que parece que se mantiene en los pontificados de Honorio III, Gregorio IX e Inocencio IV, pronto se ve alterado por el desinterés de los cardenales que son relegados a un papel secundario y son reemplazados por los "jurisperitii".

---

(73) Para la Rota Romana seguimos la excelente síntesis que Ch. LEFEBVRE ha realizado para el Dictionnaire de Droit Canonique, publicado bajo la dirección de R. Naz Voz "Rote Romaine" en los fascículos 39 y 40, Paris 1960.

A mediados del siglo XIII esta organización ha adquirido un carácter estable, sin duda por el creciente aumento de las causas que llegan al Tribunal debido a la fuerte centralización pontificia<sup>(74)</sup> y se caracteriza por su actuación colegiada<sup>(75)</sup> si bien el número de "auditores" se vió constantemente alterado hasta que Juan XXII en la constitución "Ratio iuris" de 1331 reorganiza la estructura, competencias y funciones del Tribunal.

En cuanto a la naturaleza del poder de los "auditores" la cuestión aparece ya más controvertida, pues si bien nadie pone en duda que en un primer momento el poder de los "capellani" era simplemente delegado, el problema se torna más vistoso cuando el Tribunal adquiere un carácter estable y permanente<sup>(76)</sup>. La mayoría de los autores del XIV y del XV coinciden en que la jurisdicción del Tribunal en cuanto a tal es ordinaria aunque la de los jueces es delegada.<sup>(77)</sup>

---

(74) En el pontificado de Clemente IV se produce una reacción ya que el papa considera que el poder de dictar sentencias no puede ser objeto de delegación, y así, impone su intervención personal en cada caso, aunque esta actitud debió desaparecer en el pontificado de Gregorio X (LEFEBVRE: voz "Rota Romaine" en el Diccionario citado en la nota anterior, p. 744).

(75) Ya el *Speculum iudiciale* de DURANDO hacía mención expresa al "consilio coauditorum" (*Speculum iudiciale*, I, II De resisitione consilii, núm. 12) y en 1274 se encuentra una sentencia en la que se muestra que la colegialidad era práctica común: "...communicatoque consilio peritorum, factaque super praedictis cum aliis palatii apostolici coauditoribus generalibus collatione sive realtione fidelii..." (Cif. LEFEBVRE: Rote Romaine, p. 744).

(76) DURANDO sostiene una postura intermedia al considerar que el poder de los auditores es ordinario para conocer las causas, pero delegado por definición desde el momento en que el Papa se reservaba el derecho de dictar la sen-

La competencia de la Audiencia del Papa, al menos hasta el siglo XV, parece que no estaba delimitada claramente y, en principio, era ilimitada, dado que el Tribunal del Papa era como el mismo Pontífice en persona:

Finalmente, en cuanto a la forma de proceder, como todos los tribunales eclesiásticos de la época, los auditores del palacio apostólico seguían las normas del procedimiento romano-canónico, precisadas en los "ordines iudicarii"<sup>(76)</sup>, pero en 1316, a raíz de la decretal "Dispendiosam" empieza a introducirse para los casos indicados en la decretal o en aquellos en que está previsto por un rescripto o por comisión, el procedimiento sumario representado por las fórmulas "simpliciter, de plano, sine figura et strepitu iudicii". Las ventajas que suponía esta forma en el modo de proceder ordinario de los auditores de la Rota Romana hasta que Martín V, ya en 1424, en la constitución "Romani Pontificis providentia", establece el proceso sumario para todas las causas.

Si ahora nos detenemos a valorar y comparar las situaciones de hecho que dieron lugar al nacimiento de la Audiencia pontificia, sus caracteres y forma de proceder, fácilmente podemos establecer un paralelo con la Audiencia castellana, por ello no ha de extrañarnos que ante una situación de hecho concreta, Alfonso XI optara por dar una solución jurídica ya existente y tomara como modelo el Tribunal de la Curia romana, máxime si tenemos en cuenta el prestigio del Papado en estos años del siglo XIV.

(76) /...tencia (Speculum iudiciale, De officio ordinario, l, num.3

(77) Así opinan BALDO, ALEJANDRO Y FELINO (Cif. LEFE BVRE! Rote Romaine, p. 744).

En el reinado de Pedro I, pese a que los testimonios documentales son mucho más abundantes, nos quedan sin esclarecer muchos de los interrogantes que se ciernen en torno a la primitiva Audiencia.

En primer lugar, seguimos desconociendo su estructura orgánica; a lo sumo nos han llegado los nombres de algunos personajes que, ocupando generalmente algún otro oficio de importancia en la Corte<sup>(79)</sup>, desempeñan las funciones de oidor. Creemos, no obstante, que serían un número muy reducido, tal vez solamente dos<sup>(80)</sup>, quizás alguno más, pero no lo podemos precisar con exactitud.

---

(78) /... Véase, por ejemplo, los "ordines" de PILLIO MEDICINENSIS, TANCREDO BONONIENSIS o de GRATIAE ARETINI, recogidos y editados por F.C. Bergman, Gotinga 1842 (reimp. Aalen 1965).

(79) Vid. DIAZ MARTIN: Los oficiales de Pedro I, Valladolid 1975, pgs.

(80) La mayoría de las provisiones o cartas se limitan a nombrar genéricamente a los oidores y por ello llama poderosamente la atención que en los únicos casos, que al menos nosotros conocemos, en que aparecen nombrados nominalmente los oidores sean sólo dos: Carta de Alfonso XI al concejo de Cuéllar de junio de 1346: "Ferrant Sanchez, notario mayor de Castiella, e Johan Estevanez, nuestro chancellor" (Colec. Dipl. Cuellar. doc. 106, pgs. 215-6) una provisión de 1354 por la que Pedro I manda que se cumpla el ordenamiento que se hizo sobre la utilización del agua para el cultivo del arroz: "Sepades que parecieron ante mí los oydores de la mi audançia Pero Martinez de Mora e Johan Ferrandez de Salinas... (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 73, pgs. 131-2) y una carta de Pedro I fechada en 1358, para que nadie pudiese comprar las haciendas de los vasallos de la Iglesia de Toledo: "...Don Fernan Sanchez, chancellor del Rey e Fernan Estevez, abad de Santa Coloma oydores de la Audiencia del dicho señor Rey... (B.N. Col. Burniel, Ms. 13100, fol. 162 v.).

El que los que aparecen en las cartas y provisiones como oidores, antepongan su oficio de chanceller, notario o alcalde al cargo de oidor nos hace pensar que tal función no se ha configurado todavía como un oficio autónomo, sino que más bien los pleitos y peticiones de la Audiencia siguen siendo librados en algunos casos por comisión del Rey, sin que con ello queramos decir que todas las peticiones se libran por comisión expresa. Posiblemente se ha producido el mismo fenómeno que ocurriera en la Curia al designar los "iudices curiae"; suponemos que la designación para resolver las peticiones presentadas recaería siempre sobre las mismas personas<sup>(81)</sup>, aunque queda siempre a la voluntad del Rey encomendar los pleitos de la Audiencia a cualquier otro oficial<sup>(82)</sup>. Resulta difícil precisar cuando el oficio de oidor adquirió plenamente autonomía, pero en todo caso parece que esto no debió suceder hasta el reinado de Enrique II ya que en uno de los últimos testimonios documentales que tenemos de la Audiencia de Pedro I, fechada en Sevilla a septiembre 2o de 1365, a propósito de una confirmación de una sentencia, nos encontramos con que el pleito "paso en la mi Corte ante Pero Yanes, doctor mio alcalde e chanceller, e oydor de la mi Audiencia..."<sup>(83)</sup> Es decir, vemos que todavía se antepone al título de -

(81) Así encontramos, por ejemplo, varias provisiones que aparecen signada por García Pérez "alcalde del rey, oydor de la audiencia" vid. MOLINA: Documentos de Pedro I docs. 35, 38, 29, 41, 43 y 44, pgs. 65, 69, 70, 73, 76 y 77 respectivamente.

(82) Es ciertamente expresiva al respecto una de las peticiones de las Cortes de Valladolid 1351 en la que se da a entender claramente que sobre cualquier oficial de la Corte puede recaer la comisión de resolver los pleitos de la Audiencia: "A esto rresponde que tengo por bien que el mi chanceller e mayordomo e el mi camarero e los mis notarios e el mio tesorero nin el mio despensero nin los mis contadores, los que por ellos nin por cualquier dellos estan, et todos los otros a quien yo enco-

oidor el de alcalde y chanciller por lo que nos hace pensar que la función de oír los pleitos de la Audiencia no ha sido aún con-  
figurada como un oficio independiente. Ciertamente cabe también  
pensar en una acumulación de oficios con lo que en última ins-  
tancia nos está reflejando una menor categoría de tal oficio.

Al igual que le pidieron a su padre los procuradores de las Cortes de Alcalá que se sentara un día a la semana a librar los pleitos y peticiones en la Audiencia, este mismo deseo se lo expresan a Pedro I los representantes de las ciudades de las Cortes de Valladolid, si bien es verdad que aumentan el número de audiencias reales a dos.<sup>(84)</sup>

La Audiencia, a tenor de la documentación que ha llegado a nosotros, realiza en estos tres primeros años del reinado de Pedro I una intensa actividad<sup>(85)</sup>. Al igual que en tiempos de Alfonso XI, la Audiencia libra toda clase de peticiones sean de justicia<sup>(86)</sup>, de gobierno<sup>(87)</sup>, incluso de gracia<sup>(88)</sup>, por lo que

(82) /... mendare los pleitos dela mi audiençia...(CLC. II, 11, p. 54).

(83) DIAZ MARTIN: Los oficiales de Pedro I, apend. doc. 10, p. 124.

(84) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 48, p. 28).

(85) De las treinta y cuatro cartas o provisiones que de la Audiencia de Pedro I hemos podido reunir veintisiete están fechadas entre julio de 1351 y abril de 1354; en cambio las siete restantes se distribuyen casi prácticamente a una por año hasta 1365. Este hecho creo que sólo es explicable si tenemos en cuenta que desde precisamente 1354 el reinado de Pedro I se va a ver encuelto en sucesivas rebeliones nobiliarias que culminan con la guerra civil, iniciada en 1366.

(86) Véase por ejemplo, Col. Dipl. de Cuéllar, doc. 108, pgs. 217-8; Col. Cipl. de Ríaza, doc. 13, pgs. 23-4 y doc. 15, pgs. 26-9; A.H. Colec. Morales, t. 16, fol. 331; A.H.N.



todavía, aunque predominen los asuntos de justicia, no podemos afirmar que tenga una naturaleza estrictamente judicial. La mayoría de las causas presentadas en ella son relativas a materias impositivas, de rentas y, en ningún caso pleitos criminales.

- 
- (86) /...Ordenes Militares. San Marcos de León, carp. 375, num. 80; MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 34, - pgs. 61-3; MARTIN DE LOS HEROS: Historia de Balmaseda t. II, apend. doc. 21, pgs. 86-97; A.H.N. Sellos, caj. 3 num. 20; SANCHEZ BELDA: Documentos Reales de la Edad Media, referentes a Galicia, Madrid 1953, doc. 1160, p. 487
- (87) Así la provisión de 1352 otorgando validez a las ordenanzas del concejo de Murcia sobre los precios de algunos productos no especificados en el Ordenamiento de las Cortes de Valladolid (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 35, pgs. 64-5); también de 1352, otra provisión ordenando a los hombres buenos del concejo de Murcia que nombraran una potencia de cuatro hombres para que estudiaran las cuentas y gastos del concejo, ante la queda presentada por los vecinos (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 38, pgs. 68-9) o la provisión antes citada, sobre la forma de distribuir el agua para el cultivo del arroz en la huerta y que no se sembrara más de la décima parte de cada propiedad de dicho cereal (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 42, pgs. 75-6).
- (88) Véase la provisión de Pedro I mandando al Adelantado Mayor del Reino de Murcia, ante la petición del concejo de dicha ciudad, que se perdone hasta la fecha de esta provisión, las penas en que hayan incurrido las mujeres e hijas de fijosdalgos que no hayan guardado la Ordenanza de Alfonso XI sobre los paños, pero que en adelante se cumpla la Ordenanza (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 41, pgs. 72-3).
- (89) El dato nos lo proporciona C. FERNANDEZ DURO (Memo-rias históricas de Zamora. Su provincia y obispado, Madrid 1882, t. I, p. 555) quien refiriéndose al nacimiento de la infanta Isabel, hija de Pedro I y Marta de Padilla en el año 1355 añade: "y no habiendo allí capacidad para la Audiencia Real, que en semejantes circunstancias convenía tener a mano, la estableció el Rey en Zamora con la Corte, donde subsistió algunos años, como acredita el famoso -

Hemos de suponer que la Audiencia acompañaría al Rey en sus desplazamientos por el Reino, aunque actuara a menudo sin el concurso del monarca, no obstante nos ha llegado una noticia, un tanto contradictoria por cierto, por la que parece que la Audiencia quedó establecida unos años en Zamora<sup>(89)</sup>, aunque a mi modo de ver, no debemos tomarla como cierta.<sup>(90)</sup>

(89) /...fuero de Sepúlveda". En nota, en la que parece sustentar esta afirmación, específica: "En la última hoja de este importante documento se lee: "En la cibdad de Zamora, lunes trece de diciembre, era mil e quatrocientos e dos ante Johan Garcia Manrique, Obispo de Orense, oidor de la Audiencia de nuestro sennor el Rey, porque non era aqui en la corte otro oidor de la dicha Audiencia paresció Ruy Gomez..."

(90) Nos basamos para desechar tal afirmación en varios datos. En primer lugar, FERNANDEZ DURO, da a entender que desde 1355 a 1364 (era de mil cuatrocientos dos) la Audiencia estuvo establecida en Zamora. Efectivamente en el año 1355 la Audiencia se encontraba en el Real de Toro a tenor de una provisión que Pedro I envía al concejo de Lorca (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 85, pgs. 148-50), pero es que en 1358 la Audiencia se encuentra en Sevilla (B.N. Col. Burriel, Ms. 13100, fol 162v); en Mayo de 1362 igualmente en Sevilla (DIAZ MARTIN Itinerario de Pedro I, doc. 815, p.387) para pasar en septiembre a Almazan (SANCHEZ-BELDA: Documentos reales de Galicia... doc. 1160, p. 487) y en 1365 se halla de nuevo en Sevilla (DIAZ MARTIN: Los oficiales de Pedro I, doc. 10, p. 124-8).

En segundo lugar, la lectura que ha hecho FERNANDEZ DURO de la última hoja del fuero de Sepúlveda no es correcta ya que no es la era de mil cuatrocientos dos años, sino "mill et quatroçientos et diez años" (vid. la transcripción de SAEZ en el Fuero de Sepúlveda Segovia, 1953. pgs. 16-7) con lo que ya no se trataría de 1364, sino de 1372, es decir, de tiempos de Enrique II, en los que precisamente por estas fechas es oidor el Obispo de Orense (CLC. II, 1, p. 189).

En la primavera de 1366 se inicia la guerra civil en Castilla y en unos pocos meses Enrique de Trastámara se ha hecho dueño de la situación. Coronado en Burgos, al poco tiempo entra en Sevilla y en Toledo con lo que tiene que dotarse de todo un aparato administrativo con el que pueda regir el Reino. Y así, lejos de lo que se ha venido afirmando acerca de las innovadoras reformas institucionales, Enrique II toma el modelo de Administración Castellana existente hasta el momento y de esta forma, nos encontramos con que tan sólo a los pocos meses de haber sido coronado Rey de Castilla Enrique II, aparecen documentos librados por su Audiencia<sup>(91)</sup>, utilizando, incluso, prácticamente las mismas fórmulas cancillerescas que las usadas por la Audiencia de Pedro I.<sup>(92)</sup>

Varios testimonios sobre la creciente actuación judicial de la Audiencia nos lo ofrecen las Cortes de Toro de 1369, en las que se faculta a la Audiencia de conocer las pesquisas sobre robos o muertes realizados en los caminos, pero que, dada la condición de las personas que cometieran tales actos, "fueren tales que no se pudiere fazer execucion de la justicia"<sup>(93)</sup>, facultando a los oidores a que tomen la cuantía del robo del sueldo

(91) 1367, febrero 26 en las Cortes de Burgos, Enrique II da respuesta a diversas peticiones de los habitantes de medina Sidonia, realizadas a través de sus procuradores. Al final de la carta aparecen: "E yo don Sancho, obispo de Oviedo, e don Juan, obispo de Badajoz, oydores del Audiencia del rey e de las peticiones e (en blanco una palabra) por el dicho señor, lo mandaron dar de su parte - porque así fue librado por audiencia..." (LADERO Y GONZALEZ: La población, doc. 24, pgs. 247-9).

(92) Compárese con cualquiera de los documentos de Pedro I citados en las notas anteriores.

o de la tierra de aquellos que han realizado tales actos para pagar a los querellosos.

Aparecen, igualmente, por primera vez en estas Cortes escribanos que realizan sus funciones exclusivamente en la Audiencia<sup>(94)</sup> a la que se le asignan en número de seis<sup>(95)</sup>, prueba, sin duda, de la creciente actividad de este órgano.

Es precisamente esta creciente actividad la que lleva a Enrique II, con motivo de las Cortes de Toro de 1371 a reglamentar por primera vez las competencias y actuaciones de la Audiencia.<sup>(96)</sup>

Del capítulo primero del citado Ordenamiento podemos deducir sin esfuerzo que el Rey no está creando "ex novo" una nueva institución, sino que se dispone a "ordenar" la justicia de su casa, es decir, se ve claramente que existe una continuidad entre la Audiencia a la que hasta ahora nos hemos venido refiriendo, y esta Audiencia que se reorganiza, se remodela en 1371.

---

(93) /...Se esta refiriendo a delitos cometidos por nobles y caballeros. (CLC. II, 2, p. 165).

(94) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 13, p. 168). Hasta el momento las fuentes non han hecho nunca referencia al personal subalterno de la Audiencia. Posiblemente, este se le ha tenido que asignar con anterioridad a esta fecha, pero es precisamente en estas Cortes en donde hemos encontrado la primera alusión a los escribanos de la Audiencia.

(95) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 14, p. 168).

(96) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, pgs. 139-90)

Por este ordenamiento queda regulado, en primer lugar, el lugar en donde se habrá de reunir la Audiencia. Esta hará la justicia en el palacio del Rey cuando éste se encuentre en lugar en donde se halla la Audiencia y en su defecto en el de la Reina. Si la Reina no estuviera, la Audiencia se reuniría en la casa del Chanciller mayor o en la iglesia del lugar en donde estuviera la Chancillería<sup>(97)</sup>. Por tanto, la Audiencia ha quedado desvinculada de la persona del Rey para pasar a formar parte del complejo orgánico de la Chancillería<sup>(98)</sup> y sólo en aquellos casos en que coincida el Rey o la Reina en el lugar en donde ésta residiere, la Audiencia se reuniría en sus respectivos palacios según la fórmula antes vista.

La vinculación a la Chancillería debió producirse por las mismas razones que obligaron a los alcaldes de la Casa del Rey a quedar vinculados a aquélla: la necesidad de proximidad con el aparato burocrático de la chancillería, portadora del sello real; la creciente actividad de la Audiencia que hace que ésta tenga que ser dotada de escribanos propios, registros, porteros etc. con lo que los desplazamientos son mucho más dificultosos y, sobre todo, costosos, restándole la correspondiente movilidad al Rey para desplazarse por el Reino; los gastos que supondrían a las partes el ir en busca de un tribunal itinerante, etc.

(97) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

(98) Esta vinculación de la Audiencia a la Chancillería debió de hecho, producirse antes, pues ya en las Cortes de 1369, los escribanos de la audiencia podían librar cartas ante los alcaldes de corte y dado que estos se hallaban, como vimos, siempre con la Chancillería, hemos de suponer que ya se había producido tal vinculación (Cortes de Toro 1369, CLC. II, 13, p. 168).

Tampoco ha de resultarnos extraño que en ausencia del Rey y la Reina la Audiencia se reuniera en casa del Chanciller, dado que éste era, en definitiva, el más alto oficial de la misma y, además, desde el reinado de Alfonso XI conocemos varios -<sup>(99)</sup> chancilleres que desempeñan la función de oidores de la Audiencia. Hemos de suponer que sólo en el caso de que el Chanciller estuviera ausente del lugar en el que se hallara la Chancillería, la Audiencia se efectuaría en la iglesia de dicho lugar o "do entendieren que sse faga mas onrrada miente". Sin duda todas estas medidas irían encaminadas a dar una publicidad solemne a las reuniones de la Audiencia para impartir justicia.

En cuanto al modo por el que se han de librar los pleitos que se presentan a la Audiencia, es decir, "por peticiones, et non por libellos nin por demandas nin por otras escripturas, et quelos libren ssegunt derecho ssumaria miente et sin fegura de juyzio"<sup>(100)</sup>, no supone tampoco una novedad el ordenamiento de Toro, sino que, por el contrario era el modo ordinario por el que se ventilaban las causas cuando el Rey impartía justicia personalmente tal como lo recogían ya las Cortes de Valladolid de 1312<sup>(101)</sup> y las de 1325<sup>(102)</sup>. Antes de proseguir, creemos necesario hacer algunas precisiones al respecto.

(99) Así, por ejemplo, Johan Estevanez (Col. dipl. Cuellar, doc. 106, p. 216), Pero Yañez (MOOINA: Documentos de Pedro I, doc. 34, pgs. 61-3), Ferrant Sanchez (MOLINA Documentos de Pedro I, doc. 73, p. 132).

(100) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

(101) Cortes de Valladolid 1312: "Otrossi tengo por bien que cada algun querelloso viniese ante mi de qual quier villa o logar del mio ssennorio, que me muestre sso querella por peticion e ssi yo touier tiempo en quel pueda oyr, oyr lo he e librar lo he assi commo ffallar que es derecho, o mandare a un alcalde dela corte quello libre luego ssegunt que dicho es. Et ssi la peticion ffuere de merced, el alcalde aquien lo yo mande librar, mando que me la muestre ssin otro...

Qué debemos entender por "petiçiones"? El texto de las Cortes de 1312 que acabamos de citar<sup>(103)</sup> nos está aludiendo claramente a dos tipos de peticiones. Una peticiones de "merçed" por un lado, y otras peticiones, que no especifica de qué tipo son, pero que al expresar el texto "que muestre sso querella por petiçión" nos está haciendo pensar ineludiblemente en una petiçión de justicia.

La resolución de esta petiçión de justicia puede ser encomendada por el Rey a algún alcalde de la Corte para que la libre de acuerdo a derecho, en cambio la petiçión de merced, como depende ya directamente de la voluntad real, y en definitiva, es una manifestación de la justicia distributiva, no puede ser librada por ninguna otra persona que no sea el mismo Rey. Dejando ahora a un lado estas peticiones de merced que no afectan al objeto del presente estudio, sí, en cambio, considero oportuno que nos detengamos a considerar las peticiones de justicia, puesto que al fin y al cabo son el único modo, según se recoge en el Ordenamiento de 1371<sup>(104)</sup>, se presentar los pleitos ante la Audiencia.

---

(101) /...detenimiento porque yo mande ssobre ello lo quela mi merçed ffuere" (CLC. I, 36, p. 205).

(102) Cortes de Valladolid 1325: "...tengo por bien delos oyr lana mente, sin figura de juizio e librarle he sin alongamiento.." (CLC. I, 7, p. 375).

(103) Ver nota 101.

(104) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

Hasta ahora ninguno de los autores que han tratado el tema de la Audiencia se han detenido a considerar las razones de esta forma de proceder tan particular de la Audiencia, que la va a caracterizar de los restantes tribunales de la Corte, ni analizar en qué consiste exactamente este procedimiento.

Desde 1312, el Rey atenderá a todos los querellosos que se presenten ante él mistrando su querella por "petición". En el mismo sentido el texto de las Cortes de 1371 está insistiendo en que los oidores oigan los pleitos por "peticiones, et non por libellos nin por demandas nin por otras escripturas", con lo que podemos percibir claramente una contraposición entre las "petitionws" y las formas usuales de iniciar los procedimientos de acuerdo a los principios admitidos del proceso romano-canónico<sup>(105)</sup>. Que son, pues, las peticiones?

Sin ningún género de dudas creemos que debemos identificar estas peticiones con la "petitio", es decir, con la breve narración que dá a lugar a la iniciación de las causas sumarias<sup>(106)</sup> como ya viene recogida en la Clementina "Saepe contigit".<sup>(107)</sup>

(105) Sobre la recepción en España del proceso romano-canónico véase: J. MALDONADO Y FERNANDEZ DEL TORCO: Líneas de influencia canónica en la historia del proceso español en AHDE 23 (1953) pgs. 467-93.

(106) Sobre la "petitio" véase BARTOLO: Super constitutione Extravaganti Ad reprimendum, in verbo "et figura iudicii" num. 8, fol. 99 (ed. Venecia 1596); MARANTA: Aurea Praxis Iure consultorum facile principis vulgo Speculum Aureum, et lumen Advocatorum inscripta. (ed. Lyon 1593) part. 4, dist. 9, num. 14; ASINIUS: Practica Civilis seu processus iudicarii ad statum stylumque Florentinum et ius municipale totius Europae de modo procedendi in Civilibus directi conscriptae". (ed. Venezia 1629), 4, c.l. num. 3 PAPIENSIS (G. FERRARI): Practica (ed. s.l. 1562), in forma libelli, glosa qualisqualis, fol. 27.



El origen de la sumariedad procesal debemos buscarla, al parecer, en las recomendaciones que los pontífices hacían a sus jueces delegados con la finalidad de dar una mayor agilidad a los trámites, excesivamente formales, en determinados tipos de causas.<sup>(108)</sup> Las recomendaciones venían expresadas en las cartas de comisión mediante las fórmulas "simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii", fórmulas que fueron objeto de aclaración por Clemente V en la decretal antes citada.<sup>(109)</sup>

---

(107) "Verum quia iuxta petitionis formam pronuntiatio sequi debet, pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipso litis exordio petitio facienda, siue scriptis, siue verbo, actis tamen continuo (ut super quibus positiones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certitudo et fiat definitio clarior) inferenda" (Clementis Papae V. Constitutiones, 5, 11, 2 ed. Roma 1583).

(108) En este sentido véanse las Decretales de Alejandro III - (X, 2, 1, 6): *Simpliciter et pure factum ipsum, et rei veritatem secundam formam canonum et sanctorum Patrum instituta investigare curetis*) de Inocencio III - (X, 2, 1, 13; 3, 35, 8; 4, 1, 27), de Gregorio IX - (X, 5, 1, 26) o de Bonifacio VIII (VI, 1, 6, 43; 5, 2, 30)

(109) "Saepe contigit, quod causas commitimus, et in earum aliquibus simpliciter, et de plano, ac sine strepitu, et sigura iudicii procedi mandamus: de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat, dubitatur..." (Clementinas 5, 11, 2).

Estas fórmulas, que podían entrar en juego conjuntamente o de modo independiente cada una de ellas<sup>(110)</sup>, incidían directamente sobre las formalidades requeridas para el proceso ordinario, de forma que quedaban notablemente reducidas. Así, el juez al que se le había comisionado para el conocimiento de una de estas causas no tenía que exigir necesariamente ni el "libello", ni la "litis contestatio", podía proceder, incluso los días de fiesta, que daba recortada la materia de las dilaciones, se limitaban las interpelaciones y las intervenciones de los abogados, etc.<sup>(111)</sup>

La "petitio" o "petición, en contra de todas las formalidades que se exigen en el "libello"<sup>(112)</sup>, podía ser oral o escrita<sup>(113)</sup> requiriendo solamente una breve narración de los hechos con el nombre del actor, el nombre de la cosa y la petición propiamente dicha.

---

(110) Sobre este punto controvertido véase BARTOLO en la obra citada en nota 106 y PAPIENSIS también en obra citada nota 106, núm. 2.

(111) "Nos autem dubitationem huiusmodi (quantum nobis est possibile) decidere cupientes hac in perpetuum, valitura constitutio ne sancimus, ut iudex, cui taliter causam committimus, nec sario libellum non exigit, litis contestationem non postulet tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultorum a iure procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem quantum poterit, faciat, breviores, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo, partium advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superfluum multitudinem refrenando".

(112) Así el "Libello" necesariamente debía ir por escrito y constaba de dos partes: la narración de los hechos y la petición. La narración a su vez debía cumplir los siguientes requisitos: nombre jurisdiccional de juez, nombre del sector, nombre de la cosa, descripción de la cosa que se pide y derecho por el cual se pide.

(113) Basándose en el texto de la "Saepe contigit" ("Est in ipso litis exordio petito facienda, sive in scriptis, sive verbo), BARTOLO, MARANTA, ASINIUS Y PAPIENSIS, en los comentarios citados en nota 106, opinan que la "petitio" puede ser hecha de forma oral, sin necesidad alguna de escritura. No obstante consideran estos doctores que la "petitio" debe ser recogida por escrito por el Notario que substancia la causa junto a los hechos.

Las ventajas que suponían este tipo de proceso hicieron que se extendiera desde mediados del siglo XII, y sobre todo, - el XIII por gran parte de Italia<sup>(114)</sup>. En 1316, como vimos fué también introducido en la Rota Romana en determinados tipos de - causas para acabar sustituyendo al antiguo "ordo iudicarii". Si a ello le añadimos la validez general que poseían las decretales y todo el Derecho pontificio, independientemente de que estuvieran o no incorporadas a las leyes de los distintos reinos europeos<sup>(115)</sup>, podremos comprender fácilmente, debido al creciente fenómeno de la recepción, que este tipo de proceso acabara por recibirse en Castilla<sup>(116)</sup> y ser aplicado en aquellos casos en los que se requería una rápida resolución. No ha de extrañarnos, pues, que precisamente, dado el carácter itinerante de la Corte y las otras múltiples ocupaciones del Rey, fuera utilizado el proceso sumario cuando el Rey impartía personalmente justicia<sup>(117)</sup> o en aquellos casos, como el que recogen las Cortes de Valladolid de 1312, cuando el Rey delega en un alcalde para conocer la petición<sup>(118)</sup>; es decir, está aplicando el proceso sumario en la resolución de las comisiones, tal como hacían los Pontífices cuando nombraban sus jueces comisarios.<sup>(119)</sup>

(114) P. GIUDICE: Storia de la procedura en PERTILE: Storia del Diritto italiano, vol. VI, parte 2a., pgs. 116-8, 121-4.

(115) Según los principios papales de gobierno, ni el rey ni el emperador podían poner obstáculos a la aplicación del derecho papal, ni tampoco el papa tenía necesidad del rey para hacer efectivo dicho derecho, por lo que el Papa creaba derecho aplicable a la esfera pública sin la participación de ningún otro agente. (Vid. ULMANN: Principios...p. 71) Esta concepción contribuyó de modo definitivo a la resolución de los principios procesales procedentes del Derecho canónico.

(116) Así lo señaló ya en su día el profesor J. "MALDONADO en su trabajo, antes citado, Las líneas de influencia... p. 41

Dado que este era el modo de proceder cuando el Rey impartía justicia personalmente en la audiencia pública, tomado, como vimos, del modelo canónico del Tribunal pontificio, y dado el carácter de jueces comisarios ("oydores por nuestro alvala de comisión"), que caracterizaba a la primitiva Audiencia, no nos puede resultar difícil concluir que este era el modo habitual de proceder la Audiencia, y que Enrique II se limita simplemente a recogerlo al reorganizar la justicia en la Corte y con ella, la Audiencia, en las Cortes de Toro de 1371.

Se regula igualmente en este Ordenamiento la planta de la Audiencia que se compondrá de siete oidores, de los que tres son prelados, el Obispo de Palencia, el Obispo de Salamanca y el Obispo de Orense, y cuatro legos<sup>(12o)</sup>. Desconocemos si el - oficio queda vinculado a dichas sedes o si, por el contrario, han sido designados a título personal. Hasta este momento desconocíamos exactamente de cuantos miembros se componía la Audiencia. A partir de este momento, pensamos, el oficio de oidor queda

---

(117) /... Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 7, p. 375).

(118) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 36, p. 205).

(119) "Saepe contigit, quod causas committimus..." (Clementinas 5, 11, 2).

(12o) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

configurado como un oficio independiente del resto de los oficios judiciales, llegando, incluso, a establecerse la incompatibilidad entre el oficio de oidor y el de alcalde de corte "por que mejor et mas desenbarga miente puedan usar delos dichos ofiçios"<sup>(121)</sup> Han de servir por sí mismos sin posibilidad de poner sustitutos No se dice nada con respecto a la duración del oficio, pero no creemos que se haya establecido el criterio de la anualidad dado que tres años después del citado Ordenamiento encontramos suscribiendo una Real ejecutoria Diego del Corral y Johan Alfonso,<sup>(122)</sup> quines eran nombrados oidores en 1371<sup>(123)</sup>.

Se dispone la actuación colegiada de los oidores para dictaminar de forma que las sentencias, sino hay unanimidad, será suficiente la mayoría, pero en todo caso han de librar al menos dos oidores<sup>(124)</sup> con lo que implícitamente se está previendo la situación de que no estén presentes todos los miembros de la Audiencia presentes. ,

Aunque las Cortes no dicen nada respecto a si el Rey ha de sentarse algún día determinado en la Audiencia para librar públicamente las peticiones, los fallos de los oidores son equiparados a los del propio Rey al establecerse la irrecurribilidad de las sentencias de la Audiencia ni en alzada ni en suplicación<sup>(125)</sup>. Ello se debe a que la Audiencia es considerada como la misma persona del Rey es el "alter ego" del monarca y sus fallos son dados como si el Rey hubiera librado personalmente.

(121) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

(122) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189)

(123) 1374, octubre 7 Real ejecutoria de Enrique II sentenciado en favor del Monasterio de Santo Domingo de Caleruega sobre el pirtazgo de Medina del Campo (MARTINEZ: Col. Dipl. Santo Domingo de Caleruega, doc. 104, pgs. 123-126).

Llama poderosamente la atención que Enrique II no haya regulado o delimitado las competencias de la Audiencia en el Ordenamiento de 1371. Debemos suponer que la Audiencia conserva esa amplia gama de competencias que hasta ahora ha venido desarrollando. No obstante encontramos otro precepto en el citado ordenamiento que quizás nos pueda esclarecer este punto.

En el capítulo 13 Enrique II ordena que por el sello de la "poridat no se ssellen cartas de perdon nin de justiçia nin de merçedes nin otras foreras, mas que ssellen por nuestro ssello mayor; et se ssellaren por el nuestro ssello dela poridat, que mon valan; et los ofiçiales dela nuestra corte et delas çibdades et villas et logares delos nuestros rregnos quelas non cunplan; et los enplazamientos que fueren fechos por las cartas que sse ssellaren del ssello dela poridat, quelas non sigan nin cayan en pena por las non sseguir"<sup>(126)</sup>. Como se puede ver claramente el Rey está limitando el hecho de su actuación al restringir aquellas cartas que puede librar él personalmente sirviendose simplemente de su sello de la "poridat". Son acaso estas cartas de perdón, de justicia y de mercedes las que están reservadas para el conocimiento de la Audiencia?. Creemos que sí. En primer lugar porque, como hemos podido comprobar, son las materias que hasta

---

(124) /... Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189)

(125) Cortes de Toro 3171 (CLC. II, I, p. 189).

(126) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 13, p. 195).

el momento ha venido conociendo la Audiencia. Además se exige que vayan selladas por el sello mayor, es decir, el que se conserva en la Chancillería, justamente donde reside la Audiencia que, como acabamos de decir, mediante una "fictio iuris" es considerada como la propia persona del Rey. Finalmente, según el capítulo 14 del mismo ordenamiento, los "alualaes de justícia o foreras" que el Rey o la Reina libren serán "obedecidas et non conplidas"; mas que vayan al nuestro chançeller et alos nuestros oidores et alos nuestros alcalles, et queles den ssobrello aquellas cartas que entendiere que seran derechas, et las libren como fallaren por derecho".<sup>(127)</sup>

Las Cortes de Toro de 1371 suponen algo más que la reorganización de la Justicia de la Corte, suponen serias limitaciones al poder jurisdiccional del Rey y un intento de conseguir una administración de justicia independiente, ajena a cualquier tipo de presiones y, sobre todo, altamente tecnificada. Quizás fueron estos los motivos que llevaron a la inclusión de tres prelados en la planta de la Audiencia y a la creación del oficio de oidor totalmente independiente, incompatible no sólo con el de Alcalde de la corte sino también con la facultad de poder ejercer como abogado en la Corte.<sup>(128)</sup>

Se reitera la dotación de escribanos que le había sido concedida en 1369<sup>(129)</sup>, prohibiéndose taxativamente que ningún otro escribano ocupe tales escribanías.

(127) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 14, p. 195).

(128) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 3, p. 192)

(129) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 190).

Finalmente se les asigna a cada uno de los oidores quitación que les será abonada trimestralmente de los derechos de la Chancillería. Seguramente en razón de su alta dignidad la - quitación de los prelados (50.000 mrs. anuales) dobla en cantidad a la de los oidores legos (25.000 mrs. anuales)<sup>(130)</sup>.

El esquema establecido en Toro se mantuvo en los primeros años del reinado de su hijo Juan I a tenor del silencio que guardan las fuentes al respecto, no obstante, dada la separación material existente entre el Rey y la Chancillería que venía produciéndose desde tiempos de Enrique II, hace que los procuradores de las Cortes de Burgos pidan al Rey que lleve la Chancillería consigo o al menos que sea puesta "en tal lugar que sea comunal" a los reinos "porque puedan aver dellas las cosas queles cunplyeren mas syn costa e porque libren los pleitos ante los nuestros alcalles que anden enella et por la nuestra abdiencia".<sup>(131)</sup> La queja está motivada fundamentalmente en base a que debido a esa separación, el rey está obstaculizando el conocimiento de los pleitos por parte de los alcaldes de la corte y los oidores mediante el envío de jueces comisarios, de ahí que en la misma petición se suplique al Rey que no encomiende los pleitos "a otras personas algunas".<sup>(132)</sup>

(130) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 190)

(131) Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 27, p. 296)

(132) Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 27, p. 296).



De cualquier manera no deja de ser chocante la alternativa que le proponen los procuradores a Juan I: o que lleve consigo la Chancillería, con lo que nos encontraríamos con todos los problemas que ello supone (poca movilidad por parte del rey, encarecimiento de los pleitos dada la mayor itinerancia de los tribunales, etc.), o que la sitúe en un lugar "comunal" a los reinos.

No sabemos exactamente qué han querido decir los procuradores de las Cortes de Burgos cuando se refieren a un lugar "comunal", pues no hacen propuesta alguna de cual sería dicho lugar de fácil acceso para los súbditos tanto de Castilla como de León o Andalucía. En todo caso, y es lo que verdaderamente interesa destacar ahora, vemos que hay un primer intento de establecer la Chancillería en un lugar fijo. Se plantea el problema de la necesidad de fijar los más altos tribunales de justicia del Reino en lugar cierto a donde en cualquier momento se pueda acudir para la resolución de las causas civiles o criminales. El problema es, sin duda, grave, debido a la enorme carestía que supone no sólo para los particulares que han de trasladarse muchas veces sin conocer el lugar exacto en que se encuentra la Chancillería sino también para el propio organismo al que, al mismo tiempo, se le resta una gran operatividad al tener que estar continuamente trasladándose por el Reino. Nos parece, en cualquier caso, totalmente inimaginable una Chancillería, por muy elemental que sea, trasladándose continuamente de un lado a otro, por ello, creemos que desde el reinado de Sancho IV, hay una clara tendencia a estabilizar la Chancillería o por lo menos

hacia una mínima movilidad por el reino. Quizás tuviera establecido unos itinerarios anuales con los que se facilitaría en todo momento conocer el lugar exacto en el que pudiera estar la Chancillería cada época del año...

Juan I accede a la petición pero no especifica cual de las dos opciones fué la que llevó a la práctica. No obstante debió optar por llevar consigo la Chancillería, aunque era la solución más costosa, porque se habíala fijado en algún sitio, lógicamente así lo hubiera manifestado en las respuesta que dió a los procuradores de las Cortes de Burgos, pero, además, nos basamos para sostener tal afirmación en una sentencia de la Audiencia fechada en 1380, es decir, un año más tarde de las mencionadas Cortes, en la que explícitamente se recoge que "dada fué esta sentencia en el Palacio del dicho Señor Rey en Medina del Campo..."<sup>(133)</sup>

Esta sentencia, por otra parte, nos pone de manifiesto que se está poniendo en práctica el ordenamiento que Enrique II dispusiera en Toro puesto que, como se recordará, allí se disponía que siempre y cuando la Chancillería estuviera en el mismo lugar en que se encontrara el Rey, la Audiencia debía reunirse en el palacio del Monarca, tal como nos lo expresa la citada sentencia.

---

(133) 1380, diciembre 19, Medina del Campo. A.H.N. Clero. Santa María deBujedo, carp. 175, num. 12, original pergamino.

Es también importante destacar en estas Cortes de 1379, cómo la confusión entre la Chancillería y los alcaldes de corte y Audiencia es total en esta época, ya que dentro de la palabra Chançellería los mismos procuradores están incluyendo, como puede verse claramente en el texto, a los alcaldes de la Corte y a la Audiencia. A partir de ahora la palabra Chancillería tendrá además una acepción amplia en la que se incluyen todo el conjunto de tribunales que ejercen la jurisdicción ordinaria en la Corte.

La transacción que supuso el apartamiento del Rey en la administración de justicia que se recogía en las Cortes de Toro, iba en contra de la finalidad del poder real de mantener en justicia y derecho a su reino, y es por ello, por lo que se le solicita de nuevo a Juan I "que plogiese ala vuestra alteza de afanar por servicio de Dios e a provecho comunal delos vuestros rregnos en dar vuestra presençia rral e vos asentar enla vuestra abdiengia hun día cada selmana, por quelos vuestros naturales nos podiesen querellar e mostrar los agrauios que ffasta aqui auian rresçebido e rresçebiesen de aqui adelante"<sup>(134)</sup> Pero lo realmente destacable de las Cortes de Valladolid de 1385 es, sin lugar a dudas, la regulación del Consejo Real, sobre la que nos ocuparemos en el siguiente capítulo, sin embargo interesa destacar ahora que las competencias que se le atribuyen al Consejo son precisamente en base a las de la Audiencia<sup>(135)</sup> y a las que el

(134) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, 17, p. 329).

(135) Cortes de Valladolid 1385: "... a los cuales mandamos (a los del Consejo) que libren todos los fechos del rregno, saluo las cosas que deben ser libradas por nuestra abdiengia: ..." (CLC. II, 17, p. 333).

el Rey se reserva librar él personalmente. Por tanto a partir de este momento nos encontramos con que, en principio, existe una delimitación de competencias entre el Rey, el Consejo y la Audiencia.

En la Audiencia hasta este momento se han venido librando asuntos que no siempre pueden calificarse estrictamente de justicia por lo que hemos de suponer que, dado que en las competencias que se le atribuyen al Consejo -por cierto, muy difusas- no aparece la función de justicia, ésta ha quedado monopolizada por la Audiencia, mientras que al Consejo se reservan los restantes "fechos del rregno". Por su parte, al Rey también se le ha excluido de la participación en los asuntos de justicia y aunque, como acabamos de ver, se le piden que se sienta un día a la semana en la Audiencia, debemos suponer que se trata más de una presencia simbólica que de una participación activa en la administración de justicia.

Una de las escasas prerrogativas que le quedan al Rey es, precisamente, la de nombrar los oficios de su casa y corte, y por tanto, a los oidores de la Audiencia con lo que, en principio, el monarca podía ejercer alguna influencia en el citado tribunal.

Dos años más tarde, en las Cortes de Briviesca de 1387, el propio Juan I dispone sentarse tres días a la semana -lunes, miércoles y viernes- públicamente en su palacio para que acudieran todos aquellos que quisieran librar "para nos dar peticiones, o dezir las cosas que nos quisieren dezir de boca",<sup>(136)</sup> pero la redacción del capítulo, lejos de ser lo explícita que

---

(136) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 5, p. 381).

hubiésemos deseado, nos deja la incógnita de si estas audiencias públicas que hace el Rey tres días a la semana, lo son presidiendo su Audiencia propiamente dicha, o si, por el contrario, se tratan simples audiencias públicas en las que no participan los oidores. Aunque el texto no haga una mención expresa a la Audiencia, lógicamente hemos de pensar de que lo que se está pidiendo es que el Rey se siente a presidir la Audiencia esos tres días de la semana dado que al parecer durante estos años el Rey viaja acompañado de su Chancillería como ya pudimos comprobar.<sup>(137)</sup>

En este mismo ordenamiento encontramos varios preceptos encaminados a una mejor ejecución de la justicia por parte de los oidores a quienes se les penará por no desempeñar sus funciones de justicia ya sea por malicia o por negligencia<sup>(138)</sup> y a quienes el Rey da dos reglas "para que se guarden más de errar y fagan mejor servicio y provecho de nuestros reynos". La primera de ellas es "que piensen quantas maneras de pueden catar, quantas leyes de pueden fazer para acortar los pleitos o escusar las malicias", y la segunda regla es "que todas las sentencias que dieren tengan registro" para lo que el rey dispone que un escribano de la Chancillería "tenga registro dellas, e tenga por escripto los que las dieron, e quales son en contraria opinión, por que anosea fecha rrelaçion de commo se faze toda via quello queramos saber..."<sup>(139)</sup>

(137) Ver documento de la nota 133.

(138) Cortes de Briviesta 1387 (CLC. II, 19, p. 386)

(139) Cortes de Briviesta 1387 (CLC. II, 19, p. 386).

Existe, a la luz de este texto, una gran preocupación por el alargamiento, muchas veces malicioso, a que se ven sometidas las partes que entran en litigio. Ya en este sentido, en estas mismas Cortes, se han dictado toda una serie de normas encaminadas a la consecución de una mayor agilidad procesal, castigándose con severas penas a aquellos abogados que maliciosamente entorpecieran la buena y diligente administración de la justicia,<sup>(140)</sup> y ahora se les encomienda a los oidores que den soluciones para dar las leyes necesarias para acortar los pleitos. Esta preocupación por el costoso alargamiento de los pleitos nos la encontraremos siempre presente a partir de estos últimos años del siglo XIV.

La otra medida, encaminada a la creación de un registro, nos está denotando la creciente actividad y auge que está adquiriendo la Audiencia, que requiere la dotación de un nuevo escribano encargado de formar un registro propio de las sentencias de la Audiencia.

Otra de las medidas dictadas en Briviesca para el mejor desempeño de la justicia son las duras penas con que se castigan a los oidores, jueces y justicias de la Corte en general en casos de prevaricación y de estralimitación en el percibimiento de las tasas de Chancillería.<sup>(141)</sup>

(140) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, lo, p. 372-4).

(141) Cortes de Briviesca 1387 : "Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno delos nuestros oydores nin delos nuestros alcales e alguaziles nin escribanos dela dicha abdiencia non sean osados de tomar dineros, nin otro cosa, nin chancelleria, alguno nin algunos delos que ante ellos ouieren de venir a pleitos en qual quier manera mas de lo contenido enlos ordenamientos fechos por los rreyes nuestros antecesores e por nos; e qual quie que asy leuere o fiziere, o le fuere prouado, que de mas dela infamia e delas otras

La necesidad de que la Audiencia y Chancillería se encontraran en un lugar cierto en cada momento que, como vimos, ya le había sido expuesta al propio Juan I en Burgos, hace que los procuradores de las Cortes de Briviesca pidan al Rey de nuevo que establezca la Audiencia seis meses en un lugar y otros seis meses en otro. El Rey responde estableciendo un circuito trimestral por el que la Audiencia residirá en Medina del Campo los meses de abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre finajará su residencia en Olmedo; Madrid será su sede en los meses de octubre, noviembre y diciembre, para acabar el último trimestre en Alcalá de Henares.<sup>(142)</sup>

Las razones que da Juan I para establecer este sistema obedecen a los inconvenientes que ya hemos venido señalando; la primera es para que el "mudamiento non sea grande nin pueda dello venir dapno a los oidores en fecho delas prouisiones" y, la segunda, por el "pro comun del rregno por escusar el dapno que se faria en las posadas en estar seys medes continuada mente en un villa"<sup>(143)</sup>. Finalmente, el Rey se compromete a no alterar esta "ordenança" salvo "que cunpliese mucho a nuestro seruicio.

---

(141) /...penas que los derechos ponen, que pierda el oficio o sea tenuto de tornar lo que asi tomare con las setenas asy como quien lo furta, e que se parte en esta manera: las dos partes para el acusador, e las dos partes para aquel de quien lo leuare, e las tres partes para la nuestra cámara" (CLC. II, 2o, pgs. 386-7).

(142) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 23, p. 387)

(143) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 23, p. 387).

Además el no dotar a la Audiencia de una sede fija viene dado por la necesidad de aproximar el tribunal a los litigantes como por la escasa capacidad que tienen estos lugares -casi todos - ellos rurales- de soportar la organización administrativa.

Lo realmente destacable de esta disposición es que por primera vez va a quedar reglado el itinerario a seguir por la Audiencia y Chancillería. Seis meses, los de más calor al norte de la Sierra y los restantes meses, lo más fríos, al sur de la Sierra. No obstante desconocemos el por qué se han escogido precisamente Medina del Campo, Olmedo, Madrid y Alcalá de Henares. Era este tal vez el itinerario que venía realizando de hecho la Chancillería?. Era, en cambio, el itinerario que hacía el Rey generalmente?. No lo sabemos. En cualquier caso es fácilmente comprobable a la vista de un mapa que el itinerario - marcado para la Audiencia y Chancillería queda reducido a un - pequeño cuadro de acción que, aunque prácticamente viene a coincidir con el centro de todos los territorios de la Corona, no - deja de ofrecer dificultades de desplazamiento para muchos de - ellos.

En Briviesca también se va a ver alterada la planta - de la Audiencia y su forma de actuación. Así, se incrementará el número de oidores en uno más quedando de esta forma compuesta la plantilla por ocho oidores legos. Se le ruega al Rey al mismo tiempo que nos distraiga la actuación de los mismos enviándolos a embajadas, pero el Rey se reserva "delos escusar quando buenamente pudiesemos". (144)

---

(144) Cortes de Briviesca 1367 (CLC. II, 24, pgs. 387-8).



Se produce a partir de este momento una clara distinción entre los oidores legos, ocho como acabamos de ver, y los oidores prelados. No podemos precisar, con anterioridad a este ordenamiento de Briviesca, cuántos oidores prelados había en la Audiencia. Sabemos que en Toro Enrique II nombró como oidores a los Obispos de Palencia, Salamanca y Orense, pero sin duda esta situación ha debido ser alterada de algún modo, pues los procuradores solicitan al Rey que mantuviera en la Audiencia a un oidor prelado que estuviera en ella residente en turnos de tres meses junto a los cuatro oidores legos que actuarían en turnos semestrales; es decir, habría entonces cuatro oidores prelados que se turnarían a lo largo del año. La respuesta que Juan I da a los procuradores nos saca de toda duda: serán dos los oidores prelados que permanecerán por turnos de seis meses junto a los oidores legos "por que en la nuestra abdiencia esté mejor abtoridat" para que "non esté la dicha abdiencia syn oidor perlado"<sup>(145)</sup>. La planta de la Audiencia quedaba formada, pues, por ocho oidores legos y cuatro prelados que se distribuirían su estancia en la misma en turnos semestrales a lo largo del año.

La implantación del régimen de turnos semestrales se debe, como ya dijimos a la hora de tratar los alcaldes de la Corte, a una reducción del cuadro de oficiales de la Corte en aras a una disminución de los gastos debida a la crítica situación económica que está atravesando el Reino a raíz del desastre de Aljubarrota. Juan I, que siente la necesidad de reorganizar

---

(145) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 25, p. 388).

el país, se ve en la necesidad de apoyarse en las ciudades, dando entrada así a representantes de éstas en el Consejo Real que institucionaliza en las Cortes de 1385, pero su principal preocupación es conseguir un ejército y escaseen los medios económicos, de ahí el que no escatime esfuerzos para conseguirlos ya sea pactando con las ciudades como en este caso, reduciendo los cuadros administrativos de la Corte.

Estas mismas razones son las que le llevan a disponer que si algunos de los oidores no sirve el tiempo establecido, perderá las quitaciones del año, al igual que se establece un curioso sistema de retribuciones<sup>(146)</sup>. Los restantes oidores quedan obligados a hacer saber al rey cuando alguno de sus compañeros falta a su oficio bajo la pena de perder dos meses su pensión.<sup>(147)</sup>

---

(146) Cortes de Briviesca 1387: "A esto vos rrespondemos que por que ellos puedan estar mas rregidentes e nos den mejor cuenta de la justicia que es nuestra merced deles acreçenta las pensiones, e de mandar que gelas libren anesta manera por meses; el mes que sirvieren que aya doblada pensión del mes que estouieren en su casa; e sy fallesçiere con el doblo, e quela ayan los que estouieren rregidentes, e lo que fallesçiere de mas del mes en adelante, que pierda la quitacion que tuviere de nos por el tienpo que non siruiere e fuere la nuestra merced, saluo sy ouiere alguna necesidad justa avista dela nuestra abdiencia..." (CLC. II, 26 p. 288).

(147) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 26, p. 388).

Queda limitada la voluntad de libre elección del Rey desde el momento en que se establece un nuevo sistema para cubrir las vacantes de oidores o si alguno de ellos renunciare la Audiencia y el Consejo confeccionarán una terna de aquellas personas que consideren más capaces para desempeñar el oficio y el Rey habrá de escoger de entre esos nombres a aquel "que fallaremos que fuere más suficiente para ello".<sup>(148)</sup>

Se incorpora en estas<sup>2</sup> Cortes de 1387 un alguazil al personal subalterno de la Audiencia<sup>(149)</sup> así como los alcaldes de los fijosdalgos<sup>(150)</sup> quedan obligados a servir semestralmente residiendo en la dicha Audiencia.<sup>(151)</sup>

---

(148) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 34, p. 390).

(149) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 31, p. 389)

(150) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 27, p. 388)

(151) Como interpretar esta disposición? Como tuvimos ocasión de ver al tratar en el capítulo anterior de los alcaldes de fijosdalgo, éstos quedaron pronto incorporados al aparato judicial de la Chancillería, pero ahora, en esta disposición se hace referencia a la Audiencia por lo que no podemos precisar si se trata de que los alcaldes de los hijosdalgos quedan incorporados a la Audiencia propiamente dicha, o si se ha tomado la palabra "Audiencia" en una acepción más amplia que comprende a todo el personal juzgador de la Corte. Forzosamente hemos de suponer que se trata de esto último máxime si tenemos en cuenta lo que dispone el propio precepto al equipararlos en las penas con los oidores y alcaldes de Corte, si no cumplen lo dispuesto (CLC. II, 27, p. 388).

El espíritu innovador de Juan I hará que tan sólo tres años más tarde quede alterado todo el esquema que se había puesto en práctica tras las Cortes de Briviesca.

En un primer orden de cosas se suprime el circuito anual Medina-Olmedo-Madrid-Alcalá de Henares porque "veemos -dice el Rey- que una de las cosas que trayan en desordenença la nuestra abdiencia era por non estar estable en un lugar, asi como se acostunbro en los tienpos delos rreyes onde nos venimos e en el nuestro, fasta en las cortes de Briuiesca, que ordenamos que estouiese seys meses allende el puerto y seys meses aquende". (152)

Verdaderamente son sorprendentes estas palabras de Juan I al afirmar que en tiempo de sus antecesores y hasta las Cortes de Briviesca la Audiencia estaba en un lugar estable. Baste hacer un pequeño inventario de las cartas y provisiones de la Audiencia, no ya de tiempos de Alfonso XI y de Pedro I, sino de Enrique II y del propio Juan I para comprobar que la Audiencia siempre estuvo itinerante y, generalmente, separada de la persona del Rey. Es precisamente al mismo Juan I a quien los procuradores de las Cortes de Burgos de 1379 le pedían que o llevara consigo a la Audiencia o que la situase en un lugar "comunal" para sus reinos. Puede ser que -

---

(152) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, pr. pgs. 471-2).

sus desplazamientos no sean de gran alcance, pero son un hecho innegable a la vista de los documentos<sup>(153)</sup>. En Briviesca, además, son los procuradores los que precisamente le piden al Rey que señale dos lugares para que la Audiencia residiera seis meses en cada uno de ellos, pero el Rey no estima oportuna esa petición y establece el itinerario trimestral entre Medina, Olmedo, Madrid y Alcalá de Henares.

El sistema que se implantó en Briviesca, pese a ser un notable avance con respecto a la anterior itinerancia, no dió todos los resultados deseados pues, como dice el propio Rey, -

---

(153) Hemos escogido al azar dos años del reinado de Juan I para demostrar la falsedad de la afirmación de Juan I en estas Cortes de Segovia. Así, el 8 de agosto de 1379 la Audiencia de Juan I esta en Burgos pues confirma una sentencia que a su vez había sido librada por la Audiencia de su padre sobre un pleito promovido por los clérigos de Cuéllar y los arrendadores del impuesto de las doce monedas (Col. Dipl. de Cuéllar, doc. 127, pgs. 201-2). En junio de 1380 la Audiencia se encuentra en Valladolid (F. MARCOS RODRIGUEZ: Catálogo de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca. Siglos XII al XV. Salamanca 1962, doc. 689, p. 129). En diciembre de ese mismo año la Audiencia se encuentra en Medina del Campo (A.H.N. Sec. Clero. Santa María de Bujedo, carp. 175, num. 12). En febrero continúa en Medina (E. DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales del Archivo de la Catedral de Orense en Miscelánea de Textos Medievales I Barcelona 1972, pgs. 9-145, doc. 191, p. 63 y en agosto de 1381 se encuentra en Segovia (MARTINEZ: Colec. dipl. de Santo Domingo de Caleruega, doc. 109, p. 131).

"comme quier que en alguna parte se rremediaua e se acortauan mas los pleytos", "non se rremediaua del todo, por que en mudar se de vna a otra parte se perdian tres meses et mas de cada anno"<sup>(154)</sup>. Ante esta situación, incrementada por la creciente actividad de la Audiencia por un lado, y por la duración excesiva de los pleitos contra la que ya se habían tomado medidas en las Cortes de Guadalajara de ese mismo año<sup>(155)</sup> por otro lado Juan I opta por establecer de modo permanente su Audiencia - en la ciudad de Segovia.

Las razones que movieron a Juan I a establecer la Audiencia en la citada ciudad nos la dice el propio Rey en el ordenamiento: "La primera por ser logar en comedio de nuestros rregnos aquende los puertos, por que todos los mas de los pleytos son de Castilla e de tierra de León e delas montannas; la segunda por ser abastada de viandas por las buenas comarcas que tiene asi de aquende los puertos comme de allende los puertos; la tercera por ser muy sana e de buenos ayres e fria, e en las tierras callentes non se faze tan bien ayuntamiento de gentes comme en las frias"<sup>(156)</sup>.

---

(154) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, pr. p. 472)

(155) Cortes de Guadalajara 1390 (CLC. II, 1, p. 425)

(156) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 1, p. 472)

Dejando a un lado las razones de tipo alimenticio, sin duda también de importancia, y la anecdótica del clima frío, nos interesa fijarnos en la primera de ellas, es decir, la que fija la Audiencia de Segovia "por que todos los mas de los pley\_tos son de Castilla e de tierra de León".

Ciertamente, si nos fijamos en las cartas y provisiones emanadas de la Audiencia desde Alfonso XI hasta Juan I, - salvo algunas de Pedro I que fueron dadas en Sevilla, las restantes están signadas en Castilla o en León, con lo que es, por tanto, fácil afirmar que la Audiencia se circunscribió siempre al ámbito de estos Reinos; ni siquiera, por ejemplo, hemos encontrado ninguna carta o sentencia que haya sido dada en Toledo, ciudad de muchísima más importancia que pudieran serlo Medina u Olmedo, pero quizás el ser sede del arzobispado influyó para no recargar a esta ciudad con la organización administrativa de la Audiencia.

Aparentemente puede chocarnos esta discriminación de la Real Audiencia hacia los restantes territorios de la Corona castellana como pudieran ser Andalucía o Murcia o la misma Galicia, pero, como decimos, se trata de una discriminación más aparente que real dado que tanto en Murcia como en Andalucía se han venido desarrollando desde el siglo XIII toda una serie de privilegios por los que se concedía a la ciudad la facultad de conocer sucesivas alzadas -incluso suplicaciones, como en el caso de Sevilla- con lo que los pleitos solían finalizar en el tribunal del Adelantado Mayor de cada una de estas circunscripciones. En cambio en - -

Castilla y en León la mayor proximidad de los tribunales reales hacía más asequible a cualquier ciudadano acudir en primera instancia o, en su caso, en apelación a los alcaldes u oidores de la Corte. Es de aquí, creemos, de donde proviene el reconocimiento por parte del propio Rey de que la mayoría de los pleitos que se libran en la Audiencia son procedentes de Castilla y de León.

Sin embargo nos queda la incógnita de saber a qué tierra o región se está refiriendo el Rey cuando habla "delas montannas". Se está refiriendo a Galicia y Asturias?. A las Extremaduras?. A Santander?. No lo sabemos.

Las medidas, con las correspondientes sanciones, que se tomaron en las Cortes de Briviesca de 1387 no debieron tampoco alcanzar los fines propuestos, y la desidia e incomparecencia de los prelados y doctores oidores estaba obstaculizando la resolución de los pleitos, lo que suponía, al mismo tiempo, un considerable perjuicio económico para las partes en litigio. Ello llevó a Juan I a ampliar el cuadro de oidores tanto legos como prelados.

A partir de ahora serán seis, en vez de cuatro, los oidores prelados (el Arzobispo de Toledo, el arzobispo de Santiago, el Arzobispo de Sevilla, el obispo de Osma, el obispo de Zamora y el obispo de Segovia) y diez, en lugar de ocho, los oidores legos, que por primera vez son todos doctores.<sup>(157)</sup> De to

---

(157) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 473).



dos ellos, establece el ordenamiento, han de estar cuando menos un oidor prelado y cuatro oidores legos siempre en la Audiencia<sup>(158)</sup> para que esta no se halle desasistida.

En cuanto a las competencias, el Ordenamiento de Segovia se limita a recoger prácticamente a la letra lo dispuesto - tres años antes en las Cortes de Briviesca. El Rey se descarga totalmente de la administración ordinaria de justicia<sup>(159)</sup>, incluso renunciando a firmar cualquier carta que haya sido librada por los oidores a los alcaldes de su Corte<sup>(160)</sup>; se reitera la irrecursibilidad de las sentencias de la Audiencia confirmatorias de aquellas otras que han llegado "gradatim" a la misma<sup>(161)</sup> y como novedad, en cambio, y en casos muy excepcionales, se establece la posibilidad de una segunda suplicación al Rey de algunas sentenciadas dictadas por la Audiencia.<sup>(162)</sup>

Se impone, finalmente, a los oidores la obligación de prestar juramento<sup>(163)</sup>. No sabemos por qué hasta este Ordenamiento no se ha hecho mención al juramento de los oidores. En principio, todo juez, y así ya venía preceptuado por el Espéculo<sup>(164)</sup> antes de tomar posesión de su oficio debía prestar juramento al

---

(158) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 2, p. 473)

(159) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, y 4, pgs. 473 y 476)

(160) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, p. 478)

(161) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, pgs. 476-7) Sobre ello volveremos más adelante al tratar de las competencias de la Audiencia.

(162) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, p. 477)

(163) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 475)

(164) Espéculo 4, 2, 3.

al Rey, y en este mismo sentido se habían expresado las Partidas<sup>(165)</sup>. Hemos de suponer que, aunque no se haya hecho referencia a él, todos los oidores con anterioridad a 1390 debieron de jurar su cargo como jueces; la ~~in~~clusión de la fórmula del juramento -inspirada en las Partidas-<sup>(166)</sup> debemos de tomarla -más bien como una medida encaminada a dar una mayor solemnidad y al mismo tiempo recordar a los oidores la importancia de su función para que no incurran en los defectos que hasta entonces venían desprestigiando al más alto tribunal del Reino.

La repentina muerte de Juan I, en plena juventud, deja en el trono al enfermizo niño Enrique III en una situación de malestar latente. El Consejo de Regencia que se constituyó en las Cortes de Madrid de 1391<sup>(167)</sup> no puede hacerse con la situación, empeorada con las continuas intrigas del Duque de Benavente<sup>(168)</sup> y la revuelta antisemítica de Andalucía. Son años muy difíciles en los que las pugnas entre las facciones nobiliarias juegan un papel decisivo en la inestabilidad política del reino que acabará por repercutir en el marco institucional del mismo.

En este clima de turbulencia y confusión creciente el Rey, obtenida su mayoría de edad, acude a la designación de oficiales con poderes extraordinarios (comisarios, corregidores, pesquisidores) para el restablecimiento de la situación, medida, por otra parte, que debió generalizarse mucho en estos años a

---

(165) Partidas 3, 4, 6.

(166) Partidas 3, 4, 6.

(167) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, pgs. 487 y ss).

(168) Una expresiva descripción de esta situación nos la da LOPEZ DE AYALA en su Crónica de Enrique III en - Crónica de los Reyes de Castilla ed. BAE. núm. 78.

tenor de las quejas que los oidores de la Audiencia presentan al Rey denunciando las frecuentes cartas de comisión, albalaes y otras cartas y mandamientos del Rey sobre los pleitos que están pendientes, comenzados o concluidos en la Audiencia, porque estas cartas de comisión no sólo van en contra de las Ordenanzas que Juan I hizo, sino también -dicen los oidores- son "mengua de la justicia real" y menoscabo del oficio de los oidores.<sup>(169)</sup>

Pese a los esfuerzos llevados a cabo por parte del Rey la normalidad dista mucho de ser restablecida<sup>(170)</sup> siendo frecuentes los conflictos de jurisdicción por extralimitación de la jurisdicción eclesiástica<sup>(171)</sup> que llegan, incluso a afectar a la Audiencia<sup>(172)</sup>. Según los procuradores de Tordesillas esta usurpación de la jurisdicción real por parte de los prelados se debe principalmente "por estar en la mi chancellería por mis oydores -dice el Rey- muy pocos legos e muchos perlados e clerigos"<sup>(173)</sup> y piden al Rey que tome las medidas oportunas.

Sin duda alguna podemos afirmar a la vista de este texto que la planta de la Audiencia que ordenara Juan I en las Cortes de Segovia de 1390 ha sufrido alteración, posiblemente motivada por el ambiente inestable que caracteriza, como acabamos de ver, los primeros años del reinado de Enrique III. Como se

(169) Véase el albalá de 1394, febrero 20, para que la Audiencia determine los pleitos pendientes en ella, sin embargo de cualquier comisión en Bulas y Pragmáticas, fol 46, r.

(170) Véanse, por ejemplo, las quejas que le son presentadas al Rey en las Cortes de Tordesillas de 1401 (CLC. II, pgs. 538 y ss).

(171) Cortes de Tordesillas 1401 (CLC. II, 3, p. 538-9).

recordará, en las Cortes de Segovia se aumentó, ciertamente, el número de oidores prelados a seis, pero paralelamente el número de oidores legos se incrementó, llegando al número de diez<sup>(174)</sup>. Por la denuncia que presentan los procuradores - la planta de la Audiencia o ha sido modificada o, sencillamente, no han sido nombrados los oidores legos correspondientes.

Estas quejas del mal funcionamiento de la Audiencia y otras que seguramente debieron producirse en los años inmediatos llevaron a Enrique III a tomar la drástica medida de suspender a todos los oidores y abrir una investigación, dejando únicamente al frente de la Audiencia al doctor Juan Gonzalez de Acevedo<sup>(175)</sup> como aparece también probado documentalmente.<sup>(176)</sup>

- 
- (172) Cortes de Tordesillas 1401: "Otrosi alo que me dixieron, quelos perlados demis rregnos husurpan e enbargan mucho la mi juridiçion dela mi justiçia en muchas maneras, la primera en la mi chançelleria, anexando a si los pleitos que ala mi merçed pertenesçe libran e eso mesmo en sus obispados..."(CLC. II, 2, p. 538).
- (173) Cortes de Tordesillas 1401 (CLC. II, 2, p. 538)
- (174) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 473)
- (175) De esta medida tomada por Enrique III se hace eco el propio testamento del Rey: "Otrosi por quanto yo habia : suspendido a los mis oydores de la mi Audiencia, por saber como habian usado, por ende, quando que los dichos mis tutores, e los dichos mis testamentarios vean las pesquisas contra ellos fechas..." (Crónica de Enrique III, año 1406, cap. 19, p. 268). En el mismo sentido recoge la noticia la Crónica de Juan II: "E como el Rey don Enrique, que Dios haya, fuese muy deseoso de tener

No podemos precisar exactamente hasta cuando se mantuvo esa situación extraordinaria dado que tenemos al respecto noticias contradictorias. Por un lado, en el testamento el propio Enrique III dejan encomendado que sean revisadas las pesquisas que contra los oidores de su Audiencia fueron hechas "e de los que entendieren que son mas sin culpa, que dexen por oidores aquellos que entendieren, y en el número que entendieren, asi de Perlados como de oidores legos; e que les ordenen las quitaciones segun que entendieren que sera necesario para sus mantenimientos, e que dicha Audiencia esté todavía residente donde el dicho Príncipe mi hijo estuviere..."<sup>(177)</sup> Parece que el deseo del Rey se cumple a tenor de lo que la Crónica de su hijo Juan II nos atestigua ya que después de referirnos la anómala situación de existir un sólo oidor en la Audiencia<sup>(178)</sup>, añade: "y por eso los señores Reyna e Infante acordaron de tornar la Audiencia en la forma que solia, poniendo en ella perlados y doctores los mas escogidos y de la mayor conciencia que en estos Reynos hallaron".<sup>(179)</sup>

---

(175) /... estos reinos en gran justicia e fuese quexado de los oidores que no hacian las cosas tambien como debian, mando quitar todos los oidores, y dexo por oidor solamente al Doctor Juan Gonzalez de Acevedo, el qual como quiera que era muy buen hombre y muy buen letrado, hacia todo lo que podfa muy justamente; pero los negocios eran tantos y de tan diversas cualidades, que el no podfa bastar a todo como quiera..." (Crónica de Juan II, año 1407, cap. 16, pgs. 282-3).

(176) "...ante Juan Gonzalez de Acevedo, doctor en Leyes, oydo de la audiencia del dicho Señor Rey e su chanceller, estando el dicho oydo en audiencia publica, librando los pleitos..." (véase la sentencia de febrero 24 de 1405 en MILLARES: Documentos del Archivo de Madrid, serie II doc. 61, pgs. 371-9).

(177) Crónica de Enrique III, año 1406, cap. 19, p. 268

(178) Ver texto en nota 175.

(179) Crónica de Juan II, año 1407, cap. 16, pgs. 282-3.

En principio los textos parecen encajar perfectamente. El Rey deja encomendado antes de morir que sean revisadas las pesquisas de los oidores para que aquellos que no se les encuentren responsabilidades sean restituidos en su cargo y parece que, efectivamente, así se hizo. Pero en las adiciones de la Crónica de Enrique III del año 1406, que aluden a unas Cortes de Toledo de ese mismo año, aparecen los "Doctores Pero Sanchez del Castillo, e Juan Rodriguez de Salamanca, e Periañez, oidores del Audiencia del Rey".<sup>(180)</sup> Cómo compaginar estos datos contradictorios?. Cabe pensar que el dato - que nos proporciona la adición a la Crónica o bien está mal datado, o puede ser también factible que Pero Sanchez del Castillo, Juan Rodriguez de Salamanca y Periañez fueran realmente doctores de la Audiencia, pero en ese momento se encontraban en suspenso de su cargo por la medida tomada por Enrique III, con lo que la contradicción sería más aparente que real.

En 1406, tras la inesperada muerte de Enrique III, se abre en Castilla una nueva regencia a cuyo frente están la reina madre, doña Catalina, y el duque de Peñafiel, don Fernando de Antequera, encargados de velar por los derechos del joven Juan II que apenas constaba con dos años de edad.

Ya hemos hecho alusión al dato que nos proporciona la Crónica de Juan II por el que "los señores Reyna e Infante - acordaron de tornar la Audiencia en la forma que solía, poniendo en ella perlados y doctores los más escogidos y de mayor

---

(180) Crónica de Enrique III. Adiciones al año 1406. cap. 1 p. 259.

conciencia que en estos Reynos hallaron"<sup>(181)</sup>, con lo que se puede afirmar que quedarían restablecidas las normas que al respecto diera Juan I en las Cortes Segovianas de 1390, últimas, que sepamos, en las que se regula la planta y actuación de la Audiencia.

Sin embargo la actuación de la Audiencia en los últimos años de la minoría de Juan II no debió ser todo lo satisfactoria que el reino deseaba a tenor de las quejas que presentan los procuradores de las ciudades al Rey en las primeras Cortes de su mayoría. Consideran, aquéllos, que en la Audiencia, "llave de la justicia çevil de todos mis rregnos"<sup>(182)</sup>, había "mucho de hemendar".

En primer lugar las quejas van dirigidas a la escasez de oidores residentes en la Audiencia, situación incomprensible para las ciudades dado el gran número de oidores que había<sup>(183)</sup>. Pero además, en el escaso tiempo que allí estaban algunos de los oidores, despachaban muy pocos pleitos, estando muchos inconclusos con lo que se producía un enorme

---

(181) Crónica de Juan II, año 1407, cap. 16, pgs 282-3.

(182) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, 11-12).

(183) Cortes de Madrid 1419: "...por quelo mas del tienpo non estauan ende si non vno o dos oidores, e algunas vezes ninguno, lo qual yo podia bien veer si era de consentir, auiendo tan grant numero de oydores, mas que nunca enlos tienpos pasados ouo, e salariados por la mi merçet" (CLC. III, 1, p. 11).

perjuicio económico para los pleiteantes<sup>(184)</sup>. Todo esto se debía a que, aunque anteriormente los oidores venían sirviendo por turnos, ninguna de las provisiones de sus antecesores habían dispuesto al respecto se cumplieran, pese a las penas que allí se establecían para los casos de ausencia injustificada; por ello se pide al rey que descuenta cierta cantidad de las quitaciones que los oidores no cumplidores para que se reparta entre los oidores que sirven el tiempo del año que el Rey les ha ordenado<sup>(185)</sup>, de esta forma habría pena para los incumplidores y galardón para los cumplidores y la Audiencia "sería bien acompañada e bien servida".

Ante las protestas de los procuradores, Juan II decide reorganizar la Audiencia. En este sentido ordena que a partir de ese momento "estén continuamente quatro oydores e vn prelado"<sup>(186)</sup> para que mejor más rápidamente libren los pleitos

---

(184) Cortes de Madrid 1419: "...aun en el tiempo que ende estan, algunos mis oydores despachaban muy pocos pleytos, que sabria mi merced que auia pleitos que estaban concludos muy largo tienpo e non se daua en ellos sentençia, por lo qual muchos pleyteantes mis vasallos e naturales eran gastados e perdidos de sus faziendas, e otros muchos eran agrauados e rreçebian grandes dannos contra derecho, e non osauan pedir rremedio de justicia rreçelando lo sobre dicho, e commo la principal cosa que pertenesçia ami sennorio rreal sea administrar justiçia atodos mis subditos, quela mi alteza deuia proueer e rremedias con muy grant cura çerca dela dicha mi audiençia..." (CLC. III, 1, p. 11).

(185) Cortes de Madrid 1419: "... e como quier que açerca desto algunos delos rreyes onde yo vengo ouiesen fecho algunas prouisiones rrepartiendo los dichos oydores, que siruiessen vnos çierto tienpo del anno e otros en otro tienpo e por otras maneras, pero que ninguna delas dichas prouisiones non era conplido, por quanto aun que por ella se da pena alos absentes e que non cumplen la ordenança,



de la Audiencia, que seruirán en turnos de seis meses, e igualmente les ordena "que pongan buena diligencia en librar e despachar los pleitos que en ella ouiere, segund fallaren por fuero e por derecho, lo mas en breue que ser pueda, non dando lugar aluengas de malicia"<sup>(187)</sup>. Pero para llevar a cabo mejor esta medida, ordena al Chanciller Mayor o en su defecto a su lugarteniente que se encarguen de notificar a los Contadores Mayores qué oidores no van a servir su oficio de un modo regular a la Audiencia, para que les sea retenida la quitación del año<sup>(188)</sup>. Cumplidos los doce meses, el Rey dispone que permanezcan los mismos oidores que ha dispuesto en esta "ordenança"<sup>(189)</sup>.

---

(185) /...pero que se non daua gualardon alos presentes que seruián, e demas que aun que era puesta pena alos absentes, non se executaua nin pasauan por ello como non fuese interese singular de persona o personas algunas que lo procurasen, saluo dela mi merçed, por lo qual se tibiauan los que bien querian seruir; por ende que si a la mi alta sennoria ploguiese, mas justo rremedio e egual seria que yo mandase tomar dela quitación de cada vno de todos mis oydores, o a lo menos de aquellos que non son del mi Consejo o non continuan enel; çierta contia de mrs. enesta manera: delos oydores perlados, quinze mill mrs., e delos oydores que non son perlados, diez mill mrs., e la contia de mrs. que enesto montase fuesen apartados e deputados para los que ganasen los oydores que seruián el tiempo del anno que por mi les fuese ordenado que siruiessen... (CLC. III, 1, p. 11).

(186) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 12).

(187) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 12).

(188) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, pgs. 12-13).

(189) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 13).

De esta forma queda de nuevo alterada la planta de la Audiencia, reduciéndose en este caso, a dos oidores prela\_ dos y ocho oidores legos, que se irán turnándose en plazos de seis meses a razón de un oidor prelado y cuatro legos, por tiempo indefinido.

No sabemos hasta qué punto la disposición de Juan I encaminada a establecer definitivamente la Audiencia en la ciudad de Segovia se llevó a la práctica, ya que la muer\_ te de Rey a los pocos meses y la inestabilidad de los primeros años del reinado de Enrique III nos hacen pensar en que si real\_ mente se llegó a instalar, su estancia fué más bien breve<sup>(190)</sup>. Pero en el reinado de Juan II, en estos primeros años de la minoría, se retornó al sistema de la Chancillería itinerante, por ello, se solicita al Rey en estas Cortes de Madrid que la Chancillería "non se mudase a menudo de lugar en lugar, nin estidiese en lugares pequennos, ca se rrecreçia por ello grant danno alos pleyteantes e menguamiento dela justicia". Para subsanar esto, que el Rey ordene "un lugar bueno e conuenible alliende los puertos e otro aquende, donde continuada mente es\_ tidiese en tienpos departidos" segun quisiera el Rey, salvo - cuando el monarca quisiera que la Chancillería estuviera en donde él se encuentre.<sup>(191)</sup>

(190) Una carta ejecutoria fechada en febrero 28 de 1403 fué librada por la Audiencia de Enrique III en Valladolid (vid. SANCHEZ BELDA: Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia, doc. 1303, p. 544). También dada en Valladolid es la sentencia, antes citada, de 1405 dictada por Juan Gonzalez de Acevedo (MILLARES: Col. Docs. Archivo de Madrid, serie II, doc. 61, pgs. 371-9). No obstante la Audiencia parece que es instalada de nuevo en Segovia a principios del reinado de Juan II

Juan II semuestra reaccio.a que la Chancillería, y con ella los órganos judiciales de la Corte, se traslade anualmente a un lado y a otro de los puertos, por ello, como ya hiciera su abuelo, dispone que la Audiencia "esté de aquí adelante continuada mente en la çibdad de Segouia, que entiendo que es lugar medio e conuenible asi para los de aquende como para los de allende los puertos"<sup>(192)</sup>; no obstante, el Rey, dada la gran carestía que había en la ciudad de Segovia, dispuso que estuviera mientras en Valladolid.<sup>(193)</sup>

La reorganización de la Audiencia que Juan II dispuso en Madrid, así como las normas encaminadas a conseguir - una asidua asistencia por parte de los oidores, no se cumplía tal como el Rey había ordenado. En qué medida?. No lo podemos precisar. El texto se limita que no se "guardaban" en - lo referente a cómo debía servir los oidores "e del lugar o lugares donde auian de estar continuada mente".<sup>(194)</sup> Ante esta

---

(190) /...como así nos lo expresa la Crónica del citado monarca, si bien, ante las circunstancias, se opta por dividir la Audiencia: "E partidas las Provincias (entre los tutores) la Reyna decia que la Chancilleria debía en Segovia como el Rey lo había ordenado; y el Infante decia, que pues iba a la guerra e iba a regir tan gran Provincia que era razón que todos los oficiales fuesen con el, así la Chancillería "...por lo que se decide dividir la Chancillería: "e fueron con el los oidores de la Chancillería D. Sancho de Roxas, Obispo de Palencia, Juan González de Acevedo, e Juan Rodriguez de Salamanca e Luis Sánchez, doctores en Leyes... e ordenaron que quedase toda la otra Chancillería en Segovia..." (Crónica de Juan II, año 1407 cap. 19, p. 284).

(191) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 3, pgs. 13-4).

(192) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 3, p. 14)

(193) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 3, p. 14)

(194) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, pgs. 51-2).

nueva queja presentadas por los representantes de las ciudades en las Cortes de Palenzuela, Juan II dispone que, finalizado el plazo de los oidores que se encuentran en ese momento en la Audiencia, ocupen su lugar otros tantos oidores por los plazos semestrales ya conocidos.<sup>(195)</sup> Pero sobre este texto de las Cortes de Palenzuela creemos necesario hacer algunas precisiones.

En primer lugar, en contra de lo dispuesto en las Cortes de Madrid en las que aparecían ocho oidores legos, en las Cortes de Palenzuela sólo son nombrados siete; cuatro para el primer semestre<sup>(196)</sup> y tres para el segundo trimestre<sup>(197)</sup>. No encontramos una explicación convincente para explicar la reducción de un oidor en el segundo turno. Posiblemente, y basándonos en que de lo que se quejan los procuradores es de que no se ha cumplido lo dispuesto en Madrid seis años antes, nos inclinamos a pensar que se trata de una omisión del copista o tal vez quedara momentáneamente sin ser designado y por ello no apareció en el cuaderno de las mencionadas Cortes.

---

(195) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, pgs. 51-2)

(196) Cortes de Palenzuela 1425 : "...que esten e continuen en ella, seys meses los doctores Iohan Ferrandez de Toro e Ruy Garçia de Villalpando e Gonçalo Rodriguez de Salamanca e Diego Gomez de Toro, oydores dela mi audiencia..." (CLC. III, 1, pgs. 51-2).

(197) Cortes de Palenzuela 1425: "...e despues dellos que esten e continuen otros seys meses los doctores Juan Velazquez de Cueillas e Juan Sanchez de Cuaço e Pero Garçia de Burgos, oydores de la dicha mi audiencia..." (CLC. III, 1, p. 52).

Esta cuestión nos lleva forzosamente a plantearnos de nuevo el problema de la duración del oficio del oidor. Ya vimos como, en principio, en las Cortes de Madrid no se establecía un límite de duración para desempeñar el oficio de oidor, sino que, finalizado un turno semestral de cuatro oidores, le sucedía otro turno, que finalizado a su vez, era remplazado por el primero, y así sucesivamente. De que estos turnos se vienen cumpliendo, aunque no sepamos exactamente si con rigor, nos da testimonio el mismo texto de Palenzuela cuando dicen que "acabado de rresidir su tienpo los oydores que agora estan enla mi audiençia, que esten e continuen enella ...".<sup>(198)</sup> No obstante, de los siete oidores que son designados para ocupar los turnos en las Cortes de Palenzuela, cuatro, Juan Fernandez de Toro, Gonzalo Rodriguez de Salamanca, - Juan Velezquez de Cuéllar y Juan Sánchez de Zuazo aparecían también en las Cortes de Madrid de 1419<sup>(199)</sup>, cambio los tres restantes parecen de nueva designación, o al menos no aparecen como oidores en 1419. Estos han podido venir a cubrir las vacantes de otros tantos oidores que, ya sea por defunción, designación para otro oficio o sanción -recuérdese que se está combatiendo la falta de asistencia de los oidores a la Audiencia-, han dejado de desempeñar su oficio en la Audiencia. Podemos concluir, pues, a la luz de estos datos que, aparte del nombramiento y remoción del oficio sometidos en todo momento a la voluntad real, no existe en estos primeros años del siglo XV una duración determinada para el oficio de oidor - más que la impuesta por el turno semestral en el que ha de ejercer su función el oidor.

---

(198) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, p. 51).

(199) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 12).

También sorprende que en las Cortes de Palenzuela no se haga mención de los oidores prelados. Cabría entonces cuestionarnos si han sido suprimidos los oidores de tal condición, pero, en nuestra opinión, no cabe tal posibilidad - creemos que la omisión a los oidores prelados está explicada en cuanto que éstos no han presentado problema alguno y por ello no hace falta hacer referencia a ellos. El Obispo de Cuencia ocuparía el primer turno semestral y el Obispo de Zamora el segundo turno tal como se dispusiera en 1419<sup>(200)</sup> aunque con ello no descartamos que sean otros los obispos que en 1425 ocupen tales oficios. Por otro lado, testimonios documentales y narrativos de los años inmediatamente posteriores nos revelan la presencia de prelados en la Audiencia.<sup>(201)</sup>

Al igual que se estableciera en 1419, se establece un control de asistencia sobre los oidores. Una vez llegados éstos a servir sus oficios tiene la obligación de notificárselo al Chanceller mayor o a su lugarteniente para que estos lo pongan por escrito y de esta manera se pueda saber el tiempo que cada uno sirve. Por su parte el Chanceller Mayor o su lugarteniente tienen la obligación de hacerle saber al Rey cada año la relación de oidores con sus respectivos tiempos de servicio para que pueda proveer en caso de incomparecencia injustificada.<sup>(202)</sup>

(200) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 12).

(201) Véase, por ejemplo, la real ejecutoria de 1428, mayo 12 sobre un pleito entre el concejo y hombres buenos de la ciudad de Oviedo por una parte, y el Merino Mayor de Asturias por la otra, en la que aparece como oidor el Obispo de Cuencia (VIGIL: Col. Dipl. del Ayuntamiento de Oviedo, doc. 148, p. 259). De ese mismo año tenemos la noticia del nombramiento del Obispo

Lejos de ser resuelto el problema del lugar donde ha de residir la Chancillería, en Palenzuela los procuradores han insistido una vez más en que se ubique seis meses al norte de los puertos y los restantes al sur. Como se recordará, en este mismo sentido se habían expresado los procuradores de las Cortes de Madrid<sup>(203)</sup> a lo que el Rey había contestado que establecería la Chancillería en Segovia aunque por las necesidades del momento estuviera a la sazón en Valladolid. En Palenzuela, Juan II accede y dispone que la "dicha mi audiencia e chancillería este en cada vn anno seys meses aquende los puertos en la villa de Turuegano, e allende los puertos otros seys meses en Grinnon e Cubas, los quales son logares asaz conuenibles así para allende como para aquende delos puertos"<sup>(204)</sup>. Desconocemos que razones movieron a Juan II para escoger exactamente estas villas para el establecimiento de la Audiencia y Chancillería.

---

(201) /...de Palencia, Gutierre Gomez de Toledo como Presidente de la Audiencia (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4, p. 445); véase también GARCÍA DE LA SANTA MARÍA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 5, p. 10.

(202) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, p. 52).

(203) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 3, pgs. 13-4)

(204) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 1, p. 52).

Tres años más tarde Juan II realiza un nuevo reajuste en la planta de la Audiencia reduciendo a tres el número de oidores que permanecerán en ella, no semestralmente, como hasta ahora se habían venido cubriendo los turnos, sino que se establece el criterio de la anualidad. Esta medida - afecta igualmente a los oidores prelados que se reducen a uno, sobre el que recae la "Presidencia" de la Audiencia a lo largo de un año. (205)

Posiblemente esta reducción de la plantilla de la Audiencia se debe, una vez más, a razones de tipo económico. Es cierto, y de esta forma nos lo expresan las crónicas (206), que las cuantías de las quitaciones de los dos oidores prelados ascendían a 50.000 mrs. anuales, en cambio, ahora, el prelado "Presidente" le era asignada una quitación de 100.000 mrs. anuales. Ocurría de modo semejante con los oidores --

---

(2p5) Los cronistas de Juan II recogen esta alteración en la estructura orgánica de la Audiencia; así, PEREZ DE GUZMAN señalaba este hecho: "...y el Rey mandó al Obispo de Palencia don Gutierre Gomez de Toledo que fuese a la Chancilleria, a fuese en ella Presidente, no por seis meses como lo hacían los Prelados ante desto, mas por todo un año... Otrosi ordeno que tres oidores hubiesen de estar de continuo todo el año en el Abdiencia con el Obispo..." (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4, p. 445). En sentido muy parecido se expresaba GARCIA DE SANTA MARIA: "Otrosi ordeno que tres oidores touiesen cargo de estar residentemente todo el año con el bbispo en la Audiencia, aquellos que él escogió..." (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 5, p. 10).

(206) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4, p. 445 y GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 5, p. 10.



legos, a los que se les incrementa la quitación de 30.000 a 50.000 mrs. anuales.<sup>(207)</sup> No obstante si nos detenemos a considerar estas cifras y relacionarlas con la reducción de los oidores podemos fácilmente percibir que, pese al notable aumento en las quitaciones asignadas a los oidores, el Rey se ahorra una cuantiosa cantidad. Los oidores prelados, hasta esta fecha, recibían entre los dos la suma de 100.000 mrs. anuales, justamente la suma que recibirá ahora el prelado - Presidente, con lo que en este caso el Rey no se ahorra nada. Pero en el caso de los oidores legos es muy diferente. Hasta 1428, como hemos podido comprobar en las páginas precedentes, vienen actuando ocho oidores legos, que a razón de - - 30.000 mrs. anuales percibían en total una cantidad de 240.000 mrs. Ahora, al ser sólo tres los oidores, aunque éstos tengan mayor quitación (50.000 mrs. anuales), el importe total de sus quitaciones anuales asciende a 150.000 mrs. es decir, - 90.000 mrs. menos de la cantidad que hasta entonces estaba reservada para el pago de las quitaciones anuales de los oidores de la Audiencia. El ahorro ha sido considerable.

Además de la alteración orgánica de la Audiencia, - hay otro dato que nos proporciona la crónica de PEREZ DE - GUZMAN que estimamos oportuno destacar: por primera vez, que sepamos nosotros, se denomina "Presidente" al oidor prelado que está al frente de la Audiencia.

---

(207) Ver textos de la nota anterior.

Desde las Cortes de Toro de 1371 hemos podido ir constatando la diferencia, siempre marcada en los textos, entre los oidores prelados y oidores legos, pero en ningún momento las fuentes nos hacen referencia a una posible distinción a la hora de actuar en la Audiencia por parte de unos o de otros. Sin duda, la condición de prelado ya de por sí supone una mayor distinción y categoría, los prelados dan a la Audiencia "mejor abtoridat"<sup>(208)</sup> y por ello los mismos procuradores piden al Rey que haya un prelado en la Audiencia<sup>(209)</sup> e incluso el Rey considera que no es conveniente que "este la dicha abdiencia syn oydor perlado". También los prelados son los encargados de tomar el juramento a los oidores legos<sup>(210)</sup> y tienen asignadas mayores quitaciones,<sup>(211)</sup> por ello, en

---

(208) Cortes de Briviesca 1387: "alo otro quenos pidiste que estouiese enella toda via un perlado conlos quatro delos legos, que estouiese rregidente el perlado tres meses, e los legos seys. Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e commo auia de ser vn oidor perlado que sean dos: lo vno por que enla nuestra abdiencia este mejor abtoridat; lo otro por que acaesçe de adolesçer algunos dellos, e non esté la dicha abdiencia syn oydor perlado; e queremos quelos dichos oydores perlados esten tambien seys meses commo los oydores legos" (CLC. II, 25, p. 388).

(209) Ver texto de la nota anterior.

(210) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 3, p. 475).

(211) Ver Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 190), Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 1, p. 11).

base a esta preminencia, suponemos que presidirían las sesiones, de ahí la preocupación para que siempre haya oidores preladados residentes en la Audiencia. En cualquier caso, ante el silencio que guardan las fuentes al respecto, no podemos precisar qué funciones y qué atribuciones correspondían al Presidente; tendremos que esperar todavía hasta finales del siglo XV en que las Ordenanzas de la Audiencia hacen mención ya de un modo explícito.

La instauración de turno anual no fué bien acogida por las ciudades que, en las primeras Cortes celebradas a raíz de ser implantado, muestran su descontento al Rey para que los oidores "se rrepartan por diversos tienpos"<sup>(212)</sup>, como "siempre en esto se guardo". Ante una primera respuesta evasiva de Juan II, los procuradores insisten en su petición a la que acabará accediendo el Rey.<sup>(213)</sup> Quedaría, pues, a la luz, de este texto, restaurado el sistema de turnos semes-

---

(212) Cortes de Burgos 1430: "Et alo que me pediste por merçet que me plugiese mandar en rrazon del seruiçio que han de fazer los mis oydores en la mi audiençia, que se guarde lo que es ordenado por los rreyes mis anteçesores e por mi mandado guardar, de commo se rrepartan por diuersos tienpos los dichos oydores, e siruan cada vno por su tienpo, e non sea encargado toda via el seruiçio a vnos oydores, por que non se guardar lo que sienpre se guardo e se fazer esta espeçialidad, se pueden venir algunos yncouenientes. Aesto vos rrespondo que yo proueere sobrello commo entendiere que mas cunple ami seruiçio. Alo qual rreplicastes que me pedides por merçet que me plugiese de guardar lo que sienpre en esto se guardó. Alo qual vos rrespondo que me plaze que se faga asi". (CLC. III, 12, p. 85)

(213) Ver texto en nota anterior.

trales, pero lo que no sabemos es si esta medida afectó también a la planta de la Audiencia. Lógicamente, en principio, al restaurarse el turno semestral forzosamente se han de aumentar el número de oidores, por lo que pensamos que se restauraría el sistema anterior a 1428. Pero Juan II, pese a lo dispuesto en las Cortes de Burgos, seguramente hizo caso omiso a la petición de los procuradores ya que tan sólo dos años después, en las Cortes de Zamora de 1432, suplican de nuevo al Rey los representantes de las ciudades para que "mandase ordenar la manera que se deuiere tener en la mi chancillería, e como deuiessen seruir los mis oydores e alcalles e notarios della".<sup>(214)</sup>

En la misma petición se insiste también, una vez más, en el problema de la localización de la Audiencia, ante el incumplimiento de lo dispuesto siete años antes en Palenzuela que, como se recordará, se disponía que la Audiencia y Chancillería estuviera seis meses al norte de la sierra en la villa de Turégano y los restantes meses del año en Griñón y Cubas.<sup>(215)</sup>

A ambas peticiones Juan II responde sin dar una solución concreta; se limita a decir que sobre estas cuestiones ya "se començo a fablar en Medina del Campo por ciertos del mi Consejo, los quales yo deputé que viesen en estos fechos, e por mi partida dela dicha villa, non se pudo concluyr".<sup>(216)</sup>

(214) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 1, p. 117)

(215) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 1, p. 117).

(216) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 1, p. 117)

Al año siguiente, como cabía de esperar, los procuradores de las Cortes de Madrid insisten de nuevo para que se cumplan las disposiciones de la "ordença que se deue tener en la mi chancelleria"<sup>(217)</sup>. El Rey les contesta que ya él había dispuesto lo pertinente en las Cortes de Palenzuela y repite la ley primera de las citadas Cortes literalmente, no obstante dispone que todo oidor o alcalde que incumpla lo dispuesto en dicha ley sea sancionado perdiendo la quitación de aquel año<sup>(218)</sup> y designa, a continuación, al Obispo de Cuenca. Alvaro de Isorna, como oidor prelado y a tres doctores y un licenciado como oidores legos<sup>(219)</sup>. De esta forma quedaba restablecido el sistema implantado en 1425. Sin embargo, es interesante destacar que mientras en esa fecha se designaban oidores para los dos turnos del año, ahora, en 1433, Juan II sólo nomina oidores para un turno, aunque si bien es verdad al final de su respuesta, muy enfáticamente, añade que "acabados estos de seruir su tienpo, yo mandaré otros que siruan"<sup>(220)</sup>.

---

(217) Cortes de Madrid 1433 (CLC. III, 1, pgs. 161-2).

(218) Cortes de Madrid 1433 (CLC. III, 1, p. 163)

(219) Cortes de Madrid 1433: "...e quanto toca a los oydores que es mi merçed que de presente continuen e fagan rresidençia en la dicha mi audiencia don Alvaro de Isorrna obispo de Cuenca e los doctores Juan Velazquez de Cuellar e Ruy Garçia de Villalpando e Pero Garçia de Burgos e el liçençiado Gonçalo Rodriguez de Ayllón (CLC. III, 1, p. 163).

(220) Cortes de Madrid 1433 (CLC. III, 1, p. 163).

Desconocemos los motivos por los que Juan II se encuentra tan reacio a acceder a las peticiones de las ciudades en estos aspectos tan concretos referentes a la Audiencia y, en general, a toda la Administración de justicia de su Corte. Prueba de ello es que dos años más tarde, en las Cortes de Madrid de 1435, se repiten las mismas quejas presentadas en 1430, 1432, y 1433, por los procuradores<sup>(221)</sup> de las ciudades.

Debió acceder Juan II momentáneamente a tales aspiraciones ya que en las Cortes de Toledo, convocadas al año siguiente, no encontramos quejas en este sentido. Sí, en cambio, podemos observar denuncias encaminadas a la actuación de los oidores. Así, por ejemplo, que no tomen quitación, ni cosa alguna o dinero de otra persona que no sea el propio Rey<sup>(222)</sup> so pena de la pérdida del oficio, quitación y escusados que venfa

---

(221) Cortes de Madrid 1435 (CLC. III, 1, pgs. 185-6).

(222) Cortes de Toledo 1436: "Otrosy muy poderoso sennor, por quanto alos oydores dela vuestra audiencia e chançellria aquien vuestra alteza da quitación non deuen tener nin tomar quitacion ni otra cosa nin mrs. algunos de ninguna persona, saluo de vuestra merçet, por que mas libre mente e syn afecçion alguna guarden la justicia alas partes que antellos vinieren, suplicamos avuestra alteza que ordene e mande que ningun oydor de vuestra audiencia que de vuestra sennoria touiere quitación nin tomen acostamiento, nin quitación nin mrs. nin otra cosa alguna de ningunt cauallero nin de otra persona alguna, de qual quier estado o condiçion prehemineçia que sean por sy nin por otra interposita persona, directa nin indirecta mente, saluo de vuestra señoria..." (CLC. III, 32, pgs. 299-300).

disfrutando<sup>(223)</sup>. Se le prohíbe ejercer la abogacía en determinados casos<sup>(224)</sup>. Se denuncia, igualmente, el abuso por parte de los oidores, y en general de todos los oficiales de la Chancillería, de que ganan muchas cartas de emplazamientos contra los súbditos del reino "lo qual es contra toda justicia, e los que asy enplazan de nesçesario les es por non ser fatigados e por aver de venir e librar los dichos pleytos en el audiencia onde ellos tienen ofiçios por los otros oydores sus conpanneros, e estando ellos presentes es forçado de se dexar rrendir e pagar lo que non les deuen"<sup>(225)</sup>, por ello, suplican los procuradores al Rey que si ha de realizarse algún emplazamiento no se haga para ante la Audiencia sino ante el Consejo "e que aqui en vuestra corte siguan los pleytos con tales - personas"<sup>(226)</sup>. Otras quejas están encaminadas a evitar que los oidores sin quitación<sup>(227)</sup> no puedan librar los pleitos en la Audiencia hasta que el Rey les provea de quitaciones<sup>(228)</sup>, y que

(223) Cortes de Toledo 1436: "...e sy lo contrario fizieren, seyendo le prouado, que por ese mesmo fecho aya perdido e pierda el dicho oficio de oydor e la quitación e escusados que por rrazon del dicho ofiço de vuestra merçet tiene, e que vuestra merçet lo mande asy guardar, mandando pregonar publica mente la ley que sobre esto fizieron e ordenaron en la vuestra corte e en la chancelleria, por que los dichos vuestros oydores lo sepan e non puedan pretender ynorançia que lo non sopiaron..." (CLC. III, 32, p. 300).

(224) Corte de Toledo 1436: "...nin sean abogados nin den consejo en ningunt pleyto en çibdad nin en villa nin lugar delos mis rregnos nin en la mi corte e rrastro nin en la mi chancelleria, saluo si el pleyto fuere de tal manera en que el tal oydor non pueda ser juez (CLC. III, 32, p. 300).

(225) Cortes de Toledo 1436 (CLC. III, p. 33, pgs. 300-1).

(226) Cortes de Toledo 1436 (CLC. III, p. 33, p. 301).

cuando vacare alguna plaza de oidor, el Rey la cubra con estos oidores sin quitación y no con otras personas.<sup>(229)</sup>

Es destacable también la petición de los procuradores dirigida a la forma en que se han de librar los pleitos en la Audiencia. Como se recordará, Enrique II en las Cortes de Toro de 1371 estableció que las peticiones en la Audiencia debían ser resueltas mediante un procedimiento plenario abreviado o rápido, que se caracterizaba porque se libraba "segunt de recho ssumaria miente et sin figura je juyzio"<sup>(230)</sup>. Este modo de proceder sumariamente -tomando aquí la sumariedad como reducción procedimental-, que caracterizaba el modo de librar de los jueces delegados y que pasó de ahí a la Audiencia, fue sin duda, sustituido poco a poco por el proceso ordinario o, - en todo caso, se vió desnaturalizado por la práctica procesal de los oidores que admitían dilaciones y "sotilezas de derecho"

---

(227) /...Cortes de Toledo 1436: "Otrosi muy poderoso sennor, por quanto vuestra alteza a petición de algunos caualleros e grandes de vuestros rregnos avedes fecho merçedes de oficios de oydores de la vuestra audiençia a algunas personas syn les dar quitaçion conlos dichos ofiçios..." (CLC. III, 35, p. 302).

(228) El problema radica en que tales oidores estan actuando como abogados en la Audiencia hasta que el Rey les designara quitación, siendo esto "muy grant danno de todos los que pleytos han enla dicha audiençia por quanto los tales oydores se asyentan enla dicha vuestra audiençia conlos otros vuestros oydores que de vuestra merçed tienen quitaçiones, e libran e sentencian con los otros dichos oydores en todos los pleytos de que ellos non son abogados; por lo qual muy poderosos sennor, por ellos tener la tal libertad seles da gran fauor enlos pleytos de que ellos son abogados, de que viene grant perjuizio e danno alas partes contra quien ellos ayudan, ca ellos puden oyr e sentençar en todos los otros pleytos de que non son abogados... (CLC. III, 35, p. 302).



que atentaban de un modo directo a la finalidad de esta forma de proceder sumariamente. Ante esta situación, se pide al Rey que encomiende a dos doctores de su Consejo para que hagan las "leyes" necesarias al respecto, y que en la Audiencia se libren los pleitos "synple mente e de plano syn estrepitu e figura de juyzio".<sup>(231)</sup>

Pero no acaban aquí las quejas de los procuradores puesto que, además de todas las denuncias que hasta ahora hemos venido señalando, protestan de que el Rey está dando quitaciones a muchos oidores, prelados como legos, que ni sirven ni están en la Audiencia, por lo que ni se libran ni despachan los pleitos y negocios que ante ella se presentan, ocasionando esto un gran perjuicio económico a los litigantes.<sup>(232)</sup>

---

(229) /...Cortes de Toledo 1436 (CLC. III, 35, p. 303)

(230) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189)

(231) Cortes de Toledo 1436: "...Por ende muy poderoso sen" nor, por que en la dicha vuestra audiencia se libren e despachen los pleytos commo deuen e los tales inconuenientes çesen, avuestra alteza plega de encomendar e mandar alos doctores Pero Yannes e Diego Rodriguez, de vuestro Consejo, que fagan e ordenen las leyes que entendieren ser conplíderas aseruiçio vuestro para bien e despachamiente e libramiento delos pleytos e negoçios que enla dicha vuestra audiencia se tractare, e que se conozca dellos synple mente e de plano syn estrepitu e figura de juyzio, por que breue mente se libran e non ayan logar dilaciones meliçiosas de derecho que enbarguen e enbargar puedan ala verdad que paresçiere por los procesos..." (CLC. III, 36, pgs. 303-4).

(232) Cortes de Toledo 1436 (CLC. III, 37, p. 304).

A la vista de las continuas quejas y denuncias que a lo largo de diez años vienen exponiendo las ciudades en prácticamente todas las reuniones de Cortes, no es difícil llegar a la conclusión de que la Audiencia estaba atravesando una profunda crisis y que su actuación como "llave de la justicia çivil de todos los regnos" dejaba mucho que desear.

Juan II se limitaba a contestar una y otra vez "que lo mandaré ver", "proueeré sobre ello en breue commo cunpla ami seruiçio", pero lo cierto es que año tras año se suceden las peticiones encaminadas a subsanar los defectos de que adolece la Audiencia.

Algunas veces se llegaron a tomar medidas por parte del Rey <sup>(233)</sup>, pero otras veces Juan II no procede de acuerdo a su contestación en las Cortes y deja sin proveer la denuncia de los procuradores. Denuncia que se repetirá en las siguientes Cortes. Tal es el caso de las Cortes de Madrigal de 1438 en las que se le recuerda al Rey que, entre las "leyes e ordenanças para bien e pro comun e buen rregimiento e gouernaçion de vuestra justiçia e dela rrepublica delos vuestros rregnos e sennorios", "ordenó e mandó quela vuestra chançelleria estouiese en cada vn anno seys meses aquende los puertos, e

---

(233) Así, por ejemplo, a raíz de las Cortes de Toledo de 1436, Juan II dicta una pragmática, fechada en Guadaluajara a finales de ese mismo año, en la que se ven reflejadas las peticiones de las Cortes en lo concerniente al cohecho, ya que los oidores sirvan en turnos de seis meses (vid. Libro de Eulas y Pragmáticas, fol. 92 v.)

otros seys meses allende los puertos, en los logares conuenibles que avuestra merçet bien visto fuere", pero "comme - quiera que vuestra alteza asi lo ordenó e mandó, después acá non se fizo nin cumplió así".<sup>(234)</sup>

Las Cortes de Madrigal, en lo que respecta a las quejas sobre la Audiencia, son prácticamente una copia de las Cortes celebradas en Toledo dos años antes.

En este sentido se repite la petición encaminada a evitar los emplazamientos para ante la Audiencia de los pleitos de los oidores "por quanto los tales que los asi enplazaban son casi juezes e partes", y por ello entienden que ningún oidor ni los oficiales de la Audiencia deben ganar cartas de emplazamiento para ante ella, sino para ante el Consejo en el que se librarían tales pleitos.<sup>(235)</sup> Se reitera, igualmente, la petición para que los pleitos de la Audiencia, "segund las leyes del rregno", se libren "sinple mente e de plano syn figura de juyzio sin dar lugar a maliçias ni a sotilezas de derecho".<sup>(236)</sup> Los procuradores le recuerdan al Rey que él dispuso encomendar a dos doctores de su Consejo<sup>(237)</sup> que hicieran las

---

(234) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 1, p. 312)

(235) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 25, p. 331)

(236) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 26, p. 332)

(237) Ver texto en nota 231.

"leyes" que entendieran necesarias para el buen libramiento de los pleitos de la Audiencia, pero "fasta agora non se ha puesto en esecucion e pasan los negocios segund que de ante pasauan". Juan II les contesta a los procuradores y les muestra el texto de una carta, fechada en Arévalo el 15 de marzo de ese mismo año, en la que se dirige a los oidores de la Audiencia ordenándoles que cumplan lo dispuesto por su bisabuelo en las Cortes de Toro de 1371 en lo conoerniente a la forma de librar los pleitos<sup>(238)</sup>; esta carta, como ya disponían las Cortes de Madrigal, se le dió valor de ley.<sup>(239)</sup>

Encontramos también en las Cortes de Madrigal repetida la queja presentada en Toledo<sup>(240)</sup> dos años antes referente a la ausencia de los oidores, prelado como legos, de la Audiencia, para lo que el Rey había proveído que se cumpliera en breve, pero que hasta este momento no se había dispuesto nada; por este motivo piden que mande a cumplir lo establecido en las Cortes anteriores y que los que "fueren llamados para seruir los dichos ofiçios, luego vayan por sus personas alos seruir por el tiempo que vuestra alteza lo tiene ordenado e ordenare o mandare, e los siruan e esten rresidentes por sus personas e non por otros sostitutos".<sup>(241)</sup>

---

(238) El texto de la carta lo recogen las mismas Cortes de Madrigal de 1438 (CLC. III, 26, pgs. 332-4); puede verse también en B.N. Col. Burriel, Ms. 13108 fols 147 v-r 148 v).

(239) El texto de ella, prácticamente idéntico al de la carta, puede verse en B.N. Col. Burriel Ms. 13106 fols 192-193v).

(240) Cortes de Toledo 1426 (CLC. III, 37, p. 304)

(241) Cortes de Madrigal 1438 (CLC. III, 27, p. 334).

Sorprende a primera vista este desinterés por parte de Juan II en solucionar el estado lamentable en el que se encuentra la Audiencia: los oidores o no asisten o lo hacen por medio de sustitutos, la Audiencia no está residiendo en los lugares señalados al norte y al sur de los puertos, los pocos oidores que están en ella actúan sin tener en cuenta la peculiar forma de librar los pleitos que se exige a tal Tribunal, aparte de cohechos, eplazamientos abusivos, etc. Y decimos que sorprende porque es una situación que, pese a las continuas quejas de los procuradores, se viene produciendo año tras año sin que se dé por parte de Juan II una solución definitiva. Parece verdaderamente paradójico que uno de los medios más eficaces que tiene el Rey a su alcance para afianzar su poder personal, como es el de la administración de justicia, se halle en situación semejante. Qué ocurre realmente?

Desde luego la situación no es nada fácil. El reinado de Juan II representa una de las fases más importantes de la pugna que desde los albores de la Baja Edad Media vienen librando monarquía y nobleza. Este enfrentamiento, de sí ya enconado, se ha visto agravado en estos años por el ascenso paulatino de don Alvaro de Luna, el gran valedor de la monarquía. A raíz de las treguas de Majano en 1430 hay una manifestación hostilidad entre el Condestable y la mayor parte de la nobleza castellana, que culmina en 1437 con un levantamiento

general contra don Alvaro que dura más de ocho años, hasta la victoria pírrica de Olmedo.<sup>(242)</sup>

Don Alvaro representa al absolutismo regio y es precisamente esta postura, aunque parezca a simple vista un contrasentido, por la que la Audiencia es, digamos, dada un poco de lado y muestre esa lamentable situación durante estos años. Como tendremos ocasión de ver en el siguiente capítulo, el Consejo Real desde el primer tercio del siglo XV está adquiriendo una fuerza inusitada y es sobre el Consejo Real donde van a ir encaminadas las aspiraciones de unas u otras facciones porque, en definitiva, el control del Consejo Real supone el control del Reino. Pero aún hay más, El Consejo Real desde principios del siglo XV está conociendo asuntos de justicia tanto civiles como criminales, siendo continuas las quejas por parte de los oidores de la Audiencia debido a esta usurpación de jurisdicción.<sup>(243)</sup> Este conocimiento por parte del Consejo de asuntos de justicia hace que dentro del mismo Consejo Real aparezca un "Consejo de Justicia" al que se le dota en 1432 de unas ordenanzas en las que se regula su actuación.

---

(242) Sobre este conflictivo período, aparte de las noticias que nos han dejado los cronistas PEREZ DE GUZMAN, GARCIA DE SANTA MARIA y la misma Crónica de don Alvaro de Luna, puede verse, L. SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámara de Castilla y Aragon... en Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal t. XV.

(243) Así, por ejemplo, véase la Cédula que Juan II envía al Consejo Real y a sus alcaldes de Corte, fechada en Tordesillas a 16 de abril de 1428, para que se remitan todos los pleitos que son pertenecientes a la Audiencia (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 47 v)

Aquí está, a nuestro entender, la razón por la que se ha producido una crisis en el seno de la Audiencia. El Rey, al intentar poner en práctica los principios absolutistas del poder regio, pone más atención en su Consejo Real que le acompaña siempre y trata de canalizar su gobierno y su justicia a través de él y no de la Audiencia.

Esta hipótesis está corroborada por un texto de las Cortes de Valladolid de 1440. En él, los procuradores reconocen efectivamente la importancia que tiene el Consejo<sup>(244)</sup> en el trato de los asuntos del Reino "pero -dicen los procuradores- muy mayor parte consiste en la vuestra audiencia e chancillería, como aquella que tiene e deve tener el cargo principal de toda la justicia de vuestros reynos"<sup>(245)</sup> Por ello le suplican que se guarden los ordenamientos de Briviesca y Valladolid en los que, entre otras cosas, se ordenaba, para que "los fechos de justicia se fiziesen e executasen bien", que el Rey "nin su Consejo non se entremetiesen de librar fechos algunos de justicia çeuiles nin criminales, mas que fuesen rremetidos todos ala su audiencia e chançellería"<sup>(246)</sup>

---

(244) Cortes de Valladolid 1440: "Otrosu muy alto sennor, como quien que grant parte delas espediçiones delos fechos de vuestros rregnos consista en la manera que se ha de tener en vuestro muy alto Consejo por andar continuada mente con vuestra sennoria." (CLC. III, 7, p. 383)

(245) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383)

(246) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383).

Los procuradores después de recordarle, no sin mucha ironía, como todos sus antepasados tenían ordenada la Audiencia con buenos prelados y doctores<sup>(247)</sup>, añaden: "Ca sennor, sabra vuestra muy alta sennoria que de traher los pleytos avuestro Consejo se siguen muchos inconuenientes e dannos que dexamos agora de dezir, e se dirán si nescesario fuere e vuestra sennoria lo mandare."<sup>(248)</sup>

Creemos que el texto es diáfano al respecto. Se está percibiendo claramente una preponderancia del Consejo en todos los asuntos del Reino, incluida la justicia, que, como señalan los representantes de las ciudades, "muy mayor parte consiste en la vuestra audiencia e chançilleria". Sin duda los males e inconvenientes que los procuradores dejan de decir - son debidos a una menor fiabilidad de la justicia administrada por el Consejo, órgano siempre más susceptible al manejo político, aparte del ya conocido inconveniente de la itinerancia del Consejo Real, siempre unido a la persona del Rey. Por ello, en la misma petición, concluyen pidiendo que la Audiencia e Chancillería "esté en el lugar que mas conueniente sea a los letrados e escriuanos e playteantes, por que con mejor

---

(247) Cortes de Valladolid 1440: "...la qual el (Juan I) tenía ordenada de buenos perlados e doctores e otras personas las que conplian, e asi commo lo ordeno asi se executó en su tiempo e eso mismo en tiempo del sennor Rey don Enrrique de esclarecida memoria vuestro padre, que Dios aya, e asi enel vuestro, en tiempo delos sennores de santa memoria la Reyna donna Catalina, vuestra madre, e el Rey don Fernando de Aragon vuestro tio, vuestros tutores e rregidores de vuestros rregnos que santa parayso ayan." (CLC. III, 7, p. 383).

(248) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383).



voluntad e maes syn trabajo e costa fagan rresidência e continuen enella".<sup>(249)</sup>

Juan II dispone que sean guardadas las leyes ordenadas al respecto y manda a los del Consejo "que non se entremetan de cosa alguna dello que pertenesçe ala mi audiençia syn mi especial mandado, lo qual yo non entiendo mandar syn grant causa vrgente o nesçesaria o expediente o muy conplidera ami seruiçio".<sup>(250)</sup> Es importante señalar que el Rey se reserva la facultad de avocar para el Consejo cualquier tipo de causa perteneciente a la Audiencia, si bien es verdad que en casos excepcionales.

Finalmente Juan II considera oportuno dar orden para que continuamente residan en la Audiencia un prelado y algunos doctores que "sean buenas y letradas personas" para que mejor y más rápidamente puedan ser libradas las causas y pleitos de dicho Tribunal.<sup>(251)</sup>

Y efectivamente, en las mismas Cortes de Valladolid ante la petición de que "rrepare" la justicia de la Audiencia, ocupada ahora sólo por tres oidores viejos y que, por tanto, no se podían cumplir los turnos de seis meses, Juan II dispone

---

(249) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383)

(250) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 384)

(251) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 384).

"que de aqui adelante siruan en la dicha mi audiencia de seys en seys meses vn perlado e dos o tres oydores con vno de los doctores que agora en ella estan e continuan por que ella esté poblada, así de letrados antiguos commo de otros más mançebos". (252)

La imprecisión con que se expresa Juan II no nos permite saber exactamente de cuantos oidores quedaba compuesta la Audiencia. Sabemos que había tres oidores viejos sirviendo ya en la Audiencia, junto a un prelado, pero si atendemos a que la solicitan igualmente que sea restablecido el sistema de turnos semestrales, debemos suponer que sería más probable nombrar tres oidores que no dos, para que de esta forma quedaran dos turnos semestrales de tres oidores.

Pero una vez más sirvieron de poco las quejas y peticiones de los procuradores ya que de nuevo, dos años más tarde, en las Cortes de Valladolid de 1442 la situación es la misma. Allí los representantes de las ciudades definen a la Audiencia como "el principal avditorio e de superior jurisdiccion a donde despues de vuestra sennorias se han de rreparar todos los grauios que se fazen por los otros juezes de vuestros rregnos e casa e corte, e donde se han de tractar e - - determinar todos los grandes pleytos e negoçios que por via de justiçia se han de librar"<sup>(253)</sup> y le echan en cara al Rey

(252) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 10, pgs. 386-7)

(253) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 45, p. 443).

que "en vuestros tienpos fasta aqui non se han seruido los ofiçios nin administrado la justiçia en ella (la Audiencia) tan bien commo deuia".<sup>(254)</sup>

Varias son las razones que alegan los procuradores por las que, según ellos, la Audiencia se encuentra en tal estado: porque los oidores, alcaldes<sup>(255)</sup> y prelados no cumplen las ordenanzas establecidas en la Audiencia; porque el Rey no está informado como debía de los daños e inconvenientes que en dicho Tribunal acaecen<sup>(256)</sup>; finalmente, los procuradores reconocen los difíciles momentos por los que está atravesando el Reino que, como es lógico han afectado al aparato institucional.<sup>(257)</sup>

Por ello suplican las Cortes que "rrepare" la Audiencia porque si no manda hacer guardar lo dispuesto "la dicha vuestra audiençia e la administraçion de vuestra justicia paresçeria e por ventura non se podría rreparar en breve tiempo".<sup>(258)</sup>

---

(254) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 45, p. 443).

(255) Recuérdesse que los alcades de Cortes y Chancillería quedan integrados dentro de la Corte y Chancillería formando allí la Audiencia de la Cárcel. Véase el cap. III el apartado correspondiente a los alcaldes de Corte.

(256) Esta manera de tratar de quitarle la responsabilidad al Rey alegando su falta de información, se trata, sin lugar a dudas, de una medida política para ver si de esa forma el Rey hace caso de su petición. Me cuesta mucho creer que Juan II después de estar las Cortes casi todos los años repitiéndole los males que aquejaban a la Audiencia, desconozca cuál es realmente la situación en que se encuentra su Tribunal.

(257) Cortes de Valladolid 1442: "...lo otro, por los grandes bolliçios que han seydo fasta aqui en vuestros regnos" (CLC. III, 45, p. 443)

(258) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 45, p. 443)

Desde luego, dejando aparte la d6sis de dramatismo que le imprimen los procuradores a la petici6n, a tenor de las - quejas que presenta, podemos ver que la situaci6n de la - Audiencia sigue siendo ca6tica,<sup>(259)</sup> sin que por ello se tomaran medidas para subsanarlas.<sup>(260)</sup>

La respuesta de Juan II poco difiere de la que diera dos a6os antes, dando orden para que en la Audiencia sirvan por seis meses y continuen en ella el Obispo de Burgos "e tres o quatro doctores"<sup>(261)</sup>, e para adelante yo entiendo -dice el Rey- diputar quien continue en la dicha mi audiencia".<sup>(262)</sup>

Nos encontramos, pues, con el mismo problema que antes a la hora de determinar exactamente de cuantos oidores se componia la Audiencia. No podemos precisar si esa indeterminaci6n para dotar los oficios de oidores se debe a un desinter6s por parte del Rey o, si por el contrario, - quiere devolver a la Audiencia su anterior planta de tres - oidores y dejando un cuarto oidor de "reserva" en caso de - ausencia de alguno de los anteriores. En todo caso, creemos

(259) Cortes de Valladolid 1442: "...e los dannos della e por que ha venido el menguamiento dela justia en ella, de que al presente somos informados son estos que se siguen o otros que serien luengos de escreuir. Lo primero, en vuestro tienpos de fasta aqui por muy muchas vezes acaesçio en algunos annos estar la dicha corte syn oydores nin oydor alas vezes por espaçio se seys meses e otras vezes por espaçio de ocho o nueue, e otras vezes estar con un oydor solo la mayor parte del anno e asi niesmo syn alcalles, por lo qual los pleytos non se librauan e las partes e ofiçiales de la corte se gastauan e perdian e se yuan e dexauan los pleytos perder e peresçia la justicia." (CLC. III, 45, pgs. 443-4).

que es visible una falta de interés por parte de Juan II quien en vez de nombrar nominalmente los oidores, como se ha hecho en otras Cortes, y cubrir las vacantes para un año, parece que su respuesta está más encaminada a salir del paso de lo que le piden las Cortes, que a una convincente solución del problema.

También en 1442 sigue en pie el problema de la ubicación de la Audiencia, denunciándole al Rey los procuradores que una de las causas por la que su Audiencia no estaba bien seruida era porque oidores y alcaldes "quieren e tractan de mudar el audiençia segunt que a ellos venia e viene e por la leuar çerca de sus casas, avn que fuese danno delos otros e de toda la corte e ofiçiales e pleyteantes, e quando algunos venian que la mudauan e mudan adonde les plaze, los -- otros que han de venir no quieren venir por que non está çerca de sus casas". (263)

---

(260) /...Cortes de Valladolid 1442. "E commo quier que esto era notificado avuestro Consejo nin se proueya çerca dello commo deuia, e caso de que llamauan oydores venian quando querian e los que querian, e el que non queria venir non era apremiado nin penado por ello, e algunos que eran e andauan en vuestra corte e a quien encomendauan, dauan logar que pasase" (CLC. III, 45, p. 444).

(261) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 45, p. 444).

(262) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 45, p. 444)

(263) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 46, p. 445)

Ante esta situación, Juan II opta por establecer la Audiencia de un modo fijo en Valladolid<sup>(264)</sup>, lugar en donde parece que queda ya establecida definitivamente.<sup>(265)</sup>

Pero no acaban aquí las quejas con respecto a la Audiencia y a sus oidores. Así se reiteran las denuncias de "algunos asy oidores commo alcalles que toman dones e dadiuas e presentes, asy de abogados commo de procuradores e escriuanos"<sup>(266)</sup>; de que se han dado "rreçeptorias sospechosas a las partes"<sup>(267)</sup>; o los inconvenientes que supone el que haya oidores perpetuos,<sup>(268)</sup> la ausencia de unos o el mal servicio

(264) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 46, p. 445)

(265) Cortes de Valladolid 1447 (CLC. III, 2o, pgs. 522-3); GALINDEZ DE CARVAJAL: "Después desto el rey uvo su Consejo con los Grandes que con el estavan para dar forma como la justicia en estos reinos fuese administrada en tanto que el iva a la guerra de los moros y determinase que quedasen en la villa de Valladolid... virreyes con Presidente y oidores, que se juntasen con los virreyes e lo obedeciesen e acatasen como a su propia persona" (Crónica de Enrique IV, año 1445, cap. 10, p. 92. ed. Torres Fontes); Ordenanzas de Córdoba 1485, c.l. (ed. Perez de la Canal); Ordenanzas de Piedrahita 1446, c.l. (ed. Perez de la Canal); Ordenanzas de Medina del Campo 1489, c.l. (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 49 v<sup>o</sup>).

(266) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 49, p. 446).

(267) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 5o, pgs. 446-7).

(268) Cortes de Valladolid 1442. "...Lo primeros que como quier que ellos sean buenas personas, son onbres, e es dar grant soltura alos tales oydores e atreuimiento, e se siguen otras cosas por quelo defienden los derechos. Lo otro, que desdeque saben quelas sentençias que dieren e otras prouisiones que fizieren non se han de

de otros<sup>(269)</sup>, y pese a que el Presidente, el Obispo de Burgos, "sea tal persona e tan suficiente que enel non se podria fallar defecto alguno"<sup>(270)</sup>, todo esto no se puede reparar con la simple venida del Prelado. Ello se debe -añaden los procuradores- a varias razones. En primer lugar porque este Prelado, lo mismo que otros que han estado en la Audiencia, en caso de que tomen cargo de ella, se ausentan rápidamente ya sea para sus negocios o por mandatos del Rey, quedando la Audiencia en poder de los oidores; El dicho Obispo fue nombrado hacía ya casi un año y no había estado en la Audiencia más de dos o tres meses<sup>(271)</sup>. En segundo lugar porque el Prelado no puede intervenir ni interviene en todos los asuntos que se libran. En tercer lugar, porque aunque el dicho Prelado quisiera reparar los agravios que cometen los restantes oidores, "non es en su poder, ca cada vno dellos tiene tante

---

(268) /...de hemendar nin ver por otros, toman gran osadia e fazen commo les plaze, e las partes non se osan queixar nin los abogados e procuradores contra dezir su voluntad aun queles paresca agrauio aquello que se faze por temor dellos, nin eso mesmo los otros abogados asistentes que non han parte en los negoçios osan dezir lo que les paresçe, e algunos dellos por les conplazer quando veen su voluntad concuerdan con ellos, lo que non se faria sy se esperasen otros en breue. Otrosi por quelos abogados e procuradores e escriuanos son aellos açeptos e que tienen fauores dellos, toman grant osadia e sallen con sus intençiones e obtienen en muchas cavsas e ganan muchas prouisiones allende del derecho e por expidiente, e los errores e males delos quelos siruen e se les dan, quedan syn pena e tantos otros incoenientes se han seguido e siguen dende que serian luengos e avn feos de escreuir... (CLC. III, 51, pgs. 447-8).

(269) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 52, p. 448).

jurediçion commo el, e muchos negoçios se determinan avn que el con ellos non concuerda e esto tanto que çesase todo fauor non es mal, e otras vezes des quelo non pueden traer asu opinion dexan de pronunçiar, e otras vezes lo guardan alibrar quando el non se asienta en audiенçia por algunt inpedimento o breue avsençia que acaesçe alas vezes"<sup>(272)</sup>. Finalmente porque los oidores informan de las cosas en secreto e inducen al Prelado "commo aellos plaze" y no hay posibilidad de contradecirles o porque no se sabe o por temor<sup>(273)</sup>. Por todos estos motivos solicitan a Juan II que cambie todos los oidores de la Audiencia.

No deja de ser paradójico que precisamente en estos momentos en los que se está denunciando la falta de oidores y la ausencia de éstos del Tribunal, haya nombrados "mas de veynte oydores con quitaçion" de lo que protestan también las Cortes, pues "nunca ouo tantos oydores con quitaçiones agora nin avn la meytad" y pese a ello "non ha quien sirua en avdiенçia"<sup>(274)</sup>, ya sea porque unos son, al mismo tiempo, miembros del Consejo o porque ocupan otros oficios.<sup>(275)</sup>

---

(270) /...Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 52, p. 448).

(271) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 52, pts. 448 -9).

(272) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 52, p. 449)

(273) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 52, p. 449)

(274) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 54, p. 450).

(275) Cortes de Valladolid 1442 (CLC. III, 54, p. 450).



El que haya nombrados más de veinte oidores con quitación no supone, desde nuestro punto de vista, el que haya sido aumentada la planta de la Audiencia en la práctica. Hemos visto como en estas mismas Cortes de Valladolid, lo mismo que en las de dos años antes, ante la reiterada petición de que se nombren nuevos oidores, el Rey ha contestado si bien es verdad no muy explícitamente, que haya semestralmente tres oidores, o cuatro a lo sumo, pero nunca se ha propuesto un número mayor. Esto quiere decir que la Audiencía viene realizando sus muy criticadas en estos años funciones con un número muy reducido de oidores, tal como lo venía haciendo desde finales del siglo XIV. Este aumento afecta, pues, más de una manera formal que real a la planta de la Audiencia y se debió, sin duda, no tanto a una intención de modificar la estructura del Tribunal como a una política de dádivas y mercedes con la que el Rey venía recompensando a sus incondicionales que tuvo su repercusión no sólo en el ámbito de la Corte, sino que también afectó a las esferas locales.<sup>(276)</sup>

Como siempre, y al igual que en años anteriores, las respuestas de Juan II a las peticiones de los procuradores fueron siempre otorgando su asentimiento, aunque, como había venido ocurriendo año tras año, la realidad fué bien distinta.

---

(276) Véase, por ejemplo, el ordenamiento hecho a petición de las Cortes celebradas en el Real sobre Olmedo en 1445, para que no se acrecentaran los oficios de las ciudades y villas del reino y se redujesen los ya acrecentados según fueren vacando (Cortes del Real sobre Olmedo 1445, CLC. III, pgs. 451-6)

Así en Valladolid, cinco años más tarde, las Cortes vuelven a manifestar su descontento por la falta del Prelado y de los oidores de la Audiencia apelando a la conciencia del Rey y recordándole que la justicia le ha sido encomendada por Dios y ante El, habrá de dar cuenta de su actuación.<sup>(277)</sup>

Las peticiones de las Cortes de 1447 difieren poco de las de años atrás<sup>(278)</sup>. Es comprensible también, como ya ocurriera en 1440<sup>(279)</sup>, que se pida que sean remitidos a la Audiencia todos aquellos pleitos y demandas que correspondían

---

(277) Cortes de Valladolid 1447: "...E es grand cargo de conciencia avuestra sennoria, en la principal cosa que por nuestro Sennor vos es encomendada es prouer e administrar la justia de vuestros rregnos que non se puede vuestra alteza escusar de non dar anuestro Sennor Dios cuenta dello" (CLC. III, 2o, p. 521).

(278) Cortes de Valladolid 1447: "Suplicamos a vuestra sennoria quele plega hordenar e mandar que todos e quales quier vuestros oydores e alcalldes e ofiçiales dela dicha vuestra corte e chançelleria que de vuestra sennoria tienen rraçiones e quitaçiones con los dichos Ofiçios, non sean eacusados de servir por annos, o alo menos en seys meses enla vuestra chançilleria, poniendo por meudo enla dicha hordenança todos los dichos vuestros oydores, e declarando commo devan servir vnos tras otros; e que sy alguno o algunos de aquellos falleçieren de servir por su persona el tienpo quele asy copiere, que por el mismo fecho pierda la rraçion e quitaçion que asy de vuestra sennoria tiene. E que vuestra merçed jure de gelo non tornar nin mandar tornar nin dar otra de nuevo nin dispensar con este dicha ley, pues que es vuestro seruiçio e nin dispensar con esta dicha ley, pues que es vuestro seruiçio e bien e procomun delos dichos vuestros rregnos e sennorios. Asy mismo pues tantos oydores ay e a vuestra merçed tanto conviene mirar en vuestra fazienda e buscar maneras commo se rreduzca lo que sobre la data ala rreçebta, le plega de non dar mas quitaçiones de nuevo, mas antes delas que vacaren delas consumir en sy, e ordenar e mandar que non se .../...

a la competencia de ésta pero que "penden" en la Corte. <sup>(280)</sup>

Ya hicimos referencia, y sobre ello volveremos más adelante, a la creciente importancia que ha adquirido el Consejo Real en estos años. A raíz de la batalla de Olmedo <sup>(281)</sup> la posición realista se ha visto notablemente consolidada con lo que toda la política centralizadora y absolutista, que con el apoyo de don Alvaro de Luna se dispone a llevar a cabo - Juan II, queda canalizada a través del Consejo Real. La preponderancia del Consejo Real hace que éste llegue a atribuirse competencias en materia de justicia, en menoscabo de la Audiencia, produciendo en el seno de ésta una profunda crisis desde el primer tercio del siglo XV. Ante la situación tan lamentable en que se encuentra el más alto Tribunal del Reino en el que los pleitos son interminables, los oidores (los pocos que sirven en ella) son susceptibles de cohecho por parte de los procuradores, abogados o ricos hombres, en donde la -

---

(278) /....den fasta que queden en aquel estado que sea rrazo nable e abaste para servir enla dicha vuestra abdiencia." (CLC. III, 2o, p. 521).

(279) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383)

(280) Cortes de Valladolid 1447. "E otrosy que vuestra merced mande rremittir ala dicha vuestra chançelleria todos los pleitos de demandas que penden en vuestra corte que propia mente son de conoçer e determinar alli. E los que de aqui adelante vinieren a vuestra corte que sean de aquella condiçion, los mande rremittir ala dicha vuestra chançelleria, que desto se seguirá non cargar tantos fechos a vuestra merced, e es desencargar vuestra corte de muchas gentes que la encareçen e fazen muchos dannos enla dicha vuestra chançilleria..." (CLC. III, 2o, pgs. 521-2).

(281) El prof. B. CLAVERO en su trabajo Notas sobre el Derecho territorial castellano, 1367-1445 en Historia, Instituciones y Documentos, 4 (1976), pgs. 163-5, señala la importancia de las Cortes de Olmedo de cara a una imposición por parte del Rey de su propio Derecho.

inseguridad jurídica llega a límites insospechados, nos hace fácilmente comprender el por qué se acude, unas veces voluntariamente por las partes, otras por vía de comisión por iniciativa real, ante el Consejo de la justicia para la resolución de los pleitos.

Pero al mismo tiempo las ciudades recelan del creciente poder de este Consejo en manos de don Alvaro de Luna y se esfuerzan una y otra vez para que sea restablecida la Audiencia en su pureza y sean cumplidas las leyes y ordenanzas que hasta entonces habían regulado el citado Tribunal.

Esta situación se mantuvo más de veinte años, pues parece que en estas Cortes de Valladolid de 1447 se llegaron a tomar medidas efectivas si tenemos en cuenta que en los restantes años del reinado de Juan II no se produjeron más quejas ni denuncias al respecto; es más la normalidad parece total en los últimos años del mencionado reinado a tenor de la petición de los procuradores hacen a Juan II en las Cortes de Burgos de 1453 encaminada a que el Rey mediante cartas y provisiones no saque los pleitos civiles y criminales que están pendientes de ser librados en la Audiencia<sup>(282)</sup>, lo que, sin duda, denota una actividad más normalizada en el seno de dicho Tribunal.

El reinado de Enrique IV no pudo empezar con mejores auspicios bajo una atmósfera de auténtica concordia<sup>(283)</sup>, en

(282) Cortes de Burgos 1453 (CLC. III, 17, pgs. 662-3).

(283) L. SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámara de Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-74) en Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XV, pgs. 119 y ss.

el que la gobernación del Reino y la Administración de la justicia andaban en "orden" y "sosiego"<sup>(284)</sup>. Hasta 1463 reina un verdadero clima de optimismo en Castilla, reflejado claramente en las Cortes de Córdoba de 1455<sup>(285)</sup> en las que hay un visible espíritu reformador, pero muy pronto empezaron las dificultades y las Cortes quedarían como un medio para obtener subsidios.

Estas son reunidas por segunda vez en el reinado en Toledo siete años después de la reunión de Córdoba. Se le pide al Rey que tanto consejeros, oidores, alcaldes de casa e corte e chancillería "sean bien pagados de todo lo que - - ouieren de aver, por que en procurar de sacar los libramientos o en lo cobrar han de gastar lo mas del tienpo e ala fin lo pierden todo o la mayor parte"<sup>(286)</sup>. Pero lo verdaderamente importante de esta petición es que Enrique IV, quien atraviesa unos momentos económicos muy difíciles, reorganiza la planta de la Audiencia.

---

(284) "Vista la gobernación del Reino e la administración de la justicia que andaba en tanta orden, con mucho sosiego, sin turbación de cosa alguna, el Rey se hallaba descuidado y contento" (Crónica de Enrique IV, cap. 26, p. 119) Véase también la Crónica Incompleta de los Reyes Católicos, preamb. pgs. 47-53.

(285) Cortes de Córdoba 1455 (CLC. III, pgs. 674 y ss)

(286) Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, 1, pgs. 702-3).

Acabamos de ver cómo precisamente una de las quejas que las Cortes presentaban a su padre, Juan II, era que había nombrados más de veinte oidores que cobraban sus - - correspondientes raciones y quitaciones. En las Cortes de 1447 parece que se tomaron medidas para la normalización de la Audiencia pero desconocemos si fueron reducidos o no el número de oidores y de cuántos de éstos quedó compuesta la planta del citado Tribunal<sup>(287)</sup>. Lo cierto es que Enrique IV establece "por que mejor de aqui adelante se faga nombrar dos meses antes de finalizar el año un prelado Presidente y seis oidores para "que syruan en ella todo el anno syguiente desde primero dia del anno fasta en fin del"<sup>(288)</sup>.

Sin embargo la ingerencia del Rey en los asuntos y pleitos que se están ventilando en la Audiencia es creciente y se le pide al monarca que "non puedan ser sacados avuestra corte nin vuestra merçed los pueda aduocar en sy nin yniba nin pueda ynibir a los susodicos (los jueces de la Audiencia) nin algunos dellos aque çesen de conoçer delos tales pleitos e cabsas"<sup>(289)</sup>, pero pese a que Enrique IV dispone que sean guardadas las ordenanzas y pragmáticas que hay al respecto, tres

---

(287) De hecho ya vimos que eran unos pocos los que efectivamente residían en la Audiencia.

(288) Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, p. 703).

(289) Cortes de Toledo 1462 (CLC. III, 9, p. 709).

años más tarde los procuradores de las Cortes de Salamanca le recuerdan y suplican que sea guarde lo dispuesto en Toledo. (290)

Pero la situación en Castilla se hacía cada vez más difícil y desde 1464, a raíz del intento de hacerse con el poder por parte del Marqués de Villena, se abre un período de auténtica guerra civil <sup>(291)</sup>. La sentencia compromisaria de 1465 nos ha quedado como testimonio de las pretensiones nobiliarias de las facciones enfrentadas a Enrique IV al mismo tiempo que constituye la demostración de que la guerra era algo más que una contienda de ambiciones. Sorprende que la sentencia viene a coincidir en muchos aspectos con las peticiones que desde hacía años venían reiterando las Cortes.

En lo referente a la Audiencia, se reconoce en primer lugar la "mala administración y gobernación que se ha tenido en el abdiencia e chancillería del dicho Señor Rey", entre otras cosas porque los oidores no han sido bien pagados y considerando que la dicha "abdiencia e chançellería solía ser una de las cosas más honorables e provechosas e conplideras para el bien público de estos rregnos" se disponen a dar una nueva planta a la Audiencia.

En la sentencia se estructura la Audiencia en base al sistema semestral cubierto por un oidor prelado al cargo

---

(291) Véase SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámara... pgs. 255 y ss.

de la Presidencia y cuatro oidores legos.<sup>(292)</sup> Se establecía que sólo los designados para un turno podían votar y firmar cartas, no siendo su voto válido fuera del dicho turno. Si alguno de los oidores prelados no servían el tiempo señalado para el que habían sido nombrados, no teniendo justificada su ausencia, le serían descontados los días de ausencia a prorrata de la quitación y ayuda de costa que debieran cobrar por el tiempo que sirvieran. Para saber el tiempo que sirve o no sirve cada uno de los oidores quedaban designados para ejercer el control el Chanciller o su lugarteniente.<sup>(293)</sup>

Además de establecerse las cantidades que debían percibir Prelados y oidores<sup>(294)</sup> quedaba regulada la forma -

---

(292) Sentencia compromisaria de 1465, cap. 47 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 400) No obstante lo dispuesto se establecía una excepción: "e por quanto el obispo de Lugo es buen hombre e antiguo e letrado, ordenamos que en quanto viniere que resida en la dicha abdiencia e aya la quitación de los otros dos perlados que han de estar por todo el año en la dicha abdiencia, pues el obispo de Lugo ha de residir e quiere estar todo el año en la dicha abdiencia e chancilleria; e cada que vacare el dicho obispado de Lugo mandamos que ~~donde~~ en adelante en cada un año este dos Perlados en la dicha abdiencia, cada uno dellos seis meses segund dicho es".

(293) Sentencia compromisaria 1465, cap. 47 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 401)

(294) Sentencia compromisaria 1465, cap. 49: "otro si ordenamos que los dichos Perlados que han de estar en la dicha abdiencia e chancilleria ayan cada uno de su quitación e ayuda de coste sesenta mil maravedis, e por quanto el dicho Obispo de Lugo ha de servir e residir en la dicha abdiencia todo el año, ordenamos e mandamos que el dicho Obispo de Lugo aya en cada un año lo que avian de aver los dichos dos Perlados si residiesen por todo el año, que son ciento veinte mil



por la que debían designar éstos por renuncia, muerte o cualquier otra circunstancia. Producida alguna de estas causas, los oidores de la Audiencia que en ese momento residieren formarían una terna de personas que le parezcan hábiles y aptos para el oficio, previo juramento de que se ha pospuesto todo "odio e amor e temor e interese e promesa e parcialidad e debdo". Los miembros del consejo de la justicia, efectuado también el citado juramento, proponen también una terna, que se envía junto con la de la Audiencia "en una suplicación firmada de los dichos del consejo e abdiencia al dicho señor Rey, è que de ellos su señoría escoja uno qual le plugiere"<sup>(295)</sup>. Quedaba igualmente establecido el juramento que debían prestar los oidores ante el Prelado de la Audiencia<sup>(296)</sup> y se castigaba con la inhabilitación total y perpetua, además del pago de la cantidad doblada y la pérdida de la quitación, si algún oidor, o juez en general, incurría en cohecho.<sup>(297)</sup>

---

(294) /...maravedis en cada año; e cada uno de los dichos oidores aya de su quitacion e ayuda de costa cinquenta maravedis en cada un año... pagados en dineros contados en manera que non aya de sacar libramientos dellos, mas que los que ayan situados e salvados, señaladamente en las alcabalas e tercios e pechos e derechos de la villa de Medina del Campo e de su tierra. (Col. Dipl. Enrique IV, p. 402).

(295) Sentencia compromisaria 1465, cap. 51 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 407).

(296) Sentencia compromisaria 1465, cap. 52: "...lo fagan (el juramento) de non tomar nin tener acostamiento nin tierra en alguna manera de ningun Grande nin señor de estos regnos nin de otras personas nin de otros por ellos, nin tomará cosa alguna de las que son defendidas por las leyes de estos regnos por si nin por otra inter-

La sentencia compromisaria aborda también el problema de los "oidores de honor". La cuestión arrancaba ya desde tiempos de Juan II quien, como vimos, aumentó considerablemente el número de oidores de los que, sin duda, muchos ostentaban el oficio honoríficamente. Pero el problema de sus cita en cuanto que estos oidores honoríficos se sentaban al lado de los oidores que tienen quitación y juzgaban, siendo ellos en ocasiones abogados de la Audiencia. Por ello se dispone que tales oidores no puedan sentarse a juzgar, ni puedan firmar cartas ni votar las sentencias.<sup>(298)</sup>

Como hicimos referencia al tratar de la Audiencia de la cárcel, en la mencionada sentencia se preveía la presencia de un oidor junto a los alcaldes de la audiencia de la cárcel para que pudieran ser librados los "fechos criminales", quedando así, de hecho, la actuación de los alcaldes de las provincias bajo el control directo de la Audiencia.<sup>(299)</sup>

---

(296) /...puesta persona directa ni indirecta, e que non abogaran nin consejaren por si nin por otros en pleito o pleitos, negocio o negocios que se espere venir a la dicha abdiencia o consejo, e que guardarán lo que se contiene en el ordenamiento fecho por el señor don Juan en las Cortes de Guadalajara del año treinta e seis, e por el Rey nuestro señor en las cortes de Toledo el año pasado de sesenta e dos. "Igualmente, como establece el capítulo 53 de la misma sentencia, debían jurar que "non pueda vivir con otro Perlado nin caballero nin otra persona alguna salvo con el dicho señor Rey" (Col. Dipl. Enrique IV, p. 408).

(297) Sentencia compromisaria de 1465, cap. 54 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 409).

(298) Sentencia compromisaria 1465 cap. 54 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 409).

(299) Sentencia compromisaria 1465, cap. 92 (Col. Dipl. Enrique IV, p. 429).

Pero la sentencia compromisaria de 1465 lejos de traer la paz produjo el efecto totalmente opuesto. Enrique IV, sacando fuerzas de flaqueza, anula la sentencia en febrero de 1465, lo que suponía la apertura de las hostilidades: la anarquía se extiende por todo el Reino. Tras la "farsa de - Avila" es proclamado rey Don Alfonso. Enrique IV sólo puede apoyarse en las ciudades que han constituido la "Hermandad General" como organismo de defensa de la monarquía. Cuando la situación parece que definitivamente se va a decantar a favor de la oligarquía nobiliaria, un hecho imprevisto, la muerte de don Alfonso, aclara el horizonte político castellano.

Hemos de suponer que estos años de crisis han tenido que afectar necesariamente al aparato institucional de la monarquía castellana por lo que los datos que poseemos de estos críticos momentos acerca de la Audiencia son ciertamente escasos. En este sentido nos ha llegado por medio de las Ordenanzas Reales de Castilla noticia de que Enrique IV dispuso que dos oidores fueran los viernes de cada semana a la cárcel para que allí, junto con los alcaldes, entendieran, vieran y oyeran los pleitos de los presos.<sup>(300)</sup> Dado que son frecuentes los errores de lugar y fecha de las leyes que se encuentran recogidas en las Ordenanzas Reales de Castilla nos es ciertamente difícil precisar cual ha sido la fuente utilizada por

---

(300) O.R.C. 2, 4, 6. MONTALVO atribuye esta ley a Enrique IV y la fecha dada en Palencia en 1467.

MONTALVO, pero en todo caso es perfectamente admisible una disposición por parte de Enrique IV en estos términos si tenemos en cuenta que ya en la sentencia compromisaria existía una disposición muy semejante a ésta que MONTALVO data en 1467.

En todo caso la crisis institucional es un hecho como viene reflejada en las Cortes de Ocaña de 1469. Los procuradores, después de llamar la Audiencia "casa de justicia que la sabiduría edificó sobre las siete columnas que ella cortó"<sup>(301)</sup> piden, "pues es cosa necesaria e muy provechosa asy para - vuestro descargo como para remedio de los oprimidos e agravados", que sea reformada. Para ello, los procuradores solicitan que el Rey "mande diputar dos o tres del vuestro Consejo para que con otros dos o tres que nos otros deudemos de nuestro ayuntamiento, entiendan en elegir e nombrar personas que tengan los oficios que en ellas se han de servir e que les dizen salarios e mantenimientos rrazonables e den orden como se les paguen e les de poder conplido para entender e prpueer en esto, e estatuya por ley lo que estos ordenen."<sup>(302)</sup>

El intento por parte de las ciudades de entrar a formar parte de esa comisión encargada de nombrar a los oidores de la Audiencia es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que Enrique IV en los momentos más difíciles sólo tuvo el apoyo de las ciudades, por lo que ahora tratan, como es lógico, de tomar parte activa en los asuntos del Reino.

---

(301) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 1, p. 763)

(302) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 1, p. 769).

Enrique IV, por su parte, trata de contrarrestar estas exigencias, por ello, cuando contesta a las ciudades comienza diciendo que él tuvo su "corte e chançilleria en los tienpos pasados bien proueyda de perlado e oydores e alcaides fasta el tienpo quelos escandalos e mouimientos se comenzaron en estos mis reynos, e despues aca vos otros vedes bien que yo no puedo mas hazer ni los tienpos me han dado mas lugar", no obstante que mientras se buscan de algunas rentas suyas para hacer efectivas las quitaciones, él ya había mandado un albalá a sus contadores para que librarian al Prelado y oidores que han de residir en la Audiencia el presente año y el siguiente<sup>(303)</sup>. No accede a que se forme la comisión para nombrar a los miembros de la Audiencia y expresamente responde que él ya ha "dado cargo a los muy rreuerendos padres don Alonso de Fonseca, arçobispo de Seuilla, e don Pedro de Mendoça, obispo de Siguença" para que se encarguen de nombrar los oidores de la Audiencia.<sup>(304)</sup>

Esta quedaría compuesta de un Prelado y seis oidores; mientras el primero permanecería durante todo el año, los segundos se distribuirían en turnos semestrales de tres oidores por turno. Sin embargo es destacable que Enrique IV dispone que esos oidores permanecerán en la Audiencia dos años ("este dicho anno y el anno venidero"), aunque se efectue el relevo de turnos, con lo que parece que hay una cierta estabilidad a la hora de designar oidores.

---

(303) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 1, 769-70)

(304) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 1, p. 770).

Desconocemos en todo caso qué ocurrió transcurridos esos dos años que limitaba Enrique IV para la actuación de los oidores. Suponemos que o bien se nombrarían nuevos oidores o seguirían los mismos alternándose en su turno semestral. No obstante, a tenor por las quejas presenyadas por los procuradores de las Cortes de Santa María de Nieva cuatro años más tarde, el número de oidores fué elevado en un número no conocido por nosotros pero que, sin duda, considerable<sup>(305)</sup>, quienes, además, muchos de ellos son personas inhábiles para ejercer tal oficio y, en algunos casos, ni siquiera han sido graduados en Derecho, por lo que se le pide también el Rey que sólo de el título de oidor cuando se produzca una vacante.<sup>(306)</sup>

En los últimos años del reinado de Enrique IV se ha desestabilizado otra vez la situación y el clima de guerra civil no se había disipado ante la incertidumbre de la sucesión. Parte de la nobleza recela de Fernando de Aragón y de las pruebas de enérgico autotiratismo que viene mostrando doña Isabel. Son los prolegómenos del último asalto entre nobleza y monarquía.

En las primeras Cortes del reinado de los Reyes Católicos se pone de manifiesto una vez más la lamentable situación en que se encuentra la Audiencia. Se pide que sea -

---

(305) Cortes de Santa María de Nieva (CLC. III, 6, pgs. 845-6) y en sentido parecido véase en estas mismas Cortes la petición 16 (CLC. III, pgs. 866-7).

(306) Cortes de Santa Maria de Nieva 1473 (CLC. III, 18, pgs. 866-7).

reformada esa "magnífica e excelente casa de justicia" en cuanto que es "fruto e descargo de sus reales conçiencias" ya que desde tiempos de su hermano Enrique IV ha estado mal proveida de oidores y muy pagados<sup>(307)</sup> los que aun en ella servian.

Las Cortes de Madrigal no hacen alusión expresa a la composición de la Audiencia como hacen, en cambio, con respecto a los alcaldes de Casa y rastro o a los alcaldes de las provincias de los que establece su número. Esto nos hace suponer que no debió plantearse problema alguno en lo concierne a la planta de la Audiencia, porque éste debió plantearse a los Reyes mucho antes. Nos basamos para sostener tal afirmación en la contestación que los Reyes dan a las ciudades cuando denuncian el mal estado de su Audiencia y Consejo de la justicia.

En la petición, los procuradores han planteado sólo dos problemas referentes a la Audiencia (que no se le pagaba a los oidores y que no se hallaba bien proveída de éstos y - cuando los Reyes contestan a dicha petición lo hacen en los siguientes términos: "que en quanto toca ala prouission de la nuestra corte e chançelleria nos auemos mandado e entendemos proueer como por vos otros nos fue suplicados por otra petición antes de agora"<sup>(308)</sup>. De qué petición se trata?. Qué se pedía exactamente en ella?. Desde luego en las Cortes de Madrigal

---

(307) En la amonestación que el Papa Pablo II hace a Enrique IV en 1473 se alude también al impago de sus oidores, consejeros y alcaldes de Corte (vid. CLEMENCIN: Elogio de la reina Católica doña Isabel, en Memorias de la Academia de la Historia, Madrid 1820, t. VI, p. 119)

(308) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 3, p. 13).

no se encuentra ninguna otra petición que pueda relacionarse con la Audiencia y aquí, en la contestación de los Reyes, no cabe la menor duda de que tal petición iba encaminada a que se tomaran medidas para la vuelta a la normalidad de la Audiencia. Es más, a continuación los Reyes añaden: "E auemos enbiado mandar a las personas que por vosotros fueron nonbradas que vengan a rresidir en los dichos offiçios en nuestra Corte e chançillería, e auemos mandado librar todo su mantenimientto para estos dos annos segun vos lo prometimos..."<sup>(309)</sup>. Por tanto, con anterioridad a las Cortes de Madrigal, o posiblemente en ellas, ya se le planteó a los Reyes Católicos el problema del mal estado de la Audiencia.

No obstante, lo más sorprendente de la petición es que los Reyes accedieron a aceptar las personas propuestas por las ciudades para el desempeño de tales oficios, como bien se desprende del texto ("auemos enbiado mandar a las personas que por vos otros fueron nonbradas...") Este intento de participación por parte de las ciudades no supone una novedad. Vimos como Enrique IV rechazaba en las Cortes de Ocaña la comisión compuesta por procuradores y consejeros que se proponía para la designación de los oficios de la Corte y Chancillería<sup>(310)</sup>. Pero ahora, los Reyes Católicos, forzados seguramente por las circunstancias de la guerra civil, han accedido a la participación de las ciudades en el nombramiento de los oficiales de la Audiencia. Ciertamente no podemos

---

(309) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 3, p. 13)

(310) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. IV, 3, p. 13).



precisar, por desconocer precisamente esa petición a la que se refieren los Reyes en Madrigal, en qué términos y hasta qué punto participaron las ciudades en dichos nombramientos; es decir, si se limitaron a proponer simplemente nombres para que los Reyes eligieran o si, por el contrario, llegaron a imponer a sus candidatos, aunque esta última posibilidad parece poco factible.

Por otra parte, la participación de las ciudades es sólo con respecto a los oficios de la Audiencia y no así en lo concerniente al Consejo de la justicia en el que se reservan los nombramientos a la libre designación de los Reyes.<sup>(311)</sup>

La planta de la Audiencia quedó configurada con un Prelado y tres oidores que servirían anualmente sus oficios. Este dato se desprende de las Cortes de Toledo celebradas cuatro años más tarde en las que los Reyes, ante la petición de las ciudades de que fuera aumentado el número de oidores responden que ellos habían ordenado y mandado que en la Corte y Chancillería "estouiese un prelado e tres oydores".<sup>(312)</sup> Debemos suponer que en esa petición que, como hemos dicho, desconocemos quedó estructurada la Audiencia con esos miembros, siendo elevado el número de cuatro a solicitud de los procuradores de las Cortes de 1480.<sup>(313)</sup>

(311) Cortes de Madrigal 1476: "e eso mismo tenemos nonbrado vn perlado e dos caualleros e seys letrados e seys escriuanos de camara que esten e rresidan en el nuestro Consejo de la justicia" (CLC. IV, 3, pgs. 13-4)

(312) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 36, p. 121)

(313) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 36, p. 121).

Consolidada la situación política del Reino en 1479 los Reyes Católicos en las mencionadas Cortes de Toledo de 1480 despliegan su política reformista que se transforma en todo un conjunto de disposiciones destinadas a la reorganización del aparato administrativo de los Reinos. En este sentido, la Audiencia no se ve ajena a este plan de reformar.

Además de ser aumentado, como acabamos de ver, el número de oidores a cuatro, se establece la prohibición de permanecer en el oficio por más de un año, siendo preceptivo que se cambien, finalizado este período, al menos dos de ellos<sup>(314)</sup>. Se dota a la Audiencia de un mayor número de escribanos<sup>(315)</sup> se introduce la posibilidad de recusar a los oidores<sup>(316)</sup> y se establece un control sobre los emplazamientos para la Corte con vistas a evitar abusos.<sup>(317)</sup>

Las Cortes de Toledo fueron el punto de partida de la política reformadora de los Reyes Católicos y así, cinco años más tarde, en Córdoba se dictan las primeras ordenanzas destinadas exclusivamente a la regulación de la organización y competencias de la Audiencia y Chancillería.<sup>(318)</sup>

Las Ordenanzas de Córdoba de 1485 fueron ligeramente modificadas por las publicadas al año siguiente en Piedrahíta<sup>(319)</sup>

(314) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 37, p. 121)

(315) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 40, pgs. 122-3)

(316) Cortes de Toledo 1480 CLC. IV, 44, pgs. 127-8)

(317) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 41, pgs. 123-4)

(318) Publicadas por PEREZ DE LA CANAL en su trabajo, ya citado, La justicia en la Cortes de Castilla durante los siglos XIII al XV, apéndice I.

(319) Publicadas también por PEREZ DE LA CANAL en el trabajo citado en la nota anterior, apéndice II.

y éstas, a su vez, por las definitivas de Medina del Campo en 1489<sup>(320)</sup>. Esta profusión de Ordenanzas encaminadas a la mejor actuación y funcionamiento de la Audiencia y Chancillería nos ponen claramente de manifiesto, en primer lugar, la gran atención que los Reyes Católicos dedicaron a la administración de justicia, conscientes de que para llegar a tener un poder fuerte y centralizado, era necesario partir de una buena y eficaz organización judicial. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la potencialización que los Reyes Católicos hacen de la Audiencia convirtiéndola, de nuevo, en el más alto y respetado Tribunal de Castilla y León, con lo que quedaba superada la profunda crisis en la que se vió inmersa y que caracterizó a esta institución durante los dos primeros tercios del siglo XV.

En virtud de las ordenanzas de 1485<sup>(321)</sup>, los Reyes Católicos acuerdan "acrecentar en la dicha nuestra corte e chançillería mayor número de oidores que continuamente en ella residan"<sup>(322)</sup>. A partir de este momento en la Audiencia residirán un prelado por Presidente y ocho oidores<sup>(323)</sup> que servirán su oficio anualmente, distribuidos en dos salas de forma que cuatro oidores libran en una de ellas y los cuatro

(320) Recogidas en el Libro de Bulas y Pragmáticas, fols 49-60

(321) La copia que ha llegado a nosotros de las Ordenanzas de Piedrahíta se halla incompleta faltando los primeros capítulos. Hemos de suponer, si comparamos las de Córdoba de 1485 y las de Medina de 1489, que en lo que se refiere a la estructura y a los puntos fundamentales que están tratados en los capítulos perdidos de las Ordenanzas de 1486, éstas no debieron introducir variantes de importancia. Aunque fundamentalmente utilicemos las Ordenanzas de 1485 y 1489, si las de 1486 suponen algún cambio, lo señalaremos oportunamente.

restantes en otra; el Presidente había de distribuirse los días alternando su presencia en ambas salas.<sup>(324)</sup>

Las Ordenanzas, aparte de reiterar que la residencia de la Corte y Chancillería había de ser Valladolid<sup>(325)</sup>, establecen la obligatoriedad de residencia y el servicio personal de sus oficios a lo largo del año para el que son designados los oficiales, norma que afecta no sólo al Presidente y oidores de la Audiencia, sino también todo el personal judicial y auxiliar de la misma.<sup>(326)</sup> Cabe, no obstante, la posibilidad de ausentarse siempre y cuando se obtenga licencia del Presidente y la ausencia sea por una causa justificada, para lo cual el Presidente concederá el tiempo que considere oportuno. Cualquiera que se ausentara sin la licencia debida por más de un día, era multado con el salario de los días en que estuviera ausente.<sup>(327)</sup>

Oidores y Presidente se sentarán diariamente, salvo los días de fiesta, en el estrado de la Audiencia por lo menos durante tres horas para oír las relaciones "e el día que fuere de audiencia estén una ora mas para acordar las sentencias

---

(322) /...Ordenanzas 1485, preámbulo.

(323) Recuérdese que en Madrigal quedaron establecidos un presidente y tres oidores; posteriormente, en las Cortes de Toledo, se aumentó otro oidor más a petición de las ciudades.

(324) Ordenanzas 1485, cap. 3.

(325) Ordenanzas 1485, cap. I

(326) Ordenanzas 1485, cap. 7.

(327) Ordenanzas 1485, cap. 7.

e fazer audiência"<sup>(328)</sup>, y si bien el horario varía según la época del año<sup>(329)</sup> es obligatorio que se encuentren presentes tanto oidores como Presidente para oír las relaciones y hacer la audiencia.<sup>(330)</sup>

Así, las Ordenanzas de 1485 y 1486 van regulando minuciosamente no sólo la actuación de la Audiencia, como puede ser la votación<sup>(331)</sup>, la obligatoriedad de pasar a escrito la

---

(328) Ordenanzas 1485, cap. 8.

(329) Ordenanzas 1485: "e que desde comienzo del mes de octubre fasta en fin del mes de março comiençen a oír a las ocho oras, e desde comienzo de abril fasta en fin del mes de setiembre comiençen a oír a las seis oras" (cap. 8).

(330) Ordenanzas 1485, cap. 8.

(331) Ordenanzas 1485, cap. 9: "Otrosi ordenamos e mandamos que en cada una de las dichas audiencias, quando entre el presidente e oidores oviere diversos votos, se determine la causa por los votos de la mayor parte de ellos; pero si los votos del presidente e oidores fueren legales, que se determine la causa por la parte donde estoviere el perlado, o como quier que se determinare que todos los oidores de aquel auditorio el perlado con ellos firmen en las sentencias, aunque ayan seido en voto contrario de ellas, porque non se sepa la diferencia que ovo en los votos. Las Ordenanzas de 1486 introducen a continuación un nuevo capítulo: "Otrosi por quantas muchas vezes acaesce despues de dadas las sentencias por el dicho nuestro presidente e oidores e aun despues de firmada alguno o algunos de ellos dizen que ellos no votaron en las dichas sentencias e sus votos fueron contrarios a lo que pro ellas parece por lo qual nascen diferencias entre los dichos presidente e oidores e dan ocasion a las partes de se quejar e oír dezir que injustamente fueron condenados e las cartas executorias de las tales sentencias se difieren e aun a las vezes se resisten, ordenamos e mandamos que de aquí adelante en todos los pleitos arduos e de sustancia especial en to-

sentencia antes de pronunciarla<sup>(332)</sup>, sino que también recogen todas aquellas disposiciones reguladoras de lo que podríamos llamar el "estatuto jurídico del juez", es decir, sus derechos, deberes, incompatibilidades, etc.<sup>(333)</sup>

Las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 más que alterar la planta de la Audiencia o introducir modificaciones en su forma de actuar, establecen, o mejor dicho, delimitan claramente las materias que son competencia de la Audiencia, del Consejo de la justicia, alcaldes de Casa y Corte así como de los alcaldes de Corte y Chancillería.

#### COMPETENCIAS

Muchos y muy variados son los problemas que se nos presentan a la hora de abordar el estudio de las competencias de la Audiencia.

---

(331) /... los que eceden de veinte mill maravedía el presidente e oidores escriban sus votos brevemente en un libro enquadernado sin poner causas nin razones algunas de las que mueven e firmen sus votos de sus nombres en el dicho libro, el qual esté en poder del presidente e lo tenga secreto e en buena guarda para que cada e quando cupliera saberse los dichos votos se pueda probar por el dicho libro e el dicho presidente faga juramente al tienpo que se fiziere el dicho libro que tenga secretos los dichos votos e no revelará a persona otra alguna sin muestra licencia e especial mandado".

(332) Ordenanzas 1485, cap. 10: Ordenanzas 1486, cap. 12.

(333) Ordenanzas 1485, caps. 11, 12, 13, 14, 15, 18;  
Ordenanzas 1486, caps. 16, 17, 18, 19, 20, 23.

En primer lugar se nos presenta un problema de tipo material que viene condicionado por las escasísimas referencias que tanto fuentes legales como literarias y documentales nos han dejado acerca de las competencias de la Audiencia prácticamente hasta finales del siglo XV. Esto hace - que en ocasiones, y en contra de los que ocurre con el Consejo Real al que se va dotando de sucesivas Ordenanzas reguladoras, nos veamos obligados a operar con datos aislados y muy distantes cronológicamente con lo que la tarea investigadora se hace más penosa e incierta.

En segundo lugar, nos encontramos también con la dificultad que supone la evolución de la propia institución, sometida a vicisitudes de muy diversa índole y naturaleza, que, sin lugar a dudas, afectaron de una forma u otra a la propia esencia de la Audiencia, alterando de ese modo las competencias originarias de la misma.

Finalmente nos encontramos con otro grupo de cuestiones que vienen determinadas no ya por la evolución propia de la Audiencia, sino por la evolución de todo el sistema jurídico que hace que frecuentemente las instituciones entren en colisión en busca de esa síntesis armónica hacia la que tiende todo sistema. Con ello queremos decir que a la hora de plantearnos los problemas que se ciernen en torno a las competencias y atribuciones de la Audiencia hemos de tener presente la evolución propia de otras instituciones (alcaldes de Corte, alcaldes de las alzadas, juez de las suplicaciones, Consejo Real, ect.) que por su naturaleza están en íntima re-

lación entre sí, por lo que, al evolucionar cada una de estas, podrá afectar de forma decisiva a las restantes.

Ya vimos al principio de este capítulo al ocuparnos del origen de la Audiencia como esta institución en sus orígenes no era un órgano estrictamente judicial, sino que, por el contrario, en ella se ventilaban asuntos de toda naturaleza, desde la solicitud de una licencia para establecer una escuela de gramática, pasando por una reclamación de rentas reales hasta llegar a conflictos de jurisdicción.<sup>(334)</sup>

Esta indeterminación o "ilimitación" de competencias, que caracteriza a la Audiencia en esta primera fase, viene dada por propia naturaleza jurídica de este nuevo órgano. La Audiencia nace ante la imposibilidad por parte del Rey de atender personalmente todas las peticiones que ante él llegan sean de justicia, "gobierno" o merced, por lo que se ve obligado en comisionar el libramiento de las mismas a los oficiales, generalmente no judiciales<sup>(335)</sup>, que le acompañan en sus desplazamientos y que suelen estar presentes cuando el Rey se sienta en público a recibir y resolver dichas peticiones.

---

(334) Véanse los documentos citados en notas 50, 51 y 54.

(335) Ello se debe, como dijimos, a que su personal juzgador, es decir, sus alcaldes se hallan en la Chancillería, separada casi siempre de la persona del Rey.



En este sentido la Audiencia, o mejor dicho, los oidores a los que el Rey comisiona tales causas actúan como si fuera el propio Rey quien librara el asunto, y así en las cartas y provisiones dadas por los oidores aparece el Rey hablando en primera persona.<sup>(336)</sup>

Estas comisiones esporádicas debieron convertirse con el tiempo de auténticas delegaciones de jurisdicción. En 1348 parece que la Audiencia real está actuando ya de una forma regular sin la necesidad del concurso del Rey, a tenor de la petición que le hacen las Cortes<sup>(337)</sup>, y lo que es más, importante, se ha establecido una delimitación de competencias dentro de ella: hay unas peticiones que libran los oidores por sí, y hay otras peticiones "quelos dela nuestra abdiencia guardan para nos enel libramiento que ellos ffazen".<sup>(338)</sup>

Qué peticiones guardaban los oidores para que las librara el Rey personalmente?. No lo sabemos. En principio

---

(336) "Don Alfonso, por la gracia de Dios... Sepades que paresçio en la nuestra Corte..." (Col. Dipl. de Cuellar, doc. 106, pgs. 216-9); "Don Alfonso por la gracia de Dios... Et nos touiemos por bien..." (DOMINGO PALACIO: Docs. del Arch. de la Villa de Madrid, t. I, pgs 297-9); "Don Pedro por la gracia... Sepades que los procuradores del conçeio de la çibdat de Murçia paresçieron en la mi audiencia con peticiones... Porque vos mando..." (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 48, pgs. 81-3).

(337) Cortes de Alcalá 1348 (CLC. I, 23, p. 600)

(338) Cortes de Alcalá de Henares 1348 (CLC. I, 23, p. 600).

la Audiencia, como la misma persona del Rey que era considerada, podría librar toda clase de asuntos, pero, posiblemente aquellas peticiones de mayor importancia por la materia o la persona que interviene, o por la dificultad de su resolución, los oidores aguardarían la presencia del Rey en la Audiencia para consultarlas con él. Igualmente aquellas peticiones de "merced" quedarían reservadas al libramiento exclusivo del monarca.

El reinado de Pedro I, aunque es mucho más rico en documentación referente a la Audiencia, no nos permite establecer tampoco un criterio delimitario de competencias.

Nos encontramos con que en la Audiencia se libran causas de muy diversa naturaleza: referentes a rentas reales<sup>(339)</sup> pleitos entre concejos<sup>(340)</sup>, agravios ocasionados por un acto -

---

(339) En este sentido véase la Real Provisión de 6 de diciembre de 1351 por la que Pedro I ordena al concejo, alcaides y alguacil de Sepúlveda y a los recaudadores del portazgo del dicho lugar que no lo veda y a los recaudadores del portazgo del dicho lugar que no lo cobren a los vecinos y moradores de Riaza por las mercaderías que llevasen a Sepúlveda o pasasen por ellas o su término (Col. Dipl. de Riaza, doc. 15, pgs 26-29), la Real Provisión fechada en enero de 10 de 1352 por la que se ordena a los dispenseros mayores no cobrar yantares al Obispo de Córdoba (A.H. Colección Morales, t. XVI, fol 331), o la Provisión ordenando a los recaudadores no cobrar a los vasallos de la Orden de Santiago la mitad del servicio de la tierra (A.H.N. Ordenes Militares. San Marcos de León, carp. 375, num. 80 bis). Igualmente pueden verse las provisiones ordenando a los almojarifes del reino de Murcia para que guarden los privilegios del Obispo y Cabil-do de Cartagena (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 58, p. 105), o la dirigida al concejo de Murcia ante las quejas presentadas por los vecinos de la ciudad por cobrar los pechos sin autorización del rey (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 39, p. 70.). .../...

del Rey<sup>(341)</sup>, agravios por daños ocasionados por los oficiales reales<sup>(342)</sup>, quejas contra el mal gobierno local<sup>(343)</sup>, sobre - -

- 
- (340) Véase la carta de 15 de octubre de 1351 por la que Pedro I comunica a los concejos de Sepúlveda, Aillón y Fresno de la Fuente que el concejo de Riaza se que-  
rello porque le cortaban las aguas, entraban en sus montes y labores y pacían en sus dehesas (Col. Dipl. de Riaza, doc. 13, pts. 23-4).
- (341) En este sentido la Provisión de la Audiencia al conce-  
jo de Palencia por la que se aprueba la avenencia que el dicho Concejo concertó con el Obispo de dicha ciu-  
dad sobre el nombramiento de regidores, disputa oca-  
sionada a raíz de la concesión de un privilegio de Pedro I por el que concedía al Obispo de Palencia y sus sucesores la facultad para nombrar 12 regidores (R. CARANDE: El Obispo, el Concejo y los regidores de Palencia, en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 35 (1932), pgs. 72-6).
- (342) Provisión de la Audiencia de Pedro I a las justicias de Murcia sobre los daños que causan los recaudadores que con cartas reales hacen que directamente y sin -  
conocimiento de los oficiales del concejo, prendan a ciertas personas (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 34, pgs. 61-3) o la provisión de la Audiencia del Rey mandado al Adelantado del Reino de Murcia que se abstenga de asistir a las reuniones del Concejo de Murcia (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 49, pgs. 83-4 y también en TORRES FONTES: El Concejo murciano en el reinado de Pedro I, en C.H.E. 25-26 (1957) pgs. 274).
- (343) Provisión de Pedro I ordenando a los hombres buenos del concejo de Murcia que nombraran una ponencia de cuatro hombres para que estudiaran las cuentas y gastos del concejo ante la queja recibida por parte de algunos vecinos (TORRES FONTES: El Concejo Murciano en el Reinado de Pedro I, pgs. 270-1).

la percepción de rentas señoriales<sup>(344)</sup>, indultos<sup>(345)</sup>, confirmando ordenanzas del concejo<sup>(346)</sup> o, sencillamente, las peticiones van encaminadas a que se cumpla una norma ya impuesta.<sup>(347)</sup>

Esta variada tipología de asuntos que se resuelven ante la Audiencia no hacen otra cosa que confirmarnos la identidad de la Audiencia con la persona del Rey y como tal, conoce de todas aquellas causas civiles que privativamente correspondían a la jurisdicción real, y al mismo tiempo nos descubre una actuación mucho más amplia que no queja circunscrita a una actuación estrictamente judicial, si bien es verdad que la mayoría de estas causas pueden ser incluidas dentro de ese amplio concepto de "justicia" que es característico de estos siglos bajomedievales.

- 
- (344) Provisión de la Audiencia del Rey Pedro I mandando al Merino Mayor de Castilla y demás justicias ante la querella presentada en la dicha Audiencia por Alfonso Tellez sobre el hecho de pertenecerle, por juro de heredad que habia concedido Alfonso XI, los derechos de yantar, martiniega, y dineros del lugar de Nieva (A.H. Colección Salazar, D-9, fol. 141 r-v y en DIAZ MARTIN: Los oficiales de Pedro I, doc. 1, pgs. 116-7).
- (345) Provisión de Pedro I mandando al Adelantado del Reino de Murcia, ante la petición del concejo de la dicha ciudad, que se perdone, hasta la fecha de esta provisión (15 de octubre de 1352) las penas en que hayan incurrido las mujeres e hijas de los fijosdalgo que no habian guardado la Ordenanza de Alfonso XI sobre los años (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 41, pgs. 72-3).
- (346) Provisión de la Audiencia de Pedro I otorgando validez a las ordenanzas del concejo sobre precios de algunos productos no especificados en el Ordenamiento de las Cortes de Valladolid (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc.s 35, pgs. 64-5).
- (347) Provisión de Pedro I ordenando al Adelantado del Reino de Murcia que respeta la provisión real sobre los - -

.../...

Hemos de suponer, al igual que ocurría en el reinado anterior, que habría asuntos que librarian los oidores de una forma independiente, sin necesidad de la presencia del Rey, y otros, en cambio, quedarían sometidos directamente a la resolución personal del monarca.

Es importante destacar, dada esta naturaleza de la Audiencia, que ésta sólo actúa en primera y única instancia, sin que hayamos podido encontrar en la documentación consultada ni un sólo dato que nos pueda revelar la actuación de la Audiencia como Tribunal de apelación de las sentencias de los jueces inferiores. Estas serían presentadas ante los correspondientes alcaldes de la Corte quienes, como se recordará, actuaban como jueces de apelación de los fallos procedentes de cada una de sus tierras, aunque muy pronto, precisamente por la emergencia de la Audiencia, irán perdiendo sus competencias en asuntos civiles para quedar exclusivamente encargados de los pleitos criminales.

También, como es lógico, y dado que no existe ningún otro Tribunal por encima del Rey, forzosamente hemos de pensar que de los fallos de la Audiencia, como fallos del Rey que son, no cabía alzada, pero sí, posiblemente, acudir a la vía de merced.

---

(347) /...pleitos que han de ser librados por el Adelantado y por los alcaldes ordinarios (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 74, pgs. 132-5) o la provisión dirigida al Obispo, vicarios y jueces de la Iglesia ordenándoles que se atengan a lo dispuesto en el Ordenamiento de las Cortes de Valladolid al juzgar a los que se dicen clérigos sin serlo (MOLINA: Documentos de Pedro I, doc. 81, pgs. 144-5).

Ciertamente es sorprendente que Enrique II en el importantísimo Ordenamiento de Toro de 1371, reordenador de la justicia de su corte, no haga mención alguna a las competencias de la Audiencia, pero, en nuestra opinión este órgano ha quedado ya configurado como un tribunal de justicia, quedando limitadas sus competencias a asuntos estrictamente judiciales.

En primer lugar es muy significativo que la Audiencia haya quedado vinculada a la Chancillería y restantes alcaldes de la Corte, como ya aparece así en el Ordenamiento de Toro, dejando de acompañar a la persona del Rey <sup>(348)</sup> Ello se debió, casi con seguridad, a la relevante actuación de la Audiencia con lo que pronto se vería saturada de trabajo <sup>(349)</sup> haciéndose más lenta la resolución de los litigios. De esta forma Enrique II acabaría por integrar la Audiencia al resto de sus oficiales de justicia que, como sabemos, habían quedado vinculados a la Chancillería desde hacía más de un siglo.

Pero además la ley del Ordenamiento de Toro habla solamente de "pleytos" y no de ninguna otra actuación <sup>(350)</sup> texto que, por otra parte, viene a confirmar lo dicho anteriormente: desde el momento en que la Audiencia no está -

---

(348) Ello se desprende claramente de la ley primera del Ordenamiento de Toro de 1371 (CLC. II, 1, p. 139).

(349) Prueba de ello es que ya en 1369 Enrique II asigna seis escribanos para las actuaciones de la Audiencia (Cortes de Toro 1369, CLC. II, 14, p. 168).

(350) Como también queda reflejado en la documentación de estos años. Véase notas 352 y 353.

vinculada a la persona del Rey debemos pensar que este seguirá desempeñando aquellos asuntos referentes a "gobierno" y "merced", dejándole así las competencias judiciales, siempre más enojosas, a los oidores de su Audiencia. Pero ello no quiere decir que el Rey renuncie a su "mayoría de justicia"; el Rey en sus desplazamientos sigue actuando como "supremus iudex" del Reino; lo que ocurre es que ahora no tendrá a su lado a los oidores para aconsejarle, sino que el asesoramiento lo habrá de buscar en sus "consejeros".

No obstante la Audiencia conserva su carácter de alto Tribunal al disponer Enrique II que de sus fallos, como de hecho creemos que ya había venido ocurriendo, no cabía alzada ni suplicación alguna<sup>(351)</sup>, pero no por ello debemos admitir que la Audiencia quedara instituida en Toro como tribunal de apelación. La documentación que nos ha llegado referente a la Audiencia en estos años y en los inmediatamente posteriores nos muestra claramente que la Audiencia conserva su carácter de Tribunal de primera instancia<sup>(352)</sup>, hasta el reinado de Juan I.<sup>(353)</sup>

---

(351) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189).

(352) Sin ánimo de ser exhaustivo dada la gran cantidad de documentación que ha llegado del reinado de Enrique II a nuestros días, pueden verse a modo de ejemplo el fallo de la Audiencia de Enrique II fechado en octubre 20 de 1372 en favor del concejo de Balmaseda en el pleito sostenido contra el arrendatario de las monedas de Castilla la Vieja (MARTIN DE LOS HEROS: Historia de Balmaseda, t. II, apend. doc. 14, pgs. 44-50). La confirmación de la sentencia hecha por Juan I de la que se había dictado en la Audiencia de su padre en 1373 por la que se reconocía que los caballeros, escuderos, dueñas, doncellas y clérigos de Guadalajara -

El prestigio que va adquiriendo la Audiencia paulatinamente influyó, sin duda, de forma decisiva en el declive de otros jueces de la Corte seguramente por iniciativa de las mismas partes de un litigio, quienes ante un fallo no satisfactorio acudirían a la Audiencia Real en demanda de una sentencia favorable. Ya en las mismas Cortes de Toro de 1371, en el Ordenamiento dado para la ciudad de Sevilla

- 
- (352) /...no han de pagar el tributo de la moneda (LAYNA: Guadalajara y sus Mendozas, t. I, p. 286), o la ejecutoria de 1374 sobre el pleito que sostenía el convento de Santo Domingo de Caleruega contra el concejo de Valladolid (MARTINEZ: Col. Dipl. de Santo Domingo de Caleruega, doc. 104, pgs. 123-6). De 1375 puede verse el fallo de la Audiencia sobre el pleito promovido por los clérigos de Cuéllar contra los arrendadores de los impuestos de las doce monedas (Col. Dipl. de Cuéllar, doc. 123, pgs. 248-51) y de 1376 la sentencia de la Audiencia sobre el pleito sostenido entre Payo Meriño de Lobera y el Cabildo de Orense sobre la villa de Finisterre y el coto de Duyos (DURO PEÑA: Catálogo de Documentos reales de la Catedral de Orense, doc. 185, p. 61). Puede verse el dato que nos proporciona la Crónica de Enrique II referente al pleito que le presenta la Condesa de Alanzon: "E ovo en el consejo del Rey sobre esta razon muchos acuerdos: los unos decian que el Rey debia facer justicia de sí e que la condesa pudiese su procurador, e le ficiese cumplir de derecho delante de los oidores de la su Corte, que eran jueces deste pleyto... (Crónica de Enrique II año 1373, cap. 11, p. 20).
- (353) Véase la sentencia que manda a Rodrigo Arias y Arias Perez Maldonado por la que se falla que paguen al Cabildo de Salamanca las rentas producidas por los bienes que le dejó Arias Diaz Maldonado (MARCOS RODRIGUEZ: Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca, doc. 698, p. 129) o la sentencia en favor de la iglesia y monasterio de Bujedo contra los Condes, duques e otros señores del Reino que tenían tomadas como encomienda dichas iglesias, monasterios, granjas y vasallos a los que se les condena a la restitución (A.H.N. Clero Bujedo, arp. 175, núm. 12, ori. pergamino).



los procuradores de dicha ciudad se quejan de que los oidores de la Audiencia se entremeten a conocer de los fallos dados por el juez de las suplicas de Sevilla<sup>(354)</sup>, ciudad, que como dijimos<sup>(355)</sup> tenía el privilegio de resolver sus pleitos incluida la suplicación, sin tener necesidad de salir de la ciudad.

Es un problema que se plantea a lo largo de toda la Baja Edad Media; la parte que no se considera favorecida por el fallo de un juez siempre tiende a recurrir al Rey como - máximo y superior juez del Reino. En este caso, seguramente ocurriría una situación semejante y se acudió a la Audiencia y en ella, los oidores, conscientes de que su jurisdicción - era la misma que la del Rey, no dudaron en entrar a conocer del fallo que había sido dictado por el juez de las suplicas de la citada ciudad.

Situación semejante empezó seguramente a plantearse con respecto a las sentencias procedentes de los jueces locales, y así ya en el reinado de Juan I parece que algunas apelaciones son presentadas ante la Audiencia.<sup>(356)</sup>

---

(354) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 12, p. 255)

(355) Ver capítulo I nota

(356) Véase la carta ejecutoria de Juan I dirigida a don Pedro, su primo y pertiguero mayor de Santiago, y a Pedro Ruiz Sarmiento, adelantado Mayor de Galicia mandando ejecutar la sentencia de su audiencia, en apelación de la dictada por Alfonso Rodríguez, alcaide del Rey en Rivadavia, en contra de la Iglesia de Santiago. La Audiencia revoca dicha sentencia y declara exentos del pago de las monedas a los hombres que labran la tierra de la iglesia de Santiago (DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales de la Catedral de Orense, doc. 191, p. 63).

Pero las competencias de la Audiencia, para nosotros, siguen sin estar bien delimitadas, aunque no para los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1385 a la hora de estructurar y establecer las competencias del nuevo Consejo que allí se establece, puesto que se dispone que dicho Consejo librará todos "los fechos del rregno" salvo las cosas que deben ser libradas por nuestra abdiencia".<sup>(357)</sup> No obstante, el que entre las compendas al dicho "Consejo" no estén incluidas las de justicia, nos hacen suponer que tales asuntos serían los "que deben ser librados por nuestra abdiencia".

La Audiencia en este reinado de Juan I es cuando realmente comienza a configurarse ya como un Tribunal superior a los restantes tribunales de la Corte en cuanto ya conoce también en grado de suplicación las sentencias tanto civiles como criminales dictadas por el alcalde de las Alzadas de la Corte <sup>(358)</sup> medida que supuso, como ya vimos, la desaparición definitiva del juez de las suplicaciones.

En Briviesca se establecen minuciosamente las competencias y actuaciones de la Audiencia según el pleito se haya iniciado en una ciudad o villa<sup>(359)</sup>; en la corte ante los alcaldes de Corte, y la sentencia es confirmatoria de las -

(357) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, 17, p. 333)

(358) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, pgs. 384-5)

(359) Cortes de Briviesca 1387: "...es nuestra merced que si en alguna cibdad o villa o lugar de nuestros rregnos fuere dada sentençia contra alguna parte, e della fuere apelado para antelos alcalles dela nuestra corte, e sy por los alcalles dela nuestra corte fuere aquella sentençia confirmada, e fuere apelado para antel alcalde delas

anteriores<sup>(360)</sup> o si, por el contrario, la sentencia es revocada por la Audiencia<sup>(361)</sup> en cuyo caso, previa presentación por escrito de la parte agraviada, la sentencia es revisada en grado de revista por los propios oidores. Estos disponen de un plazo de diez días para revocar o confirmar la sentencia, razonándolo por escrito, para que en caso de que todavía la parte se quiera "querellar" al Rey "se presente ante nos -dice el monarca - con el instrumento de la respuesta que dieren los oidores" en un plazo de veinte días<sup>(362)</sup>, transcurrido -

- 
- (359) /...alçadas, e este alcalde confirmare la dicha sentencia e della fuere suplicado a los nuestros oidores, los cuales confirmaren e aprouaren las sentencias que los otros dieren, que non aya mas apelacion nin suplicacion" (CLC. II, 18, p. 384).
- (360) Cortes de Briviesca 1387: "E sy el pleito fuere comenzado en la nuestra Corte delante los nuestros alcaides, e los dichos alcaides o qual quier dello dieren sentencia por la vna parte, e fuere apelado al alcalde de las alçadas, el alcalde de las alçadas confirmare, e fuere de ella duplicado para ante los dichos nuestros oidores, los cuales confirmaren dicha sentencia, que en este caso non aya apelacion nin suplicacion dellos (CLC. II, 18 pgs. 384-5).
- (361) Cortes de Briviesca 1387: "E sy por aventura los dichos nuestros oidores en los sobre dichos casos o en qual quier dellos reuocaren las dichas sentencias asy dadas, e la parte por quien primera mente fueren dadas las dichas primeras sentencias o alguna dellas apelaren o suplicaren de la dicha sentencia por los dichos oidores asy dada, queremos e mandamos que dentro en veynte dias contados del dia que fuere dada la sentencia requiera por ante escriuano publico a los oidores que fueren presentes en la abdiencia o en las relaciones, do quier que los dichos oidores se acostunbraren asentar en la dicha abdiencia e relaciones, e esprima e declare

el dicho plazo, sino se presenta ante el Rey, la sentencia quedará firme, "saluo sy mostrare cabsa o rrazon derecha en commo fue enbargado por tal manera que se non pudo presentar al dicho termino conel dicho instrumento"<sup>(363)</sup>. No obstante, cabe la posibilidad de que los oidores no quisieran revocar la sentencia o no le quisieran dar al agraviado respuesta - dentro del dicho plazo, con lo que se prevé que la parte pueda presentar el instrumento simplemente signado por el escribano que lo redactó.<sup>(364)</sup>

Finalmente se recoge el caso de que el pleito comience directamente "por querella" ante los oidores, en cuyo caso, la parte que se agraviare del fallo de dichos oidores habrá de seguir los trámites dispuestos en el caso anterior, es decir, primero se acudirá en revista ante los oidores y ahí cabe todavía merced al Rey.<sup>(365)</sup>

---

(361) /...por escripto las cosas e puntos por que dixo que es agraviado, e pida alos oydores que asy estouieren ayuntados en la dicha abdiencia e en las dichas relaciones, que rreuquen o hemienden su sentencia segund fallaren por derecho" (CLC. II, 18, p. 385).

(362) Cortes de Briviesca 1387: "los quales oydores tenemos por bien que fasta diez dias siguientes sean tenudos de rreuocar o hemendar la dicha sentencia, o dar rrazon en escripto ala parte por quelo non deuan asy fazer, por quelo nos veamos e mandemos sobrello lo quela nuestra merced fuere, e contando dela hemienda o dela rrespuesta quelos oydores sobre ello le dieren, e entendieren querellas se sobre ello mostrando anos, tenemos por bien e es la nuestra merced que se presente ante nos con el instrumento dela rrespuesta que dieren los oydores, del dia quelos oydores dieren la rrespuesta fasta veynte dias primeros siguientes" (CLC. II, 18, p. 385).

(363) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, p. 385)

(364) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, p. 385-6)

(365) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 18, p. 386)

De esta forma quedaba perfectamente delimitado el "cursus" que había de seguirse en todo momento hasta llegar al vértice de la pirámide judicial. Sin embargo debemos destacar que la Audiencia, pese a ocupar esa posición preminente, sigue actuando, como bien destaca el citado Ordenamiento de Briviesca, como tribunal de primera instancia.

Qué pleitos eran éstos que conocía la Audiencia en primera instancia?. Ciertamente aunque las fuentes no los especifiquen, hemos de pensar que se trata de aquellos mismos pleitos que hasta ahora han sido librados por la Audiencia, o es lo mismo, los pleitos que son privativos de la jurisdicción real y que estaban reservados en su conocimiento al Rey.

Tres años más tarde, las Cortes de Segovia, confirmarán este mismo esquema, aunque introduciendo pequeñas variantes. Así, por ejemplo, de la sentencia dada en grado de revista por los oidores de una sentencia revocada anteriormente por ellos mismos, no cabe ya más apelación ni suplicación<sup>(366)</sup>. Igualmente en aquellos casos en que el pleito fuese comenzado nuevamente ante los oidores de la Audiencia, se dispone que de tal sentencia tampoco haya apelación para ante el Rey, "más la parte que se sentiere agraviada de la dicha sentencia, que pueda suplicar della, de los dichos oydores a ellos mismos, esprimiendo los agravios por escripto dentro en veynte dias".<sup>(367)</sup>

(366) Cortes de Segovia 1390. (CLC. II, 4, pgs. 476-7)

(367) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, p. 477)

De esta manera quedaba mucho más limitada la posibilidad de acudir al Rey de las sentencias de revista dadas por los oidores en los pleitos comenzados en primera instancia ante ellos, De las sentencias de revista o suplicación que hubieran llegado a la Audiencia de grado en grado, ya no era permitido acudir al Rey. No obstante, de los pleitos comenzados ante los oidores en primera instancia, de los que ya se hubiera suplicado ante los mismos oidores como dispone la dicha ley, cabe aún una segunda suplicación si el pleito "fuere muy grande", aunque para evitar que se recurriera maliciosamente, se impuso la obligación de dar fiadores y pagar y fianza de mil quinientas doblas<sup>(368)</sup> que perdería la parte de ser confirmatoria esta segunda sentencia.<sup>(369)</sup>

---

(368) Cortes de Segovia 1390: "En pero es nuestra merçed que por quela maliçia de aquellos que soplican por alongar los pleitos non aya lugar, quela parte que soplicare della dicha segunda sentençia dada por los dichos nuestros oydores conel dicho perlado eneste caso sobredicho, que se obliguen e den fiadores, dentro enlos dichos veynte dias ante los dichos oydores, de pagar mill a quinientas doblas en caso que sea fallado por aquel o aquellos - a quien nos encommendaremos, quela segunda sentençia de los dichos nuestros oydores que fue bien dada; e non se obligado nin dando los dichos fiadores en el termino de los dichos veynte dias, que non pueda soplicar nin le dea otorgada la dicha soplication" (CLC. II, 4, p.478)

(369) Cortes de Segovia 1390: "Et si por aquel o aquellosa quien nos encommendaremos el dicho pleito, fuere fallado quela dicha sentençia delos dichos oydores fue bien dada confirmando la, estableçemos que la parte que asi soplicare o en cuyo nonbre fuere soplicado, que sea por esta ley condenada enlas mill e quinientas doblas segund se obligó" (CLC. II, 4, p. 478).

A partir del siglo XV, las competencias de los distintos tribunales de la Corte puede decirse que se hallan perfectamente delimitadas. Las causas criminales, que todavía a finales del siglo XIV podían llegar a la Audiencia por apelación y suplicación según lo dispuesto en Briviesca y Segovia, van a quedar bajo la competencia exclusiva de los alcaldes de Corte y Chancillería constituidos, como tuvimos ya ocasión de ver, en "Audiencia en la cárcel", Pero sin embargo aún debían producirse conflictos de competencias o intromisiones entre una y otra Audiencia, lo que obliga a Juan II a dictar una pragmática en la que prohíbe expresamente a los oidores entremeterse a librar en ninguna de las instancias los pleitos criminales que ante los alcaldes de la Audiencia de la cárcel son tratados. <sup>(37o)</sup>

La importancia que adquirió el Consejo Real, entendiendo de asuntos de justicia, y la profunda crisis en la que se vió inmersa la Audiencia, afectó lógicamente a las competencias de este Tribunal en cuanto que se está produciendo

---

(37o) Pragmática de 25 de juni de 1432: "...que de aqui adelante vos los dichos mis oidores non podades entremetter nin entremettades de oyr ni ber ni librar ni detterminar en grado de apelacion ni suplicacion ni agrabio ni nulidad ni en otro grado ni manera alguna que sea o pueda de qualesquier causas questtiones e pleitos criminales que ante los mis alcaldes de la mi Audienzia de la carcel de la mi casa e corte e chancelleria aian seido o sean ttratados..." (B.N. Colección Burriel, Ms. 131o5, foñs. 166v-167r).

un trasvase de aquellos pleitos que quedaban bajo la jurisdicción de la Audiencia, hacia el Consejo de la justicia, por las razones que en su momento expusimos en este mismo capítulo al tratar la evolución histórica de la institución que nos ocupa. Ante esta situación, se produjeron quejas y denuncias, unas veces de los oidores, otras de los procuradores de las Cortes, por lo que Juan II se vió obligado a tomar medidas al respecto<sup>(371)</sup>, si bien en verdad que frecuentemente se veían incumplidas.

La llegada de los Reyes Católicos supone la rehabilitación y revitalización de la Audiencia, y en general de toda la Administración de justicia.

La normativa vigente se ve completada por las sucesivas Ordenanzas y cédulas con las que los Reyes Católicos van completando y delimitando el marco de competencias de la Audiencia en primera instancia, apelación y suplicación.<sup>(372)</sup>

---

(371) Véase, por ejemplo, la Real cédula de 1428 (incluida posteriormente en una pragmática de 1436) dirigida al Consejo Real y los alcaldes de Corte por Juan II para que se remitan a la Audiencia todos los pleitos, "excepto los que han de ser vistos por el Consejo "... e remitir todos y qualesquier pleytos que ante qualquier de vos estan pendientes entre qualesquier concejos y personas de qualquier estado y condicion ante los mis oydores dela mi audiencia salvo los pleytos que son delos que se deven librar en rrazon del dicho consejo". (Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 47 v). Las quejas de los procuradores en las Cortes de Valladolid de 1440 (CLC. III, 7, p. 383) o las de 1447: "E otrosy que vuestra merçed mande remitir ala dicha



En cuanto a la competencia territorial, aunque las fuentes no nos aclaran nada al respecto, la Audiencia, hasta la creación de su homónima de Ciudad Real en 1494, tiene - competencia sobre todos los territorios de la Corona. Ello se debe a su propia naturaleza jurídica, en cuanto que por una ficción de derecho es considerada la misma persona del Rey y como tal tiene jurisdicción sobre todo territorio, incluidos los señoríos. (373)

- 
- (371) /...vuestra chancillería todos los pleitos y demandas que penden en vuestra corte que propia mente son de conocer e determinar allí". (CLC. III, 2o, pgs. 521-2) PULGAR en su crónica se hace eco también de esta - situación ante la gran cantidad de pleitos que se presentan al Consejo: "La Reyna acordo que todos los pleytos que eran entre partes e pendian en su corte antes los del su consejo por demanda e respuesta, se remitiesen a su chancilleria que estaba en Valladolid... E mando que ansi los pleytos que fuesen de todo el Reyno por apelación, como los otros que eran casos de corte, fuesen a se tratar e definir en la Chancilleria, por que los del consejo que con ella estaban quedasen libres para entender en las mas cosas que ocurrian en la Corte (Crónica de los Reyes Católicos, año 1485, cap. 53 y p. 43o).
- (372) PEREZ DE LA CANAL nos ofrece al respecto una clara clasificación de aquellos casos en los que la Audiencia era competente en cualquiera de estas instancias (La justicia en la Corte... pgs. 431-4).
- (373) Así nos lo hace notar la Crónica de Enrique II: "...e le ficiese cumplir de derecho delante los oidores de la su Corte, que eran jueces deste pleyto, por quanto las tierras de Lara e de Vizcaya, que ella demandaba son en el Señorío de los Regnos de Castilla" (Crónica de Enrique II, año 1373, cap. 11, p. 2o). En sentido parecido se expresa también la Crónica de Juan I (año 139o, cap. 13, p. 141).

Pero además de las funciones estrictamente judiciales, al igual que ocurría con los alcaldes de Corte, los oidores desempeñaron funciones de muy diversa naturaleza.

En primer lugar, sobre todo en la primera fase de la Audiencia, es decir desde finales del reinado de Alfonso XI hasta su reorganización en las Cortes de Toro de 1371, - los oidores desempeñaron una importante labor asesora junto al Rey, no sólo en asuntos judiciales, sino también de tipo gubernativo<sup>(374)</sup>, así como en las reuniones de Cortes.<sup>(375)</sup>

Su carácter de asesores y técnicos en Derecho hace que en ocasiones encontremos a los oidores tomando parte en la labor legislativa del Reino: proponiendo las disposiciones necesarias "para acortar los pleitos e escusar las malicias"<sup>(376)</sup>

---

(374) Cortes de Toro 1371: "Alo que nos pedieron que fuese nuestra merçed que tomasemos o escogiesemos delos çibdadanos nuestros naturales delas cibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos omes buenos entendidos e pertenesçientes que fuesen del nuestro consejo... A esto rrespondemos que nos plaze delo fazer asi, que es nuestro seruiçio e que dado que auemos ya oydores dela nuestra abdiença e alcalles delas prouinçias delos nuestros rregnos, que son alcalles enla nuestra corte, e es nuestra merçed que estos sean del nuestro conseio" (CLC. II, 13, p. 208).

(375) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, pream. pgs, 188-9), Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, preamb. p. 284), Cortes de Guadalajara 1390 (CLC. II, preamb. p. 424).

(376) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. III, 22, p. 523).

interpretando las "leyes que fallaren dubdosas"<sup>(377)</sup> o elaborando reglamentos para el mejor funcionamiento de la Audiencia.<sup>(378)</sup>

Como tuvimos ocasión de ver, participaban, mediante la elaboración de una terna que habían de presentar al Rey, en la elección de nuevos oidores<sup>(379)</sup>. Finalmente también encontramos en ocasiones a los oidores actuando como jueces comisionarios por encargo del Rey.<sup>(380)</sup>

---

(377) Cortes de Valladolid 1447 (CLC. II, 19, o. 386)

(378) Así se desprende del texto de la Recopilación de las leyes y ordenamientos que regulan los derechos y salarios de los oficiales de la Corte, mandada a hacer por Juan II en 1433, en la que se expresa claramente al final: "...que guarden la ordenança fecha en rrazon de sus oficios por los oydores dela mi abdiencia" (DOMINGO PALACIO: Docs. del Arch. de la Villa de Madrid, t. II, p. )

(379) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 34, p. 390).

(380) Así la comisión dirigida al doctor Juan Gonzalez de Acevedo, oidor de la Audiencia, ordenándole entender en las reclamaciones que la Villa de Madrid formulaba sobre la usurpación de los lugares de Pinto, Torrejon Parla, Barajas, La Alameda, Alcobendas y Fuentidueña (MILLARES: Colec. Docus. del Archivo de Madrid, serie II, doc. 62 y 63 pgs. 381-2) o también el pleito litigado por la Justicia, Regimiento y hombres buenos de la ciudad de Oviedo con don Diego Fernandez de Quiñones sobre el oficio de Merino de dicha ciudad que se le encarga resolver por comisión al Obispo de Cuenca, a la sazón oidor de la Audiencia (VIGIL: Col. Dipl. del Ayuntamiento de Oviedo, doc. 148, pgs. 259 y ss).

### LA AUDIENCIA DE CIUDAD REAL

Para completar la visión general que hemos presentado de la Audiencia, parece oportuno hacer referencia a la Audiencia de Ciudad Real, creada en 1494 y trasladada a Granada en 1505.<sup>(381)</sup>

Nace la Audiencia de Ciudad Real con la finalidad de aliviar de trabajo a la Audiencia de Valladolid<sup>(382)</sup> y de facilitar el acceso a la Audiencia a los habitantes del Reino de Granada, de Andalucía, islas Canarias y Reino de Murcia.<sup>(383)</sup>

La planta de oidores con que se dota a la Audiencia de Ciudad Real es más reducida que la de su homónima de Valladolid. En este sentido, la citada Audiencia está compuesta de un Prelado Presidente y cuatro oidores<sup>(384)</sup>, que conocerán de todas las causas civiles en grado de apelación o suplicación, así como en primera instancia o por caso de corte, de las tierras, comarcas y términos antes citados (Granada, Andalucía, Canarias y Murcia)<sup>(385)</sup>. Es decir, la Audiencia

---

(382) Ordenanzas 1494, preamb.: "que la muchedumbre de los negocios que alla ocurrieran inpidiria el despacho dellos".

(383) Ordenanzas 1494, pream. "E que especialmente seria dificultoso e aun se seguiria dello grandes costas e fatigas alos que biuen enel Reyno de Granada, e enel Andaluzia, e enlas yslas de canaria, e enel Reyno de Murcia e en otras partes que estan arredradas dela dicha villade Valladolid".

(384) Ordenanzas de 1494, cap. 1, fol. 6lv-r.

(385) Ordenanzas de 1494, cap. 1, fol. 6lr.

de Ciudad Real queda en principio equiparada en cuanto a las competencias de sus oidores a la de Valladolid.

En cuanto al resto de la estructura, ya vimos en su momento cómo disponían las Ordenanzas que hubiera dos alcaldes de Corte y Chancillería con competencias para lo criminal<sup>(386)</sup> a los que se les añadía un oidor en caso de que no se pusieran de acuerdo para sentenciar.

Se nombraban igualmente un procurador fiscal, seis escribanos de audiencia y seis receptores, dos escribanos del crimen, tres notarios (de Andalucía, Granada y Toledo) dos alcaldes de los fijosdalgo, un abogado y un procurador de pobres, porteros, carcelero, alguacil, etc.<sup>(387)</sup>

La creación de la Audiencia de Ciudad Real supone una auténtica división de la competencia territorial de los territorios de la Corona. En este sentido las Ordenanzas creadoras de la misma insertan un capítulo en el que se establecen los límites territoriales que quedan bajo la jurisdicción de cada una de las Audiencias, de forma que "todas las ciudades e villas e lugares e castillos e fortalezas e granjas e caserías e cortijos que son allende del río de tajo con el andalucía, e el reyno de granada e el reyno de murcia, con el marquesado de villena, e con lo que las ordenes de santiago e alcantara e calatraua e sant juan tienen en las dichas comarcas;

---

(386) Ordenanzas de 1494, cap. 2, fol. 61r.

(387) Ordenanzas de 1494, caps. 3-10, fols. 61 r-62r.

en con las islas de Canaria, ansi los concejos e universida-  
des como las personas e vezinos e moradores dellos; ayan -  
de ir e vayan ala dicha nuestra corte e chancellería nueva  
con todos sus pleytos e causas e negocios"<sup>(388)</sup> El resto de  
los territorios de la Corona "e señorios de aquende los -  
puertos, conlo que queda del reyno e arçobispado de Toledo  
e obispado de Sigüença e Cuenca e Plazencia e Coria aquende  
de Tajo: venga ala nuestra corte e chancelleria antigua que  
reside en Valladolid",<sup>(389)</sup> especificándose además que las "cib-  
dades e villas que estouieren en una delas dichas comarcas  
aun que tengan lugares se su termino e jurisdicción en la  
otra comarca que todos los lugares siguan ala cabeça de  
su jurisdicción".<sup>(390)</sup>

Las dos Audiencias quedaban, pues exactamente equi-  
paradas en cuanto a competencias materiales y territoriales,  
sólo la más reducida planta de la Audiencia de Ciudad Real  
nos puede dar un criterio diferenciador. Por tanto, fijándo-  
nos ahora desde el punto de vista de las competencias mate-  
riales, la vía judicial ordinaria de la Audiencia del sur del  
Tajo finalizaba con la primera suplicación que, como vimos,  
se interponía ante los mismos oidores, como así disponían  
las leyes de Segovia de 1390<sup>(391)</sup>. Como se recordará, en  
ese mismo Ordenamiento se establecía la posibilidad de una

(388) Ordenanzas de 1494, cap. 12, fol. 62 r-63v. De esta  
separación también se hace eco en su Crónica SANTA  
CRUZ (Crónica de los Reyes Católicos, año 1494, -  
cap. 26, p. 129).

(389) Ordenanzas de 1494, cap. 12, fols. 62-r.

(390) Ordenanzas de 1494, cap. 12, fols. 62 r-63v.

(391) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, pgs. 476-8)

segunda suplicación cuando el pleito "fuere muy grande", recurso que desde 1489 se denomina "suplicación de las mill y quinientas doblas" y más tarde "segunda suplicación."<sup>(392)</sup>

Posteriormente, a tenor de lo dispuesto por las Cortes de Toledo de 1480, cabía igualmente interponer la "segunda suplicación" de todas aquellas sentencias que se dieran en el Consejo en grado de revista.<sup>(393)</sup>

A quién correspondía librar este recurso? La ley de Ordenamiento de Segovia no especificaba, sino que se limitaba a disponer muy enfáticamente que el dicho recurso sería fallado "por aquel o aquellos a quien nos lo encomendaremos"<sup>(394)</sup>; es decir, se nombrarían uno o varios jueces exclusivamente para conocer de la suplicación con lo que casi podríamos entroncar éstos con el viejo "juez de las suplicaciones". Pero lo cierto es que no han llegado a nosotros, que sepamos, pleitos substanciados por tales jueces hasta fechas ya relativamente tardías con lo que no podemos conocer exactamente la forma en que se ventilaba esta suplicación de las mil y quinientas.

En alguna ocasión, los Reyes comisionan el conocimiento de esta segunda suplicación de una sentencia dada en grado de revista por el Consejo al Presidente y Oidores de

---

(392) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, p. 478)

(393) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 26, pgs. 118-9)

(394) Cortes de Segovia 1390 (CLC. II, 4, p. 478).

de la Audiencia de Valladolid<sup>(395)</sup>. Ante este caso concreto, cabe suponer que al igual que las sentencias de revista del Consejo eran ventiladas ante la Audiencia, las sentencias procedentes de ésta serían vistas en segunda suplicación ante el Consejo, como creemos que de hecho ocurrió, ya que, como es sabido, en el Consejo se acabó por constituir una Sala con el nombre de las mil y quinientas.

Este sistema se vió alterado momentáneamente por lo dispuesto en 1499 por las leyes para abreviar pleitos en la que se disponía que "en las causas de la suplicación con las mil y quinientas doblas, así en posesión como en propiedad, en caso de que haya lugar, se suplique de la sentencia que de aquí adelante se dieren a una audiencia para la otra, y de la otra para la otra, a nos por la presente se lo comemos, sin otra nueva comisión alguna, salvo si nos otra cosa expresamente mandaremos"<sup>(396)</sup>. Pero antes de dos años, por una Real Cédula de 1501, se restablece el sistema de 1390, es decir, en caso de que se produjera tal suplicación, había de acudir al Rey para que éste designara los jueces oportunos<sup>(397)</sup>, medida que posteriormente fué confirmada en las leyes para abreviar los pleitos de 1502.<sup>(398)</sup>

- 
- (395) Véase la provisión, fechada en octubre 12 de 1485, por la que se encomienda a la Audiencia de Valladolid el conocimiento de la segunda suplicación procedente de una sentencia dictada por el Consejo (Tumbo de los Reyes Católicos, IV, pgs. 61-3).
- (396) Ordenanzas de Madrid de 21 de mayo de 1499, "Leyes para abreviar los pleitos". Ed. Fácsmil, editada por la Universidad de Granada, 1973, fol. 5.
- (397) Recopilación de las Ordenanzas de la Audiencia... fols 158v-159r.
- (398) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 72v-73r.



C A P I T U L O V

---

EL CONSEJO REAL

## CAPITULO V

### EL CONSEJO REAL

A la hora de plantearnos el problema del origen del Consejo Real de Castilla nos hemos encontrado con las mismas dificultades de tipo metodológico que ya nos salieron al paso cuando abordamos el origen de la Audiencia. Cuándo nace el Consejo Real?. Para contestar a este interrogante creemos que es necesario previamente precisar conceptualmente que entendemos por Consejo Real.

Si entendemos por Consejo Real aquel conjunto de personas que acompañan al Rey y que realizan la función de aconsejarle, la solución del problema de los orígenes del Consejo se convierte ciertamente en insoluble, o al menos de muy difícil precisión en cuanto que se puede afirmar que en todo tiempo ha existido un grupo de personas en las que el Rey ha depositado su confianza y le sirven de asesoramiento en aquellas cuestiones de diversa naturaleza que se le presentan al monarca. Pero si, por el contrario, entendemos por Consejo Real sólo aquel órgano colegiado y de carácter técnico al que le han sido encomendadas unas competencias y funciones bien delimitadas no sólo consultivas, sino también decisorias, evidentemente la búsqueda del origen del Consejo Real de Castilla queda reducida a un ámbito cronológico más fácil de precisar.

Desechando a priori toda dogmática, creemos que, en última instancia, el problema no se ha de reconducir tanto a dar una fecha como a fijar el proceso que ha dado lugar

a la configuración del Consejo Real teniendo siempre presente todas aquellas situaciones y valoraciones que en cada momento de dicho proceso han incidido en la evolución histórica del mismo.

La historiografía no se ha mostrado unánime a la hora de fijar el origen del Consejo Real. Ya en el siglo XVIII autores como CANTOS BENITEZ<sup>(1)</sup> y ESCOLANO ARRIETA<sup>(2)</sup>, - autores, por otra parte, íntimamente relacionados con el Consejo, remontan el origen del Consejo a la época visigoda.<sup>(3)</sup> En términos similares se expresó también en el siglo pasado MARTINEZ MARINA para quien la existencia del Consejo y su continuidad desde la época visigoda es innegable.<sup>(4)</sup>

- 
- (1) Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes. Madrid, 1763. pgs. 1-103.
  - (2) Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen, o a cada sala en particular: y las fórmulas y cédulas, provisiones y certificaciones respectivas, Madrid, 1976, 2 vols.
  - (3) Escrutinio... pgs. 11-2 y Práctica... pgs. 1-3, respectivamente.
  - (4) Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla, ya citada, t. I, p. 28 y t. II pgs. 319-24, y en sentido parecido en su Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, también citada, pgs. 36-40.

Bien conocidos son los trabajos de SANCHEZ-ALBORNOZ en los que se propugna una continuidad entre el antiguo "Palatium Regis" y el Consejo Real a través del "Palatium" del reino astur-leonés y de su sucesora la Curia Regia altomedieval<sup>(5)</sup>. Para el citado profesor el origen hay que buscarlo en los distintos tipos de reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebran en el Palatium, motivadas por una creciente complejidad administrativa que da como resultado una diversificación de funciones y competencias según la trascendencia de la materia a tratar. Este tipo de reuniones pasarán a la Curia, afectada en los siglos XII y XIII de grandes transformaciones, en la que ya podemos distinguir claramente entre unas Curias extraordinarias o plenas, y unas Curias ordinarias o reducidas; las primeras habrían sido el origen de las Cortes, y las segundas el origen del Consejo Real.<sup>(6)</sup> En la misma línea del citado profesor se encuentra sus discípulos el profesor L.G. VALDEAVELLANO<sup>(7)</sup> y N. GUGLIELMI<sup>(8)</sup>.

Otro considerable grupo de autores han visto el origen del Consejo Real en una época más tardía, y concretamente, le han atribuido la creación del citado órgano al Rey Fernando III. Parece que fue MARIANA el primero que sostuvo tal

(5) Véase al respecto sus trabajos El Aula Regia y las Asambleas políticas de los godos en sus Estudios visigodos, Roma 1971, pgs. 151-216; La Curia Regia Portuguesa, Madrid, 1920, ya citado y su más reciente - El Palatium Regis Asturleonés En C.H.E. 49-50 (1976) pgs. 5-104.

(6) La Curia Regia Portuguesa... pgs. 147 y ss.

(7) Vid. su Curso de Historia de las Instituciones españolas, ya citado, en el que recoge las teorías de su maestro en torno al Aula Regia, el Palatium Regis y la Curia.

(8) La Curia Regia en León y Castilla, en C.H.E. 23-24, pgs 116-267 y 28, pgs. 43-101, ya citado varias veces. en el que matiza en algunos aspectos el trabajo de su maestro

afirmación<sup>(9)</sup> y a partir de él toda una serie de autores como CASCALES<sup>(10)</sup>, SALAZAR DE MENDOZA<sup>(11)</sup>, MENDEZ DE SILVA<sup>(12)</sup>, NUÑEZ DE ARCE<sup>(13)</sup>, FLOREZ<sup>(14)</sup> y NUÑEZ DE CASTRO<sup>(15)</sup>, se han manifestado en el mismo sentido. Más recientes, se encuentran en esta misma línea MARICHALAR Y MANRIQUE<sup>(16)</sup>, LAFUENTE<sup>(17)</sup>, ALCOCER en su trabajo dedicado al Consejo de Castilla<sup>(18)</sup>, MAYER<sup>(19)</sup> y L.G. DE VALDEAVELLANO<sup>(20)</sup>. Desde luego tampoco han faltado autores que se mostraron contrarios a esta atribución de la creación del Consejo a Fernando III, como SEMPERE Y GUARINOS<sup>(21)</sup>, DANVILA<sup>(22)</sup> y TORREANAZ<sup>(23)</sup>.

- 
- (8) /...sobre la Curia Regia Portuguesa.  
 (9) Historia general de España, por J. de Mariana, Madrid 1873, t. II, p. 468.  
 (10) Discursos históricos de Murcia y su Reino, Murcia 1614, fols. 19v-20r.  
 (11) Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, con relación sumaria de los reyes de estos reynos, de sus acciones, casamientos, hijos, muertes, sepulturas: de los que las han creado y tenido y de muchos ricos hombres, confirmadores de privilegios, etc. Con un resumen al fin de las mercedes que su Magestad ha hecho de marqueses y condes desde el año de 1621 hasta fin de 1656, Madrid, 1696, p. 141.  
 (12) Catálogo real y genealógico de España, ascendencias y descendencias de nuestros católicos Príncipes y Monarcas Supremos, Madrid, 1656.  
 (13) Libro histórico político. Sólo Madrid es corte y el Cortesano en Madrid, Madrid, 1669, p. 28.  
 (14) Clave historial con que se facilita la entrada al conocimiento de los hechos ocurridos desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, Madrid 1817, p. 246.  
 (15) Vida de S. Fernando III, rey de Castilla y León; Madrid 1787, pgs. 165-7.  
 (16) Historia de la Legislación... t. II, p. 510.  
 (17) Historia General de España, t. IV, p. 99.

Interpretación tan original como errónea nos da CASTILLO DE BOVADILLA quien ve al Adelantado Mayor del Rey como antecesor del Consejo Real.<sup>(24)</sup>

Otro amplio sector de nuestra historiografía han fijado el origen del Consejo, o al menos han señalado su novedad, en base a las ordenanzas dadas por Juan I en las Cortes de Valladolid de 1385. En este sentido encontramos la opinión de SEMPERE<sup>(25)</sup>, COS GAYON<sup>(26)</sup>, COLMEIRO<sup>(27)</sup>, DANVILA<sup>(28)</sup>

- 
- (18) /...Consejo Real de Castilla en la Revista Histórica, 1925, p. 33.
  - (19) Historia de las Instituciones sociales y políticas de España y Portugal, t. II, p. 98.
  - (20) En este punto concreto se separa de la tesis de SANCHEZ-ALBORNOZ. El profesor D. DE VALDEAVELLANO sostiene que los "doce sabios filósofos" fueron el antecedente del Consejo Real, aunque, y en esto sigue a su maestro, lo sigue viendo como una derivación de la Curia ordinaria (Curso de Historia de las Instituciones... p. 457).
  - (21) Historia del Derecho Español, pgs. 254-60.
  - (22) El poder civil en España, ya citado varias veces, t.I. p. 125.
  - (23) Los Consejos del Rey durante la Edad Media, Madrid, 1884-1890, 2 vols. t. I. pgs. 115-19.
  - (24) Política de Corregidores, Lib. I, cap. 2, p. 16.
  - (25) Histoire des Cortes d'Espagne, Burdeos 1815, p. 121 y en Historia del Derecho Español, p. 422.
  - (26) Historia de la Administración Pública en España, pgs. 99-100.
  - (27) De la Constitución... t. II, p. 244.
  - (28) El Poder Civil... t. I. p. 133 y p. 524.

TORREANAZ<sup>(29)</sup> y ALCOCER<sup>(30)</sup>. Siguiendo a los anteriores, mas recientemente, se han pro por la creación del Consejo en 1385, el profesor L.G. DE VALDEAVELLANO<sup>(31)</sup>, el profesor GONZALEZ ALONSO<sup>(32)</sup> y J. VALDEON<sup>(33)</sup>. Destaca la postura del profesor SUAREZ FERNANDEZ, quien concibe la creación del Consejo Real como un aspecto más de la amplia labor institucionalizadora llevada a cabo por los Trastámara.<sup>(34)</sup>

Finalmente podemos citar otro grupo de autores que ven una continuidad en la evolución del Consejo aunque reconocen la novedad de que supuso la Ordenanza de 1385 de cara a la reorganización del Consejo. Es el caso del profesor GILBERT<sup>(35)</sup>, del profesor GARCIA-GALLO<sup>(36)</sup>, y del profesor VILLAPALOS<sup>(37)</sup>. Dentro de esta línea, TORRES SANZ, desechando la creación del Consejo Real en 1385, piensa que se debe a la Ordenanza de Briviesca de 1387 la transformación del Consejo creado en 1385 -al que este autor considera una diputación permanente de Cortes en el Consejo Real de Castilla.<sup>(38)</sup>

(29) Los Consejos... t. I, pgs. 136-7.

(30) Consejo Real de Castilla... p. 33.

(31) Curso de Historias de las Instituciones... p. 458.

(32) El Corregidor castellano... p. 47.

(33) Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos en Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara Madrid, 1980, vol IV, p. 147, si bien este mismo profesor en El Reino de Castilla en la Edad Media, Bilbao 1972, pgs. 115 y 142 señalaba que Juan I había hecho "reformas substanciales" y entre ellas las del Consejo.

(34) Así se ha manifestado en varios de sus trabajos. Vid Estudios sobre el Régimen monárquico de Enrique III, Madrid, 1954, p. ; Juan I, Rey de Castilla, Madrid 1955, p. ; Nobleza y Monarquía... p Castilla en Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, vol XIV, p. y en su reciente Historia del Reinado de Juan I de Castilla, Madrid, 1977, pgs.

Como hemos podido comprobar han sido muy diversas las actitudes que la historiografía ha adoptado en torno al origen del Consejo, pero, como ya dijimos, creemos que el problema no se ha de circunscribir tanto a fijar una fecha en la que se pueda afirmar que a partir de la misma ya existía el Consejo Real de Castilla, como en ir señalando qué situaciones de hecho, qué valoraciones han venido determinando el proceso histórico que ha dado lugar a la regulación y configuración del Consejo Real.

Hay una situación de hecho, innegable desde nuestro punto de vista, que viene repitiéndose en todo tiempo con mayor o menor frecuencia, que viene dada por el hecho de que el Rey, y en general cualquier persona que se encuentra al frente del gobierno de una comunidad, ante la necesidad de resolver una determinada cuestión concerniente al regimiento de la comunidad se ve obligado a pedir asesoramiento, sea técnico o no, a aquellas personas que por sus conocimientos, o sencillamente por la confianza que el Rey tenga depositada en ellos, para solventar de esta forma el problema planteado. En este sentido se puede afirmar que sin ningún género de dudas, el "Consejo" ha existido siempre.

---

(35) /...El Antiguo Consejo de Castilla, Madrid, 1964, p. 14.

(36) Siguiendo a los autores antes citados, el profesor GARCIA-GALLO en su Curso de Historia de Historia del Derecho Español señalaba la creación del Consejo a cargo de Juan I (p. ), aunque recientemente, (Las Audiencias en Indias...p. 364) sostiene que la Ordenanza de 1385 da una nueva organización al antiguo Consejo que le hace aparecer como órgano nuevo.

(37) Los recursos.... p. 266-7.

(38) La administración Central... pgs. 516, 519 y 523.



En la Alta Edad Media en donde la supremacía fáctica del poder real se halla visiblemente mediatizada y limitada por un complejo conjunto de vínculos personales, el ejercicio de tal poder por parte del Rey venía en gran manera determinado por esta situación, con lo que se hacía necesaria la participación de un órgano asesor que respaldaba en unos casos, en otros limitaba la actuación del Príncipe. Bajo esta perspectiva la Curia Regia, ya fuera ordinaria para asuntos cotidianos o extraordinaria para los más graves, actuaba como "Consejo" del Rey. Es un "Consejo Real" que viene determinado por las situaciones de hecho propias de esta etapa alto medieval.<sup>(39)</sup>

A finales del siglo XII y principios del XIII la situación de los Reinos de Castilla y León ha variado sensiblemente, sobre todo en Castilla en el que a partir de la declaración de la mayoría de edad de Alfonso VIII se va a abrir una etapa floreciente<sup>(40)</sup> que se inicia con una notable expansión económica, en la que las ciudades empiezan a tener un peso indiscutible; la dicotomía rey-nobleza se queda truncada con la entrada de los concejos en el juego político que acabará por inclinarse a favor del Rey. De esta forma la Curia

---

(39) En este sentido, creemos, deben ser interpretados el conocidísimo texto de la Curia de León de 1188, diáfano al respecto "promissi etiam, quod non faciam guerram vel pacem vel placitum, nisi cum concilio episcoporum, nobilium et bonorum nominum per quorum consilium debeo regi" (CLC. I, 3, p. 40).

(40) Sobre el reinado de Alfonso VIII véase J. GONZALEZ: El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII; Madrid 1960, 3 vols. ya varias veces citado.

altomedieval entra en crisis ante la preponderante concentración de poder en manos del Rey quien comienza a actuar con mayor libertad. La Curia comienza a ser sustituida por un conjunto de órganos y oficiales, dependientes enteramente del monarca, y a través de los cuales se iban imponiendo los fines autocráticos de la Monarquía.

Es ciertamente significativo que ya tanto Alfonso IX de León<sup>(41)</sup> como Alfonso VIII de Castilla<sup>(42)</sup> aparecían acompañados de un "consilium", sin duda órgano distinto a la Curia, con la que tal vez llegó a coexistir algún tiempo.

Pero lo que parece ya más conflictivo es identificar ese "consilium", que, como acabamos de ver, acompañaba tanto al Rey de Castilla como al de León, con el "consejo de los doce sabios" al que nos hace referencia el Libro de la Nobleza y Lealtad.<sup>(43)</sup> Desde luego las fuentes son muy poco - -

---

(41) "Adefonsus rex Legionensis cum esset catholicus habebat secum clericos, qui modulatis vocibus quotidie coram ipso divinum officium peragebant... Habebatque cubicularios suos laicos quosdam, quibus omne consilium suum committebat" (LUCAS, Obispo de Tuy: Crónica de España, pág. 409)

(42) "Rex autem Castellae cum esset sapientissimus, consilium suum semper sapientibus committebat" (LUCAS, Obispo de Tuy: Crónica de España, pag. 409).

(43) Los doce sabios que la vuestra merced mandó que viniésemos de los vuestros reynos, e de los reyes vuestros amados hermanos, para os dar consejo en lo espiritual, e temporal: para salud, e descargo de la vuestra anima: e de la vuestra esclarecida conciencia. E en lo temporal para os decir, e declarar lo que nos parece en todas las cosas que nos dixistes, e mandastes que viésemos..." (Libro de la Nobleza y Lealtad, ed. De Manuel Rodríguez en Memorias para la vida del Santo Rey Don Fernando III, p. 188).

explícitas al respecto y no encontramos ningún indicio por el que podamos descubrir una actuación permanente del dicho Consejo, salvo el citado texto del Libro de Nobleza y Lealtad. No obstante, al igual que hicieran Alfonso VIII y Alfonso IX, Fernando III aparece en algunos textos documentales actuando con su Consejo<sup>(44)</sup>. Podemos identificar a estos doce "sabios" con doce letrados o "sabidores"? No lo sabemos, pero no deja de ser coincidencia que en uno de los pocos documentos que han llegado a nosotros en los que se hace mención al Consejo en tiempos de Fernando III sean precisamente doce el número de personas a las que se cita expresamente con su nombre<sup>(45)</sup>, y esos doce, dada su condición -prelados, maestre de Calatrava y alcaldes-, son casi sin duda alguna letrados o "sabidores", si utilizamos la terminología de la época. Tal afirmación supondría ni más ni menos que el reconocimiento de un Consejo de tipo técnico ya en los últimos años del reinado de Fernando III compuesto de grandes dignidades eclesiásticas y alcaldes de corte por mitad, con escasa

---

(44) Véase, por ejemplo, la delimitación de los términos entre Madrid y Segovia: "...yo don Fernando, por la gracia de Dios... se ajuntan andando conmigo el arzobispo don Rodrigo de Toledo, y el Obispo de Osma mi canceller, y el obispo de Segovia don Bernardo, y el obispo de Cuen a don Gonzalo Yañes, y el obispo de Cordoba maestre Lope, e Martin Ruiz maestre de Calatrava, e mis alcaldes Gonzalo Muñoz, don Rodrigo don Fijo, don Fernan de Toledo, fray Pelaez, e Garci Muñoz de Zamora, e otros omes buenos de mio regno, quales me yo quisiere llamar a mio consejo" DE M<sup>A</sup> NUEL: Memorias... 445) o en una carta enviada a Segovia en 1250 en la que el Rey dice expresamente que "ove mi consello" (COLMENARES: Historia de la insigne ciudad de Segovia, Madrid 1640, t.I, p. 380). LUCAS DE TÚY nos refiere igualmente la existencia de un Consejo en tiempos de Fernando III: "Tenfa consigo varones catholicos muy sabios a los que quales encomendaba el y su madre todo el consejo..." (Crónica de

representación de la nobleza, en las personas de los maestros.

A tenor del citado texto parece que estos doce, que andan con el Rey, deben formar la planta ordinaria del citado Consejo, lo que no quita, como bien dice el texto, que el Rey pueda llamar a su Consejo a "otros omes buenos" de su reino.

En último caso lo que realmente nos interesa destacar es esta situación que se viene produciendo. Efectivamente, la existencia de un sólo texto no es suficiente como para llevarnos a afirmar categóricamente la existencia de un Consejo de carácter permanente con unas funciones y unas competencias delimitadas en el que podemos ver un antecedente más o menos remoto del Consejo Real de Castilla, pero a partir de este momento, como veremos a continuación, hay una preocupación constante, que se refleja en varios momentos del siglo XIV de una forma muy clara, porque se gobierne con el asesoramiento de un Consejo representado por los distintos estamentos del Reino.

Desde nuestro punto de vista concluimos, y en ello coincidimos plenamente con TORRES SANZ<sup>(46)</sup> que este "consilium", que parece claramente vislumbrarse desde principios del siglo XIII, no tiene un entronque directo con la antigua

(44) /...España, p. 418)

(45) Ver documento en nota anterior.

(46) La Administración central... pgs. 493-4.

(47) "...ovo su consejo a cual destas conquistas iria primero, e fallo que era mejor de ir primeramente a conquistar la villa de Xeres" (Crónica de Alfonso X, año 1255, cap. 4, p. 5).

Curia altomedieval porque obedece su origen a unas nuevas situaciones de hecho bien distintas de las que hasta el momento habían caracterizado el modo de actuación política del rey en Castilla y León en los siglos altomedievales.

En el reinado de Alfonso X encontramos varios pasajes de la Crónica de dicho Rey en que se hace alusión a como el monarca, ante muy diversas situaciones, se aconseja, ya sea sobre el modo de comenzar una campaña<sup>(47)</sup>, sobre la actitud a tomar ante sus pretensiones al Imperio<sup>(48)</sup>, sobre la petición por parte del Rey de Portugal acerca los tributos que debía pagar al Rey de Castilla<sup>(49)</sup>, sobre el servicio especial que pidió a las ciudades para hacerse coronar emperador<sup>(50)</sup>, o ante los agravios que le presentan los ricos hombres, hijosdalgos y caballeros de Castilla<sup>(51)</sup>, o las demandas de su hijo Sancho.<sup>(52)</sup>

---

(48) "...e luego alli ovo consejo con los suyos de como fuese al Imperio" (Crónica de Alfonso X, año 1268, cap. 18, p. 13).

(49) "...el rey don Alfonso mando a los infantes e ficos omes del su Consejo que estaban y con el que le dicesen e aconsejasen sobresto lo que devia facer, e todos callaron e estodieron gran pieza que no dijeron nada" (Crónica de Alfonso X, año 1269, cap. 19, p. 14).

(50) "E pues que el Rey ayo esto que Juan Alfonso Carrillo le dijo de parte de los ricos omes, ovo su consejo con la Reina que era y con el e son el infante don Fadrique, su hermano, e con los obispos de Córdoba e de Caliz, e don Juan Gonzalez, maestre de Calatrava, e don Día Sanchez de Frias e don Anrique Perez de Arana e el arcediano don Juan Alfonso, electo en la iglesia de Santiago, e don Gregorio Yañez de Aguilar, e maestre Gonzalo, arcediano de Toledo, notario de Castilla, e don Joñe de Loaisa. E el Rey, avido su consejo con estos..." (Crónica de Alfonso X, año 1271, cap. 21, p. 17).

Debemos suponer que este consejo al que se refiere varias ocasiones la Crónica de Alfonso X sería muy similar al que utilizara su padre Fernando III, al que se hace también mención en el Setenario<sup>(53)</sup> ya como un órgano de entidad propia, aunque si comparamos la composición de uno y otro "Consejo" con los datos de que disponemos<sup>(54)</sup> se puede observar - fácilmente que su composición tanto cuantitativa como cualitativamente se ha visto alterada. En el "Consejo" de Alfonso X - han sido suprimidos los Alcaldes de la Corte, fenómeno totalmente comprensible si tenemos en cuenta que ya por estos años han quedado plenamente configurados como oficiales con competencias estrictamente de justicia que vienen desarrollando su actividad como la máxima instancia del Reino. Por supuesto esto no es óbice para que si el Rey lo considera oportuno un alcalde o varios puedan ser llamados al Consejo, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos primeros años éste es un órgano abierto a cualquier persona que el Rey para este menester designe.

- 
- (51) /..."...el rey don Alfonso ovo su consejo sobresto con don Fadrique e don Luis, sus hermanos, e con el obispo de Cuenca e con Gil Garcia de Sagra e con don Gutier Suarez e don Diego Lopez de Salcedo..." (Crónica de Alfonso X, año 1276, cap. 67, p. 53).
- (52) "E mando llamar al infante don Manuel e otros de su Consejo..." (Crónica de Alfonso X, año 1276, cap. 67, p. 53).
- (53) "Et que oviese otrosi tales en su conseio quel amasen lealmente, et lo sopiesen bien conseiar, et que fuesen onrrados, et entendidos, et de bu n seso" (Setenario, ed. De Manuel en Memorias... p. 224)
- (54) Compárese texto de la nota 44 con el de la nota 50.

Ya el Espéculo establecía la obligación de acudir a pres-  
tar consejo a la Corte, si el Rey así lo disponía,<sup>(55)</sup> a cualquier  
súbdito. Este cuerpo legal hace, además, otras menciones muy  
concretas a personas que pertenecían al Consejo por el mero he-  
cho de desempeñar algún oficio, como es el caso de los chanci-  
lleros<sup>(56)</sup>, u otro cargo en la Corte.<sup>(57)</sup> Es muy posible que, ade-  
más de éstos, otros oficiales de la Corte como el Alférez o  
el Mayordomo Mayor formaran parte del "Consejo".

El reinado de Sancho IV pocas novedades nos ofrece al  
respecto. La Crónica del citado Rey nos ha dejado varios testi-  
monios sobre la existencia del Consejo y de sus miembros<sup>(58)</sup>

---

(55) Espéculo 3, 3, 1.

(56) Espéculo 2, 12, 2: "...Ca pues que ellos (los chancille-  
res) en conseio del Rey son".

(57) Es el caso de los "clerigos de casa del Rey": "Guardados  
tenemos otrosí que deven seer los otros clerigos del rey  
que son en consejo del rey. Ca pues que el rey los onra  
en querer que sean en su consejo..." (Espéculo 2, 12, 5).

(58) Sancho IV designa los "hombres buenos" para tratar de  
un delito con el Rey de Francia": "...los cuales fueron  
por el rey don Sancho el arzobispo don Gonzalo de Toledo  
e don fray Alonso, obispo de Burgos, e el obispo de Ca-  
lahorra e otros caballeros que eran del Consejo del Rey"  
(Crónica de Sancho IV, año 1286, cap. 2, p. 73) o en otro  
pasaje: "...e dijólo a la Reina, su mujer, e a los del su  
Consejo, e mandoles que le consejasen sobre ello..."  
(Crónica de Sancho IV, año 1286, cap. 3, p. 74) La misma  
crónica en otro pasaje se refiere a los consejeros deno-  
minándoles "privados": "...consejabanle que se aviniese  
con el rey de Francia. E estando el pleito en este acuerdo  
los privados del Rey, que eran amigos del Conde, conse-  
jabanle que se aviniese con el rey de Francia. E estando  
el pleito en este acuerdo, los privados del Rey, que eran  
amigos del Condejo, aconsejaban al Rey que siguiese lo que  
el Conde queria, e los privados que eran contra ellos di-  
cien al Rey que mejor consejo era el que daba la Reina  
y el arzobispo de Toledo e los prelados e los otros ricos  
omes de la tierra" (Crónica de Sancho IV, año 1287, cap. 4

así como de su actuación. Sin embargo, a finales de este reinado hay un dato, creemos, de mucha importancia que puso ya de relieve el profesor GIBERT<sup>(59)</sup>. En las Cortes de Valladolid de 1293<sup>(60)</sup> Sancho IV accede a la petición que le presentan los procuradores de los concejos de la Extremadura por la que tomaría un caballero de cada obispado de la Extremadura que acompañarían siempre al Rey, turnándose semestralmente, y con quienes el Rey libraría los asuntos procedentes de la Extremadura.<sup>(61)</sup>

En primer lugar lo primero que llama la atención es - que sólo son los concejos de la Extremadura los que solicitan esa participación conjunta con el Rey en el libramiento de los asuntos. En los ordenamientos otorgados en esas mismas Cortes a los concejos de León y de Castilla, que aparecen publicados por la Real Academia de la Historia, no hay ninguna petición en términos semejantes. Por qué los procuradores de León y - Castilla no han intentado obtener una ventaja similar?. Tal vez

---

(59) El Antiguo Consejo de Castilla, p. 11.

(60) Esta petición no fue recogida en la edición de las Cortes de León y Castilla de la Real Academia de la Historia; la conoció MARTINEZ MARINA (Teoría de las Cortes, t.I pgs. 326-7) y el texto puede verse publicado en DOMINGO PALACIOS: Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, t. I, pgs. 149-50.

(61) "Otrosi: alo que nos pidieron que tomassemos caualleros de Estremadura, de cada obispado un cauallero que andoviesse con nusco en nuestra casa: porque quando viniese a nos los caualleros e los otros omnes buenos de las villas de Estremadura e de sus pueblos que estos caualleros que nos mostrasen aquellas cosas porque venien e que andasen y la metad de ellos los sseys meses del anno, e la otra metad dellos los otros sseys meses..." (DOMINGO PALACIOS: Docs. Archivo Madrid, t. I, pgs. 149).



la solicitaron y al no serles concedida no apareció reflejada en el Ordenamiento respectivo, pero de todos es sabido cómo los últimos años del reinado de Sancho IV se caracterizaron por las pugnas entre el Rey y las familias de los Lara y de los Haro, hasta el punto que Juan Nuñez de Lara persuadió al infante don Juan para que entre ellos y con la ayuda de Portugal se hicieran con el poder de Castilla y León, "ca despues que ellos amos fuesen uno, que el rey non avia otro ninguno con quien gelo pudiese vedar"<sup>(62)</sup>. Una vez más, como ya ocurriera en los años de su levantamiento contra su padre, Sancho IV encontró sólo el apoyo de las ciudades. Fué esta entonces una medida para compensar el apoyo prestado por los concejos de la Extremadura? No lo sabemos.

Con la muerte de Sancho IV en 1295 se abre, a nuestro entender, otra etapa en la evolución del Consejo que se va a caracterizar por la insistente presión por parte de las ciudades para lograr una participación activa en el gobierno de la comunidad.

El constante apoyo que Sancho IV tuvo que buscar en los concejos para llevar a cabo su política, favoreció indudablemente la posición de las ciudades que llegan al reinado de Fernando IV con una fuerza inusitada<sup>(63)</sup>. Hasta el momento, -

(62) Véase M. CAIBROIS: Sancho IV, t. I, pgs. 88-204 y t. II, pgs. 7-18, 59, 82. Puede verse también la Crónica de Sancho IV, cps. 3 y 10, pgs. 75 y 88, y la Crónica de JOFRE DE LOAISA (ed. Ubieto, Valencia 1971), pgs 26 y 33.

(63) Sobre esto véase J. PUJOL y ALONSO: Las Hermandades de Castilla y León, Madrid 1913 y más recientemente L. SUAREZ: Evolución histórica de las Hermandades Castellanas, en C.H.E. 16 (1951), pgs. 5-78 y A. ALVAREZ DE MORALES: Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid 1974.

en estos tres primeros reinados, hemos podido observar, en los escasos textos narrativos que han llegado hasta nosotros, la - - existencia de un órgano que viene actuando como Consejo Real, llamándole así incluso las propias fuentes, del que desconocemos su composición exacta y que, a tenor de esos textos, actúan meramente como asesor del Rey ante los diversos problemas que le suscitan el regimiento de la comunidad. Se trata de un Consejo, en nuestra opinión, en el que posiblemente quede algún vestigio de la antigua Curia. Los alcaldes de Corte que aparecían en el Consejo de Fernando III no los encontramos en los Consejos de Alfonso X y Sancho IV puesto que, como dijimos, los alcaldes de Corte han quedado ya, sobre todo con Sancho IV, separados de la persona del Rey residiendo en la Chancillería. Predomina en ellos la asistencia de prelados, sin duda alguna letrados, que suplicarían la ausencia de los alcaldes en aquellos casos en los que se requiere conocimientos de técnica jurídica.

En este sentido, en cuanto que hay una abundante asistencia de Prelados, cabría ver aquí una continuación de la Curia altomedieval, pero la total ausencia de representantes de la nobleza y caballeros en los Consejos de estos tres Reyes nos está ya revelando que se ha producido un cambio.

El Rey ha prescindido de la nobleza, siempre incómoda y seguramente ineficaz en una actuación jurídica en sus tareas de gobierno, pero no así de la Iglesia. El prestigio de ésta supone, al ratificar sus decisiones, una garantía de buen gobierno, supone una mayor autoridad y un mayor acatamiento por parte de los súbditos.

La temprana muerte de Sancho IV supuso, en cierta medida, que el enfrentamiento nobleza-monarquía de los últimos años de este reinado se viera sustituido por una pugna entre la nobleza y las ciudades. Estas, aliadas naturales de Sancho IV, - haciendo uso de las Hermandades afianzan posiciones y de hecho controlan al Rey niño y a sus tutores. <sup>(64)</sup>

Dentro de esta política de las ciudades, en 1297, las Cortes de reunen en Cuéllar, y Fernando IV por medio de sus tutores confirma la existencia de "doce omes bonos" que le dieron las villas del Reino de Castilla para que siempre estuvieran con él "por los tercios del año", "para aconsejar e servir a mí e a la Reyna mi madre e al infante don Enrique mio tío e mio tutor, que en fecho dela justicia e de todas las rentas e de todo lo al que me dan los dela tierra e como se ponga en recabdo e se parta en lugar que sea mio seruido e amparamiento dela tierra, e en todas las otras cosas de fecho dela tierra que ouieren de ordenar que sean mio seruicio e a pro e a guardamiento dela tierra, que me place que sean conmigo e que tomen cuenta delo pasado". <sup>(65)</sup>

No sabemos exactamente cuando le fué dado al Rey por parte de las villas de Castilla esta representación de "doce omes bonos", pero al hablar el rey en pretérito ("que me dieron") - nos hace pensar que fué con anterioridad a 1297, fecha en que se

---

(64) Una idea de la situación nos la dan los Cuadernos de Cortes de estos años en los que la Hermandad ejerce el control sobre todos los resortes del Reino (Vid. Cortes de Valladolid 1295, Cuéllar 1297, Valladolid 1299, Burgos y Zamora en 1301, etc.)

(65) Cortes de Cuéllar 1297 (CLC. I, 1, p. 135).

celebran las Cortes de Cuéllar.<sup>(66)</sup> Por otra parte, está claro que estos "omes bonos", que actúan tres cada trimestre, están "para aconsejar" a los tutores no sólo en "fecho delas justicia e de todas las rentas" sino también para cualquier asunto de la tierra.

El texto de las Cortes de Cuéllar sólo se está refiriendo a las "villas del reyno de Castiella". Esto nos lleva a plantearnos forzosamente la cuestión si los restantes Reinos tuvieron alguna representación similar.

Ya vimos como en 1293 Sancho IV había accedido a la petición de los concejos de la Extremadura de llevar siempre consigo caballeros de los obispados de esta región, por ello hemos de suponer que tan sólo dos años después, cuando las ciudades están intentando ejercer el control sobre el Reino con más

---

(66) Posiblemente estos "doce omes bonos" le fueron impuestos al Rey y a sus tutores ya en el primer año del reinado a tenor de lo dispuesto en 1295 en las Cortes de Valladolid: "Otrosí que todos los priuados que andudieron eon el Rey don Sancho nuestro padre et todos los otros de quanto leuaron dela tierra..." (CLC. I, 3, p. 131), estableciéndose en la siguiente petición por parte del Rey "quelos oficiales de nuestra casa sean omes bonos delas uillas de nuestros regnos" (CLC. I, 4, p. 131). La clara contraposición que hace el primer texto entre los "privados" y los "oficiales" nos hace pensar que esos "privados" no son otra cosa que los antiguos consejeros del Rey Sancho. Recuérdese que en la Crónica se les denomina así alguna vez (Crónica de Sancho IV, año 1287, cap. 4, p. 77). Es fácil, por tanto, pensar que al igual que los oficiales de la Corte habían de ser hombres buenos de las villas, con más razón lo habrían de ser los "privados".

razón cabe pensar que continuarían ejerciendo tales funciones los caballeros que representaban a los "omes buenos de las vi-  
llas de Estremadura e de sus pueblos". El problema se nos plantea con León en cuanto que no sabemos si tuvo por estos - años este tipo de representantes en la Corte junto a los tutores, sin embargo hemos de suponer que existieron estos "omes buenos" representando al Reino leonés si tenemos en cuenta el texto de las Cortes de Medina del Campo de 1302 en el que el Rey in-  
siste que tiene por bien de "tomar omnes buenos de Castiella e de Leon e del rregno de Toledo e de la Estremadura que anden conmigo, e mandar les dar buenas soldadas porque puedan vivir en la mi casa onrrada miente" para que controlen las cartas y privilegios desaforados que salieran de la Chancillería<sup>(67)</sup>. Sin duda alguna, los tutores se vieron incomodados por el control que venían ejerciendo estos representantes de las ciudades dando de lado su actuación por lo que ante la insistencia de las Cortes el Rey se ve obligado a tomar de nuevo a estos "omes buenos" representantes de las ciudades.

Cómo valorar la actuación de estos "omes buenos"? Se trata realmente de un auténtico Consejo?. Es una diputación de Cortes?.

La historiografía ha valorado la actuación de estos "omes buenos" de muy distintas formas. Así, MARTINEZ MARINA pien-  
sa que se trataba de "una diputación permanente de caballeros y hombres buenos escogidos de las provincias del reino para -

---

(67) Cortes de Medina del Campo 1302 (CLC. I, 4, pgs. 162-3).

para velar sobre la conducta de los consejeros"<sup>(68)</sup>; por su parte TORREANAZ ve en ellos una "Comisión del estado llano, que desempeña papel de Consejo de la Corona"<sup>(69)</sup>. PISKORSKI piensa que el Consejo Real se transformó, ante los abusos de poder - que se venían cometiendo, en un medio de control llevado a cabo por las Cortes, convocadas, sólo de modo extraordinario, no dudando en calificarlo de una diputación permanente.<sup>(70)</sup> COLMEIRO pensó que se trataba de un consejo de tutores.<sup>(71)</sup>

En nuestra opinión es verdaderamente problemático encuadrar dentro de nuestras actuales categorías jurídicas la actuación de estos doce "omes buenos". Creemos que no se trata, como piensa COLMEIRO, de un consejo de tutores puesto que en los textos aparece claramente que los tutores son la Reina doña Maria de Molina y el infante don Enrique<sup>(72)</sup> y en ningún momento encontramos a este grupo de "omes buenos" actuando como tales.

- 
- (68) MARTINEZ MARINA considera que el Consejo fue reformado y que se estableció esta comisión de las ciudades para controlar la actuación del Consejo (Teoría de las Cortes, t. II, p. 326).
- (69) Los Consejos... p. 129.
- (70) Las Cortes de Castilla... pgs. 177-8. En sentido muy parecido se expresa el profesor GIBERT (El antiguo Consejo... p. 12) quien considera que se trata de una tentativa del Reino a introducirse en el Consejo del Rey.
- (71) De la Constitución y el Gobierno... t. II, p. 244 y también en la introducción a las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, parte primera, p. 188.
- (72) Basta ver los primeros capítulos de la Crónica de Fernando IV.

Tampoco creemos que se trate de una comisión permanente de Cortes porque la naturaleza de esta comisión no coincide en absoluto con la composición tradicional de las Cortes castellanas, compuestas, como es sabido de todos, por tres brazos bien diferenciados, el eclesiástico, el de la nobleza y el de las ciudades<sup>(73)</sup>, ya que estos hombres buenos aparecen representando exclusivamente a las ciudades. Si se tratara de una diputación permanente debemos suponer que tanto el brazo nobiliario como el eclesiástico no habrían renunciado a participar en el gobierno del Reino. Por otra parte, precisamente en estos años se suceden las reuniones de Cortes casi anualmente<sup>(74)</sup> con lo que el carácter de extraordinario que aludía PISKORSKI hay que ponerlo en tela de juicio.

Es igualmente discutible la postura de TORREANAZ al afirmar que esta comisión desempeña el papel de Consejo de la Corona porque, a nuestro entender, el Consejo Real hasta este momento no ha desempeñado nunca una tarea de control sobre la actuación política llevada a cabo por el monarca, sino que, tal como nos lo presentan los escasos datos que de estos reinados hemos podido reunir, tiene una función esencialmente asesora.

Parece más aceptable la interpretación de MARTINEZ MARINA en cuanto que destaca el carácter de órgano de control, pero no sobre los consejeros, como dice el citado autor, sino que el control, desde nuestro punto de vista, lo está ejerciendo

---

(73) Sobre las Cortes puede verse el clásico trabajo de PISKORSKI: Las Cortes de Castilla en el período de transición de la Edad Media a la Moderna 1188-1520, Barcelona 1930; J. VALDEON BARUQUE: Las Cortes de Castilla y las luchas políticas del siglo XV (1419-1430) en A.E.M. 3 (1966), pgs. 293-327; y PEREZ PRENDEZ: Las Cortes de Castilla.

la Hermandad sobre la actuación de los tutores y sobre todo el sistema administrativo y judicial del Reino. Se trata de un control que ejercen las ciudades, aprovechando su fuerza y la difícil coyuntura, encaminado más a la salvaguarda de sus intereses ante las pretensiones nobiliarias, que a la de los intereses del Rey niño.

En este sentido es también muy significativo que aunque el texto de las Cortes de Cuéllar utiliza el verbo "consejar", en ningún momento las fuentes denominan a tales hombres como - consejeros, y ello se debe a que jamás tuvieron calidad de tal, aunque fueran consultados en determinados tipos de asuntos. - Creemos que el texto de las Cortes de Valladolid de 1295 es diá no al respecto. Como se recordará en él se pedían que fueran sustituidos todos los "priuados que andudieron con el Rey don Sancho", salvo "Si con conseio dela Reina donna Maria nuestra madre nos e el infante don Anrrique nuestro tio et los omes bue nos delas villas que nos dieren para ordenar esto fallarmos que algunos destos ofçiales legos bien vsaron de sus oficios, et touier mos por bien que ayan oficios en nuestra casa, quelos ayan"<sup>(75)</sup>. Es decir, si atendemos al texto, que se refiere tanto a los - "priuados" como a los oficiales, los "omes buenos delas villas" participan precisamente aconsejando a los tutores en qué personas han de elegir para consejeros y oficiales de la casa real. Están ejerciendo un control sobre los tutores a todos los niveles.

(74) En Valladolid en 1295, en Cuéllar en 1297, de nuevo en Valladolid en 1298, 1299, en Furgos en 1301.

(75) Cortes de Valladolid 1295 (CLC. I, 3, p. 131).



Ello nos lleva forzosamente a plantearnos que al lado de esta "comisión de control" de las ciudades seguía existiendo el mismo "Consejo privado" que hasta ahora habíamos venido viendo en los reinados anteriores. Y así, por ejemplo, en una contienda suscitada entre el Obispo de Palencia y el concejo de la dicha ciudad en torno al nombramiento de unos alcaldes nombrados por el Obispo, la Reina doña María expresa en la carta abierta remitida al Consejo que "ouemos nuestro acuerdo con aquellos que eran de nuestro consejo"<sup>(76)</sup>. Por tanto, a la vista de estos datos en ningún momento, creemos, se de identificar el "Consejo Real" con la comisión de control que establecen las ciudades; la Reina se sigue valiendo de sus "priuados" para asesorarse en los asuntos conflictivos que se le presentan<sup>(77)</sup> y salvo los textos antes mencionados de las Cortes, no encontramos testimonios documentales ni narrativos que nos permitan descubrir la actuación y la efectividad real de esa comisión de control de los doce "omes buenos".

---

(76) Carta abierta de doña María de Molina de fecha 26 de abril de 1300 en la que ordena el concejo de Palencia que deje usar de sus oficios a los alcaldes nombrados por el Obispo (Archivo de la Catedral de Palencia, Arm. 3, leg. 3, num. 2). De este documento he manejado la transcripción que amablemente me ha permitido consultar J.M. BADENAS ZAMORA, gran conocedor de los archivos palentinos. Véase el registro del mismo en J. San MARTÍN Catálogo del Archivo de la Catedral de Palencia, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, núm. 16 p. 225, Palencia 1956.

(77) "E desde que la Reina esto vio, envió por todos los caballeros de Castilla que viniesen a acorrer al rey su fijo, que le venian a cercar a Valladolid, e ovo su consejo con don Diego e con el maestro de Santiago e con todos los otros que le aconsejasen como se pararia a este fecho E aconsejaronle todos..." (Crónica de Fernando IV, año 1296, cap. 2. p. 104).

Llegado el momento en que Fernando IV adquiere su mayoría de edad, esta comisión de control ya no tiene su razón de ser de modo que queda suprimida, pero no así su Consejo - que sigue participando activamente en el asesoramiento del monarca.<sup>(78)</sup>

Es indiscutible que la actuación del Consejo en estos últimos años del siglo XIII y primeros del XIV está adquiriendo gran importancia. Ello ya se manifiesta de un modo muy claro en las Partidas. Al contrario que el Espéculo, en el que salvo la obligación general que incumbe a todos los naturales del Reino de tener que aconsejar al Rey cuando éste lo solicita<sup>(79)</sup> y el título que dedica a los consejeros de los jueces,<sup>(80)</sup> las Partidas, en diferentes pasajes, nos están mostrando que, lejos de una simple elaboración teórica, existe en el espíritu de la época todo un sentir general de la necesidad de actuar mediante consejo.

A diferencia del Espéculo, las Partidas definen el término consejo como "buen anteueymiento que ome toma sobre las cosas dubdosas porque non pueda caer en yerro"<sup>(81)</sup>, y consideran que tanto el emperador<sup>(82)</sup> como el Rey<sup>(83)</sup> han de acompañarse

(78) "...a la Reina entendiogelo muy bien, e avie acordado muy bien en su poridat con los que eran de su consejo..." (Crónica de Fernando IV, año 1303, cap. 10, p. 126); "E el Rey dijole que avria su acuerdo e que le responderia, e ovo su consejo con el infante don Juan e con don Juan Nuñez..." (Crónica de Fernando IV, año 1303, cap. 10, p. 128); "...que eran omes que los non amaban, e que lo facian todo por su desonra e por su mal e que pues non los llamara el Rey a su consejo..." (Cronica de Fernando IV, año 1303, cap. 10, p. 128); "E el Rey ovo su consejo sobresto..." (Crónica de Fernando IV, año 1306, cap. 13, pgs. 137-9) entre otros.

(79) Espéculo 3, 1, 1.

(80) Espéculo 4, 10, proe. 1 y 2.

(81) Partidas 3, 21, 1.

de buenos consejeros porque "vno de los sesos que ome mejor puede azer, es de aconsejarse sobre todos los fechos, que quiere fazer, ante que los comience".<sup>(84)</sup> Igualmente, las Partidas ya reconocen también cuáles son las condiciones que han de reunir los consejeros del Rey<sup>(85)</sup>, quienes gozan de una situación privilegiada.<sup>(86)</sup>

Los juristas que elaboraron las Partidas están recogiendo una vez más la realidad jurídica castellana de finales del XIII y principios del XIV. Se han encontrado una realidad, unos consejeros "priuados" del Rey que desempeñan un papel muy importante dentro del juego político del Reino y que responden a unas necesidades muy concretas. Todavía no existe el Consejo como órgano perfectamente reglamentado con unas competencias específicas delimitadas, pero sí unos consejeros cuya única y principal función es estrictamente asesora, de los que por otra parte desconocemos su número y la periodicidad de sus reuniones con el monarca.

La temprana muerte de Fernando IV supuso que Castilla se encontrara de nuevo ante la necesidad de otra regencia dada la corta edad del príncipe heredero don Alfonso, con lo que nos encontramos ante una situación casi idéntica a la que se había producido dieciocho años antes a la muerte de Sancho IV.

(82) / Partidas: 2,1,1: "...porque segund natura, el señorío non quiere compañero nin lo ha menester, como quier que en todas guisas conviene, que aya ome buenos, e sabidores que le consejen, e le ayuden".

(83) Partidas 2,9,5: "...Onde si todo ome se deue trabajar, de auer tales consejeros, mucho mas lo deue el Rey fazer, porque del consejo que le dan, si es bueno, viene ende gran pro a el, e gran endereçamiento a su tierra..."

(84) Partidas, 2,9,5,

Las Cortes de Palencia de 1313, al igual que hicieron en su día las de Valladolid de 1295, solicitan que "todos los - priuados e offiçiales que andodieren conel Rey don Ffernando que non anden en casa del Rey don Alffonso e que den cuenta de - - quanto leuaron dela tierra"<sup>(87)</sup>, salvo aquellos que los tutores "con conseio delos caualleros e delos omes buenos delas villas que ssouieren en guarda del Rey ffallaren que alguno destos sseruie ron bien"<sup>(88)</sup>. Sin embargo las Cortes de Palencia ofrecen una novedad con respecto a las Cortes de 1295, se establece que la - crianza del Rey la haga doña Constanza, su madre, junto con - cuatro caballeros fijosdalgo, dos de Castilla y dos de León<sup>(89)</sup>. Además, y en esto se sigue lo que se dispuso en Valladolid, ha brá una comisión formada por di ciseis "caualleros e omes buenos delas villas" distribuidos de forma que cuatro pertenecen al reino de Castilla, cuatro al reino de León, cuatro de las - Extremaduras y cuatro de Andalucía.<sup>(90)</sup>

(85) /... Partidas, 2, 9, 5.

(86) Partidas 7, 30, 2.

(87) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 6, p. 224)

(88) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 6, p. 224).

(89) Cortes de Palencia 1313: "Primeramente que nuestro sen nor el Rey don Alffonso que lo crie la Reyna donna Costança ssua madre e que ssean y quatro cauallero. ffijosdalgo; los dos del rregno de Castiella e los dos del rregno de Leon que sean vasallos del Rey (CLC. I, 1, p. 222).

(90) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 2, p. 222).

Estos veinte caballeros y hombres buenos de las villas es decir, los cuatro caballeros fijosdalgo y los dieciseis de las ciudades serían escogidos por el tutor, el infante don Juan, con acuerdo de las villas, y se ponía como condición que entre ellos no hubiera ninguno que hubiera sido "priuado" del Rey Fernando ni fuera con él en su "casa". Estos caballeros y hombres buenos que son nombrados para que "anden e ssean en guarda del Rey"<sup>(91)</sup>, se distribuirían semestralmente a razón de diez en cada turno.<sup>(92)</sup>

Distinto fue el ordenamiento que dieron también en Palencia los otros tutores del Rey, doña María de Molina y el infante don Pedro a los de su parcialidad, ya que allí establecieron que para que los citados tutores obraran bien y no pudieran hacer mal al Rey ni a los Reinos, les darían "quatro perlados e sseze caualleros e omnes bonos que ssean nuestros consseieros e que sse non pueda ffazer ssin ellos ninguna cosa; e estos perlados e sseze consseieros ssean escogidos quales deuen sseer e non puestos a voluntad".<sup>(93)</sup> Estos dieciseis consejeros, serían cuatro de Castilla, cuatro de León y de Galicia, cuatro de Toledo y de Andalucía y cuatro de las Extremaduras<sup>(94)</sup> de forma que estarían siempre ocho con los tutores con lo que quedaba también establecido un turno semestral.<sup>(95)</sup>

- 
- (91) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 2, p. 222).  
 (92) Es decir, habría semestralmente acompañando siempre al Rey y a su madre, un caballero fijodalgo de Castilla, un caballero fijodalgo de León, dos "caualleros e omnes buenos" del reino de Castilla, dos del reino de León, dos de Extremaduras y dos de Andalucía.  
 (93) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 4, p. 235)  
 (94) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 5, p. 235)  
 (95) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 5, p. 235).

La actuación de los tutores ha quedado totalmente limitada y controlada por estos "consseieros" de las ciudades. En primer lugar, tutores y "consejeros" jurarán que guardaran el servicio del Rey bien y derechamente comprometiéndose a - mantener a los súbditos "en derecho e en justia derecha miente ssin cobdicia e ssin banderia acada vno segund el ffuero que ouieren"<sup>(96)</sup>. Para poder cumplir esto "era mester que nos juren e nos fagan pleyto de omenaie inffantes rricos omes caualleros e omes bonos delas villas que nos ayuden a ello"<sup>(97)</sup>, estableciéndose en el homenaje que quedaban sujetos a la decisión de los tutores y "consejeros".

La intervención de los "consseieros" incumbía también al ámbito de la administración de justicia de forma que los alcaldes de la Cbrte habían de ser nombrados con consentimiento de ellos; ejercen control sobre los oficiales de justicia de cada lugar y los tutores no podfan "perdonar al justia" sin el consentimiento de los consejeros.<sup>(98)</sup>

Quedaban igualmente encargados de velar para que no se pudiera "menguar nin enagenar ninguna cosa delos rregnos nin delos derechos del Rey"<sup>(99)</sup> y de administrar las rentas reales, especialmente para que no se diera en adelante "pecho nin gueno dessafforado".<sup>(100)</sup>

---

(96) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 5, p.235).

(97) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 6, p. 235)

(97) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 7, p.235)

(98) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 7, p.235)

(99) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 8, p.236)

(100) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 9, p.236).

Los tutores se comprometían a convocar cada dos años cortes generales "entre ssant Miguel e todos Ssantos a vn logar conuenible" para someter a control la gestión realizada hasta el momento. Si los tutores no quisieran convocar las cortes, los preladados y "consseieros" convocarían la reunión en nombre del Rey, quedando obligados los tutores a asistir<sup>(101)</sup> hasta el punto en que si alguno de los tutores hubiera cometido algún agravio tenía obligación de enmendarlo so pena de perder la tutoría<sup>(102)</sup>. En tal caso los consseieros ffagan llamar atoda la tierra para ffazar otro tutor".

Finalmente, en caso de fallecimiento de alguno de los tutores, o renunciara alguno de ellos, los consejeros se reunirían en nombre del Rey y convocarían cortes para designar un nuevo tutor.<sup>(103)</sup>

A la vista del Ordenamiento podemos claramente percibir la enorme importancia de estos representantes de las ciudades que prácticamente han quedado equiparados a los propios tutores, es más, en ocasiones parece que están incluso por encima de los tutores.

No nos ha quedado constancia documental de la actuación de estos "consseieros" representantes de los reinos con lo que resulta ciertamente difícil llegar a precisar el alcance -

---

(101) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 10, p. 236)

(102) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 11, p. 237)

(103) Cortes de Palencia 1313 (CLC.I, 11, p. 237).

real de estos ordenamientos de las Cortes de Palencia. Es indiscutible que existe una preocupación por parte de las ciudades, pero esta preocupación no se encamina tanto a un intento de participar en el regimiento de los reinos para conseguir un cambio institucional como a mantener el "status" adquirido hasta ese momento.

Cabe ahora cuestionarnos de nuevo cuál es realmente la naturaleza de este consejo que imponen las ciudades a los tutores en 1313.

Si ya resultaba difícil fijar la naturaleza de la "comisión de control" formada por los doce "omes buenos" que se designaron en las Cortes de 1295, mucho más problemática resulta la de estos "consejeros". En principio, en nuestra opinión, creemos que se ha de rechazar la idea de considerarlos - como miembros del Consejo real o Consejo "privado" que, como hemos visto, hasta ahora ha tenido una continuidad desde el siglo XIII. En este sentido, dado el control que las Cortes establecen sobre el nombramiento de los "priuados"<sup>(104)</sup>, cabe alegar las mismas argumentaciones que dimos en su momento al tratar sobre ese posible "Consejo" de las Cortes de Valladolid. Tampoco creemos que se trate de una diputación permanente de Cortes - por las mismas razones<sup>(105)</sup>. El hecho de que el ordenamiento de las Cortes de Palencia equipare a los "consseieros" con los tutores, hace que forzosamente no podamos equipararlos a los doce "omes buenos" de 1295, quienes tenían unas funciones mucho más

---

(104) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 11, p. 238)

(105) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 2, p. 222).



reducidas, por ello nos inclinamos a pensar, como ya bien señaló el profesor TOMAS Y VALIENTE<sup>(106)</sup>, que se trata mas bien de un Consejo de Regencia, aunque jurídicamente ésta es desempeñada exclusivamente por los tutores.

Sin duda, la puesta práctica de este complicado "Consejo de regencia" debió de acarrear dificultades si nos atenemos a lo dispuesto, tan sólo dos años más tarde, en las Cortes celebradas en Burgos en 1315. Ante las crecientes aspiraciones de la nobleza y la falta de acuerdo entre los tutores, las ciudades de Castilla, León, Toledo y las Extremaduras se reúnen y redactan un cuaderno de "Hermandad" para "defenderse de los tuertos y daños que les causasen los tutores."<sup>(107)</sup>

Por el citado cuaderno de Hermandad se modifica lo dispuesto en las Cortes palentinas de dos años antes, en cuanto que ahora quedan reducidos a doce el número de caballeros y hombres buenos de las ciudades que han de andar con el Rey y con los tutores. De estos doce, seis han de ser de los fijosdalgo y los seis restantes de los caballeros y hombres buenos de las villas.<sup>(108)</sup> Se turnarán semestralmente en dos turnos de seis, y debido a las tensiones que existen entre los tutores, se dispone en el cuaderno que de los seis de cada turno, dos irán con el Rey y la Reina, dos con el infante don Juan y dos con el infante don Pedro<sup>(109)</sup>, pero de forma que de cada uno de estos dos, uno será de los fijosdalgo y otro de los de las villas para que "quando algunas cosas desafforadas ffizieren en la tierra - (los tutores) que aquellos aquien las ffizieren quelo enbien mostrar a estos caualleros e ommes buenos".<sup>(110)</sup>

---

(106) En este mismo sentido ya se pronunció el profesor F. TOMAS VALIENTE en su trabajo La diputación de las Cortes de Castilla en AHDE, 32 (1962), pgs. 347-469, en especial, pgs. 366-7.

Aunque documentalmente no nos consta la actuación de estos caballeros y hombres buenos, por las quejas presentadas en las Cortes de Carrión de 1317, hemos de pensar que en estos dos años al menos algunos de ellos sí acompañaron al Rey y a los tutores según lo dispuesto en el cuaderno de Hermandad de 1315<sup>(111)</sup>. En cualquier manera, ante el incumplimiento parcial de este cuaderno, las ciudades se ven obligadas a reiterar su petición en Carrión.<sup>(112)</sup>

---

(107) /...La diputación de las Cortes de Castilla, citado en nota anterior, pgs. 366-7.

(108) Sobre esta Hermandad véase: SUAREZ FERNANDEZ: Evolución histórica de las Hermandades Castellanas... pgs. 26-8; y ALVAREZ DE MORALES: Las Hermandades expresión del movimiento... pgs. 49-50, ambos ya citados.

(109) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 14. p. 257)

(110) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 14. p. 257)

(111) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 14, p. 257)

(112) Cortes de Carrión 1317: "Otrosy alo que nos pedieron quelos caualleros fijos dalgo et caualleros et omes buenos delas çibdades et villas que fueron antanno dados enlas Cortes de Burgos que andudiesen con el Rey et con nos los tutores, que ouyeron los dineros delas soldadas et non los seruieron, que tornen lo que leuaron desta guisa con el doblo; et esto que sea para aquellos que an aandar con el Rey et connusco, et los que seruieron et los enbiaron demandar et gelos non dieron, que aquellos logares onde los auian de auer et gelos dien con la costa que ffezieron o ffezieren para los coger et rrecabdar" (CLC. I, 42, p. 315).

Las muertes de don Pedro y del Infante don Juan en una campaña en la vega de Granada parece estabilizar la situación, pero la muerte también de María de Molina, pieza clave de la regencia, enturbia de nuevo el horizonte político castellano. Elegido tutor don Felipe, las Cortes de Valladolid de 1322 insisten una vez más para que "anden con el Rey caualleros e ommes bonos delas çibdades e delas villas de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e del Andaluzia".<sup>(113)</sup> En total son veinticuatro caballeros y hombres buenos de las ciudades distribuidos de forma que seis son de Castilla, seis de León, seis de las Extremadura y seis de Andalucía, que se turnarán cuatrimestralmente a razón de ocho por turno (dos de cada región), y a los que se les encomienda la "guarda de nuestro sennor el Rey" y lo que es más importante, aun, "que ssean en oyr e librar todos los fechos que venieren ante el Rey".<sup>(114)</sup>

Creemos que hay que destacar, con respecto a lo establecido en las Cortes de Carrión, ausencia de Fijosdalgos ya que, al igual que se estableciera en Palencia en 1313, nos -

---

(113) Cortes de Carrión 1317: "...Et otrossi que anden con el Rey caualleros delos fijos dalgo e caualleros fijos dalgo e ommes bonnos delos delas çibdades e delas uillas aquellos que entendiermos los tutores que cumpliran para ello, e que guarden al Rey de cada dia et que el cauallero ayo del Rey et los otros caualleros e ommes buenos; que los pongamos y los tutores et que sean y connusco en ponerlos rricos ommes e caualleros e omes buenos delas çibdades e delas uillas aquellos quela hermandad diere para ello" (CLC. I, 1, p. 300).

(114) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 4, p. 338).

encontramos solamente el concurso de los "caualleros e omnes bonos delas çibdades e delas villas". Esto se debe, posiblemente a un giro de la política del infante don Felipe en la que busca el apoyo de las ciudades ante la difícil situación creada a raíz de la muerte de los anteriores tutores.

Aunque el texto de las Cortes de Valladolid, como acabamos de ver, dispone que "sseen en oyr e librar todos los - ffechos que venieren ante el Rey", pensamos que esta frase no ha de ser interpretada como si estos representantes de las ciudades y villas del Reino tengan facultades decisorias al respecto. Es más factible pensar que estos caballeros y hombres buenos conservan el carácter de "Consejo de Regencia" - que supervisa y controla la actuación del tutor en espera de que el Rey adquiriera su mayoría de edad.

Los encontramos, como ya también se dispusiera en Carrión<sup>(115)</sup>, interviniendo en el nombramiento de los oficiales de la Corte y de los Alcaldes que deben andar con los - Merinos Mayores<sup>(116)</sup> así como en los asuntos concernientes a las rentas de las tenencias de los castillos y alcázares del Rey.<sup>(117)</sup>

---

(115) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 4, p. 338)

(116) Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 5, pgs. 302-3).

(117) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 9, y 10, pgs. 339-40)

En todo caso, aunque tampoco hayamos encontrado apoyada documentalmente la actuación de estos caballeros y hombres buenos de las ciudades, su existencia fue efímera, dado que al poco tiempo el Rey Alfonso XI accede a su mayoría de edad, y como nos atestigua su crónica, la primera medida que llevó a cabo fué la de ordenar los oficiales de su casa y tomar con sejeros,<sup>(118)</sup> si bien esta medida no presupone que no los hubiera.

En cuanto a su naturaleza, en nuestra opinión, el Consejo "privado" de Alfonso XI en poco debía diferir del de su padre o del de su abuelo Sancho IV.<sup>(119)</sup> Con respecto a su com posición, la Crónica de Alfonso XI es mucho más elocuente a la hora de expresar quienes pertenecían al Consejo del Rey. Si en 1322, cuando el Rey llega a su mayoría de edad, el Consejo parece estar compuesto por cinco consejeros<sup>(120)</sup> o tal vez más, pese a la preferencia por Garcilaso de la Vega y por Alvar Nuñez, en 1325, esta misma fuente en otro pasaje nos revela que sólo eran tres los consejeros "privados" del Rey<sup>(121)</sup>.

(118) Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 38, pgs. 347-8).

(119) Crónica de Alfonso XI: En el regno avía dos caballeros... Et era uno de Castiella, et decíanle Garcilaso de la Vega; et el otro del regno de Leon, et decíanle Alvar Nuñez de Osorio; et eran amos a dos bien entendidos et bien apercebidos en todos sus fechos... pero por su saber dellos, et por el apercebimiento que ovieron, tomolos (el Rey) para su consejo" (año 1322, cap. 39 pgs. 198-9). En el mismo texto, la Crónica recoge el nombre de otros de sus consejeros: Don Nuño Perez, abad de Santander, que habia sido Chanciller y consejero de María de Molina; Martín Fernandez de Toledo su amo y el Maestre Pero así como el judío Yuzaf de Ecija, a quienes "tomó para en el su consejo"; aunque si bien es verdad, la misma Crónica nos especifica que Garcilaso y Alvar de Nuñez "fueron los más privados del Rey".

(120) Ver texto de la nota anterior.

No existía, pues, un número determinado de consejeros, sino que, por el contrario, este quedaba al arbitrio del Rey. La misma Crónica se hace eco de que eran "muchos" los personajes que pertenecían al Consejo Real<sup>(122)</sup>, aunque esto no era óbice para que el Rey tuviera, como acabamos de ver, una mayor confianza en determinados "privados". Así la Crónica además de Alvar Nuñez, Garcilaso y Yuzaf de Ecija, nos ha dejado testimonio de otros altos oficiales que pertenecían al Consejo real, como es el caso de Juan Martinez de Leyva y Alfonso Jufre de Tenorio<sup>(123)</sup>. Fernan Sánchez de Valladolid<sup>(124)</sup>

---

(121) /...Crónica de Alfonso XI. "La estoria ha contado quel Rey avia dos caballeros del su Consejo, et sus privados de quien él mucho fiaba, et decian al uno Garcilaso, et al otro Alvar Nuñez: et otrosi avia otro Privado Almojarif Judío que decian Don Yuzaf de Ecija; pero el Rey fiaba mas de Alvar Nuñez que de ninguno de los otros" (año 1325, cap. 61, p. 210). La misma Crónica de Alfonso XI, en otro pasaje, nos vuelve a insistir en la preferencia del Rey por alguno de sus consejeros: "En casa de los Reyes acaesció de grand tiempo acá, et acaesce agora, que como quier que el Rey haya muchos del su consejo, pero en algunas cosas fia más de uno o de dos que de los otros. Et acaesció que al tiempo que este Rey don Alfonso partió de la su casa al Conde Alvar Nuñez, puso la mayor fianza de su hacienda en Johan Martinez de Leyva, así como fiaba mas del Conde Alvar Nuñez que de los otros que eran del su consejo". (Año 1331, cap. 104, p. 238).

(122) Ver texto nota anterior.

(123) Crónica de Alfonso XI: Et aqui a estelogar de Fuente Aguinaldo llegó el Rey de Castiella Alfonso Jufre de Tenorio su Almirante mayor de la mar, et venieron y con el Rey avia dado a Joan Martinez de Leyva que fuese Merino mayor de Castiella, et Camarero Mayor, dió al Almirante el oficio de la guarda de su cuerpo, que solia aver Joan Martinez, et mandole que fuese en todas las fablas del su Consejo" (Año 1327, cap. 174 p. 219).

el Maestre Gonzalo Martinez<sup>(125)</sup>, o Martin Fernandez de Portocarrero y Alfonso Fernandez de Coronel<sup>(126)</sup>, entre otros.<sup>(127)</sup>

La historiografía no se ha mostrado unánime a la hora de enjuiciar la naturaleza y caracteres de este Consejo de Alfonso XI. Así el P. BURRIEL considera que este Consejo estuvo dotado de jurisdicción<sup>(128)</sup>; ESCOLANO ARRIETA, por su parte sostiene que el Consejo ya intervenía en los asuntos de gobierno y de justicia<sup>(129)</sup>; otros autores como MENDEZ DE SILVA<sup>(130)</sup> y ALCOCER<sup>(131)</sup> piensan que desde este monarca el consejo conocía de todas las apelaciones procedentes de los restantes órganos jurisdiccionales del Reino. Pero lo cierto es que las fuentes no permiten corroborar ninguna de las posturas de los autores anteriores. A nuestro entender aparece más aceptable la opinión de aquel otro grupo de autores como SEMPERE<sup>(132)</sup>, COLMEIRO<sup>(133)</sup> o DANVILA<sup>(134)</sup> quienes califican -

- 
- (124) /...Crónica de Alfonso XI: "Et envió allá sobre esto a Fernand Sanchez de Valledolit Notario Mayor de Castiella et Chanceller del su sello de la poridat, que era del su Consejo" (Año 1335, cap. 174, p. 285).
- (125) Crónica de Alfonso XI: "Et el Maestro Don Gonzalo Martinez avia gran privanza en la merced del Rey, et fiaba dél mucho; ca todos los fechos se guiaban por el su consejo del solo..." (año 1338, cap. 201, p. 302).
- (126) Crónica de Alfonso XI, año 1331, cap. 104, p. 238)
- (127) Véase las Cortes de Madrid de 1329 (CLC. I, 10, p. 406)
- (128) DE MANUEL: Memorias para la vida... p. 90.
- (129) Práctica del Consejo Real, t. I, p. 3.
- (130) Catálogo Real y Genealógico de España... fol. 108,
- (131) Consejo Real de Castilla... p. 33.
- (132) Historie des cortes d'Espagne, p. 118-9. Este autor hace una distinción entre un viejo Consejo que estaría compuesto por nobles, obispos y consejeros natos, y un

este Consejo de "privado" . El profesor MOXO considera que el Consejo Real tiene dos manifestaciones bien distintas: una de tipo extraordinario, que vendría dada por las circunstancias o por el tema a tratar, y que tendría una composición más amplia, y otras de carácter extraordinario.<sup>(136)</sup> Mucho más recientemente, TORRES SANZ, en su tesis doctoral ya varias veces citada, en base a los datos que nos proporciona la Crónica de Alfonso XI piensa que estos "ya permiten establecer con relativa exactitud la existencia del Consejo Real de Castilla como órgano plenamente individualizado y personalizado dentro del marco de la administración central."<sup>(137)</sup>

La Crónica de Alfonso XI nos hace referencia a dos tipos de "consejos" bien distintos. Por un lado encontramos innumerables pasajes en los que el Rey "ovo su consejo" o bien con los "Ricos-omes et caballeros"<sup>(138)</sup>, o con los "Ricos-omes, et los caballeros et los Cidddanos"<sup>(139)</sup> o con los "Ricos-omes, et los Maestres, et las Ordenes, et los Caballeros et omes fijos-dalgo de las villas"<sup>(140)</sup>, sencillamente, la Crónica se limita a señalar enfáticamente que el Rey tuvo "consejo con los que eran y"<sup>(141)</sup>. No falta tampoco algún pasaje en el que el consejo - lo tiene con "muchos Perlados et todos los Ricos-omes del su regno, et los Maestres de las Ordenes, et todos los Caballeros et Escuderos fijos-dalgo del su señorío, et muchas gentes de cada una de las cibdades, et villas, et logares de los sus regnos."<sup>(142)</sup>

(136) La promoción política y social de los letrados en la Corte de Alfonso XI, ya citado, p. 26.

(137) La administración central castellana... p. 501.

(138) Crónica de Alfonso XI, cap. 57, p. 207.

(139) Crónica de Alfonso XI, cap. 69, p. 215.

(140) Crónica de Alfonso XI, cap. 83, p. 215.

(141) Crónica de Alfonso XI, cap. 100, p. 243.

(142) Crónica de Alfonso XI, cap. 243, p. 319.



Por otro lado, la Crónica distingue muy claramente otro tipo de "Consejo", al que se le denomina de esta forma y no es posible -como en los casos anteriores- identificar con la acción de aconsejar, que indudablemente se trata de un organismo, no sabemos hasta qué punto institucionalizado, pero que está actuando de modo regular en la Corte asesorando al Rey<sup>(144)</sup> al igual que en los reinados anteriores. No creemos, por tanto, que este Consejo se pueda equiparar en ningún momento a estos otros - "consejos" que el Rey solicita de Ricos-omes, caballeros o Maestres de las Ordenes Militares.

Es muy significativo que en todos estos casos en los que el Rey pide consejo a los distintos estamentos del Reino el asunto a consultar versa sobre estrategia o sobre el modo y lugar de empezar una campaña<sup>(145)</sup>, pero nunca, y por lo menos la Crónica así nos lo refleja, sobre cuestiones de gobierno o justicia. Por ello, a nuestro entender, no se debe considerar este asesoramiento ni como un vestigio de la antigua Curia altomedieval, ni como una manifestación, ni siquiera extraordinaria, del Consejo real; se trata más bien de una manifestación de la obligación de los súbditos de aconsejar al monarca cuando éste lo requiere. Es lógico, por otra parte, que ante una situación difícil y desde luego costosa como es la de emprender una campaña militar, el Rey busque apoyo y, por tanto, consejo, en aquellos que ya sea de un modo económico o aportando contingentes de

(144) Además de los pasajes citados en las notas 138, 139, 140, 141, 142 y 143 pueden verse en la misma Crónica de Alfonso XI los capítulos 113, p. 247; cap. 117, pg 250; cap. 119, p. 252; cap. 125, p. 257; cap. 137, p. 263; cap. 154, p. 273, cap. 159, p. 276, cap. 182, p. 290; cap. 195, pgs 296-7, entre otros.

(145) Véanse los textos de la nota anterior.

tropas, han decidido tomar parte en la campaña al lado del Monarca, o por su reconocida competencia militar, como es el caso de la nobleza.

Al lado de estas reuniones, que ni siquiera deberíamos calificar de "consejo", sí existe, como hemos visto, un auténtico Consejo privado, perfectamente diferenciado<sup>(146)</sup>, compuesto por aquellas personas que gozaban de la confianza del Rey y que actúa como un órgano que tiene ya entidad propia.

No hemos encontrado en este período ningún testimonio documental o narrativo que nos muestre al Consejo actuando de un modo independiente con respecto a la persona del Rey ya sea ejerciendo funciones jurisdiccionales, como pensaba el P. BURRIEL o de gobierno como sostuvo ESCOLANO ARRIETA. No vemos tampoco en este reinado, como pretende TORRES SANZ<sup>(147)</sup>, la introducción de miembros "técnico-políticos" en el Consejo en base al nombramiento del Almojarife de Yuzaf de Ecija como consejero cuando la Crónica es clara al respecto: "Et porque desde luengos tiempos era acostumbrado en Castiella que avia en las casas de los Reyes Almojarifes judios"<sup>(148)</sup>. Al desconocer la composición exacta del dicho Consejo privado no podemos precisar

---

(146) Crónica de Alfonso XI: "Et el Rey ovo grand pesar con estas nuevas: et mandó llamar algunos de los ricos omes que eran allí con él, et los del su consejo..." (Cap. 125, p. 257). Vemos claramente que hay una contraposición entre los ricos hombres a los que se les convoca ante la muerte del primogénito y heredero el infante don Fernando y los miembros de su Consejo privado.

(147) La administración central... p. 503.

(148) Crónica de Alfonso XI, cap. 39, p. 199.

hasta qué punto pudieron ser introducidos técnicos dentro del Consejo, como pudieran ser los juristas<sup>(149)</sup>, pero dados los innumerables pasajes que la Crónica nos ofrece al respecto, y si tenemos en cuenta la separación material del Rey de sus órganos de administración de justicia, se nos hace difícil pensar en la posibilidad de unos consejeros permanentes que actuaran en calidad de técnicos en Derecho dentro del Consejo privado; en todo caso, esto no es óbice para que el Rey ante cualquier cuestión pudiera reclamar la presencia de técnicos en Derecho, máxime si tenemos en cuenta que la composición del Consejo se hallaba sometida a la voluntad del Monarca.

El reinado de Pedro I no supone ningún cambio en lo que respecta al Consejo privado. Encontramos en su Crónica numerosas referencias a los "privados" de su Consejo; esta misma denominación de "privados", y no la de "consejeros" viene a reforzar los argumentos que hasta el momento hemos venido aportando para caracterizar el Consejo de estos reinados<sup>(150)</sup>, aunque si bien es verdad que la Crónica en un pasaje denomina

(149) TORRES SANZ (La administración central... p. 503) sostiene también la introducción en el Consejo privado de juristas profesionales en base a un texto de las Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 10, p. 406), pero desde mi punto de vista no está tan clara la pertenencia de los alcaldes de Corte al Consejo Real. El texto hace referencia a un Ordenamiento que el Rey dió en Madina del Campo fechado a 26 de octubre de 1328 encaminado a reprimir los asesinatos y robos en la casa y en el rastro del Rey. El texto dice que tal ordenamiento se dió con "consseio" del Maestre de Santiago, del prior de la Orden del Hospital, del Merino Mayor de Castilla, del Mayordomo Mayor, del Obispo de Oviedo, del Obispo de Cartagena y de los alcaldes del Rey. En primer lugar, creemos que el que este ordenamiento se haya dado con "consseio" de estos personajes, no supone que todos ellos pertenezcan al Consejo, en segundo lugar, se trata

al Juan Alfonso de Alburquerque como "muy privado del Rey e su consejero"<sup>(151)</sup>, no obstante, a lo largo de los distintos pasajes de la Crónica, se puede observar sin ningún género de dudas que cuando Lopez de Ayala utiliza el sustantivo "privados" lo está haciendo referido a los miembros del Consejo privado del Rey.

Mantiene, pues, el Consejo la misma naturaleza esencialmente asesora del Rey, quien libremente nombra a sus consejeros<sup>(152)</sup>, y del que incluso, en un momento dado, conocemos su composición (seis consejeros), número que quedaba al arbitrio del Rey<sup>(153)</sup>. Los Consejeros, a quienes desde las Cortes de Alcalá de 1348 se le había otorgado una protección especial<sup>(154)</sup>, se les

---

(149) /...de un ordenamiento que pudiéramos llamar de "urgencia" que se da "entretanto que sse ayuntan las cortes es decir que se ha promulgado sin el concurso de éstas - de ahí el que venga ratificado no sólo por oficiales del Rey sino también por Prelados y como se trata de un ordenamiento de justicia, es perfectamente lógico que hayan participado en su elaboración los alcaldes de Corte, quienes, como vimos en su momento, a la sazón tenían la - competencia de librar los pleitos del rastro.

(150) Crónica de Pedro I, año 1351, cap. 12, p. 417; año 1352 cap. 21, p. 436, año 1354, cap. 21, p. 449; año 1354, cap. 32, p. 445.

(151) Crónica de Pedro I, año 1353, cap. 16m p. 434.

(152) Crónica de Pedro I: "E que esto non lo debieran tener ellos por maravaiilla; ca siempre fuera en el mundo los Reyes e Principes aver privados a aquellos que por bien tovieron, e fue su merced" (año 1354, cap. 32, p. 455).

(153) Crónica de Pedro I: "E finalmente finco que fuese la primera fabla delante de los del consejo del Rey que y estaban entoncos, los quales, eran estos: Don Gomez Manrique, Arzobispo de Santiago, e Juan Ferrandez de Henestrosa, Camarero Mayor del Rey, e don Diego Garcia de Padilla,

concede ahora también el privilegio de exención de pechos concejiles.<sup>(155)</sup>

La guerra civil que culminó con el cambio de dinastía no alteró, en principio, el cuadro institucional del Reino castellano-leonés. Como hemos podido comprobar a lo largo de las páginas del presente estudio, en lo que respecta a la Administración de justicia, el advenimiento de los Trastámara no supone una ruptura con el sistema anterior ni mucho menos, como generalmente se ha venido afirmando. Las transformaciones de todo el aparato administrativo castellano-leonés parten del reinado de Alfonso XI en el que la recepción del Derecho Romano-canónico triunfa plenamente y con ella se produce la renovación de gran parte de viejos esquemas institucionales<sup>(156)</sup>. Esta transformación prosiguió su evolución en el reinado de Pedro I quien lleva a su máxima expresión estos principios del absolutismo monárquico procedentes del Derecho Común, pero las reacciones nobiliarias ante esta potenciación del poder real y, finalmente, la guerra civil afectaron de un modo decisivo a la evolución de las nuevas instituciones. Instituciones que, como decimos, no son creadas "ex novo" por Enrique II, sino que, por el contrario, permanecen intactas unas veces, como es el caso de las alcaldías de corte, u otras son remodeladas ante las nuevas necesidades, como es el caso de la Audiencia.

(153) /...Maestre de Calatrava, e Gutier Ferrandez de Toledo, Repostero Mayor del Rey, e Juan Alfonso de Benavides, Justicia Mayor de la su casa del Rey, e Diego Perez Sarmiento Adelantado Mayor de Castilla" (año 1359, cap. 2, p. 487).

(154) Ordenamiento de Alcalá.

(155) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 14. p. 56).

(156) Veáanse los trabajos de S. MOXO: El auge de la burocracia castellana en la Corte de Alfonso XI y la Promoción política y social de los letrados en la Corte de Alfonso XI, ambos ya citados.

No hemos encontrado documentación que avalen las afirmaciones del profesor SUAREZ FERNANDEZ sobre la creación del Consejo Real por Enrique II <sup>(157)</sup>. El primer Trastámara al iniciar la guerra civil y proclamarse Rey de Castilla y León efectivamente ha de crear a su lado todo un aparato administrativo del que carece, pero como ya tuvimos ocasión de ver al tratar de la Audiencia, todo ese aparato es idéntico al de su hermano, el Rey legítimo, Pedro I. Por tanto, Enrique II, se provee de un Consejo privado tal como el que hasta ahora han venido teniendo sus antecesores.

La corta Crónica de este monarca apenas nos ha dejado - testimonios de este Consejo privado al que le vamos tomando - parte muy activa en el pleito dadas sus connotaciones políticas que presentó la Condesa de Alanzón sobre las tierras de Lara y Vizcaya <sup>(158)</sup>, hasta el punto que el Rey, una vez tomada su decisión, se la comunica de nuevo al Consejo pues pensaba "que sería tal que ellos ternían que era buena" <sup>(159)</sup>. La Crónica sólo nos atestigua que el Consejo estaba compuesto por "Señores e Perlados e Caballeros" por lo que tampoco podemos llegar a conocer su composición o si tenía encomendada algún otro tipo de atribuciones. <sup>(160)</sup>

(157) Historia de España dirigida por Menéndez Pidal.

(158) Crónica de Enrique II: "E luego el Rey mostró a los Señores e Perlados e Caballeros del su consejo la enformación que el dicho caballero le avia dado de parte de la Condesa de Alanzon, e demandoles consejo como debia facer. E ovo el consejo del Rey sobre esta razón muchos acuerdos... E despues que todos los del Consejo ovieron dicho cada uno su opinión de lo que les parescia, el Rey dixo que el queria dar al Caballero de la Condesa de Alanzon la respuesta que entendia que sería razonable; empero queria facersela luego saber a los de su Consejo, e que pensaba sería tal que ellos ternían

Pero ciertamente quizás lo más destacable de este reinado con respecto al Consejo es el intento por parte de las ciudades de formar parte del citado organismo. Desde que Alfonso XI - obtuvo su mayoría de edad en 1322, las ciudades no habían manifestado esta preocupación, pero ahora en 1367, en plena guerra civil "todo hay que decirlo-, los procuradores de las Cortes de Burgos solicitan que el Rey mande tomar "doze omes bonos que ffuesen del nuestro Consejo, los dos omes bonos que ffuesen del rregnado de Castiella, e los otros dos del rregnado de Leon, e otros dos de tierra de Gallizia, e los otros dos del rregnado de Toledo, e los otros dos delas Estremaduras, e los otros del Andaluzia". (161)

El intento por parte de las ciudades de tomar parte en - el Consejo para que los "vssos e las costumbres e ffueros de las çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos puedan ser guardados e mantenidos" (162), se explica ante la situación de guerra que atraviesa el Reino. Por otra parte las ciudades recelan de la alianza Monarquía-nobleza que ha llevado a cabo Enrique II para deponer a su hermano Pedro. Lógicamente, no decantada

---

(158) /...que era buena... (año 1373, cap. II, pgs. 20-1).

(159) Ver texto en la nota anterior.

(160) VALDEON afirma, en cambio que en tiempos de Enrique II, las atribuciones del Consejo eran bastantes numerosas "aunque no muy específicas", sin que por ello aporte la sustentación de esta afirmación. Vid. Enrique II de Castilla La guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371) Valladolid 1966, p. 358.

(161) Cortes de Burgos 1367 (CLC. II, 6, p. 148).

(162) Cortes de Burgos 1367 (CLC. II, 6, p. 148).

la contienda todavía en esos momentos, el primer Trastámara accede a la petición de las ciudades, e incluso designa a cada uno de ellos un salario anual de ocho mil maravedis<sup>(163)</sup>. Lo que ocurre, como tantas veces, es que el Rey incumple lo dispuesto y dos años más tarde, en las Cortes de Toro de 1369, los procuradores le recuerdan al Rey que esa medida no se había llevado a cabo<sup>(164)</sup>, a lo que Enrique contesta accediendo y que le "plaze" y lo tiene por bien. Pero la realidad fué, una vez más, que la petición quedó sin cumplir y por ello en 1371 piden de nuevo al Rey que tome y escoja "delos cibdadanos nuestros naturales delas çibdades e villas e lugares delos nuestros rregnos omes buenos entendidos e pertenesçientes que fuesen del nuestro consejo, e para andodiesen connusco con los otros del nuestro sennorio para nos aconsejar en todos los nuestros consejos".<sup>(165)</sup>

Esta solicitud de las ciudades no deben ser equiparada a las que se han producido anteriormente. En la minoría de Fernando IV se establece una "comisión de control" que, como vimos, aconsejaba a los tutores incluso sobre el nombramiento de sus "privados". Durante la minoría de Alfonso XI los "consseieros" actuaba "de facto" como un Consejo de Regencia (recuérdese que es el momento de mayor auge en las ciudades). Pero ahora, la petición de las ciudades se encamina a que representantes

---

(163) Cortes de Burgos 1367 (CLC. II, 6, pgs. 148-9).

(164) Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 74, pg. 183)

(165) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 13, p. 208)



de cada uno de los reinos y regiones queden integrados en el Consejo privado del Rey; en un primer momento por la delicada situación de la guerra, después, finalizada la contienda, por el peligro que representa para las ciudades las contínuas concesio nes y mercedes con que se ve incrementado el poder de la nobleza. Por ello, las ciudades intentan por todos los medios tomar parte activa en el Consejo, aunque en estos años siempre sin éxito. <sup>(166)</sup>

En los primeros años del reinado de Juan I no encontramos tampoco alteración en el esquema que hasta ahora hemos venido trazando. Los procuradores de las primeras Cortes de su reinado, posiblemente tratando de aprovechar la coyuntura - de esos momentos de euforia que caracterizan a los monarcas recién entronizados, piden por merced que tome "omes bonos - de las çibdades e uillas e lugares de los nuestros rregonos, pa- ra que con los del nuestro consejo nos consejasen lo que cumple a nuestro seruïçio"<sup>(167)</sup>, petición a la que accede como ya hiciera varias veces antes su padre.

Pero lo cierto es que no podemos precisar, en base a la documentación consultada, si Juan I llegó efectivamente a nombrar esos "omes bonos" de las ciudades y villas del Reino para

---

(166) En la última petición que los procuradores hacen al Rey en este sentido en las Cortes de Toro de 1371, Enrique II les contesta con una sorprendente evasiva: "e que dado que auemos ya oydores dela nuestra abdiencia e alcalles delas prouinçias delos nuestros rregnos, que son alcalles enla nuestra corte, es la nuestra merçed que estos sean del nuestro conseio" (CLC. II, 13, p. 208).

(167) Cortes de Burgos 1379 (CLC. II, 4, p. 287).

que actuaran como consejeros en su Consejo privado. Nada nos hace pensar que esta medida se llevara a cabo. Por su parte la Crónica de Juan I tampoco permite que podamos inclinarnos a pensar que se diera entrada a los representantes de las ciudades en el Consejo<sup>(168)</sup>. Estos habrían de esperar todavía al desastre de Aljubarrota para ver cumplidas sus pretensiones.

Los primeros años del reinado de Juan I no han podido empezar con mejores auspicios, no obstante el occidente europeo se halla convulsionado por un lado por el recrudecimiento de la guerra de los cien años, por otro lado el cisma de occidente. Una especial coyuntura permitió a Juan I aspirar a la realización de un viejo ideal: la unión con Portugal. En el plano interno, Juan I llevó a cabo una formidable centralización política (no sin oposición de la nobleza) plenamente consciente de los peligros que suponía la dispersión de los bienes de la corona.<sup>(169)</sup>

Tras el duro revés que recibieron las tropas castellanas en Aljubarrota, no sólo quedó confirmada definitivamente la independencia de Portugal, sino que también la posición de Juan I frente a las restantes fuerzas del reino se vió en una difícil situación; fué por ello, como tendremos ocasión de ver en las

(168) Crónica de Juan I: "E por quanto el Conde don Alfonso era y en la Corte, el Rey mando llamar un dia por su Camarero al dicho Conde e a Pero Manrique, e estando presentes los de su Consejo... (año 1380, cap. 4, p. 68). Véanse también año 1383, cap. 10, p. 85; año 1385, cap. 4, p. 93; cap. 5, p. 94.

(169) Sobre el reinado de Juan I véase el reciente trabajo de L. SUAREZ FERNANDEZ: Historia del reinado de Juan I de Castilla, ya varias veces citado.

páginas siguientes, por lo que finalmente el Rey hubo de acceder a la entrada de las ciudades en su Consejo privado. Pero esta intención de dar paso a las pretensiones ciudadanas fueron previstas ya en parte por Juan I, quien encontrándose muy enfermo en plena campaña con Portugal casi un mes antes de la fatídica batalla al redactar testamento y establecer en él un Consejo de Regencia con participación de representantes de las ciudades<sup>(170)</sup>.

Juan I dispone que en tanto el infante don Enrique no cumpla los quince años, el Reino, en caso de su muerte, quedará regido por seis "Tutores o Regidores"<sup>(171)</sup> y "porque siempre fué é es nuestra voluntad de nos facer todas las cosas en quanto podemos porque los nuestros Regnos sean mejor regidos e gobernados, de lo qual la principal cosa que es más necesaria de aver para ello gran Consejo e bueno, en el qual Consejo es necesario aver de toda gente, especialmente de aquellos a quienes atañe la carga e provecho del bien comunal del Regno", ordena que al regimiento de los Tutores y regidores antes mencionados, "que esten con ellos algunos cibdadanos de esta cibdades que siguen: conviene a saber, de la cibdad de Burgos un Ome bueno, é de Toledo otro, e de Leon otro e de Sevilla otro, e de

(170) El testamento de Juan I puede verse en la Crónica de Enrique III, año 1392, cap. 6, en especial, véase pgs. 188-90.

(171) Crónica de Enrique III. Testamento de Juan I: "Primera mente que hayan estos que sigue el regimiento del regno, conviene a saber, Don Alfonso, Marqués de Villena, nuestro Condestable, e Don Pedro, Arzobispo de Toledo, e Don Juan Arzobispo de Santiago, e Don Gonzalo Nuñez de Guzman, Maestre de Calatrava, e Don Juan Alfonso Conde de Niebla, e Juan Furtado de Mendoza, nuestro Alférez Mayor..." (cap. 6, p. 188).

Córdoba otro, e de Murcia otro, los quales seis cibdadanos mandamos e ordenamos que estén siempre con los dichos Tutores e Regidores en todos sus consejos, en tal manera que los dichos Tutores e Regidores non puedan facer nin ordenar cosa alguna del estado del Regno sin consejo e voluntad de los dichos cibdadanos". (172)

El testamento regulan también la forma en que han de ser elegidos estos Omes Buenos de cada una de las ciudades antes mencionadas<sup>(173)</sup>, que han de ser obedecidos, que se ha de llevar un registro en el que "escriban todas las cosas e negocios del Regno que pasaren en el tiempo que ellos rigieren porque puedan dar cuenta al dicho Infante", así como se prevé también quienes han de sustituir a cada uno de los miembros del Consejo de Regencia en caso de fallecimiento y el salario de cada uno de los miembros.<sup>(174)</sup>

Como interpretar este acceso de los representantes de las ciudades?. En primer lugar, y creo que la Crónica no deja dudas al respecto, Juan I está constituyendo un Consejo de Regencia que sólo actuará en caso de que el muriera y hasta que el Infante don Enrique alcanzara la edad de quince años. Desde nuestro punto de vista, esta medida no supone una novedad ni mucho menos; baste recordar la minoría de Alfonso XI y en ella, no "de iure" pero sí "de facto", nos encontramos actuando a unos "consejeros" como auténtico tutores del Monarca. Si a la de por sí situación conflictiva que acarrea una minoría

(172) Crónica de Enrique III. Testamento de Juan I, año 1392 cap. 6, pgs. 188-9.

(173) Crónica de Enrique III. Testamento de Juan I, año 1392, cap. 6, p. 189.

(174) Crónica de Enrique III. Testamento de Juan I, año 1392, cap. 6, p. 189.

añadimos la situación de guerra en que se encontraba Castilla en esos momentos -el rey redacta testamento en plena campaña-, es fácil comprender como Juan I, que está llevando a cabo una política tendente a reducir el poder nobiliario, ve en las ciudades el apoyo suficiente para mantener la situación hasta la mayoría de edad de su hijo Enrique. Ciertamente la única novedad con respecto a las anteriores minorías está en que por vez primera es el Rey, y no las ciudades haciendo valer su fuerza, el que da paso a la entrada de las mismas en la Regencia porque "es necesario aver de toda gente, especialmente de aquellos a quienes atañe la carta e provecho del bien comunal del regno".

Pero las circunstancias llevaron a Juan I a dar entrada a las ciudades en el "Consejo" antes de lo previsto. Las Cortes de Valladolid de 1385 recogen uno de los momentos más aciagos por los que atravesó la monarquía castellana a lo largo del siglo XIV<sup>(175)</sup>. En las citadas Cortes, Juan I ordena un Consejo "en el qual continuada mente andouiesen conusco en quanto nos estouiesemos en guerra e estouiesemos en nuestro rregno, o lo mas çerca dellos que ser pudiese, el qual consejo fuese de doze personas"<sup>(176)</sup>. Estas doce personas quedaban distribuidas a razón de cuatro por cada estado: cuatro prelados, cuatro caballeros y cuatro ciudadanos.<sup>(177)</sup>

---

(175) Véase las Cortes de Valladolid de 1385 (CLC. II, Ley única, pgs 329-335).

(176) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 334)

(177) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, pgs. 332-3).

Las razones que movieron al Rey a ordenar este Consejo la expresa el propio Juan I en las citadas Cortes: En primer lugar los "fechos de la guerra", ahora mucho más recrudescida, que le impedían "oyr e librar todos los negocios del rregno". En segundo lugar, ante la recominación que las Cortes le hicieron de que actuaba por sí solo ("por nuestra cabeça e syn consejo"), el Rey quiere mostrar que no es así y para ello designa a tales personas. En tercer lugar, también ante las quejas del incremento de los impuestos, para que todos los del Reino, "vean clara mente que anos pesa de acreçentar los dichos pechos, e que nuestra voluntad es de non tomar mas delo neçesario". Y finalmente la "prinzipal rrazon", es la enfermedad del Rey, "e sy ouiesemos de oyr e librar por nos mesmo todos los que a nos vienen e rresponder atodas las petiçiones que nos fazen, seria cossa muy contraria ala nuestra salud".<sup>(178)</sup>

A estas cuatro razones el Rey añade otras: "la muchedumbre delos negocios" por lo que no podía el Rey librar tal como el hubiera deseado que "cunple anuestro seruicio, e adescargo de nuestra conçiencia, e a prouecho communal de todos los delos nuestros rregnos", y -añade el Rey- "porque sabemos que asy se usa en otros muchos rregnos e esto fizo el santo Moysen".<sup>(179)</sup>

La Ordenanza de Valladolid no es muy explícita a la hora de señalar las competencias de este nuevo Consejo. En principio a estos doce hombres les es encomendado librar "todos los fechos del rregno, saluo las cosas que deuen ser libradas por la

(178) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, pgs. 33-4)

(179) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 334).

nuestra abdiencia, e otrosy las cosas que nos rreseruamos para nos"<sup>(180)</sup>. A la luz de este texto quedan, pues, excluidos de las competencias del Consejo todos los asuntos de justicia, y por ellos debemos entender los pleitos entre partes, que pertenecen a la jurisdicción de la Audiencia. Igualmente quedan excluidos aquellos que se reserva el Rey: nombramientos de los oficios de su Casa y de la Audiencia, así como los de las casas de los infantes; los asuntos relativos a los nombramientos de las tenencias, adelantamientos, alcaldías y alguazilazgos "que non son de fuero", igualmente de los merinos de las ciudades y de las villas; se reserva el Rey también poner corregidores y jueces así como escribanos de las ciudades; son también asuntos reservados los relativos a "presentaciones de nuestras iglesias" y los asuntos que podríamos denominar de "gracia" ("otrosy tierras e graçias e merçedes e limosnas y perdon delos omiçia nos")<sup>(181)</sup>. Por tanto, a "sensu contrario", todas aquellas materias que no quedan incluidas en las anteriormente citadas son competencias de este nuevo Consejo. Sin embargo, aún en los asuntos que la Ordenanza reserva al monarca, éste las hará "con consejo delos sobre dichos que nos ordenamos para este consejo".<sup>(182)</sup>

---

(180) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II. p. 333)

(181) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333)

(182) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333).

Por primera vez nos encontramos un Consejo que actúa por sí solo, es decir, sin necesidad de que tenga que intervenir el Rey, dado que las "cartas que se ouieren de dar sobre las - dichas cosas que ordenara el dicho consejo por el poder que nos le dimos, que sean libradas delos nombres de çiertos dellos" y "selladas del nuestro sello dela poridat o del mayor".<sup>(183)</sup> Hasta ahora los "consejos" sean de la naturaleza que fueren, habían actuado exclusivamente como órganos asesores del monarca o de los tutores en su caso, pero en la Ordenanza de 1385 parece que se le otorgan a este nuevo Consejo facultades decisorias en aquellos asuntos que quedan bajo sus competencias y a las que se le otorga el mismo valor que una decisión real desde el momento en que van corroboradas y selladas con los sellos reales.

A la hora de caracterizar, pues, este Consejo de 1385, nos encontramos que se trata de un órgano colegiado de representación estamental (cuatro miembros por cada uno de los estamentos del Reino) y que tiene facultades decisorias en aquellas competencias que le han sido asignadas. Cabe entonces cuestionarnos si este "Consejo" es realmente la institucionalización del Consejo Real o si, por el contrario, se trata de un órgano creado "ex novo" en estas Cortes de 1385.

Ya vimos al principio de este capítulo como toda una serie de autores han venido afirmando que este Consejo creado por Juan I

---

(183) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333)



en Valladolid es el origen del Consejo Real de Castilla, sólomente TORRES SANZ ha sido el único que ha negado dicho carácter al Consejo creado en 1385 en su reciente tesis doctoral ya tantas veces citada<sup>(184)</sup>. Efectivamente, coincidimos con el citado autor a la hora de plantear la naturaleza de este nuevo Consejo creado por Juan I. Y decimos "nuevo" porque se trata de un órgano que hasta el momento no tenía precedentes en el Reino castellano-leonés si nos atenemos a las notas características que acabamos de apuntar. Además el propio Juan I en la exposición de motivos que hace en dichas Cortes para justificar esta nueva institución, así mismo lo expresa: "e tienpo puede ser que algunos paresçeran cosa nueva".<sup>(185)</sup>

Supone una novedad en cuanto a su composición estamental, aunque ésta se había alguna vez ensayado en las regencias, con respecto a los "Consejos privados" de los reyes anteriores; supone una novedad en cuanto a que se le asignan unas competencias, quizás hoy para nosotros no muy bien delimitadas pero que sin duda para sus componentes en el siglo XIV serían diáfanas; supone también novedad su capacidad decisoria con independencia del monarca; supone, finalmente, una novedad en cuanto que queda constituido como el órgano supremo de administración del Reino en el que se libran "todos los fechos del regno", con lo que se le ha dado también un carácter "burocrático" dado que la "muchedumbre delos negoçios" impedian al Rey "oyr e librar por nos mesmo todos los que a nos vienen".

---

(184) La Administración central castellana... pgs. 515 y ss.

(185) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333).

Si admitimos, en base a estas argumentaciones, que se trata de un nuevo Consejo, forzosamente hemos de cuestionarnos si este Consejo desplazó al antiguo Consejo privado o si éste continuó ejerciendo sus funciones asesoras al lado del Consejo creado en Valladolid.

El texto de la Ordenanza parece claro al respecto al disponer Juan I que todos aquellos asuntos que le han sido reservados para él, los resolverá "con consejo delos sobre dichos", es decir, los doce consejeros de nueva creación, pero si "estos conusco non estouieren, nos lo entendemos fazer conlos otros de nuestro consejo que con nos andouieren"<sup>(186)</sup>. Sin lugar a dudas, estos del "nuestro consejo que con nos andouieren", a mi modo de ver, no pueden ser otros que los componentes del Consejo privado del Rey, con lo que éste órgano mantiene intacta su vigencia, e incluso, como dice el propio texto, en caso de que los componentes del otro Consejo no se hallen en presencia del Rey, éste se asesorará de los componentes de su Consejo privado.

Hemos de suponer que en el "Consejo privado" se mantendrían como hasta el momento hemos venido señalando, aquellas personas en quien el Rey tiene depositada su confianza y que actúan, con independencia de la influencia que cada uno de ellos pudiera ejercer sobre el Rey, como meros asesores del monarca, sin serles atribuidas ningún otro tipo de competencias.<sup>(187)</sup>

(186) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333)

(187) En este mismo sentido también se expresa SEMPERE (Historia des Cortes ... p. 123) para quien el antiguo Consejo subsiste con sus consejeros natos. También TORRES SANZ (La administración central... p. 517) mantiene esta diferenciación entre el antiguo Consejo real y el creado en 1385.

Mas difícil resulta calificar la naturaleza de este nuevo Consejo<sup>(188)</sup> suscitado por la grave situación por la que está atravesando el Reino ante las adversidades de la guerra; por ello, coincido con - - TORRES SANZ al valorar este órgano atendiendo a la representación estamental que comportaba, por lo que casi pudiera considerarse como una auténtica diputación permanente de Cortes que el Rey casi - se ve obligado a aceptar dadas las circunstancias<sup>(189)</sup>. No obstante choca, si atendemos al estado ciudadano, que sus representantes no han sido elegidos por "prouinçias", así como que los restantes miembros no han sido puestos "por dinidades"<sup>(190)</sup>. Esto parece que, en

---

(188) El profesor SUAREZ FERNANDEZ, ve en este Consejo un doble aspecto, ya que dada su composición, las ciudades veían asegurada su presencia en él de un modo permanente. Simultáneamente el Consejo es un medio eficaz de oponerse a la nobleza, máxime cuando se da entrada a los juristas imbuidos de los principios absolutistas del Derecho-Romano-Canónico (Vid. Juan I, Rey de Castilla ... pgs. 88 y 125; Nobleza y Monarquía... p. 34 y más recientemente Historia del reinado de Juan I de Castilla... p

(189) Aunque por el tono de la Ordenanza parece que el Consejo ha sido creación del Rey por su propia iniciativa, si nos detenemos a analizar el texto detenidamente podemos observar que las Cortes deben de haber recriminado duramente al Rey aunque los reproches no hayan sido recogidos en el cuaderno. En primer lugar ya es muy significativo que la Ordenanza aparezca una vez finalizado el cuaderno de peticiones de las Cortes (CLC. II, p. 329) y en su encabezamiento se expresa claramente que es un "escrito de rrespuesta" en el que se está respondiendo "alas peticiones generales que nos pedistes". En segundo lugar, dentro del mismo texto, Juan I al razonar los motivos por los que ha decidido llevar a cabo la creación del dicho Consejo, está en ocasiones contestando a los reproches que sin duda le han sido hechos. Así, por ejemplo, al contestar "que de nos se dize que fazemos las cosas por nuestra cabeça e syn consejo, lo qual no es asy segund que vos demostramos" o en otro pasaje "por que dizen que vos echamos mas pechos en el rregno de quanto es menester para los nuestros menesteres".

principio, irían en contra de una diputación de Cortes en la que lógicamente estaría representado cada uno de los Reinos. Sin embargo, el que, como acabamos de decir<sup>(191)</sup> desconozcamos exactamente en qué terminos se dirigieron los procuradores de las Cortes de Valladolid al Rey, nos impide llegar a pronunciarnos definitivamente en uno u otro sentido, seguramente, ante la gravedad de las circunstancias, se hayan inclinado por escoger a personas de capacidad reconocida sin atender a su dignidad provincial. Por otra parte, parece que viene a confirmar la hipótesis de que pudiera tratarse de una diputación de Cortes el que estas doce personas tenían que dar "buena cuenta" al Rey "e a los nuestros rreynos", es decir a las Cortes de su gestión<sup>(192)</sup>, es decir, se hallaban sometidas a un control, por ello en último caso, nos inclinaríamos por pensar que se trata de un órgano dependiente de las Cortes del Reino.

Otro problema que nos suscita este nuevo Consejo es el relativo al modelo del que parece haberse inspirado Juan I para su creación. Aparte de la larga alusión bíblica justificativa del gobierno - por consejo, el Rey especifica que, además de las razones antes -

---

(190) /...Cortes de Valladolid 1385: "Otrosy commo quier que - agora pensarán algunos que estos doze que nos ponemos, quelos ponemos por dinidades o por prouincias, sepan todos que nos non los damos por dinidades nin por prouinçias, nin es nuestra voluntad delo fazer assy, mas ponemos los agora por que entendemos que cunpla asy anuestro seruicio e aproue cho delos nuestros rreynos, e que son tales que daran buena cuenta a nos e a los nuestros rreynos delo queles encomendamos". (CLC. II, p. 335).

(191) Ver nota 189

(192) Ver texto de la nota 190.

expuestas, otra de las causas por la que se decidió a "fazer e ordenar" dicho Consejo es porque "asy se vsa en otros muchos reinos".<sup>(193)</sup> No podemos precisar con exactitud cuáles son esos reinos en los que habria un Consejo de similares características. Tampoco hay al respecto una opinión uniforme pues si bien el profesor BENEYTO piensa que se trata de Inglaterra,<sup>(194)</sup> TORREANAZ<sup>(195)</sup> y el profesor GIBERT<sup>(196)</sup> se inclinan por pensar que se trataba de Francia,<sup>(197)</sup> pero lo cierto es que la hablar Juan I se está refiriendo no a un sólo Reino sino a varios, con lo que la hipótesis de que se trate de un sólo Reino es más dudosa. Posiblemente el Rey no estaba pensando en un Reino en concreto sino que, al igual que la cita bíblica, lo que se están buscando es el mayor número de argumentos posibles para justificar esta decisión y resaltar las ventajas del gobierno por consejo.

La documentación no nos ha permitido constatar la actuación de este Consejo instaurado en las Cortes de 1385, pero parece que en principio sí llegó a tener una efectividad práctica ya que tan sólo un año más tarde nos lo encontramos tomando parte en las Cortes de Segovia de 1386, en las que Juan I expresa que las peticiones de los procuradores fueron vistas "con algunos de nuestro consejo".<sup>(198)</sup>

(193) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 334)

(194) Historia de la Administración... pgs. 250-1.

(195) Los Consejos... pgs. 142-3.

(196) El Antiguo Consejo... p. 15.

(197) El profesor BENEYTO se inclina por pensar en la influencia inglesa en base a las relaciones establecidas por el duque de Lancaster pero dada la situación bélica del Reino, del que Francia es aliado, sería más lógico pensar en una influencia francesa como ya apuntaba TORREANAZ y más recientemente el profesor GIBERT quien piensa que a su vez Francia había tomado el modelo de Flandes. Pero lo cierto es que en estos momentos no hay un Consejo de representación estamental en Francia, ya que el Consejo Real francés sólo estuvo momentáneamente controlado por los Estados Generales en 1356 (vid. OLIVIER MARTIN: Histoire du Droit Francaise, pgs. 366-7)

e incluso, se les dota, como a la familia real y otros grandes del Reino, de protección especial<sup>(199)</sup>. Sin embargo llama mucho la atención que un órgano de tal importancia, en el que se han de ventilar "todos los fechos del rregno" haya pasado desapercibido en la documentación y en las fuentes narrativas de la época. La cuestión se plantea desde el momento en que el Consejo privado como hemos tenido ocasión de ver, no quedó disuelto a raíz de la constitución de este nuevo Consejo de representación estamental con lo que podía ser factible identificar los consejeros a los que se están refiriendo las Cortes de Segovia con los consejeros del Consejo privado o del monarca. Ciertamente las fuentes no nos permiten identificarlos con unos o con otros, pero el dato que nos proporcionan las Cortes de Briviesca de 1387 en cuanto que se le pide al Rey que lleve consigo "el Consejo que ordenamos en Valladolid"<sup>(200)</sup>, nos está revelando que tal Consejo se llegó a constituir aunque el Rey no lo llevara siempre consigo y su actuación en las citadas Cortes de 1387 se hace incuestionable.<sup>(201)</sup>

Las circunstancias bajo las que se convocan las Cortes de Briviesca son bien distintas que las de dos años antes en Valladolid. En primer lugar, el fin de las hostilidades daba un respiro a la crisis, aunque el Rey debía afrontar ante las Cortes las fuertes compensaciones económicas que le habían sido ofrecidas al pretendiente, el Duque de Lancaster.

(198) Cortes de Segovia 1386 (CLC. II, pream. p. 337)

(199) Cortes de Segovia 1386 (CLC. II, 27, p. 349)

(200) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 331)

(201) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4 y 9, pgs. 370 y 372)

En lo que respecta al Consejo, los procuradores han planteado en su petición tres puntos: "el primero que nos pongamos -dice el Rey- en rregla por quelas cosas que fizieremos sean de grand fruto e de poco afan; el segundo que trayamos conusco el consejo que ordenamos en Valladolid, pero que no esten los grandes ommes, por que podamos corregir al que alguna cosa non deuida fiziere; el tercero que demos rregla al dicho nuestro consejo delas cosas que han de librar"<sup>(202)</sup>. Los procuradores están denunciando claramente el mal funcionamiento del Consejo creado dos años antes, o, incluso, su disolución.

Juan I responde a las distintas peticiones. En primer lugar, dispone "tener quatro ommes que sean buenos e dicretos e letrados, delos quales los dos anden continuada mente con nos, e que estos quatro tengan este oficio en nuestra casa"<sup>(203)</sup>. El cometido de estos cuatro "ommes buenos, dicretos e letrados" viene especificado en la respuesta del Rey: "que rresçiban todas las petiçiones e cartas que anos venieren". Recibidas éstas, se encargarían de distribuirlas, las de justicia serían enviadas a la Audiencia "saluo sy fuere querella de agrauio de alguna injustiça, que fuere fecha enla nuestra abdiencia" porque es razonable que si hubiera agravio -dice el Rey- "lo castigemos"<sup>(204)</sup>. Por tanto, se percibe ya una evolución que tiende a convertir al Consejo en un órgano burocrático de tramitación de expedientes al lado de sus viejas atribuciones de asesoramiento político y discrecional.

---

(202) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381)

(203) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381)

(204) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381)

Las cartas y peticiones que pertenecían al libramiento del Rey debían ser entregadas a los escribanos reales y las restantes cartas referentes a "pagamientos de tierras o de libramientos de sueldo o cosa que pertenezca al libramiento de dineros - de cosas que sean ordenadas, o de oficios de villas que vagen, o de escriuanos, o cartas de sacas, que estas todas vayan anuestro consejo".<sup>(205)</sup>

En primer problema que nos suscita la respuesta de Juan I a los procuradores de Briviesca se cierne en torno a esos - "quatro omnes" buenos, discretos y letrados. Son realmente consejeros como se ha venido afirmando?. En este sentido se han pronunciado SEMPERE<sup>(206)</sup> y más recientemente L. SUAREZ<sup>(207)</sup> y TORRES SANZ<sup>(208)</sup>, pero lo cierto es que no hay ningún dato que nos pueda hacer pensar que estos cuatro hombres buenos - pertenezcan al Consejo. Parece más bien, como opina TORREANA<sup>(209)</sup> que desempeñan el oficio de "meros secretarios", si tenemos en cuenta que la única función que parece que les es encomendada por la ordenanza es la de distribuir las cartas y peticiones. Posiblemente ha sido otro texto de las mismas Cortes el que ha llevado a los autores anteriormente citados a identificar a estos hombres buenos, discretos y letrados como consejeros. En otra de las respuestas de Juan I, el rey contesta que tiene por bien de llevar siempre consigo "perlados commo caualleros e letrados e otros omnes de buenos entendimientos, aquellos que nos entendieremos que cumplen a seruicio de Dios e nuestro e aprouecho de nuestros rregnos"<sup>(210)</sup>. Pero lo cierto es que tal como aparecen

(205) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381)

(206) Historia del Derecho... pgs. 425,-6.

(207) Juan I, Rey de Castilla, pgs. 125-6 y en su Historia del reinado de Juan I... p. 338.



en el citado texto su función es estrictamente la de repartir los asuntos y si tuvieron alguna otra la desconocemos.

Como se recordará, en las Cortes de Valladolid, no se habían elegido los miembros del nuevo Consejo con arreglo a ninguna dignidad o circunscripción territorial, sino que, por el contrario, había quedado al parecer a discrecionalidad del Rey posiblemente atendiendo a más a sus condiciones personales de aptitud para el desempeño de tal oficio. Ahora, en Briviesca, en ningún momento se hace mención al número de consejeros, y no podemos asegurar, aunque lo que se está pidiendo es que se organice el Consejo creado en Valladolid, que seguirían siendo doce<sup>(210)</sup>. Es cierto que el texto comentado no hace, como se hace en el de Valladolid<sup>(212)</sup>, expresa mención a "quatro çibdadanos", sino que emplea una frase mucho más difusa: "e letrados e otros omnes de buenos entendimientos", es quizás por ello, por lo que se ha querido ver una identificación entre los "omes buenos e dicretos e letrados" y estos otros letrados que actúan como consejeros. Pero además hay otro dato, a mi entender, que es totalmente revelador al respecto. Si nos fijamos, las Cortes de Briviesca disponen que de estos cuatro "ommes buenos", dos han de andar continuamente con el Rey qué ocurre entonces con los otros dos? Por el texto no parece que se trate de un turno; sencillamente, creemos, que los otros dos "ommes buenos" acompañan al Consejo

(208) /...La administración central... p. 521.

(209) Los Consejos... t. I, p. 143.

(210) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 7, p. 382)

(211) Las Cortes dan a entender que son muchos mas: "Otrosy por quelos del nuestro Consejo son muchos".

(212) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 332).

para realizar en él las mismas funciones, es decir, repartir las cartas y peticiones que ante él (recuérdese que hay asuntos que se libran exclusivamente por el Consejo) son presentadas. Tal vez tuvieron alguna otra atribución pero no la podemos precisar a la luz de las fuentes.

En cuanto a que si realmente fueron sustituidos los miembros de las ciudades no ya por estos cuatro "ommes buenos" si no por otros letrados en general, ciertamente parece que cuesta mucho creer que los representantes de las ciudades en el Consejo hayan sido por una reacción por parte de las ciudades, máxime si tenemos en cuenta el enorme subsidio que acaban de votar en favor del Rey <sup>(213)</sup>. Efectivamente, creemos que se está produciendo una "tecnificación" del Consejo dando entrada a los letrados, pero posiblemente dentro de esa amplia frase que utiliza Juan I ("letrados e otros ommes de buenos entendimientos") para referirse a los componentes del Consejo, implícitamente están esos ciudadanos. Por otra parte, como veremos a continuación, sería paradójico que las ciudades, que precisamente acababan de pedir la exclusión de los "grandes ommes" del Consejo, sean ellas las que se ven sustituidas de la composición del Consejo. Ello nos obliga a pensar que, al menos en Briviesca, los representantes de las ciudades no fueron excluidos radicalmente del Consejo, sino que fueron desplazados paulatinamente por los letrados, quines a sus conocimientos técnicos añadian la condición de ser firmes defensores del poder real. Debemos tener presente que por lo general los letrados son fundamentalmente eclesiásticos o del estado llano. En este sentido las ciudades podrian

(213) Véase SUAREZ FERNANDEZ: Historia del reinado de Juan I... pgs. 283 y ss.

ver representados sus intereses frente a los nobiliarios.

Respecto al segundo punto que las ciudades habían pedido er caminado a que el Rey llevara consigo siempre el Consejo de 1385 Juan I contesta que cumple a su servicio. La actuación del Consejo resultaba indiscutiblemente incómoda para el Rey, quien encontraba muy mermadas sus facultades de gobierno; por ello no es de extrañar que Juan I si no llegó a disolver el Consejo constituido en Valladolid, dada la difícil situación por la que seguía atravesando el Reino, a tenor de la petición de las ciudades sí parece que al menos dió de lado su actuación y continuó realizando sus funciones sin el concurso del Consejo. Para evitar estas intromisión del Monarca en aquellos asuntos que le habían sido vedados en las Cortes de Valladolid de 1385, es para lo que se designan precisamente esos cuatro "ommes buenos, dicretos e letrados" encargados de distribuir las cartas y peticiones que se presentaban en la corte y que ahora serían canalizados según su materia a la Audiencia, al Consejo o al despacho personal del Rey.

No accedió, en cambio, Juan I a la petición de que retirara del dicho Consejo a los "grandes omnes". Esta petición de las ciudades ha sido valorada por la historiografía de muy distintas formas<sup>(214)</sup>, pero lo cierto es que la única explicación, desde

---

(214) Véase, por ejemplo SEMPERE, quien considera que Juan I no se atrevió a excluir definitivamente a la nobleza del Consejo, pero que a cambio nombró cuatro letrados que servirán de contrapeso a los tres estados. (Historia del Derecho español... p. 425) Opinión distinta es la de TORREA NAZ, quien cree que se está tratando de restaurar el régimen anterior, concluyendo que "la planta acordada en 1285 no subsistió puntualmente, o porque la hiciesen impracticable los continuos viajes de Juan I, o porque este reivindicase la prerrogativa de escoger más libremente sus asesores y delegados" (Los Consejos... pgs. 144-5)

nuestra perspectiva, radica en el juego político de las ciudades en estas Cortes de Briviesca, quienes son perfectamente conscientes de su fuerza e intentan, una vez más, verse libradas de la presión nobiliaria, manifestada ahora en el órgano de gobierno más alto del Reino.

En Briviesca quedan ya especificadas de una manera más taxativa las competencias y modo de actuar del Consejo.

Sin entrar ahora a fondo en la delimitación de sus competencias, sobre las que volveremos más adelante, sí podemos adelantar que se establecen tres grandes grupos de asuntos. Unos que libra el Rey "sin Consejo"<sup>(215)</sup>; otro tipo de asuntos son librados por el Rey, previa consulta al Consejo, de forma que para que tenga valor lo dispuesto por el monarca, la carta ha de ir firmada "alo menos de dos o tres delos del nuestro consejo"<sup>(216)</sup>. Finalmente, otro grupo, el más importante, que el Consejo libra independientemente sin necesidad de consultar la opinión del Rey.<sup>(217)</sup>

Al Consejo le vemos actuar también asesorando al Rey en el nombramiento de Adelantados, jueces, alcaldes, merinos, regidores<sup>(218)</sup>. Igualmente, como vimos al tratar de la Audiencia, presentaba el Consejo una de las ternas de la que el Rey escogía la persona idónea para cubrir el oficio de oidor que estuviera vacante<sup>(219)</sup>. Interviene en el repartimiento de lanzas entre los gran-

(215) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 14, p. 383)

(216) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 14, p. 383)

(217) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 15, pgs. 383-4)

(218) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 35, p. 390)

(219) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 34, p. 390).

des del Reino<sup>(220)</sup> y en la asignación de las "merçedes e rraçiones e quitaciones e mantenimientos" de la casa real<sup>(221)</sup>. Todo ello no hace otra cosa que revelarnos la importancia que ha adquirido el Consejo convirtiéndose en el órgano a través del cual queda canalizado prácticamente todas las designaciones de altas autoridades del Reino.

La autoridad del Consejo viene implícitamente recogida en las Ordenanzas desde el momento en que Juan I dispone "quelos del nuestro consejo trayan vn sello con que sellen las cartas que libraren"<sup>(222)</sup>. Desconocemos, porque en todas las copias conservadas de este ordenamiento falta, si el Rey llegó a dotar al Consejo de un sello propio o si, por el contrario, éste simplemente cedió su sello mayor o el de la "poridat". Nos inclinamos por pensar que se le otorgó al Consejo un sello propio, ya que el sello mayor era custodiado en la Chancillería y éstase encontraba materialmente separada de la persona del Rey y, por consiguiente, del Consejo. En cuanto al sello de la poridat suponemos que quedaría para aquellos asuntos que correspondían ser librados por el Rey. En todo caso, de no habersele dotado al Consejo de un Sello, es más factible, dada la proximidad, que el Consejo utilizara el sello de la poridat.

Además, dispone el mismo ordenamiento, que todas aquellas cartas que correspondían ser libradas por el Consejo siempre y cuando "fueren firmadas alo menos de tres nombres dellos

---

(220) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 41, pgs. 392-4)  
 (221) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 41, pgs. 392-5)  
 (222) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 8, p. 382).

(los consejeros) e del nombre de vn escriuano de nuestra camara" tuvieran el mismo valor, dice Juan I, "assy commo sy fueren firmadas de nuestro nombre"<sup>(223)</sup>, de forma que aquel que "pu<sub>u</sub> siere en dubda e non quisiere obedesçer qual quier delas cartas sobre dichas, que sea traydo preso ala nuestra corte, por que nos sepamos por quela non quiso cumplir, e le mandemos dar la pena quela nuestra merçed ffuere"<sup>(224)</sup>. De esta forma, los actos del Consejo quedaban equiparados a los propios actos del Rey; el Consejo actuaba como si se tratara de la misma persona que el Rey, característica que, como veremos, constituirá una de las noras esenciales del Consejo Real de Castilla.

La Ordenanza regula también en parte el funcionamiento - del Consejo. Parece que los consejeros actuarían por turnos dado que "son muchos", pero lo cierto es que el texto no está muy claro al respecto.<sup>(225)</sup> En Briviesca no se hace alusión al número de miembros del Consejo, pero si tenemos en cuenta que está pidiendo la reorganización del Consejo creado en Valla<sub>u</sub> dolid dos años antes, es posible, como dijimos, que siguieran siendo doce los consejeros. De cualquier modo, desconocemos la duración de los turnos, si los había, y, en su caso, cuántos y de qué forma quedaban distribuidos los consejeros.

Los consejeros tenían que acudir al "palaçio", en donde se reunía el Consejo, todas las mañanas a la hora de "prima" y si era necesario acudir por la tarde, lo harían a la hora de "bisperas".<sup>(226)</sup>

---

(223) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 15, pgs. 383-4)  
 (224) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 16, p. 384)  
 (225) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 8, p. 382)  
 (226) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 9, p. 382)

Los acuerdos se tomaban por mayoría de los miembros que estuvieren presentes "e aquellos por quien se determinare el consejo libren las cartas de su nonbre, e los que fueren de contraria opinión, que pongan en ellas sus nombres"<sup>(227)</sup> To- dos los acuerdos con los votos favorables y en contra quedarían recogidos en un libro de registro.<sup>(228)</sup>

Se estableció el orden en que se debían votar los acuerdos, de forma que hablaban "primera mente los menores e despues los medianos e despues los mayores, por quelos menores no tomen verguença delos medyanos, nin los medianos delos mayores".<sup>(229)</sup>

La principal dificultad que nos encontramos a la hora de valorar la Ordenanza de 1387 estriba en determinar si ésta supone una continuidad con respecto a lo dispuesto en Valladolid en 1385 o si, por el contrario, el cambio experimentado en Briviesca ha sido tal que no sea posible establecer un entronque entre ambas ordenanzas.

A nuestro entender, la Ordenanza de Briviesca de 1387 no ha supuesto una ruptura con el Consejo creado en 1385. Los procuradores son diáfanos al respecto cuando piden al Rey que lleve consigo el "consejo que ordenamos en Valladolid", al que hay que dar una "rregla" para mejor desempeño "delas cosas que

---

(227) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 11, pgs. 382-3).  
 (228) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 12, pgs. 383(.  
 (229) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 13, p. 383)

han de librar"<sup>(230)</sup>. Y, efectivamente, en Briviesca, Juan I dispone una regulación más detallada de las competencias y actuaciones del Consejo como acabamos de ver.

Pero la Ordenanza de Briviesca, creemos, supone algo más. En primer lugar, en contra de lo que se ha venido afirmando, en 1387, desde nuestro punto de vista, no han sido sustituidos comple-tamente los representantes de las ciudades por los letrados. El Consejo sigue teniendo una representación estamental aunque no sepamos en qué medida, dado que desconocemos el número de consejeros. Es verdaderamente impensable que las ciudades, conscientes de fuerza, quienes acaban de votar uno de los subsi-dios mayores que se han concedido a un monarca y que incluso piden que sean excluidos los "grandes omnes" del Consejo, hayan sido totalmente excluidas del Consejo. Por otra parte si nos ponemos a analizar entre la ordenanzas de 1385 y la de 1387, podemos fácilmente comprobar como aquellos asuntos que habían quedado en Valladolid como reservadas para el libramiento del monarca, en Briviesca han sido reducidos mucho más, fundamenta-lmente en lo que respecta a los oficios de justicia (adelantados, jueces, alcaldes, merinos, alguaciles), cuyo nombramiento, según lo dispuesto en Briviesca, ha de ser, a partir de ese momento, con acuerdo del Consejo. Recuérdese que también en Bri-viesca los procuradores han conseguido "quelos fueros ualederos e leyes e ordenamientos que non fueron rreuocados por otros, non sean periudicados synon por ordenamientos fechos en Cortes, maguer en las cartas ouiese las mayores firmezas que pudiesen

---

(230) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381).



ser puestas"<sup>(231)</sup>. Todo ello no hace otra cosa que indicarnos cuál era la situación de las ciudades en 1387.

A la vista de estos datos, creemos que hay una continuidad entre el Consejo creado en Valladolid en 1385 y la Ordenanza de 1387. Esta desarrolla, matiza y completa la anterior, si bien podemos señalar como novedad la inclusión de letrados en el seno del mismo; no podemos precisar su número, pero en ningún caso debemos ver la inclusión de los letrados como un sustitutivo de los representantes de las ciudades<sup>(231bis)</sup> quienes, como dijimos, para nosotros continúan presentes en 1387. Qué ha ocurrido entonces? Fundamentalmente dos cosas.

En primer lugar, el Consejo privado del Rey que, como vimos se mantenía aun en 1385, posiblemente ha desaparecido - porque Juan I lógicamente ha hecho miembros del Consejo creado en Valladolid a sus "privados" y a sus hombres de confianza. Como se recordará el Rey había elegido los doce miembros del Consejo no por dignidades ni por "prouinçias", es decir, no les habían sido impuestos por las Cortes. Tras un primer momento de rechazo de este Consejo, ante la insistencia por los procuradores de Briviesca el Rey accede a llevar consigo al Consejo creado en 1385 y para ello, es de suponer, que nombrará afines a su política. Este es el temor de las ciudades al pedir que sean excluidos los "grandes omnes" del Consejo, petición que Juan I no concede. El Rey encuentra muy mermadas sus primitivas atribuciones que ahora, en su mayor parte, han de hacerse de

---

(231) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 9, p. 372)

(231.bis) Hay que tener en cuenta que si las ciudades quieren una representación por "ciudades" o "por provincias" se pueden crear problemas internos a la hora de señalar que ciudades pueden nombrar consejeros. En cambio si la designación es de Letrados de la clase ciudadana es mas facil escoger al mejor sin rivalidades locales de ningún tipo.

acuerdo con el Consejo, por tanto, el modo de llevar a cabo su política sin dificultades es nombrando consejeros a aquellos en los que tiene más confianza ya que en ningún momento se le ha impuesto al Rey por las Cortes quienes son los que ha de nombrar como consejeros.

En segundo lugar, quedaba todavía por solventar el problema de los representantes de las ciudades. El Rey, basándose en la libre elección de sus consejeros, comienza a sustituir paulatinamente a estos ciudadanos por letrados. El Consejo, al regular prácticamente toda la vida del Reino, salvo los asuntos de justicia que eran de competencia de la Audiencia<sup>(232)</sup>, se ha visto envuelto en un proceso de burocratización con lo que se ha hecho necesaria la presencia de "técnicos" o letrados en su seno. Estos, imbuidos del espíritu del Derecho Romano-Canónico, favorecen a todas luces la política centralista y fortalecedora del poder real, con lo que el Consejo, que había nacido como un medio de control, ha quedado convertido en un instrumento en manos del Rey para llevar a cabo su política. Esta es una de las razones que explica el afán por parte de las facciones nobiliarias de hacerse con el control del Consejo porque, en definitiva, era el control del Reino.<sup>(233)</sup>

---

(232) Luego veremos como el Consejo intervendrá, en menos-cabo de la jurisdicción de la Audiencia, en asuntos de justicia.

(233) Este interés por parte de la nobleza de controlar el Consejo se manifiesta claramente en los reinados de Juan II y Enrique IV, como tendremos ocasión de ver.

En Segovia, dos años más tarde, en 1389, Juan I dicta una nueva ordenanza para el Consejo.<sup>(234)</sup> La Ordenanza es, ciertamente, muy breve y viene a complementar la dictada en Briviesca dos años antes.

Se establece, en primer lugar, "que todas las Petiziones de cualquier manera, que sean dadas a los Doctores Gonzalo Gomez, e Tel García, e a qualquier dellos, a los quales manda, que las tomen e las den por la Ordenanza que les el ha dado"<sup>(235)</sup>. Estos dos doctores deberán enviar "todas las Petiziones de gracia e merced" al Chanciller del sello de la poridad para que éste se las muestre al Rey de forma que el monarca "las vea, e responda a ellas lo que la su merced fuer"<sup>(236)</sup>. Las restantes peticiones las llevarán los dichos doctores al Consejo para que "libre dellas aquellas que entendiere que deven librar e embien las otras a la su Audiencia e a los alcalles, e a los Contadores."<sup>(237)</sup>

Se dispone igualmente que todos aquellos que trajesen "cartas mensajeras" para el Rey, las entreguen al citado Chanciller de la poridad para que se las muestre también al Rey.<sup>(238)</sup>

---

(234) Esta Ordenanza, que sepamos, se halla inédita. La conocieron MARTINEZ MARINA (*Teoría de las Cortes...* t. II pgs. 375-6) y SEMPERE (*Histoire des Cortes...* pgs. 191-2). Recientemente sólo ha hecho referencia a ella el profesor L. SUAREZ FERNANDEZ, vid. *Juan I, Rey de Castilla...* pgs. 126- y 289 e *Historia del Reinado de Juan I...* p. 339. Una copia de esta Ordenanza se encuentra en la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Ms. 25, fols. 251-252 v, por la que citamos. Se trata de una copia del siglo XVIII, no literal, por lo que no podemos precisar si contiene exactamente lo dispuesto por Juan I.

(235) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 251 v.

(236) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 251 v-r

(237) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 251 r.

(238) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 251r.

Se regula también la consulta "por quanto sera necesario a los del dicho Consejo dele facer relación de algunas cosas, de las que ellos entendieren quel cumple que el vea, ordenó que le vengan a le facer relacion en uno de los tiempos del día, o despues quel aya oydo misa fasta hora de comer, o despues quel haya dormido fasta que que quiera cenar".<sup>(239)</sup> Para que los libramientos sean mas ciertos y se hagan mejor y más rápidamente, ordena "que todos los del dicho Consejo, e los dichos Doctores, e todos los escriuanos de Camara se ayuntan en su palacio en aquel lugar onde el ordeno en los tiempos del dia, es a saber en un tiempo entre missa, e tercia e en otro tiempo a hora de visperas, para ver e facer las cosas de suso contenidas".<sup>(240)</sup>

Varios aspectos merecen ser destacados de la presente Ordenanza. En primer lugar se ha producido una diferenciación en el modo de librar los asuntos denominados de "gracia e merced" que, como hemos podido comprobar, - corresponden al libramiento exclusivo del Rey, aunque desconozcamos cuáles son exactamente estos asuntos. En este sentido habrá que poner en relación las competencias que se reservaba el Rey en 1385 con las de Briviesca de 1387, pero sobre ello volveremos más adelante al tratar de las competencias. Ahora sólo nos interesa destacar que existe una clara diferenciación entre los asuntos de "gracia y merced", de conocimiento exclusivo del Rey, de justicia -

---

(239) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 252v

(240) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 252 v-r.

entre partes, cuya competencia corresponde a la Audiencia si son civiles y a los alcaldes si son criminales, y unos asuntos de Hacienda de competencia privativa de los Contadores. A cada uno de estos grupos de asuntos les corresponderá una forma distinta de librarse, por vía de cámara, por expediente o por vía de procedimiento.

Con relación a 1387 no encontramos con la novedad de que aquellos cuatro "ommes buenos" discretos y letrados a quienes se encomendó la distribución de las cartas y peticiones que llegaran ante el Rey, son sustituidos - por dos doctores, Gonzalo Gómez y Tel García, quienes son encargados de tal cometido; y al igual que dijimos entonces respecto a los cuatro "ommes buenos", éstos doctores no forman parte del Consejo, como prueba el texto de la Ordenanza al diferenciarlos del resto de los Consejeros<sup>(241)</sup>.

Finalmente, queda regulada la consulta del Consejo con el Monarca, estableciéndose los horarios y lugar en donde ha de reunirse el Consejo.

Al año siguiente Juan I concede otra Ordenanza - para que las cosas en el Consejo "anden con mejor regla -

---

(241) "...que todos los del dicho Consejo, e los dichos Doctores, e todos los mis escriuanos de Cámara..." (Santa Cruz, Ms. 25, fol. 252 v).

e orden" <sup>(242)</sup>. A partir de esta Ordenanza se puede decir que el Consejo Real de Castilla ha quedado constituido tal como se desarrollará en el siglo XV. Hasta ahora el Consejo ha venido un tanto impuesto al Rey por las circunstancias, pero desde 1390 el esfuerzo institucionalizador de Juan I ha quedado plamado en las Cortes de Guadalajara de esa misma fecha, en las que la Audiencia aparece como el órgano supremo de la justicia del Reino, y en esta nueva Ordenanza con la que se dota al Consejo.

Son muchos los aspectos que regula esta nueva Ordenanza, sobre todo aquellos referentes a las competencias del Consejo, de las que nos ocuparemos más detalladamente en su momento, pero creemos oportuno destacar, en primer lugar, la designación del Obispo de Segovia para que "tenga principalmente carga de todas las cosas que se han de librar en nuestro Conceio". <sup>(243)</sup>

La principal función del Obispo dentro del Consejo es la de intervenir "quando el Consejo non fuer - concorde" y "sepa repetir e declarar las razones en - efecto e escoger parte e fortificarla con las mejores -

---

(242) Esta Ordenanza fué conocida también por MARTINEZ MARIN (Tèoría de las Cortes... t. II, pgs. 250-4), SEMPERE (Historia del Derecho... pgs. 426-7) y por TORREZNAZ (Los Consejos... t. I, pgs. 221-3) - quien cita a los dos anteriores. Igualmente hace referencia a ella SUAREZ FERNANDEZ en su Juan I Rey de Castilla... pgs. 126-7 y más recientemente en Historia del Reinado de Juan I... pgs. 339-40. Una copia literal de estas Ordenanzas se encuentra en la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Ms. 25, fols. 285-v 296r, por la que citamos.

(243) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 285v.

razones que pudier, assi con las dichas como con otras razones que mejor entendier que se puedan decir" <sup>(244)</sup>.  
 Una vez tomado el acuerdo y se mandaren dar cartas sobre el dicho negocio, no podrá ser "librada carta alguna por algunos de los del Consejo fasta que primeramente la tal carta sea vista e examinada por el dicho obispo, e el que la firme de su nombre primeramente, é que sea tenudo de dar cuenta e recabdo si va en forma deuida segunt la determinación del Consejo." <sup>(245)</sup>

Incumbe también al Prelado llamar a los refrendarios antes que comience la sesión del Consejo para ver sobre qué materias versa la reunión del Consejo, porque si se va a tratar "cosas grandes que deuen ser secretas" han de quedarse sólo en la dicha Cámara los consejeros, los refrendarios y un escribano <sup>(246)</sup>, pero si se han de librar peticiones u otras cuestiones no secretas, pueden quedarse hasta tres o cuatro escribanos. <sup>(247)</sup>

---

(244) Santa Cruz, Ms. 25, fols 288-r.

(245) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 288 r.

(246) "Otrosi ordenamos, que el dicho obispo lla, e a los refrendarios e vea sobre que ha de aver Consejo, e si vier que el Consejo ha de ser sobre mensagerias o sobre cosas grandes que deuen ser secretas que fagan que no queden en la dicha Camara saluo los del dicho Consejo e los refrendarios e el escriuano, que ha de tener la Carga de escribir los conseios, pero si ouieren dever Petiziones o otras cosas, que non sean secretas que queden ay fasta tres o quatro escriuanos e normas" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 286 r-287v).

(247) Ver texto de la nota anterior.

El Obispo ha de cuidar también el buen orden dela sesión del Consejo para que los que "fablaren non repiten las razones que fueren dichas saluo que escoian parte todavia annadiendo lo que les paresciere o diciendo otra razon nueva" <sup>(248)</sup>, pero "si el negozio fuer ligero, que non aya enel grant dificultat, fablen aquellos que el dicho Obispo dijier e desque el entendier que an asaz dicho, pregunte si estan todos por aquella conclusión o si quisiere tener alguno el contrario". <sup>(249)</sup>

Si la petición que se presenta ante el Consejo fuere objeto de "contiendas e entendieren los del Consejo que cumple llamas las partes", será el Obispo - quien las mandará llamar "para se informar bien delo segunt entendier que cumple".

El libramiento de las peticiones en el Consejo se realiza según éstas llegaren ante él "salvo si el dicho Obispo entendier que las tales peticiones o petición sea de grant necesidat e de grant piedat, porque devan ser luego vistas e libradas antes e otras algunas" <sup>(251)</sup>. En el mismo sentido, antes de comenzar cada sesión, el refrendario, por mandato del Obispo, pondrá una "cedula a la puerta del dicho Consejo enque diga -

---

(248) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 287v.

(249) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 287 v-r.

(250) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 287r.

(251) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 289r.



estos son los negocios e cosas que hoy se deven facer  
 resolucion enel Consejo por que las partes a quien  
 atannieren esten allo atendiendo sus libramientos, é  
 los otros se vayan a librar sus haciendas". (252)

Quedaba, pues, el Consejo bajo la dirección  
 del Obispo, quien actúa como moderador en las sesiones (253)  
 y cuyo cargo era de duración anual, previéndose tam-  
 bién en la Ordenanza su sustitución (254) en caso de  
 ausencia o enfermedad.

El que la Ordenanza de 1390 no de un título  
 concreto al cargo que desempeña este Obispo ha hecho  
 que los autores que han tratado el Consejo difieran  
 a la hora de valorar a esta figura. Se trata de un -  
 Presidente?. Es solamente un moderador?.

---

(252) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 289r-290v.

(253) "Otrosi sea avisado el dicho Obispo para refre-  
 nar los luengos decires, e los fablares enel  
 turno que fablaren algunos del Consejo" (Santa  
 Cruz, Ms. 25, fol. 287r).

(254) "E el dicho Obispo que agora a de començar a  
 detener esta carga, que este continua miente  
 un anno, e si acaescier que fuere doliente o  
 que sea necesario de ir a otra parte por nuestro  
 mandado, o con nuestra licencia, que nos pongamos  
 a otro que tenga esta carga qual entendieremos  
 que cumple anuestro servicio" (Santa Cruz, Ms.25  
 fols 288r-289v).

MARTINEZ MARINA<sup>(255)</sup> y SEMPERE<sup>(256)</sup> le denominan "prelado gobernador", el primero y, sencillamente "gobernador" el segundo. TORREANAZ rebate la postura de los anteriores en base a que ni en la ordenanza, de la que MARTINEZ MARINA copia un largo trozo<sup>(257)</sup>, ni en ninguna otra de aquel tiempo aparece la palabra "gobernador". Piensa este autor que se trata de un consejero más que sustituiría el Rey en caso de ausencia; se escogía preferentemente un Prelado "en virtud de su mayor respetabilidad"<sup>(258)</sup>. Finalmente, el prof. SUAREZ FERNANDEZ lo denomina "presidente"<sup>(259)</sup>.

En principio, el calificativo "presidente" ha de ser rechazado en cuanto que el que preside el Consejo es el propio Rey a quien se le reserva una silla en el Consejo<sup>(260)</sup>. También es posiblemente aventurado calificarlo de "gobernador". Creemos, en definitiva, que la cuestión no ha de reducirse a un problema terminológico, sino que lo realmente importante es la nueva situación de hecho que recogen estas Ordenanzas.

---

(255) Teoría de las Cortes... p. 351

(256) Historia del Derecho... p. 426-7.

(257) TORREANAZ desconocía personalmente el texto de la Ordenanza de 1390 y sólo se refiere a ella a través de MARTINEZ MARINA y SEMPERE.

(258) Los Consejos... t. I, pgs. 220-4.

(259) Juan I, Rey de Castilla... p. 126 y en Historia del Reinado de Juan I... p. 340.

(260) "Primeramente quela silla do nos avemos de asentar este en medio del asentamiento e el dicho Obispo se asiente a la mano esquierda e luego cerca del..." (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 285r-286v).

Ella viene dada, en nuestra opinión, por las cada vez más frecuentes incomparecencias del Rey ante su Consejo, aunque ello no quite que se le reserve su silla en todo momento. El Obispo, sin duda, está desempeñando algunas funciones - que serían las propias del Monarca cuando éste se sentaba en su Consejo, y en este sentido estaría representando a la persona del Rey. Sin embargo, el que la Ordenanza no de un calificativo especial a este Obispo, nos obliga a no definirnos en uno u otro sentido, aunque reconozcamos que este Obispo es, a todos luces, el antecedente del Presidente del Consejo de Castilla.

Otras disposiciones de la Ordenanza están encaminadas a regular el mejor funcionamiento del Consejo. Se establecen los horarios <sup>(261)</sup>, la duración de la jornada y los días festivos <sup>(262)</sup>. El Consejo se ha de reunir en una "Camara" en la misma posada donde el Rey residiera, y si el Monarca no estuviera en ese momento en donde residiera el Consejo, siempre ha de ser reservada una "camara" en la posada del Rey

---

(261) El Obispo y los consejeros debían llegar "a la Camara que fuere ordenada para donde este el Consejo a una ora despues que saliese el sol desde mediado el mes de octubre fasta la Pasqua de Resurreccion e desde la Pasqua de Resurreccion fasta mediado el mes de octubre venga al dicho logar del Consejo a dos oras despues del sol salido" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 285v-r)

(262) "Otrosi queremos, e mandamos que cada dia se ayunten a Consejo a las oras salvo los domingos e las Pasquas, e las otras fiestas principales de Santa Maria, e dure el consejo tres oras, salvo si por merçet oviere de durar mas o menos por tener que facer" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 290v-r).

para tener el Consejo<sup>(263)</sup>. Para que sus sesiones no se vean interrumpidas el Rey dispone que el Obispo o los consejeros no salgan a recibir el Rey ni a ninguna otra persona.<sup>(264)</sup> Además de los refrendarios<sup>(265)</sup> y escribanos se dota al Consejo de dos "ballesteros de maza" "el uno para guardar la puerta, e el otro para llamar a los que el Consejo mandare"<sup>(266)</sup>.

En cuanto a la autoridad del Consejo, aunque la Ordenanza no especifica, como hiciera en Briviesca, que las cartas del Consejo debían obedecerse como si estuvieran firmadas por el propio Rey, sí se dispone que "todos los Perlados, Duques, Condes e Ricos-omes e fijosdalgo e cibdadanos de las cibdades e villa e logares de nuestros Regnos, e los nuestros Contadores, e oficiales e otros qualesquier de qualquier estado o condicion que sean, obesdecan las Cartas que fueren libradas por el dicho Consejo segunt

---

(263) "Otrosi ordenamos que esta Camara do el Consejo ovier de estar, sea siempre en la posada do nos posaremos e sinon non estubieremos en el logar do el Consejo estudier que sea apartada en la posada que fuer para nos una Camara do tengan el Consejo, e sinon ovier posada sennalada para Nos que sea apartada otra posada para ello, porque todos los del Consejo sepan adonde deven venir" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 286 v-r).

(264) Santa Cruz. Ms. 25, fol. 290r.

(265) A partir de ahora son así denominados los encargados de recibir las peticiones de las que han de sacar "la suma della con el escriuano de cui provincia fuere e pongala en su memorial, e faga realcion de ella en el Consejo e diga las razones e motivos susbtanciales de la petición e tenga la petición presta el escribano, por si alguna dubda ovier en la relación, se pueda leer la dicha petición en el Consejo" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 289v-r).

(266) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 287-r- 288-v.

dicho es segunt lo en ellas contenido, e si alguno pusier dubda o non quisier obedescer qualquier delas cartas sobre-dichas que sea tenudo a la pena contenida en la carta, e sea emplazado que paresca personalmente a se nos escusar - o recibir pena porque non cumple la carta".<sup>(267)</sup> Además el - que siempre tuviera el Rey una silla reservada en el conse-jo, aunque, con seguridad, frecuentemente no asistiría, - implícitamente nos está haciendo alusión a que los asuntos tratados en el Consejo son librados como si lo hubieran si-do por el propio Rey. En este sentido, cabe también señalar que el Consejo ha sido dotado de un sello propio".<sup>(268)</sup>

El silencio que guarda la Ordenanza de 1390, lo mismo que las de 1387 y 1389, con respecto a la composición del Consejo no nos permiten establecer con visos de certidumbre el número de consejeros. Tal vez doce, como en 1385? No lo sabemos. Por otro lado la Crónica de Juan I tampoco nos esclarece nada en este sentido. Por estas mismas causas desconocemos también si se mantiene en cierto modo la composición estamental o si, por el contrario, se ha llegado a arbitrar alguna fórmula intermedia entre letrados y "grandes omnes". Posiblemente, en esta época, el Consejo no se halla sujeto a un número determinado de Consejeros sino que éste quedaría al arbitrio del Monarca.

(267) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 292 v-r.

(268) "E si fueren otros negocios sobre que se oviesen de dar cartas selladas con el sello del Consejo..." (Santa Cruz, Ms. 25, fol. 291r).

La temprana muerte de Juan I truncó momentáneamente el desarrollo de la nueva Ordenanza de 1390. Una vez más, el Reino se encuentra inmerso en una problemática minoría en la que las facciones nobiliarias se disputan la regencia<sup>(269)</sup>. Las Cortes de Madrid de 1391 encuentran finalmente la solución "para gouernar a todos en paz e en justia", determinado que los reinos "se rrigiesen e gouernasen por Consejo".<sup>(270)</sup>

---

(269) Crónica de Enrique III: "Despues que ovieron algunos dias fablado de la manera que ternian para el regimiento del Regno, e non se podian concordar, porque algunos de los grandes, asi como el Duque de Benavente e el Conde don Pedro, tenian que si el regimiento fuese segund el testamento que el Rey don Juan dexara, que ellos non avrian parte, pues non eran en el nombrados; otrosi, si fuese por manera del Consejo, que aunque ellos fuesen del numero de los del Consejo, non avrian aventaja de otros Señores e Perlados e Caballeros que serian eso mesmo del Consejo, asi que segun esto ploguierales que fuese la ordenanza del regimiento segund la ley de la partica el Arzobispo de Toledo alegara, que fuesen regidores uno, o tres, o cinco, e que en tal manera non podria ser que ellos non oviesen parte en el dicho regimiento. Pero finalmente, todos los Procuradores del Regno que alli eran, e alguno de los mayores, asi como Juan Garcia Manrique, Arzobispo de Santiago, e los Maestres de Santiago e Calatrava, e algunos Caballeros e todos los Procuradores del Regno, todos tovieron que era mejor e mas seguro que el regimiento fuese por manera de Consejo, porque ninguno de los mayores non oviese tan grand poder en el regimiento que pudiese dañar a ninguno, temiendo muchos peligros que podian acaescer; e asosegaronlo asi" (año 1391, cap. 1, pgs. 164-5).

(270) Véase al respecto el Ordenamiento hecho en las Cortes de Madrid de 1391 acerca del nombramiento y facultades del Consejo por el que habia de regirse el Reino durante la minoría de Enrique III (CLC.II, pgs. 483 y s

Este Consejo quedaría compuesto por "los grandes del rregno, asi marqueses e duques, commo perlados e maestros, e condes e rricos omes e caualleros, e otrosi delos vezinos de las çibdades e villas"<sup>(271)</sup>. El Consejo de Regencia quedó configurado con once representantes - de los "sennores e rricos omes e caualleros" y por trece representantes de las ciudades.<sup>(272)</sup>

En principio el Consejo puede "fazer todas las cosas e cada vna dellas que fueren seruicio del Rey e - prouecho de sus rregnos, saluo las cosas que aqui se contienen, en queles non dar poder".<sup>(273)</sup> En el Ordenamiento quedaban taxativamente fijadas las competencias de este Consejo.<sup>(274)</sup>

Nos encontramos, sin duda; ante un Consejo de Regencia<sup>(275)</sup> bien distinto del Consejo Real regulado tan sólo un año antes por Juan I. Pero la existencia del Consejo de Regencia fue efímera ante las continuas luchas

- 
- (271) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, preamb. p. 485)  
 (272) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, preamb. pgs. 485-6)  
 (273) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, l. p. 487)  
 (274) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, pgs. 487 y ss)  
 (275) En este sentido se han manifestado SEMPERE (Histoire des Cortes... COLMEIRO: Curso de Derecho político... p. 227), PISKORSKI (Las Cortes... p. 181) el prof. SUAREZ FERNANDEZ (Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III, Madrid, 1954, p. y en su Nobleza y Monarquía, p. ) y el prof. GIBERT (El Antiguo Consejo... p. 18). No obstante hay autores que ven en este Consejo, creado en las Cortes de Madrid de 1391, el Consejo Real, Así opina CANTOS BENITEZ (Escrutinio de maravedises... p. 94).

entre las distintas facciones nobiliarias<sup>(276)</sup> que llevaron a adelantar la mayoría de edad del joven Enrique III.

Hemos de suponer que, adquirida la mayoría de edad, Enrique III nombraría los miembros de su Consejo, tal vez inicitado por los mismos procuradores de las Cortes de Madrid quienes le solicitan que lleve con él "buenos consejeros, así Perlados, como Señores e Caballeros, e buenos Omes de cibdades e villas, que amen e teman a Dios, e que son su consejo fagades aquellas cosas que ovieredes de ordenar en los vuestros Regnos".<sup>(277)</sup>

Nos encontramos de nuevo ante un Consejo de composición estamental. Es esta petición pretensión de las ciudades aprovechando la declaración de mayoría, o por el contrario no ha perdido todavía el Consejo su carácter estamental? Vimos cómo en las últimas Ordenanzas reguladoras del Consejo dispuestas por Juan I no se hacía mención alguna a la composición del Consejo con lo que no podíamos excluir la posibilidad de que quedara todavía algún vestigio de representación ciudadana en el Consejo. La Crónica ni otras fuentes documentales no nos aclaran nada al respecto

---

(276) Sobre esta situación además de la Crónica de Enrique III debida a LOPEZ DE AYALA, testigo excepcional de los hechos, pueden verse las obras de SUAREZ FERNANDEZ, antes citadas, Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III y Nobleza y Monarquía.

(277) Crónica de Enrique III, año 1393, cap. 22, p. 215.



No sabemos si Enrique III accedió a la petición de las ciudades o si, por el contrario, esta quedó como uno de tantos intentos frustrados, pero dada la difícil situación que está atravesando la monarquía, presionada por uno y otro lado<sup>(278)</sup>, no es descabellado pensar que el Rey accediera a la inclusión de "buenos omes de las cibdades" en el seno de su Consejo.

Al Consejo le encontramos estos años acompañando al Rey y tomando parte activa en la política del reino<sup>(279)</sup>. Tal vez el carácter estamental del Consejo durante estos años venga en cierta medida corroborado por el hecho de que en 1406 Enrique III dota al Consejo de unas Ordenanzas que en su mayor parte son reproducción de las dispuestas por Juan I en Segovia en 1390. Si Enrique III hubiera restablecido el consejo tal como lo ordenara su padre en 1390, muchas de las disposiciones contenidas en la Ordenanza de 1406 no hubiera sido necesario reproducirlas, sino que hubiera bastado recoger aquellas que suponen una variante con respecto a las de 1390. Ello nos lleva forzosamente a plantearnos la hipótesis de que Enrique III en los años inmediatamente posteriores - a haber alcanzado su mayoría actuó con un Consejo Real de composición estamental, hasta que 1406, ya en plena madurez y llevado a cabo su política centralista<sup>(280)</sup>, decidiera - -

---

(278) Véase la Crónica de Enrique III, especialmente los años 1393, 1394 y 1395.

(279) Véase la Crónica de Enrique III, año 1393, cap. 18, p. 212; cap. 19, pgs. 212-4; año 1394, cap. 2, p. 218; cap. 5, p. 220, cap. 16, p. 225; cap. 24, pgs. 228-9; *passim*.

(280) Sobre ello véase SUAREZ FERNANDEZ: Estudios sobre el

restaurar el Consejo en los términos dispuestos por su padre en 1390.

La Ordenanza de 1406<sup>(281)</sup>, varía con respecto a la de 1390 en que ha desaparecido la figura del Obispo "presidente", sobre el que recaía la "carga" de todo el Consejo. Ciertamente es difícil llevar a precisar las razones que movieron a Enrique III a tomar esta medida. Quizás como dijimos en su momento, esta figura había nacido pensando en las continuas ausencias del Rey de su Consejo y ahora, Enrique III, más proclive a llevarla política personalmente, no consideró oportuna la figura del Obispo puesto que presidía él mismo las sesiones del Consejo. Aquellas otras atribuciones que pudiéramos llamar más burocráticas que eran encomendadas al Obispo por la Ordenanza de 1390, ahora en 1406 se atribuyen a todo el Consejo en general.

---

(280) /...régimen monárquico... pgs. 83-6 y Nobleza y Monarquía... p. 59. También pusieron de relieve esta política centralista en el ámbito local el prof. B. GONZALEZ ALONSO: El corregidor castellano... p. 38 y el prof. A. BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 62-5.

(281) Publicada por MARTINEZ MARINA: Teoría de las Cortes.. t. III, aped. II, pgs. 22-8.

Sin embargo, la Ordenanza de 1406 ofrece dos novedades de importancia. En la primera se regula el caso en que no haya una opinión unánime por parte de los consejeros a la hora de tomar un acuerdo; en tal caso se acudir<sup>(282)</sup>á. al Rey quien en último término decidirá al respecto. La segunda, referente a las competencias del Consejo, se le faculta para poder convocar Cortes, sin tener que hacer ninguna relación al Rey.<sup>(283)</sup>

La Ordenanza, guarda silencio también respecto a la composición del Consejo en cuanto al número de sus componentes pero indirectamente nos hace referencia a la calidad de sus miembros al regular el "quorum" necesario para librar determinado tipo de cartas, al disponer que "tal carta sea librada a lo menos por un perlado e dos caballeros e dos doctores"<sup>(284)</sup>. Nos encontramos que han aparecido de nuevo los doctores y no se hace mención alguna de los representantes de las ciudades, dato que viene a reforzar la hipótesis de trabajo antes expuesta de que Enrique III en 1406, restaura un Consejo distinto al que venía actuando hasta la fecha con posibles representantes de las ciudades en su seno.

---

(282) 'Otrosi si acaesciere que en cosas que se hobieren de librar en el Consejo fueren opiniones en tal manera que todos los del consejo non fueren concordes, e si fueren opiniones entre ellos ordeno que si las dos partes fueren en una concordia, que se libre e determine la cosa sobre que la contienda fuese segund el consejo de las dichas dos partes: é si por aventura las dos partes de los del consejo no fueren de una concordia, que en tal caso sea fecha relación a mi de las opiniones y razones que se facen sobre las dichas opiniones porque yo sobre ello determine e mande lo que la mi merced fuere" (ed. Martínez - .../...

Pero mucho más esclarecedor es el testamento de Enrique III. Aunque la Ordenanza, como acabamos de ver, no recoja la composición del Consejo, por el testamento del Rey podemos llegar a concluir, casi con seguridad, que el Consejo se hallaba compuesto de dieciseis consejeros.

La Ordenanza de 1406 fue promulgada en Segovia - a quince de septiembre <sup>(285)</sup> y el testamento de Enrique III fué otorgada a veinticuatro de diciembre de ese mismo año; es decir, entre una y otra fecha mediaron algo más de tres meses. Ello nos lleva a suponer, en base a lo dispuesto - en el testamento <sup>(286)</sup>, que el número de consejeros de plantilla

---

(282) /...Marina: Teoría de las Cortes... t. III, aped. II, p. 24).

(283) "Otro si las cartas que ellos han de librar e firmar de sus nombres dentro en las cartas sin facer ninguna relación a mi es esto:... para cortes o para otras cosas que cumplieren a mi servicio... (ed. Martinez Marina: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, p. 27)

(284) Ordenanza 1406, ed. Martinez Marina: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, p. 22.

(285) Véase MARTINEZ MARINA: Teoría de las Cortes... t. III apend. II, p. 22.

(286) "Otro si, ordeno e mando que sean del Consejo del Principe mi hijo e de los dichos sus Tutores, desde Dios quiera que sea Rey, todos aquellos que agora son del mi Consejo, asi Perlados, como Condes y Caballeros e Religiosos, como Doctores que yo nombré para el mi Consejo, y que no crezcan ningunos de nuevo; e si por aventura falliescieren algunos, tanto que no quedase - número de diez y seis, ordeno, que sean escogidos e puestos otros, hasta dicho numero de diez y seis, por los dichos tutores; pero que en lo que dice que no crezca ninguno de nuevo, no sean entendidos los lijos del dicho Infante mis sobreinos, ca quiero y es mi merced, que quando fueren de edad, que sean del dicho Consejo" (Crónica de Enrique III, p. 267).

serían dieciseis y que éste se hallaba compuesto por "Perlados, como Condes y Caballeros e Religiosos, como Doctores".<sup>(287)</sup>

La importancia del Consejo es incuestionable hasta el punto que ninguno de los Tutores podrá librar "cosa alguna que pertenezca a la dicha tutela e regimiento, sin que firmen en la carta dos de los del mi Consejo".<sup>(288)</sup> Por primera vez el Consejo Real viene a actuar casi como Consejo de Regencia.<sup>(289)</sup>

Al igual que ocurriera en la minoría de Enrique III, muy pronto las distintas facciones representadas por los Tutores intentan hacerse con el control del Consejo<sup>(290)</sup>, hasta el punto que el Consejo llegó a dividirse en dos secciones, una junto a la Reina doña María y la otra con el infante don Fernando<sup>(291)</sup>. Muertos los tutores la situación se recrudece más aunque por un momento, adquirida la mayoría de edad -- Juan II, parece que la situación se normaliza, pero lo cierto es que

---

(287) Ver texto nota anterior.

(288) Crónica de Enrique III, testamento, p. 267.

(289) Véase TORRES FONTES: La regencia de don Fernando de Antequera en Anuario de Estudios Medievales (AEM) nº 1 (1964) pgs. 375-429.

(290) Sobre esta situación vid. PEREZ DE GUZMAN en su Crónica de Juan II, años 1407, 1408, 1409 passim.

(291) Sobre la división del Reino véase la Crónica de Juan II, año 1407, cap. 19. Es cierto que PEREZ DE GUZMAN al referirse la división administrativa del Reino no hace mención expresa al Consejo, no obstante, el prof. TORRES FONTES (La regencia de don Fernando de Antequera... p. 392) supone que la división afectó igualmente al Consejo.

a partir de este momento hasta los Reyes Católicos, habrá una pugna continua entre los distintos bandos por controlar el Consejo que, en definitiva, suponía controlar el Reino<sup>(292)</sup>. Escaparía mucho del objeto del presente estudio entrar a pormenorizar las vicisitudes políticas por las que atravesó el Consejo durante los reinados de Juan II y Enrique IV, pues, en último término, se reducen a las mismas por las que atravesó la corona castellana en este siglo XV. Vencedora una facción, intervenía inmediatamente desplazando del Consejo a los de la facción vencida<sup>(293)</sup>, aumentando desmesuradamente el número de consejeros<sup>(294)</sup>, procediéndose a continuación a la persecución y encarcelamiento de los adversarios.<sup>(295)</sup>

---

(292) Vid. SUAREZ FERNANDEZ, Nobleza y Monarquía, ya tantas veces citado.

(293) Es muy expresivo al respecto un pasaje recogido por GARCIA DE SANTA MARIA en su Crónica de Juan II: "Muchas maneras tenían el Infante don Enrique e los caballeros por atraer a su opinión todos los mas que podían haber, especialmente a aquellos que eran de alguna manera e estado. Librábales del Rey muchas cosas; entre las cuales les libraban que fuesen de su Consejo del Rey: é este estado de ser del Consejo del Rey solía ser muchopreciado en el reino, e no lo daba el Rey, salvo a Perlados, caballeros de grandes linajes e casas, o, a mucho sus privados, e a dos o tres solenes doctores, de quien mucho se fiaba" (año 1420, cap. 26 p. 124).

(294) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II: "Después del movimiento de Tordesillas... fizo el Rey de su Consejo cerca de treinta personas a petición del Infante don Enrique. Estos caballeros, los mas dellos por atraer a sí, a dellos porque lo demandaban sus estados e linajes" (año 1420, cap. 26 p. 124). Esta situación se vió aún incrementada en años sucesivos hasta llegar al número de sesenta y cinco consejeros (GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1426, cap. 7, p. 420 y PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II: "e allí hubo grandes debates sobre qual estaría de continuo en el Consejo del Rey, que pasaba de sesenta e cinco", año 1426, cap. 4, p. 437).

Con motivo de haber llegado a su mayoría de edad, Juan II convoca Cortes en Madrid en 1419. En ellas, sin duda aprovechando la coyuntura, los procuradores solicitan que nombre para su Consejo "alguna buenas personas de algunas mis çibdades"<sup>(296)</sup>, "por ser mas avisado por ellos enlos fechos delas sus çibdades e villas".

Varias son las razones que exponen los procuradores para fundamentar su petición. En primer lugar "por quanto enlos tienpos de algunos delos reyes mis anteçesores" -dice el Rey- "asi ellos seyendo de pequenna hedat como seyendo de hedat conplida" hubo tales representantes<sup>(297)</sup>. En segundo lugar, porque el Reino, al igual que "todos los otros rregnos de christiano, son de-partidos en tres estados es asaber, estado eclesiastico, e militar

(295) /...Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos citar, a modo de sjemplo, algunos casos. Así, a raíz de la victoria de Tordesillas en 1422 finaliza la privanza del Infante don Enrique y sus partidarios (Véanse al respecto: GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1422, caps. 12, 13 y 14, pgs. 279-87; PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1422 pgs. 416-7. En este sentido también Crónica de don Alvaro de Luna cap. pgs. 50-1 y Crónica del Halconero de Juan II, año 1422, p. 8). En 1427 por los enfrentamientos entre don Alvaro de Luna y los Infantes de Aragón (Véanse PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1427, cap. 6, pgs. 441-2; GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1427, caps. 9, 10 II, 12 y 13, pgs. 452-64) o la Crónica de don Alvaro de Luna, cap. pgs. 62-5).

(296) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 18, pgs. 20-1)

(297) A primera vista puede sorprendernos este argumento que presentan los procuradores de las Cortes de Madrid, pero esta pretensión deja de ser chocante si damos por válida la hipótesis, antes aludida, de que hasta 1406, las ciudades estuvieron representadas en el Consejo, no sólo durante la minoría de Enrique III, tal como se dispuso en las Cortes de 1391, sino que se mantuvieron, incluso hasta una vez alcanzada la mayoría por este monarca, siendo en 1406 cuando opta por volver a la planta del Consejo que su padre había ideado en la Ordenanza de Segovia de 1390.

e estado de çibdades e villas" y el "sennorio rreal" está sobre todos los estados del Reino, por lo que "se podfa bien conosçer que era conueniente cosa e de buena egualdat que pues delos estados eclesiasticos e militar el mi alto Consejo continuada e comun mente estaua bien copioso e abastado", se eligieran para el Consejo algunas personas de las ciudades.<sup>(298)</sup>

Ante la petición, Juan II contesta con una evasiva diciendo que proveerá segun cumpla a su servicio. En otras dos ocasiones en el reinado de Juan II las ciudades manifestarán su pretensión de tener representantes en el Consejo Real. La primera de ellas en las Cortes de Palenzuela de 1425, a lo que el Rey contesta que su Consejo está "asaz bien proueydo asi de duques e condes, commo perlados e rricos omes e doctores e caualleros e personas mis naturales e delas çibdades e villas delos mis rregnos"<sup>(299)</sup> Ciertamente sorprende la respuesta real cuando dice que en el Consejo hay "personas mis naturales e delas çibdades e villasç; si esto fuera cierto no tendrfa sentido la petición de las Cortes. Posiblemente lo que ocurre es que las Cortes quieren introducir cons ejeros designados por ellas para llevar dentro, de lo que cabe, un control sobre la actuación, cada vez más creciente, del Consejo. Seguramente habria algún consejero "natural delas çibdades e villas", pero al ser de designación real, éstos no actuarían con la independecia y con los mismos intereses de los designados por las ciudades.

---

(298) Cortes de Madrid 1419 (CLC. III, 18, pgs. 20-1)

(299) Cortes de Palenzuela 1425 (CLC. III, 10, p. 56).



Siete años más tarde, en las Cortes de Zamora de 1432, los procuradores le recuerdan su petición de años antes y la contestación el propio Juan II les diera en Palenzuela, pero "por quanto de cada dia se fazian e ordenauan e rrecresçian en mi corte cosas nuevas, las quales rrazonablemente deuián saber las çibdades e villas", le suplican al Rey que ordene "que estouiesen e andouiesen continua mente en la mi corte dos procuradores, vno de aquerde los puertos e otro de allende los puertos, e que aestos dos procuradores fuese dado, por mi mandado, poderio por las çibdades e villas cuyos procuradores sodes, para procurar todas aquellas cosas que entendieren que ami seruiçio conplia e al bien delas cibdades e villas de mis rregnos".<sup>(300)</sup>

Aunque el texto no hace mención expresa al Consejo, debemos suponer que la intención de las ciudades, dado que se le recuerda el Rey lo pedido en Palenzuela, es que dichos procuradores actúen en el seno del Consejo, pero como en las ocasiones anteriores, la respuesta del Rey es negativa.<sup>(301)</sup>

---

(300) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 5, pgs. 120-1).

(301) Todavía en 1465, se le pedirá a Enrique IV que designe cuatro procuradores de las ciudades y villas "los quales tengan cargo de solijitar e procurar con vuestra alteza o con los de vuestro muy alto Consejo e contadores e otras personas de vuestra casa e corte quelas cosas contenidas en las dichas leyes e pragmáticas sençiones e en cada vna dellas, se guarden e cunplan e executen en la forma en ellas contenidas" (Cortes de Salamanca 1464, CLC. III, 21, pgs. 759-60), si bien, en esta ocasión, se ve claramente que los cuatro procuradores están actuando no en el Consejo, sino como órgano de control para que se cumpla la legalidad establecida con seguridad, ante los contiúos intentos de ser inclu'idas en el Consejo, las ciudades están arbitrando otra solución para salvaguardar sus intereses.

Pero sin lugar a dudas la medida de más importancia llevada a cabo por Juan II en las Cortes de Madrid de 1419 con respecto al Consejo, fué la división del mismo, de manera que unos consejeros "librasen las cosas de justicia", y otros los negocios "que fuesen de otra calidad".<sup>(302)</sup>

Se trataba de una medida sin precedentes<sup>(303)</sup> y decisiva para la evolución posterior del Consejo Real puesto que lo que se establece son dos órganos con materias y personas perfectamente delimitadas o en todo caso, dentro del Consejo otro "Consejo" más reducido que trataba de los asuntos de más importancia. Todo ello nos lo refiere claramente el cronista: "E allí se ordenó que las cartas o alvalaes que su Señoría hubiese de librar tocantes a dinero, siquier fuesen de dádivas o mercedes o otros gastos, que se diesen a Don Gutierre de Toledo, Arcidiano de Guadalajara, para que las él mostrase en Consejo a Don Sancho de Roxas, arzobispo de Toledo, e al Almirante don Alonso Enriquez, e al Condestable Don Ruy Lopez Dávalos, e a Pero Manrique, Adelan-

---

(302) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II: "...y el Rey dixo que, pues él había tomado el regimiento de sus Reynos, queria que luego así se diese orden como algunos Caballeros del su Consejo con ciertos Doctores librasen las cosas de justicia; é otros negocios que fuesen de otra calidad, queria el ver con los que el paresciese, para los determinar" (año 1419, cap. 4, p. 378).

(303) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II: El Arzobispo de Toledo desde que vido esta novedad, e que ninguna cosa le había sydo dicho ante que este mandamiento se hiciese, maravillóse mucho" (año 1419, cap. 6, p. 378).

tado de León, e a Juan Hurtado de Mendoza, Mayordomo mayor; e vistas por ellos, las dieseen al dicho Arcidiano de Guadalajara para quel las refrendase, y el Rey las librase; porque la voluntad del Rey era que las cartas de importancia pasasen por la forma que dicha es.<sup>(304)</sup>

Gracias a este texto podemos conocer cuáles eran esos negocios de "otra calidad" que el Rey quería ver "con los que él pareciese, para los determinar".

Quedaba así constituido un Consejo que podríamos llamar "reducido", "privado", o "secreto", como le denominan posteriormente otras fuentes, y un Consejo "público"<sup>(305)</sup> en el que se libraban "las cosas de justicia".

Acerca de este último la Crónica de PEREZ DE GUZMAN solo nos aclara que estaba compuesto por "Caballeros" y "Doctores", sin especificar su número; tampoco nos indica cuáles eran esas "cosas de justicia".

---

(304) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1419, cap. 5 p. 378.

(305) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II: "... e asi todos estos cinco hubieron de comenzar a entender en los negocios del Rey, e Juan Hurtado de Mendoza que mayor parte en el Rey tenía, tuvo manera quel Rey mandase quando estos cinco fuesen discordes en el Consejo, que lo que la mayor parte dixiese, aquello se librase, e por esta manera cesaba la forma que solia tener el Arzobispo de Toledo haciendo las cosas a su libre voluntad; de lo qual el Arzobispo se quexaba mucho, porque el quisiera tener solo la governación; e comenzó apartarse de los dichos Señores, eabase a entender en el Consejo público; e los otros quatro no dexaban de entender en los negocios del Reyno, e libranbalos como mejor entendian" (año 1419, cap. 6, pgs. 378-9)

Hemos de esperar nueve años para tener de nuevo noticias de esta división: "Por esta manera plugo al Rey ordenar cerca de los que tocaba a la justicia, e de algunas otras cosas del regimiento de las ciudades e villas; e por ende ordenó que seis - personas de su Consejo, dos Perlados e dos caballeros e dos - doctores, toviesen aparte Consejo, e oyesen peticiones de justicia, e viesen aparte Consejo, e ouesen peticiones de justicia, e viesesen las otras cosas que tocaban al regimiento de las ciudades e villas e semejantes, e las despachasen segun entendiesen que cumplia, dando e librando cartas del Rey sobre ello"<sup>(306)</sup>. Los miembros de este Consejo se reunirian cada día "que no fuese fiesta" en el palacio del Rey, "pero que después de estos seis sirviesen en este Consejo cuatro meses, que cesasen e viniesen otros seis del Consejo, otros cuatro meses, e asi continuase e pasase por todos los del Consejo, como e cuáles el Rey los nombrase"<sup>(307)</sup>.

El cronista nos relata que esta medida fué tomada porque el Rey quiso "saber la opinión de todos los de su Consejo de cómo e por qué manera proveeria mejor cerca de la justicia e del regimiento de sus reinos e de su casa e corte", para lo cual -

---

(306) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428 cap. 8, p. 18.

(307) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428 cap. 8, p. 18.

dispuso que "algunos de los Grandes de sus reinos se fuesen para sus casas"<sup>(308)</sup>. A continuación nos aclara GARCIA DE SANTA MARIA que "esto ficiera el Rey, porque con ellos pudiese haber su Consejo sobre las cosas grandes e arduas, e sobre las que de gracia erande e facer, que a él por su persona pertenescian de ver e librar e expedirlas, segun que a su merced plugiese. Las cuales, como quier que es bien que el Rey no las faga sin Consejo, pero tampoco es bien que las comunique con muchos Consejeros"<sup>(309)</sup>.

Nos encontramos, pues, con un Consejo Real de que desconocemos el número de consejeros, pero que sin duda, a la luz de los textos, sería numeroso<sup>(310)</sup>, dado que si establece tres -

---

(308) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428 cap. 8, pgs. 17-8. Esta misma medida, pero sin hacer la referencia al Consejo, sino a la Audiencia, la recoge también PEREZ DE GUZMAN, quien se limita a decir que esta medida fue tomada "por el empacho de las posadas" y por el "enojo que rescebia" el Rey con tanta gente, por lo que "mando que todos los grandes que ende estaban, así Perlados como Caballeros e Doctores, aunque fuesen de su Consejo, se partiesen para sus casas" (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4. p. 445).

(309) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 8, p. 18.

(310) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II: "mandó el Rey e dió licencia a todos los otros de su Consejo que se fuesen para sus casas, o que no entrasen en Consejo para librar con los otros" (Año 1428, cap. 8, p. 18). En 1420 constaba de 22 consejeros (GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II año 1420, cap. 22, p. 130).

turnos castrimestrales de seis consejeros, al menos podemos asegurar que habría dieciocho, aunque posiblemente esta cifra fuera superior. (311)

- 
- (311) Al relatar este mismo pasaje, los cronistas de Juan II nos han dejado constancia de algunos de los Consejeros que no fueron "enviados para sus casas". Así, PEREZ DE GUZMAN, después de relatarnos como el Rey mandó que Prelados, Caballeros y Doctores se fueran para sus casas "aunque fuesen de su Consejo, nombra a las personas que no se vieron afectadas por esta medida: Juan de Contreras, Arzobispo de Toledo, Lope de Mendoza, Arzobispo de Santiago, el Almirante don Alfonso Enriquez, Don Diego Gomez de Sandoval, el Adelantado Pero Manrique y los Doctores Periañez y Diego Rodriguez. (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4, p. 445). Por su parte GARCIA DE SANTA MARIA recoge el nombre de los primeros que ocuparon el turno del Consejo que oía "peticiones de justic": Juan de Contreras, Arzobispo de Toledo, el Obispo de Salamanca, el Coperio mayor del Rey Pero Carrillo de Toledo, Inigo de Stuñiga, el doctor Pero Lopez de Miranda y el doctor Ortun Velazquez de Cuéllar. (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 8, p. 18). Si comparamos unos y otros, podemos comprobar que solo se repite el nombre de Juan de Contreras, Arzobispo de Toledo. Quiere decir esto que PEREZ DE GUZMAN recogió el nombre de los del Consejo "privado" o "secreto" y GARCIA DE SANTA MARIA los del Consejo "público" o "de justicia"? No lo sabemos, aunque parezca una hipótesis factible, dado que sería, en último caso, perfectamente compatible que Juan de Contreras estuviera presente en ambos "Consejos". Por otra parte, no deja de ser significativo que de los consejeros que en 1419 designara Juan II para librar con él los "asuntos de otra calidad" estuvieran, precisamente, el Almirante Alfonso Enriquez y Pero Manrique con lo que se hace más verosímil la hipótesis de que PEREZ DE GUZMAN haya mencionada en su Crónica a los del Consejo "secreto".

Este Consejo que podríamos denominar "amplio" es reducido desde un punto de vista funcional a dos Consejos más restringidos, uno que resuelve con el Rey las "cosas grandes e arduas" y las de "gracia", que aunque "pertenescian de ver e librar e expedirlas, segun que a su merced plugiese", "es bien que el Rey no las faga sin Consejo, pero tampoco es bien que las comunique con muchos Consejeros"; por otro lado nos encontramos con un Consejo que libra las "peticiones de justicia" y "las otras cosas que tocaban el regimiento de las ciudades e villas e semejantes" que actuaba despachando "segun entendiesen que cumplia, dando e librando cartas del Rey sobre ello". El primero de ellos tiene un carácter fundamentalmente consultivo, pues resuelve sobre las cuestiones reservadas al Rey, el segundo, en cambio, tiene un carácter decisorio.

Vimos como en 1419 Juan II había designado a cinco miembros de su Consejo para conocer con él de "las cartas o alvales que su Señoría hubiese de librar tocantes a dinero, siquier fuesen dádivas o mercedes", pero ahora, en 1428, ha reducido también el entonces denominado por el Cronista "Consejo publico", a seis consejeros que se turnarán cuatrimestralmente. A partir de este momento nos encontraremos frecuentemente en los cronistas de alusión al "Consejo de la justicia"<sup>(312)</sup> en unas ocasiones, y en otras al "Consejo secreto"<sup>(313)</sup>, por lo que pensamos que no es

---

(312) Son innumerables los pasajes que hacen referencia al "Consejo de la justicia", así por ejemplo ver en GARCIA DE SANTA MARÍA año 1429, cap. 23, p. 90, año 1431, cap. 17, p. 281; en PEREZ DE GUZMAN los pasajes del año 1422, cap. II, p. 416 año 1431, cap. 17, p. 496; en la Crónica del Halconero, año 1439, cap. 233, p. 270; en las Ordenanzas de Guadalajara de 1436 en Libro de Bulas y Pragmáticas, *passim*.

difficil identificar el "Consejo publico" de 1419 con el "Consejo de la justicia", y al otro Consejo más reducido con el posterior\_mente denominado "Consejo secreto" (314)

Ciertamente son muchos los problemas que nos plantea esta división del Consejo. A primera vista parece que se trata de una división más de tipo funcional que institucional. Desde 1385, hemos podido comprobar que se han venido haciendo toda una serie de delimitaciones de tipo competencial que fundamentalmente pueden ser agrupadas en dos grandes bloques; unos asuntos que puede librar el Rey sin necesidad de consultar con el Consejo, y otros asuntos que son competencias del Consejo y que, por tanto, tiene facultad decisoria en ellos. (315)

(313) /...Crónica del Halconero, año 1430, cap. 55, p. 69; año 1439, cap. 233, p. 270; GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 13, p. 29; también en Ordenanzas de Guadalajara de 1436 en Libro de Bulas y Pragmáticas, fol91.

(314) La historiografía ha valorado de modo muy variable la existencia de estos dos Consejos. Así TORREANAZ (Los Consejos... t. I, p. 158) se limita a comentar el pasaje de la Crónica y señalar la diferencias entre uno y otro. El profesor L.G. DE VALDEAVELLANO (Curso de Historia de las Instituciones... p. 566) identifica el Consejo de la justicia con la Audiencia. Por su parte el profesor GIBERT (El antiguo Consejo de Castilla... p. 119) señala que se produjo una separación del Consejo público y el Consejo privado. A este último lo califica el citado profesor de "comisión" -al parecer sin carácter orgánico- de varios miembros". Mucho más allá va el profesor SUAREZ (Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XV, p. 13) quien considera al Consejo de la Justicia como un órgano independiente del Consejo Real más relacionado con la Audiencia. Más recientemente TORRES SANZ (La administración central... p. 535) piensa que se trata de dos "secciones dentro del Consejo de Castilla".

(315) Cuando tratemos de las competencias veremos que esta clasificación es mas compleja y susceptible de distintas matizaciones a medida que las distintas Ordenanzas del Consejo van regulando las competencias de éste.



Los textos que de 1419 y 1428 nos ofrecen los Cronistas de Juan II al respecto, parecen indicar que en el Consejo "secreto" solo eran despachados aquellos asuntos que le estaban reservados al Monarca<sup>(316)</sup>, mientras que en el Consejo de la Justicia se libraban todas las "peticiones de justicia" y "las otras cosas que tocaban al regimiento de las cibdades e villas".<sup>(317)</sup>

En las Ordenanzas anteriores a esta fecha se han venido de limitando cuales eran esas "otras cosas que tocaban al regimiento" de las ciudades del Reino, pero Conocería realmente el Consejo asuntos de justicia?.

Sin entrar a estudiar ahora las competencias del Consejo de las que nos ocuparemos más adelante, sí podemos adelantar que desde muy pronto el Consejo tendrá competencias judiciales. La Ordenanza de 1385 excluía expresamente de las Competencias del Consejo aquellas "cosas que deuen ser libradas por la nuestra abdiencia"<sup>(318)</sup>, pero la de Briviesca de 1387 ya dejaba una puerta abierta a las competencias judiciales del Consejo cuando disponía que "todas las cartas que fueren de justicia enbien ala nuestra abdiencia, saluo sy fuere querella de agrauio de alguna

(316) PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II: "...se ordenó que las Cartas o alvalaes que su Señoría hubiese de librar tocantes a..." (año 1419 cap. 5, p. 378); GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II: "...porque con ellos pudiese haber su Consejo sobre las cosas grandes e arduas, e sobre las que de gracia eran de facer, que a él por su persona pertenescian de ver e librar e expedirlas..." (año 1428, cap. 8, p. 18).

(317) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 8, p. 18.

(318) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333).

injusticia que fuere fecha en la nuestra abdiencia,<sup>(319)</sup> es decir, nos encontraríamos aquí con una competencia judicial extraordinaria del Consejo en caso de "injusticia notoria" por parte de la Audiencia. Pero fueron, sin duda, las difíciles circunstancias por las que atravesó la Audiencia en la minoría de Enrique III<sup>(320)</sup> y la crisis abierta de este órgano en el reinado de Juan III las causas que favorecieron este incremento de competencias judiciales por parte del Consejo.

Ya, como tuvimos ocasión de ver, la Ordenanza de 1390 de Juan I<sup>(321)</sup> hacía referencia a ciertas peticiones sobre las que "algunos ovieren contiendas" en las que se había de llamar a las partes, precepto recogido, como en su mayoría, por la Ordenanza de 1406<sup>(322)</sup>. Pero sobre todo será la comisión el medio del que se valdrá el Consejo para conocer judicialmente cualquier tipo de asunto. El conocimiento de pleitos por parte del Consejo llegó a límites abusivos, por lo que Juan II, ante las continuas quejas por parte de la Audiencia, se vio obligado a dictar toda una serie de normas encaminadas a que sean remitidos a la Audiencia todos aquellos pleitos que pertenecían a la jurisdicción de ésta y que indebidamente se estaban librando en el Consejo.<sup>(323)</sup> Normas similares son contenidas en la Ordenanza que cuatro años

(319) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p.333)

(320) Nos remitimos al capítulo anterior cuando tratamos la evolución de la Audiencia en este reinado.

(321) Santa Cruz, Ms. 25, fo. 287 r.

(322) Martínez Marina: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II p. 23.

(323) Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 47v-49r.

más tarde Juan II otorga al Consejo de la Justicia.<sup>(324)</sup>

Pero las Ordenanzas de Guadalajara de 1436<sup>(325)</sup> parece que enturbian esta distinción que venimos propugnando al disponer -- "que las cartas que se acordaren en el mi consejo secreto quier sean de justicia o de espediente, que sean señaladas en las espaldas en logar donde no se puedan falsar..."<sup>(326)</sup>. Aparentemente podría pensarse que en el Consejo secreto se libraban cartas de justicia<sup>(327)</sup>, pero, en nuestra opinión, la distinción que está haciendo el texto de las Ordenanzas de Guadalajara no está referida al contenido de los asuntos, sino que se está haciendo una distinción en base a un procedimiento de despacho o de resolución de los asuntos. Es decir, aquellos asuntos que quedaban reservados al libramiento del Rey y de su Consejo secreto podían ser ventilados en el mismo de dos formas distintas, según se hubieran presentado por vía de proceso -justicia- o por expediente,

---

(324) Esta Ordenanza de 1432, que sepamos, se encuentra inédita. Utilizamos una copia del siglo XVIII que se encuentra en la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Ms. 27, fols. 343-347. Hay copia también de esta Ordenanza en la B.N. Col. Burriel Ms. 13105, fols. 110 v y ss

(325) En Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 89r-93v.

(326) Ordenanzas de Guadalajara 1436 en Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 91r.

(327) Este fragmento de las Ordenanzas de Guadalajara desconcierta a TORES SANZ, quien afirma que de su "lectura puede colegirse empero algun extremo incompatible, o al menos incoherente, con esta presunta duplicación orgánica" Para el citado autor, el texto de las Ordenanzas de Guadalajara descartarían "tanto el conocimiento exclusivo de los asuntos judiciales por el Consejo de la justicia, como el de los asuntos gubernativos por el de secreto" (La administración central... p. 536).

Los asuntos se presentaban ante el Consejo de la Justicia o "publico" y allí, según la materia y no por la forma en la que se debía librar la petición, eran remitidos al Consejo "secreto" o bien quedaban en el mismo para su resolución. Por ello, en la breve Ordenanza del Consejo de la justicia de 1432, Juan II recuerda al Consejo de la Justicia que "remitan al rey las cosas que segunt ordenanza del Consejo deven ser remetidas a su merced". (328)

Es significativo, por otra parte, que ninguna de las Ordenanzas posteriores se haga mención alguna en su texto a esta diferenciación clara que hay entre el Consejo de la Justicia y el Consejo secreto. En todas ellas los asuntos de gracia, merced, gobierno y justicia vienen referidos al Consejo Real o de la Justicia, por lo que, para nosotros, cuando los textos hacen mención al Consejo de la Justicia se están refiriendo al Consejo Real en general. Lo que ocurre es que dentro del Consejo Real o la Justicia hay una distinción "de facto" o "de iure" que hace distinguir a los contemporáneos otro consejo, el Consejo secreto, en el que se libran aquellos asuntos reservados al Rey.

Con el tiempo esta distinción funcional hará que en el Consejo Real se libren exclusivamente aquellos asuntos referentes a justicia y gobierno, mientras que aquellos asuntos de gracia y merced que venían ventilándose en el Consejo secreto se despacharán por un nuevo órgano, la Cámara. En este sentido el Consejo secreto, creemos, es el antecedente del Consejo de la Cámara.

---

(328) Santa Cruz, Ms. 27, fosl 345, v-r.

Varias son las Ordenanzas que se dan para el Consejo en el reinado de Juan II de las que ya hemos hecho alusión a alguna de ellas.

Vimos ya como en 1428 en Consejo había quedado reducido a dos Prelados, dos Caballeros y dos Doctores que actuarían cuatrimestralmente por turnos, prohibiéndose a los restantes miembros del Consejo que entrasen a librar los asuntos<sup>(329)</sup>. Esta medida llevada a cabo por Juan II iba encaminada sin duda a conseguir una mayor operatividad en el Consejo para resolver los asuntos ante los inconvenientes que suponían la deliberación de una sesión muy numerosa.<sup>(330)</sup>

La Ordenanza de 1432 no altera substancialmente el modo de actuar del Consejo. El que no haga referencia alguna a la composición del mismo nos hace suponer que seguiría vigente el sistema de turnos implantado cuatro años antes. Esta Ordenanza se ocupa fundamentalmente de regular el modo de librar las cartas reales. Es importante en cuanto que recoge las normas restrictivas referentes a las competencias judiciales del Consejo<sup>(331)</sup>

---

(329) GARCIA SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428 cap. 8 p. 18.

(330) PEREZ DE GUZMAN alude también a otras razones: el empacho de las posadas" y al "enojo quel Rey rescebia con tanta gente" (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 4, p. 445). GARCIA DE SANTA MARIA, en cambio, sostiene que esta medida fue llevada a cabo por resolución del Consejo para proveer mejor acerca de la justicia y del regimiento del Reino (Crónica de Juan II, año 1428, cap. 8, pgs. 17-8).

(331) Ordenanza 1432: "otrosí que las dichas Cartas sin alguna dellas no sean de comisiones nin apellaciones alguna para que se oian, nin libren en la Corte por quanto segunt la Ordenanza del rey las tales apellaciones deven ir a la -

prohibiendo que el Consejo dé cartas de comisión o apelación para la Corte, al igual que se le prohíbe que otorgue cartas de comisión para sí en causas civiles y criminales.<sup>(332)</sup>

Las Ordenanzas de Guadalajara de 1436<sup>(333)</sup> tampoco suponen una alteración en el sistema que venimos viendo. Se repite una vez más que el Consejo guarde la pragmática de restricción de competencias<sup>(324)</sup> sin duda ante el reiterativo incumplimiento de este órgano de dicha norma. Regulaban también la forma que debían guardar las cartas que se librasen en el Consejo secreto.<sup>(335)</sup>

---

(331) /...Audiencia e chancillería del dicho Sennor Rey, e si contra esto algunas Cartas se librasen, que el Registrador las non pase al registro, ni el Chanciller al sello (Santa Cruz, Ms. 27, fols. 344r-345v y B.N. Col. Burriel, Ms. 13105, fol. 110 v-r).

(332) Ordenanza 1432: "Otrosi que los del Consejo de Justicia non libren cartas de Comisión para si mismos nin para alguno dellos en negocios nin causas civiles e criminales, e si algunas cartas contra esto librasen o refrendaren que el registrador non las pase al registro nin el chanciller al sello" (Santa Cruz Ms. 27, fol. 345 v y B.N. Col. Burriel, Ms. 13105, fol. 110 r).

(333) Las Ordenanzas de Guadalajara de 1436 pueden verse en el Libro de Bulas y Pragmáticas fols. 89r-93v y en PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1436, cap. 6, pgs. 529-32, así como en la Crónica del Halconero, año 1436, cap. 216 pgs. 236-45 y en la Refundición de la Crónica del Halconero, año 1436, cap. pgs. 206-

(334) Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 91 v-r.

(335) Bulas y Pragmáticas, fol. 91r.

En 1440 Juan II concede una nueva Ordenanza al Consejo.<sup>(336)</sup>  
 En su encabezamiento el propio reconoce que implícitamente se trata de una norma adicional a las dispuestas con anterioridad - al disponer que "sea guardada en todo e por todo segunt que en ella se contiene, la ordenanza fecha que el Rey Don Enrique mi padre e mi Sennor que Dios de santo Parayso en el anno de mill quatrocientos e seis en la Cibdad de Segovia".<sup>(337)</sup> Se recogen literalmente normas contenida en la Ordenanza de 1406, siendo lo más destacable la disposición por la que el Rey dispone sentarse los viernes "en Audiencia pública" en las puertas abiertas "a - quantos quisieren entrar para que cada uno aya facultad de se querellar, e ser oydo por que mas breve mente alcanzen su justicia".<sup>(338)</sup> y la disposición referente al refrendo de las cartas de justicia.<sup>(339)</sup>

Sin embargo la Ordenanza más importante que se otorgó al Consejo Real en el reinado de Juan II en la fachada en Valladolid el 14 de junio de 1442.<sup>(340)</sup>

---

(336) Desconocemos si hasta el momento esta Ordenanza ha sido publicada. Utilizamos una copia del siglo XVIII de la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Ms. 29, fols. 189v-194-r.

(337) Santa Cruz, Ms. 29, fol. 190v.

(338) Santa Cruz, Ms. 29, fol. 192v.

(339) Ordenanza 1440: "Item que la Carta de justicia sean firmadas de un Perlado e dos caualleros segunt lo quiere la dicha ordenanza e si tantos y non acaescieren que las firmen los que y fueren; e que todavia los dichos fueren en acuerdo dellas, las firmen a lo menos dos de ellos, si ende estovieren, e si non que la firme el que ende estouiere por que yo me torne al tal Doctor o Doctores o a sus cabezas, si carta contra justicia pasaren" (Santa Cruz, Ms. 29, fols. 191r-192v).

(340) Publicada por MARTINEZ MARINA: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, pgs. 42-49.

Se trata de una Ordenanza que viene impuesta por la situación política del momento. El Rey ha quedado como figura meramente representativa y el Control del Consejo se hallaba totalmente en manos de los infantes de Aragón. El Monarca sólo estaba facultado para otorgar "mercedes e mantenimiento fasta cuantia de seis mil maravedis, e en las lanzaas fasta en numero de cuatro lanzas o dende abajo quando vacaren por muerte o renunciacion o privación".<sup>(341)</sup> cualquier cantidad que sobrepasare esta cifra y las restantes actuaciones del Rey no se podían "dar en todo ni en parte sin acuerdo de los del consejo o de la mayor parte dellos".<sup>(342)</sup>

Por su parte la situación por parte de la facción detentadora del Consejo se ve indiscutiblemente favorecida, reservándose el control en los "fechos de justicia tocantes contra las personas de estado de sus regnos"<sup>(343)</sup> así como en la complicada

---

(341) Ordenanza 1442 en Martínez Marina: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, pgs. 42.

(342) Ordenanza 1442 en obra citada en nota anterior, p. 42.

(343) Ordenanza 1442: "Iten que en los fechos de justicia tocantes contra las personas de estado de sus regnos que en lo que hobiere de oír e librar por su merced o por su alcaides de su casa o por comisión especial suya, que a su merced place si lo el hubiere de cometer sea a dos de los doctores del su consejo, los cuales su señoría nombrará con acuerdo de los del su consejo que fueren diputados o de la mayor parte de ellos en numero de personas: o si conocieran los alcaides, que se merced mandara que dos de los dichos doctores del su consejo lo oigan con ellos, e que la definitiva que se hobiere a dar en cualquier de estos casos, que non se de sin que delante su merced en consejo sea fecha publicamente relacion de todo, porque alli se pueda ver que non se procede de voluntad mas que se guarda la justicia a mas las apries, e si el rei por su persona quisiere conocer del pleito, que en tal caso su merced lo faga con acuerdo e consejo de los doctores de su Consejo que fueren diputados para estar en -



composición del Consejo en el que los Infantes eran miembros del pleno Derecho en todo momento,<sup>(344)</sup> había igualmente otros miembros del consejo que residían en él por turno semestral (el almirante don Fadrique, el conde don Pedro de Estuñiga, el conde de Benavente don Alfonso Pimentel e Inigo Lopez de Mendoza), mientras que otros consejeros (los Obispos de Cordoba y Coria, el Conde de Rivadeo y el mariscal Pedro Garcia) actuaban por turnos trimestrales. Finalmente, los doctores, en número de cuatro, actuaban también semestralmente pero con la particularidad que los Doctores Pedro Yañes y Fernando Diaz de Toledo "cada que estovieren en la corte e se acaecieren en el consejo hayan sus veces segund que cada uno de los otros doctores".<sup>(345)</sup>

Pero la efímera victoria de los Infantes de Aragón llevó al traste el Consejo de 1442 con lo que hemos de suponer que el Consejo quedaría restaurado en su composición y competencias tras el triunfo de don Alvaro de Luna, defensor a ultranza de política monárquica de Juan II. La caída del válido abrió las esperanzas de muchos, y así los procuradores de las Cortes de Burgos de 1453 "muy omill mente" suplican a Juan II que le plazca que "en todos los negocios e fechos de vuestros rregnos, con acuerdo delos del vuestro muy alto Consejo, por vuestra persona sea fecha la determinación dellos, ca entendemos que quando asi se faga

---

(343) /...aquel tiempo en consejo, e que la definitiva que se fe de acuerdo de aquellos o de la mayor parte dellos en numero de personas, fecha la relación publicamente segund de suso es dicho" (ed. Martínez Marina: Teoría de las Cortes... t. II apend. II, p. 43).

(344) Ordenanza 1442, en opus cit. p. 42

(345) Ordenanza 1442, en opus cit. pgs. 44-5.

segund la gran virtud e nobleza de vuestra real persona, los fechos yran por via derecha e ordenada segund vuestra rrectitud e mucha voluntad"<sup>(346)</sup>, pero la muerte de Juan II al año siguiente vió truncados los deseos de las ciudades.

Ya hemos hecho alusión en varias ocasiones a lo largo del presente estudio a las dos etapas, perfectamente diferenciadas, que caracterizaron el reinado de Enrique IV. Una primera en la que el Rey obtiene éxitos muy notables y proyecta audaces reformas, y una segunda, no tan afortunada, en la que las tensiones sólo podrán ser resueltas en una etapa posterior con una guerra civil.

Dentro de esa primera fase floreciente del reinado podemos encuadrar la Ordenanza de Madrid de 1459 para la "orden e forma que se devia tener e guardar en el mi conseio"<sup>(347)</sup>.

El Consejo quedaba compuesto de dos Prelados, dos caballeros y ocho doctores y letrados<sup>(348)</sup> además de sus correspondientes escribanos de Cámara, relator, procuradores fiscales, subalternos.<sup>(349)</sup>

(346) Cortes de Burgos 1453 (CLC. III, 25, pgs. 669-70).

(347) Que sepamos, tampoco se encuentra publicada la presente Ordenanza. MARTINEZ MARINA en su Teoría de las Cortes... t. II, p. 336 hace referencia a ella: "...meditase (Enrique IV) en establecer el alto consejo como efectivamente lo hizo en el año 1459 publicando unas nuevas ordenanzas en las que refundió las de don Juan primero, Enrique tercero y don Juan segundo", citando a continuación textualmente parte del primer capítulo. Utilizamos una copia del s. XVIII que se encuentra en la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Ms. 31, fols. 259v-279r.

(348) Santa Cruz, Ms. 31, fols. 259r-260v, cap. 1.

(349) Santa Cruz, Ms. 31, caps. 2, 9, 10.

En cuanto a las competencias, aunque volveremos sobre -  
ello más adelante, conviene resaltar que en estas Ordenanzas, al  
contrario que las anteriores, hay un reconocimiento expreso de  
las competencias jurisdiccionales del Consejo.<sup>(350)</sup>

Se dispone igualmente que los viernes de cada semana va-  
yan dos doctores o letrados del Consejo a las cárceles "a enten-  
der a ver en los fechos de los presos que en ellas estan, e nego-  
cios que en ellas penden ansi Civiles commo criminales juntamen-  
te con los mis alcalles e sepan razon de todo ello e fagan lo que  
fuere justicia brevemente salvo los que estodieren presos sobre  
mis rentas".<sup>(351)</sup>

Por lo demas, como ya destacaba MARTINEZ MARINA<sup>(352)</sup>  
puede decirse que Enrique IV se limita a reproducir, poner al  
día y reunir las disposiciones de las Ordenanzas precedentes.

En la segunda etapa del reinado, con la nobleza decidida-  
mente en contra del monarca<sup>(353)</sup>, la política de Enrique IV no tiene  
el beneplácito general. De los muchos agravios que se le acusan  
interesa destacar aquél concerniente al Consejo: "e los de vuestro  
Consejo non pueden faser justicia, porque como ellos bien saben,

---

(350) Santa Cruz, Ms. 31, cap. 7, fol. 262 r.

(351) Santa Cruz, Ms. 31, cap. 13, fols. 265r-266v.

(352) Ver nota 347.

(353) Véase la Representación dirigida al Rey por varios Pre-  
lados, Ricos Hombres y caballeros de Castilla y León  
quejándose de los excesos de su gobierno en la Col. Dipl.  
Enrique IV, doc. 97, pgs. 327-34.

quando la quieren faser, por parte de vuestra altesa e de otros que acerca de aquella son, les es vedado"<sup>(354)</sup>. La fuerte política centralizadora llevada a cabo por el Rey en la primera década de su reinado<sup>(355)</sup> resulta incómoda a todas luces para la nobleza. Ello lleva al Rey y a sus oponentes a firmar una capitulación por la que ambas partes se nombtaran unos comprmisarios para dilucidar la cuestión<sup>(356)</sup>. Los compromisarios dictarán finalmente sentencia en Medina del Campo al año siguiente.

La sentencia compromisaria, además de tocar prácticamente todos los problemas del Reino, hace especial hincapié en el Consejo, objeto, de nuevo, de las aspiraciones nobiliarias por controlar el poder.

En primer lugar se propone una nueva composición del Consejo en contra de la dispuesta por la Ordenanza de 1459, en la que predominaban los técnicos. La sentencia propugna un Consejo integrado por cuatro Prelados, cuatro caballeros y ocho letrados legos, que se turnarían semestralmente.<sup>(357)</sup> Si quedase vacante algun puesto de consejero por renuncia muerte u otra causa, "la elección de los sibredichos del dicho consejo sea fecha solamente por los del dicho consejo que resideren", quienes presentarian seis nombres al Rey para que eligiera de entre ellos quién habría de cubrir la vacante.<sup>(358)</sup>

(354) Ver documento citado en nota anterior, p. 331.

(355) Un reflejo de ella, por lo que respecta al Consejo, está en el hecho de que en la Ordenanza de 1459 predominen los Dñores y Letrados sobre los restantes miembros del Consejo.

(356) Col. Dipl. Enrique IV. doc. 102, pgs. 340-5.

(357) Sentencia compromisaria 1465, cap. 44, Col. Dipl. Enrique IV doc. 109, p. 407.

(358) Sentencia compromisaria 1465, cap. 51, Col. Dipl. Enrique IV doc. 109, p. 429.

Se pretende también extender la competencia del Consejo a todo tipo de cuestiones, en particular las de tipo hacendístico so pretexto de que "los del dicho consejo del dicho señor Rey, pues representan su persona, puedan conocer e conoscan de qualesquier pleitos ceviles e criminales tocantes a los sobredichos o a qualquier dellos (Contadores Mayores, recaudadores y arrendadores) e a otras qualesquier personas de qualque estado o con\_dicion que sean, aunque sea sobre lo tocante a la hacienda e rentas del dicho señor Rey, o qualesquier negocios pendientes ante ellos o ante los dichos alcaldes o de otra qualquier calidad o en otra qualquier manera<sup>(359)</sup>. El motivo de esta intervención era una pragmática de 1461 dada por Enrique IV en favor de los Contadores Mayores, recaudadores y arrendadores de las rentas reales por la que quedaba vedada la intervención del Consejo en tales pleitos.<sup>(360)</sup>

Pero si la sentencia compromisaria no llegó a tener efectos en muchos de los aspectos que en ella se regulanba, en lo que se refiere al Consejo Real tuvo repercusiones fácticas. - Ellas quedan recogidas en la Ordenanza del Consejo de la justicia dada por Enrique IV en 1465.<sup>(361)</sup>

---

(359) Sentencia compromisaria 1465, cap. 9o, Col. Dipl. Enrique IV, doc. 1o9, p. 429.

(360) Se trata de la pragmática de 22 de abril de 1461, sobrecartada en otra de los Reyes Católicos de 1483, en A.G.S. Diversos de Castilla 3,2, Manejo una transcripción de la misma cedida gentilmente por la Srta. Bau Miquel.

(361) Desconocemos si se encuentra publicada la citada Ordenanza. Manejamos una copia del siglo XVIII de la Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Ms. 32, fols. 38v-42v.

La Ordenanza de 1465 mantiene la proporción entre Prelados, Caballeros y Doctores que propugnaba en la sentencia compromisaria al establecer que debía residir continuamente en el Consejo dos Obispos, dos caballeros y cuatro Doctores, además del correspondiente Relator y Secretario y sus dos procuradores fiscales. <sup>(362)</sup>

En algunos aspectos la Ordenanza de 1465 recuerda a la de Valladolid de 1442. Así, por ejemplo, en principio el Consejo - mantiene todas sus competencias para "despachar todas las cosas de justicia, pero que si algund fecho tocare a algunos Grandes del Regno, o fuere de tal calidad que se deba consultar connmigo diciendo ellos su parecer, lo comuniquen con el Arzobispo, e con el Marqués e con Diego de Arias, para que me faga dello relación, e yo mande lo que en ello se faga". <sup>(363)</sup> Igualmente, las provisiones que se tuvieran que hacer por el Consejo tenían que irfirmadas al menos por un Prelado, uno de los caballeros, el Relator, el Licenciado, y dos doctores, "salbo si por dar maior autoridat a las cartas firmen en ellas el Arzobispo, e el Marqués, o Diego Arias, o qualquier dellos quelo quisieren facer" <sup>(364)</sup> en el mismo sentido, las cartas que debían ir firmadas por el Rey "quelas sennales abajo el Relator, o el Licenciado con uno delos otros del Consejo, e que se traygan al Arzobispo, e el Marqués, e a Diego Arias para que ello las vean e las sennalen

---

(362) Santa Cruz, Ms. 32, fol. 38v.

(363) Santa Cruz, Ms. 32, fol. 38r.

(364) Santa Cruz, Ms. 32, fols. 38r-39v.

con la sennal delos quales las den al mi Secretario para que me las de a firmar"<sup>(365)</sup>. Cualquier miembro del Consejo, que no sea de los mencionados anteriormente, podían acudir al mismo, pero no podían firmar las cartas ni tener voto "salvo los susodichos Arzobispo, e Marqués e Diego Arias"<sup>(366)</sup>. En caso de que por "debates e contiendas en algunas Cíbdades e villas e logares del Regno, "los consejeros estimaban oportuno enviar pesquisidores", quello comuniquen con los dichos Arzobispo, e Marques e Diego Arias para que ellos melo digan, e yo provea que persona debe ir segun la calidad del fecho"<sup>(367)</sup>. También debían comunicar a estos tres personajes que ciudades o villas necesitaban corregidores para que el Rey viera quienes son los más idóneos para ser enviados<sup>(368)</sup>. En los asuntos concernientes a las Ordenes Militares "que debían ser comunicados al Rey, antes debía serlo al Arzobispo, el Marqués y e Diego Arias para que ellos se lo digan al Rey"<sup>(369)</sup>. Finalmente dispone la Ordenanza que "las cosas que se obieren de consultar con los dichos Arzobispo, e Marqués e Diego Arias, elas cartas que obieren de sennalar e librar quelas bayan a ver e sennalar con ellos el miercoles, e el viernes de cada semana, e que aquellos días entiendan en ellas dexadas todas las otras cosas que tengan que facer".<sup>(370)</sup>

---

(365) Santa Cruz, Ms. 32, fol. 39v.

(366) Santa Cruz, Ms. 32, fols. 39v-r.

(367) Santa Cruz, Ms. 32, fols. 39r-40v.

(368) Santa Cruz, Ms. 32, fol. 40v.

(369) Santa Cruz, Ms. 32, fols. 41r- 42v.

(370) Santa Cruz, Ms. 32, fols. 41r- 42v.

Desconocemos cuáles fueron las circunstancias concretas que desembocaron en esta actuación de control llevada a cabo por Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, Juan Pacheco, Marqués de Villena y Diego Arias. Fué quizás una fórmula transaccional entre parte de la nobleza y el Rey?. Por otra parte el hecho de que las Ordenanzas, al menos en la copia manuscrita que hemos manejado, carezcan de lugar y fecha de otorgación nos impiden valorar exactamente el momento político en que fueron otorgadas. El Rey ha quedado prácticamente relegado a un segundo término y que el Consejo quedaba totalmente bajo el control de estos tres personajes.

A partir de 1465 se abren los años más difíciles del reinado de Enrique IV. Primero se ha de enfrentar a los partidarios del príncipe Alfonso y, muerto éste, a la princesa Isabel. No nos han quedado testimonios documentales con los que podamos comprobar la efectividad de la actuación del Consejo, pero, en todo caso, esta dejaba mucho que desear como denuncian los procuradores de las Cortes de Ocaña de 1469.

Las ciudades le piden a Enrique IV que tenga por bien "de proueer en la rreformaçion e buena gouernaçion de vuestro Consejo de justicia", pues "es notorio quanto está des ordenado e des fallaçido e menguado de perlados e caualleros o letrados, que segund las leyes e ordenanças de vuestros rreynos enel devrian estar"<sup>(371)</sup>. Son tres las razones que a entender de los procuradores han causado la situación tan ruinosa en que se encuentra el Consejo. La primera, "por que vuestra sennoria ha pueyto enel Consejo algunas personas, mas por les hazer merçed e por las honrrar

---

(371) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 2, p. 770)



e condesçender a sus suplicaciones que por proueer al Consejo". La segunda causa es el mal pago que retenian buena conçiencia e suficiencia no lo quieren açëptar". Y finalmente, la tercera por el apartamiento del Consejo de donde está la persona del Rey, de manera que las personas que para estar en el Consejo don designadas "se tienen por desterradas de vuestra corte e por des fauoreçidas, e avn esto es causa por que vuestras cartas que van libradas dellos no son obedesçidas ni conplidas commo deuen". (372)

Enrique IV responde escusándose "que por los dichos escandalos e mouimientos acaesçidos en estos dichos mis reynos de çinco annos a esta parte", yo no he auido lugar de traer asy ordenado mi Consejo commo devria e querfa", pero no obstante dice que está dispuesto a otorgar lo que le piden y para ello da "el cargo alos dichos arçobispo de Seuilla e obispo de Siguença que luego nonbren e diputen personas que esten erresidan enel mi Consejo de justiça e luego lo haran", "e he enviado mandar alos del mi Consejo que estan en Xatafe que luego vengán ala mi corte donde quier que yo estouiere". (373)

Dese luego, el texto no puede ser más expresivo y nos refleja claramente la crisis por la que está atravesando el Consejo, crisis, por otra parte, paralela a la crisis política que está atravesando el Reino. La inesperada muerte del príncipe Alfonso el año anterior hizo concebir esperanzas a los procuradores de las Cortes de Ocaña de que la situación podía mejorar, pero la realidad fue muy distinta y aún restaba una década de penurias para la Corona castellana.

---

(372) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 2, p. 771)

(373) Cortes de Ocaña 1469 (CLC. III, 2, p. 771)

En las primeras Cortes de su reinado, los Reyes Católicos reciben las mismas quejas que en Ocaña los procuradores exponían a su hermano Enrique IV: que el Consejo de la justicia no estaba reformado y sus consejeros eran mal pagados, por ello piden a los Reyes manden "nombra e poner persona ha biles e suficientes que esten e rresidan en el e les mande luego librar sus mantenimientos razonalbes por estos dichos dos annos en lugares ciertos donde les sean pagados delos dichos pedidos e monedas, segun vuestra alteza lo tienen otorgado e jurado, e otros algunos no rresidan en los dichos officios ni tengan votos enellos". (374)

Los Reyes responden nombrando un prelado, dos caballeros y seis letrados, junto con seis escribanos de cámara, para que estén y residan en el Consejo de la justicia. (375)

Se quejan igualmente los procuradores de que una de las causas del "grand desorden e abatimiento" de que adolecía el Consejo se debía a "los muchos titulos" que Enrique IV dio en su vida y que ahora los Reyes han dado a muchas personas haciéndolas del Consejo, por ello piden a los Reyes que de cada uno "su palabra e fee rreal de no dar de aqui adelante quitación de audiencia ni de alcaldia ni por el Consejo a ninguna persona, saluo fi fuere por vacaçion; pero si caso fuere que sea nesçesario de dar algun titulo de Consejo a alguna persona, que esto sea de acuerdo de todos los del vuestro Consejo que en vuestra corte rresidieren, e firmado el título de ellos en las espaldas, e de otra guisa que no vala ni sea rresçibido". (376)

(374) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 3, p. 13)

(375) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 3, pgs. 13-4)

(376) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 14, p. 73).

Pero la guerra civil retrasó lógicamente la labor reformista y restauradora de los Reyes Católicos que se manifiesta ya con toda su fuerza en las Cortes de Toledo de 1480.

En Toledo los Reyes emprenden esa "rreforma" que habían prometido cuatro años antes en Madrigal dedicando 33 leyes al Consejo Real.

Generalmente se ha venido destacando por la historiografía la importancia y la novedad que suponía la Ordenanza de Toledo de 1480 dentro de la política innovadora de los Reyes Católicos<sup>(377)</sup> pero lo cierto es que la Ordenanza de 1480 está casi íntegramente inspirada en la de Enrique IV de 1459.<sup>(378)</sup>

En cuanto a su composición, como se recordará, en 1459 se establecía que el Consejo quedara compuesto por don preladados, dos caballeros y ocho letrados; ahora en 1480, los Reyes disponen que el Consejo quede formado por un prelado, tres caballeros y hasta ocho o nueve letrados<sup>(379)</sup>. Desconocemos los motivos que llevaron a los Reyes Católicos a reducir el número de Prelados a uno, y en cambio, aumentar el de caballeros. Posiblemente ello se debe a que con esta fórmula no habría rivalidades entre los Prelados del Consejo para ocupar la Presiden-

(377) En este sentido se han pronunciado SEMPERE: Historia des Cortes... p. 197; GOS GAYON: Historia de la Administración... p. 100; DANVILA: El Poder Civil... t. I, p. 527 y más recientemente L.G. SE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones... pgs. 459-60 y G. VILLAPALOS: Los recursos... p. 268, entre otros.

(378) Fue MARTÍNEZ MARINA, conocedor de la Ordenanza de 1459 el único que negó la originalidad de la planta del Consejo de 1480 (Teoría de las Cortes... p. II, p. 340.)

(379) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 1. p. 111)

cia<sup>(380)</sup>, que, por otra parte, tal vez por no encontrar la persona idónea estuvo vacante entre 1480 y 1483<sup>(381)</sup>. La disminución del Prelado a cambio compensada por el aumento de un consejero "caballero".

---

(380) No son pocos los problemas que suscita la Presidencia del Consejo en el período que abarca el presente estudio, fundamentalmente debido a los escasos datos que han llegado hasta nosotros acerca de esta figura. Parece que el origen de la Presidencia hemos de buscarlo en la Ordenanza de 1390, que aunque la citada Ordenanza no le titule como tal, las atribuciones que le encomienda serían las propias de tal cargo. En 1406, Enrique III omitió dicha figura, aunque posiblemente Juan II la restableciera "de facto": "E mandó el Rey embiar por Don Sancho de Roxas, Obispo de Astorga, para que viniese a estar ende por Presidente del Consejo" (PEREZ DE GUZMAN: Crónica de Juan II, año 1431, cap. 17, p. 496). No hemos encontrado ningún testimonio documental o narrativo que vuelva hacer alusión al Presidente hasta el Reinado de los Reyes Católicos. Parece que desde 1476 a 1479 ocupó la Presidencia el Obispo de Cartagena, pero desconocemos los motivos por los que no fue cubierta en los años 1480, 1481 y 1482, siendo ocupada por el Arzobispo de Sevilla entre 1483 a 1487 y posteriormente por el Obispo de Coria (vid. Catálogo del Registro General del Sello, vols. II, III, IV y V, en sus advertencias preliminares).

(381) Ver nota anterior. Es posible también que durante estos años los Reyes ocuparan personalmente la Presidencia del Consejo, aunque no por ello queda justificada la ausencia de un miembro del mismo.

Igualmente la Ordenanza de Toledo sigue a la de 1459 en lo  
 concierne al lugar en donde se ha de celebrar el Consejo<sup>(382)</sup>,  
 las funciones del relator<sup>(383)</sup>, el modo de celebrarse las votaciones<sup>(384)</sup>

- 
- (382) "Otrosi ordeno que la Casa e Camara do el mi Consejo  
 oviere de estar que sea siempre en el mi palacio donde yo  
 posare, e si en el non oviere logar que los mis Aposenta-  
 dores den una posada para ello la mas cerca que se fallare  
 al mi Palacio e si yo non estodiere en aquel logar do estu-  
 diere el dicho mi Consejo, que se faga el dicho mi Consejo  
 en la posada que por mi fuere nombrada e si non ouiere po-  
 sada sennaladas para mi que se dipute por los de mi Consejo  
 otra casadonde se faga el dicho mi Consejo a las oras que  
 en esta mi Ordenanza dirá salvo los Domingos o las pasquas  
 e las fiestas de Jesucristo e las quatro fiestas principales  
 de Santa Marfa e de los Apostoles e de Sant Johan Baptista  
 e de la Asencion e de todos los Santos e de San Antonio e  
 que dure el dicho Consejo a lo menos tres oras como ayuso  
 se dirá (Ordenanza 1459, Santa Cruz, Ms. 3l, fols. 260r-  
 261v). Compárese con la ley del 2 del Ordenamiento de 1480  
 (CLC. IV, p. 112).
- (383) Ordenanza 1459: "Otrosi ordeno e mando que el mi relator  
 o logar teniente fagan relacion dela cosa sobre quese ha de  
 tener Consejo sin poner otra razon en medio, e que los del  
 mi Consejo non resuman razones algunas dela dicha relacion  
 salvo que digan suvoto e parecer, e que non repitan las -  
 unos lo que los otros digieren mas si les paresciere bien  
 lo dicho se alberguen a ello, esi quisieren alegar algunas ra-  
 zones se nuevo que las puedan decir e si el negocio fuere  
 tal que non aya enel grant dificultad de que entendiesen que  
 han asaz dicho, pregunten si estan todos en aquella conclu-  
 sion e aquello se despache" (Santa Cruz, Ms. 3l, fols. 261v-r)  
 Compárese con la ley 6 del Ordenamiento de 1480 (CLC. IV,  
 p. 113).
- (384) Ordenanza 1459, Santa Cruz, Ms. 3l, fols. 261r-262v a la q  
 sigue casi literalmente la ley 4 del Ordenamiento de 1480  
 (CLC. IV, p. 113).

la brevedad de las deliberaciones<sup>(385)</sup>, la citación de las partes en las peticiones que llegan al Consejo sobre "contiendas e sobre otros quales quier fechos que acaescieren ceulles o criminales"<sup>(386)</sup>, la designación de procuradores fiscales<sup>(387)</sup>, personal subalterno, horario, registro, etc.

En lo que respecta a las competencias, la Ordenanza de 1480 reproduce casi literalmente el capítulo 17 de la Ordenanza de 1459 que, como se recordará, establecía las competencias judiciales del Consejo<sup>(388)</sup>. No obstante en cuanto al aspecto de las competencias, la Ordenanza de 1480 ofrece una variante respecto a la Ordenanza de 1459, al no regular aquellos asuntos que eran librados solamente por los Consejeros, sino que en Toledo se distinguen, por un lado, los asuntos reservados a los Reyes en los que solamente aparece su firma, y por otro, los restantes asuntos que no son reservados a los Reyes y que, por tanto, pueden librar los consejeros.<sup>(389)</sup> Supone también una variante la introducción del recurso de la segunda suplicación o de las mil y quinientas para las sentencias dadas por el Consejo en grado de revista<sup>(390)</sup>

(385) Ordenanza 1459, Santa Cruz, Ms. 31, fols. 261r-262v a la que sigue casi literalmente la ley 4 del Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, p. 113).

(386) Ordenanzas 1459, Santa Cruz, Ms. 31, fol. 262r a la que sigue literalmente la ley 8 del Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, p. 114).

(387) Ordenanza 1459, Santa Cruz, Ms. 31, fols. 263v-r y Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, 10, p. 114).

(388) Ordenanza de 1459, Santa Cruz, Ms. 31, fols. 275r-276-r, en el Ordenamiento de 1480 corresponde a la ley 26 (CLC. IV, pgs. 118-9).

(389) Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, 26, pgs. 118-9).

(390) Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, 26, pgs. 118-9).

Pero al mismo tiempo, el Ordenamiento de 1480 introduce algunas novedades con respecto a la Ordenanza de 1459. Así, por primera vez se hace una clara distinción entre los consejeros "diputados" para residir en el Consejo, establecidos en la ley primera del Ordenamiento, los consejeros "caualleros o letrados que tengan título de Consejo" que quisieran entrar en el Consejo a "despachar sus negocios" y finalmente otros que tienen título de Consejero por razón de la dignidad.<sup>(391)</sup>

Sin duda alguna el Ordenamiento de Toledo no está introduciendo una novedad en lo que se refiere a los tipos de consejeros sino que se está limitando a regular una situación de hecho que se viene produciendo desde principios de siglo.

Vimos como Juan II al reducir su Consejo en 1419 mandó a sus casas a un buen número de consejeros que se irían turnando en el desempeño del oficio, pero no por esta medida perdieron su condición de consejeros "diputados" para residir en el Consejo y otros, que aunque no residan en la Corte ni libren los asuntos del Consejo conservan el carácter de consejeros en razón de su dignidad. Dentro de este grupo podríamos incluir a todas aquellas personas que por razón de su dignidad, ya sean eclesiásticas (arzobispos, obispos, capellanes) o nobleza titulada a los que se les concedió el título de consejeros.<sup>(392)</sup>

---

(391) Ordenamiento de 1480 (CLC. IV, 32, p. 120)

(392) Recuérdese la queja de los procuradores de las Cortes de Madrigal respecto al abusivo nombramientos de consejeros.

En Toledo los Reyes están limitando la actuación de estos consejeros de título o que por razón de su dignidad se intrometan en el despacho ordinario de los asuntos que estaba reservado a los "consejeros diputados".

Otra novedad se recoge en la ley 33 por la que los Reyes disponen "estar e entrar en nuestro Consejo dela justia el dia del viernes de cada semana", porque al Consejo llegan continuamente "negocios arduos" y es su voluntad saber "como e en que manera se despachan e que la justicia se dé prestamente", por ello mandan que sean los viernes los días en los que se "vean e se prouean las quejas, si algunas oviere, de los de nuestro Consejo e de los oficiales de la nuestra casa por que mas prestamente se prouean"<sup>(393)</sup>. El espíritu de este precepto debemos forzosamente relacionarlo con dos hechos a los que nos hemos referido ya en alguna ocasión. El primero se debe a la propia finalidad del poder real de mantener al Reino en justicia, como así mismo se expresa en el preámbulo de las Cortes de 1480<sup>(394)</sup>, y el segundo a la preocupación personal de los Reyes Católicos en el mantenimiento de la justicia que, como ya hemos visto, se sentaban a menudo en público a impartir justicia personalmente, satisfaciendo así las reiteradas peticiones de las ciudades en este sentido.

Finalmente debemos hacer referencia a una situación de hecho que se caracterizó en el reinado de los Reyes Católicos y que afectó a la manera de actuación del consejo Real; no estamos refiriendo a la división del Consejo.

---

(393) Ordenamiento 1480 (CLC. IV, 33, o. 120)

(394) Cortes de Toledo (CLC. IV, preámbulo p. 110).



De ello nos hace mención PULGAR en su Crónica, quien recoge esta circunstancia que debió darse desde los primeros momentos que Isabel accedió al trono<sup>(395)</sup>. El mismo PULGAR en varios pasajes de su Crónica, además de esta división provocada por la separación de los Reyes, señala otra circunstancia que alteraba la composición del Consejo Real en cuanto que los Reyes, en sus desplazamientos por los Reinos, se dirigían al Sur atravesando el Sistema Central.

La división del Consejo no es una situación totalmente nueva de este reinado. Ya vimos como en la minoría de Juan II la reina y Fernando de Antequera dividieron todo el aparato burocrático del Reino al marchar éste a Andalucía. Pero ahora se trata de otras circunstancias; son los propios Reyes quienes dejan sus "poderes reales para la administración de la justicia e de las otras cosas que ocurriesen" a una persona o dos y "con ellos mande quedar algunos doctores de su Consejo, para que oyesen las causas, e proveyesen en ellas por justicia".<sup>(396)</sup>

---

(395) PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos: "E porque algunas veces el Rey yva a vna parte de los rreynos e la Reina a otra para proueer en las cosas que ocurrian en ellos, y era necesario que cada uno dellos truxese su corte e su Consejo formado para entender en justicia e en las otras cosas que acaesçian..." (año 1475, cap. 22, p. 73). Sobre esto vid. GARCIA-GALLO: Los virreinos americanos bajo los Reyes Católicos en sus estudios de Historia del Derecho Indiano. pgs. 639 y ss.

(396) PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, año 1481, cap. 122, pgs. 444-5. Pasajes similares pueden verse también en PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, año 1477, cap. 84, p. 289 y año 1484, cap. 158, p. 115.

Sin entrar ahora a valorar, pues escaparía al objeto de este estudio, la naturaleza jurídica de ese poder de delegación que hacen los Reyes, lo que nos interesa ahora destacar es que se ha producido una escisión dentro de los miembros del Consejo, actuando un Consejo Real "allende de los puertos" para los que se encuentran al sur de la Sierra y otro Consejo "aquende de los puertos". Esta denominación variará, lógicamente, según nos encontremos al norte o al sur de la Sierra.

Son muy abundantes los datos que tenemos al respecto, es suficiente ver las introducciones de los Catálogos del Registro General del Sello en las que se nos especifica cuando el Consejo cuando los Reyes marchaban y dejaban parte de su Consejo librando allende o aquende los puertos.<sup>(397)</sup>

Se ha producido una división del Consejo atendiendo a conseguir una mejor administración en aquellos territorios en los que por ausencia del Rey podían verse afectados los particulares en la gestión de su asuntos y, en su caso, en el libramiento de sus pleitos. Como se recordará medida similar se tomó con respecto a la Audiencia en 1494 al crearse una nueva en Ciudad Real, que posteriormente se trasladaría a Granada, y que quedó consolidada definitivamente.

Hemos de pensar que el Consejo de allende tendría encomendadas la misma competencias en asuntos de gobierno y justicia como si los Reyes se encontraran con él, con la salvedad de la competencia territorial que vendría dada por la localización geográfica al Norte o al Sur de la Sierra o de los puertos.

---

(397) Véase los Catálogos del Registro General del Sello en sus advertencias preliminares, vols. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

### COMPETENCIAS

Es muy amplia la problemática que se nos presenta a la hora de estudiar las competencias del Consejo Real. Acabamos de ver en la evolución histórica como el Consejo, más que ninguna otra institución, estuvo sometido a las vicisitudes políticas de cada momento convirtiéndose dada su trascendencia de los -- distintos estamentos de la Corona castellano-leonesa. Ello hace que, en cada momento concreto y según la coyuntura política, las competencias, al igual que ocurriera con la composición, varien ostensiblemente, entorpeciendo de esta forma una de las competencias con lo que parece más oportuno seguir un criterio más elástico para poder ir señalando los cambios substanciales.

Por otra parte, las mismas Ordenanzas del Consejo no regulan en muchas ocasiones de forma nítida cuales son exactamente las competencias de este órgano, estableciendo, al mismo tiempo, diversos criterios de clasificación con lo que la tarea se nos presenta con mayor dificultad.

El criterio clasificatorio seguido por la mayoría de las Ordenanzas del Consejo (1387, 1390, 1406 y 1459) atiende fundamentalmente al aspecto formal de las cartas o provisiones. De este modo quedaban perfectamente diferenciados dos grandes grupos de negocios. En primer lugar, aquellos que por la naturaleza del negocio las cartas y provisiones debían ser libradas con intervención del Rey, con la firma del Rey; y, en segundo lugar, otro grupo de asuntos o negocios que eran librados por el Consejo sin intervención del Rey, y por tanto, sin su firma, pero que de hecho tales

cartas o provisiones tenían el mismo valor que si el Rey las hubiera librado personalmente.

Pero este criterio, creemos, es a todas luces insatisfactorio desde el momento en que, por las razones que acabamos de exponer, las Ordenanzas se limitan a recoger sin ningún tipo de sistemática todos aquellos negocios o asuntos que debían ser librados con o sin intervención del Rey. La clasificación, además se nos presenta más vidriosa en cuanto que unas Ordenanzas atribuyen librar al Rey determinados asuntos que otras, en cambio, incluyen como competencias que corresponden ser libradas por el Consejo sin intervención del Monarca.

Quizás un criterio más adecuado sería aquél que atendiera a las distintas materias (gobierno, gracia, justicia) que son resueltas en el Consejo, pero, como ya tuvimos ocasión de ver en el capítulo primero, durante la Baja Edad Media, no hay unos criterios delimitativos claros que nos permitan establecer en muchos casos, de acuerdo a nuestros esquemas actuales, qué asuntos son considerados de "gobierno" y qué asuntos han de considerarse como de "justicia", aun cuando en las mismas fuentes se confunden a menudo una y otra categoría, debido a esa amplia acepción de "justicia" que predomina en este período.

La distinción entre gobierno y justicia, como ya señaló el profesor VILLAPALOS<sup>(398)</sup>, no es tanto de tipo material como de tipo procedimental, en cuanto que cualquier persona, física o

---

(398) Los recursos... pgs. 119-20.

jurídica, que se sintiera agraviada por un determinado acto podía acudir indistintamente a la vía de justicia o a la vía de gobierno en solicitud de un resarcimiento por el daño causado. Por ello, desde nuestro punto de vista, resulta más adecuado estudiar las competencias del Consejo no atendiendo tanto a la materia como al modo de actuación o de resolución por el Consejo de los distintos asuntos que ante él se presentaban, puesto que, además, al contrario que en el caso anterior, las fuentes sí hacen una distinción de procedimiento o vías a los que se podía acudir a solventar una determinada cuestión. En este sentido nos encontramos con que hay una vía procesal para la resolución de pleitos entre partes y, finalmente, una vía de gobierno, o como la denominan las fuentes de "expediente". (399)

Escaparía del objeto del presente estudio el entrar a pormenorizar todas y cada una de las competencias y atribuciones que a lo largo del período estudiado fueron cometido del Consejo Real, ya sea en el ámbito normativo, elaborando, interpretando y publicando disposiciones, o interviniendo en el control de los oficiales públicos u otras actividades relacionadas con el gobierno de las ciudades; incluso, la misma vía de los asuntos de gracia o merced escapa al no afectar de plano en la administración de justicia, salvo en algunos aspectos muy concretos como pudiera ser el nombramiento de corregidores y oficiales de justicia y de ciudades y villas.

---

(399) Ya TORREANAZ destacó esta triple actuación del Consejo (Vid. Los Consejos... t. I, pgs. 234-5)

Además, estos asuntos de gracia y merced (presentación de dignidades eclesiásticas, concesiones de mercedes, tierras, tenen cias, nombramientos de oficios de la casa real y de villas y ciudades, perdones, etc.) son prácticamente los mismos en todas las Ordenanzas desde 1385, salvo algunas pequeñas matizaciones que hacen las Ordenanzas posteriores<sup>(400)</sup>. Dentro de ellos, los más conflictivos son, sin duda, los referentes a nombramientos de -

---

(400) Cortes de Valladolid 1385: "e otrosy las cosas que nos rreseruamos para nos, las quales son estas. Primeramente ofiçios de nuestra casa e dela nuestra abdiencia, otrosy ofiçios delas casa delos infantes, otrosi todas las tenencias, otrosi los adelantamientos, otrosi las alcalldias e alguazilagos que non son de fuero, otrosy los merinos delas çibdades e villas, otrosy poner corregidores e juezes, otrosy escriuanos mayores delas çibdades, e otrosy presentaciones de nuevas iglesias, otrosy tierras e graçias e merçedes e limosnas, otrosy perdon delos omiçianos" (CLC. II, p. 333). La Ordenanza de 1390 añade "legitimaciones e sacas e mandamientos de embaxadores que ayan de ir fuera del regno e ofizios de cibdades, e villas que non se dan por confirmación e nominas nuevas e suplicaciones de prelacias e de otros beneficios o presentamientos de padronados e capellanias e sacristanias", aunque estas han de ir al obispo y al Consejo (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 292r-293v). Véanse las Ordenanzas de 1406 (ed. Martínez Marina t Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, pgs. 26-7), Ordenanzas de 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols 117-8) Ya hicimos referencia al tratar en la evolución histórica a las duras restricciones que al respecto imponía la Ordenanza de 1442.

oficios tanto de la casa real como de las ciudades<sup>(401)</sup>, al igual que los referentes a nombramientos de corregidores<sup>(402)</sup>, por la trascendencia de los dichos oficios de cara a la administración y gobierno del Reino.

Mucho más problemática se nos presenta la vía de expediente. Las Ordenanzas de Valladolid de 1385 no dejaban bien delimitadas las competencias del Consejo allí creado. Como se recordará sus competencias quedaban expresadas negativamente en cuanto que correspondían al libramiento del Consejo "todos los fechos del rregno, saluo las cosas que deuen ser libradas por nuestra abdiencia, e otrosy las cosas -dice el Rey- que nos rreseruamos para nos"<sup>(403)</sup>. Por tanto, en principio quedaba vedado al Consejo creado en Valladolid conocer de los asuntos judiciales, de competencia exclusiva de la Audiencia.

Es difícil precisar cuando se implantó el expediente como vía de resolución de las peticiones presentadas en el Consejo<sup>(404)</sup> pero sin duda, éste nace como una vía extraordinaria frente a la vía ordinaria de proceso característica de los órganos judiciales,

---

(401) Los oficios de la casa real en todas las Ordenanzas apa" recen como asuntos reservados al Rey; no así los oficios de villas y ciudades pues mientras los que son elegidos por "fue-ro" pueden ser confirmados por el Consejo, los restantes han de ser de designación real y, por tanto, de su competencia. No obstante, las Ordenanzas de 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fol 27lv) y la de 1480 (CLC. IV, 24, p. 117) atribuyen el nombramiento de todas las ciudades y villas al Rey.

(402) Mientras en 1385 queda bajo competencia exclusiva del Rey (CLC. II, p. 333), las restantes Ordenanzas establecen la iniciativa del Consejo, quien consultará al Rey sobre la persona idónea para el oficio y según la Ordenanza el nombramiento irá firmado por el Rey o por los consejeros. Finalmente, la Ordenanza de 1480, de nuevo atribuye a los Reyes en exclusivo nombramiento de los corregidores (CLC. IV, 24, p. 117).

(403) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333).

aunque, como veremos a continuación, el Consejo pronto empezó a conocer asuntos por vía de proceso. Será precisamente esta vía extrajudicial la que caracterizará la actuación del Consejo Real no sólo como vía reservada a él exclusivamente<sup>(405)</sup> sino también por la extraordinaria magnitud de asuntos que a través de ella se ventilaban.

Las primeras Ordenanzas del Consejo insisten una y otra vez en que los asuntos judiciales son competencia de la Audiencia<sup>(406)</sup> si bien ya en Briviesca se posibilitaba al Consejo de entender la "querrela de agrauio de alguna injustiça que fuere fecha en la nuestra abdiencia"<sup>(407)</sup>. Sin embargo, debemos pensar que se trata de un recurso extraordinario al que se acudía una vez agotada la vía judicial y sólo en caso de que el fallo de la Audiencia fuere considerado como "injusto".

En la Ordenanza que Juan I concede al Consejo en 1390 encontramos por primera vez referencia a un determinado tipo de peticiones que dan lugar a "Contiendas"<sup>(408)</sup>. Desconocemos cuáles

---

(405) Así lo expresan las Ordenanzas de la Audiencia de 1489 (Libro de Bulas y Pragmáticas... fol. 49v).

(406) En este sentido se expresan la Ordenanza de 1385 (CLC. II, p. 333), la Ordenanza de Briviesca de 1387 (CLC. II, 4, p. 381). Ordenanza de Segovia 1389 (Santa Cruz, Ms. 25, fol. 251r.)

(407) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 381).

(408) Ordenanza 1390: "Otrosi si alguna petizion vinier al Consejo sobre que algunos ouieren contiendas e entendieren los del Consejo que cumple llamar a las partes, mandelas llamar el dicho Obispo a amas o a la una della para se informar bien dello segunt entendier que cumple" (Santa Cruz, Ms. 25, fol. 287r.).



eran estas peticiones, pero el texto parece que esta aludiendo a un modo de resolución de determinado tipo de asuntos distinto al modo usual de librar las peticiones que son presentadas ante el Consejo, facultando a los consejeros, si lo cree oportuno, a citar a una o ambas partes "para se informarse bien dello-.

Nos encontramos aquí, a nuestro entender, ante una vía de resolución de las peticiones totalmente nueva y sin precedentes. Desde luego las fuentes no nos permiten asegurar, dada su total escasez para estos años, que estas peticiones puedan ser iniciadoras de un expediente, pero es muy significativo que esta misma disposición o con redacción muy similar haya sido recogida por las Ordenanzas de 1406, 1442, 1459 y 1480<sup>(409)</sup>. No obstante, si se conservan innumerables expedientes de finales de siglo XV y principios del XVI; en ellos, frecuentemente, el Consejo, ante un punto conflictivo, durante la deliberación solicitaba a la parte más información acerca de su petición<sup>(410)</sup>. Ello nos lleva a pensar que dese muy pronto, finales del siglo XIV, el

---

(409) Ordenanza 1406, ed. Martínez Marina: Teoría de las Cortes... t. III, apend. II, pgs. 23-4: "Otrosi alguna petición viniere al consejo sobre que algunos hobieren contiendas o entendieren los del mi conculpe llamar a las partes, llamenlas ambas a dos e a la una dellas para se informar sobre ello segund entendieren que cumple".

(410) Puede verse al respecto la respuesta del Consejo Real - dirigida al Concejo de Segovia solicitándole que le presente la sentencia, a la que alude en su petición, por la que se condenaba al obispo, dean y cabildo a sufragar los gastos de unos pleitos sobre términos (A.G.S. Cámara de Pueblos. Segovia, leg. 19) He manejado una transcripción del mismo que me ha sido cedida por la Srta. L.F. Mateo. Sobre la tramitación del expediente véase VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 155 y ss.

Consejo ya venía conociendo por vía de gobierno aquellas peticiones que solicitaban la reparación de los agravios ocasionados por determinados actos de gobierno.

El origen de esta vía de gobierno debemos buscarlo en primer lugar en la configuración del Rey como juez supremo del Reino en el que reside toda la jurisdicción, y en segundo lugar, en todos aquellos casos que el Rey, haciendo uso precisamente de su mayoría de justicia, se reservaba para su exclusivo conocimiento. Si a ello añadimos que al Consejo se le considera, al igual que la Audiencia, mediante una "fictio iuris", como si fuera la misma persona del Rey, pues es fácilmente comprensible que muy pronto se desarrollara en el seno de este órgano esta vía de gobierno que hasta entonces había correspondido al Monarca.

Lo cierto es que ya en el primer tercio del siglo XV las fuentes tanto narrativas<sup>(411)</sup> como legislativas<sup>(412)</sup> ya recogen esta vía extraordinaria de gobierno por cuanto que "por vía de pleito non podían alcanzar cumplimiento de justicia"<sup>(413)</sup>. La vía de expediente, característica del Consejo, parece según el testimonio de

---

(411) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II: "...mas todo lo que se facia en los fechos de la justicia e de la hacienda del Rey e de otros cualquier negocios, pasaba por los del Consejo del Rey; el cual Consejo estaba en dos partes, el uno para las cosas que se libraban de gracia e por expediente, e el otro para las de justicia, como la historia ha contado en su lugar. E porque mejor e más sin sospecha los fechos de gracia e expediente se despachasen, el Condestable tovo manera con el Rey que éstas, especialmente, fiasse de los doctores Periañez e Diego Rodriguez de Valladolid... (año 1431, cap. 24, p. 309).

(412) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 12, pgs. 128-9).

(413) Cortes de Zamora 1432 (CLC. III, 12, p. 128).

GARCIA DE SANTA MARIA<sup>(414)</sup>, que era, junto a la de gracia, la vía ordinaria por la que se ventilaban los asuntos en el Consejo secreto (recuérdese la división del Consejo que lleva a cabo Juan II en 1419), mientras que en el Consejo de la justicia parece que quedaban aquellos otros asuntos que debían librarse de acuerdo a la vía de proceso. Sin embargo no está muy clara esta delimitación de vías entre el Consejo secreto y el Consejo de la justicia, ya que tan sólo cinco años más tarde, en las Ordenanzas de Guadalajara de 1436, encontramos que el Consejo secreto acordaba cartas "quier sean de justicia o de expediente"<sup>(415)</sup>. Por otra parte, las distintas Ordenanzas desde 1390, al recoger esta vía de gobierno, se refieren al expediente como un modo de librar los pleitos del Consejo en general, sin especificar Consejo secreto o Consejo de la justicia. Ello nos lleva a suponer que el expediente era utilizado tanto en el Consejo secreto como en el de la justicia.

Qué materias se libraban por expediente?. Resulta prácticamente imposible recoger de un modo exhaustivo todos aquellos casos que podían ser librados por expediente dada la alternatividad de vías, de proceso o de expediente, a las que podía optar el agraviado para que le fuera resarcido su derecho. En este sentido ya el profesor VILLAPALOS, recogió una amplia tipología de aquellos actos que producían agravio: actos de gobierno contra derecho,

---

(414) Ver texto de la nota 411.

(415) Libro de Bulas y Pragmáticas... fol. 91r. Las notas distintas entre la vía de expediente y de proceso pueden verse en VILLAPALOS: Los recursos... pgs. 122-5.

ya sea porque inciden sobre las situaciones jurídicas o modificando sus derechos; actos de gestión y ejecución que acarrearán una infracción de la normas; conflictos jurisdiccionales, etc. , por ello, en este aspecto, nos remitimos al trabajo del citado profesor.

Los expedientes provocados por una petición de reparación de agravios tenían generalmente como resultado disposiciones emanadas por el Consejo destinadas a los jueces ordinarios para que administraran justicia a la parte agraviada (cartas incitativas de justicia) o, según la importancia y naturaleza del caso, se nombraban jueces comisarios con o sin poder de determinación.

Ya hemos aludido en varias ocasiones a como el Consejo - Real es un órgano que se tipifica en su nueva forma sin competencias judiciales de ningún tipo pues éstas eran de conocimiento exclusivo de la Audiencia<sup>(417)</sup>. También hemos aludido a como tan sólo dos años más tarde, en la Ordenanza de Briviesca de 1387, se facultaba al Consejo a conocer de la "querrela de agrauio de alguna injustiça que fuere enla nuestra abdiencia"<sup>(418)</sup>

Tal como aparece en el texto parece que se trata más de un recurso "extraordinario" que de una alzada pues, como ya tuvimos ocasión de ver, las Cortes de Toro de 1371 disponían que del fallo de la Audiencia no cabía "alçada nin ssuplicaçion" alguna

(416) Véase Los recursos... pgs. 35-114.

(417) Cortes de Valladolid 1385 (CLC. II, p. 333)

(418) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 4, p. 189)

(419) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 1, p. 189)

Tampoco parece que se trata de una "suplicación" pues estas mismas cortes de Briviesca, en donde se regula este recurso, ni las de Segovia de 1390 hacen referencia a que pueda suplicarse al Consejo de los fallos de la Audiencia. Sin embargo las fuentes no nos especifican los casos en los que se podía interponer este recurso de "injusticia" ante el Consejo. En todo caso, lo realmente importante de destacar es que se posibilita al Consejo revisar los fallos de la jurisdicción ordinaria; por primera vez se le otorga al Consejo una competencia judicial aunque sólo se en casos excepcionales.

Por lo demás, la Ordenanza de Briviesca de 1387, lo mismo que la de Valladolid de 1385, reitera la atribución de los asuntos de justicia a la Audiencia<sup>(420)</sup>, y en este mismo sentido se expresa también la Ordenanza de 1389<sup>(421)</sup>.

Desde principios del siglo XV tenemos datos acerca de las competencias judiciales del Consejo<sup>(422)</sup>, reconocidas implícitamente años más tarde en la pragmática de Juan II por la que se limitan los oficiales que pueden presentar sus pleitos en la Corte ante

---

(420) Cortes de Briviesca 1387 (CLC. II, 1. 381)

(421) Ordenanza 1389 (Santa Cruz. Ms. 25, fol. 251r)

(422) Véase el requerimiento presentado ante el Consejo Real de fecha 17 de enero de 1400 para que la querella que contra su representado se había interpuesto ante el Consejo, sea remitida a la Audiencia (MILLARES CARLO: Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, serie II, doc. pgs. 335-7).

el Consejo Real<sup>(423)</sup> y en la pragmática de 1427 destinada a limitar las citas de los doctores que podían ser alegadas en los pleitos.<sup>(424)</sup>

Ante estos datos es incuestionable que el Consejo Real conociendo de pleitos entre partes por lo que forzosamente hemos de cuestionarnos por qué se ha producido esa avocación de competencias o qué razones han podido propiciar el conocimiento de pleitos entre partes en el Consejo Real.

Creemos que son varias las razones que han dado lugar a que el Consejo Real, pese a las prohibiciones expresas de las primeras Ordenanzas, llegara a conocer por vía de proceso.

En primer lugar la propia naturaleza del Consejo, que representa a la persona del Rey y actúa en nombre del Rey. En este sentido el Consejo Real está dotado también de la "mayoría de justicia" inherente del Monarca. Estas mismas razones eran las que habían motivado el conocimiento de asuntos por vía de gobierno por parte del Consejo. Si a esto añadimos que desde 1390 la Audiencia ha quedado fija en Segovia y posteriormente, en el reinado de Enrique III<sup>(426)</sup>, podemos comprender mejor esa tendencia del -

(423) Pragmática de 23 de enero de 1410 en Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 47v-r.

(424) "En los pleitos que de aquí adelante se movieren e comenzaren e tractaren, asy ante mi como en el consejo o ante los mis oydores de la mi audiencia e alcaldes e notarios e juezes de la mi corte, e ante qualesquier mis juezes..." (Vid PEREZ DE LA CANAL: La pragmática de Juan II de 8 de febrero de 1427 en AHDE 26 (1956), pgs. )

(425) Véase al respecto el capítulo anterior en el que nos ocupábamos de la sede de la Audiencia.

(426) Ya en 1394, los oidores se quejaban al Rey de como "algunos ganaban comisiones y otras alualaes e cartas o manda-

Consejo a ir conociendo pleitos entre partes. Además hemos de suponer que intervendrían también razones de tipo político en determinados casos que interesaban al Rey o al Consejo conocer de ellos <sup>(427)</sup> para lo cual o enviaban una inhibitoria a la Audiencia o nombraban juez comisario al respecto. <sup>(428)</sup>

Esta creciente tendencia a la avocación de los pleitos dió lugar a reiteradas quejas por parte de oidores y procuradores y quedaron plasmadas en una serie de normas, casi simultáneas, por las Juan II se dispone a dar fin, a esta situación. En 1428 el Rey, además de mandar a todos los grandes del Reino "que se fuesen para sus casas", dispone que "en el Consejo non conociesen de los pleitos de justicia que eran entre partes, nin ficiesen comisión de ellos a otras personas, mas que todos fuesen remitidos

---

(426) /...mientos de mi por las quales delos pleytos que ante vos (oydores, alcaldes y notarios de la Audiencia) estauan pendientes, comenzados o concludos fago comisión -dice el Rey- algunas vezes, o mando que no procedades enellos "porque "es mengua dela mi justicia e delas partes e menos cabo delos vuestros oficios" (Bulas y Pragmáticas, fols 46v-r), Más tarde, como se recordarán, Enrique III suspende del oficio a todos los oidores de la Audiencia y ordena una pesquisa sobre la actuación de cada uno de ellos (Crónica de Enrique III, cap. 19, p. 268).

(427) En el caso de los oficiales de la Corte recogido en la Pragmática de Juan II de 1410.

(428) Recuérdese, además, que desde 1419 se ha producido una clara distinción entre el Consejo secreto y el Consejo Publico en el que, sin duda, se ventilarian todas estas causas.

a la Chancilleria, salvo algunos, e pocos, de cierta manera que se viesen en el Consejo."<sup>(429)</sup>

El 16 de abril de ese mismo año, Juan II se dirige a los de su Consejo y alcaldes de corte así como a cualquier persona que por comisión conocían "pleytos en su casa e corte" comunicándoles que es su voluntad "remitir todos e qualesquier pleytos que ante qualquier de vos estan pendientes entre qualesquier concejos e personas de qualquier estado e condición ante los mis oydores dela mi audiencia, saluo los pleytos que son delos que se deuen librar enel mi consejo segund las leyes fechas en razon del dicho mi consejo e saluo los pleytos que segund la ordenança por mi fecha en Tordesillas pueden ser traydos a la mi corte"<sup>(430)</sup> A finales de ese mismo mes, el día 27, Juan II se dirige de nuevo a los de su Consejo, alcaldes de casa y corte y personas a las que el Rey por comisión las faculta para conocer pleitos en la Casa y Corte, en los mismos términos que hiciera once días antes, pero en esta ocasión especifica más, pues si en la primera remitía la Audiencia los pleitos pendientes entre "concejos e personas de qualesquier estado e condición", ahora aclara que son los pleitos pendientes

(429) GARCIA DE SANTA MARIA: Crónica de Juan II, año 1428, cap. 5, p. 10. En el mismo sentido se expresa PEREZ DE GUZMAN en su Crónica de Juan II si bien especifica que esos "algunos e pocos" pleitos que debían verse en el Consejo eran "los de sus oficiales" (año 1428, cap. 4, p. 445).

(430) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 47 r.



"entre qualesquier concejos e monesterios e caualleros e aljamas; en qualquier manera; sobre qualesquier causas e negocios e cada uno de vos que yo oue remitido; e si necesario es agora por esta mi carta remito todos e qualesquier pleytos que ante qualesquier de vos en quales quier manera estan pendientes", revocando el Rey al mismo tiempo "qualesquier cartas e comisiones e poderes que por las dichas cartas de comisiones yo he dado e di aqualquier o qualesquier de vos para conoscer delos dichos pleytos".<sup>(431)</sup>

Sin duda la ambigüedad del primer albalá con respecto a las partes (ahora se incluyen monasterios y aljamas) y con respecto a la fase en que se encontrara el proceso, hizo que el Rey se pronunciara en este otro albalá para matizar lo dispuesto el día 16.

Pero prácticamente un mes más tarde de haberse dictado la primera disposición, el 19 de mayo, Juan II se dirige de nuevo a los del su consejo y alcaldes de corte por que "algunos de vos dudades en que algunos delos tales pleytos deuen quedar aqui en la mi corte aunque no sean delas cosas que segund la ordenanza del Consejo se deuen ver e librar enel dicho consejo; ni delos que por la dicha ordenanza de tordesillas pueden ser traydos aqui en la mi corte; e por otras causas e razones que a ello vos mueven". Sin embargo el Rey reitera su intención de que sean remitidos a la Audiencia y Chancillería todos los pleitos y causas civiles y criminales que están pendientes en la Corte ya sean de iglesias

---

(431) Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 48 v-r.

monasterios, concejos, universidades, aljamas, comunidades, como de cualquier otra persona de cualquier estado, condición, preminencia o dignidad, sobre cualquier tipo de causa, por simple querella como en grado de apelación, "saluo aquellos pleytos e negocios e causas que son e fueren entre aquellas personas e sobre aquellas cosas que segund las leyes e ordenanças del mi consejo se pueden e deuen oyr e librar e expedir por los del mi consejo; esso mismo saluo los que son o fueren de aquellas personas que segund la dicha ordenança de tordesillas pueden traer sus pleytos a la mi corte". (432)

Al mismo tiempo se dispone "que no se fagan comisiones algunas de aqui adelante de pleytos algunos ceuiles ni criminales aqui en la dicha mi corte ni se oyan ni lobren en el dicho mi consejo". (433)

Pero lo más destacable e importante de esta carta real es que, pese a la remisión general que se hace de todos los pleitos a la Audiencia, el Rey se reserva de "oyr e librar aqui en la mi corte algunos pleytos e causas ceuiles e criminales" y los oirá "e mandaré oyr e librar a quien la mi merced fuere". (434)

Nos encontramos, pues, ante una situación de hecho muy clara: el Consejo viene entendiendo de pleitos entre partes ya sean civiles como criminales, ya sea en apelación como en primera instancia o por vía de comisión. Pero el problema se nos presenta desde el momento en que en las tres disposiciones co-

---

(432) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 48 v-r.

(433) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 48r.

(434) Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 48r-49v.

mentadas, además de la pragmática de 1410, se refieren a unos "pleytos que son delos que deuen librar enel mi consejo segund las leyes fechas en razon del dicho mi consejo". De qué leyes se trata?. Son las Ordenanzas del Consejo?. Que sepamos, en las Ordenanzas que hemos manejado con anterioridad a 1428, ninguna hace mención al conocimiento procesal del Consejo. Posiblemente se trate de alguna Ordenanza complementaria que Juan II concediera al Consejo "público" o de la justicia, pero que desconocemos.

El Consejo, por tanto, se ha convertido en estos años en el máximo Tribunal del Reino en detrimento de la Audiencia que, como vimos en el capítulo anterior, ha entrado en una profunda crisis<sup>(435)</sup> debida, precisamente, a la importancia creciente del Consejo en el conocimiento de pleitos entre partes.

La Ordenanza del Consejo de la justicia de 1432 reitera estas medidas de 1428 al disponer "que las dichas cartas (que acuerda el consejo) nin algunas dellas non sean de comisiones nin de apellaciones algunas para que se oian, nin libren en la Corte por quanto segunt la ordenanza del Rey, las tales apellaciones deven ir a la Audiencia e Chancilleria del dicho Sennor Rey e si contra esto algunas cartas se libraren, que el Registrador las non pase al registro nin el Chanciller al Sello"<sup>(436)</sup>. Se prohíbe igualmente que los del Consejo de la justicia "non libren cartas de comisión para si mismo nin para alguno dellos en negocios nin causas ceviles e creminales."<sup>(437)</sup>

---

(435) Juan II, como se recordará, en las primeras Cortes de su mayoría de edad, reorganizó la Audiencia, pero el citado ordenamiento no se debió de cumplir como bien denuncian los procuradores de las Cortes de Palenzuela de 1425 (CLC. III, I, p. 51).

(436) Ordenanza 1432 (Santa Cruz Ms. 27, fols. 344r-345v).

(437) Ordenanza 1432 (Santa Cruz Ms. 27, fol. 345v).

Pero de poco sirve la dispuesto en la Ordenanza si la Audien\_  
cia prosigue en el más absoluto desorden<sup>(438)</sup>, por lo que el Conse-  
jo, seguramente al amparo de la cláusula de reserva de jurisdic-  
ción que Juan II disponía en su carta real del 19 de mayo de 1428,  
ha seguido conociendo de los pleitos entre partes valiéndose de la  
comisión. Por ello las Ordenanzas de Guadalajara de 1436 recogen  
la doble vía, de justicia y de expediente, por la que pueden acor-  
dar cartas los del Consejo secreto<sup>(439)</sup>, medida que seguramente  
es aplicable al Consejo de la justicia si nos atenemos a las que-  
jas que los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1440 le  
presentan al Rey por los "mucho incouenientes e dannos que dexa-  
mos agora de dezir" que se siguen "de traher los pleytos a vues-  
tro Consejo"<sup>(440)</sup>. El Rey, una vez más, contesta que "se guarde  
çerca desto las leyes por mi fechas e ordenanzas", mandando a  
los del Consejo "que se non entrometan de cosa alguna delo que  
pertenesçe ala mi audiençia syn mi especial mandado, lo qual  
yo non entiendo mandar syn grant causa vrgente o nestçesaria o  
expidiente o muy conplidera ami seruiçio"<sup>(441)</sup>. Es decir, Juan II  
insiste en su reserva de jurisdicción que, en definitiva, es la

---

(438) Véanse las quejas de los procuradores en Cortes de Za-  
mora 1432 (CLC. III, 1, p. 117), Cortes de Madrid 1433  
(CLC. III, 1, pgs. 161-2) y Cortes de Madrid 1435 (CLC.  
III, 1, pgs. 185-6).

(439) Libro de Bulas y Pragmáticas, fol. 91r.

(440) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, p. 383)

(441) Cortes de Valladolid 1440 (CLC. III, 7, pgs. 383-4).

vía de la que el Consejo se sirve para seguir conociendo pleitos.<sup>(442)</sup>

La Ordenanza de 1459 matiza en muchos aspectos e introduce algunas novedades en el conocimiento judicial del Consejo Real.

En primer lugar establece que dos doctores o letrados del Consejo han de ir todos los viernes a las cárceles a "entender e ver en los fechos de los presos que en ellas están e negocios que en ellas penden así Civiles como Criminales juntamente con los mis alcalles e sepan razón de todo ello e fagan lo que fuere justicia brevemente salvo los que esto dieren presos sobre mis rentas"<sup>(443)</sup>. Queda establecido de esta forma un tribunal colegiado compuesto por los alcalles de casa y corte, que acompañaban siempre al Rey<sup>(444)</sup>, que conocería de todas aquellas causas civiles y criminales, en casos de corte, como en apelación, que se

---

(442) Años antes, en las Cortes de Toledo de 1436, los procuradores habían solicitado que el Consejo conociera judicialmente un caso muy concreto debido a que los oidores y oficiales de la Chancillería "ganauan muchas cartas de emplazamientos de la dicha audiencia donde tales oidores tienen oficios" y por tanto que ellos "son casi jueces e partes" piden que ninguno de los oidores u oficiales de la Audiencia y Chancillería, ni sus lugartenientes ganen cartas de emplazamiento para la misma y si tales oficiales tienen demanda contra alguien que lo emplazan "para ante los del vuestro Consejo e que allí los demandasen e fenesciesen los pleytos", si bien el Rey no accede a lo pedido (CLC. III, 33, pgs. 300-1).

(443) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols 265r-266v).

(444) Al contrario de los alcalles de corte y chancillería que, como se recordará, residía en la Audiencia y Chancillería.

presentaran ante el Rey en sus desplazamientos por el Reino o en donde estuviere fijada la Corte temporalmente y que pertenecían a la jurisdicción real. Quedaban exceptuados aquellos asuntos relativos a las rentas reales que pertenecían a la jurisdicción de los Contadores Mayores.

Por primera vez, contra de lo dispuesto en Ordenanzas anteriores, se posibilita al Consejo a "dar Comisarios sobre querellas o demandas que non son comenzadas en la dicha mi Audiencia o Chancilleria e alcalles delas que puedan facer las dichas comisiones para qualquier de los del mi Consejo o para otras qualesquier personas, que ellos entendieren que cumple aunque las causas sean tocantes a mis oficiales et a otras qualesquier personas non embargante la ley, que el rey don Johan, mi Padre que Dios haya, fizo e ordenó, que dice que los del mi Consejo non pudiesen librar comisiones para si mismos"<sup>(445)</sup>. Igualmente el Consejo puede librar "cartas de justicia delos oficiales de mi Casa que segund leyes demis regnos pueden traer sus pleytos ante mi e ser convenidos"<sup>(446)</sup>, además de las cartas incitativas de justicia para Adelantados, Merinos, oidores, alcaldes de la Audiencia y corregidores<sup>(447)</sup> y cartas de reparaciones de agravios<sup>(448)</sup>. Finalmente, el Consejo está facultado para "dar juezes de suplicaciones de agravio o nulidad en aquellos logares e en aquellos casos, que non pertenesca a la Audiencia e Chancilleria e oydores e alcalles della"<sup>(449)</sup>.

(445) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols. 274v-r).

(446) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols. 272r-273v).

(447) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fol. 273v).

(448) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fol. 273v).

(449) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fol. 274v).

Pero en donde queda reconocido el Consejo como órgano judicial ordinario es en el capítulo 27 de estas Ordenanzas en el que, además, nos expone los motivos por los que el Consejo queda convertido en un órgano de la jurisdicción ordinaria: "et por que acaesce muchas vezes que vienen al mi Consejo algunos negocios e causas ceviles e creminales que brevemente a menos costa delas partes e a bien de los fechos se podrian expedir e despachar enel dicho mi Consejo sin facer dello comsion es mi merçet e mando que los del mi Consejo tengan poder con jurisdicion cada que entendieren que cumple a mi seruicio e a bien de las partes para conoser de los tales negocios e los ver e librar e determinar simplemente e de plano sin estrepitu e figura de juicio solamente sabida la verdat"<sup>(450)</sup>. De esta forma quedaba reconocida la competencia judicial del Consejo en todo tipo de pleitos por razones de economía procesal para lo que se disponía que tales pleitos se ventilaran de acuerdo al proceso sumario ordinario.<sup>(451)</sup>

De los fallos que los del consejo dieran en tales pleitos dispone la Ordenanza que "non aya logar a apelacion nin suplicacion nin recurso alguno saluo para ante los mismos los quales ayan de ver el proceso del negocio e que de la sentencia o determinacion que ficieren non pueda auer ninguno de los dichos remedios e recursos mas que aquello sea executado"<sup>(452)</sup>. Por tanto, -

---

(450) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols. 275r-276v)

(451) Sobre este procedimiento sumario, nos remitimos a lo dicho en el capítulo anterior cuando tratamos de la Audiencia.

(452) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fols. 276v-r).

vista la sentencia, en grado de revista no cabía la segunda suplicación o la de "las mil y quinientas", ejecutándose inmediatamente lo dispuesto en ella.

La Ordenanza reitera lo dispuesto que el Consejo no debe dar cartas de comisiones de apelaciones para que se oigan y libren en la Corte, por cuanto que las apelaciones deben ir a la Audiencia, salvo "si la tal apelación fuere de alguna comisión que por mi o por mi consejo fuere dada en que se reserve la (453 apelación para ante mi o en otro alguno delos casos suso dichos".

A la hora de valorar esta Ordenanza de 1459 debemos forzosamente destacar, a la luz de los datos anteriores, como este proceso progresivo de intervención del Consejo en asuntos judiciales, ha culminado en esta Ordenanza con el reconocimiento del Consejo como un auténtico Tribunal de justicia al que se le ha dotado prácticamente de una potestad judicial ilimitada en cuanto que - puede actuar ya bien sea a instancia de parte, o de oficio, por medio de la comisión, en casi la totalidad de los asuntos de justicia que se suscitaron en el Reino.

No ha de entrañarnos, pues, que una vez superada la crisis de los últimos años del reinado de Enrique IV y la guerra civil que enfrentó a los partidarios de Juan e Isabel tras la muerte de aquel, los Reyes Católicos, en las Cortes de Toledo de 1480, tomaran como modelo la Ordenanza de 1459 para dar planta a

---

(453) Ordenanza 1459 (Santa Cruz. Ms. 31, fols. 277r-278v).



su Consejo Real. (454)

Un Consejo Real con estas características y estas amplias facultades jurisdiccionales favorecía a todas luces la política autocrática y absolutista de los Reyes Católicos, quienes por medio de la Comisión intervenían en todos los ámbitos jurisdiccionales, haciendo prevalecer de este modo su mayoría de justicia.

- 
- (454) Respecto a la planta del Consejo, PULGAR, nos han dejado un testimonio no muy claro al respecto cuando nos dice que "En aquellas Cortes de Toledo, en el palacio donde el Rey e la Reyna posauan, todos los días avia cinco Consejos, en cinco apartamientos que avia en el palacio real: en el vno estaua el Rey e la Reyna con algunos de su Consejo que ellos llamavan, para ver e entender en las embaxadas de los reynos estraños que venian a ellos, e las cosas que se tratauan en corte de Roma con el Santo Padre, e con el rey de Francia, e con los otros reyes, e para las otras cosas que heran necesarias de ser proveer por expediente. En otra parte estauan perlados e doctores, que entendian de oyr las peticiones que se davan, e de dar cartas de justicia; e estos tenian tanto trabajo en ver demandas e respuestas e procesos e ynformaciones que venian de todas las partes del reyno ante ellos, que no pudiendo sufrir el trabajo, por ser muchas las causas, e de diuersas calidades, repartian entre si los para hazer relación en aquel Consejo, e despues todos juntos vian las relaciones de los procesos e davan secretamente sus votos e pronunciavan juntos las sentencias definitivas en las causas; aviéndolas primero platicado, oyendo las disputas de los letrados" (PULGAR: *Crónica de los Reyes Católicos*, año 1480, cap. 115, pgs. 421-2). A continuación, PULGAR nos describe que en otra parte del palacio se reunia el Consejo de Aragón en otra los "diputados de las Hermandades y en otra los Contadores y oficiales de Hacienda. El texto claro en cuanto que se trata de cinco "Consejos" perfectamente diferenciados, pero el problema se suscita en el momento en que la Ordenanza de 1480 no hace esa distinción sino que, siguiendo en este punto tambien a la de 1459 (Santa Cruz. Ms. 31. fol. 269r) los "grandes tratos e de embaxadores" estan atribuidos al -

De la intensa actividad judicial llevada a cabo por el Consejo en estos años se hace eco en la Crónica de PULGAR cuando nos da noticia de que "porque en la corte se tratavan muchos - - pleytos e causas ante los del Consejo, los quales eran tantos e de tantas calidades, que ynpedian a los del Consejo que no pudiesen entener en las cosas que ocurrian e avian de librar por expediente, la Reyna acordó que todos los pleytos que eran entre - partes e pendian en su corte ante los del su Consejo por demanda e respuesta, se remitiesen a su chançilleria, que estaua en Valladolid...E mando que asy los pleytos que fuesen de todo el - reyno por apelacion, como los otros que eran casos de corte, fuesen a se tratar e definir en la chançilleria; porque los del Consejo que en ella estauan quedasen libres para entender en las mas cosas que ocurrian en su corte"<sup>(455)</sup>. El Consejo se habia convertido de hecho en el más alto Tribunal del Reino entendiéndose en él, como se puede apreciar en la noticia que nos ha

---

(454) /...Consejo Real. A nuestro parecer, PULGAR está recogiendo la distinción entre el Consejo de la justicia y el consejo "privado o secreto" en el que los Reyes se reunian sólo con algunos de sus consejeros para entender los asuntos de la política internacional y, suponemos concernientes a las Coronas de Castilla y Aragón, así como otras "cosas que - heran necesarias de se proveer por expediente". Ante el silencio de las fuentes, respecto a las actuaciones de este Consejo en la política internacional de los Reyes católicos, es difícil ver en él un "Consejo de Estado", pero quizás el Consejo privado de los Reyes en cuanto que trataba con toda seguridad de los asuntos concernientes a ambas Coronas, pudo ser un antecedente remoto del Consejo de Estado institucionalizado por Carlos I.

(455) Crónica de los Reyes Católicos, t. II, año 1485, cap. 181 pgs. 205-6.

dejado el cronista, todo tipo de pleitos, ya fueran por casos de Corte como en grado de apelación. La medida de los Reyes quedó plasmada en las primeras Ordenanzas de la Audiencia dadas en Córdoba en 1485<sup>(456)</sup> en las que, como vimos en el capítulo anterior, se disponían que era competencia de los oidores todos los pleitos en primera instancia así como en grado de apelación y suplicación, al mismo tiempo que se encomendaba a los alcaldes de Corte y Chancillería el conocimiento de todos los pleitos criminales que ante ellos se presentaran "así por casos de corte como por apelacion o suplicaçion".<sup>(457)</sup>

Esta remisión general de los pleitos entre partes a la Audiencia queda en mejor medida especificada en las Ordenanzas que los Reyes conceden a la Audiencia en 1489, en cuanto que éstas recogen cuales son las materias de justicia privativas del Consejo: "pero que los del nuestro consejo puedan entender e conocer en cosas de expediente e en las residencias e mandar fazer pesquisas e las de ver e determinar e en otros qualesquier casos que vieremos que cumple a nuestro seruiçio en que nos les mandaremos especialmente entender e conocer e determinar".<sup>(458)</sup>

Al Consejo le quedaba reservada la vía de expediente o de gobierno, las residencias y, lo que es más importante, podía seguir interviniendo en cualquier tipo de pleitos por medio de

(456) Publicadas por PEREZ DE LA CANAL: La justicia en la Corte... apend. I, pgs. 443-61.

(457) Ordenanzas de Córdoba 1485, caps. 3 y 4, ed. Perez de la Canal, p. 444.

(458) Ordenanzas de Medina del Campo 1489, en Bulas y Pragmáticas, fol. 49r.

jueces pesquisidores, de cuyos fallos sólo se podía apelar ante el Consejo. Al mismo tiempo, los Reyes se reservaban el derecho de intervenir, en virtud de su mayoría de justicia, en todos aquellos casos que cumplieran a su servicio, que, por lo general, encomendaban su conocimiento al Consejo para que éste, mediante el nombramiento de un juez comisario, interviniera en la resolución del pleito.

Por lo demás la Ordenanza de 1489, recogía la remisión general por la que todos los pleitos que son sobre casos de corte en primera instancia que debían de ver "ordinariamente por vía de proceso ordinario formado entre partes", así como todas las apelaciones de cualquier juez ordinario o delegado, debían ser llevadas a la Audiencia<sup>(459)</sup>. Solamente quedaban excluidas de esta remisión general, y por tanto eran competencia del Consejo, "las apelaciones de las residencias e de las cartas ejecutorias que del nuestro consejo emanaren sobre cosas vistas en el nuestro consejo e de las pesquisas e pesquisidores que fueren por nuestro mandado o de los del nuestro consejo que no llevaran poder de determinar"<sup>(460)</sup>; igualmente quedaban excluidas, siguiendo lo ya dispuesto en las Ordenanzas de 1459 y 1480, -las apelaciones de los alcaldes de la nuestra casa e corte de las causas civiles porque los pleyteantes

---

(459) Ordenanzas de Medina del Campo 1489, en Bulas y Pragmáticas, fols. 49 v-r.

(460) Ordenanzas de Medina del Campo 1489, en Bulas y Pragmáticas, fol. 49r.

no sean fatigados con gastos"<sup>(461)</sup>. Estos casos se libraban en el Consejo si estaba el dicho órgano "en el lugar donde tal negocio se determinare", siendo posible solamente acudir a una suplicación en grado de revista, ante los propios consejeros, del fallo que dictaren de las citadas causas civiles. Pero si el Consejo se ausentara de tal lugar sin determinar el pleito, este debía ser remitido a la Audiencia para que allí fuera resuelto, "salvo si la nuestra corte assentare dentro de veynte leguas de tal lugar; ca en tal caso mandamos que el tal pleyto se siga e fenezca en el nuestro consejo".<sup>(462)</sup>

No obstante, pese a estas medidas, el Consejo siguió conociendo pleitos entre partes extralimitándose de sus competencias. Y así nos los corrobora una cédula enviada a la Audiencia de Ciudad Real en 1498 en la que se alude a una "remisión general que agora nuevamente nos mandamos hazer de los pleytos - que en nuestro consejo estaban pendientes,<sup>(463)</sup> y por las quejas que presentan los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1506 por cuanto que hay personas que ponen "demandas en vuestro muy alto Consejo"... "en primera ynstançia de su juresdición, syn -

(461) Ordenanzas de Medina del Campo 1489, en Bulas y Pragmáticas, fol. 49r.

(462) Ordenanzas de Medina del Campo 1489, en Bulas y Pragmáticas, fol. 49r.

(463) Cédulas, provisiones, visitas y ordenanzas de los Señores Reyes Católicos y de sus majestades y autos de los señores presidentes y oydores, concernientes a la facil y buena expedición de los negocios y administracion de justicia y governación de la Audiencia Real que reside en la ciudad de Granada. Granada 1551, fols. 10v-11r.

que sean antes pedidos e demandados antel corregidor e alcaaldes, o ante los alcaaldes hordinarios de las dichas çibdades e villas e lugares"<sup>(464)</sup>, y, al mismo tiempo, habia otras muchas personas que maliciosamente daban querellas en el Consejo con lo que se nombraban pesquisidores contra los demandados si haber sido previamente presentada la demanda ante los corregidores u otros jueces ordinarios.<sup>(465)</sup>

Finalmente, era competencia del Consejo, como ya hemos tenido ocasión de ver en el capítulo anterior, el conocimiento de la segunda suplicación o de las "mill e quinientas" que se interponía de las sentencias sobre pleitos civiles que habian sido dictadas por la Audiencia en grado de revista y alguna de las partes se consideraba agraviada del fallo de la dicha Audiencia.

A lo largo de las páginas precedentes hemos aludido en varias ocasiones a la facultad del Consejo de poder designar jueces pesquisidores y comisarios. Esta facultad fue, a nuestro entender, una de las causas que contribuyeron en mayor medida a la atribución de competencias judiciales al Consejo Real, por ello, antes de cerrar este cuadro de la actividad judicial de dicho órgano, hemos creído oportuno hacer una referencia a estos jueces.

Las Ordenanzas del Consejo así como las distintas normas restrictivas de las competencias judiciales del Consejo prohibían taxativamente el conocimiento de pleitos por parte del Consejo por medio de cartas de comisión, pero, como ya tuvimos ocasión

---

(464) Cortes de Valladolid 1506 (CLC. IV, 26, p. 231)

(465) Cortes de Valladolid 1506 (CLC. IV, 27, p. 232)

de ver, el Rey se reservaba siempre intervenir en cualquier tipo de pleito con lo que, de hecho, las cartas de comisión eran frecuentesísimas y el Consejo, paulatinamente, fue interviniendo cada vez con mayor frecuencia en los asuntos judiciales.

En este sentido, la Ordenanza de 1459 supuso en reconocimiento al Consejo de poder "dar comisarios sobre querellas o demandas que non son comenzadas en la dicha mi Audiencia e Chancillería e alcalles dellas" y podían hacer las dichas comisiones "para qualquier delos del mi Consejo o para otras qualesquier personas, que ellos entendieren que cumple aunque las causas sean tocantes a mis oficiales et a otras qualesquier personas".<sup>(466)</sup>

El Consejo, o en su caso el Rey, podían intervenir en dichas causas o bien enviando o nombrando en el lugar un juez comisario al que se le dotaba de la facultad de determinar y sentenciar el pleito, con lo que se trataba ya de un agente extraordinario y temporal al que se le designaba para el conocimiento de uno o varios casos concretos y que, solventados éstos, finalizaba su poder.<sup>(467)</sup> En este caso nos encontraríamos no ya ante

---

(466) Ordenanza 1459 (Santa Cruz, Ms. 31, fol. 274v).

(467) Sobre los comisarios en general y su importancia, véase el trabajo ya citado de HINTZE: El comisario y su significación en la historia general de la administración en Historia de las formas políticas, pgs. 155 y ss. Entre nosotros vid. GARCIA MARIN: El oficio público en Castilla, pgs. 68 y ss. también citado y MARTINEZ DIEZ: Los oficiales públicos: de las Partidas a los Reyes Católicos en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Alcalá de Henares 1971, p. 127.

la jurisdicción ordinaria, sino ante una jurisdicción comisarial o extraordinaria a la que valdría la pena dedicar otro estudio.

Estas cartas de comisión con poder de determinar implicaban la suspensión de cualquier posible intervención de la jurisdicción ordinaria en el caso concreto al incluirse en ellas las cláusulas inhibitorias pertinentes.<sup>(468)</sup> se resolvían mediante proceso sumario "oydas las partes synpliciter y de plano sin estrepitu y figura de juyzio sin dar aluentas de malicia, saluo solamente sabida la verdad"<sup>(469)</sup> y de ellas sólo cabía suplicación ante el Consejo o ante el propio Rey, cuando así se expresaba en la carta.<sup>(470)</sup>

---

(468) "E por la presente mando e definiendo firmemente a qualesquier mis justicias e jueces de la dicha çibdad de Sevilla e su tierra que non se entremetan a conosçer ni conoscan de cosa alguna de lo susodicho ca yo por la presente los ynibo e he por ynibidos del conosçimiento e exsecucion de todo ello e de cada vna cosa e parte dello antes vos dexten e consientan libremente dello vsar e conosçer segund que en esta mi carta se contiene" (Carta de Comisión al bachiller Luis Sanchez en Tumbo de los Reyes Católicos. I, doc. 125, p. 236).

(469) Véase, por ejemplo, el Tumbo de los Reyes Católicos, I, doc. 65, p. 128 y 125, pg. 236; II, doc. 167, p. 21, doc. 194 p. 63, doc. 237, p. 138, doc. 247, p. 165 entre muchos.

(470) "Et es mi merçed e mando que de la sentencia e sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha rrason dieredes e pronunciardes non aya ni pueda aver apelaçion ni suplicación, agrauio ni nulidad ni otro rremedio ni rrecurso alguno para ante los del mi consejo, oydores de la mi abdiençi alcaldes e notarios e otras justicias e oficiales qualesquier de la mi casa e corte e chancelleria e de la dicha çibdad de seulla ni para ante otro alguno saluo solamente de la sentençia definitiua para ante mi" (Tumbo de los Reyes Católicos, I, doc. 125, p. 236).



El otro modo de intervenir el Consejo era mediante el envío de jueces pesquisidores quienes, a diferencia de los jueces comisarios, no tenían facultad para determinar y su misión era simplemente realizar la pesquisa o información que era posteriormente enviada cerrada al Consejo para que en él se fallara y dictara sentencia conforme a derecho.

Este tipo de actuación fue el más generalizado en las actuaciones judiciales del Consejo como ya lo expresa la Ordenanza de 1459, y posteriormente la de 1480, así como las Ordenanzas de la Audiencia de 1489 que, como acabamos de ver, la atribuyen al Consejo como una de sus competencias más características.

Los pesquisidores, según la Ordenanza de 1459, actuaban sobre cualquier ciudad, villa o lugar del Reino y su actuación podía haber sido provocada a instancia de parte, por medio de la petición de justicia que se presentaba ante el Consejo, o era este mismo órgano el que de oficio podía enviar pesquisidores.<sup>(471)</sup> Estos debían, antes de ser enviados, jurar "en el mi Consejo las cosas contenidas en las leyes del Ordenamiento de Alcalá de Henares<sup>(472)</sup> que deven jurar los jueces e pesquisidores antes de que sean rescibidos a los oficios".<sup>(473)</sup>

---

(471) Ordenanza 1459: "Otrosi ordeno e mando que qualesquier pesquisidores que ouieren de ir a qualesquier cibdades e villa e logares de mis regnos a facer pesquisas asi porque yo les mande ir entendiendo que cumple a mi servicio como a petizion de partes..." (Santa Cruz, Ms. 31, fol. 274r) y Ordenanza de 1480. CLC. IV, 25, p. 118.

(472) Ordenamiento de Alcalá, tit. 32, leyes 35 a 39.

(473) Santa Cruz, Ms. 31, fols. 274r-275v y Ordenanza de 1480 (CLC. IV, 25, p. 118).

Una vez realizada la pesquisa, los jueces y pesquisidores debían llevar los resultados de la misma al Consejo antes de los treinta días siguientes de haber finalizado su información, "salvo si por mi o por los del mi Consejo les fuere mas alargado o abreviado el dicho termino"<sup>(474)</sup>. Las pesquisas debían ser entregadas en el Consejo al relator o a su lugarteniente "para que saque la relación della por escripto, e la faga en el termino, que por ellos les fuere mandado, e quel dicho mi relator o su lugarteniente sea tenido que reducir a memoria de los del Consejo las pesquisas que estovieren pendientes en el Consejo dos vezes cada mes".<sup>(475)</sup> Finalmente, se disponía que los escribanos que debían acompañar a los pesquisidores no llevaran más derechos que los establecidos y se le obliga a jurar en el Consejo que no tomaría derechos de testigos sin estar el pesquisidor presente.<sup>(476)</sup>

---

(474) Santa Cruz, Ms. 31, fol. 275v y Ordenanza 1480 (CLC.IV, 2 p. 118). Es el caso, por ejemplo, de Francisco de Bobadilla a quien los Reyes Católicos envían a Indias tras los graves incidentes ocurridos en la Española tras la ausencia de Colón (vid. GARCIA-GALLO: Los orígenes de la Administración territorial en Indias: El gobierno de Colón, en sus Estudios de Historia del Derecho Indiano, pgs. 613-4.

(475) Santa Cruz, Ms. 31, fol. 275r y Ordenanza 1480 (CLC.IV 25, 118). En esta última, sin duda, hay un error del copista cuando dice que las pesquisas pendientes en el Consejo tienen que presentarse "dos vezes cada día". Por muchas importancia que tuviera la actuación judicial del Consejo, no creemos que llegara al punto que fuesen tantas las pesquisas que el relator tuviera que estar despachando dos veces al día, por ello nos inclinamos por dar mayor fiabilidad al texto de la Ordenanza de 1459.

(476) Santa Cruz. Ms. 31, fol. 275v-r y Ordenanza 1480 (CLC. IV, 25, p. 118).

Las Ordenanzas no especifican en qué casos el Consejo podía de acuerdo a sus facultades nombrar jueces pesquisidores o comisarios dejando en suspenso la actuación de la jurisdicción ordinaria. Las disposiciones restrictivas de 1428 prohibían las comisiones, pero al reservarse el Rey la posibilidad de actuar siempre y cuando cumpliera a su servicio, permitía la intervención del Rey o de su Consejo en cualquier tipo de causas. Generalmente el Consejo actuaba de oficio en aquellos casos de grave alteración del orden público<sup>(477)</sup>, pero desde que la Ordenanza de 1459 le facultaba a intervenir a instancia de parte, su ámbito de actuación quedó prácticamente ilimitado. De esta forma, el carácter extraordinario de medio control que caracterizaba a la pesquisa quedó convertido en la vía ordinaria de actuación del Consejo y en un valiosísimo instrumento para ampliar su jurisdicción avocándose todo tipo de pleitos.

---

(477) "Debate e contiendas an algunas cibdades e villas e logares", dirá la Ordenanza de 1465 (Santa Cruz, Ms. 32, fol. 39r).

## **CAPITULO VI**

### **LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TERRITORIAL**

- A. - Los Adelantados Mayores**
- B. -Alcaldes de Adelantamiento y Merindad**
- C. -El Justicia Mayor de Galicia y los Alcaldes Mayores de Galicia**

## CAPITULO VI

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TERRITORIALA. LOS ADELANTADOS MAYORES

Ciertamente una de las instituciones más controvertida y problemática de la administración judicial bajomedieval castellana es el oficio de Adelantado Mayor.

De los Adelantados Mayores ha hecho referencia con más o menos acierto prácticamente toda la historiografía histórico-jurídica<sup>(1)</sup>, aunque si bien es verdad, sólo en los -

- (1) Con anterioridad ya repertorios y diccionarios legislativos se había ocupado de reunir la legislación referente al oficio en cuestión; es el caso de DIAZ DE MONTALVO en su Secunda compilatio, ya citada. En el siglo XVI tenemos a HUGO DE CELSO: Repetorio Universal de todas las leyes destos Reynos de Castilla, Medina del Campo 1553, fol. 15; En el siglo XVII A. CORNEJO: Diccionario Histórico forense del Derecho Real de España, Madrid 1779, t. I, pgs. 11-16 y A. PEREZ Y LOPEZ: Teatro de la Legislación Universal de España e Indias, Madrid 1791 t. II, pgs. 248 y ss. También son numerosos los historiadores que han hecho referencia a los Adelantados; sin anir de ser exhaustivos podemos citar a SALAZAR DE MENDOZA: Origen de dignidades seglares de Castilla y León, Toledo 1618, cap. 15 en especial, y también en su obra Monarquía de España, t. I, pgs. 153 y ss; SANTAYANA BUSTILLO: Gobierno político de los pueblos de España, Zaragoza 1742, p. 64 y en su otra obra Los magistrados y tribunales de España, su origen, instituto y gobierno, Zaragoza 1745; Ya en el siglo XIX y dentro de la historia jurídica tenemos a MARTINEZ MARINA en su Teoría de las Cortes... parte segunda, pgs. 248 y ss., y 265 y ss. CASS GAYON: Historia de la Administración... p. 95, COLMEIRO: De la Constitución... pgs. 232-3 y en su Derecho Político... p. 561; MARICHALAR Y MANRIQUE: Historia de la legislación... t. III, pgs. 22-3; DANVILA:

.../...

últimos años, al amparo de los estudios institucionales, encontramos una mayor preocupación por dilucidar las competencias y atribuciones de este oficial dentro del cuadro administrativo y político de la Baja Edad Media<sup>(2)</sup>. Pero en todo

(1) /...El poder civil... t. I. p. 175; En este siglo podemos citar varias historias de la Administración que se ocupan de ellos: E. MAYER: Historia de las Instituciones... t. II, pgs. 74 y ss., 199 y ss. y 215 y ss; GAMA BARROS: Historia da Administração Publica em Portugal nos seculos XII a XV, Lisboa 1954, pgs. 134 y ss; J. BENEYTO: Historia de la Administración pgs 264 y ss; L.G. DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones... pgs. 508 y ss. También en los manuales de Historia del Derecho se alude con frecuencia a los Adelantados: R. RIAZA Y A. GARCIA GALLO: Manual de Historia del Derecho Español, p. 399, A. GARCIA GALLO: Historia del Derecho Español, p. 641 y en el mismo sentido Curso de Historia del Derecho español, p. 296. Este mismo autor vuelve a tratar tangencialmente de los Adelantados en su trabajo Los orígenes de la Administración territorial en Indias en AHDE 15 (1944), pgs. 274-94 PEREZ PRENDEZ: Apuntes de Historia del Derecho Español pgs. 486-90; R. GIBERT: Historia del Derecho español pgs. 46, 49, 222, 273 y 339; J. LALINDE ABADIA: Iniciación Histórica al Derecho español, pgs.

(2) Entre ellos, podemos citar los trabajos del profesor J. CERDA RUIZ FUNES: Adelantados Mayores y Concejo de Murcia (Notas para un estudio histórico-jurídico) en la Primera Semana de Estudios Murcianos, Murcia Murcia 1961, vol. I., pgs. 189-221 y Para un estudio sobre los Adelantados Mayores de Castilla en las Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1971, pgs. 182-223; J.M. PEREZ PRENDES: Las leyes de los Adelantados Mayores en Hidalguía, 1962, p. 3-22, y "Facer Justicia"... ya citado, pgs. 17-90; J. MANZANO: Venezuela, territorio del primer adelantamiento de Indias, en Memorias del primer congreso venezolano de Historia, Caracas 1972, t. I, pgs. 403-427; B. GONZAOEZ ALONSO: Observaciones y documentos sobre la Administración de Castilla a fines del siglo XV en Historia, Instituciones Documentos, 3 (1976) pgs. 225-45; Pero sobre todo quien se ha ocupado con mayor profusión del tema es el profesor PEREZ BUSTAMANTE en su - -

todo caso, pese a que el esfuerzo realizado es importante, o bien sólo se han tratado algunos aspectos muy parciales sin llegar a abordar de lleno toda la problemática, o las soluciones que se han ofrecido no son totalmente satisfactorias.

Ello nos conduce forzosamente, al afrontar el estudio de la Administración de justicia real, a replantearnos todas aquellas cuestiones que, lejos de tener una solución definitiva, pueden ser interpretadas en otro sentido.

Por otra parte, es oportuno precisar dado el objeto del presente estudio, que nos ocuparemos de los Adelantados Mayores en los aspectos concernientes a la Administración de justicia o en los que puedan incidir en ella de modo sustancial, dejando a un lado, por razones obvias la limitación objetiva del tema, aquellas otras atribuciones y competencias que eran inherentes al oficio de Adelantado<sup>(3)</sup>, máxime como tendremos ocasión de ver más adelante, si tenemos en cuenta que desde principios del siglo XIV el oficio de Adelantado quedó en cierta medida desnaturalizado en cuanto que perdió su finalidad estrictamente judicial para tomar un cariz mucho más político, desentendiéndose de la administración de justicia.

(2) /...trabajo, ya citado varias veces, El Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474), Madrid 1976 y mas recientemente vuelve sobre el tema reconsiderado alguna idea de su trabajo anterior en Sociedad Economía, Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de Santillana (s. XIII-XV), también citado. Finalmente cabe hacer alusión a algunas monografías sobre adelantados: A. GIMENEZ SOLER: Don Juan Manuel, Zaragoza 1932 y M. TORRES FONTES: Don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor de Reino de Murcia, Madrid, s.a.; sobre un adelantamiento en particular, vid. J. RIVERA RECIO: El Adelantamiento de Cazorla, Toledo 1948.

(3) Sobre ellas véase PEREZ BUSTAMANTE: El gobierno... pgs. 150 y ss.

El primer problema que se nos plantea al enfrentarnos con el estudio de los Adelantados Mayores es el de su origen.

Las primeras referencias las encontramos en el siglo XI, como ya bien destacó el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(4)</sup>, para quien inicialmente el Adelantado "surge como oficio en posición de frontera"<sup>(5)</sup>. Desde luego la parquedad y escasez de documentos no nos permiten aventurar mucho más sobre estos "adenantatos", pero el que se encuentre en lugar fronterizo no presupone que necesariamente sea un oficial real destacado en esa zona. Tampoco el Libro Becerro del Monasterio de Valbanera nos esclarece mucho al respecto<sup>(6)</sup>. Comparando las relaciones finales de autoridades y oficios de los documentos de este Libro Becerro, PEREZ BUSTAMANTE concluye que los adelantados no son oficiales característicamente judiciales como el alcalde y el "iudex" por el mero hecho de que la aparición del "iudex" excluía la presencia del "addenantato" y viceversa<sup>(7)</sup>. Efectivamente parece que no hay duda en que el alcalde, el "iudex" y el "adenantato" son tres oficios perfectamente diferenciados; lo que ya no vemos tan claro es que el "addenantato" no pueda ser un oficial de justicia. El que la mera presencia del "iudex" o del "addenantato" excluya la del otro en el documento, no ha de interpretarse necesariamente entendiendo que puedan ser términos sinónimos<sup>(8)</sup>, aunque, como

(4) El Gobierno... p. 44

(5) El Gobierno... p. 45.

(6) M. LUCAS ALVAREZ: Libro Becerro del Monasterio de Valbanera. Zaragoza 1950, docs. 59, 60, 130, 145, *passim*.

(7) El Gobierno... pgs. 46-7.

(8) El Gobierno... p. 46.



bien señala PEREZ BUSTAMANTE a continuación<sup>(9)</sup> no se encuentra en ningún documento a la misma persona titulándose indistintamente de una u otra forma, con lo que la aparición del "iudex" o del "addenantato" es evidente que hacia innecesaria la presencia del otro en el documento. Ello nos lleva a pensar en otra posibilidad: que el "addenantato" sea un agente o delegado del "senior" que actúa, en ausencia de éste, en los casos encomendados por él en su territorio.

Por otro lado, es bien significativo como ya en varios fueros del siglo XII parecen los "adelantados del Concejo"<sup>(10)</sup> que perviven todavía en el siglo XIII en localidades como Ocaña, Madrid y Uceda<sup>(11)</sup>. El tratamiento que alguno de estos fueros hacen de los adelantados y alcaldes, especialmente el fuero de Ibrillos y el fuero de Haro, nos hacen pensar tal vez en funciones muy similares en ambos. Son los adelantados quizás los que desempeñan las funciones judiciales en el territorio recorriendo las villas?. La documentación consultada no nos permite aclarar satisfactoriamente este punto, pero nada se opondría a suponer con visos de verosimilitud que los alcaldes se limitaban a desempeñar sus funciones judiciales en la villa, mientras que el adelantado tendría un carácter territorial, juzgando en las aldeas del alfoz. En este sentido, el adelantado, lo mismo que el "iudex" estaría subordinado al "senior" o "dominus villae"<sup>(12)</sup>, con lo

(9) El Gobierno... p. 47.

(10) El Gobierno... p. 48, notas 59, 60, 61 y 62

(11) Todos citados por PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 48-9.

(12) En los documentos del Libro Becerro de Valbanera aparece siempre el "Senior in Tobia" (vid. LUCAS ALVAREZ: Libro Becerro... doc. 58, 59, 60, 80 passim) Véase N. GUGLIELMI: El dominus villae... ya citado.

que quedarían perfectamente delimitados los oficios. Es decir, nos encontraríamos en primer lugar al "senior", o representante del Rey, quien a su vez tenía dos tipos de oficiales: el "iudex" en la ciudad y el "addenantato" en el alfoz, mientras que los alcaldes aparecen como representantes del concejo debido a su designación popular entre los miembros del "concilium".

Posiblemente, en un primer momento, estos "addenantatos" no pasarían de ser delegados extraordinarios del "senior" con lo que sería perfectamente comprensible que no aparezcan regulados en todos los fueros. Además, y esto es importante, no podemos olvidar el creciente debilitamiento del "dominus villae", claramente manifiesto en el siglo XII<sup>(13)</sup>, que si en el plano de las villas y ciudades se manifestó por la sustitución de sus representantes (juez, merino) por otros iguales pero de designación por los miembros del "concilium", a nivel territorial esa crisis pudo manifestarse o bien con la desaparición de los adelantados, al perder efectividad el poder del "senior" o bien con la reasunción por parte del concejo del nombramiento de adelantados<sup>(14)</sup>. En otros lugares en los que las libertades y privilegios concejiles fueron más reducidas y, por tanto, la intervención del poder real más efectiva, los adelantados pasaron a ser designación real con lo que en-

(13) Véase al respecto lo que apuntábamos en el Capítulo II.

(14) Así, Fernando III concede al concejo de Madrid la facultad de poder nombrar sus Adelantados y el modo en que han de nombrarse. Véase DE MANUEL RODRIGUEZ: Memorias de Fernando III, pgs. 333-4.

contramos en el primer tercio del siglo XIII los primeros "adelantados del rey"<sup>(15)</sup> en contraposición a los que podríamos llamar "adelantados foreros" o "adelantados de concejo"<sup>(16)</sup>, si atendemos a su designación.

Si damos por válida esta hipótesis, los adelantados aparecerían configurados como jueces territoriales, tal como posteriormente los recogería Alfonso X en el *Espéculo*.

No podemos precisar con exactitud cuando el oficio de Adelantado se configuró como un oficio de la Administración territorial de Castilla a tenor de los datos que tenemos en estado actual de la investigación.

En primer lugar encontramos varias referencias a los Adelantados en el Libro de los Fueros de Castilla<sup>(17)</sup> en el que aparecen claramente desempeñando funciones judiciales<sup>(18)</sup>; lo que ya resulta más difícil de precisar en algunos casos es qué clase de Adelantados está haciendo referencia el texto, es decir, si son "adelantados de concejo" o "adelantados del rey". Sólo en dos

(15) Véase la carta de 4 de abril de 1236 en la que aparecen Ruy Fernandez de Arce y Gutierre Perez como "adelantado del Rey" (ESCAGEDO SALMON: Colección Diplomática de los Privilegios, Escrituras y Bulas en pergamino de la insigne y real iglesia colegial de Santillana, Santillana 1927, t. I, p. 26) y en la misma Colección, en 1236, aparecen también Martin Gonzalez Villanova y Gutierre de Quijas titulados de igual forma (Colección Diplomática Santillana, t. I, p. 107) Citados también por PÉREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 49, notas 67.

(16) Fuero de Ibrillos en J. GONZALEZ: Alfonso VIII, t. III, p. 653.

(17) ed. Galo Sánchez, Barcelona 1924, párrafos 3, 149, 150, 186, 203, 219.

(18) Libro de los Fueros de Castilla, ed. cit. párrafos citados en nota anterior.

ocasiones encontramos claramente especificado que se trata de "adelantados del rey"<sup>(19)</sup>; más aun, en uno de los párrafos nos habla como el demandante acudió a "casa del Rey" ante el Adelantado don Diego y abte los "otros adelantados que eran en casa del Rey"<sup>(20)</sup>. En principio, este texto nos puede hacer pensar que o bien los adelantados podían actuar indistintamente en la casa del rey y en su territorio, o que había en la Corte varios adelantados como jueces con sede permanente en ella. Pero en otros párrafos del mismo Libro de los Fueros, al referirse a la posibilidad de apelar el fallo de un alcalde, nos muestra la existencia del adelantado como instancia intermedia entre el alcalde local y el Rey<sup>(21)</sup>. Desde luego bien se podía tratar de adelantados de concejo, pero en uno como en otro caso interesa destacar que aparece perfectamente consolidada una administración territorial de justicia intermedia entre el ámbito local y el central de la Corte.

Recapitulando, pues, nos encontramos con que en el Libro de los Fueros de Castilla hay unos "adelantados del rey", sin duda denominados así para contraponerlos a los adelantados de concejo, que pueden conocer pleitos en casa del Rey; y otros adelantados sin especificar su dependencia, que aparecen claramente como jueces territoriales entre los alcaldes y el Rey.

- 
- (19) Libro de los Fueros de Castilla, párrafo 3: "Et fue a casa del Rey, e mostrado a don Diago que era adelantado del Rey e a los otros adelantados que eran en casa del rey, e juzgaron lo que tal querella como esta non devya valer por derecho..."; párrafo 149: "et esto juzgo don Lope Die de Faro estando en Bannaies e estando Diego Martinez de Zarraton e don Nunn de Agilar que eran adelantados del Rey..."
- (20) Libro de los Fueros de Castilla, párrafo 3, ver en nota anterior.
- (21) Libro de los Fueros de Castilla, párrafo 203: "Et de fuero de Grannon puede ser alçar al adelantado e del adelantado al Rey;" párrafo 219: "que sy un omne demandare a otro omne et fuere juzgado de su alçalle, et sy alguno

En cuanto a los "adelantados del rey" y su presencia en la Corte como jueces fijos en ellas, se nos presenta como una cuestión muy vidriosa y no de fácil solución, con lo que tenemos que movernos en el terreno de las hipótesis.

En primer lugar, si estos adelantados actuaban como jueces permanentes en la Casa del Rey, llama mucho la atención que de ellos no hayan quedado testimonios documentales en los que, o bien sentenciando o bien confirmando, podamos constatar su presencia en la Corte, como es el caso de los "iudices regis"<sup>(22)</sup>. Ello nos lleva forzosamente a pensar que no se trata de oficiales de la Corte aunque, como así se expresa en el Libro de los Fueros, puedan ejercer en ella sus competencias judiciales y que, por tanto, serán oficiales territoriales designados por el Rey para administrar justicia en el territorio que le ha sido previamente encomendado. Este carácter mixto que en principio podría extrañarnos, va a aparecer, como tendremos ocasión de ver a continuación, en el Espéculo cuando regula la figura del Adelantado Mayor.

Cuándo estos adelantados empiezan a conocer pleitos en la Casa del Rey?. No lo sabemos. Desde luego poca cosa sabemos en torno al Libro de los Fueros de Castilla. Este recoge un material que procede de los reinados de Alfonso VIII y Fernando III y se debió recopilar en la segunda mitad del siglo XIII, no mucho después de la conquista de Sevilla.<sup>(23)</sup> Mientras que del reinado

(21) / ~~no se pagare del su iuvio, puede er ser el adelantado e del adelantado al Rey.~~

(22) Véase al respecto el Capítulo III.

(23) Véase al respecto la introducción que GALO SANCHEZ hizo a la edición del Libro de los Fueros de Castilla.

de Alfonso VIII poseemos el valioso trabajo del profesor J. GONZALEZ con una riqueza documental abrumadora<sup>(24)</sup>, apenas tenemos documentación, por hallarse en su mayoría dispersa, del reinado de Fernando III<sup>(25)</sup> con lo que nos resulta prácticamente imposible constatar la actuación judicial de estos adelantados en la Corte y cuando empezaron a poder librar pleitos en la Corte. Quizás esto debió ocurrir ya en los últimos años del reinado del Rey Santo y así, su hijo Alfonso, lo recogió en el Espéculo.

Es muy probable que Alfonso X se inspirara en estos "adelantados del Rey" a la hora de crear el oficio de Adelantado Mayor que vemos aparecer por primera vez documentado en 1253 al frente de una amplia demarcación territorial denominada "Frontera"<sup>(26)</sup> que comprendía los reinos de Córdoba, Sevilla y Jaén, recién conquistados. Este nuevo oficio de "Adelantado Mayor" quizás se introdujo por el Rey Sabio en estos territorios a modo de ensayo. Su calificativo de "Mayor" le viene, sin duda, como contraposición a estos otros adelantados del Rey que, como acabamos de ver, ya aparecían en el Libro de los Fueros de Castilla y están perfectamente documentados en otras regiones. Por otra parte, este mismo calificativo, denota al mismo tiempo un carácter de

(24) El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, ya citado.

(25) El libro de MANUEL RODRIGUEZ: Memorias para la vida del Santo Rey Fernando III, también citado, resulta a todas luces insatisfactorio. Tenemos noticia de que el profesor J. GONZALEZ prepara una historia del reinado de Fernando III, cuyo primer volumen es de inminente aparición.

(26) Memorial Histórico Español, t. I, doc, 5, p. 10.

superioridad o relevancia de este oficial sobre otros denominados también "adelantados" que, lógicamente, a partir de este momento serían calificados de "menores". La superioridad de este nuevo Adelantado Mayor estaba seguramente en función de la gran circunscripción territorial -la Frontera- que tenía bajo su jurisdicción.

Desconocemos las causas que movieron al Rey Sabio a introducir esta nueva figura como oficial judicial territorial en vez de seguir el modelo de Castilla, León o en la misma Murcia<sup>(27)</sup>, la cuyo frente se encontraban desde tiempos de Fernando III Merinos Mayores. No deja tampoco de llamar la atención que el Rey Santo no implantara en los nuevos reinos andaluces Merinos Mayores como acababa de hacer con Murcia<sup>(28)</sup>. Quizás esta medida pueda estar relacionada con la organización y derecho que Fernando III ha extendido por Andalucía tomando como modelo la organización y fueros de Toledo, reino en el que tampoco había Merino Mayor, aunque, de haber sido esta la razón, Murcia hubiera sido entonces la excepción al designar al frente de ella un Merino Mayor. En cualquier caso el régimen de Murcia con anterioridad a 1265 en que se le concede el fuero de Sevilla es poco conocido. Tal vez ante la poca aceptación del Merino Mayor, Alfonso X decidiera poner al frente de ella a un Adelantado.

(27) En la que en enero de este mismo año aparecía un Merino Mayor al frente del Reino (TORRES FONTES: Fueros y privilegios de Alfonso X al Reino de Murcia, doc. 15, p. 24) si bien parece que este régimen había sido implantado por Fernando III pues dos años antes, en 1251 encontramos testificando en algún documento a un tal Garsi Suarez como "merino de regno de Murcia" (TORRES FONTES: Documentos del siglo XIII en CDHRM, doc. 15, p. 14).

(28) Ver nota anterior.

El régimen de Adelantamientos Mayores, junto al de Merindades Mayores, aparece consagrado en ese nuevo texto legal que se ha venido elaborando en la Corte, tal vez desde finales del reinado de Fernando III, y que ahora, entre los años 1254-1255, quizás antes, Alfonso X está intentando implantar bien sea concediéndolo como fuero o bien como fuero subsidario a distintas localidades<sup>(29)</sup> y que se aplica como derecho de la Corte<sup>(30)</sup>; este nuevo texto legal al que nos referimos es el "Libro del Fuero" o "Fuero del Libro", conocido ahora más comunmente por el Espéculo, como ya hemos dicho en más de una ocasión.<sup>(31)</sup>

---

(29) Sobre la fecha del "Fuero del Libro" o "Libro del Fuero" (Espéculo) y sus concesiones véase el trabajo tantas veces citado del profesor GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... en AHDE 46 (1976).

(30) Así lo establece el propio texto. Espéculo 4, 2, 3 y 4, 2, 16. Sobre su aplicación véase el trabajo del profesor BERMEJO CABERO: En torno a la aplicación de las Partidas. Fragmentos del Espéculo en una sentencia real de 1261 en Hispania, 114 (1970), pgs. 69 y ss. En el mismo sentido se expresa el profesor GARCIA-GALLO en Nuevas observaciones... p.

(31) Véase el trabajo del profesor GARCIA-GALLO: Nuevas observaciones... en el que se revisa toda la legislación alfonsina. Las hipótesis del profesor GARCIA-GALLO ya las sintetizamos en el Capítulo III, nota 27.



El ensayo del régimen de Adelantamientos implantado para la Frontera debió tener el éxito esperado por Alfonso X<sup>(32)</sup> y prueba de ello es que el régimen de Merindades Mayores establecido por Fernando III para Castilla, León y Murcia<sup>(33)</sup> es sustituido en 1258 por el nuevo de Adelantamientos<sup>(34)</sup> y cinco años más tarde, en 1263, toma medida semejante al reemplazar al Merino Mayor de Galicia por un Adelantado Mayor<sup>(35)</sup>. A qué se deben estos cambios llevados a cabo por el Rey Sabio? Pero antes de intentar encontrar una respuesta satisfactoria a este interrogante, creemos oportuno señalar las analogías y diferencias entre uno y otro oficio tal como aparecen configurados en el Espéculo. Y nos ceñimos ahora exclusivamente a esta fuente legal porque, a nuestro entender, uno de los principales motivos que han llevado a los historiadores a no poder distinguir entre Adelantados Mayores y Merinos Mayores llegando, incluso, a identificarlos totalmente es, precisamente,

---

(32) Cada día se hace más necesario un estudio a fondo del reinado de Alfonso X. La obra de BALLESTEROS BERETTA Alfonso X, el Sabio, es a todas luces insuficiente para poder explicar las decisivas transformaciones políticas, jurídicas e institucionales que intentó poner en práctica el Rey Sabio.

33) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 53.

(34) En 1258 aparecen confirmando en Privilegios rodados los Adelantados de Castilla, León y Murcia (Memorial Histórico Español, t. I, doc. pgs. 147. A partir de ahora M.H.E.) También en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 54 y 63.

(35) M.H.E. t. I, doc. 91, pgs. 202-4 y PEREZ BUSTAMANTE El Gobierno... pgs. 53 y 64.

el tratamiento unitario que se ha hecho de los distintos textos legales -Espéculo, Leyes de Adelantados Mayores y Partidas- que se han venido tradicionalmente atribuyendo a Alfonso X, sin llegar a valorar en su justa medida cada uno de estos textos de finalidad bien distinta y de valor muy desigual. En este sentido ha sido esencial la aportación del profesor GARCIA-GALLO quien ya hace casi treinta años revisaba a fondo la obra legislativa de Alfonso X<sup>(36)</sup> propugnando entonces una teoría auténticamente revolucionaria sobre la elaboración de las Partidas partiendo de sucesivas redacciones del texto inicial del Espéculo. Más recientemente el profesor GARCIA-GALLO entraba de lleno una vez más en el estudio de los textos legales "alfonsinos" revisando minuciosamente no sólo las conclusiones de su primer trabajo, sino también toda la bibliografía y nuevas aportaciones que al tema se había hecho durante veinticinco años<sup>(37)</sup>. Sus resultados, hasta la fecha indiscutidos<sup>(38)</sup>, daban un giro de ciento ochenta grados a la obra legislativa comunmente atribuida al Rey Sabio y, lo que es más importante, obligan a poner en revisión todos los trabajos institucionales que sustentan sus argumentos tomando las Partidas como un código promulgado -y por tanto con valor efectivo- durante el reinado de Alfonso X. El mismo profesor GARCIA-GALLO no considera estos resultados como definitivos, pero sí suponen, sin ninguna duda, un gran avance en la consecución de aclarar definitivamente uno de los mayores enigmas de la Historia del Derecho.<sup>(39)</sup>

(36) El "Libro de las Leyes" de Alfonso el Sabio en AHDE 21 (1951) pgs. 345-523.

(37) Nos estamos refiriendo al trabajo tantas veces citado Nuevas Observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X el Sabio.

(38) Tenemos conocimiento que el profesor G. MARTINEZ DIEZ en una comunicación presentada recientemente en Vasenna rebate la hipótesis del profesor GARCIA-GALLO relativa al Fuero Real. Por encontrarse en prensa dicha comunicación nos ha sido imposible consultarla.

Esta revisión de las fuentes "alfonsinas" nos obliga a valorar de un modo muy distinto cada uno de estos, máxime cuando las fechas que hay entre el Espéculo y la redacción - que hoy conocemos de las Partidas puede oscilar en más de cincuenta años, aparte, claro está, de la finalidad con que se llevó a cabo cada uno de estos textos. Ya tuvimos ocasión de ver el distinto tratamiento que sobre el Adelantado Mayor de la Corte hacían el Espéculo y las Partidas<sup>(40)</sup>, ahora de nuevo vamos a encontrar diferencias entre uno y otro texto que serán, en gran parte, la clave para entender la equiparación que se ha venido haciendo entre Adelantados Mayores y Merinos Mayores.

Ha sido ponión común entre la historiografía el equiparar a los Adelantados Mayores con los Merinos Mayores o viceversa atribuyéndoles a estos últimos funciones judiciales<sup>(41)</sup>, sólo el profesor PEREZ-PRENDES<sup>(42)</sup> quien tras criticar con acierto la

---

(39) /...Efectivamente, cada día se hace más necesaria una decisión crítica de las Partidas; cuando podamos disponer de ella, se podrán comprender mejor los restantes textos alfonsinos.

(40) Véase el Capítulo III en el apartado correspondiente al Adelantado Mayor de la Corte.

(41) Sin ánimo de ser exhaustivos citamos solo algunos autores. Así, por ejemplo, en el siglo XVIII, SANTAYANA BUSTILLO: Los magistrados... pgs. 240 y ss. y posteriormente SAN GRADOR: Historia de la Administración de justicia, p. 72 SINUES: El Merino, pgs. 174, y ss.; recientemente PEREZ BUSTAMANTE, El Gobierno... pgs. 149 y ss. sobre el que más adelante nos detendremos.

(42) Véase su trabajo ya citado "Facer justicia"... en Moneda y Crédito, 128, pgs. 17-90.

obra de SINUES<sup>(43)</sup>, ha negado la función jurisdiccional de los Merinos Mayores y de los merinos en general en base a la distinción -ya recogida en el Espéculo<sup>(44)</sup>- de la justicia que se "faze judgando" y la justicia que se "faze por obra", es decir, la justicia judicial propiamente dicha y la justicia "gubernativa"<sup>(44 bis)</sup>. No creemos necesario repetir aquí toda la argumentación expuesta por el profesor PEREZ-PRENDES, pero sí creemos necesario insistir que el Espéculo configura a los Adelantados Mayores y a los Merinos Mayores como dos oficios totalmente distintos, que regula en títulos distintos y a los que les atribuye competencias distintas.

Los Adelantados, sea de tipo que sea<sup>(45)</sup>, son ante todo jueces, y como tales aparecen definidos en el Espéculo<sup>(46)</sup>. Son -

---

(43) "Facer justicia"... pgs. 82-84.

(44) Espéculo 4, 3, pr.

(44bis) No debemos confundir este término con el nuevo "gobierno". La justicia que se "faze por obra" hay que entenderla un sentido amplio; en el sentido de "hacer que se haga justicia" o "hacer que se cumpla la justicia".

(45) Ya hicimos referencia en el Capítulo III al tratar del Adelantado Mayor de la Corte, los tipos o clases de Adelantados que, a nuestro entender, se recogen en el Espéculo en contra de la opinión del profesor PEREZ BUSTAMANTE quien identifica los "Adelantados Mayores" de las comarcas con el Adelantado Mayor de la Corte.

(46) Espéculo 2, 13, 3, 4, 2, pr. y 4, 2, 6.

fundamentalmente jueces de alzada<sup>(47)</sup>, aunque conocen también en primera instancia los pleitos que el rey les encomienda<sup>(48)</sup>, si bien esta norma sólo se refiere a los Adelantados Mayores de los territorios.

El Espéculo, como ya dijimos al tratar en el Capítulo III del Adelantado Mayor de la Corte, recoge tres tipos de Adelantados que desempeñan sus funciones jurisdiccionales en ámbitos bien distintos. En primer lugar, el Adelantado Mayor de la Corte, juez que se halla en la cúspide de la pirámide judicial quien conocía en apelación los fallos de los Adelantados Mayores de los territorios y cuya sentencia era ya irrecorrrible en alzada, y que desempeña su función exclusivamente en el ámbito de la Corte. En segundo lugar nos encontrábamos con unos Adelantados Mayores, a los que nos acabamos de referir, que actúan indistintamente en la Corte o en el territorio, "onde fuer adelantado" como juez de apelación, y, finalmente, veíamos unos "adelantados menores que an de judgar las merindades o otras tierras".

Dejando ahora el Adelantado Mayor de la Corte, del que

---

(47) Espéculo 2, 13, 3; "Queremos que sepan todos quanto logar tienen los adelantados de la Corte del rey. Ca ellos son puestos para oyr todas las alzadas de los que se agraviaren tambien de los alcalles de su corte como de los otros alcalles de las tierras, o de aquellos que tienen logar de judgar o quier que sean en señorío del rey". Espéculo, 4, 2, pr. "Otrosi (deben juzgar) las alzadas de los alcalles de casa de rey, e de los otros que judgan en las tierras onde cada uno dellos fuer adelantado, seyendo ellos mismos y en la corte". Espéculo 4, 2, 11: "Otrosi si alguno se agraviare del juyzio de los alcalles de casa del rey, e se alzare a estos adelantados que dixiemos, deven los ellos oyr e librar, sien do en la corte. E esto mismo dezimos deven fazer en los

ya nos ocupamos, nos interesa centrarnos ahora en los otros dos tipos de Adelantados, es decir, en los "mayores" y en "menores" o "de las merindades".<sup>(49)</sup>

Los Adelantados Mayores a los que se refiere el Espéculo los podemos identificar sin ningún género de dudas con los Adelantados Mayores que Alfonso X pone al frente de esa amplia circunscripción denominada "Frontera" en 1253, y al frente de Castilla, León y Murcia en 1258; en 1263 unificaría la administración territorial de sus reinos al nombrar también para Galicia un Adelantado Mayor. Y efectivamente todos estos Adelantados aparecen en los documentos de aplicación con la misma denominación de "Adelantados Mayores" que se contiene en el Espéculo.

El término de "Adelantado Mayor" es una creación de Alfonso X. Con anterioridad existían, como vimos, "adelantados" pero que sepamos nunca hasta esta fecha aparecen con el calificativo de "mayor". En cambio se conocen ya desde el siglo XII

(47) "...pleitos que se alzaren a ellos de aquella tierra onde fueren adelantados, quier sean en la corte, quier en esta tierra misma. De los otros que ellos dejan en su lugar en la corte quando se van ende, dezimos que deven oyr las alzadas de aquella tierra onde son adelantados aquellos que los dejaron".

(48) Espéculo 4,2, pr. "Los adelantados mayores deven judgar los grandes fechos en la corte del Rey, asi como de rieptos o de pleito, que sea entre un rico ome e otro, sobre heredes mientos, o sobre otra cosa, o pleito que sea entre un conceio, e otro sobre terminos, o sobre otros pleitos granados Otrosi pleitos que fuesen de grandes omes, asi como entre ricos omes e ordenes, o conceios que ovienssen pleito con ordenes o con ricos omes. Ca todo esto ellos deven judgar por mandado del rey"; Espéculo 4,2,11: "E dezimos primeramente, que los adelantados mayores deven judgar los grandes pleitos en la corte del rey por su mandado los que el non podiere oyr o non quisiere, asi como pleito de riepto, o de otras demandas que fuesen entre omes poderosos".

(49) El Espéculo les denomina indistintamente de una forma u otra. Ver Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 12, por ejemplo.

Merinos Mayores<sup>(50)</sup>. Ello nos lleva a pensar que posiblemente el Rey Sabio se inspirara en esos adelantados territoriales que desempeñaban funciones judiciales, y que según las circunstancias podían ser de nombramiento real o de designación concejil, para crear un Adelantado que tuviera jurisdicción sobre un territorio muy extenso -la Frontera- y que denominaría "mayor" en contraposición a los ya existentes, resaltando así su importancia a semejanza de Merinos Mayores de León, Castilla y Murcia.

En principio este Adelantado Mayor de la Frontera es anterior al Espéculo, que podría datarse a lo sumo entre 1254 y 1255 según piensa el profesor GARCIA-GALLO<sup>(51)</sup> con lo que podemos pensar que o bien Alfonso X creó este Adelantado Mayor y luego dispuso que los redactores incluyeran en la obra este nuevo oficial o bien -y esto parece lo más probable- el Espéculo ya estaría redactado, o al menos estaría muy avanzada su redacción en 1253, y el Rey decidió poner en práctica este nuevo oficio creación suya a modo de ensayo.

En cuanto a los "adelantados menores" también aparecen configurados en el Espéculo exclusivamente como jueces y "an poder de judgar los pleitos por aquellas merindades, o de aquellas comarcas donde a el adelantamiento"<sup>(52)</sup>. Su categoría de oficial de justicia es muy inferior a la de los Adelantados Mayores y no sólo aparece ya de por sí reflejada en su calificativo de

---

(50) Vid. J. GONZALEZ: Alfonso VIII, doc. s

(51) Nuevas observaciones... p.

(52) Espéculo 4, 2, pr.

"menor" sino también en su jurisdicción objetiva y territorial - mucho más reducida. Mientras los Adelantados Mayores tienen jurisdicción sobre una "tierra",<sup>(53)</sup> los Adelantados menores tienen jurisdicción sobre una "merindad" o "comarca"<sup>(54)</sup> y actúan como jueces de primera instancia y de apelación indistintamente<sup>(55)</sup> pero quedan fuera de su jurisdicción el pleito de "riepto", que "sea fecho de trayción o aleve. Ca esto non lo puede otro ningun judgar sinon el rey o adelantados mayores",<sup>(56)</sup> así como aquellos pleitos privativos del Rey (casos de corte)<sup>(57)</sup>.

Las fuentes son mucho más parcas a la hora de suministrar información acerca de estos Adelantados menores de los que sabemos muy poca cosa, pero que con toda seguridad podemos entroncar con aquellos "adennantatos" del siglo XII.

El caso de los Adelantados menores es, por tanto, distinto al de los Mayores, por cuanto se trata de un oficio ya arraigado en algunas merindades o comarcas y no de nueva creación como el de Adelantado Mayor. El Espéculo se limita entonces a recoger y regular un oficio que tiene una tradición plenamente reconocida en algunas regiones.

No menor tradición y arraigo tienen los Merinos en la -

---

(53) Espéculo 4, 2, 11 y 4, 2 pr.

(54) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 12.

(55) Espéculo 4, 2, 11.

(56) Espéculo 4, 2, 12.

(57) Espéculo 4, 2, 12.



Corona castellano-leonesa<sup>(58)</sup> de forma que al frente de Castilla y de León Fernando III ha puesto un Merino Mayor que se mantienen en los primeros años del reinado de Alfonso X hasta 1258 como hemos comprobado.

El Merino Mayor y los merinos menores son unos oficiales totalmente distintos a los Adelantados Mayores y Menores. De estos hemos visto su innegable condición de jueces que tienen "poder para judgar los pleitos"<sup>(59)</sup> como bien señala el título segundo del Libro IV del Espéculo. Pero es que este cuerpo legal empieza ya por diferenciar unos y otros al dedicarles distintos títulos en el Libro IV en cuyo preámbulo acaba por diferenciar las funciones de unos y otros, es decir, los que "fazen justicia" "judgando", y los que la "fazen por obra".<sup>(60)</sup>

---

(58) Sobre el Merino existe la monografía de SINUES: El Merino, ya citada, pero que resulta totalmente insuficiente pese al copioso material documental que aporta. En lo referente a las competencias judiciales los errores judiciales son particularmente graves. Véase la recensión a la obra hecha por el profesor GARCIA GONZALEZ en AHDE 24 (1954) y las críticas del profesor PEREZ PRENDES en su artículo "Facer Justicia"... p. 82. Sobre los Merinos Mayores en particular se ha ocupado recientemente el profesor PEREZ BUSTAMANTE en su libro El Gobierno y la Administración Territorial de Castilla, Madrid 1976.

(59) Espéculo 4, 2, pr.

(60) Así ya lo destacaba el profesor PEREZ PRENDES: Facer Justicia.... pgs. 25 y ss.

El propio Espéculo nos dice quienes son aquellos que "fazen justicia por obra": "lo merinos mayores de los regnos, e otrosi la justicia mayor de casa del rey, a que solien llamar alguacil, o los que dexan en su logar, e los otros merinos que son puestos por las tierras por mano de los merinos mayores, e los alguaciles, o justicias, o juezes, o dotra manera como quier ayan nombre, que son puestos por las cibdades e por las villas para conprir esta justicia".<sup>(61)</sup>

Los Merinos, además de aquellas obligaciones que como oficiales tienen con respecto al Rey<sup>(62)</sup>, tienen unas competencias muy específicas perfectamente delimitadas en el Espéculo<sup>(63)</sup> entre las que sólo en un momento parece que se les atribuye la función de juzgar. El Merino Mayor, y con él los restantes merinos, aparecen configurados como oficiales que hoy llamaríamos de "policia" cuya principal función es la de "guardar": "guardar el regnos, o la tierra sobre que fuer puesto, de robos e de furtos, e de todas malfetrias"... "guardar que non dexe fazer asonadas en la tierra"... "guardar la eglesias"... "guardar las casas de los cavalleros e de las dueñas"... "guardar que en todo su poder non sea mugier forzada, casada nin por casar, nin vibda, nin de orden, nin de otra manera qualquier que sea"...<sup>(64)</sup>. Al mismo tiempo los Merinos tienen también una función ejecutiva de la justicia consistente en encarcelar a los delincuentes<sup>(65)</sup>. Sin embargo, hay en el Espéculo un párrafo que aparece aparentemente en contradicción a esa distinción entre justicia "por obra" y justicia "judgando".

(61) Espéculo 4, 3, pr.

(62) Espéculo 4, 3, 2.

(63) Espéculo 4, 3, 4 y 4, 3, 5.

(64) Espéculo 4, 3, 4 y 4, 3, 5.

(65) Espéculo 4, 3, 5.

En la Ley IV del título III en donde va enumerando las funciones que acabamos de señalar, los redactores del Espéculo introdujeron una frase que puede llevar a confusión: "E a de guardar, que en aquella tierra sobre que él a poder de judgar, no sea fecho castiello de nuevo, nin torre, nin fortaleza sin mandado o sin plazer del rey".<sup>(66)</sup> Hemos de entender sólo en base a esta frase que los Merinos tienen competencias jurisdiccionales para juzgar?. Desde luego la frase está en plena contradicción con el preámbulo del título III en el que como vimos se establecía la distinción entre uno y otro tipo de justicia. No obstante, a nuestro entender se trata tan sólo de una contradicción aparente si tenemos en cuenta lo dispuesto en la Ley XII del mismo título.

En la citada ley se dispone que el Merino Mayor, una vez que ha llegado a su merindad, debe "fazer enderezar todas las malfetrias, e fazer conprir los juyzios que no fueron conplidos, que eran judgados, tan bien por los adelantados, como por los otros que avien poder de judgar en aquella tierra".<sup>(67)</sup> Es decir, según este texto, el Merino Mayor aparece con mas competencias que las de un simple ejecutor teniendo obligación de hacer cumplir las sentencias de los auténticos jueces (adelantados y jueces de las villas), con los que se confirmaría lo dispuesto en el preámbulo del título III.

---

(66) Espéculo 4, 3, 4,

(67) Espéculo 4, 3, 12.

Para cumplir lo dispuesto anteriormente, el Merino Mayor debe llamar a los adelantados (sin duda menores) de aquella merindad de la está a su cargo; pero si no hubiera adelantados "de\_ ve tomar de los otros que fueren puestos para judgar en las villas con que libren los pleitos que antel vinieren, tan bien en las cosas que deva fazer justicia, como en las otras"<sup>(68)</sup>, Por tanto, desde nuestro punto de vista, no es que el Merino Mayor juzgue y sentencia el pleito como lo puede hacer un Adelantado o un juez, sino que el Merino Mayor como máximo representante del poder real en su Merindad, cuando llega a ésta reúne a los adelantados o en su defecto a los jueces de las villas para ejecutar lo sentenciado por ellos y para que si alguien tiene alguna demanda la presente al Merino, pero son los adelantados o los jueces quienes libran los "pleitos que antel vinieren". Estos juicios en presencia del Merino Mayor de la Merindad son los que pueden dar la impresión de que los Merinos juzgan, cuando lo que vienen haciendo es justicia "por obra", es decir ejecutan o mandan hacer pesquisa a los pesquisidores<sup>(69)</sup> pero nunca sentencian.<sup>(70)</sup>

Dibujadas en grandes líneas las diferencias entre Adelantados y Merinos, se nos presenta el interrogante de por qué - unas veces para unos territorios se opta por parte del Rey por

---

(68) Espéculo, 4, 3, 12,

(69) Espéculo 4, 3, 12

(69) Espéculo 4, 3, 12.

(70) Sobre este problema volveremos más adelante al tratar de las competencias.

el sistema de Adelantamientos y otras veces por el de Merindades. El interrogante se reduce a por qué unas veces se envían jueces (Adelantados) y otras "encargados de hacer cumplir" o "guardadores" de la justicia (Merinos).

Creemos que la respuesta no siempre es la misma y que está sujeta a las circunstancias y vicisitudes políticas del momento. Por otra parte, dada la falta de fuentes, no podemos dar una solución definitiva, sino que nos tendremos que conformar con apuntar varias posibles soluciones o hipótesis ante este problema tan complejo.

La implantación del régimen de Adelantamiento en la Frontera, es decir, en los reinos andaluces recién conquistados podía estar tal vez relacionada, como ya apuntábamos, con el tipo de organización, a modelo del Reino de Toledo, con que se va a dotar a Córdoba, Sevilla y Jaén en las que se pondrá al frente de ellas unos alcaldes Mayores que sin duda tienen amplias competencias jurisdiccionales en cada uno de estos reinos. Pero el colocar un Adelantado Mayor con jurisdicción sobre todos estos reinos quizás obedece también a la distancia entre la nueva demarcación de la Frontera y el núcleo central de la Corona, es decir, Castilla y León por donde el Rey permanecía la mayor parte del año. No debemos olvidar que el principal fin del poder real es mantener sus reinos en paz y justicia, por tanto prevalece su carácter de juez. Por ello no es de extrañar que, dada la distancia y, sobre todo, que se trata de territorios recién conquistados en los que los problemas de orden público entre vencedores y vencidos pueden ser importantes, ponga al frente de todos ellos

un oficial con amplios poderes jurisdiccionales que, como acabamos de ver, no sólo era juez de apelación de los jueces inferiores sino que también por delegación real podía conocer los casos que por su gravedad estaban reservados al conocimiento exclusivo del monarca. Se necesitaba una justicia rápida y eficaz para lo cual se crea este oficio de Adelantado Mayor de la Frontera quien desde el punto de vista judicial casi estaba equiparado al propio monarca y que con sus continuos desplazamientos por el Adelantamiento venía a suplir en gran medida la ausencia del Rey en los nuevos reinos.

La presencia continuada de Fernando III en Andalucía a raíz de la conquista explicaría por una parte el que no fuera necesario poner un funcionario de tipo territorial como el Adelantado, en cambio, como se recordará, sí pone un Merino Mayor en Murcia. Alfonso X, sin embargo, es mucho más activo en sus desplazamientos, sobre todo en León y Castilla<sup>(71)</sup>, y es más comprensible que institucionalizara un juez territorial de estas características que hemos apuntado.

El ensayo de la Frontera debió dar el resultado deseado y por ello Alfonso X introduce el sistema de Adelantamientos, ya perfectamente regulado en el *Espéculo*, en Castilla, León y Murcia en un primer momento y, posteriormente, en Galicia. En cualquier caso no dejan de ser un misterio las causas que indujeron al Rey Sabio a sustituir a los Merinos Mayores. Tal vez su impopularidad?. No lo sabemos. Quizás pudo contribuir

---

(71) Véase para ello el itinerario confeccionado por BALLESTEROS BERETTA: El itinerario de Alfonso X el Sabio, Madrid 1934.

al cambio la gran crisis económica en la que se halla inmersa la Corona castellano-leonesa. Es sabido que una de las primeras medidas que llevó a cabo Alfonso X al subir al trono fué la de devaluar la moneda por lo que "encarescieron todas las cosas de los regnos de Castilla e de León"<sup>(72)</sup>. Ese mismo año, en las Cortes de Sevilla, ha de fijar los precios de numerosos artículos y poner límite a los gastos suntuarios. Una nueva devaluación tiene lugar en 1256 por lo que las Cortes de Valladolid de 1258 intentan reorganizar la economía castellana. Saldría del objeto de este estudio entrar a estudiar esas medidas, pero entre las disposiciones que se acuerdan en esas Cortes el Rey ordena "que ningún rric omme non uenga a casa del Rey sinon aquel por qui el enbiare, et si otro uiniere por pleito que aya, que more hy fata que el pleyto aya librado, e si ouiere de librar conel Rey de su fazienda, quele libre el Rey fata terçero dia. Et esto mismo dizen delos obispos e delos maestros e delos abades delas Ordenes".<sup>(73)</sup>

Lógicamente, cabe pensar, que para poder llevar a cabo estas medidas es necesaria una administración de justicia territorial más eficaz que no haga necesarios los desplazamientos frecuentes a la Corte para el libramiento de los litigios. Quizás esta disposición refleja la medida tomada posteriormente por el Rey de sustituir los Merinos Mayores por Adelantados Mayores, es decir, por jueces. En principio ambos oficiales son perfectamente compatibles dada su diversidad de funciones, pero las mismas circunstancias económicas resultaba costoso mantener dos oficiales con lo que quedaría suprimido uno de ellos, en este caso el Merino Mayor.

(72) Crónica de Alfonso X, cap. 1, p. 4

(73) Cortes de Valladolid 1258 (CLC. I, 16, p. 58).

A estas posibles causas podríamos añadir otras de tipo político como es el hecho de que, por ejemplo, el oficio de Adelantado Mayor tiene una mayor categoría y, sobre todo, tiene en sus manos un eficaz instrumento: la administración de justicia. Ello supone que el noble sobre el que recaiga el oficio de Adelantado ve notablemente incrementado su poder en su región, que suele estar comprendida en el Adelantamiento, mientras que el Merino, incluso el Mayor, debía estar siempre a la resulta de lo que sentenciaran los adelantados menores e incluso los simples alcaldes de las villas.<sup>(74)</sup>

Nos resulta también durante una década los reinos de la Corona castellano-leonesa están sometidos al régimen de Adelantamientos como ya bien destacara el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(75)</sup>. En este sentido la documentación nos confirma la presencia de Adelantados Mayores en Castilla desde 1258 a 1272<sup>(77)</sup>; en Galicia de 1263 a 1268<sup>(78)</sup> el Adelantado Mayor de Murcia desde 1258, Alfonso García de Villamayor, desde 1261 ostenta también el Adelantamiento Mayor de la Frontera.<sup>(79)</sup>

---

(74) Espéculo, 4, 3, 12.

(75) El Gobierno.... p. 92.

(76) El Gobierno... pgs. 345 y 347.

(77) El Gobierno.... p. 92.

(78) PEREZ BUSTAMANTE (El Gobierno... pgs. 92 y 292) da como fecha hasta el año 1272, sin embargo todavía en 1273 encontramos el Rey enviando cartas a su Adelantado Mayor de Galicia (Vid. BALLESTEROS: Alfonso X, doc. 886, p. 1103 y SANCHEZ BELDA: Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia, doc. 975, p. 345)

(79) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 357 y 349.



A partir de estas fechas volvemos a encontrar Merinos Mayores al frente de Castilla, León y Galicia<sup>(80)</sup>, mientras que Murcia y Andalucía o Frontera continúan con régimen de Adelantamiento que ya permanecerá para ellas invariable durante toda la Baja Edad Media. A qué se debe este nuevo cambio? Desde luego se puede decir que el sistema de Adelantamientos no llegó a obtener los mismos resultados que en la Frontera, pero no parece que las razones hayan sido esas.

En 1268 para León y en 1269 para Castilla es suprimido el régimen de Adelantamiento por Alfonso X. No sabemos si fue sustituido inmediatamente por el sistema de Merinos ya que según el profesor PEREZ BUSTAMANTE no vuelve a aparecer documentado un Merino Mayor en León hasta 1273<sup>(81)</sup> y en Castilla hasta 1277<sup>(82)</sup>. El primer problema que se nos presenta, pues, es si realmente han sido sustituidos los Adelantados por Merinos inmediatamente o ha habido un "vacío" de gobierno territorial entre las fechas señaladas. La respuesta a este interrogante puede estar en la Crónica de Alfonso X.

Desde 1269 el descontento de la nobleza castellana es manifiesto. Parte de la nobleza incluso acude a Jaime I en busca de apoyo, que el Rey aragonés se negó a prestar. Finalmente en 1272 estalla la revuelta. Dejando ahora cada una de las pretensiones que los nobles le presentan al monarca, nos

---

(80) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 92.201 y 251

(81) El Gobierno... pgs. 202 y 235.

(82) El Gobierno... p. 299.

interesa confirmarnos para el tema que nos ocupa en una muy concreta. En efecto, los sublevados "pidieronle que tirase los merinos e pusiese adelantados" "porque el Rey tenía puestos sus merinos en las merindades de Castilla e de León".<sup>(83)</sup>

El texto de la Crónica, por tanto, puede ser interpretado en el sentido de que los Adelantados fueron sustituidos por Merinos Mayores en Castilla y León aunque no aparezcan documentados -la documentación de estos años del reinado es escasísima- hasta 1277 y 1273 respectivamente.

Admitida la hipótesis de que los Adelantados fueron sustituidos por los Merinos Mayores, nos resta intentar buscar los motivos que movieron al Rey Sabio a tomar esta medida. Para ello, creemos, la Crónica vuelve a darnos un dato de excepcional importancia para comprender el cambio de un sistema a otro.

En la contestación que el Monarca hace a los nobles sobre las pretensiones por éstos presentadas, en la que se responde precisamente a que sean retirados los Merinos y puestos de nuevo los Adelantados, el Rey responde que "tenía por bien de lo facer cuando la tierra fuese sosegada en justicia".<sup>(84)</sup> Es decir, que los Merinos han venido a sustituir a los Adelantados en Castilla y León porque la tierra no estaba "sosegada en justicia". El texto, a nuestro modo de ver es diáfano

---

(83) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.

(84) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.

al respecto. Los Adelantados no están cumpliendo con sus funciones de juzgar y mantener en justicia los reinos de Castilla y de León, ante lo cual, el Rey los reemplaza por oficiales que no tienen competencia jurisdiccional -los Merinos- pues han de estar a la resulta de lo que dispongan los adelantados menores y jueces de las villas<sup>(85)</sup>, pero que mantienen la tierra bajo control del Rey haciendo cumplir la justicia de estos jueces.

Todo ello, desde nuestro punto de vista<sup>(86)</sup>, tiene trasfondo político, radicado, precisamente, en ese malestar creado por la creciente política autocrática propugnada por el Rey Sabio, por el descontento de la nobleza a raíz del repartimiento de Murcia, por el desmesurado empleo de las rentas castellanas en las aspiraciones del Rey a ocupar el Imperio, por la supresión de los viejos fueros para implantar un Derecho desconocido pero que reforzaba la posición del Rey, por la extensión de la alcabala a los hidalgos.

Posiblemente todas estas causas, y algunas más, jugaron en contra de Alfonso X. Por otra parte el indudable peso de Pedro Núñez de Guzmán en Castilla y de Gutierre de Suárez de Mesones

---

(85) Conviene tener presente un hecho muy importante y es que el Espéculo disponía de todos los jueces, desde el Adelantado Mayor hasta los jueces de las villas, habían de ser de nombramiento real (Espéculo 4,3, pr.) si a ello añadimos el intento de implantar el Espéculo por el Rey Sabio como fuero local o subsidiario de los fueros existentes y la política de enviar jueces reales a las villas, comprenderemos que a los niveles locales la justicia estaba controlada por el - Monarca.

(86) PEREZ BUSTAMANTE en su trabajo, dentro de la hipótesis que propugna la identificación de los oficios de Adelantado Mayor y Merino Mayor, interpreta este texto de la Crónica en sentido contrario (El Gobierno... pgs. 94-5).

en León, incluidos posiblemente entre los conspiradores y descontentos<sup>(87)</sup> hacía peligrar la posición del Rey en Castilla y León, con lo que no es difícil suponer que eran estos dos personajes los que no tenían "sosegada en justicia" la tierra y de ahí su sustitución por Merinos.

Quedaba, no obstante, el caso de Galicia. Su Adelantado Mayor, Esteban Fernández, si, en cambio, le vemos participar activamente en el bando de los descontentos<sup>(88)</sup>, pero, sorprendentemente no le afectan las medidas tomadas para Castilla y León años antes. La explicación de este hecho en parte viene también justificada en la Crónica de Alfonso X en la que se recoge una carta del Rey a Esteban Fernandez<sup>(89)</sup>. En ella se dice textualmente que el Rey le había concedido el Adelantamiento de Galicia "e como quier que el Rey tolliese los Adelantamientos de Castilla e de Leon, non quiso tirar a vos del adelantamiento de Galicia, e fió de vos en esto e en otras muchas cosas"<sup>(90)</sup>. Pero su participación posterior en el bando sublevado en 1272 le valió la pérdida de su oficio en 1273<sup>(91)</sup> y la implantación en Galicia de un Merino Mayor<sup>(92)</sup>.

---

(87) La Crónica de Alfonso X es poco explícita al respecto y solo cita algunos de los "ricos omes" que se opusieron al Rey.

(88) Crónica de Alfonso X, cap. 22, p. 19.

(89) Crónica de Alfonso X, cap. 33, p. 28.

(90) Crónica de Alfonso X, cap. 33, p. 28.

(91) Ver nota 78.

(92) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 251 y 289.

Cuando nos ocupamos en el capítulo tercero de los alcaides de alzadas ya hacíamos referencia a los problemas que plantean las Cortes de Zamora de 1274. En principio, las Cortes zamoranas parecían una plamación de las quejas presentadas por los nobles en 1272. En ellas parece que para el reino de Castilla quedaba, restaurado el régimen de Adelantamiento<sup>(93)</sup>, sin embargo el que no hayamos encontrado en los años inmediatamente posteriores a 1274 ni una sola testimonio documental o narrativo que pueda constatar la existencia de un Adelantado Mayor en Castilla, e incluso el mismo texto de las Cortes de Zamora, nos hace pensar que el sistema de Adelantamiento siguió en suspenso. Efectivamente, si nos detenemos minuciosamente a leer el texto de las mencionadas Cortes en el que se establece el régimen de las alzadas en Castilla, podemos observar que en la cúspide de la jerarquía judicial, inmediatamente debajo del Rey, se encuentran los Adelantados Mayores de Castilla o sus lugartenientes ("los que estan en su lugar"). Desde luego es extraña la propia redacción del texto, pues, que sepamos, sólo había un Adelantado Mayor de Castilla y no varios. Posiblemente el hecho de esta redacción tan genérica, y no una más concreta, pueda explicarse por la poca convicción del monarca en llegar a restaurar el régimen de Adelantados en Castilla.

Apuntábamos en el capítulo tercero también el conocimiento incompleto que tenemos del cuaderno de peticiones de las Cortes de Zamora<sup>(94)</sup>. Ello no impide conocer el verdadero alcance de la

---

(93) Cortes de Zamora 1274 (CLA. I, 20, p. 90)

(94) Capítulo III, nota 330.

reacción antialfonsina de 1272, que conocemos sólo por los escasos datos que nos han proporcionado la Crónica del dicho Rey y por el prólogo del Fuero Viejo de Castilla. No deja de llamar la atención que sólo, según las Cortes de 1274, quedara instaurado el régimen de Adelantamiento para Castilla, quedando León excluido de él. Cómo explicar este tratamiento discriminatorio entre Castilla y León en su organización judicial?. Sí, efectivamente, son reinos distintos con organizaciones distintas unidos en la persona del Rey, pero entonces este hecho nos obligaría a circunscribir la reacción de 1272 al Reino de Castilla en el que se restaura el Adelantamiento Mayor tal como se solicitaba al Rey, - Son ciertamente muchas las explicaciones a la variada gama de hipótesis de trabajo que se pueden plantear sobre este "problemático" cuaderno de Cortes<sup>(95)</sup>, pero que en definitiva, en el estado actual de la investigación, no podemos esclarecer muchos puntos concretos que él se establecen. A la redacción tardía del propio cuaderno, seguramente ni siquiera íntegra, hemos de añadir la carencia total de datos que nos puedan avalar la existencia en Castilla de un Adelantado Mayor y la existencia en la Corte de tres "omes bonos" que libraban las alzadas de León, Extremadura, Toledo y Andalucía.<sup>(96)</sup>

Cómo explicar entonces estas Cortes de Zamora? Sin llegar a pensar que se tratan de una falsificación, el problema radica en que al conocerlas únicamente por una copia tardía y no -

(95) Véase en el Capítulo III, el apartado correspondiente a los alcaldes de alzadas en el que tratamos este punto.

(96) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 20, p. 90).

literal, no podemos precisar cuáles fueron exactamente la peticiónes que los distintos estamentos del Reino le hicieron al Monarca. Conocemos el descontento de los nobles por la Crónica, pero sin duda existía también un descontento por parte de las ciudades en lo referente a la administración de justicia en la que el creciente intervencionismo real no era visto de mucho agrado. De ahí el que en esta reunión de Zamora se delimitaran también qué casos eran privativos de la jurisdicción real y qué casos debían ser librados por los jueces locales. Posiblemente esta reacción afectó también a la cuestión del nombramiento de los jueces que, como sabemos, según el Espéculo sólo podían serlo de nombramiento real, con lo que las villas y ciudades habían visto trastocados sus viejos privilegios de poder elegir a sus alcaldes. Ahora al restaurarse el Fuero Viejo y los fueros locales<sup>(97)</sup>, las ciudades y villas recobraron su facultad de designar sus alcaldes y de librar los pleitos de acuerdo a su derecho tradicional (pleitos foreros).

No obstante, en nuestra opinión, las Cortes de Zamora quedaron sin cumplir en muchos aspectos y, entre ellos, el concerniente a la restauración del Adelantado Mayor de Castilla.

Muy relacionadas con la revuelta de 1272 y tal vez con estas Cortes de Zamora están, desde nuestro punto de vista, las Leyes de los Adelantados Mayores.

---

(97) Fuero Viejo de Castilla, prólogo.

El origen de la paternidad de Alfonso X sobre estas Leyes se debe a MARTINEZ MARINA<sup>(98)</sup> y a partir de él se ha venido admitiendo por la totalidad de la historiografía<sup>(99)</sup>. No sabemos en qué se basó MARTINEZ MARINA para afirmar que estas leyes fueron hechas por el Rey Sabio en Valladolid en 1255. Suponemos que al encontrarlas copiadas en un manuscrito a continuación del Fuero Real<sup>(100)</sup>, le hizo pensar a MARTINEZ MARINA que se trataba de una obra alfonsina promulgada al tiempo del Fuero Real o con posterioridad a éste.

El profesor PEREZ PRENDES ha sido el primero que puso en tela de juicio la afirmación de MARTINEZ MARINA dedicándole un estudio a estas enigmáticas Leyes<sup>(101)</sup>. Al citado profesor

(98) Ensayo histórico-crítico... pgs. 11 y 266.

(99) Así, por ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivo, MINGUIJON Historia del Derecho Español, p. 88; MARICHALAR Y MANRIQUE: Historia de la Legislación... t. III, pgs. 23-4; DANVILA: El Poder civil... p. 181; GARCIA-GALLO: Curso de Historia del Derecho Español, p. 83, entre otros. Más recientemente se ha ocupado de su estudio el profesor PEREZ PRENDES: Las Leyes de los Adelantados Mayores en Hidalguia, marzo-abril 1962, pgs. 3-22; Una interpretación muy personal les da el profesor PEREZ BUSTAMANTE en relación a los Adelantados y Merinos Mayores (El Gobierno... pgs. 68-71). Estas leyes han sido publicadas por la Real Academia de la Historia en los Opúsculos legales de Alfonso X, atribuyéndoselas a este Monarca, seguramente siguiendo también la afirmación de MARTINEZ MARINA. La colección "Códigos Españoles", repite lo mismo que la edición de la Academia, pero sin aventurarse a dar una fecha.

(100) Biblioteca del Escorial, Ms. Z-II-8 fols. 110-120. Hace referencia a ellas también ZARCO CUEVAS: Catálogo de Manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, San Lorenzo 1929, vol. III.

(101) Citado en nota anterior.



le extrañaba en primer lugar que un cargo de la importancia del Adelantado Mayor hubiera sido regulado de una forma tan breve y fragmentaria "como si el legislador tuviese prisa al redactar la obra". En segundo lugar, al contrario que otras leyes alfonsinas, las Leyes de los Adelantados Mayores no dicen nada de su origen porque "en realidad es una serie de textos alfonsinos fragmentarios procedentes del Espéculo, seleccionados y ordenados de acuerdo con un criterio que nos es desconocido, por alguien que ignoramos en un momento anterior a 1448 y posterior a 1258, fecha probable de terminación del Espéculo". (102)

El profesor PEREZ PRENDEZ puso acertadamente de relieve en el mencionado estudio, que las Leyes de los Adelantados Mayores no eran otra cosa que una refundición de algunos textos del Espéculo con bastante literalidad pero con algunas modificaciones<sup>(103)</sup>. Entre éstas, le llamaba la atención al citado profesor la sustitución de la frase del Espéculo de que los Adelantados debían juzgar "por estas leyes que son escriptas en este libro, e non por otras", por otra según la cual debían juzgar "segund fuero de la tierra", pues ésta última iría en contra de la política unificadora de Alfonso X, ya que esto, en definitiva, no suponía otra cosa que un triunfo de los derechos locales<sup>(104)</sup>. El profesor PEREZ PRENDEZ concluía dando dos posibles explicaciones a las

---

(102) PEREZ PRENDEZ: Las Leyes de los Adelantados... p. 8

(103) Las Leyes de los Adelantados... p. 17

(104) Las Leyes de los Adelantados... p. 18.

Leyes de los Adelantados Mayores: o bien se trata de un ordenamiento alfonsino anterior al Espéculo, pero no dado en Valladolid en 1255, pero para asentar esta idea tendríamos que aceptar previamente la equiparación del Adelantado Mayor con el Merino Mayor, puesto que las Leyes de los Adelantados Mayores adjudican al primero las facultades que el Espéculo designaba al segundo como suyas propias; o bien que las Leyes de los Adelantados Mayores son una "falsificación privada". Lo que no puede ser -y seguimos reflejando el pensamiento del citado profesor- es un ordenamiento Alfonsino posterior al Espéculo que trate de aplicar éste, porque en este caso no se habría empleado la frase aludida "fuero de la tierra", sino otras que utiliza Alfonso X en sus obras legales. (105)

Por su parte, el profesor PEREZ BUSTAMANTE más recientemente sostiene otra interpretación acerca de este texto legal<sup>(106)</sup>. Piensa el mencionado profesor que en los años en que existe el cargo de Adelantado Mayor (1258-1269 en Castilla; 1258-1263 en León y 1263-1272 en Galicia) faltan unas disposiciones legales que atiendan a su regulación, pues "las Partidas -dice el citado autor- parece comprobado que se redactaron con posterioridad al Espéculo". Este vacío legislativo se solucionaría en tiempos de Alfonso X utilizando las leyes del Espéculo y haciendo un nuevo cuerpo legal que se titularían las Leyes de los Adelantados Mayores, "consiguiéndose con ello una regulación legal del oficio". En cuanto a su datación, dice: "obviamente, estarían escritas en un momento en donde hubiera Adelantados Mayores y no Merinos Mayores, y así puede establecerse a través de la documentación

---

(105) Las Leyes de los Adelantados... pgs. 21-2

(106) El Gobierno... pgs. 68-71

un cálculo aproximado: o bien de 1258 a 1270, reinando Alfonso I o bien a finales del reinado de Sancho IV, desde 1290, o a lo largo del reinado de Fernando IV, en que a diferencia del de Alfonso XI aparecen Adelantados Mayores y no Merinos Mayores al frente de las circunscripciones territoriales".<sup>(107)</sup>

Para PEREZ BUSTAMANTE, cuanto mayor sea la proximidad a las Partidas, que regulan ambos oficios, menos probabilidades tiene la hipótesis de fechar su redacción, y por ello basándose en la preocupación legislativa de Alfonso X a quien, según PEREZ BUSTAMANTE, "no se le han discutido estas leyes"<sup>(108)</sup>, concluye que estas leyes podrían haberse realizado entre 1258 y 1268, período en el que se encuentran Adelantados Mayores al frente de la Administración territorial.<sup>(109)</sup>

Merece la pena entrar en consideración de ambas hipótesis de las que cabe hacer algunas puntualizaciones de cara a otra posible interpretación de este cuerpo legal.

El profesor PEREZ BUSTAMANTE, al partir de la identificación total entre el Adelantado Mayor de la Corte y los Adelantados Mayores de los territorios en el Espéculo, interpretación muy discutible<sup>(110)</sup>, lógicamente ha de suponer que no existe una legislación para los Adelantados Mayores en el reinado de Alfonso X -

(107) El Gobierno... pgs. 70-1.

(108) En este punto el profesor PEREZ BUSTAMANTE no ha tenido en cuenta la hipótesis del profesor PEREZ PRENDES con respecto a estas leyes de que pudieran tratarse de una falsificación.

(109) El Gobierno... p. 71.

(110) Ya vimos en el capítulo III como el Espéculo regula tres tipos de Adelantados bien diferenciados a nuestro entender. Por su parte el profesor PEREZ BUSTAMANTE (El Gobierno... pgs. 65-8) sostiene lo contrario.

destinada a los Adelantados Mayores de los territorios; pero si por el contrario admitimos que en el Espéculo se regula la figura del Adelantado Mayor de los territorios, no faltan tales disposiciones legales pues éste oficial aparece perfectamente definido en el Espéculo. Pero aún con independencia de que el Adelantado Mayor de la Corte y Adelantado Mayor de los territorios fueran en el Espéculo la misma cosa, el profesor PEREZ BUSTAMANTE pasa por alto que para confeccionar las Leyes de los Adelantados Mayores se están usando precisamente las leyes de esos Adelantados regulados en el Espéculo, texto que para el citado profesor estaría ya redactado en 1260<sup>(111)</sup>, con lo que, en todo caso, las Leyes de los Adelantados Mayores no podrían haber sido redactadas en 1258, puesto que se han tomado textos del Espéculo, como el propio profesor admite.<sup>(112)</sup>

Habría pues, un contrasentido al negar primero que las leyes del título II del libro IV del Espéculo no recogen el Adelantado Mayor de los territorios y que luego sean estas leyes precisamente las que se tomen en las Leyes de los Adelantados Mayores.

Tampoco parece muy claro que necesariamente las Leyes de los Adelantados Mayores tuvieran que haber sido escritas en un momento en que hubiera Adelantados, pues bien pudiera tratarse de un ensayo abortado. Piénsese que el oficial que se regula en las Leyes de los Adelantados Mayores es un oficial que podríamos denominar mixto" en cuanto recogía las funciones más carac-

---

(111) El Gobierno... p. 65

(112) El Gobierno... p. 71.

terísticas de los Adelantados Mayores (la de juzgar) y las más características de los Merinos Mayores (guardar y mantener en justicia el territorio), por tanto es un oficial que no correspondía a ninguno de los arquetipos recogidos en el Espéculo. En este sentido sería muy significativa la contradicción que se recoge en la ley IV de las Leyes de los Adelantados Mayores, tomada en parte de Espéculo 4, 3, 12, en la que al regular las funciones del Merino Mayor señala claramente la subordinación de éste a los adelantados de la merindad y a los alcaldes de las villas en la función judicial; pues bien, la ley IV de las Leyes de los Adelantados Mayores, en teoría destinadas para regular el oficio de Adelantado Mayor del territorio, subordina la función de éste a los adelantados menores de la merindad y, en su defecto, a los jueces de las villas<sup>(113)</sup>. Cómo interpretar entonces esta abierta contradicción entre la ley IV y la ley II en la que se le reconocen a los Adelantados Mayores amplias facultades jurisdiccionales?<sup>(114)</sup> Pero sobre una posible respuesta volveremos más adelante.

---

(113) Leyes de los Adelantados Mayores, ley 4: "...et deve otrosi facer enderezar todas las malfetrias que fallare en su merindat, e facer cumplir los juycios que no fueron complidos e eran judgados: et para facer esto deve llamar los adelantrados de aquella merindat o fuer: et do non oviere adelantrados deve tomar los que fueren para judgar en las villas, con que libre los pleytos que antel vinieren... Véase en relación con Espéculo 4, 3, 12.

(114) Véase la ley 2 de las Leyes de los Adelantados Mayores.

El profesor PEREZ PRENDES por su parte ha estudiado muy minuciosamente el texto relacionándolo con el Espéculo y las Partidas, y señala que con estas últimas las Leyes de los Adelantados Mayores no guardan relación de un modo directo sino a través del Espéculo <sup>(115)</sup>. Niega la paternidad de Alfonso X sobre estas leyes y las considera, como vimos, como una falsificación privada, habilísimamente hecha, redactada por una mano desconocida, pero inspirada en la corriente opuesta a Alfonso X y a sus intentos de reforma de la vida jurídica. <sup>(116)</sup>

El principal argumento que sostiene la interpretación del profesor PEREZ PRENDES de que las leyes de los Adelantados Mayores se tratan de una falsificación privada, es la sustitución en estas últimas leyes de la frase "segund el fuero de la tierra" que originariamente no aparece en el Espéculo sino que, por el contrario, este cuerpo legal, disponía que los Adelantados debían juzgar "por estas leyes que son escriptas en este libro, e non por otras" <sup>(117)</sup>. En este sentido tiene razón el profesor PEREZ PRENDEZ cuando afirma que la inclusión de la citada frase en las Leyes de los Adelantados Mayores (que juzguen "segund fuero de la tierra") supone en cierta medida un triunfo del Derecho Local <sup>(118)</sup>. Efectivamente, se trata de un triunfo del Derecho municipal.

---

(115) Las Leyes de los Adelantados... p. 17.

(116) Las Leyes de los Adelantados... pgs. 20 y ss.

(117) Espéculo 4, 2, 3.

(118) Véase al respecto A. IGLESIA FERREIROS: Derecho Municipal, Derecho Señorial, Derecho Regio, en Historia, Instituciones, Documentos, 4, 1979, p. 117.

con respecto al Derecho Regio que trataba de implantar Alfonso X, pero estos datos que el profesor PEREZ PRENDES le hacen pensar en una falsificación, pueden dar lugar a otra interpretación que a continuación exponaremos.

La hipótesis de que se trata de una falsificación privada tiene el principal inconveniente de que no le vemos la finalidad a dicha falsificación. En primer lugar, si se trata de una obra coetánea a Alfonso X, al Espéculo, de donde ha sido tomado su texto como bien señala el profesor PEREZ PRENDES, cuesta mucho pensar que al propio monarca le intenten, ya sea los nobles o ya sean las ciudades, hacer pensar que ese es el texto redactado en su corte por su equipo de juristas. Podría pensarse también que la falsificación es posterior al reinado de Alfonso X, pero en todo caso no sería nunca posterior a principios del siglo XIV en que ya con seguridad se encontraban redactadas las Partidas tal como las conocemos, pues en ellas se encuentran perfectamente diferenciados los oficios de Adelantado Mayor y Merino Mayor. En este caso tendríamos mucho más delimitada la posible fecha de la falsificación, pues la podríamos fijar entre 1284 en que muere Alfonso X y el reinado de Fernando IV. Sin embargo, sigue siendo muy difícil pensar que al Rey, quien dispone en su corte todo un equipo de juristas -se están reelaborando las Partidas con el Espéculo a la vista-, se le intente "colar" un texto de este tipo. Cabe, por tanto, otra hipótesis.

Uno de los puntos de fricción por los que se llegó al levantamiento de 1272 era la intromisión de alcaldes reales en las villas que incluso obligaban a las gentes de señorío a las villas que incluso obligaban a las gentes de señorío a compa-

recer ante ellos para ser juzgados, sin duda, de acuerdo a la ley real<sup>(119)</sup>. En Zamora en 1274 se planteó este problema estableciéndose a partir de ese momento una clara distinción entre los "pleitos del rey" y los "pleitos foreros".

Los pleitos del rey o casos de corte quedaron plenamente delimitados<sup>(120)</sup> pasándose a juzgar por cada uno de los derechos locales los demás litigios. Esta medida tuvo también su repercusión en la administración de justicia pues como se recordará a partir del ordenamiento zamorano se establecieron un número de alcaldes de casa del Rey determinados en razón de su tierra de procedencia (Castilla, León y Extremadura). La reacción contra la política legislativa de Alfonso X había dado al traste con el intento de unificar jurídicamente los reinos en base a la concesión del Espéculo como fuero único o subsidiario en el que se establecía la obligación a todo juez de juzgar "por estas leyes que son escriptas en este libro, e non por otras". Las Cortes de Zamora suponían, pues, el triunfo del Derecho municipal.

Vefamos también cómo una de las pretensiones presentadas por la facción sublevada al Rey consistía en que sustituyera el régimen de Merinos Mayores, impuesto en Castilla y León desde años antes por las razones que expusimos, por el régimen de Adelantamiento, a lo que el Rey contesta con la evasiva de que lo tendrá "bien de lo facer quando la tierra fuese sosegada en justicia".<sup>(121)</sup>

---

(119) Crónica de Alfonso X, caps. 23, p. 20 y cap. 25, pgs. 21.

(120) Cortes de Zamora 1274 (CLC. I, 46, p. 94)

(121) Crónica de Alfonso X, cap. 25, p. 22.



A la vista de estos datos cabría pensar que las Leyes de los Adelantados Mayores fueron quizás un proyecto legislativo de Alfonso X que respondería a las exigencias de los nobles de sustituir los Merinos por Adelantados, pero que ahora, el Rey Sabio, ante las presiones, bien pudo configurar ese oficial mixto en que se recogían la función característica del Adelantado Mayor de juzgar y las de los Merinos Mayores de guardar y mantener la aplicación de la justicia. Con ello, la figura del Adelantado en definitiva la nobleza, adquiriría un poder inusitado al convertirse en juez y "ejecutor" al mismo tiempo.

Estos Adelantados Mayores a partir de ese momento no juzgarían como lo han venido haciendo aplicando el Derecho regio contenido en el Espéculo, sino que de acuerdo también a las protestas que suscitaba esta aplicación y que, como acabamos de ver, se reflejó en Zamora, pasarán a juzgar "segund el fuero de la tierra" como ya es recogido en las leyes de los Adelantados Mayores. Por tanto no se trata de una falsificación sino que está recogiendo una situación de hecho que el Rey ha tenido que admitir al aplicar su Derecho sólo en los casos de Corte, reconociendo el triunfo del Derecho local en los restantes pleitos. Los Adelantados Mayores que se concebían en las Leyes de este nombre, al recorrer su Adelantamiento debían administrar justicia, pues, conforme al Derecho o fuero de la tierra y conforme al real.

A este proyecto legislativo respondería tal vez ese Adelantado Mayor de Castilla del que nos hacen mención las Cortes de Zamora de 1274 y del que, como decíamos, no ha quedado ningún rastro documental de su existencia; habremos de esperar once años, a 1285, para encontrar de nuevo un Adelantado Mayor en Castilla. No deja de llamar la atención que no encontremos tampoco

documentados en los años inmediatos a la sublevación, Merinos Mayores de Castilla, pues éstos aparecen de nuevo en 1277. Las Leyes de los Adelantados Mayores, entonces, podría pensarse que responden a un programa de reformas iniciado a raíz de la sublevación de 1272 y que tal vez se propuso en 1274.

Contra esta hipótesis no cabría alegar los argumentos del profesor PEREZ PRENDES a quien le sorprende que un cargo de la importancia del Adelantado Mayor fuera objeto de una regulación específica "tan breve y fragmentaria"<sup>(122)</sup>, sencillamente, a nuestro entender, el elaborador de estas leyes se está sirviendo del Espéculo en el que aparecen ampliamente regulados Merinos y Adelantados Mayores; ahora lo que se intenta y lo que interesa es reunir solamente aquellas leyes del Espéculo que recogen las funciones de unos y otros, las funciones judiciales y las mantenedoras de la justicia, para satisfacer así las pretensiones nobiliarias. El propio profesor PEREZ PRENDES dice que por la forma en que se encuentran hechas estas leyes parece que "el legislador tuviese prisa de redactar su obra"<sup>(123)</sup>. Efectivamente, se trata de una obra con la que se intenta salir al paso de una situación conflictiva que se le ha presentado al Rey.

Nos inclinamos a creer que se trató sólo de un proyecto, es decir que no llegaron a tener aplicación práctica, fundamentalmente por la gran contradicción a la que antes nos referíamos que hay entre la ley II y la ley IV de este breve cuerpo legal, en el que mientras en la ley segunda se le concede a esa hipotético -

---

(122) Las leyes de los Adelantados Mayores... p. 8

(123) Las Leyes de los Adelantados Mayores... p. 8.

Adelantado Mayor que se intenta crear unas amplias facultades jurisdiccionales para juzgar, en la ley cuarta lo encontramos sometido al fallo de los adelantados menores o en su defecto de los jueces de las villas en lo concierne a la administración de justicia en su Adelantamiento, de los que paradójicamente se les había facultado por la ley segunda a conocer en apelación el fallo de estos jueces del Adelantamiento<sup>(124)</sup>.

Por otro lado, el silencio que guardan las fuentes documentales con respecto a este Adelantado Mayor de Castilla mencionado en las Cortes de Zamora, así como la misma redacción de las leyes que, en contra de otras leyes alfonsinas, aparecen sin preámbulo ni data, nos inclina a pensar que las Leyes de los Adelantados Mayores no fueron otra cosa que un borrador o proyecto que responde a la situación conflictiva creada por la sublevación de 1272.

En todo caso, aún tratándose de un proyecto que nunca tal vez fué llevado a la práctica, nos quedaría por tratar de responder el por qué esta medida de restauración de Adelantamiento afectaba sólo a Castilla.

En efecto, en las Cortes de Zamora de 1274 quedaban plenamente diferenciados dos esquemas judiciales; el de Castilla, que se mantenía fiel al propuesto por Alfonso X en el Espéculo, y el de León, y los restantes reinos, en los que desaparece el Adelantado Mayor<sup>(125)</sup> pasando a ser conocidas las alzadas por "tres omes bonos" como tuvimos ocasión de ver. Posiblemente la explicación de que en Castilla se haya mantenido el esquema

(124) Véanse las leyes 2 y 4 de este cuerpo legal.

(125) Efectivamente, en Galicia vimos que desaparece en 1273 el Adelantamiento.

judicial del Espéculo y no en León y Galicia, se deba a la fuerte tradición jurídica de estos reinos que debieron presentar grandes obstáculos a la implantación del Derecho regio.<sup>(126)</sup> Algo similar ocurriría con las Extremaduras, cuyo Derecho eminentemente privilegiado chocaría abiertamente con el Real, y en situación parecida se encontraría Toledo. Más problemática es Andalucía pues en ella, en principio, sigue actuando el Adelantado Mayor de la Frontera, oficio que en ningún momento ha sido suprimido como en Castilla, León o Galicia. Extraña mucho que las alzadas de Andalucía no vayan al Adelantado Mayor de la Frontera. La única explicación posible es, a mi modo de ver, que en el caso de Andalucía, dado el carácter itinerante del Adelantado y la extensión de esta circunscripción, se diera opción a los habitantes de la Frontera o bien de acudir en apelación al Adelantado o bien de acudir en apelación a los alcaldes de alzada de la Corte. El silencio que guardan las Cortes de Zamora respecto a Murcia, nos hacen suponer que en este reino no se vió alterado el régimen de Adelantamiento allí implantado por el Rey Sabio.

En Castilla, en cambio, la situación es distinta. El Derecho Real con independencia de que se trate ahora del Fuero Real, como tradicionalmente se ha venido afirmando, o del Espéculo o Fuero del Libro, como sostiene el profesor GARCIA GALLO, se viene otorgando como fuero complementario y subsidiario a los viejos fueros locales; si a esto añadimos la creciente intervención de los jueces reales, es fácil pensar que el Derecho regio no resulta tan extraño; por otra parte, no hay tampoco tanta profusión de señoríos como los puede haber en Galicia o León; ello hace, desde

---

(126) Reeuérdese que una de las quejas presentadas por la nobleza al Rey Sabio es en razón de la "pueblas que el rey hacía en algunas tierras de León e de Galicia" (Crónica de Alfonso X cap. 23, p. 20).

nuestro punto de vista, que en Castilla se esté más familiarizado con el Derecho regio y quizás no se reaccionó con la violencia que se hizo en otros reinos, explicándose de esta forma - el que se mantenga para el Reino castellano el sistema judicial que se propugnaba en el Espéculo.<sup>(127)</sup>

Pero la realidad es muy distinta. En los años inmediatamente posteriores a los conflictos de 1271-1274 no sólo no aparece documentada la presencia de Adelantados Mayores al frente de la circunscripciones territoriales sino que, por el contrario, encontramos al frente de ellas Merinos Mayores. En este sentido ya en el mismo 1274 encontramos un Merino Mayor de León, oficio que se mantiene en este reino durante el resto del reinado de Alfonso X y durante el de su hijo Sancho IV.<sup>(128)</sup> En Castilla, en cambio, en los años inmediatamente posteriores a las Cortes de 1274 no encontramos ningún dato que nos pueda confirmar la existencia ni del Adelantado Mayor al que dichas Cortes aluden ni de Merino Mayor. Sólo nos podemos servir de la noticia que nos expresa la Crónica del Rey Alfonso X al referirse a la marcha del primogénito Fernando, "que pornia Merinos en Castilla, e en León, e en Galicia, aquellos que el viese que eran menester"<sup>(129)</sup>

---

(127) Este sería un argumento más en apoyo de la tesis del profesor GARCIA-GALLO de que el texto del "Fuero del Libro" o "Libro del Fuero" ha de identificarse con el Espéculo y que en este cuerpo legal fue el que se concedió a Aguilar de Campoo, Sahagun, Niebla, Soria, etc.

(128) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 202-3 y 235.

(129) Crónica de Alfonso X, cap. 59, p. 48.

y parece que así efectivamente lo hizo como recoge la propia Crónica<sup>(130)</sup>. La presencia de Merinos Mayores en León y en Galicia<sup>(131)</sup>, nos hace pensar que también, aunque no aparezcan documentados hasta 1277<sup>(132)</sup>, seguramente estaría al frente de Castilla un Merino Mayor como en Galicia y León.

Esta situación nos lleva forzosamente a pensar que la revuelta nobiliaria de 1272, algunas de las disposiciones de las Cortes del 74 y tal vez el proyecto de las Leyes de los Adelantados Mayores quedaron en nada una vez que el Rey ha podido superar este difícil momento, y ha seguido su política y con ella ha mantenido el régimen de Merinos Mayores. No sabemos los motivos que llevaron a los nobles levantiscos de 1272 a deponer sus intenciones en lo que respecta al régimen de Administración territorial que debía seguirse. Desde luego la respuesta que Alfonso da no puede ser más explícita muestran claramente que no tenía intención de sustituir a los Merinos hasta que la tierra no estuviera "sosehada en justicia" y por lo visto, así debió ocurrir, pese a lo dispuesto en las Cortes zamoranas de 1274.

---

(130) Crónica de Alfonso X: El infante don Fernando partió de Toledo, e fue por las Estremaduras, e dende pasó al reino de León, e andado por las cibdades e villas requeriendo e haciendo justicia en aquellos lugares que cumplíe con la tabla del sello del Rey puso merinos por toda la tierra del Rey, e otrosí puso alcaldes e oficiales en aquellas cibdades e villas e lugares que gelo pidieron... (cap. 60, p. 48).

(131) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 251.

(132) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 301) apunta la fecha de 1278, pero en 1277 hay una carta del Rey Alfonso a Nuñez Fernandez de Valdenebro, su Merino Mayor en Castilla, sob algunas reclamaciones del Concejo de Burgos (BALLESTERO: Alfonso X, doc. 1083, p. 1112); El profesor PEREZ BUSTAMANTE no incluye tampoco al dicho Merino en sus listas de Merinos Mayores de Castilla, pero en cambio sí cita el documento en su vol. II. doc. 31. p. 20.

Posiblemente en esta situación debió influir la delicada perspectiva política producida a raíz de la muerte del heredero el Infante don Fernando. Desde muy pronto la nobleza se dividió entre los partidarios de los hijos de éste, los Infantes de la Cerda, y los que apoyaban la sucesión del Infante don Sancho al trono. Este fué reconocido como heredero en las Cortes celebradas en Segovia en 1278, pero perdidas las esperanzas de ocupar el trono navarro, Alfonso X, decide repartir en 1281 el reino castellano entre Sancho y los Infantes. Ante esta decisión Sancho se subleva con apoyo de gran parte de las ciudades castellanas y leonesas -descontentas por la carestía de la vida y los excesivos impuestos- y con apoyo de sus partidarios. Alfonso X queda prácticamente a merced de Sancho y sólo recibe apoyo de Sevilla y Murcia.

Es precisamente en estos años cuando volvemos a encontrar un Adelantado Mayor al frente del Reino de Murcia<sup>(133)</sup>; en Andalucía no era preciso un oficial de este tipo pues Alfonso se hallaba en Sevilla. En 1284 moría el Rey Sabio y pese al conflicto sucesorio, que todavía repercutirá durante bastantes años, Sancho accede al trono.

De cara a la administración territorial, Sancho IV mantiene al frente de Murcia un Adelantado, oficio que ocupan antiguos partidarios cuyos (Garci Jofré de Loaysa, Fernán Pérez de Guzmán) para ocuparlo posteriormente el Infante Don Juan Manuel<sup>(134)</sup>.

(133) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 399 y 439.

(134) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 399-400 y 439.

En cuanto a Castilla el Rey opta por un momento en mantener simultáneamente un Adelantado Mayor y un Merino Mayor<sup>(135)</sup>. Efectivamente, a los pocos meses de haber accedido al trono - Sancho, encontramos confirmando a Sancho Martínez de Leyva como Merino Mayor de Castilla<sup>(136)</sup>, quien ocupa dicho oficio hasta 1292<sup>(137)</sup>, pero en 1285 encontramos a Pedro de Guzmán como Adelantado Mayor de Castilla<sup>(138)</sup> y en 1287 ocupa el oficio el que fuera partidario y gran valedor de don Sancho años atrás, Diego López de Haro<sup>(139)</sup>. Pero es más, las Cortes reunidas un año antes, en 1286, disponían que "merino nin adelantado nin otro ninguno non ffaga pesquisa general" salvo el Rey<sup>(140)</sup>, prueba de que existen simultáneamente Adelantados y Merinos Mayores, con lo que no cabe la menor duda de que se trata de dos oficios perfectamente diferenciados en este momento, tal como se recogían en el Espéculo, y perfectamente compatibles por su diversidad de funciones.

- 
- (135) Este dato es un argumento más en contra de la tesis del profesor PEREZ BUSTAMANTE que sostiene la equiparación entre estos dos oficios.
- (136) T. GONZALEZ: Colección de privilegios de la Corona de Castilla, t. VI, doc. 265; también en este sentido PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 342-3.
- (137) Efectivamente, entre esas dos fechas encontramos varios documentos en los que aparecen Sancho Martínez de Leyva detentando dicho oficio; así en 1286 (GAIBROIS: Sancho IV t. III, doc. 106, p. 68), en 1288 (MANUECO: Documentos de la Iglesia Colegial de Santa Maria la Mayor de Valladolid, doc. 45, pgs. 131-6), en 1289 (MANUECOS: Documentos de la iglesia Colegial... doc. 73, p. 210) y 1292 (GAIBROIS: Sancho IV t. III, doc. 425, pgs. 285-6)
- (138) Academia de la Historia. Colec. Salazar. 0-16, 521.
- (139) Véase la sentencia de Diego López de Haro sobre el pleito que mantenían el Monasterio de Gumiel y el Merino de Santo Domingo de Silos (GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 147, pgs. 90-1; publicado también por PEREZ BUSTAMANTE El Gobierno... t. II, doc. 60, pgs. 29-30).



En León, en cambio, no tenemos datos de que coexistieran Adelantado Mayor y Merino Mayor. Sí aparece documentado este último durante todo el reinado de Sancho IV en las personas de Rodríguez Alvarez, Esteban Núñez, Esteban Pérez Florián etc.<sup>(141)</sup> Quizás la ausencia del Adelantado Mayor de León pudiera estar en relación con lo que exponíamos a la hora de explicar el por qué en las Cortes de 1274 se omitía el Adelantado Mayor al contrario que en Castilla, pero es difícil llegar a una explicación concluyente.

En Galicia la situación era distinta. A finales del reinado de Alfonso X encontramos al frente de la circunscripción a Esteban Fernández de Limia, quien había sesposeído del cargo en 1273 como se recordará a raíz de la revuelta de 1272 pero que, sin duda, en los últimos años del reinado, Alfonso X ha logrado traerlo de nuevo a sus filas seguramente a cambio de la concesión del Adelantamiento de Galicia que antes ocupara<sup>(142)</sup> Basamos esta suposición en que nada más morir Alfonso X, Sancho IV suprime el Adelantamiento de Galicia y pone al cargo de este reino a Juan Fernández como Merino Mayor de Galicia, oficio que aparece perfectamente documentado en los años siguientes<sup>(143)</sup>, hasta que en 1289 Sancho IV, desconocemos por qué

(141) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 203 y 235, ofrece los nombres de los Merinos Mayores de León durante este reinado.

(142) Véase SANCHEZ BELDA: Documentos reales... año 1281, doc. 813, p. 352 y año 1282, doc. 815, p. 353. El retorno de Esteban Fernández de Limia como Adelantado Mayor de Galicia ha sido pasado por alto por el profesor PEREZ BUSTAMANTE en su trabajo tantas veces citado, aunque sorprendentemente recoge el registro de los documentos de SANCHEZ BELDA en su tomo II (doc. 42 y 43).

(143) Año 1384, carta de Sancho IV a Juan Fernández, Merino Mayor de Galicia por las quejas que le fueron presentada

razones, implantó de nuevo en Galicia el régimen de Adelantamiento<sup>(144)</sup>. M. GAIBROIS interpretó la sustitución del Merino Mayor por el Adelantado Juan Alfonso de Alburquerque en base a las alteraciones y disturbios que a la sazón sacudían el reino gallego, dado el carácter "militar" del oficio de Adelantado<sup>(145)</sup>. Posiblemente, en mi opinión, el envío del Adelantado a Galicia está justificado por las alteraciones que allí se producían, pero no precisamente por el carácter militar del oficio de Adelantado -no atribuido en ningún momento por ningún texto legal- sino por su carácter de juez que incluso puede juzgar por delegación real los pleitos que le están reservados al conocimiento del Rey. Ante una situación de revuelta, el Rey decide mandar a su yerno, Juan Alfonso de Alburquerque a sofocar la revuelta, y para ello manda a un juez con amplias competencias judiciales, un Adelantado Mayor, para implantar la justicia y el orden en el territorio. Ciertamente esta medida llevada a cabo por el Rey no le reportó ningún resultado práctico, más bien todo lo contrario, pues Juan Alfonso de Alburquerque toma partido por los sublevados y Sancho en persona ha de dirigirse a Santiago a sofocar la revuelta<sup>(146)</sup>. Allí destituye a Juan Alfonso y nombra como Adelantado Mayor a Diego Gómez de Roa, que con anterioridad había sido su Merino Mayor en Galicia<sup>(147)</sup>. Seguramente la inestabilidad de Galicia en estos años obliga a la presencia de un Adelantado Mayor en este reino.

(143) /...por el cabildo de la catedral de Orense (DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales del Archivo de la Catedral de Orense, en Miscelánea de Textos Medievales, I, Barcelona 1972, doc. 125, p. 45) Año 1286 (MARCOS RODRIGUEZ: Catálogo de documentos del Archivo catedralicio de Salamanca, Salamanca 1962, doc. 13, p. 9 y del mismo año, SÁNCHEZ BELDA: Documentos reales... doc. 835, p. 360) en 1287 (GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 167, p. 100) (GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 178, pgs. 108-9)

(144) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 253, nota 38.

(145) GAIBROIS: Sancho IV, t. II, p. 26,

En cuanto a la Frontera o Andalucía los datos que poseemos son más escasos. En primer lugar, el mismo año en que Sancho accede al trono, le vimos suprimiendo el Adelantamiento de Galicia que ocupaba Juan Fernández de Limia. El peso político de este caballero fue seguramente lo que le llevó a nombrarle Adelantado Mayor de Andalucía<sup>(148)</sup> medida aprovechada paralelamente para suprimir el Adelantamiento de Galicia y poner un Merino Mayor.

Desconocemos la suerte del Adelantamiento de la Frontera desde 1284 a 1290 en el que aparece Fernán Ponce de León al frente de esta circunscripción<sup>(149)</sup>, pero su continuidad en los últimos años del reinado de Sancho IV aparece perfectamente documentada.<sup>(150)</sup>

Recapitulando este casi medio siglo que abarcan los reinados de Alfonso X y Sancho IV, podemos destacar en primer lugar que no existe una administración territorial unitaria para todos los reinos de la Corona castellano-leonesa. El viejo sistema de Merindades Mayores implantado por Fernando III es

---

(146) /...Crónica de Sancho IV, cap. 8, p. 85.

(147) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 253.

(148) GAIBROIS: Sancho IV, t. III, 38, pgs. 23-4 en que aparece titulado como Adelantado Mayor de Andalucía en una carta del Rey en la que le ordena que sean reconocidos los derechos del Arzobispo y del Cabildo de Sevilla respecto a la aduana de la ciudad y de los diezmos del almojarifazgos (Reg. también en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 45, p. 24).

(149) PEREZ BUSTAMANTE. El Gobierno... pgs. 360-1

(150) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 360-3 y 389.

sustituido a los pocos años de subir al trono Alfonso X por el régimen de Adelantamientos, posiblemente por el buen resultado que había dado lugar el ensayo de este nuevo oficial en la Frontera. El régimen se mantuvo algo más de una década como único para todas las circunscripciones. A partir de este momento, por las razones que hemos intentado explicar, será de nuevo predominante el régimen de Merindades, salvo en Murcia, en la Frontera y en los últimos años de Sancho IV en Galicia. También al menos durante tres años -y esto es muy importante- coexiste en Castilla un Adelantado Mayor y un Merino Mayor en los primeros años del reinado de Sancho IV como ya señalábamos.

En 1295 moría Sancho dejando tras sí como heredero un niño de corta edad bajo la tutela de su madre, la reina doña María de Molina, y un reino plagado de tensiones que desde muy pronto se pondrán de manifiesto en el reinado siguiente.

Por lo que respecta a la Administración territorial el reinado de Fernando IV, primero con sus tutores y luego solo, supone la restauración del régimen de Adelantamientos.

En este sentido, encontramos que en León continúa al frente del Adelantamiento Esteban Pérez Florian, nombrado para ese oficio en los últimos años del reinado de Sancho IV<sup>(151)</sup>, valido del Rey<sup>(152)</sup>, y que permanece en el hasta 1296. En todos los

---

(151) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 203-y 238.

(152) GAIBROIS: Sancho IV, t. I, p. 49.

años que comprenden el reinado de Fernando IV, como bien ha puesto de relieve el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(153)</sup>, se mantiene en León el régimen de Adelantamientos<sup>(154)</sup>, salvo en los meses inmediatamente posteriores a la mayoría de edad del Rey en los que reaparecen confirmando en los documentos Merinos Mayores<sup>(155)</sup>, pero a mediados de julio de 1302 volvemos a encontrar a los Adelantados Mayores<sup>(156)</sup>. Este cambio momentáneo de política que, sólo afectó a León, bien puede explicarse como un intento por parte del Rey de hacerse personalmente con el control del gobierno, pero el dominio del Reino estaba fuera del alcance del joven Rey, presionado unas veces por las ciudades y otras por los Infantes don Enrique y don Juan o por don Diego López de Haro y Juan Nuñez de Lara.

En Castilla la minoría comienza con un régimen en el que coexisten, al igual que en los primeros años del reinado de Sancho IV, Adelantado Mayor y Merino Mayor. No sabemos exactamente cuando fué nombrado el Adelantado Mayor de Castilla al que encontramos por primera vez confirmando en 1297<sup>(157)</sup> junto al Merino Mayor de Castilla, pero salvo en estos dos documentos<sup>(158)</sup> no vuelven a coincidir confirmando en el mismo rodado el Adelantado Mayor y el Merino Mayor de Castilla. Cuatro meses más tarde aparece solo confirmando el Adelantado Mayor que, por cierto, ha sido sustituido por Garci Fernández de Villamayor<sup>(159)</sup>. Desde

(153) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 238.

(154) El Gobierno... pgs. 203-5 y 238.

(155) En este sentido aparecen confirmando Pero Nuñez de Guzmán (BENAVIDES: Fernando IV, doc. 195, p. 270) en marzo de 1302 y el 3 de junio es Esteban Pérez Florian el que aparece confirmando como Merino Mayor de León (BENAVIDES: Fernando IV, doc. 209, p. 310).

(156) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 204-6 y 238.

(157) BENAVIDES: Fernando IV, doc. 80, p. 114 en el que coincide confirmando Juan Rodríguez de Rojas, Merino Mayor de Castilla. Ambos oficiales aparecen también confirmando en el mes de marzo del mismo año (BENAVIDES: Fernando IV doc. 86, p. 121).

luego la situación política de estos primeros años de la minoría no puede ser más confusa y cambiante; las alianzas de los nobles varían según los intereses del momento y las ciudades, que se encuentran en el zénit de su apogeo, recelan de los tutores. Por ello no ha de extrañarnos que los oficios sean a menudo cambiados. Así, acabamos de mencionar al Adelantado Garcí Fernández de Villamayor, quien confirmaba un rodado en julio, pues bien, de octubre de 1297 a octubre de 1298 no volvemos a tener constancia de la existencia del Adelantado Mayor de Castilla y por el contrario aparece confirmando en los privilegios rodados Juan Rodríguez de Rojas, Merino Mayor de Castilla, mientras Garcí Fernández, de Villamayor aparece en el mismo rodado como simple confirmante sin ningún título<sup>(160)</sup>. Al año siguiente, en 1299, es Juan Rodríguez de Rojas quien aparece titulándose Adelantado Mayor de Castilla, desapareciendo definitivamente el oficio de Merino Mayor en Castilla durante el resto del reinado de Fernando IV.<sup>(161)</sup>

No vemos, a nuestro entender, como piensa el profesor PEREZ BUSTAMANTE, que haya una confusión entre los oficios de Adelantado Mayor y Merino Mayor. En el caso del Reino de León se suceden perfectamente los Adelantados Mayores, salvo,

---

(158) /... Ver nota anterior.

(159) BENAVIDES : Fernando IV, doc. 93, p. 134.

(160) Véase BENAVIDES. Fernando IV, docs. 102, 108 y 124, pgs. 147, 153 y 173 respectivamente.

(161) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 306 y 345.

como también señalamos, en los meses inmediatamente posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad del Rey, pero apenas en unos meses, no sin haber ocupado el cargo de Merino Mayor dos personas, se restaura en régimen de Adelantamiento en León, Tampoco en Castilla vemos la confusión de oficios que pretende el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(162)</sup>, desde el momento en que claramente en dos documentos aparecen confirmando el Merino Mayor de Castilla y el Adelantado Mayor de Castilla y son dos personas distintas.<sup>(163)</sup>

El profesor PEREZ BUSTAMANTE argumenta esta confusión de oficios en Castilla en la persona de Juan Rodríguez de Rojas quien, según el citado profesor -y cito textualmente-, "venía titulándose Merino Mayor desde 1295, aparece en 1297 como Adelantado Mayor y así continúa en 1298 a 1299"<sup>(164)</sup>. En efecto, Juan Rodríguez de Rojas en 1295 aparece confirmando como Merino Mayor de Castilla. Desde 1293 ocupaba ese oficio en tiempos de Sancho IV<sup>(165)</sup> en lugar de Sancho Martínez de Leyva, y fué confirmado en su oficio por los tutores, dado que aparece confirmando desde 1295 en los privilegios rodados de Fernando IV<sup>(166)</sup>, pero en 1297 no aparece, en ningún caso, como Adelantado Mayor sino como Merino Mayor<sup>(167)</sup>, pues en ese mismo año Adelantados Mayores son Juan Fernandez<sup>(168)</sup> y Garci Fernández de Villamayor<sup>(169)</sup>. Difícilme

(162) El Gobierno... p. 303.

(163) Ver documentos de la nota 157.

(164) El Gobierno... p. 303.

(165) GAIBROIS: Sancho IV, doc. 499, p. 343.

(166) BENAVIDES: Fernando IV, doc. 8, p. 18. Igualmente lo encontramos en 1296 (BENAVIDES. Fernando IV, docs. 63, 64 78 y 79.

(167) BENAVIDES. Fernando IV ... docs. 80, 86 y 102, pgs. 114, 121 y 147.

(168) BENAVIDES: Fernando IV... doc. 80 y 86, pgs. 114 y 121.

(169) BENAVIDES: Fernando IV... dc. 103, p. 134.

te puede ser Adelantado Mayor Juan Rodríguez de Rojas en 1298 cuando ese mismo año, en enero, febrero y octubre aparece con firmando también como Merino Mayor.<sup>(170)</sup> En cambio en 1299 sí aparece como Adelantado Mayor, pues ha desaparecido -todo hay que decirlo- el Merino Mayor de Castilla. En 1300, no aparece confirmando como Merino Mayor como dice el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(171)</sup>, pues en el documento que el mencionado profesor sostiene tal afirmación, Juan Rodríguez de Rojas aparece como "adelantado maior de Castiella".<sup>(172)</sup>

(170) BENAVIDES: Fernando IV, docs. 108, 124, pgs. 153 y 173. En el mes de febrero aparece como Merino Mayor en las Cortes de Valladolid (CLC. I, 10, pgs. 138-9). El único documento discutible se trata de una concesión hecha por Fernando IV a Juan Rodríguez de Rojas y a doña Urraca su mujer, de las aldeas de Poz y Pedrajas en la merindad de Bureba, por los muchos daños que recibieron en la guerra (BENAVIDES: Fernando IV, doc. 109, pgs. 155-6) Y decimos que se trata de un documento discutible porque no conocemos el original, sino que este se encontraba inserto en un Privilegio Rodado de Alfonso XI de 1336 que seguramente los descendientes de Juan Rodríguez de Rojas solicitarían al Rey Alfonso. BENAVIDES copió el documento de la Colección diplomática del P. LICINIANO SAEZ. Hemos intentado localizar esta colección diplomática para comprobar la data de este documento, pero la búsqueda ha sido infructuosa. Si la data del citado documento es correcta, Juan Rodríguez de Rojas, el 10 de enero era Merino Mayor de Castilla, según el primero de los documentos citados en esta misma nota; el 28 de enero de ese mismo año, es decir, dieciocho días más tarde, sería Adelantado Mayor, pero apenas un mes más tarde, el 28 de Febrero, en las Cortes de Valladolid aparece de nuevo como Merino Mayor. Ello nos hace pensar que, o bien el documento citado se trata de una falsificación, o ha habido un error del copista, pues al año siguiente, Juan Rodríguez de Rojas, si era Adelantado Mayor de Castilla (abril de 1299, Cortes de Valladolid, CLC. I, 11, p. 141 y también titulado así lo encontramos en BENAVIDES: Fernando IV, doc. 136, p. 191).

(171) El Gobierno... p. 303.

(172) BENAVIDES: Fernando IV, doc. 156, p. 213.



No creemos, por tanto, que exista la confusión de oficios que pretende el profesor PEREZ BUSTAMANTE. Insistimos que son años ciertamente muy difíciles en los que sólo el apoyo de las ciudades pudo salvar a la monarquía castellana. Es lógico que en esos turbulentos años se sucedan los cambios administrativos y sean constantes los cambios de oficios; pero el que carezcamos de un estudio sobre el reinado de Fernando IV que sin duda nos aclararía muchos de estos interrogantes, no es argumento para sostener la equiparación de estos oficios en base a unas alternancias, quizás para nosotros, no muy explicables, pero que en las fuentes aparecen claras en cuanto que se trata de dos oficios perfectamente diferenciados y con unas competencias bien delimitadas, aunque por ello no dejemos de admitir la posibilidad de extralimitaciones en el ejercicio de estos oficios por parte de sus titulares.

Durante el reinado de Fernando IV seguirán igualmente Adelantados Mayores al frente de la Frontera, Murcia y Galicia<sup>(173)</sup> puede decirse que en contra de lo que ha venido sucediendo en los reinados anteriores en los que predominó el régimen de Merinos Mayores, siendo el Adelantamiento una excepción, en tiempos de Fernando IV el régimen general va a ser precisamente el Adelantamiento en todos los territorios de la Corona castellano-leonesa. A qué se debe este cambio? En el estado actual de la investigación es aventurado dar una respuesta o unas respuestas definitivas. Es indudable que la situación del poder real es muy precaria y que éste sólo se mantiene gracias al apoyo incondicional de las

---

(173) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 363-7; 254-8, respectivamente.

ciudades que a su vez, ante la incapacidad de la monarquía para mantener el orden y la justicia, han tenido que acudir a las Hermandades para asegurar de este modo la defensa de sus costumbres y privilegios. Las competencias judiciales inherentes al oficio de Adelantado favorecen mucho más las aspiraciones nobiliarias puesto que ahora su situación, ya de hecho enormemente privilegiada, se ve fortalecida con la posibilidad de poder administrar justicia no sólo a sus vasallos sino también a cualquier habitante del realengo. La debilidad del poder real convertía "de facto" al Adelantado casi en un auténtico "rey" en su circunscripción; por ello cuando Alfonso X toma conciencia de la fuerza que puede adquirir un Adelantado Mayor en su Adelantamiento, los suprime y se resiste a restituirlos; política semejante siguió el enérgico Sancho IV, pero con Fernando IV las distensiones entre los tutores y algunas facciones nobiliarias impidieron que siguiera avanzando el proceso de consolidación que el poder real había comenzado en el reinado de Fernando III y Alfonso X.

Las ciudades eran plenamente conscientes de la situación. Vimos como intentaron establecer una comisión de control sobre el gobierno y administración del Reino en las Cortes de Valladolid de 1295<sup>(174)</sup>; en la misma reunión solicitan "que los Merinos Mayores de Castilla e de Leon e de Gallizia que non sean ricos omes et que sean tales los que y pusiermos que amen justicia".<sup>(175)</sup>

---

(174) Véase al respecto el capítulo anterior.

(175) Cortes de Valladolid 1295 (CLC. I, 13. p. 132).

La petición es comprensible, dado que todavía no se ha establecido el régimen de Adelantamientos para todos los territorios; sólo lo estaba en Murcia y en Galicia<sup>(176)</sup>, pero sin duda las ciudades piensan que en Galicia se reestablecerá el régimen general de Merindades Mayores.

Muy pronto las Cortes comienzan a denunciar la mala administración de justicia y la inseguridad jurídica del momento<sup>(177)</sup> para que "ayan emienda et derecho de las muertes et de los robos et fuerzas e cohechamientos, et otros muchos males que havian rescivido sin razon et sin derecho"<sup>(178)</sup>, pues era frecuente que "los malfechores que anduvieren o andan por la tierra matando et robando et haciendo muchos males asi en las villas como fuera dellas, et se acogen a infantes et a ricos omes et a otros omes poderosos asi en la nuestra casa -dice el rey- como en otras"<sup>(179)</sup>. Desde luego la situación no puede ser más patética.

---

(176) Recuérdese que a finales del reinado Sancho IV ante la creciente inseguridad del reino gallego envió a él Adelantado Mayor. Al morir el Rey quedaban en suspenso sus oficiales. Esto debió ocurrir con el Adelantado Mayor de Galicia, por ello las Cortes aluden al Merino Mayor de Galicia que suponen restablecerá el Rey y sus tutores.

(177) Cortes de Valladolid 1298 (CLC. I, 12, p. 139); Cortes de Valladolid 1299 (CLC. I, 1, 2, 3, 4, 5 ordenamiento de León, pgs. 143) y Cortes de Valladolid 1299 (CLC. I, 1, 8, 11, ordenamiento general, pgs. 140-3); Cortes de Burgos 1301 (CLC. I, 5, p. 147); Cortes de Zamora 1301 (CLC. I, 7, p. 53), *passim*.

(178) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 1, p. 175)

(179) Cortes de Medina del Campo 1305 (CLC. I, 17, p. 177)

En las Cortes de Valladolid de 1307 las quejas van dirigidas contra sus oficiales y le solicitan al Rey que tenga conocimiento "de ssaber cadanno todas las cossas que fazen los mis adelantados en ssus adelantamientos e los merinos en ssus merindades" se solicita al mismo tiempo que los adelantados "anden por ssi mismos en los adelantamientos ffaziendo la justicia", es decir, que no la hagan por medio de lugartenientes, y "queles de alcaides de mi cassa que anden con ellos" para que den al rey "recabde delas cossas que ffizieren"<sup>(180)</sup>. El Rey responde que "quando acae ciere que algunas querellas me den dellos que tengo por bien de oyr con ellos alos querellosos e deles ffazer dellos aver derecho en rrazon delas querellas que dellos me dieren assi commo ffuero et derecho ffuere. Et asi alguno ay que querella aya dellos, mues\_tremenlo, et luego les fare conplir de derecho". Y añade el monarca "et en rrazon delos alcaides que me piden que anden con ellos, tengo por bien delo ffazer e darles he alcaides e omes buenos que anden con ellos".<sup>(181)</sup>

Se trata de una petición sin precedente y que nos muestra diáfamanamente que el ejercicio de la administración de justicia en los territorios se halla fuera del alcance del Rey, quien no puede controlar a los Adelantados. Por otra parte, con independencia de que ahora se hubiera o no cumplido lo dispuesto por el monarca, interesa destacar que esta petición dará opción al Rey de poder controlar de nuevo la administración de justicia territorial no

(180) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 2, p. 186, nota 1) Desconocemos los motivos de por qué esta petición sólo se encuentra en el cuaderno de Cortes que se mandó dar al Arzobispado de Toledo, pero no en los cuadernos de Cuenca, Madrid y Plasencia. Quizás porque los Adelantados no tenían jurisdicción en las Extremaduras?. No lo sabemos.

(181) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 2, p. 186, nota 1)

mediante los Adelantados Mayores, oficiales que ya prácticamente no se encuentran bajo su servicio, sino mediante alcaldes de casa del Rey que controlarán la función de los adelantados.

No tenemos noticias de que este ordenamiento se llegara a cumplir, pero cinco años más tarde, en las Cortes de Valladolid de 1312, Fernando IV se dispone a reorganizar toda la administración de justicia de sus reinos en todos los ámbitos.

En lo que respecta a la administración territorial hay toda una serie de disposiciones encaminadas a su mejor funcionamiento. Se dispone que los adelantados "ssean mucho acuçiossos en fazer la justicia por toda la tierra, cada uno en su "adelantamiento" y para ello manda el Rey que "vayan o quier que ssopieren que sse fazen assonadas e que las partan ssin otro alongamiento" y para ello pone a su servicio a todos los de la tierra para que escarmienten a todos los que hacen bullicios<sup>(182)</sup>. Para que esto pueda ser mejor llevado a cabo se dispone que los adelantados "anden cada uno por sso adelantamiento continuament por cada logar con poca gente por guardar la tierra de danno e de costa e que ffagan escarmiento en los malfechorres en guisa quela justicia sea conplida e los malos sean esscarmentados segun que deuen"<sup>(183)</sup>.

Pero posiblemente la disposición más importante de este ordenamiento es aquella en que el Rey dispone "de dar acada uno delos mis adelantados alcalles e escriuanos dela mi casa, aquellos que entendiere queles cumple, e tales que me sirvan en este offiçio bien e derecha ment assi commo deven"<sup>(184)</sup>. Es decir, se ha

(182) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 59, p. 211)

(183) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 60, p. 212)

(184) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61, p. 212).

conyertido en regla general que todos los adelantados han de ir con alcaldes de casa del Rey quienes a partir de este momento serán los que de hecho administrarán justicia pues, se ordena al adelantado "que non mate ni mande matar sin ssoltar nin despa- char nin tormentar omme ninguno por justia, sino por juyzio delos alcaldes que yo dier a cada uno dellos"<sup>(185)</sup> y "solo deberán tomar caloñas cuando los alcaldes juzguen y fallen que las deben de haber por fuero y derecho, prohibiéndoles al mismo tiempo cualquier tipo de cohecho."<sup>(186)</sup>

Se regula igualmente las condiciones que deben reunir los merinos que los adelantados ponen en cada una de las merindades de su adelantamiento para que "guarden cada uno sso offiçio bien e derecha ment assi commo deven", de forma que no sean "omes omeçiados nin malffechores", pues el adelantado tendrá la responsabilidad sobre su merino} para que esto sea mejor llevado a cabo habrán de jurar los adelantados y sus merinos "que mantengan a la tierra e a los omes de justicia."<sup>(187)</sup>

En el mismo sentido deben jurar los alcaldes y escribanos que el Rey dá a cada uno de los adelantados, quienes a su vez - ejercen un control sobre los adelantados ya que tienen obligación de hacer saber al Rey "commo obran los mis adelantados, de ssos offiços, porque ssilo ellos bien fficieren les ffaga por ende merce: et ssilo assi non ffizieren, que ffaga sobre ellos aquel escarmiento que fallar que devo ffazer con derecho".<sup>(188)</sup>

---

(185) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61. p. 212)

(186) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 62, p. 212)

(187) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 63, p. 212)

(188) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 66. p. 213).

Se reitera la prohibición a los adelantados de hacer pesquisa general "ssaluo ende enllos logares o an de ffuero del ffa<sub>z</sub>er" deberán pregonar su llegada en las villas para que los que<sub>z</sub>rellosos acudan y vayan ante el adelantado quien librará "con los mios alcales assi commo fallar que es derecho". (189)

Las consecuencias de este Ordenamiento de cara a la administración territorial de justicia son trascendentales, pero han sido pasadas por alto por todos los autores que han abordado el tema de Adelantados y Merinos Mayores.

A partir de 1312, el Adelantado Mayor, juez por antonomasia ha perdido la función principal y característica suya: la función de juzgar. Serán los alcaldes reales que les son designados por el Rey para que les acompañen en sus desplazamientos, los que administren justicia y ejercerán un control sobre la actuación de los Adelantados. Estos han quedado con la función "nominal de juzgar", pero "de facto" quien juzga es el alcalde. Los Adelantados han quedado, pues, privados de carácter de jueces, del carácter con que nacieron para quedarse con el carácter más político que había venido tomando en estos años del reinado de Fernando IV.

Cómo explicar este fenómeno?. Creo que dos son las razones principales que movieron a Fernando IV a tomar esta medida de designar alcaldes reales a los Adelantados. En primer lugar el intento de recobrar el control de la administración de justicia

---

(189) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 79, pgs. 215-6).

por parte del monarca en su lucha contra una nobleza extraordinariamente poderosa; en segundo lugar, a la lamentable situación de injusticia e inseguridad a la que antes hacíamos alusión, ahora debemos añadir, las quejas que se presentan por parte de los "caualleros e los omes buenos de las villas" sobre la actuación de los Adelantados y sus merinos que "en logar delos anparar e de ffarzer justia quelos cohechan e les rroban a los hombres seguros sin razon," que los adelantados no iban personalmente a los lugares sino que enviaban a sus merinos "que son malfechores e que astragan e destruyen la tierra", que toman yantares excesivos<sup>(190)</sup> además de que obtienen de la Chancillería cartas desaforadas con lo que "arrasan" la tierra.<sup>(191)</sup>

Desde luego a las ciudades nos les interesa una justicia en manos de la nobleza, prefieren la justicia real, y aparte de que hayan podido poner mayor o menor énfasis en sus protestas y que éstas sean más o menos acordes a la realidad, hay un hecho innegable, que es la anarquía en que se halla el reino y la debilidad del poder real. Posiblemente estas disposiciones fueron un resultado de la alianza Rey-ciudades en un frente común contra una nobleza incontrolable; no hubiera sido la primera ni última, pero lo que es innegable son los resultados de cara a la administración de justicia: pérdida por parte del Adelantado Mayor de su función jurisdiccional y dependencia más directa de la administración de justicia territorial del Rey por medio de sus alcaldes.

---

(190) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 79, pgs. 215-6)

(191) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 80, p. 216).



No sabemos, si Fernando IV, llegó a ver puesto en práctica este nuevo sistema dispuesto en las Cortes de Valladolid de 1312 pues el Monarca moría ese mismo año, dejando tras sí otra minoría que se presentaba, al igual que la suya, muy conflictiva.

La minoría de Alfonso XI se inicia bajo el régimen de Adelantamientos que, como vimos, caracterizó el reinado de Fernando IV y en este sentido encontramos Adelantados Mayores en León hasta 1315<sup>(192)</sup>; hasta la misma fecha también en Castilla<sup>(193)</sup> y hasta 1316 en Galicia<sup>(194)</sup>, aunque muy pronto también aparecen Merinos Mayores en dichas circunscripciones coexistiendo con los Adelantados. Es el caso de Pedro López de Padilla, Merino Mayor de Castilla mientras es Adelantado Mayor Pedro González de Sandoval<sup>(195)</sup> o de Juan Alfonso de Benavides, Merino Mayor en León mientras ocupa el Adelantamiento Juan Alvarez de Osorio<sup>(196)</sup>.  
Cómo explicar esta simultaneidad de oficios?.

La respuesta, a mi modo de ver, radica en que sobre estas fechas ha entrado en juego un texto legal que de una forma oficiosa va marcando pautas; nos estamos refiriendo a las Partidas.

No creo que sea necesario hacer de nuevo hincapié en la problemática que suscita este cuerpo legal que, como ya bien demostró el profesor GARCIA GALLO, rebasa en su elaboración el reinado de Alfonso X con creces, siendo muy posible que su actual redacción obedezca a los reinados de Sancho IV o Fernando IV.<sup>(197)</sup>

(192) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 238.

(193) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 306 y 345.

(194) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 258 y 292.

(195) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 342 y 345.

(196) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 235 y 238.

(197) Véase el trabajo tantas veces citado del profesor GARCIA GALLO: Nuevas observaciones... en AHDE 46 (1976)

Vefamos a la hora de tratar del Adelantado Mayor de la Corte como este oficial aparecía en las Partidas configurado de forma distinta a como fue concebido en el Espéculo. Eran, tal vez, detalles pequeños, que habían pasado inadvertidos para aquellos que se habían ocupado de su estudio, pero al mismo tiempo fundamentales para poder comprobar que se había producido una evolución en la institución, dejando aparte el problema de que si realmente fué llevada a la práctica o no.

Aludfamos allí también sobre el carácter eminentemente doctrinal de las Partidas, como gran enciclopedia del Derecho, pero que no debaja de tener en cuenta la realidad de su momento a la hora de sistematizar las categorías jurídicas en ellas contenidas.

Pues bien, si nos ponemos a comparar los Adelantados y Merinos Mayores que aparecían en el Espéculo y los que son recogidos en las Partidas, podemos comprobar que se ha producido una evolución interna en la institución que afecta a la configuración final de ella en el último de estos cuerpos legales, y ello se debe a que las Partidas recogen la realidad de su momento y como tal, nos dibujan no los Adelantados y Merinos concebidos por Alfonso X, sino los Adelantados y Merinos de su momento, con la evolución que estas instituciones hayan podido sufrir durante estos años.

En primer lugar no deja de ser auténticamente sorprendente la similitud que hay entre algunos pasajes de las Cortes de Valladolid de 1312 y las Partidas<sup>(198)</sup>. Ello claro está nos lleva a

---

(198) Comparese las disposiciones de las Cortes de Valladolid de 1312, números 59, 60 y 61 con Partidas 2, 9, 22. Hay frases seguidas a la letra.

plantearnos el problema de datación de las Partidas, problema complejo, difícil y que ya de por sí solo requeriría todo un estudio, por cierto, cada día más necesario. Nosotros dentro de los límites objetivos del presente estudio nos tenemos que limitar a señalar este dato. Sin embargo es difícil pensar que las Partidas, en la redacción que ha llegado a nosotros, sean anteriores a esta fecha. Nos basamos para sostener esta hipótesis en el distinto tratamiento que se le dan a los Adelantados y Merinos Mayores en este cuerpo legal.

En efecto, el Adelantado Mayor aparece en el Espéculo como el juez real por antonomasia. Es juez de alzada de su territorio y de los fallos dictados por los alcaldes de corte. Además puede conocer por delegación del Rey todos aquellos pleitos que les estaban reservados al conocimiento personal del monarca (rieptos, pleitos entre concejos, "pleitos granados" etc.). En cambio en las Partidas el Adelantado Mayo no aparece con ese carácter indiscutible de juez. Las funciones que las Partidas le encomiendan a los Adelantados son "ser muy acucioso para guardar la tierra que se non fagan en ella asonadas, ni otros bollicios malos de que viene daño al rey e al reyno"<sup>(199)</sup>. Los Adelantados, según las Partidas, deben andar por las tierra por tres razones: Para escarmentar a los malhechores, hacer alcanzar el derecho a los hombres y para apercibir al Rey del estado de la tierra<sup>(200)</sup>, fines que el Espéculo omitía, con lo que podemos denotar en principio ya un carácter mucho más amplio que el estrictamente judicial. Finalmente, las Partidas le reconocen al Adelantado

---

(199) Partidas 2, 9, 22. Compárese con Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I. 59, p. 211)

(200) Partidas 2, 9, 22,

tado su función judicial al disponer que "puede oyr las alzadas que fiziesen los omes de los juyzios que diesesen los alcaldes de las villas contra ellos, de que se tuviesen por agraviados aquellos que el rey oyria si en la tierra fuese."<sup>(201)</sup> Aparentemente con esta disposición el Adelantado sigue apareciendo como un juez, pero las Partidas han introducido una novedad con respecto al Espéculo de gran importancia al recoger a continuación que para que el Adelantado pueda cumplir sus funciones debidamente "deue aver consigo omes sabidores de Fuero e de Derecho, que le ayuden a librar los pleytos, e con quien haya consejo sobre las cosas dubdosas", pero aun hay más, pues las Partidas disponen que "estos -los omes sabidores de Fuero e Derecho- le deue dar el Rey, por que sea tales como diximos que deuen ser los que juzgan en su corte".<sup>(202)</sup>

Es decir, en mi opinión, no hay ningún género de dudas que se trata de alcaldes de corte.

Recogen igualmente las Partidas que el Adelantado Mayor debe llevar consigo escribanos<sup>(203)</sup>, tal como era dispuesto en las Cortes de 1312.<sup>(204)</sup>

Podría pensarse que las Partidas son anteriores a las Cortes de 1312 o las de 1307<sup>(205)</sup>, y que éstas se inspiraron en aquellas, pero a mi entender, los alcaldes de adelantados surgen ante

---

(201) Partidas 2, 9, 22.

(202) Partidas, 2, 9, 22.

(203) Partidas, 2, 9, 22,

(204) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61. p. 212)

(205) Recuérdese que en estas Cortes se pide por primera vez al Rey designe alcaldes de su casa para los adelantados.

una necesidad muy concreta y ante la situación de hecho a la que con anterioridad hemos aludido. Sólo cuando esa situación de hecho ha sido suficientemente valorada surge la regulación -en este caso, las Cortes de 1307 y 1312- por ello nos inclinamos a pensar que las Partidas están recogiendo esa situación; están recogiendo unos Adelantados que ya no juzgan solos sino que van acompañados de alcaldes que el Rey le ha designado; están recogiendo, en definitiva, unos Adelantados, distintos a los del Espéculo, que han perdido su carácter judicial.

Si al Adelantado Mayor le quitamos sus funciones judiciales, nos encontramos con que sus funciones quedan reducidas a guardar la tierra para que en ella no se hagan asonadas ni bullicios, escarmentar a los malhechores, hacer alcanzar el derecho a los hombres y apereibir al Rey del estado de la tierra<sup>(206)</sup>, con lo que sus atribuciones son más parecidas a las de los Merinos Mayores que recogía el Espéculo.<sup>(207)</sup>

Esta similitud con el Merino Mayor es la que hace a los redactores de las Partidas que de hecho equiparen el Merino Mayor al Adelantado Mayor<sup>(208)</sup>. Equiparación que en ningún momento es identificación o confusión y los redactores son plenamente conscientes de ello, pues si bien dicen que el Merino Mayor lo "pone el Rey de su mano en lugar de Adelantado", también es cierto que los mismos redactores a continuación dicen que "e este ha tan gran poder como el Adelantado"<sup>(209)</sup>, es decir tiene tanto poder pero no el mismo que el Adelantado.

---

(206) Partidas, 2, 9, 22.

(207) Espéculo 4, 3, 4.

(208) Partidas, 2, 9, 23.

(209) Partidas, 2, 9, 23.

Pero en el plano de los hechos una nueva circunstancia vendrá a favorecer esa equiparación que acabará por convertir a Adelantados Mayores y a Merinos Mayores en oficios idénticos, esa circunstancia viene dada por la designación por parte del Rey -en este caso los tutores- de alcaldes que acompañan a los Merinos Mayores para que juzguen.

Señalábamos cómo durante los primeros años de la minoría de Alfonso XI, también muy conflictivos políticamente, coexisten ambos oficios. Seguramente la nefasta experiencia del régimen de Adelantamientos del reinado de Fernando IV hizo que María de Molina optara por sustituir a los Adelantados por los Merinos Mayores. Ya vimos también las innumerables quejas que las ciudades habían presentado en las Cortes de Valladolid de 1312 a Fernando IV sobre los males que este régimen acarreaba para la tierra, por lo que el Rey dispuso designar a cada Adelantado alcaldes de su casa para juzgar y controlar su actuación.

Pues bien, en las primeras Cortes reunidas tras la muerte de Fernando IV, los procuradores piden a los tutores que "sean puestos merinos en aquellos lugares hu los deve auer".<sup>(21o)</sup> La petición que en principio puede pensarse que se trata de merinos menores, debemos interpretarla en el sentido de que lo que se está solicitando es que sean sustituidos los Adelantados Mayores de León, Galicia y Castilla y pongan en su lugar Merinos Mayores. Nos fundamentamos para interpretar este texto en tal sentido en base a que en la misma petición los procuradores están pidiendo

---

(21o) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21. p. 226).

que a esos "merinos" los tutores "les den buenos alcalles que anden con ellos"<sup>(211)</sup>. Hasta ese momento los únicos que andaban por los territorios con alcalles reales, a tenor de lo dispuesto en las Cortes de 1312, eran los Adelantados Mayores. Por otro lado resulta impensable que a todos los merinos mayores les den alcalles reales para que vayan con ellos y puedan juzgar, por lo que creemos que las ciudades están pidiendo el restablecimiento del régimen de Merindades.

Parece que la petición tuvo la respuesta deseada por las ciudades y dos años después, en las Cortes de Burgos de 1315, encontramos una referencia a los alcalles del Rey que llevan consigo el Adelantado o el Merino<sup>(212)</sup>. Dejando ahora a un lado el tema de los alcalles de adelantamientos o merindad, del que nos ocuparemos más adelante en este mismo capítulo, lo que ciertamente nos interesa destacar ahora es que desde el momento en que se han restablecido los Merinos Mayores, como aparece probado documentalmente desde 1315-16 en León, Castilla y Galicia, y a estos Merinos Mayores les han sido designados unos alcalles reales que les acompañan en sus desplazamientos para juzgar, la equiparación a la que antes aludíamos es mucho más patente "de facto". El problema no es ya una cuestión de competencias, pues unos y otros desempeñan la misma función en el ámbito territorial, sino que se trata de una simple cuestión de titularidad.

---

(211) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21, p. 226)

(212) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 35, p. 286)

Sólo ahora y a partir de este momento en que los Merinos Mayores tienen también alcaldes reales, como el Adelantado Mayor de la Frontera o el de Murcia, podemos hablar, en palabras del profesor PEREZ BUSTAMANTE, de una "confusión de oficios". Unicamente interpretando los textos de este sentido podremos comprender las palabras del infante don Juan Manuel a finales del primer tercio del siglo XIV, cuando al referirse a los Adelantados, muy enfáticamente escribía:

"Señor Infante, todo esto que vos yo digo en razon de los Adelantados debedes entender eso mismo de los Merinos, ca eso mismo es lo uno que lo al, et non ha otro departimiento entre ellos, sinon que en algunas tierra llaman Adelantados et en otras Merinos". (213)

---

(213) JUAN MANUEL: Libro de los Estados, p. 339.



COMPETENCIAS

Los Adelantados Mayores aparecen configurados en el Espéculo como jueces de apelación, si bien también mediante delegación real pueden conocer en primera instancia de una serie de pleitos que les están reservados al Monarca.

Dado el carácter mixto de oficial de la administración central y de la administración territorial simultáneamente, los Adelantados Mayores, si se encuentran en la Corte actúan como jueces de apelación de los fallos dictados por los alcaldes de casa del Rey<sup>(214)</sup>. Hemos de suponer, aunque el Espéculo en este punto no lo especifique, que los Adelantados entenderán de estas apelaciones siempre y cuando el pleito proceda originariamente del territorio de donde ellos son adelantados. Vimos a la hora de tratar los alcaldes de casa del Rey que en el Espéculo ya se vislumbraba una cierta tendencia a la especialización de estos alcaldes por "tierras"<sup>(215)</sup>; ello nos hace suponer que dado que el Adelantado Mayor tiene asignada su jurisdicción sobre un territorio, lógicamente verá en alza aquellos pleitos que bien en primera instancia o bien en apelación han fallado los alcaldes de casa del Rey que el Monarca ha designado para librar los pleitos procedentes del territorio de donde es Adelantado.

---

(214) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11.

(215) Espéculo 4, 2, 11: "E los alcalles de casa del Rey deven oyr las alzadas de aquellas tierras que les el rey señale".

El Espéculo prevé igualmente el caso de que el Adelantado Mayor no se encuentre en la Corte. En este caso, el Adelantado puede nombrar un lugarteniente si el Rey se lo concede<sup>(216)</sup>. El Espéculo tampoco especifica cuántos o en dónde puede nombrar el Adelantado lugartenientes, pero al referirse a ellos en plural, es posible que pudiera nombrar varios, tanto para actuar en la Corte, si bien parece que en este caso sólo podía ser uno<sup>(217)</sup>, como en el territorio que tiene bajo su jurisdicción. Lo normal sería que mientras el Adelantado se encuentre en la Corte, tendría nombrado lugarteniente en su territorio; cuando el Adelantado va al territorio, deja un lugarteniente en la Corte como parece deducirse del propio Espéculo.<sup>(218)</sup>

Pues bien, tal como dispone el Espéculo, en caso de que el Adelantado se halle ausente de la Corte, su lugarteniente fallará en grado de apelación las sentencias procedentes de los alcaldes de casa del Rey, pero en este caso, si alguna de las partes se agraviara de la sentencia dictada por el lugarteniente como la jurisdicción de este se trata de una jurisdicción delegada, la alzada no puede presentarse ante la instancia inmediatamente superior al Adelantado Mayor -en este caso sería el Adelantado Mayor de la Corte<sup>(219)</sup>- sino ante el delegante de la jurisdicción, es decir, ante el Adelantado Mayor del territorio.<sup>(220)</sup>

---

(216) Espéculo 4, 2, pr.: "Pero si estos adelantados mayores quisieren dexar otros en su lugar, puedenlo fazer desta guisa, dandolos el Rey e otorgan gelo".

(217) Espéculo 4, 2, ll.

(218) Espéculo 4, 2, ll.

(219) Espéculo 5, 14, 14.

(220) Espéculo 4, 2, ll.

Los Adelantados Mayores, como máxima instancia judicial en su territorio, juzgan en apelación todas las sentencias procedentes de los jueces inferiores de su demarcación -adelantados menores, alcaldes locales- y la sentencias que hayan fallado sus lugartenientes del territorio estando él ausente. (221)

No ha llegado a nosotros, que sepamos, documentación - que nos permita constatar la actuación de los Adelantados Mayores o de sus lugartenientes como jueces de apelación de las sentencias dadas por los alcaldes de casa del Rey. A la escasa y dispersa documentación del reinado de Alfonso X hemos de añadir la corta vigencia del sistema de Adelantamientos en León, Castilla y Galicia<sup>(222)</sup> en el reinado del Rey Sabio, que, como se recordará, apenas está vigente una década. En cambio, sí nos han llegado testimonios, ciertamente también muy escasos, de la - -

---

(221) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11.

(222) Buena parte de la documentación referente a Adelantados y Merinos Mayores ha sido recogida por R. PEREZ BUS TAMANTE en su trabajo El Gobierno... t. II. De los treinta y seis documentos que recoge del reinado de Alfonso X, sólo quince hacen referencias a Adelantados Mayores (cuatro al Adelantado Mayor de Murcia, dos al Adelantado Mayor de Castilla, uno al Adelantado Mayor de León y ocho al Adelantado Mayor de Galicia) y ninguno de ellos son sentencias judiciales, aunque si bien es verdad, en dos de ellos se aluden a las actuaciones judiciales del Adelantado (documentos 11 y 19).

actuación judicial de los Adelantados en sus respectivas demarcaciones en apelación<sup>(223)</sup>, o haciendo referencia de un modo general a sus competencias judiciales.<sup>(224)</sup>

Durante el reinado de Sancho IV, pese a que también el régimen de Adelantamientos tuvo escasa duración, salvo en Galicia y Murcia, encontramos igualmente noticias que confirman las competencias judiciales de los Adelantados en sus territorios. En este sentido es muy importante la sentencia de don Diego López de Haro, Adelantado Mayor de Castilla a raíz de un pleito que sostenían el Merino Mayor de Castilla a raíz de un pleito que sostenían el Merino de Santo Domingo de Silos y el Monasterio de Gumiel<sup>(225)</sup>. No menos importante es la carta dirigida por Sancho I

(223) HINOJOSA: Documentos para las instituciones de León y Castilla, doc. 101, pgs. 165-6 en que se hace referencia a una alzada librada por el Adelantado Mayor de Castilla. Registro también en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 11, p. 13. El documento en cuestión no deja de presentar dificultades en cuanto a su datación. HINOJOSA lo fechó en 1256 y esta misma fecha la recoge PEREZ BUSTAMANTE en su registro. En efecto, el documento aparece encabezado, tal como aparece en la edición de HINOJOSA en los siguientes términos: "Anno Domini MCCLVI, XIII dias andados del mes de noviembre ..." De ser cierta esta fecha tendríamos que adelantar la fecha de implantación del régimen de Adelantamiento en Castilla en dos años, pero al final del citado instrumento reza literalmente: "Esto fue fecho en la era de mill et CCC et quatro annos", es decir, en 1266, fecha en la que sí Pedro de Guzman aparece como Adelantado Mayor de Castilla. Ello nos lleva a pensar que sin duda hubo un error en la datación inicial del documento, hecha por otra parte, en contra de la costumbre de la época por el año del nacimiento de Cristo y no por la usual o era hispánica por la que se fecha en documento al final.

(224) Véase la Carta de Alfonso X al Concejo de Alicante sobre las exigencias del Adelantado Alfonso García y las querellas que debía de juzgar, en 1259: "... mas tengo por bien que entre y et que oya los querellosos et les faga

al Adelantado Mayor de Murcia a raíz de las quejas presentadas por el concejo murciano en la que el Rey le indica el modo de proceder para librar las alzadas que ante el citado Adelantado vinieran.<sup>(226)</sup>

En cuanto a la Frontera o Andalucía desconocemos, por falta de documentación, si el Adelantado Mayor actuaría como juez de apelación de los fallos dictados por los Alcaldes Mayores de Córdoba, Jaén y Sevilla, aunque debemos suponer que así ocurriría<sup>(227)</sup> como en Castilla y Murcia.

Pero la función judicial de los Adelantados Mayores no se limitaba a conocer pleitos en alzada sino que el Espéculo facultaba también a estos oficiales a librar "por mandado del Rey" determinados pleitos, que eran competencia privativa del

---

(224) /...auer derecho assi como yo le mande" (TORRES FONTES: Fueros y Privilegios de Alfonso X al reino de Murcia en CDHRM III, doc. 51, p. 69. Registro en PÉREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 12, p. 14).

(225) GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 147, pgs. 90-1. Publica do también por PÉREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. III, doc. 60, pgs. 29-30.

(226) TORRES FONTES: Documentos de Sancho IV en CDHRM IV doc. 58, pgs. 63-4.

(227) Véase al respecto SANZ ARIZMENDI: Organización social de Sevilla en el reinado de Alfonso XI, Sevilla 1902, p. 12; más concretamente véase, también con referencia a Sevilla, el trabajo de ALVAREZ JUSUE: La Justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados, ya citado.

del monarca, en primera instancia. Así se disponía que los Adelantados Mayores podían juzgar "los grandes fechos en la corte del rey, así como los rieptos, o de pleito que sea entre un rico ome e otro, sobre heredamientos o sobre otra cosa, o pleito que sea entre un conceio, e otro sobre terminos o sobre otros pleitos granados. Otrosi pleitos que fuesen de grandes omes, así como entre ricos omes e ordenes, o conceios que oviesen pleito con ordenes o con ricos omes".<sup>(228)</sup>

En este sentido el Adelantado Mayor de cada territorio, si tenía la delegación pertinente, quedaba prácticamente equiparado al Rey desde el punto de vista judicial al poder librar aquellos pleitos que sólo estaban reservados al Monarca. Hemos de suponer que esta delegación se debió realizar con frecuencia y que los Adelantados conocían en primera instancia todo este tipo de pleitos. Y en efecto, encontramos algunos testimonios en los que ha quedado también reflejada este tipo de actuación judicial en primera instancia por delegación del Rey. Es el caso, por ejemplo, del pleito interpuesto ante el Adelantado Mayor de León por la priora y el convento del Monasterio de Vega<sup>(229)</sup>, o el anteriormente citado del convento de Santa María de Rioseco sentenciado por Pedro Guzmán, el Adelantado Mayor de Castilla<sup>(230)</sup>. Aún podríamos citar el entablado por el Monasterio de Gumiel por

(228) Espéculo 4, 2, pr. y 4, 2, 11.

(229) L. SERRANO: Cartulario del Monasterio de Vega, Madrid 1927, pgs. 140-141.

(230) Ver nota 223.

querella presentada ante el Adelantado Mayor de Castilla a causa de la actuación del Merino de la merindad de Santo Domingo de Silos<sup>(231)</sup> o el encomendado por Sancho IV al Adelantado Mayor de Murcia en 1293 entre la Catedral de Cartagena e Inido Jimenez sobre la propiedad de unos molinos<sup>(232)</sup>. Es de este tipo de pleitos el que está librando Juan Rodriguez de Rojas, Adelantado Mayor de Castilla, entre el convento de Oña y un vecino de la citada localidad en razón del intrusismo de Garcia Ruiz que usaba el oficio de escribano público sin nombramiento del abad<sup>(233)</sup> o el pleito que juzgará el Adelantado Mayor de Murcia por encargo del Rey entre el concejo de Murcia y el comendador de Ricote<sup>(234)</sup>, o incluso la querella entablada ante el Adelantado Mayor de León por el Dean y Cabildo de Oviedo por los perjuicios que se les ocasionaba en la posesión de determinadas rentas que les correspondían.<sup>(235)</sup>

No debemos olvidar además que los Adelantados Mayores, pese al carácter mixto de oficial de la administración central y territorial, debieron perder muy pronto su actuación como jueces de apelación en la Corte a raíz de la aparición de los alcaldes de alzadas en ésta. Cuando tratamos en el capítulo tercero de estos alcaldes decíamos que nacieron seguramente ante la desaparición de los Adelantados, quienes hasta ese momento vendrían desempeñando esta función como les asignaba el Espéculo. Al mismo tiempo, sobre todo en el reinado de Fernando IV en el que se generaliza el régimen de Adelantamientos, se debió producir la

(231) Citado en nota 225.

(232) GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 449, pgs. 303-4. Registro de PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 89, p. 4

(233) BENAVIDES: Fernando IV, doc. 148, p. 203.

(234) TORRES FONTES: Privilegios de Fernando IV a Murcia en AHDE 19 (1948-9), doc. 6 pgs. 563-4.

(235) VIGIL: Col. Dipl. Ayuntamiento de Oviedo, doc. 26, p. 28

"territorialización" total de los Adelantados convirtiéndose únicamente en oficiales de la Administración territorial al estar ya plenamente institucionalizados en la Corte los alcaldes de las alzadas.<sup>(236)</sup>

Pero el problema se nos presenta no tanto en la Corte, en donde la falta de los Adelantados se suplió con estas alcaldías de alzadas, sino en los propios territorios cuando fueron reemplazados los Adelantados por Merinos Mayores. Juzgaban realmente los Merinos Mayores?.

Ya en las páginas anteriores aludíamos a este problema de la competencia judicial del Merino Mayor y concluíamos en base a los textos del Espéculo que el Merino Mayor no puede ser considerado como un juez porque sencillamente no juzgaba. El Merino Mayor es el representante de los intereses reales en un territorio con unas funciones económicas, y sobre todo, con unas funciones que rebasan lo meramente ejecutivo; son los encargados de hacer cumplir y "guardar" la justicia en su circunscripción.

Insistimos en este punto porque precisamente uno de los argumentos que han llevado al profesor PEREZ BUSTAMANTE a hablar de una "confusión de oficios" es precisamente la pretendida competencia judicial de los Merinos Mayores.<sup>(237)</sup>

Entre la numerosísima y valiosísima documentación recogida por el profesor PEREZ BUSTAMANTE, sólo hay dos documentos que pueden hacernos llegar a pensar que en algún momento los Merinos Mayores llegaron a juzgar personalmente.

---

(236) Ver en el capítulo III el apartado correspondiente a los alcaldes de las alzadas.

(237) El Gobierno... pgs. 151 y ss.



El primero de ellos<sup>(238)</sup> es una apelación presentada ante el Merino Mayor de Galicia de una sentencia dictada por el Juez de Garavaes sobre un pleito que mantenían el abad de Antealtares y María Rodríguez acerca de la propiedad de una heredad que ambos reclamaban. En el documento se recoge en primer lugar el fallo del juez en favor del abad, ante el cual María Rodríguez apeló a Rodrigo Suárez, Merino Mayor de Galicia<sup>(239)</sup>. Desde luego el documento es discutible, pues si bien en dos ocasiones se hace referencia a que se apela ante el Merino Mayor, éste no es quien da el fallo final sino que delega el fallo de la apelación en los jueces legos de Orense porque "partes ambas a plazer dixieron que uos querian por iuyzes". En efecto, al parecer el motivo de esta delegación no es otro que el de que el Merino se encontraba en un monte y por ello "non podía auer uozero nin que razonase por ela", pero necesariamente, en mi opinión, no tiene que ser el Merino el que juzgue. Me explico.

---

(238) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, dc. 9, pgs. 11-12, publicado también en la Colección Galicia Histórica, Santiago 1901, doc. 38, pgs. 182-4.

(239) "Julguy a abbade ela heradat o quesele patisse dela Mari Rodriguiz e quelle desse os dineiros da renda quellí non dera e peytasse elas cuestas Maria Rodriguiz et esto di yo por juyzo et sobresto appello Maria Rodriguiz a vos (el Merino)...""De min don Roi Suariz, merino Mayor en Gallizia a uos juyzes leygos dourense. Salut assi como omes que amo e quero ben. Maria Rodriguiz ussa contenda con o abbade de ante altares sobre la heredade darmental et andaron ia muyto juyzio et razoaron et o juyz de garavaes julgou entrele et esta Maria Rodriguiz apelo para ante min et foy ante min et foy ante min en un monte e eu era et non podía auer uozero nin quen razonase por ela et ar partes ambas a plazer dixeron que uos querian por iuyze: et eu duo.... es et outorgouseles en meu lugar que os ouza des et razoen ante uos o juyzo et as cartas et o preyto todo como angou de fundo et julgadelos foro directo et eu otorgo o que uos julgades de derecho et mando que seyan ante vos primero marte de feuerero ou sous uigarios et sabades que Roiz suariz de Ribadauia e procurador do abbade de Anteal-  
.../...

En el Espéculo, al tratar sobre las funciones del Merino Mayor, se dedica una ley a "que deve fazer el merino desde que fuere en su merindat"<sup>(240)</sup> en la que se dispone que el Merino Mayor cuando llegue a su merindad debe "fazer enderezar todas las maletrias, e fazer conprir los juyzios que no fueron conplidos, que eran judgados, tan bien por los adelantados, como por los otros que avien poder de judgar en aquella tierra". Para ello el Merino Mayor debe llamar a los adelantados de aquella merindad, y si no hubiese, a "los otros que fueren puestos para judgar en las villas" para que libren los pleitos que ante él vinieren<sup>(241)</sup>. Es decir, los pleitos se libran ante el representante del Rey pero por los jueces (adelantados o en su defecto jueces de las villas) de la merindad. En base a esta ley del Espéculo podríamos entonces interpretar el documento en el sentido de que al encontrarse el Merino Mayor en un monte no podía quizás tener a su lado en ese momento a los jueces que librarán la alzada, o sencillamente, incluso estando con el Merino Mayor, al no haber "vozero" que razonara el pleito, el Merino decide que resuelvan los jueces de Orense, comprendiéndose mejor de esta forma la delcinatoria del Merino Mayor en tales jueces.

En principio la única objeción que cabría poner a esta interpretación es la de la fecha del documento -primero de enero de 1253- en la que casi con toda seguridad el Espéculo no podía

(239) /...tares en este preyto" (PEREZ BUSTAMANTE: El Gobier  
no... t. II, doc. 9, pgs. 12-3)

(240) Espéculo 4, 3, 12.

(241) Espéculo 4, 3, 12.

tener vigencia, aunque bien pudiera estar en un estadio de elaboración bien avanzado. Pero creemos que esta objeción no excluye la posibilidad apuntada si tenemos en cuenta que precisamente el oficio de Merino Mayor estaba ya arraigado en León y Castilla desde el siglo XII y en Galicia venía actuando con regularidad un Merino Mayor desde 1231<sup>(242)</sup>. Ello nos lleva a pensar que el Espéculo no crea "ex nihilo" la figura del Merino Mayor, sino que, por el contrario, ha plasmado la realidad de su momento y ha recogido aquellas funciones que venía desempeñando un Merino Mayor en su demarcación. En este caso, dada la proximidad de la fecha del documento con la de elaboración del Espéculo, nuestra argumentación tomaría más visos de verosimilitud.

Cabrían, desde luego, más interpretaciones a este documento: desde un poder delegado del Rey para entender pleitos concedido al Merino Mayor de Galicia, hasta que tal vez los Merinos Mayores tuvieron esa competencia jurisdiccional hasta la aparición de los Adelantados Mayores -por cierto, ese mismo año-<sup>(243)</sup> pero, en nuestra opinión, nos parece más aceptable la anteriormente expuesta.

El segundo documento es mucho más tardío, data del reinado de Sancho IV, y creemos que ofrece menos dificultades<sup>(244)</sup>. Se trata de una querrela que el abad del convento de Santa María

---

(242) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 53.

(243) El 21 de febrero de 1253, es decir al mes del documento comentado aparece confirmando por primera vez Pedro Ruiz de Olea como Adelantado Mayor de La Frontera (M.H.E. I, doc. 5, pg. 10).

(244) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 156. En el registro que del citado documento hace el profesor PEREZ BUSTAMANTE en el segundo tomo de su trabajo (doc. 44, p. 23

de Aguilar de Campóo presenta ante el Rey contra los recaudadores de la fonsadera pues éstos prendaban a los solariegos de las aldeas comuneras del Monasterio. Para lo cual Sancho IV manda a "don Sancho Martinez de Leyva nuestro Merino Mayor que ffué en Castiella que lo librase segund fallase por derecho, E don Sancho Martinez que lo libro por sentançia".<sup>(245)</sup>

El profesor PEREZ BUSTAMANTE interpreta este documento como una sentencia dictada por don Sancho Martínez de Leyva en su calidad de Merino Mayor de Castilla, pero es que don Sancho no era Merino Mayor de Castilla en 1294, pues que sepamos don Sancho aparece confirmando como Merino Mayor de Castilla por última vez el 23 de mayo de 1293<sup>(246)</sup>, fecha que el citado profesor da como año de la muerte de don Sancho<sup>(247)</sup> en base a que, efectivamente, el 4 de octubre de ese mismo año aparece confirmando como Merino Mayor de Castilla Juan Rodríguez de Rojas. Entonces si don Sancho ha muerto en 1293 cómo el Rey le puede encomendar que libre un pleito el 16 de marzo de 1294, como aparece claramente en el documento recogido por M. GAIBROIS?.

---

(244) /...aparece fechado en 1284, sin embargo la data correcta es de 1294 (vid. GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 541, pgs. 370-1).

(245) GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 541, p. 371.

(246) GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 484, p. 329, aunque PEREZ BUSTAMANTE señala como fecha en la que don Sancho Martínez de Leyva deja su oficio la de 1292 (El Gobierno... p. 342). Curiosamente cita para apoyar tal afirmación un documento del A.H.N. contenido en el legajo 1131 de Clero, sin especificar más, justamente el mismo legajo que cita M. GAIBROIS como fuente de procedencia del documento antes citado (Vid. GAIBROIS: Sancho IV, t. III, doc. 484, p. 371, en donde aclara que el comentado documento se encuentra inserto en una carta de Fernando IV).

(247) El Gobierno... p. 303.

Pero es que además, como bien cita en esta ocasión el profesor PEREZ BUSTAMANTE<sup>(248)</sup>, desde 1293 el Merino Mayor de Castilla es Juan Rodríguez de Rojas. No hemos encontrado ningún privilegio rodado u otro testimonio que nos verifiquen la continuidad en el oficio de Rodríguez de Rojas en 1294, pero sí continuaba en el mismo a primeros de enero de 1295<sup>(249)</sup>, con lo que hemos de suponer que durante 1294 estuvo al frente de la Merindad Mayor de Castilla. En efecto se podría objetar que durante 1294 pudo ocupar el oficio de Merino Mayor don Sancho, pero es que el documento comentado de 1294 es totalmente diáfano al respecto cuando dice el Rey que manda a don Sancho "nuestro merino mayor que ffué en Castiella" para que libre y falle por derecho. Es decir, está haciendo una referencia al pasado; el Rey está haciendo una comisión para conocer de un pleito y para ello designa a Martínez de Leyva que había sido hasta el año anterior su Merino Mayor en Castilla.

Por otra parte, con independencia ya de quien ocupara el oficio de Merino Mayor, es lógico pensar que si el Merino Mayor tiene competencia judicial como el Adelantado Mayor, no se requeriría una comisión expresa como la que recoge el documento para que juzgara, sino que el abad se hubiera presentado directamente ante el Merino Mayor para que librara el pleito. Precisamente por esto, porque el Merino Mayor no juzga, Sancho IV se ve obligado a comisionar a otra persona -y no es la que ocupa en ese momento el oficio de Merino- el conocimiento y libramiento del pleito presentado por el abad de Santa María de Aguilar de Campóo.

(248) El Gobierno... p. 303 y 342.

(249) Aparece confirmando en el privilegio rodado que Sancho IV concede al 20 de enero de 1295 a Juan Osorez, Maestre de Santiago (vid. TORRES FONTES: Documentos de Sancho IV en CDHRM IV, doc. 159, p. 149).

Lo expuesto hasta ahora nos obliga a reafirmarnos en la negación de las competencias judiciales de los Merinos Mayores y en la diferenciación entre el oficio de Adelantado Mayor y el de Merino Mayor hasta la primera década del siglo XIV.

Volviendo a nuestro interrogante inicial, si admitimos que los Merinos Mayores no pueden juzgar personalmente, lógicamente tenemos que pensar que en aquellos años y en aquellas circunscripciones en las que no había Adelantados Mayores no existía un juez territorial de alzada con las amplias competencias del Adelantado, pero no por ello debemos negar la existencia de una administración de justicia territorial. Esta, a nuestro entender, debió seguir administrándose según lo dispuesto en el Espéculo 4, 3, 12 según el cual, como vimos, el Merino Mayor cuando llegaba a su Merindad debía reunir a los jueces de su demarcación para que administraran justicia en presencia de él y pudiera el Merino "conprir los juyzios que non fueron conpridos".<sup>(25o)</sup>

En cuanto a los lugartenientes de Adelantado poco sabemos de ellos durante el siglo XIII y primera mitad del XIV. Suponemos que dada la alta condición social de los Adelantados Mayores, con toda seguridad ausentes muy a menudo de su circunscripción, haría uso con frecuencia de lugartenientes quienes recibían por delegación las mismas competencias que su delagante. Conocemos una carta de nombramiento de teniente de adelantamiento, ciertamente un poco tardía (1350), en la que se hace la delegación de justicia en

---

(25o) Espéculo 4, 3, 12.

los mismos términos en que es competente el Adelantado Mayor.<sup>(251)</sup>

Finalmente para acabar de completar el cuadro de funciones, debemos hacer alusión la facultad de los Adelantados Mayores de efectuar pesquisas como medio auxiliar de su función judicial<sup>(252)</sup>. Así, por ejemplo tenemos el caso del Adelantado Mayor de Castilla Pedro de Guzmán nombrando prequisidores para que averigüen los derechos de los vasallos del Obispo de Burgos<sup>(253)</sup>, o la pesquisa mandada a realizar por el Adelantado Mayor de Galicia sobre unas pesquerías en el río Mino<sup>(254)</sup>; en el mismo sentido tenemos la pesquisa que por orden de Sancho IV lleva a cabo el Adelantado Mayor de Galicia Pay Gómez Charino para averiguar los límites que separaban el concejo de Monterrey y los cotos y lugares del Monasterio<sup>(255)</sup> o la realizada por el Adelantado Mayor de Murcia en razón de la pelea entre los vasallos de Fernán Pérez de Calvillo y los de Alguazas.<sup>(256)</sup>

(251) Véase la carta del Adelantado Juan Fernandez de Orozco nombrando su teniente a Martín Díaz de Albarracín publicada por el profesor CERDA en Para un estudio... doc. 2, pgs. 210-11 y más recientemente por PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 249, pgs. 99-100.

(252) Sobre la pesquisa en concreto véase J. CERDA RUIZ FUNES En torno a la pesquisa y procedimiento inquisitivo en el Derecho castellano-leonés de la Edad Media en AHDE 32 (1962), pgs. 483-517 y E.S. PROCTER: The judicial Use of Pesquisa in Leon and Castille 1157-1369 en Supplement of the English Historical Review, 81, 2 (1966). De un modo más general puede verse J. LOPEZ ORTIZ: El proceso de los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes de la Recepción romano-canónica en AHDE 14 (1942-43), pgs. 184-226.

(253) R.A.H. Colección Salazar, o-16, fol. 521. Registro en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 18, p. 16

(254) DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales... doc. 343 p. 102. Registro en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... T. II, doc. 85, p. 39.

B. LOS ALCALDES DE ADELANTAMIENTO Y MERINDAD

Si cuando nos enfrentábamos con el estudio de los Adelantados Mayores poníamos de relieve la escasa atención que nuestra historiografía había prestado a estos importantísimos oficiales de la Administración bajomedieval castellana hasta tiempos muy recientes, a la hora de estudiar los alcaldes de adelantamiento nos encontramos con un vacío aún mayor. Ello se debe, fundamentalmente, a que se ha hecho más hincapié en la figura del Adelantado Mayor o del Merino Mayor en cuanto que la indudable importancia política de estos oficiales los hacían piedra angular de la administración territorial, eclipsando de este modo la actuación de sus alcaldes<sup>(257)</sup>. Constituye al respecto una excepción el trabajo de profesor GARCIA-GALLO dedicado a los alcaldes mayores y corregidores en Indias<sup>(258)</sup> quien para llegar

(255) /...SANCHEZ BELDA: Documentos reales de la Edad Media. doc. 888, p. 381.

(256) DIAZ MARTIN: Itinerario de Pedro I, doc. 1029, pgs. 458-1

(257) Es el caso, por ejemplo, del trabajo de SINUES dedicado a Merino en el que, pese a destacar la presencia de los alcaldes junto a los Merinos Mayores -no sin haber antes confundido a estos con los Adelantados Mayores-, no ha sabido valorar y explicar su actuación (vid. El Merino, pgs. 179-182). Mucho más recientemente el profesor PEREZ BUS TAMANTE en su monografía tantas veces citada sobre El Gobierno y la Administración territorial de Castilla tampoco ha resaltado la importantísima actuación de los alcaldes de Adelantamiento y merindad, pese a las abundantes referencias que de ellos encontramos en su obra. Hace ya bastantes meses en una de tantas conversaciones con el citado profesor, a quien nos une una buena amistad, le hacíamos notar la importancia de estos alcaldes, y así, ha modificado y matizado en parte sus conclusiones de su trabajo sobre el Gobierno y la Administración territorial en el recientísimo libro, ya citado, sobre la Sociedad, Economía, Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de Santillana (Siglos XIII-XV) en donde tra-



a la configuración de estas instituciones en Indias parte de la realidad castellana de los siglos XIV y XV dando una panorámica general de la administración territorial. (259)

En principio, desde el momento en que el Adelantado, como hemos venido señalando a lo largo de este capítulo, es un oficial fundamentalmente judicial, es decir, un juez que administra justicia, la existencia de unos alcaldes a su lado carece de todo sentido.

En el *Espéculo* vemos a los Adelantados Mayores como los jueces territoriales de más alto rango; sólo a nivel de la Corte se hallaba por encima de ellos el Adelantado Mayor de la Corte, como en su momento señalábamos. Sin embargo, aunque ciertamente las fuentes son escasas y muy parcas al respecto, podemos entrever desde muy pronto la existencia de unos alcaldes que deben acompañar al Adelantado en sus desplazamientos por su circunscripción y que sin duda deben actuar como asesores del Adelantado o incluso tal vez juzgando en nombre de éste. En este sentido tenemos noticia de una alzada presentada ante don Pedro Guzmán, Adelantado Mayor de Castilla, por el prior y el convento de Santa María de Rioseco en la que parece que dicho Adelantado

---

(257) /...reconocer que "toda generalización puede provocar errores" (p. 234) ha podido comprobar en la documentación de la región estudiada la trascendental importancia de estos alcaldes, quienes han desplazado totalmente en el plano de la administración de justicia a Merinos y Adelantados Mayores.

(258) Alcaldes Mayores y Corregidores en Indias en sus Estudios de Historia del Derecho Indiano, pgs. 695-741, ya varias veces citado.

(259) Para los alcaldes de adelantado, véase especialmente pgs. 706-8.

ha tomado su resolución en compañía de "sus alcalles"<sup>(260)</sup>. Igualmente tenemos noticia de un pleito interpuesto por la priora del convento del Monasterio de Vega ante "don Gutier Suarez quando era Adelantado Mayor en tierra de León", pero éste tuvo que ausentarse y fue librado por Arnalt Gabriel, que andaba con el Adelantado "por juez"<sup>(261)</sup>. Y en el mismo sentido encontramos la carta de Sancho IV fallando a favor del Monasterio de San Esteban de Ribbas del Sil en el pleito con los frailes de la Orden de Uclés, previa pesquisa que habían realizado el Adelantado Mayor Diego Gómez de Roa y su alcalde Aparicio Rodriguez.<sup>(262)</sup>

Lógicamente ante estos datos debemos preguntarnos, cómo un juez por antonomasia como el Adelantado Mayor lleva consigo alcalles, si el Espéculo no dice nada al respecto?. En nuestra opinión esta situación de hecho viene explicada por una razón muy simple: la carencia de formación jurídica de los Adelantados Mayores que les obliga a llevar consigo peritos del Derecho de su tierra para poder librar y sentenciar de acuerdo al Derecho local correspondiente<sup>(263)</sup>. La escasa documentación que nos hace alusión a estos alcalles junto a los cortos períodos de tiempo que estuvo vigente el régimen de Adelantamientos en los reinados de Alfonso X y Sancho IV, no nos permite conocer más datos sobre estos alcalles que acompañaban a los Adelantados Mayores. Posiblemente serían nombrados por el propio Adelantado entre sus

(260) HINOJOSA: Documentos para la Historia... doc. 101, p. 165: "...e despues mando don Pen Guzmán, que era adelantado de Castiella por el rey don Alfonso, e sus alcalles, que lo iuzgaron, que tornase a los monges en su solar..." Sobre la fecha de datación de este documento véase la nota 223.

(261) L. SERRANO: Cartulario del Monasterio de Vega, pgs. 140-1.

(262) DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales... doc. 343, p. 102, Reg. en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 85, p. 39.

personas de confianza, pero en todo caso, serían seguramente ellos quienes realizarían todas las diligencias del proceso y quienes buscaran las soluciones de acuerdo a derecho, "de iure" quien aparece sentenciando es el Adelantado.<sup>(264)</sup>

Pese a la generalización del régimen de Adelantamiento en el reinado de Fernando IV, tampoco tenemos noticias de estos alcaldes hasta 1307 en que las Cortes de Valladolid, tras presentarle al Rey las quejas pertinentes sobre la actuación de los adelantados, solicitan que les "de alcaldes de mi cassa -dice el Monarca- que anden con ellos que me den rrecabdo delas cosas que ffizieren".<sup>(265)</sup>

Esta petición que los procuradores presentan al Rey no deja de ser muy problemática desde el momento en que no todos los cuadernos que manejó la Academia de la Historia para la edición de las Cortes de León y Castilla contenían la mencionada petición. Este aparece tan sólo en el cuaderno que se mandó dar al Arzobispo de Toledo, y no así en los que se dieron a los condejes de Madrid y Plasencia. Con toda seguridad, la petición estuvo recogida en otros cuadernos, pues se halla recogida también en el cuaderno publicado por BENAVIDES en la Memoria de Fernando IV<sup>(266)</sup>.

(263) /...Recuérdese que a partir de 1274 sólo se puede aplicar el Derecho Regio en los "casos de corte".

(264) Véase la sentencia, ya citada, de don Diego López de Haro, Adelantado Mayor de Castilla en GAIBROIS: Sancho IV, t.III doc. 147, pgs. 90-1; publicada también por PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno...t. II, doc. 60- p. 29.

(265) Cortes de Valladolid 1307 (CLC. I, 2, p. 186, nota 1).

(266) BENAVIDES: Memorias de Fernando IV, doc. 387, p. 568.

Pero, dejando ahora a un lado los problemas eurísticos sobre la inclusión o no de la petición en los cuadernos de Madrid y Plasencia, nos interesa destacar, en primer lugar el descontento por parte de las ciudades con el comportamiento de los Adelantados y de los merinos en sus merindades, descontento, que como vimos ya se había expresado en Cortes anteriores. En segundo lugar, es importante la medida propuesta por las ciudades: que el Rey les dé alcaldes de su "casa", es decir alcaldes de Casa y Corte para que le den "recabdo de las cosas que fizieren". Se estaba estableciendo "de facto" un control sobre la actuación judicial de los Adelantados Mayores. Para ello, a nuestro entender, se sustituirían posiblemente los alcaldes que llevaban consigo los Adelantados por alcaldes de designación real. De esta forma se subsanaba la mala administración de justicia que debían ofrecer los Adelantados Mayores.

Las fuentes no nos han dejado, que sepamos, ningún dato en los años inmediatamente posteriores a estas Cortes de Valladolid por el que podamos afirmar, que esta medida fué llevada a cabo por el Rey. Acaso si lo fué su aplicación debió ser efímera pues cinco años más tarde, las Cortes reunidas de nuevo en Valladolid reiteraron sus quejas sobre la mala administración de justicia de los adelantados y merinos reales que en lugar "de los anparar e de fazer justicia, que los cohechan e les rroban de quanto an", trayendo consigo malhechores, prendando sin razón, tomando yantares excesivos, y sobre todo, que no van los adelantados personalmente a los lugares, sino que envían a sus merinos "que son malhechores e que astragan e destruyen la tierra".<sup>(267)</sup>

---

(267) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 79, pgs. 215-6).

Las disposiciones de Fernando IV encaminadas a restablecer el orden y la buena administración de justicia territorial, fueron muy concretas y a ellas nos referimos en las páginas anteriores, sin embargo conviene destacar de nuevo que entre ellas, el Rey manda dar a cada uno de los Adelantados Mayores "alcaldes e escriuanos dela mi cassa, aquellos que entendiere queles cumple, e tales que me sirvan en este offiçio bien e derecha ment assi como deven"<sup>(268)</sup>, de tal forma que "otro alcalde ninguno que non usse del offiçio del alcalfia nin escriuano del escriuania, ssinon aquellos queles yo diere para esto".<sup>(269)</sup> es decir, que está prohibiendo la actuación de los alcaldes que solían seguramente llevar los Adelantados designados por ellos, ya que a partir de ahora los alcaldes de Adelantado serán de nombramiento real.

Pero tomo también ya señalábamos, posiblemente la disposición más importante de estas Cortes de 1312 en lo que concierne a la administración de justicia territorial, es la pérdida por parte de los Adelantados de sus funciones judiciales desde el momento en que se disponía que el Adelantado "non mate ni mande matar nin ssoltar nin despechar nin tormentar omme ninguno por justia, ssino por juyçio delos alcaldes que yo die a cada uno dellos"<sup>(270)</sup> y que "en ffecho delas callonas non tomen por ssi

---

(268) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61, p. 212)

(269) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61, p. 212)

(270) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 61, p. 212).

ninguna cossa, nin cohechen, nin mande tomar nin cohechar ssi-  
 non lo quelos mios alcalles judgaren e fallaren que deuen auer  
 por ffuero e por derecho".<sup>(271)</sup> En este sentido quedaba dispuesto,  
 igualmente, que, cuando los Adelantados llegase a cada una de las vi-  
 llas de sus adelantamiento tenian que hacer pregonar su llegada  
 para que todos "los querellosos que y ouiere que uengan ante el,  
 et el que les oya e los libre con los mios alcalles assi commo  
 fallar que es derecho".<sup>(272)</sup> "De iure" los Adelantados seguían  
 siendo los más altos representantes de la Administración de justi-  
 cia territorial pero "de facto" quedaban sus fallos siempre a la  
 resulta de lo que dispusieran los alcaldes quienes, además, tenian  
 que hacer saber al Rey como obran los Adelantados en sus oficios  
 "porque ssilo ellos bien fficieren les ffaga por ende merçed, et  
 ssilo assi non ffizieren, que ffaga sobre ellos aquel escarmiento  
 que ffallar que deuo -dice el Rey- ffazer con derecho".<sup>(273)</sup>

La repentina muerte de Fernando IV y la delicada situa-  
 ción que se crea por el enfrentamiento de los tutores del niño  
 Alfonso XI, nos muestran una situación vacilante y confusa. Vefa-  
 mos cómo los procuradores de las Cortes reunidas en Palencia  
 pedían al Infante don Juan el restablecimiento de los Merinos -  
 "en aquellos lugares hu los deue aver"<sup>(274)</sup>, sin duda porque las  
 medidas dispuestas el año anterior en Valladolid por Fernando IV  
 no debieron llevarse a la práctica con lo que las ciudades aprove-  
 chando la coyuntura del cambio del Rey, intentan que sea suprimido

(271) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 62, p. 212)

(272) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 62, p. 212)

(273) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 64, p. 212)

(274) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21, p. 226).

el régimen de Adelantamientos del que vefan mostrando tantas quejas.

Pero posiblemente lo más destacable de la petición que le presentan los procuradores de su parcialidad al infante don Juan en Palencia, no es sólo que sean puestos Merinos en aquellos lugares donde debfa haberlos, sino que, además de reunir determinadas condiciones<sup>(275)</sup>, les "den buenos alcalles que anden con ellos" y "quelos merinos non puedan matar nin prender nin despechar nin tomar a ninguno lo suyo ssenon aquello que julgaren los alcaldes del lugar olos alcalles que andodieren con los merinos por justia en aquellas cosas que an por ssi e deuen julgar"<sup>(276)</sup>. Igualmente deben respetar los pleitos foreros en los que juzgarán con los -juyzes del ffuero".<sup>(277)</sup>

También en las Cortes reunidas en Palencia por la reina doña María y el infante don Pedro con los de su parcialidad, las ciudades se muestran, aunque no lo digan expresamente, favorables al régimen de Merinos, si bien les prohíben nombrar Merino en los reinos de Castilla, León y Galicia e "inffante nin rrico omme"; pero pese a esta disposición en Castilla podrán poner "tal merino qual vieremos e entendieremos que cunple e es mas guarda para Castiella"<sup>(278)</sup>. Por lo que respecta a Murcia y Andalucía "que ssea como siempre sse usso porque es mester por razon dela guerra"<sup>(279)</sup>, es decir, que se mantenga el régimen de Adelantamientos.

---

(275) "Que sean ommes buenos e naturales cada vno enla comarca onde ffuer merino, e que den buenos ffiadores abonados" (CLC. I, 21, p. 226)

(276) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21, p. 226)

(277) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21, p. 226)

(278) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 12, p. 237)

(279) Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 12, p. 237).

Pero la realidad es bien distinta. En los años 1314 y 1315 seguimos encontrando Adelantados Mayores en Castilla, como a don Pedro Gonzalez de Sandoval<sup>(280)</sup> y a Garcilaso<sup>(281)</sup> respectivamente; en León por esos mismos años tenemos a Juan Alvarez Osorio<sup>(282)</sup> como Adelantado y en Galicia aparece igualmente documentado<sup>(283)</sup>, además, claro está, de Murcia<sup>(284)</sup> y Andalucía<sup>(285)</sup>. Sin embargo, si bien los tutores no se atrevieron a suprimir a los Adelantados, tampoco desoyeron las peticiones de las ciudades en cuanto que en los años inmediatos encontramos coexistiendo con los Adelantados Mayores a Juan Alfonso de Benavides como Merino Mayor de León<sup>(286)</sup> y a Pedro López de Padilla como Merino Mayor de Castilla<sup>(287)</sup> sin que tengamos noticias de que entre 1314 y 1315 haya habido un Merino Mayor en Galicia, pero sí ya lo encontramos en 1316.<sup>(288)</sup>

Las Cortes de Burgos, reunidas por los tres tutores conjuntamente, nos van a mostrar un panorama similar en cuanto que se repiten las peticiones que se hicieran dos años antes en Palencia: la prohibición a los tutores de encomandar la justicia a

- 
- (280) R.A.H. Colección Salazar. M-17, fols. 176-8 y 0-20, fols 81-4, también en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 345.
- (281) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 345.
- (282) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 238.
- (283) SANCHEZ BELDA: Documentos reales de la Edad Media... doc. 1002, p. 425.
- (284) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 439.
- (285) En 1313 está como Adelantado Mayor Sancho Sanchez de Velasco (PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 389) y en 1314 Men Rodriguez Tenorio (PESET, GUTIERREZ CUADRADO: El Fuero de Ubeda, Valencia 1979. doc. 7, p. 227).
- (286) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 235.
- (287) SERRANO. Cartulario de Covarrubias... doc. 124, p. 15. 9 y PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 342.
- (288) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 289.



a infante o rico-hombre para que la pueda hacer en los reinos en las villas o en cualquier otro lugar apartado "saluo los Merinos Mayores en Castiella e en Leon e en Gallizia et los adelantados en la ffrontera e en el regno de Murçia"<sup>(289)</sup>. Es bien significativo que las Cortes hayan excluido expresamente a los Adelantados Mayores de Castilla, León y Galicia que, como acabamos de ver, se mantenían en sus circunscripciones, pero puede decirse que prácticamente a partir de 1315 han desaparecido los Adelantados Mayores de Castilla<sup>(290)</sup>, y León<sup>(291)</sup>, salvo en Galicia en la que permanecerá todavía durante unos años el infante don Felipe como Adelantado Mayor<sup>(292)</sup> al mismo tiempo que se nombra también para dicho Reino un Merino Mayor<sup>(293)</sup>.

No sabemos con exactitud si la petición hecha por los procuradores de Palencia de dar alcaldes a los Merinos llegó a llevarse a la práctica en Castilla, León y Galicia. En principio, dado que coexisten en estos reinos un Adelantado Mayor y un Merino Mayor, hemos de suponer que no sería necesario dotar

---

(289) Cortes de Burgos 1315 (CLC. 5. I, p. 274)

(290) Garcilaso, que era Adelantado Mayor de Castilla en 1315, al año siguiente aparecerán confirmando como Merino Mayor (Vid. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 306, 342 y 345).

(291) Juan Alvarez Osorio que en 1315 aparecía como Adelantado Mayor de León, en 1317 se ha convertido en Merino Mayor quizás esto debió ocurrir también en 1316 (Vid. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... pgs. 207, 235 y 238).

(292) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 258 y 292.

(293) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 259 y 289.

de alcaides a los Merinos pues los llevarían los Adelantados. Tal vez se le dió también alcaides a los Merinos Mayores, pero lo cierto es que en el estado actual de la investigación no podemos definirnos en uno u otro sentido. Sí, en cambio, parece que se - llevó a cabo en la Frontera en donde encontramos referencias a ellos. (294)

No obstante, en Burgos, tras pedirse de nuevo que sean dados alcaides a los merinos<sup>(295)</sup>, vemos claramente que hace referencia a los "alcalles del Rey" que llevan consigo los Adelantados y Merinos<sup>(296)</sup>. La desaparición de los Adelantados Mayores en Castilla y León hará que a partir de 1316 se haga siempre por las Cortes mención conjunta a Merinos (por Castilla, León y Galicia) y a los Adelantados (por Andalucía y Murcia). Además, como ya dijimos, la pérdida por parte de los Adelantados de la facultad de juzgar personalmente al librar necesariamente los pleitos los alcaides, y, por otro lado, al designarles a los Merinos Mayores también unos alcaides para que juzguen, contribuyó que "de facto" desde el punto de vista de la administración de justicia ambos oficiales quedara equiparados y de hecho no existiera ya entre ellos la diferencia que establecía el Espéculo entre uno y otro oficio.

---

(294) Véase la carta de Men Rodríguez Tenorio, Adelantado de La Frontera en donde promete guardar varios preceptos del Fuero de Ubeda en la que se hace mención expresa "a los alcalles que conmigo -dice el Adelantado- libran los pleitos en el oficio del adelantamiento..." (PESET, GUTIERREZ CUADRADO: El Fuero de Ubeda, doc. 7, p. 227)

(295) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 20, pgs. 278-9)

(296) Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 35, p. 286).

En el reinado de Alfonso XI se caracterizará, al contrario que el de su padre Fernando IV, por el régimen de Merinos para los Reinos de Castilla, León y Galicia, si bien en este último nos encontramos en algunos años Delantado Mayor, sin embargo, desde la óptica de la administración de justicia, la alternancia entre uno y otro oficio dejará de tener valor para nosotros en cuanto que serán los alcaldes del Adelantamiento o de la Merindad en cada caso quienes administrarán justicia.

La fuerza de la Hermandad, que ha contribuido sin lugar a dudas a la sustitución de los Adelantados Mayores de León y Castilla, así como a que les fueran designados alcaldes del Rey a Merinos y Adelantados, intenta que los alcaldes sean escogidos entre miembros de ella en 1317 (297), sin embargo los tutores se resisten al considerar que sería "premia para el Rey e mingüamento de su sennorio".

De cualquier manera el control ejercido por los alcaldes de Adelantamiento o de la Merindad, lógicamente, no debió ser muy bien acogido por Adelantados y Merinos Mayores a tenor de las quejas de los procuradores que insisten una y otra vez en que los Merinos Mayores se atengan a lo dispuesto por los alcaldes del Rey<sup>(298)</sup>. Por otra parte se exige a los tutores que paguen las soldadas de los alcaldes del Rey que van con cada uno de los Merinos Mayores<sup>(299)</sup>; la situación del Reino es totalmente caótica<sup>(300)</sup> por ello mientras carezcamos

(297) Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 5, pgs. 302-3)

(298) Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 49, p. 318) y Cortes de Valladolid 1322 (CLC. I, 49, pgs. 350-1).

(299) Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 5, p. 302) y Cortes de Valladolid (CLC. I. 10, pgs. 339-340).

(300) Véase el panorama que nos ofrece la Crónica de Alfonso XI en sus primeros capítulos al respecto. En especial, véase el capítulo 37 en que se hace una recapitulación y un nítido retrato del momento (p. 197).

de un estudio a fondo del reinado de Alfonso XI -cada día más necesario- no podremos calibrar y comprender mucho de los cambios y situaciones que afectan de modo directo al plano institucional y que aparecerán más tarde reflejados en el aparato administrativo del Reino.

Llegado a su mayoría de edad, Alfonso XI en las Cortes de Valladolid de 1325 intenta poner remedio a la situación. Las ciudades y villas de los Reinos de Castilla, León, Galicia y Asturias piden al Rey que sean guardadas las cartas y privilegios que sus antepasados por las que se prohibía entrar en ellas a los Adelantados y Merinos (que sin duda lo venían haciendo) y que en las ciudades, villas y lugares donde los Adelantados y Merinos pueden entrar "non prendan nin maten nin despechen a ningunos delos moradores dende, ssinon ante fueren oydos e librados por ffuero o por derecho de la villa o del lugar do esto acaesciere; e que aquello que fuere judgado por los mis alcalles que andudieren con los adelantados o con los merinos mayores por justia en aquellas cosas que por ssi deuen judgar, que lo cunplan assi los merinos e non passen contra ellos en otra manere ninguna". (301)

Igualmente se establece que sólo los Adelantados y Merinos Mayores pueden nombrar merinos menores<sup>(302)</sup>; que los Adelantados y Merinos Mayores o los merinos que por ellos anduviereon por la tierra no puedan poner pena mayor de 10 maravedíes de la buena moneda; finalmente, que sólo podrán tomar como yantar

---

(301) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 16, p. 380)

(302) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 16, p. 380).

yantar 150 maravedíes una vez al año siempre y cuando fueren al lugar donde tienen derecho a tomarlo personalmente.<sup>(303)</sup>

Cuatro años más tarde, en las Cortes de Madrid de 1329, se pide al Rey por las ciudades que los "merinos mayores de Castiella e de León e de Gallizia que sean conuenibles para los offiçios, e tales que guarde mio seruiçio e la tierra de mal e de danno"<sup>(304)</sup>, "et que de luego alos merinos mayores dos alcalles acada merino, e que sean los alcalles de mi casa e mios naturales e delas villas"<sup>(305)</sup>. Se establece, pues, por primera vez el número de alcaides de han de acompañar a los Merinos Mayores. Hasta el momento siempre se había hablado de los alcaides de una forma genérica sin especificar el número de alcaides; a partir de ahora quedará establecido que han de ser dos los alcaides de casa del Rey que acompañarán a los Merinos Mayores en sus desplazamientos por su demarcación.

Esta disposición, al igual que las anteriores que hacen referencia a los "alcalles de casa del Rey" o "alcalles del Rey", nos presenta ineludiblemente el interrogante de si debemos pensar en sentido estricto que se trata de los alcaides de Corte, que vienen desempeñando sus competencias en la Chancillería, o si por el contrario, con esta expresión se está aludiendo sencillamente a alcaides de nombramiento real. En principio no parece que se despoplara la Chancillería de alcaides de Corte para que éstos fueran con los Merinos Mayores, por ello nos inclinamos

---

(303) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 16, pgs. 380-1)

(304) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11, p. 406)

(305) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11, p. 407).

a pensar que bien debemos interpretar por "alcalles de casa del Rey" cualquier alcalde de nombramiento real o bien que se utilicen para los Merinos alcaldes que han sido de casa del Rey o que en ese momento no se hallen cubriendo su turno en la Chancillería.

Las Cortes de Madrid se ocuparán de establecer las condiciones requeridas para desempeñar el oficio de alcalde de Merino Mayor. Aparte, como acabamos de decir, de ser alcalde de casa del rey y natural de sus villas, los alcaldes deben ser del Reino en el cual se halle enclavada la merindad, y han de ser hombres "abonados e onrados" y sobre todo "que non sean dados apedimiento delos merinos"<sup>(306)</sup>. Es decir, además de exigirse las condiciones generales para cualquier tipo de alcalde real, se pone la condición de que no sea a petición del propio Merino Mayor con quien va a juzgar, medida encaminada a la consecución de una mayor pureza e integridad en la administración de la justicia.

Hemos de destacar igualmente que al Merino Mayor de Castilla le acompañan "alcalles ffijos dalgo e delas villas" además de los correspondientes alcaldes de casa del Rey antes señalado. Desconocemos si con anterioridad a esta fecha ya el Merino Mayor de Castilla llevaba alcaldes de hijosdalgo. Es ciertamente difícil precisar el alcance de esta disposición. SINUES<sup>(307)</sup> - -

---

(306) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11, p. 407)

(307) El Merino, p. 180.

basándose en este texto de las Cortes de Madrid y en el de una fazaña<sup>(308)</sup> piensa que desde su origen, al igual que el rey llevaba consigo alcaldes, los Merinos Mayores los llevaban también, de los que uno era fijodalgo. Dejando aparte que SINUES parte de la confusión entre Adelantado Mayor y Merino Mayor<sup>(309)</sup>, creemos que su afirmación no es exacta, no sólo por la datación de la fazaña<sup>(310)</sup> sino por la interpretación de la misma.

En la fazaña<sup>(311)</sup> se está recogiendo una petición de los fijosdalgo quienes se quejan al Rey que los alcaldes de las villas están conociendo de sus pleitos de fijosdalgo y aplicando "las leyes", en vez de ser librados por "su fuero" (el fuero de los fijosdalgo). Por ello piden al Rey que, al igual que él lleva -

---

(308) "Et otrosi le pidieron por merced que como él (Alfonso II) traya dos alcalles fijosdalgos en la su corte, que mandase a su Meryno Mayor de Castiella que trayesse otro alcalle fijodalgo consigo. Et dixo Garçilaso quel pidian los fijosdalgo derecho, que los alcalles de las villas que auyan sabor de librar los pleytos de los fijosdalgo segunt las leyes, et que los fijosdalgo que no consentian en ello et que querian ser librados por el su fuero, et que por esto que ponga el rey siempre dos alcalles fijosdalgo en la su corte ordenarios que librasen por sy; et que eran dos porque sy uno fuesse que fincasse el otro" (Fazaña 19 del Ms. 431 de la B.N. publicada por MARICHALAR y MANRIQUE: Historia de la Legislación... t. II, p. 308; también publicada por F. SIA REZ: La Colección de fazañas del Ms. 431 de la Biblioteca Nacional en AHDE 14 (1942-43), pgs. 549-99; la fazaña en concreto está en la pgs. 590-1).

(309) Trae a colación la Partida 2, 9, 22 que se refiere únicamente a los Adelantados Mayores, así como el texto de las Cortes de Valladolid de 1312, también únicamente referido a los Adelantados (SINUES: El Merino, pgs. 1801)

(310) SINUES "con toda seguridad" sitúa la fazaña entre los años 14 y 36 del siglo XIV (p. 180-1, nota 562). Dificilmente la fazaña puede obedecer a esa dos fechas pues, en

"dos alcalles fijosdalgo" en su corte, el Merino Mayor de Castilla "trayesse otro alcalde fijosdalgo"; es decir, que además de los alcaides de casa del Rey, traiga otro de condición fijosdalgo consigo para librar los pleitos de los fijosdalgo. En este mismo sentido se expresa la petición 11 de las Cortes de Madrid de 1329 que después de hacer las consideraciones sobre todos los Merinos Mayores (entre ellas que tenga cada uno dos alcaides de casa del Rey) hace una precisión concreta referida sólo al Merino Mayor de Castilla de que le den "alcalles fijosdalgo". Esta petición de las Cortes de 1329 está, pues, en estrecha relación con la fazaña comentada; la petición hecha al Rey años atrás, posiblemente a la que se hizo caso omiso, es presentada ahora formalmente en Cortes respondiendo el Monarca que lo tiene por bien y que así lo mandará cumplir. Pero lo cierto es que, aparte de estos dos textos, no hemos vuelto a encontrar referencias ni documentos que nos constaten la existencia de estos alcaides fijosdalgo que debían acompañar al Merino Mayor de Castilla con lo que ponemos en duda la existencia de los mismos, que a lo sumo de haber sido cierta sin duda fué efímera.

---

(310) /...primer lugar, en 1315, Garcilaso aparece confirmando como Adelantado Mayor y no como Merino Mayor (Vid. PÉREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... p. 345), Garcilaso no aparece como Merino Mayor hasta 1316. Tampoco puede hasta 1336 pues como recoge la Crónica de Alfonso XI, Garcilaso murió asesinado en Soria en 1327 (Crónica de Alfonso XI cap. 80, año 1327-p. 227) Seguramente la fecha que da SINUES en el texto de 1336 debe ser una errata dado que el mismo recoge el dato de la Crónica en que muere Garcilaso, con lo que en todo caso la fazaña habría que fecharla entre 1316 y 1326 o 1327; en nuestra opinión, por lo que a continuación veremos, cuanto más cercana sea la fecha a las Cortes de 1329, más encaja en el contexto la citada fazaña, por lo que nos inclinamos a pensar que data posiblemente de los dos o tres últimos años en los que Garcilaso estuvo como Merino Mayor de Castilla - (1325-27).

(311) Ver el texto en nota 308.



Pero si como acabamos de ver es ciertamente discutible la existencia de estos alcaldes de fijosdalgo que debían ir con el Merino Mayor de Castilla, mucho más lo es la de "alcaldes de las villas" que debían, según el texto de las Cortes<sup>(312)</sup>, dársele al Merino Mayor "segunt quelo an de ffuero".

No sabemos qué villas por fuero tenían derecho a que un alcalde de ellas vaya con el Merino Mayor. Tal vez el texto no debe interpretarse tanto como que hay alcaldes que pertenecen a unas villas han de ir con el Merino, puesto que carece de sentido nombrar unos alcaldes de las villas que anden desplazándose continuamente con el Merino, para juzgar sólo cuando lleguen a la villa de la que son originarios. Cabría entonces pensar en otra posibilidad para interpretar este texto: que las villas se reunieran y nombraran alcaldes representantes de todas ellas -tal vez dos- quienes serían los designados para juzgar los pleitos de las villas cuando el Merino Mayor llegara a cada una de ellas. En todo caso, al igual que ocurriera con los alcaldes fijosdalgo que debían darse al Merino Mayor de Castilla, no nos queda, que sepamos, ningún documento que nos corrobore la existencia de estos alcaldes de las villas con el Merino Mayor de Castilla.

En el Ordenamiento de las Cortes de Madrid se insistirá una vez más que los Merinos Mayores "non maten nin ssuelten nin prendan nin tomen nin despechen nin tormenten ningun omme asin juyzio delos alcalles que andudieren con ellos", y que "no tomen las calopnas nin las cohechen nin les manden tomar nin cohechar ssinon por juyzio delos alcalles".<sup>(313)</sup>

(312) Cortes de Madrid 1329 "...e al Merino de Castiella quel den, alcalles ffijos dalgo e delas villas ssegunt quelo an de fuero" (CLC. I, 11, p. 407).

(313) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11, p. 407.)

Los alcaldes del Merino Mayor deberán jurar que guardarán su oficio "verdadera miente assi como deuen" y harán saber al Rey "commo usan los merinos mayores de ssu offiçio" para que si algun daño hiciere el Merino en la merindad, que lo envien decir al Rey para su escarmiento.<sup>(314)</sup>

Igualmente se dispone que han de darse "dos calles que ssean de la comarca" al Adelantado Mayor de la Frontera. Estos alcaldes están perfectamente equiparados a los alcaldes de los Merinos Mayores no sólo en cuanto a las condiciones requeridas para el desempeño del oficio ("abonados o onrrados, que non ssean a pedimiento del adelantado") sino también en cuanto a sus funciones puesto que el Adelantado tampoco podía matar, soltar, atormentar ni tomar calañas sin juicio de los alcaldes que andaban con él<sup>(315)</sup>. Existe solamente una diferencia entre los alcaldes dados a los Merinos Mayores y los alcaldes que han de ir con el Adelantado Mayor de la Frontera que viene dada por el hecho de que mientras para los Merinos los dos alcaldes han de ser de "casa del Rey", los dos alcaldes del Adelantado Mayor de la Frontera han de ser de la comarca. Es difícil llegar a responder a qué se debe este trato discriminatorio entre unos y otros Reinos. Quizás porque el Rey le interesa tener un mayor control sobre los Merinos Mayores de Castilla, León y Galicia o tal vez porque .

---

(314) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 13. p. 407)

(315) Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 19, p. 409).

los de las comarcas de la Frontera serían mejores conocedores del Derecho de esta circunscripción, pero nos inclinamos más por la primera respuesta dado que, en contra de lo que disponen las Cortes de Madrid sobre el control que han de ejercer los alcaldes sobre sus Merinos Mayores respectivos, por su parte, al menos así no ha quedado expresado en las Cortes, a los alcaldes del Adelantado Mayor de la Frontera no se les encomienda ninguna función de control sobre él.

Es significativo que las Cortes guarden silencio respecto al Adelantamiento Mayor de Murcia. Ello se debe a que el Reino de Murcia de ha mantenido en una situación de excepción en relación al régimen de alcaldes de Merinos y Adelantados Mayores que venimos viendo.

En efecto, desde tiempos de Alfonso X Murcia tenía el privilegio de que todos los pleitos de los vecinos de dicha ciudad debían ventilarse en ella ante los jueces de la misma<sup>(316)</sup>. El silencio que guardan las fuentes nos hacen pensar que las medidas tomadas por Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1312 así como las sucesivas normas a las que nos hemos venido refiriendo en las páginas anteriores, no debieron afectar al Adelantamiento de Murcia, de ahí que las Cortes de 1329 no hagan mención del Adelantado Mayor de Murcia y si, en cambio, al de la Frontera.

---

(316) Véase la confirmación del privilegio hecha por Fernando IV en 1308 (TORRES FONTES: Privilegios de Fernando IV a Murcia en AHDE 19 (1948-49), doc. 9, p. 566).

Sin embargo muy pronto debió aplicarse el régimen de alcaldes de Adelantamiento para Murcia pues en 1331 en la carta en la que Alfonso XI notifica al concejo de Murcia el nombramiento de Alfonso Fernández de Saavedra como Adelantado Mayor ya encontramos referencia a los alcaldes del Adelantamiento.<sup>(317)</sup> Dos días más tarde, el mismo Alfonso XI notifica al recién designado Adelantado Mayor de Murcia el nombramiento de Macías Paez de Bolaños como alcalde del Adelantamiento.<sup>(318)</sup> Posiblemente fué en esta fecha de 1331 cuando se nombraron los primeros alcaldes para Murcia pues con anterioridad a esta fecha no hemos encontrado ningún indicio que nos haga pensar en la existencia de alcaldes de adelantamiento. Dos hechos nos llevan a pensar en esta suposición. En primer lugar, en la carta de nombramiento del anterior Adelantado Mayor de Murcia. Pero López de Ayala<sup>(319)</sup>, no encontramos ninguna referencia a los mencionados alcaldes y, en segundo lugar, la protesta que los mandaderos de la ciudad de Murcia presentan al año siguiente, en 1332, ante el Rey argumentando el privilegio que tenían desde los tiempos de su bisabuelo Alfonso X de que "todos los cristianos et judios de y la çibdat del regno de Murçia tan bien los estrannos commo los vesinos que deuen venir a juysio de jueces de la çibdat"<sup>(320)</sup>. La protesta nos hace pensar que hasta la fecha no ha habido intervención de los alcaldes de adelantamiento y sólo

---

(317) El Merino, p. 180

(318) Véase este nombramiento en PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 213, pgs. 85-6.

(319) Data de 1328, marzo 26 y puede verse publicada en GIMENE SOLER: Don Juan Manuel, doc. 458, p. 564 y el Registro de PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 200, p. 79.

(320) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 217, pgs. 87-9.

cuando éstos han empezado a actuar y a interferir la justicia municipal, se eleva la queja al Rey.

La otra particularidad que presenta el Adelantamiento de Murcia en estos primeros momentos con respecto al Adelantado de la Frontera y a los Merinos Mayores de León, Castilla y Galicia, es que sólo tienen un alcalde de adelantamiento. Ello se deduce del único nombramiento de alcalde, al que antes hemos aludido<sup>(321)</sup>, y a que en la protesta del concejo de Murcia presenta da al Rey hace referencia únicamente al "alacalle del adelantamiento"<sup>(322)</sup>.

Pocas más son las noticias que tenemos de los alcaldes de Adelantados y Merinos en lo que resta del reinado de Alfonso XI. En las Cortes de Madrid de 1339 nos encontramos por primera vez alusión a unos "alcaldes dela cabeça dela merindat"<sup>(323)</sup>. Debemos identificar estos alcaldes con los alcaldes de los Merinos Mayores? Creemos que sí. Nos basamos para sostener esta afirmación en el sentido del texto de las citadas Cortes.

El texto dispone que el "preso o los presos quel meryno mayor o los merynos que por el andodieren prendieren o los troxieren ante los alcaldes dela cabeça dela merindat, quelos dexten y ffasta quel pleito ssobre que fueron pressos sea librado"<sup>(324)</sup>. Si los Merinos Mayores o sus lugartenientes fueran acompañados

(321) Véase nota 318.

(322) Véase documento de la nota 320. En el mismo sentido véase la carta del Adelantado Juan Fernando de Orózco nombrado su teniente a Martín Díaz de Albarracín en la que se hace mención sólo a un alcalde de adelantamiento (Vid. CERDA RUIZ FUNES: Para un estudio... doc. 2, pgs. 210-11 y PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 249, pgs. 99-100).

(323) Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 7, p. 462 y 16 p. 467).

(324) Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 7, p. 462).

de los alcaldes de merinos, no sería necesario llevar a los presos a ningún lugar pues administrarían justicia los alcaldes en el lugar en donde se encontraran; pero aquí el texto nos está haciendo alusión a que los Merinos han de llevar los presos "ante los alcaldes dela cabeça de la merindat". Esta cuestión inmediatamente nos lleva a plantearnos el problema de la itinerancia de los alcaldes de Merinos y Adelantados. Hasta el momento los textos han sido dífanos al respecto, pues siempre nos han dado a entender que los alcaldes acompañan a los Merinos en sus desplazamientos ("alcaldes que andudieren con los merinos", "que el merino o el adelantado con los alcaldes del Rey que traxiere consigo", "alcaldes del Rey que andudieren con cada uno delos merinos mayores"), sin embargo, ahora parece que los Merinos Mayores van desprovistos de alcaldes y han de llevar a los presos ante unos "alcaldes dela cabeça dela merindat". Desde luego si identificamos estos alcaldes con los que hasta el momento hemos estado denominando "alcaldes de merinos o de adelantados", no nos restaría pensar otra cosa que se ha producido un asentamiento de los alcaldes en la ciudad cabeza de la merindad; se ha establecido en un lugar fijo el tribunal territorial de la Merindad. No obstante, pese al texto de las Cortes, quizás sea inexacto pensar en un asentamiento definitivo; pudiera perfectamente ocurrir que durante algún tiempo los alcaldes efectivamente acompañan a los Merinos en sus desplazamiento, pero, durante el resto del año estén como tribunal en la cabeza de la merindad siendo, precisamente, este caso el que se recoge en las Cortes de 1339 para evitar que cuando los Merinos vayan en sus desplazamiento sin alcaldes puedan no obrar de acuerdo a sus funciones y por ello se dispone que lleven los presos a la cabeza de la merindad en donde se encuentran sus

alcaldes. Esta afirmación vendría en parte corroborada por un texto posterior recogido en el Ordenamiento de Alcalá en el que se vuelve a hablar de "los alcalles que andovieren con los Adelantados e Merynos"<sup>(325)</sup> dándonos de nuevo la idea de su itinerancia.<sup>(326)</sup>

Pese al control encomendado a los alcaldes sobre Adelantados y Merinos en los años siguientes las quejan en las Cortes se suceden ante las irregularidades de estos altos oficiales de la Administración territorial<sup>(327)</sup>. Y las mismas denuncias las encontramos igualmente en las únicas Cortes celebradas por Pedro I en Valladolid<sup>(328)</sup> de forma que se solicita que cada vez que los Merinos de Castilla, León y Galicia lleguen a los lugares donde han de entrar, que las querellas que les fueren dadas en cada una de las villas "que las oyan e libren con los alcalles que con ellos andudieren, et que esten con ellos los alcalles ordenarios dela villa o del lugar so acaesçiere delos oyr e librar"<sup>(329)</sup>. Sin duda se dispone la presencia de los alcaldes ordinarios como una mayor garantía en la administración de justicia.

Los Adelantados Mayores de la Frontera y Murcia tampoco se escapan de las quejas de los procuradores, quienes piden al Rey que le dé autoridad a todas las villas de la Frontera y de Murcia para que cada una tome "quatro omes buenos vezinos con quatro

---

(325) Ordenamiento de Alcalá 20, 7.

(326) Esta misma idea la encontramos también en las Cortes de Valladolid de 1351 (CLC. II, 50, pgs. 29-30).

(327) Cortes de Madrid 1339 (CLC. I, 16, p. 467), Ordenamiento de Alcalá 20, 7; Cortes de León 1349 (CLC. I, 4, p. 629).

(328) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 50, 51, 53 y 54, pgs. 29-31).

(329) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 50, pgs. 29-30).

escribanos publicos" para que "escrivan e pongan en los libros e ffirmen e ssignent todas las cosas que los dichos adelantados o qual quier dellos ffizieren que danno e mal ssea de qual quie cibdat e villa e logar acaesçer" para que el Rey lo sepa. Pero, el Monarca se niega a conceder este control que quieren ejercitar sobre sus Adelantados Mayores de la Frontera y Murcia respondiendo que "ssi los dichos adelantados et los otros offiçiales algunas cosas o agravios ffizieran o ffizieren commo no deuen, quelos alcalles delas villas e logares, me lo enbien mostrar et yo lo estrannare e castigare commo la mi merçed ffuere e ffallare por derecho". (330)

En el reinado de Enrique II seguimos encontrando quejas en torno a la actuación de Merinos y Adelantados Mayores<sup>(331)</sup>; en las importantísimas Cortes de Toro de 1371 y en las que Enrique II se dispone a remodelar toda la administración de justicia del Reino una vez finalizado el conflicto civil, vemos que se repiten las mismas disposiciones que desde el primer tercio del siglo XIV han sido destinadas a regular la institución que nos ocupa y al mismo tiempo nos revelan los males de la misma.

En este sentido se dispone que los Merinos y Adelantados Mayores "non tomen alcalles para en los dichos ofiçios, mas que gelos demos nos de nuestra casa delos naturales delas nuestras cibdades e villas e logares delos nuestros rregnos, nuestras çibdades e villas e logares delos nuestros rregnos, que anden por nos con ellos"<sup>(332)</sup>. Ello se debe a que en contra de lo ordenado los

(330) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 32, p. 65).

(331) Cortes de Burgos 1367 (CLC. II, 9, pgs. 149-50) y Cortes de Toro 1369 (CLC. II, 69, p. 182).

(332) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 19, pgs. 196-7).



Merinos y Adelantados Mayores están designando sus propios alcaldes con lo que no sólo quedaba menguada la jurisdicción real en cuanto desaparecía su intervención en el ámbito territorial, sino también se atentaba a la independencia de los alcaldes quienes, lógicamente, no actuaban como controladores de las actuaciones de sus superiores los Adelantados y Merinos, y además, podían ser más fácilmente presionados por ellos.

Enrique II no introduce ninguna novedad se limita a reiterar las disposiciones de ordenamientos anteriores ya sea en lo concerniente a las condiciones personales que han de reunir los alcaldes de adelantamiento y merindad<sup>(333)</sup>, o en la dependencia de los Adelantados y Merinos Mayores que han de atenerse a lo que disponga en alcalde en su sentencia.<sup>(334)</sup>

La política intervencionista de Enrique III no sólo quedó reflejada en el envío de jueces corregidores<sup>(335)</sup> sino, que también durante su reinado se produce una mayor ingerencia de los jueces reales en la administración de justicia municipal, ya en total declive, pero que no deja de levantar las pertinentes protestas por parte de algunos concejos. La misma política sigue su hijo Juan II al que ya de un modo general le presentan los procuradores de las Cortes de Ocaña de 1422 las quejas de las ciudades, villas y lugares

---

(333) "que sea cada uno de los reinos donde fuere la merindad, et tales que sean omes buenos e abonados e onrrados e que non sean tales dados a pedimiento de los merinos" (CLC. II, 19, p. 197).

(334) Cortes de Toro 1371 (CLC. II, 19, p. 197).

(335) BERMUDEZ AZNAR: El Corregidor en Castilla... pgs. 65-6

del reino que antiguamente tenían privilegios para conocer los pleitos de la jurisdicción ordinaria, tanto civil o criminal, que se suscitaban entre sus vecinos en primera instancia, porque "agora los mis alcalles -dice el Rey- que agora eran puestos en los mis adelantamientos, perturbauan e enpachauan los dichos privilegios e la dicha libertad segunt que en ellos se contenía, deziendo que por quanto en algunas çibdades e villas de los dichos mis rregnos en los dichos priuilejos non mandaua espresamente a los dichos alcalles que se non entremetiesen en las tales jurediciones, saluo a los adelantados e merinos e a sus oficiales<sup>(336)</sup>

Desde luego la escusa que ponían los alcaldes de adelantamiento para intervenir en la administración de la justicia local no podía ser más sibilina ya que basaban su intervención en que los privilegios de las ciudades no contenían expresamente su no intromisión como quedaba expresada la del Adelantado o Merino Mayor. La mayoría de estos privilegios databan de la época en que los Adelantados y Merinos Mayores no llevaban alcaldes consigo por lo que evidentemente no podían estar incluidos en la cláusula de "non introito" o de reserva de la jurisdicción. Ahora, los alcaldes de adelantamiento, sin duda por iniciativa real, acogándose a su carácter de jueces reales no nombrados por el Adelantado o el Merino, no respetan la jurisdicción local y están interfiriendo en ella<sup>(337)</sup>. El Rey, lógicamente, responderá a los procuradores - con una evasiva, diciendo que le muestren tales privilegios y - que él mandará a proveer sobre todo en justicia.

(336) Cortes de Ocaña 1422 (CLC. III, 21, p. 49)

(337) Véase la carta dirigida por el Condestable y Adelantado Mayor del Reino de Murcia a su lugarteniente "Fagovos sabe: que el concejo et caualleros, escuderos et oficiales et omes buenos de la muy noble çibdat de Murçia, me enbiaron dezir... que vos et vuestro alcalles vos entremetedes et queredes entremeter en vsar de judgar et librar en la juredicion de la dicha çibdat, que los alcalles della deuen oyr e librar et judgar ordenariamente..." (Publicada por CERDA: Para un estudio... doc. 8, p. 21)

La generalización del régimen de corregidores en el reinado de Juan II y posteriormente en los de sus sucesores, afectó sin lugar a dudas a la actuación de los alcaldes de Adelantado y Merino desde el momento en que los corregidores, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo segundo, extendían su juris-dicción sobre el amplio territorio de las ciudades. Ello nos lle-vó a pensar que los alcaldes de Adelantamiento y Merindad quedarían con jurisdicción sobre aquellas zonas a las que no se ha extendido el régimen de corregimiento, es decir, a las zonas - fundamentalmente rurales que recorrerían los dichos alcales o sus lugartenientes.

Pocas son las fuentes que nos dan más noticias acerca de los alcaldes de adelantamiento. Su actuación circunscrita a un ámbito muy reducido, pese a su carácter territorial, hace que - la documentación haya desaparecido en gran parte, conservándo-se, en cambio, la de los corregidores por desarrollarse ésta - fundamentalmente en el ámbito urbano. Sin embargo, los alcal-des de adelantamiento (ya desde el reinado de Juan II predomina el régimen de Adelantados, aunque sólo sea nominalmente, al frente de las grandes circunscripciones) siguen actuando a lo lar-go de toda la Baja Edad Media.

Durante el reinado de Enrique IV, una de las reformas - que proponen los nobles sublevados en la sentencia compromisa-ria de 1465 está encaminada a la administración de justicia terri-torial de los alcaldes de adelantamiento. Se quejan de que los alcaldes del Rey puestos en los adelantamientos usan de sus ofi-cios indebidamente y contra las leyes del Reino, fatigando a los

pueblos "por muy perversas y exquisitas maneras". Para ello se disponía en la citada sentencia que los dichos alcaldes sirvie ran por sí mismos sus oficios y no pudieran tener lugarteniente, salvo cuando se encontraran ausentes del adelantamiento.

Son ciertamente interesantes las condiciones que en la sentencia se exigen para desempeñar el oficio de "alcalde mayor" -ahora se le titula así- del adelantamiento. Se exige que sea letrado, buena persona y de buena conciencia, examinado por los oidores de la Audiencia o del Consejo; también habrá de jurar ante ellos que administrará el dicho oficio bien y fielmente sin parcialidad y que no llevará cohecho ni dádiva de concejo o persona alguna<sup>(338)</sup>. Por lo demás la sentencia se limita a recoger las disposiciones de las Cortes anteriores referentes a estas alcaldías.

En las Cortes de Madrigal encontramos de nuevo las quejas contra la actuación de los alcaldes del adelantamiento de Castilla por los "darnos e cohechos e tiranfas" que hacen. Los procuradores, exponen a los Reyes Católicos cuáles son las causas que a su entender han provocado esta situación: En primer lugar, porque "en los tienpos antiguos como auia dos alcaldes del adelantamiento puestos por el rrey, cada uno destos ponia por sy dos alcaldes e non mas en lugares çiertos, e estos cognosçian de las causas que segun las leyes e ordenanças podian conosçer, e lleuauan sus derechos tasados; e porque de todo esto exçedian el dicho sennor rrey vuestro hermano ouo mandado de haçer por su sennoria fechas çiertas ordenanças, por las quales dio orden

---

(338) Col. Dipl. Enrique IV. Sentencia compromisaria 1465, ca. 20, pgs. 440-442.

e rregla en qué manera se auia de exerçer la jurisdición por los alcaldes e merinos del adelantamiento,<sup>(339)</sup> e qué derechos auian de llevar, las quales dichas ordenanças nunca fueron guardadas, antes quebrantando aquellas se ha hecho peor que de antes, de manera que los pueblos que cahen so la jurisdición del dicho adelantamiento, son por los ofiçiales muy fatigados e maltratados"<sup>(340)</sup>. En segundo lugar, la razon de este estado de cosas radica en "los malos ministros que los dichos alcaldes principales del dicho adelantamiento ponen por alcaldes en su lugar".<sup>(341)</sup>

Ante esta situación se pide a los Reyes que sean guardadas las dichas ordenanzas "e que los dichos dos alcaldes principales del adelantamiento de aqui adelante no puedan poner ni pongan en él alcalde ni alcaldes algunos por si, salvo cada uno dellos dos alcaldes, e estos esten en los logares donde acostumbraron usar"<sup>(342)</sup>. Se exige, además que los dichos lugartenientes no puedan usar de tales oficios hasta que se presenten a los Reyes con el nombramiento del adelantado mayor para que así se vea qué persona es la que se designa para ocupar la dicha alcaldía y lleve la carta de aprobación de los Reyes<sup>(343)</sup>. Piden igualmente los procuradores que todos los que se encuentran en ese momento desempeñando tales alcaldías no usen de sus oficios en el adelantamiento ni sean obedecidos hasta que renueven su nombramiento de la forma susodicha.

(339) Hasta el momento ha sido infructuosa la búsqueda de esta Ordenanzas de Enrique IV sobre el modo de actuar de los alcaldes y merinos de los Adelantamientos.

(340) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17, p. 76)

(341) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17, p. 76)

(342) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17, p. 76)

(343) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17, pgs. 76-7).

Los Reyes responden afirmativamente a la petición señalando las competencias y revocando por la presente ley todos los nombramientos de alcaldes de adelantamiento que fueron puestos sobrepasando el número de dos las facultades que tenían los dos "alcaldes principales" para poner mas de dos alcaldes.<sup>(344)</sup>

Pero de poco sirvieron las medidas tomadas por los Reyes Católicos en las Cortes de Madrigal de 1476 a tenor de las quejas nuevamente presentadas a los Reyes cuatro años más tarde en Toledo<sup>(345)</sup>. Ante esta nueva protesta los Reyes contestan que van a "embyar vna o dos personas buenas fiables y de consciencia que fagan pesquisas e sepan la verdad sobre lo que fasta aquí se ha fecho por los alcaldes del dicho adelantamiento e por sus lugares tenientes, e que es lo que sobre ello se deue proveher para adelante"<sup>(346)</sup>. Mientras tanto para que los pueblos no recibieran "fatiga ni agrauio delos dichos alcaldes del dicho adelantamiento" y entre tanto que se hace la pesquisa, los Reyes disponen suspender a los dichos alcaldes y a sus lugartenientes durante el tiempo que dure la pesquisa, "e si sobre esto fizieren alguna execucion o prenda, que aquel o aquellos que gelo mandaren olos quelo executaren, sean auidos por robadores, e sea caso de hermandad para que sean pugnidos por caso della, como si robaren en yermo"; finalmente, los Reyes mandan a las autoridades del dicho adelantamiento de Castilla que durante el término de dicha suspensión no obesdescan ni cumplan las cartas y manda-

(344) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17. p. 77)

(345) Cortes de Toledo 1480: "Por muchas partes nos son dadas quexas delos agravios e fuerzas que se fazen por los alcaldes del adelantamiento de Castilla, e especialmente dicen que los pueblos e moradores donde estos alcaldes exercitan su jurisdiccion non sienten ni resciben dello beneficio ni prouecho alguno, saluo cohechos e tiranias" (CLC. IV, 75, p. 148).

(346) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 75, p. 148).

mientos de los dichos alcaldes, ni asistan a sus llamamientos ni emplazamientos, "ni los ayan ni tengan por alcaldes del dicho adelantamiento". (347)

No sabemos cuales fueron los resultados de la pesquisa dispuesta por los Reyes sobre la actuación de los Alcaldes del Adelantamiento de Castilla, pero lo que nos interesa destacar ahora es que tanto en 1476 como en 1480 las quejas van dirigidas únicamente contra los alcaldes del Adelantamiento de Castilla con lo que podemos afirmar casi con toda seguridad que en los restantes Adelantamientos la administración de justicia llevada a cabo por los alcaldes discurría con total normalidad. Sin embargo, el creciente intervencionismo regio llevado hasta los últimos extremos por Isabel y Fernando tuvo en estos alcaldes territoriales un modo muy eficaz de implantar la justicia real en los territorios que estaban fuera de la jurisdicción de los corregidores. Quizás es esta una de las causas encubiertas por la que se quejan los procuradores castellanos en Madrigal y Toledo. En 1506 las quejas se extienden a los alcaldes de los Adelantamientos de Castilla y León porque "conosçen pleitos contra el tenor e forma delas leyes destos rreynos, en los casos que ni deuen conosçer, y lleuan muchas rrebeldias y derechos ynmoderados, y las partes rreçiben mucha fatiga e daño en los pleitos que antelos penden"<sup>(348)</sup> hasta el punto que, dado que la actuación de estos alcaldes de adelantamiento no se halla reglada y "no tienen leyes ni hordenanças", "cada vuno dellos rrodean toda su provincia y sacan a los vnos de su fuero y los llevan a otra parte", haciendo

(347) Cortes de Toledo 1480 (CLC. IV, 25, p. 231)

(348) Cortes de Valladolid 1506 (CLC. IV, 25, p. 231).

pesquisas generales, por lo que piden los procuradores que sean suprimidos pues "es oficio de que no hay necesidad" dado que hay muchos jueces y justicias en los adelantamientos<sup>(349)</sup>. Sin embargo su actuación proseguirá durante toda la Edad Moderna.

#### COMPETENCIAS

La designación de alcaldes de la casa del Rey a cada uno de los Adelantados dispuesta por Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1312 significaba la pérdida total por parte de los Adelantados de sus competencias judiciales. Estas, a partir de esa fecha, pasaban a manos de los alcaldes reales que acompañarían a los Adelantados en sus desplazamientos por su circunscripción de forma que sin el concurso aquéllos el Adelantado quedaba incapacitado para realizar cualquier actuación judicial<sup>(350)</sup>. Desde esta perspectiva podemos perfectamente afirmar que, en principio, los alcaldes tenían las mismas competencias judiciales que los adelantados a quienes acompañaban.

El primer problema se nos presenta cuando escasamente a los tres años de lo dispuesto en Valladolid, los tutores de Alfonso XI reemplazan el régimen de Adelantamientos por el viejo sistema de Merinos. Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse, los alcaldes de adelantados no desaparecen con ellos, sino que, por el contrario, les van a ser asignados a los nuevos

(349) Cortes de Valladolid 1523 (CLC. IV, 59, 383)

(350) Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 66, p. 213); Cortes de Palencia 1313 (CLC. I, 21, p. 226), Cortes de Burgos 1315 (CLC. I, 20, pgs. 278-9); Cortes de Carrión 1317 (CLC. I, 49, p. 318); Cortes de Madrid 1329 (CLC. I, 11, pgs. 406-7) *passim*.



Merinos Mayores. Este hecho suponía nada menos que la consolidación de una instancia judicial territorial dependiente del Rey que no se hallaba, por tanto, adscrita a la vicisitud de que en un momento u otro se encontrara al frente de la demarcación un Adelantado o un Merino, pues ambos, de hecho habían quedado equiparados al serle sustraída al Adelantado Mayor su finalidad esencial: la de juzgar.

Las fuentes, ciertamente muy parcas a la hora de proporcionarnos datos acerca de estas alcaldías, no nos permiten en ocasiones llegar a conclusiones definitivas en este campo totalmente sin explorar, con lo que debemos de movernos una vez más en el escurridizo mundo de las hipótesis.

Hemos de pensar, en primer lugar, que la adscripción de los alcaldes de Adelantado a los Merinos Mayores no supuso una pérdida o disminución de sus competencias judiciales sino que continuaron desempeñando éstas mismas pero ahora junto al Merino Mayor.

Los alcaldes de adelantamiento o merindad -según el caso- conocían de dos tipos de pleitos bien diferenciados: "aquellos casos que por sí deuen judgar" y "los casos que ovieren de judgar con los juezes del ffuero"<sup>(351)</sup>. Si bien los primeros, a la vista de lo dicho anteriormente, podrían identificarse con los casos que correspondían ser librados por el Adelantado, mucho más problemático es tratar de esclarecer qué casos los alcaldes de adelantamiento o merindad debían librar con el concurso de los

---

(351) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 16, p. 380)

jueces foreros, tal vez las apelaciones de los pleitos foreros?. No lo sabemos. Por otra parte el Espéculo nin ningún otro texto nos hace alusión a pleitos que debían librar los Adelantados con participación de los jueces del fuero, con lo que la incógnita se torna más vidriosa.

En una primera etapa, estos alcaldes de Merindad o de Adelantamiento aparecen configurados como jueces esencialmente de apelación que recorrían su demarcación administrando justicia en las distintas villas enclavadas en la circunscripción sobre la cual ejercen su jurisdicción<sup>(352)</sup> tanto en materia civil como en materia criminal.<sup>(353)</sup>

No obstante, puede llamar la atención a primera vista, el distinto tratamiento que hace el Ordenamiento de Alcalá<sup>(354)</sup> entre el fallo dictado por los Adelantados Mayores de la Frontera y Murcia -del que sólo cabe ya suplicación- y las sentencias que puedan dar los alcaldes de los Merinos Mayores de Castilla, León o Galicia, que al no estar incluidas en la citada ley del Ordenamiento,

---

(352) Véase la carta de Alfonso XI designando a Alfonso Fernandez de Saabedra como Adelantado Mayor de Murcia: "et le recibades et aydes por Adelantado et que vayades ante el a su juyzio et a su llamado et ante los mios alcalles que con el andodieren en el dicho Adelantamiento, cada ves llamaren e enplasaren o vos mandaren enplasar et que presentedes las alçadas por ante el asy como las devedes presentar para ante mi que tengo por bien que las aya et las libre en mio logar" (Vid. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 212 pgs. 84-5).

(353) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 30, pgs. 64-5)

(354) Ordenamiento de Alcalá 14, 1.

dehemos pensar que cabría apelación ante los alcaldes Mayores de la Corte. Este tratamiento, aparentemente discriminatorio ya que en definitiva los Adelantados Mayores de Murcia y la Frontera tampoco juzgan, sino que lo hacen los alcaldes que tienen designados al respecto, se debe a las circunstancias especiales que disfrutaban tanto Sevilla<sup>(355)</sup>, como Murcia<sup>(356)</sup>, cabezas de los respectivos Adelantamientos en las que se encuentran tribunales especiales de alzada. Ello hace que los fallos dictados por estos tribunales se equiparen por el Ordenamiento de Alcalá a los fallos dictados por los alcaldes Mayores de las alzadas de la Corte y, en cambio, de las sentencias dictadas por los alcaldes de los Merinos Mayores de León y Castilla, así como de Galicia -y a finales de este reinado de su Adelantado- eran vistas, suponemos, en la Corte en última apelación por los alcaldes de las alzadas de la Corte.

Sin embargo, al igual que los Adelantados, los alcaldes de Merindad o Adelantamiento conocían también determinados tipos de pleitos en primera instancia. Así por ejemplo, en una carta de Alfonso XI al concejo de Murcia en 1332, justamente un año después de haberle sido designado un alcalde al Adelantado, se hace referencia a los "casos de realengo" que eran competencia del Adelantado<sup>(357)</sup>. Una provisión de la Audiencia de - -

(355) Véase ALVAREZ JUSUE: La justicia sevillana desde Alfonso XI... ya citado.

(356) En Murcia el Adelantado nombraba dos alcaldes denominados de "las primeras alçadas" uno, y el de "las segundas alçadas otro" (Vid. CERDA: Para un estudio... doc. 6, p. 213).

(357) PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, 217, pgs. 87-8

Pedro I dictada a raíz de la "petición" presentada por el concejo de Murcia en la que se querellaba por las interferencias de los alcaldes del Adelantado en la jurisdicción ordinaria de los alcaldes de la ciudad, nos alcara cuáles eran esos "casos de realengo": el Adelantado -su alcalde- conocía de los pleitos de quebrantamiento de camino, de robo, de quebrantamiento de paz puesta entre el Rey de Castilla y los moros y de quebrantamiento de foro<sup>(358)</sup>. Es decir el Adelantado conocía de determinados casos de corte<sup>(359)</sup> no obstante, esta situación, que la conocemos bien documentada en Murcia, no sabemos si era general para todos los alcaldes de Adelantamiento y de Merindad de los que sólo -sabemos que había unos casos "que por sí deuen judgar".<sup>(360)</sup>

En efecto, cuando veíamos las competencias de los Adelantados Mayores señalábamos que éstos podían librar aquellos pleitos privativos del Rey (casos de corte) por delegación del Monarca. Al serles designados alcaldes a los Adelantados, el Rey bien pudo delegar en ellos el conocimiento de algunos de esos casos de corte, sobre todo aquellos concernientes al orden público del Adelantamiento (quebrantamiento de camino, robo, etc.). Es bien significativo, por ejemplo, que los casos de riepto, perfectamente atribuibles a los Adelantados según lo dispuesto en el Espéculo<sup>(361)</sup> por delegación del Rey, precisamente en las Cortes

(358) Publicado por CERDA: Para un estudio... doc. 7, p. 215.

(359) Así aparece reiterado en varios documentos posteriores: la carta de Juan I ordenando al Adelantado no interviniera en los asuntos criminales excepto en los cuatro casos que le corresponde (Reg. PEREZ BUSTAMANTE: El Gobierno... t. II, doc. 447, p. 189) o en la carta de Ruý López de Dávalos, Adelantado Mayor de Murcia, a su lugarteniente en 1408 (Publicada por CERDA: Para un estudio... dc. 8, pgs. 216-7).

(360) Cortes de Valladolid 1325 (CLC. I, 16, p. 280)

(361) Espéculo 4, 2, pr.

de Valladolid de 1312, en las que se les nombran alcaldes a los adelantados, se reservan exclusivamente al Rey<sup>(362)</sup> consecuencia lógica si tenemos en cuenta que los Adelantados han perdido su facultad de juzgar.

Ante estos datos podemos, pues, pensar que los alcaldes de Adelantados y Merinos Mayores conocían en primera instancia de los pleitos criminales reservados al Rey y en apelación los pleitos civiles y los restantes pleitos criminales que eran librados por los alcaldes foreros como así confirman las Cortes de Valladolid de 1351<sup>(363)</sup>. Sin embargo, en ocasiones se acude directamente al tribunal del Adelantado y de su alcalde en primera instancia sin ser pleitos criminales. En este sentido nos ha llegado una importantísima sentencia sobre un pleito presentado ante el Adelantado Mayor de Galicia en 1349 en favor del Monasterio de Sobrado en la que se condena a los vasallos habitantes del coto de Aranga a reconocer el vasallaje y señorío del citado Monasterio, que previamente se negaban a reconocer.<sup>(364)</sup>

La sentencia es ciertamente interesantísima, no sólo desde el punto de vista procesal pues se nos va describiendo cada una de las fases y citaciones para acabar sentenciando en contra de los habitantes del coto de Aranga por rebeldía, sino también desde el punto de vista institucional, ya que ella se nos hace referencia a una sentencia previa sobre la misma cuestión que había

---

(362). Cortes de Valladolid 1312 (CLC. I, 1, p. 198)

(363) Cortes de Valladolid 1351 (CLC. II, 30, pgs. 64-5)

(364) A.H.N. Sección Clero. Sobrado carp. 548, nº 4.

dictado el Merino Mayor de Galicia García Gómez "como juez arbitro" en favor del Monasterio "dela qual sentencia segund que por ella parescia ninguna delas partes non se agravio ni apeló, mas finco consentida de partes es passo en cosa juzgada"<sup>(365)</sup>. La querella se presentó por los procuradores del coto de Aranga quienes "parecieron en la mi casa, en la Puebla de Parrega ante mi el dicho Adelantado e ante Gomez Arias de Castro Verde, alcalde del rey, que oye y libra los pleitos en el dicho adelantamiento". La querella se presenta ante el representante del Rey, el Adelantado, quien "de iure" sigue conservando las competencias judiciales, pero "de facto" como bien nos prueba la sentencia son desempeñadas por el alcalde del Rey "quien oye y libra los pleitos en el dicho adelantamiento". Y en efecto, tal como aparece reflejado en la sentencia, una vez presentadas las pruebas y siendo emplazados los procuradores del coto de Aranga por tres veces sin acudir, el Adelantado manda "al dicho Gomez Arias alcalde por el rey en la mi casa segund que dicho es que viese todo lo sobredicho e lo librase segund falla se por derecho. Et el dicho alcalde Gomez Arias vista la dicha querella..." razona cada una de las pruebas presentadas y finalmente confirma la sentencia arbitral condenando a los habitantes del coto de Aranga.

No se trata, como bien expresa la sentencia, de una apelación que se hiciera de la sentencia arbitral de dictara el Merino, sino que los habitantes del coto de Aranga, descontentos por el fallo de la misma, acuden en primera instancia a la jurisdicción

---

(365) Una prueba más de que los Merinos Mayores no juzgan. Se acude a él como juez arbitro y no cómo juez Ordinario. Además, como nos expresa el citado documento, el Merino Mayor Garcia Gomez era "doutor" con lo que a su calidad de representante del Rey en Galicia se unian sus conocimientos en Derecho, con lo que no nos ha de extrañar que se acudiera al Merino como juez arbitro de la cuestión.

ordinaria en busca de un fallo más favorable. Y se acude en primera instancia en nuestra opinión, al Adelantado por la condición de una de las partes, es decir el Monasterio de Sobrado, por lo que, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo primero era un pleito privativo de la jurisdicción real no pudiendo ser solventado por ningún otro alcalde. Todo ello nos lleva a plantearnos la posibilidad de que los Adelantados y sus alcaldes podían conocer también de aquellas causas que le estaban reservadas al Rey no sólo por la materia (casos de corte) sino también por la condición y naturaleza de las personas.

Sin embargo la poca popularidad que los Adelantados y Merinos y, sobre todo, la emergencia de la Audiencia como el Tribunal de apelación por antonomasia desde el último tercio del siglo XIV debió afectar, sin duda, al carácter de jueces de apelación de los alcaldes de Adelantamiento y Merindad<sup>(366)</sup> a quienes vemos a principios del siglo XV convertidos en un tribunal territorial de primera instancia<sup>(367)</sup> que va recorriendo su circunscripción entrometiéndose en la jurisdicción civil y criminal de las villas y ciudades.<sup>(368)</sup>

Ha sido muy poca la documentación que hemos encontrado en torno a la actuación de estos alcaldes al igual que desconocemos las ordenanzas que diera Enrique IV en las que se daba --

(366) GARCIA-GALLO: Alcaldes Mayores... p. 708.

(367) Véase la carta ejecutoria dictada por la Audiencia en 1430 confirmando la sentencia dada por Ruy Vazquez, juez del Adelantado Mayor Diego Sarmiento, en favor del Monasterio de San Clodio en Ribero de Aña sobre la posesión de unas granjas y un casal (DURO PEÑA: Catálogo de documentos reales de la Catedral de Orense... doc. 406, p. 120)

(368) Cortes de Ocaña 1422 (CLC. III, 21. p. 49.

"orden e regla" y la forma en que debían juzgar y ejercer su jurisdicción los alcaldes de adelantamiento, pero en la sentencia compromisaria de 1465 se nos da una imagen de los alcaldes de adelantamiento muy significativa. Aparecen configurados como unos jueces itinerantes que conocen de "qualesquier pleitos ceviles e criminales" en los pueblos y lugares, "e si algunas personas ovieren a prender por las tales cabasas ceviles e creminales, que non los puedan llevar presos a otras partes nin los puedan sacar de sus logares e pueblos, mas que los dejen allí en buena guarda e a buen recabdo en la prisión que el caso requiere, é allí se conosca de sus causas e negocios como dicho es: e esto se entienda en los crimenes cometidos dentro de los dichos logares del dicho adelantamiento e en los casos ceviles que allí acaescieren"<sup>(369)</sup>. Igualmente los alcaldes tienen jurisdicción sobre los "crimenes e delitos" que hayan sido cometidos "en los caminos reales e en los yermos o en los logares despoblados inclusos en el dicho adelantamiento", pero en tal caso, los dichos alcaldes o sus lugartenientes deben conocer tales causas "en los logares poblados del dicho adelantamiento en los que fueren más cercanos del lugar o logares donde se cometieran los dichos maleficios".<sup>(370)</sup>

Se prohibía a los dichos alcaldes que no proceden de oficio ni a petición del promotor de la justicia en causa civil o criminal, pudiéndolo hacer solamente "a petición de la parte a quien

---

(369) Col. Dipl. Enrique IV. Sentencia compromisaria 1465.  
doc. 109, cap. 12o. p. 441.

(370) Col. Dipl. Enrique IV. Sentencia compromisaria 1465, doc. 109, cap. 12o. p. 441.



tocare el dicho negocio; pero si fuera sobre caso de muerte o de ferida o de otros delitos, que puedan proceder a petición o querrela de los parientes o conjuntos a quien de derecho pertenesciere acusar o querellar el tal caso o casos, salvo si el caso o casos fueren de estrageros o de personas que non tengan parientes que acusen o querellen por ellos, que en tal caso los dichos alcaldes o sus logares tenientes puedan proceder de oficio o por querella del promotor de la justicia".<sup>(371)</sup>

Ante los "darnos e cohechos e tiranias" que los procuradores denuncian a los Reyes Católicos en la Cortes de Madrigal de 1476 por el incumplimiento de las Ordenanzas ordenadas por Enrique IV, Isabel y Fernando deciden delimitar la competencia de los alcaldes de adelantamiento a los pleitos civiles y criminales que se hubieran producido en el lugar en donde ellos estuvieran y una legua alrededor, sin que más allá de dicha legua pudieran conocer de pleito alguno ni ser obedecidos ni cumplidos sus mandamientos<sup>(372)</sup>, siendo ampliado este rastro a cinco leguas, ya en la edad Moderna.<sup>(373)</sup>

---

(371) Col. Dipl. Enrique IV. Sentencia compromisaria 1465, doc. 109, cap. 120. p. 441.

(372) Cortes de Madrigal 1476 (CLC. IV, 17, pgs. 76-7)

(373) Cortes de Segovia 1532 (CLC. IV, 68, p. 558) y Cortes de Madrid 1534 (CLC. IV, 44, p. 594).

C. JUSTICIA MAYOR Y ALCALDES MAYORES DEL REINO DE GALICIA

La anarquía y desgobierno imperante por el que atraviesa el Reino de Galicia en el último cuarto del siglo XV, obliga a los Reyes Católicos, todavía inmersos en la contienda civil a tomar duras medidas encaminadas a la pacificación del Reino<sup>(374)</sup>. En 1475 y 1476 enviaban respectivamente a Enrique Enriquez y a Pedro de Villandrando con estos fines<sup>(375)</sup>. y dos años más tarde, en 1478, los Reyes designaban al licenciado Juan de Alcalá, miembro del Consejo Real, "para proveer en las cosas de la nuestra justicia e en el buen regimiento e governacion" junto a Pedro de Villandrando<sup>(376)</sup>. Meses después, los Reyes facultan al licenciado Juan de Alcalá para que administre justicia en el Reino de Galicia mientras se halle ausente el gobernador Pedro de Villandrando<sup>(377)</sup>. No obstante, las medidas son insuficientes y los Reyes en 1480 nombran como justicia mayor del Reino Galicia a don Fernando de Acuña, miembro del Consejo Real, quien iba asistido del letrado Garci López de Chincilla, oidor de la Audiencia de Valladolid y miembro también del Consejo Real<sup>(378)</sup>, dándose al primero el título oficioso de gobernador y considerándosele en Galicia como un "visorrey".<sup>(379)</sup>

(374) Sobre la Justicia Mayor y los Alcaldes Mayores de Galicia véase A. GARCIA-GALLO: Alcaldes Mayores y Corregidores ... p. 712 y Las Audiencias en Indias p. 371-2 y B. GONZALEZ ALONSO: Gobernación y gobernadores... pgs. 69-72.

(375) Véase al respecto G. GONZALEZ ALONSO: Gobernación y Gobernadores, pgs. 64-6.

(376) Véase el nombramiento en GONZALEZ ALONSO: Gobernación... pgs. 168-9.

(377) Véase también la carta en GONZALEZ ALONSO: Gobernación... pgs. 170-1.

Fernando de Acuña y Garci López de Chincilla tenía encomendado ir al Reino de Galicia a sus ciudades, villas y lugares para que usara como "nuestras Justicias" y ejercieran ambos en todo "la justicia, e jurisdicción civil e criminal, oyendo y conociendo donde quiera que estuvieredes, con cinco leguas en derredor de qualesquier causas civiles, y criminales en primera instancia, quier las tales causas esten pendientes ante los juezes ordinarios, quier no, é podáis oír, e conocer dellas en qualquier estado que esten, y las cometed a quien entendieredes, ó las dexareis, e remitireis a los juezes ordinarios, quando, e donde os pareciere, e vosotros vieredes que cumple". (380)

Se trataba, pues, de un auténtico tribunal extraordinario que podía intervenir en cualquier tipo de causa en la fase del proceso en que se encontrara y pudiéndolo resolver, delegar en juez comisario o remitirlo de nuevo a la jurisdicción ordinaria cuando lo estimara oportuno. Tenían, además, un carácter eminentemente territorial circunscrito al Reino de Galicia, incluidas sus ciudades y villas y su presencia suspendía todo tipo de jurisdicción en un radio de cinco leguas.

---

(378) Véase la Real Provisión de 3 de agosto de 1480 en las Ordenanzas de la Real Audiencia del Reyno de Galicia, La Coruña 1679, pgs. 84-88 y en VEDIA: Historia y descripción de la ciudad de la Coruña, La Coruña 1845, reimpr. 1972 apend. 13).

(379) Véase al respecto GARCIA-GALLO: Los orígenes de la Administración territorial en Indias, ya citado, pgs. 600-1712.

(380) Real Provisión de 3 de agosto de 1480 en Ordenanzas de la Real Audiencia de Galicia, p. 85.

Este tribunal extraordinario compuesto por Fernando de Acuña y el licenciado Garci López estaba también facultado para conocer los pleitos civiles y criminales en grado de apelación dentro del dicho radio de la cinco leguas y fuera dellas del cualquier parte del Reino. Los Reyes, les facultaron además a conocer "fuera de las dichas cinco leguas en los casos de Corte, e en eotod los otros que Nos ordinariamente, según leyes de nuestros Reynos -dicen los Reyes- podemos conocer".<sup>(381)</sup> fallando por derecho "conociendo de las dichas causas, breve y su mariamente, sin estrepitu, ni figura de juyzio".<sup>(382)</sup>

La actuación Fernando de Acuña y su "alcalde mayor"<sup>(383)</sup> Garci López de Chincilla se prolongó durante tres años y fué tan eficaz como temida culminando, entre otras, con la ejecución del mariscal Pedro Pardo de Cela<sup>(384)</sup> a finales de 1483. Quizás la poca popularidad alcanzada por sus drásticas medidas fué lo que llevó a los Reyes a sustituir a Fernando y Acuña y a Garci López por don Diego López de Haro y el doctor Sancho Garcia de Espinal al año siguiente.

La novedad más destacable la encontramos en 1486 cuando los Reyes disponen nombrar dos nuevos alcaldes mayores, el doctor Ayllón e el licenciado Gonçalo Fernandez de Rohenes "quienes

---

(381) Real Provisión de 3 de agosto de 1480 en Ordenanzas de la Real Audiencia de Galicia, p. 85.

(382) Sobre la naturaleza de los oficios de Fernando de Acuña y Garci López de Chincilla véase GONZALEZ ALONSO: Gobernación... pgs. 72-4.

(383) Así lo denomina la Reina en la carta por la que se extiende la jurisdicción de este tribunal al Bierzo y Valcárcel (GONZALEZ ALONSO: Gobernación... doc. 5, pgs. 172-3).

(384) GONZALEZ ALONSO: Gobernación... p. 74.

se sumarán al ya citado Sancho García de Espinar<sup>(385)</sup> para que "continuo estoviesen en aquel Reyno e toviesen audiencia de justicia e la executasen en las otras cosas que al bien comun de todos los moradores de la tierra compliesen".<sup>(386)</sup>

A partir de 1488 se suceden en las alcaldías mayores varios personajes y no siempre en número de tres<sup>(387)</sup> hasta que finalmente, en 1494, los Reyes dictan las Ordenanzas de los alcaldes mayores del Reino de Galicia<sup>(388)</sup>. De esta forma quedaba convertido en ordinario el tribunal que con carácter excepcional se instaurara en 1480.

Los tres alcaldes mayores, si bien en las Ordenanzas sólo se citan dos pues el tercero se hallaba todavía sin nombrar, "conjuntamente en uno con el dicho nuestro gouernador, o con su lugarteniente, puedan conocer e conoscan en grado de apelación agravio o nulidad de todas las causas civiles y criminales que ante ellos vinieren de qualquier sentencias o mandamientos que ayan dado y pronunciado qualesquier otros alcaldes e juezes ordinarios de todo el dicho reyno de galizia o qualquier dellos de

---

(385) GARCIA-GALLO: Alcaldes Mayores... p. 712 y Las Audiencias en Indias, p. 371 y nota 123; GONZALEZ ALONSO: Gobernación... p. 76, quienes corrigen el dato de PULGAR (Crónica de los Reyes Católicos, 3a. parte, cap. 66, p. 443) en la que dice que "dexaron en él (el Reino de Galicia) quatro Doctores del su Consejo".

(386) PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, año 1486, cap. 66, p. 443.

(387) GONZALEZ ALONSO: Gobernación... p. 76.

(388) Publicadas en Libro de Bulas y Pragmáticas, fols. 96 y ss. El dato de su promulgación lo recogió SANTA CRUZ (Crónica de los Reyes Católicos, año 1494, cap. 26, p. 130-1) quien resume su contenido.

que segun derecho e leyes de nuestros reynos ouiere lugar apelación; e las oyr e librar e determinar en el dicho grado segund que fallaren por justicia"<sup>(389)</sup>. Del fallo de los alcaldes mayores del Reino de Galicia, cabía no obstante, apelación para ante los oidores de la Audiencia de Valladolid "saluo si la causa principal fuere de diez mill maravedis o de ayuso, ca en tal caso queremos e mandamos que no aya apelación dellos mas que aya suplicación para ante ellos mismos, e que en grado se suplicacion ellos todos tres o los dos dellos con el dicho gouernador o su teniente conozcan e determinen la causa; e que de la sentencia que enel dicho grado sobre esto dieren no aya mas apelacion ni suplicación: e que sea executada e trayda a deuido effeto".<sup>(390)</sup>

Las Ordenanzas disponían igualmente que los alcaldes mayores junto con el gobernador, o su lugarteniente, podían conocer en primera instancia en el lugar donde estuvieren en un radio de cinco leguas, así como en todo el Reino de Galicia, "los casos de corte de que los nuestros oydores de la nuestra audiencia podrian conocer segund la leyes e ordenandas de nuestros reynos; e si las partes o qualquier dellas se sintiere agraviados de sus mandamientos o sentencias, que puedan dellos apelar e ellos les otorguen la apelación enel caso que ouiere lugar e derecho para ante los dichos oydores dela nuestra audiencia saluo si fuere el pleyto dela suma de los dichos oydores dela nuestra audiencia saluo si fuere el pleyto dela suma delos dichos diez mill maravedis o dende ayuso como dicho es".<sup>(391)</sup>

---

(389) Bulas y Pragmáticas, fol. 97v.

(390) Bulas y Pragmáticas, fol. 97v.

(391) Bulas y Pragmáticas, fol. 97v.

Sin embargo en aquellas sentencias o mandamientos de los alcaldes mayores con el dicho gobernador sobre causas criminales que infirieren "muerte o mutilación de miembro o destierro perpetuo o de diez año o dende arriba", podía haber apelación "para ante los nuestros alcaldes de la carcel dela nuestra corte e chancelleria", pero de las otras sentencias o mandamientos "para prander e desterrar por menos o en quanto su voluntad fuere e otras penas de destierro o de menos de diez años o de açotes o traer o de poner ala verguença, que no aya apelación delos dichos gouernador e alcaldes amyores; saluo suplicación para ant ellos mismos" y de ésta sentencia ya no cabía ni suplicación ni apelación posible. (392)

El tribunal no había perdido su carácter de itinerante por el Reino con lo que se dispone en las Ordenanzas que tiene competencia territorial sobre todo el Reino de Galicia incluídas ciudades, villas y lugares; deben hacer audiencia todos los días, salvo "fiestas de guardar", durante tres horas por las mañanas, y por las tardes, sólo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante dos horas, imponiéndoseles la obligación de visitar los sábados por la tarde la cárcel, ya sea la suya o la de la ciudad o villa en la que estuvieren. (393)

Este tribunal del gobernador y los alcaldes mayores del

---

(392) Bulas y Pragmáticas, fol. 97v.

(393) Bulas y Pragmáticas, fol. 98v.

Reino de Galicia, como bien se puede ver, no tiene nada que ver con la Audiencia Real, ni por su naturaleza, ni por su composición ni por sus funciones, como ya bien destacaba el profesor GARCIA-GALLO<sup>(394)</sup>, sino que se trata más bien de un tribunal real territorial que nos recuerda al tribunal del Adelantado más que a la Audiencia Real.

---

(394) Las Audiencias en Indias, p. 371.



### CONCLUSIONES

Muchos y muy profundos fueron los cambios que a partir de la segunda mitad del siglo XIII se operaron en el Occidente europeo en el campo de las ideas políticas y del Derecho. En este aspecto, la Baja Edad Media supone en cierta medida una ruptura con gran parte de la tradición ideológica y jurídica del mundo altomedieval. Sin embargo, el tránsito de uno a otro período no supuso ni mucho menos una censura insalvable, sino - que, por el contrario, mientras muchos conceptos estuvieron sometidos a continua revisión, otros permanecieron intactos e incluso adquirieron su plena consolidación en los siglos bajomedievales.

Todas estas transformaciones afectaron de un modo muy directo a la configuración del poder real que nos presentará al Rey no como un simple rector de la sociedad, sino que ahora aparece constituido como el centro del poder, como cabeza y corazón de un cuerpo constituido por todos los estamentos del Reino que quedan bajo su dirección. Pero quizás la idea altomedieval que se mantuvo con mayor fidelidad durante los siglos - XIII, XIV y XV y que en ningún momento fue puesta en duda - por ninguno de los miembros de la comunidad, fué aquella que concebía al Monarca como el máximo juez del Reino.

Esta concepción del Rey-juez provenía de la misma finalidad del poder real. En este sentido la cristianización de la -

sociedad va a operar de forma decisiva en la transformación de los fundamentos ideológicos que configuraban política y jurídicamente la figura del "Princeps". El ejercicio del poder real se convirtió en un auténtico "ministerium" que suponía la obligación de ejercitar ese poder bajo unos determinados fines éticos y jurídicos, lejos de cualquier arbitrariedad. Dios, único Rey, había depositado en la persona del Príncipe mediante su "gratia" un poder encaminado a la defensa de su Iglesia y de la Fé por una parte, y por otra a la consecución y mantenimiento de la justicia.

Es este último aspecto el que hace aparecer al Rey durante los siglos altomedievales como un auténtico juez y rector de la comunidad. La superioridad del Príncipe radicaba precisamente en esta función protectora de su Reino que le había sido encomendada por Dios para la consecución de dichos fines. El Rey se había convertido en un auténtico vicario de Dios para la administración de su justicia y para la restauración de la "Pax Dei".

Pero desde finales del siglo XII, y sobre todo ya en el XIII, una serie de factores de muy diversa índole y procedencia afectaron de forma decisiva a la transformación y consolidación del poder real. De todos ellos, posiblemente el que más contribuyó a esta transformación, impulso y consolidación del poder regio fue la revalorización de los estudios del antiguo Derecho Romano, que aportaba al pensamiento de la Edad Media la concepción de una autoridad jurídica y política única en la que radicaba todo el poder, en contraposición a la realidad vivida en la que las relaciones de vínculos personales habían desvirtuado la propia finalidad del poder real y su superioridad.

Configurar el poder real tal como aparecía descrito en los textos justinianos supuso un largo y penoso proceso que tuvo alternativas diferentes en cada uno de los Reinos del Occidente europeo, pero en líneas generales vimos como la consolidación y afianzamiento del poder real se producía en una triple dirección. En primer lugar logrando su independencia, en el ámbito temporal, respecto al poder pontificio; en segundo lugar, equiparando el poder real al poder imperial, quedando así libre de la superioridad teórica que el emperador ejercía sobre el resto de los reyes; y, finalmente, tratando de imponer su supremacía perdida frente a las restantes fuerzas del Reino.

Mientras la independencia con respecto al poder pontificio y al poder imperial fué una tarea relativamente fácil de conseguir dado que, en definitiva, para los reinos hispánicos fué una pugna fundamentalmente ideológica, no lo fué, en cambio, conseguir su superioridad frente al Reino, reaccio, lógicamente, a las nuevas ideas autocráticas del Derecho Romano.

El primer y gran propulsor de estas ideas en León y Castilla fué Alfonso X quien se lanza abiertamente a la transformación del Derecho y la administración del Reino a la luz de los nuevos principios procedentes del Derecho Romano-canónico, aunque ciertamente muy pronto vió truncado sus deseos.

Para llevar a cabo la consolidación y supremacía de su poder, los reyes castellanos son plenamente conscientes de que el principal medio que tienen a su alcance para hacer efectivo ese

poder es el de hacer valer aquella facultad de juez que en ningun momento se ha puesto en duda por los distintos estamentos del Reino y que con frecuencia es reclamada por los propios miembros de la comunidad ante el abandono por parte de los reyes de administrar ellos personalmente justicia en audiencia pública.

Para restablecer su "mayoría de justicia", menguada en gran parte por la numerosas concesiones que desde la Alta Edad Media han ido limitando su ejercicio, los reyes se han de rodear primeramente de de toda una organización judicial que abarque todos y cada uno de los ámbitos del Reino -central, territorial y local- para hacer de este modo efectiva su intervención. De esta forma se irán creando en la Corte oficiales judiciales con sus campos competenciales cada vez más delimitados y especializados (alcaldes de Corte, alcaldes de alzada, alcaldes del rastro, alcaldes de fijosdalgo, etc). Al mismo tiempo se proyecta la jurisdicción real creando en el ámbito territorial una instancia intermedia entre la Corte y la justicia estrictamente local. Nacen así los Adelantados Mayores, oficiales muy discutidos que acabarán por declinar sus competencias judiciales en alcaldes reales que les acompañarán en sus desplazamientos ante las quejas ciudadanas y los recelos de los propios monarcas. Finalmente, es en el ámbito local en donde mayores obstáculos encuentra el poder jurisdiccional del Rey en hacer valer su mayoría, pero primero mediante "jueces de salario" y finalmente a través de los corregidores, el saldo final será favorable también para los reyes castellanos-leoneses quienes verán cumplidas sus aspiraciones.

Este proceso, aparentemente claro y sencillo tal como lo

acabamos de sintetizar, fué el producto de más de dos siglos y medio de ensayos, frustrados unas veces, con éxitos otras, de búsqueda de soluciones, de tensiones con las distintas fuerzas del Reino y sometido, en ocasiones, indefectiblemente a las vicisitudes políticas del momento. La labor iniciada por Alfonso X no llegará a tener su plena consecución hasta el reinado de los Reyes Católicos; sólo entonces, estructurada sólida y definitivamente la administración de justicia, pudieron consolidarse los viejos principios del Derecho Romano-canónico, sustentadores de la nueva forma de Estado que se impondrá en la Modernidad.

## RELACION BIBLIOGRAFICA

### A. FUENTES MANUSCRITAS

- 1.- Archivo General de Simancas: Registro General del Sello
- 2.- Archivo Histórico Nacional: Sección Clero  
                                           Sección Códices  
                                           Sección Ordenes Militares  
                                           Sección Osuna  
                                           Sección Sellos
- 3.- Biblioteca de la Real Academia de la Historia: Colección Salazar  
                                                                   Colección Morales
- 4.- Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz:Manuscritos
- 5.- Biblioteca Nacional:Colección Burriel  
                                           Sección Manuscritos

### B. FUENTES IMPRESAS

#### 1.- Fuentes legales

- Collectio Canonum.Ed.V.W. von Glanvel,Paderborn,1905
- Constituciones Clementis Papae V, Roma 1583
- Corpus Iuris Canonici. Ed. Aemilius Friedberg,2 vols. . Reimpr.Aalen. 1959
- Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla.Publicadas por la R.A.H.  
 Madrid 1861-1903
- Cortes de Sevilla de 1252.B.N. Ms.11.261
- Decretales Gregori Papae IX. Ed.Friedberg Corpus Iuris Canonici.
- Decretum Magistri Gratiani.Ed.Friedberg,Corpus Iuris Canonici.
- Espéculo. Ed.Códigos Españoles concordados y anotados,t.VI,Madrid 1849
- Fuero Real de España.Ed.Códigos españoles,t.I,Madrid 1872
- Fuero Viejo de Castilla.Ed.Códigos españoles,t.I,Madrid 1872
- Leyes del Estilo. Ed.Códigos Españoles,Madrid 1872
- Leyes Nuevas dadas por el Rey Don Alfonso X el Sabio.Ed.Códigos españoles,t.VI,Madrid 1849
- Leyes para los Adelantados Mayores dadas por el Rey Don Alfonso el Sabio  
 Ed.Códigos Españoles,t.VI,Madrid 1849

- Leyes para la brevedad de los pleitos. Ed. facsimil Granada 1973
- Liber Sextus Decretalium. Ed. Friedberg, Corpus Iuris Canonici.
- Libro de los Fueros de Castilla. Ed. Galo Sánchez, Barcelona 1928
- Nueva Recopilación de Leyes y autos acordados. Madrid 1775
- Ordenamiento de Alcalá de 1348. Ed. Códigos españoles, t. I, Madrid 1872
- Ordenamiento de Villareal. Ed. R. Gibert en A. H. D. E. 25 (1955).
- Ordenamiento sobre Administración de Justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360. Ed. E. Saez. en A. H. D. E. 17 (1946)
- Ordenanzas Reales de Castilla. Ed. Códigos españoles, t. VI, Madrid 1849
- RAMIREZ, Juan: Libro en que están compiladas algunas bulas de nuestro muy Santo Padre concedidas en favor de sus Altezas y todas las Pragmáticas que están fechas para la buena gobernación del Reino. Sevilla 1503. Ed. Facsimil A. García-Gallo y M. A. Pérez de la Canal, Madrid 1973.
- Recopilación de la Cédulas y Provisiones, visitas y Ordenanzas, que los Señores Reyes Católicos de memoria Gloriosa y su Magestad el Emperador y Rey Don Carlos, su nieto, nuestro Señor, an embido y an prveydo para esta su Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Valladolid 1566
- Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia del Reyno de Galicia La Coruña 1679
- Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio. Ed. Códigos españoles y ed. de la Real Academia de la Historia.

## 2.- Repertorios legislativos.

- CELSO, Hugo de: Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de Castilla, abreviadas y reduzidas en forma de repertorio decisivo. Medina del Campo, 1553.
- CORNEJO, Andrés: Diccionario histórico y forense del derecho real de España. Madrid 1779.
- DIAZ DE MONTALVO, Alonso: Solemne Repertorium seu secunda compilatio legum Montalvi, seu glosa super leges ordinatum Regni imperium in lucem aeditum subtiliterque Enendatum et in pluribus copiosae Additum. 1549?
- ESCRICHE, Joaquín: Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid 1847
- PEREZ Y LOPEZ, Antonio Javier: Teatro de la Legislación universal de España e Indias por orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas. Madrid 1794
- SOLER, Jaime: Repertorio de todas las leyes de Castilla. Toledo 1529.

## 3.- Literatura Jurídica.

ARIAS DE BALBOA, V.: Glosas al Fuero Real. Ed. J. Cerdá en AHDE 22 (1951-1952), pgs. 731-1140.

ASINIUS. I. B.: De executionibus tractatus. Venecia 1589

----- Practica Civilis seu processus iudicarii ad statutum stylumque Florentinum et ius municipale totius Europae de modo procedendi in Civilibus directi conscriptae. S. l. 1629

AZEVEDO, A.: Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regiae constitutione Lyon 1737

AZZO: Summa Codicis. Ed. Lugduni 1564

BALDO DE UBALDIS: Super Feudis. Ed. Lugduni 1542

BARTOLO DE SASOFERRATO: Commentaria in primam Digesti novi partem. Ed. Lugduni 1552

BASIANO, Juan: Summa in libro Novellarum. Ed. en Opera Azzo.

BUCHARDO DE WORMS.: Decretum. Ed. MIGNE: Patrología Latina, vol. 14

BULGARO: Dissensiones Dominorum o "Codicis Chisianus". Ed. Leipzig 1834

CINO DE PISTOIA: Commentaria super aureo volumine Codicis. Venecia 14

CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Política para corregidores u señores de vasallos en tiempos de paz y de guerra. Madrid 1795. Reimpr. Madrid. 19

COVARRUBIAS Y LEYVA, D.: Opera Omnia. Amberes 1610

DURANDI, D. G.: Speculum Iuris. Ed. Francfort 1592

FERRARI, G.: Practica celeberrima quidem, et perfectissima omnium, et iurisdicentibus causarumque patronis utilis imprimis ac necessaria. Taurini 1587

HOTHEUSIS: In secundum decretalium librum commentaria. Turin 1587

HUGOLINO: Summa in Digesto. Ed. Opera Azzo. Basel 1563

----- Dissensiones Dominorum. Ed. Haenel. Leipzig 1834

IRNERIO: Glosa al Digesto. Turin 1896

----- De Aequitate. Berlin 1894

----- Summa Codicis. Berlin 1894

IVO DE CHARTRES: Decretum. Ed. Migne: Patrología Latina, vol. 161

MARANTA, R.: Aurea Praxis Iure consultorum facile principis: vulgo speculum Aureum, et lumen Advocatorum inscripta. Lugduni 1593

----- De ordine iudiciorum. Lugduni 1550

MARTINEZ ZAMORA: Margarita de los pleitos. Ed. J. Cerdá en AHDE 20 (19

----- Suma Aurea de los Pleitos. Ms. Biblioteca Colombina



MENOCHIO: J., .: De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis centuriae sex  
Quibus tota unis pais, quae a iudicium arbitrarii et potestate pendent. Lugduni 1606.

NUÑEZ AVENDAÑO, P.: De exenquendis mandatis regnum Hispaniae. Salamanca 1564.

ODOFREDO: Commentaria in Codicem. Lugduni 1551

Peregrina, a compilatore glossarum dicta Bonifacia. 1498

PLACENTINO: Summa Institutionum Ed. Corpus glossatorum Iuris Civilis, v. I. Turin 1966-73

RAIMUNDO DE PEÑAFORT: Summa Iuris. Ed. Rius Serra. Barcelona 1945

ROGERIO: Summa Codicis. Ed. Biblioteca Iuridica Medii Aevi (BIMAE). Ed. Gaudentius: Scripta Anecdota Glossatorum, vol. I. Bolonia 1913

TANCREDO: Ordo Iudicarium. Ed. Bergmann. Goettingue 1842.

#### 4.- Literatura histórico-política.

BERNALDEZ, A.: Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabella escrita por el Canciller Andrés Bernaldez, cura que fué de la villa de los Palacios. Ed. BAE. Crónica de los Reyes de Castilla v. III, nº 70. Madrid 1953

Castigos y documentos del Rey don Sancho. Ed. BAE, n. 51, Madrid 1952

CASTROGERIZ, Juan de: Glosa castellana al Regimiento de Príncipes. Ed. de Juan Beneyto, Madrid 1947.

Cronica del Rey Alfonso X. Ed. BAE. t. 66 Crónicas de los Reyes de Castilla Madrid 1953.

- - - - del Rey Don Sancho el Bravo. Ed. BAE. Crónica de los Reyes de Castilla I, Madrid 1953, vol. 66

- - - - del Rey Don Fernando IV. Ed. BAE. Crónica de los Reyes de Castilla Madrid 1953, vol. 66

- - - - del Rey Don Alfonso el Onceno. Ed. BAE. Crónica de los Reyes de Castilla I, Madrid 1953, vol. 66

- - - - de 1344 o Segunda Crónica General. B. N. Ms. 10.814-15

- - - - atribuida al Infante Don Juan Manuel. Ed. España Sagrada. vol. 2

- - - - del Condestable Don Alvaro de Luna. Ed. Carriazo, Crónicas 2, Madrid

- - - - Incompleta de los Reyes Católicos. Ed. Julio Puyol. Madrid 1934

CARRILLO HUETE, P.: Crónica del Halconero de Juan II. Ed. Carriazo, Crónicas 8, Madrid 1946.

EGIDIO COLONNA: De Regimine Principum. Roma 1556.

- ENRIQUEZ DEL CASTILLO: Crónica del Rey Don Enrique IV. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla, III, Madrid 1953, vol. 70
- FERNANDEZ PALENCIA, A.: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, e vols. Madrid 1975,
- GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Anales Breves de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. Ed. en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España. t. 18, pgs. 227-419 y en BAE. Crónica de los Reyes de Castilla III, Madrid 1953, vol. 70, apend. 2
- Crónica y hechos acontecidos en el reinado del ilustrísimo y muy poderoso rey don Enrique IV de este nombre, que reinó en Castilla y León. Ed. Torres Fontes. Murcia 1946
- GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Crónica de Juan II de Castilla (1420-1434). Ed. en Colección de Documentos Inéditos. t. 99 y 100.
- GONZALEZ DAVILA: Historia de la vida y hechos del Rey Don Enrique III Madrid 1683
- INOCENCIO III: Sermonis de diversis. Ed. Migne: Patrología Latina, vol. 217
- JIMENEZ DE RADA: Cuarta Crónica General. Ed. Colec. Documentos Inéditos. vols. 105-106
- JUAN MANUEL, Infante don.: Libro de los castigos o consejos... et es llamado por otro nombre Libro Infinito. Ed. BAE. t. 51
- Libro de los Estados. Ed. BAE. t. 51, y más reciente ed. de José Castro y Calvo, Barcelona 1968
- JUAN DE PARIS: Tractatus de Potestate Regia et Papali. Argentoratum 1618
- Libro de los Cien Capítulos. Ed. Agapito Rey. Bloomington. Indiana. 1968
- LOPEZ DE AYALA, P.: Crónica de Pedro I. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla, I, Madrid 1953, vol. 66
- Crónica del Rey Don Enrique II de Castilla. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla II, Madrid 1953, vol. 68
- Crónica del Rey don Juan primero de Castilla e de León. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla II. Madrid 1953, vol. 68
- Crónica del Rey Don Enrique III de Castilla e de León. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla II. Madrid 1953, vol. 68
- LOPE DE BARRIENTOS: Refundición de la Crónica del Halconero. Ed. Carriaz en Crónicas Españolas. Madrid 1945.
- LUCAS DE TUY: Crónica de España. ed. J. Puyol. Madrid 1926
- PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla III, Madrid 1953, vol. 70
- PELAYO, Alvaro.: Speculum regnum. Ed. portuguesa Speculum regnum-Espelho dos reis. Texto latino y traduc. portuguesa. Lisboa 1954.

- PEREZ DE GUZMAN, F.: Crónica del Rey don Juan II. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla II, Madrid 1953, vol. 68.
- PULGAR, Hernando del: Crónica de los Reyes Católicos. Ed. Mata Carriazo e Crónicas Españolas vols. V y VI, Madrid 1943. También en Crónica de los Reyes de Castilla, ed. BAE, vol. 70.
- SALISBURY, Juan de: Polycraticus. Ed. Webb, Oxford. 1909.
- SAN AGUSTIN: De civitate Dei. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. n. 1.
- SAN ISIDORO DE SEVILLA: Sententiae. Ed. Migne: Patrología Latina. vol. 83.
- SANTA CRUZ, Alonso de: Crónica de los Reyes Católicos. Ed. Mata Carriazo, en Crónicas españolas t. I, Sevilla 1953.
- Tratado de Nobleza y Lealtad en las Memorias para la vida del Santo Rey Don Fernando ed. M. de Manuel.
- VALERA, Diego de: Memorial de diversas hazañas. Ed. BAE. Crónicas de los Reyes de Castilla III, Madrid 1953, vol. 70.
- VITERBO, Juan de: De Regimine Civitatum en Biblioteca Juridica Medii Aevi (BIMAE). Bolonia 1892, 1901, 1914.

##### 5.- Colecciones documentales.

- AGAPITO Y REVILLA, J.: Los privilegios de Valladolid. Copias y extractos de privilegios y mercedes reales concedidos a la ciudad de Valladolid. Boletín de la Sociedad castellana de Excursionistas. II, 1905-6.
- Documentos reales del Monasterio de Santa Clara de Valladolid. B.R.A.H. 83, 85, y 87. (1923 -1924)
- AJO Y SAINZ DE ZUÑIGA, C. Avila I, Fuentes y Archivos. Madrid 1962.
- AJO GONZALEZ DE REPARIEGOS, C.: Avila II. Mas archivos y fuentes inéditas. Madrid 1969.
- ALAMO, Juan del: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284) Madrid 1950, 2 vols.
- ALCOCER MARTIN, M.: Archivo General de Simancas, Colección de documentos inéditos para la Historia de Valladolid. Valladolid 1925.
- ALVAREZ GENDIN, S.: Dos documentos interesantes: I. Delas cortes del Reino de León. II. De las Hermandades de León y Castilla. Actas del I Symposium de Historia de la Administración. Alcalá de Henares 1965.
- ARRIBAS ARRANZ, F.: Sellos de placa y plomo de las Cancillerías regias castellanas. Valladolid 1941.
- Un formulario documental del siglo XV de la Cancillería Real castellana. Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y Diplomática. IV. Valladolid 1964.

- BARRAU DIHIGO, :Chartes royales leonaises. en Revue Hispanique 10(1903).
- BENAVIDES ,A. :Memorias de Fernando IV de Castilla.t.II. Madrid 1860
- BERWICK Y DE ALBA,Duquesa de :Documentos escogidos de la Casa de Alba. Madrid 1860
- CALVO,A.: San Pedro de Eslanza. Madrid 1957
- Colección diplomática de Carmona.Transcripción y notas por José Hernandez Díaz, Antonio Sanchez Corbacho y Francisco Collantes de Terán. Sevilla 1941.
- - - - - diplomática de Galicia Histórica. Santiago de Compostela 1901
- - - - - de documentos inéditos para la Historia de Guipuzcoa.San Sebastián 1958
- - - - - de documentos inéditos para la Historia de España. Tomos XIII, XLV,XL y LXXXVIII.Madrid 1848,1849,1862 y 1887
- Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid,publicados bajo la dirección de Angel Pérez Chozas,por A.Millares Carlo y Eulogio Varela Hervias.Segunda Serie. t.I,Madrid 1932
- - - - - Documentos escogidos de la Casa de Alba. Madrid 1891
- - - - - Documentos,Indice de los,procedentes de monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el Archivo de la Real Academia de la Historia,publicados por orden de la misma.Madrid 1861
- - - - - De la época de Alfonso X el Sabio,en Memorial Histórico Español t.I y II, Madrid 1860
- - - - - De la época de Sancho IV el Bravo. en Memorial Histórico Español,t.III, Madrid 1860.
- DOMINGO PALACIOS,T.:Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid. Madrid 1888,2 vols. Primera serie.
- DURO PEÑA,E.:Catálogo de documentos reales del Archivo de la Catedral de Orense(844-1520) en Miscelánea de Textos Medievales 1(1972)
- - - - - Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Orense.Orense 1973
- - - - - El Monasterio de San Pedro de las Rocas y su colección documental.Orense 1972.
- ESCAGEDO Y SALMON,M.:Colección diplomática,privilegios,escrituras y bulas de la Santa Iglesia Catedral de Santillana.Santña 1927.
- ESCALONA,R.:Historia del Real Monasterio de Sahagún.Madrid 1782.
- FERNANDEZ CANTON,J.M.:Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León. León 1978.

- FEROTIN, M.: Recueil des chartes de l'Abaye de Silos. Paris 1897
- FLORIANO, A.: Diplomática española del período Astur. Oviedo 1949
- Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres. Cáceres 1934.
- FLORIANO P.: Colección diplomática del Monasterio de San Vicente de Oviedo. Oviedo 1968.
- GARCIA CHICO, E.: Privilegios de Medina de Rioseco. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid. I (1930), II (1932) y V (1934)
- GARCIA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos de la Catedral de Oviedo. Oviedo 1957
- GONZALEZ, T.: Colección de Privilegios de la Corona de Castilla, t. V y Madrid 1833.
- GONZALEZ PALENCIA, A.: Colección de documentos conquenses. Cuenca 9
- GONZALEZ, J.: Regesta de Fernando II, Madrid 1943
- HINOJOSA, E.: Documentos para la Historia de las Instituciones de León y Castilla, siglos X-XIII. Madrid 1919.
- JAVIERRE MUR, A. L.: Privilegios reales de la Orden de Montesa en la Edad Media. Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional
- JAVIERRE MUR, A. L. y GUTIERREZ ARROYO, C.: Catálogo de los documentos referentes a los conventos de Santiago, Calatrava y Alcántara que se conservan en el Archivo secreto del Consejo de la Ordenes Militares. Madrid 1958.
- LEON TELLO, P.: Inventario del Archivo de los Duques de Frías. Madrid 19
- DE MANUEL RODRIGUEZ, M.: Memorias para la vida del Santo Rey Don Fernando III. Madrid 1800. Reimpresión Barcelona 1974.
- LUCAS ALVAREZ, M.: Libro Becerro del Monasterio de Valbanera. Zaragoza 1950
- MANSILLA REYO, D.: Catálogo documental del Archivo de la Catedral de Burgos (804-1416). Madrid 1971.
- MAÑUECO VILLALOBOS, M.: Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid. Valladolid 1917, 3 vols.
- MARCOS RODRIGUEZ, F.: Catálogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca. Salamanca 1962.

- MARTIN LAZARO, A.: Colección diplomática municipal de la ciudad de Béjar. Madrid 1921
- Documentos para la Historia de Béjar. en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 6(1923)
- MARTINEZ, E.: Colección diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega. Vergara 1931.
- Memorias de Don Enrique IV de Castilla. t. II Contiene la colección diplomática del mismo Rey, compuesta y ordenada por la Real Academia de la Historia. Madrid 1835-1913.
- Memorial Histórico Español. t. I y II, Madrid 1851, y t. III, Madrid 1860
- MENENDEZ PIDAL, R.: Documentos lingüísticos de España. Madrid 1919
- MILLARES CARLO, A.: El Libro de los privilegios de los jurados toledanos. en AHDE. IV(1927), pgs. 457-472
- MINGUEZ FERNANDEZ, J.: Colección diplomática del Monasterio de Sahagún. León 1976.
- MOLINA MOLINA, Angel L. Documentos de Pedro I. en CDHRM. Murcia 1978
- NIETO CUTIERRER, A.: Catálogo del Archivo Municipal de León. León 1927
- PESCADOR DEL HOYO, M.: Archivo Municipal de Zamora. Documentos históricos. Zamora 1948.
- PEREZ LLAMAZARES, J.: Catálogo de Códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León. León 1923
- RODRIGUEZ, R.: Catálogo de documentos del Monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas. León 1949
- RODRIGUEZ LAMA, I.: Colección diplomática Riojana.
- RODRIGUEZ LOPEZ, A.: El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey. Burgos 1907.
- SAEZ SANCHEZ, E.: Colección diplomática de Sepúlveda. Segovia 1956
- SANCHEZ BELDA, L.: Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Madrid 1953.
- SERRANO, L.: Cartulario del Infantado de Covarrubias. Valladolid 1907
- Cartulario de San Pedro de Arlanza. Madrid 1925
- Cartulario del Monasterio de San Vicente de Oviedo. Madrid 1929
- Cartulario de San Millán de la Cogolla. Madrid 1930?
- SUAREZ FERNANDEZ, L.: Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Valladolid. 1964.

TORRES FONTES, Juan.: Privilegios de Fernando IV a Murcia. en AHDE 19194 (1949)

- - - - - Documentos del siglo XIII en Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia (CDHRM). Murcia 1969

- - - - - Documentos de Alfonso X, en CDHRM. Murcia 1963

- - - - - Documentos de Sancho IV, en CDHRM. Murcia 1977

- - - - - Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al reino de Murcia. en CDHRM. 1973

UBIETO ARTETA, A.: Colección diplomática de Riazza (1258-1457). Segovia 1959

- - - - - Colección diplomática de Cuellar. Segovia 1961

VIGIL, C. M.: Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo. Oviedo 1889.

VIGNAU, V.: Índice de los documentos del Monasterio de Sahagún. Madrid 1874

- - - - - Cartulario del Monasterio de Eslonza. Madrid 1885

YEBEN, H. Catálogo del Archivo Catedralicio de Sigüenza con algunos documentos inéditos. Pamplona s.a.

#### 6.- Historias y documentación local.

ALVAREZ LAVIADA, : Chinchón histórico y diplomático hasta finalizar el siglo XV. Estudio crítico y documentado del municipio medieval castellano Madrid 1931

ALVAREZ MARTINEZ, U.: Historia General Civil y eclesiástica de la provincia de Zamora. Madrid 1965.

ALCOCER, P.: Historia o descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Toledo 1554. Reimpr. Madrid 1973.

ANTOLINEZ DE BURGOS, J.: Historia de Valladolid. Valladolid 1887

AREITIO Y MENDIOLA, El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya. Bilbao 1943

BALPARDA, Gregorio de.: Las Hermandades de Vizcaya y su organización provincial. Madrid 1932

BALLESTEROS, A., : Sevilla en el siglo XIII. Madrid 1913

BARRANTES, V.: Extremadura a fines del siglo XV y principios del XVI. Discurso de recepción del Excmo Sr. D. .... en la Real Academia de la Historia 1872

BELLMUNT Y TRAVER, O.: Asturias. Su historia y sus monumentos. Dirigida por Fermín Comellas y Secades y Octavio Bellmunt. Gijón 1895-1900.

BENITO RUANO, E.: Toledo en el siglo XV. Vida Política. Madrid 1961

- BONACHIA HERNANDO, J.A.: El Concejo de Burgos en la Baja Edad Media. (1345-1426). Valladolid 1978
- CAMINO Y ORELLA, J.A.: Historia Civil, Diplomática, Eclesiástica, Antigua y Moderna de la ciudad de San Sebastián. Madrid 1923
- CARANDE, R.: Sevilla, fortaleza y mercado. en AHDE. 2(1925), pgs. 233-401  
 - - - - - El Obispo, el Concejo y los regidores de Palencia(1352-1422). En Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 35(1932), pgs. 249 y ss.
- CAMBRONERO, C.: Cosas de Antaño. El Ayuntamiento de Madrid. En Revista Contemporánea. 107(1900). pgs. 386-411
- CARRIAZO, J. de M.: Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla. Madrid 1957-73. 5 vols.
- CASCALES, F.: Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su Reino. Murcia 1874.
- COLMENARES, D.: Historia de la insigne ciudad de Segovia. Segovia 1643.  
 - - - - - Historia de la ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla. Segovia 1637
- DORADO, BERNARDO.: Compendio histórico de la ciudad de Salamanca. Salamanca 1776.
- ECHEGARAY, C.: Compendio de las Instituciones forales de Guipuzcoa. San Sebastián 1924  
 - - - - - Las Provincias vascongadas a finales de la Edad Media. San Sebastián 1895.
- ESCALONA, R.: Historia del Real Monasterio de Sahagún. Madrid 1782
- FARALDO, J. y ALLRICH, A.: Corregidores y alcaldes de Madrid. Madrid 1906
- ESTEPA DIEZ, Carlos.: Estructura Social de la Ciudad de León (siglos XI-XIII) León 1977
- FERNANDEZ DURO, C.: Memorias Históricas de la ciudad de Zamora. Madrid 1882
- FLORINDO, A.: Grandezas de Eclja. Eclja 1893
- GARCIA CHICO, E.: Los privilegios de Medina de Rioseco. Valladolid s.a.
- GARCIA DE CORTAZAR, ARIZAGA, MARTINEZ OCHOA, RIOS.: Introducción a la Historia Medieval de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya en sus textos. San Sebastián 1979
- GARCIA DE LOS HEROS, M.: Historia de Valmaseda. Bilbao 1926.
- GARCIA SAINZ DE BARANDA, J.: La ciudad de Burgos y su concejo en la Edad Media. Burgos 1967
- GIBERT SANCHEZ DE LA VEGA, R.: El Concejo de Madrid. Madrid 1949.



- GONZALEZ CAMINO, F.: Las Asturias de Santillana en 1404. Santander 1931
- GONZALEZ PALENCIA, J.: Memorias históricas de Cuenca y su Obispado. Madrid 1949
- GONZALEZ HERRERO, M.: Historia Jurídica y Social de Segovia. Segovia 1977
- GUICHOT Y PARODY, J.: Historia del Excmo Ayuntamiento de la muy noble le heróica e invicta ciudad de Sevilla. Sevilla 1896, t. I
- HENAO, G. de.: Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria. . . . . endeezadas principalmente a descubrir las de las tres provincias vascas. Salamanca 1689-1691
- ITURRIZA Y ZABALA, J. R.: Historia General de Vizcaya. Barcelona 1884
- - - - - Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encertaciones. Bilbao 1939
- JIRUENA JURADO, M.: Catálogo de los Obispos de las iglesias catedrales de las diócesis de Jaén y Anales eclesiásticos del Obispado. Madrid 1616
- LABAYRU Y GOICOITIA, E.: Historia General del Señorío de Vizcaya. Bilbao 1895-1903
- LADERO QUESADA, M.: Historia de Sevilla. II. La ciudad Medieval. Sevilla 1976
- - - - - La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer. Rev. Historia, Instituciones, Documentos. 4 (1977)
- LANDAZURI Y ROMATE, J.: Historia de Guipúzcoa. Biblioteca Universitaria Vasca, vols. IV y V. Madrid 1921
- - - - - Historia Civil de la muy noble y muy leal provincia de Alava. Vitoria 1798
- LAYNA SERRANO, F.: Historia de Guadalajara y sus Mendocas. Madrid 1941
- - - - - Historia de la Villa de Atienza. Madrid 1945
- LOPERRAEZ, J.: Descripción histórica del Obispado de Osma. Madrid 1788
- LOPEZ, A.: Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia. Madrid 1977
- LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J.: La tierra de Málaga a fines del siglo XV. Granada 1977
- LOPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa Madre Iglesia de Santiago. Santiago de Compostela 1898-1905.
- LOPEZ MATA, T.: La ciudad y el Castillo de Burgos. Burgos 1950
- LOPEZ PELAEZ, A.: El señorío temporal de los Obispos de Lugo. Coruña 1897

- LLORENTE, J.A.: Noticias históricas de las tres provincias vascongadas. Imprenta Real. vol. I, 1806, vol. II, 1807, Vol. III, 1807, vol. IV, 1808 y vol V 1808;
- MARTIN GAMERO, A.: Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos. Toledo 1862
- Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble y leal e Imperial ciudad de Toledo. Toledo 1858
- MARTIN RIZO, J.P.: Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Cuenca. Madrid 1629
- MESONEROS ROMANOS, R.: El Antiguo Madrid, Madrid 1881
- MINGUELLA Y ARNEDO, T.: Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Madrid 1910. 3 vols.
- MORALES GARCIA-GOYENA, L.: Documentos históricos de Málaga. Granada 1907
- MORENO GUERRA J. Los corregidores de Málaga. Málaga 1932
- NUÑEZ DE CASTRO, A.: Historia eclesiástica y secular de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara. Madrid 1653
- ORTEGA Y GALINDO, J.: Belorado: estudio de una villa en la Edad Media. en Estudios de Deusto, vol. II, 1954, pgs. 141-188
- ORTIZ DE ZUÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Madrid 1796
- PUYOL Y ALONSO, J.: El abandengo de Sahagún. Contribución al estudio del feudalismo en España. Madrid 1915
- RALLON, E.: Historia de Jerez de la Frontera. Jerez 1890-94
- RAMIREZ ARELLANO, R.: Historia de Córdoba. Ciudad Real 1920
- RISCO, M.: Historia de la ciudad y corte de León. Madrid 1792, Reimpr. 1978
- RODRIGUEZ HERRERO, A.: Valmaseda en el siglo XV
- SAGARMINAGA, F.: El gobierno y el régimen foral del Señorío de Vizcaya. Bilbao 1928. 4 vols.
- SANZ ARIZMENDI, M.: Organización social de Sevilla en el reinado de Alfonso XI, Sevilla 1902
- TENORIO CEREZO, N.: Visitas que D. Enrique III hizo a Sevilla en los años de 1396 y 1402 y reformas que implantó en el gobierno de la ciudad. Sevilla 1924
- TORRES FONTES, J.: El concejo murciano en el reinado de Alfonso XI, en AHI 23 (1953)
- El concejo murciano en el reinado de Pedro I en C.H.E 25-26, 195
- VALDEON BARUQUE, J.: Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV: El ejemplo de Murcia. en Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania 3

VEDIA Y GOOSENS, E.: Historia y descripción de la ciudad de la Coruña  
Coruña 1845

VILLAR Y MACIAS, M.: Historia de Salamanca, Salamanca 1887

#### 7.- Bibliografía general.

ALCALA ZAMORA CASTILLO, N.: Instituciones judiciales y procesales del  
Fuero de Cuenca en Revista de la Escuela Nacional de Jurispruden-  
cia. Universidad Autónoma de México. 12(1950).

ALCOCER MARTINEZ, M.: Consejo Real de Castilla en Revista Histórica 1925.

ALONSO, M. L.: La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de los castella-  
nos de Toledo. AHDE. 48(1978)

- - - - - La revisión de la sentencia "según costumbre de Toledo" en AHDE.  
48(1978)

ALVAREZ JUSUE, A.: La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia  
de los Grados. en Archivo Hispalense 19, nº 60(1953), pgs. 17-50

- - - - - La Audiencia de Sevilla, creación de Carlos I. en Anales de la  
Universidad Hispalense XVIII-XIX, nº 11(1957-1958), pgs. 67-87.

ALVAREZ MORALES, A.: Las Hermandades, expresión del movimiento comunita-  
rio en España. Valladolid 1974

ANONIMO: Gobierno Eclesiástico Pacífico. Parte II. Questión II. De la Exce-  
lencia de las Audiencias Reales. ANH. Sec. Codices

- - - - - Historia de los hechos de Don Rodrigo Ponce de León Marqués de  
Cádiz(1433-1488) en Colec. Documentos Inéditos vol. 106, pgs. 14-  
317.

ANTEQUERA, Historia de la legislación española desde nuestros tiempos más  
remotos hasta nuestros días. Madrid 1849

ARRIBAS ARRANZ, F.: Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV.  
en Centenario de la Ley del Notariado, vol. I, Madrid 1964

BALLESTEROS, A.: Itinerario de Alfonso X Madrid 1934

- - - - - Alfonso X. Murcia 1963

- - - - - Historia política, diplomática y militar de Alfonso XI. Academia  
de la Historia. Manuscrito inédito.

BARRAU-DIHIGO, : Recherches sur l'histoire politique du royaume asturien, .  
Tours 1921

- BARRIO Y MIER, Historia del Derecho Español. s.a. 3 vols.
- BENEYTO J., Historia de la Administración española e hispanoamericana. Madrid 1958.
- - - - - La política jurisdiccional y el orden publico de los Reyes Católicos. en Revista de Estudios Políticos 1954
- - - - - La gestación de la magistratura moderna en AHDE 23(1953)
- BERGANZA, F.: Antigüedades de España, Madrid 1719-1721
- BERMEJO CABRERO, J.L.: Idea medieval de Contrafuero en León y Castilla en Revista de Estudios políticos 187(1974), pgs. 299-306
- - - - - En torno a la aplicación de las Partidas. Fragmentos del Espéculo en una sentencia real de 1261. en Hispania 114(1970), pgs. 69 y ss.
- - - - - Mayoría de Justicia y jurisdicciones señoriales en la Baja Edad Media castellana. en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas. Universidad de Santiago 1975, pgs. 207-21
- BERMUDEZ AZNAR, A.: El Corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474). Murcia 1974.
- - - - - El asistente real en los concejos castellanos bajomedievales en Actas del II Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1971
- BIONDI, B.: Il Diritto Romano Cristiano. Milán 1954
- BROOKE, N.: Gregory VII and the First contest betewn Empire and Papacy. en Cambridge Medieval History, vol. IV
- CALASSO, F.: Medioevo dell Diritto. Milan 1954
- - - - - I glossatori e la teoria della sovranita. Milan 1957
- - - - - Introduzione al Diritto Comune. Milan 1951
- CARLE, M.C. Del Concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires 1968
- - - - - Mercaderes en Castilla(1251-1512) en C.H.E. 21-22(1954)
- CARLYLE, H.: A History of de Medieval political theory in the West. Oxford. 1919
- CARRIAZO, J. de M. Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de Granada. en Al-Andalus 1948, vol. XIII, fasc. I, pgs. 35-96
- CERDA RUIZ FERNANDEZ, J.: En torno a la pesquisa y el procedimiento inquisitivo en el Derecho castellano-leones en la Edad Media. en AHDE. 32(1962) pgs. 483-517
- - - - - Adelantados Mayores y el Concejo de Murcia. Notas para un estudio histórico jurídico en I Semana de Estudios Murcianos. Murcia 1961
- - - - - Para un estudio sobre los Adelantados Mayores de Castilla. en Act del II Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1971.

- CLAVERO, B.: Notas sobre el Derecho territorial castellano, 1367-1445 en *Historia Instituciones, Documentos*, 3(1976)
- CLEMENCIN, A.: Elogio de la Reina Católica doña Isabel. *Memorias de la Academia de la Historia*, t. VI, Madrid 1920
- COLMEIR, D. M.: De la Constitución y del gobierno de los reinos de León y Castilla. Madrid 1855, 2 vols.
- Derecho Administrativo español. Madrid 1865
- Curso de Derecho Político según la historia de León y Castilla. Madrid 1873
- COS GAYON, F.: Historia de la Administración pública de España en sus diferentes ramas de derecho político, diplomacia, organización administrativa y hacienda desde la dominación romana hasta nuestros días. Madrid 1851
- CHAPADO, M.: Historia General del Derecho Español. Madrid 1900
- DANVILA COLLADO, M.: El poder Civil en España. Madrid 1885, 5 vols.
- DIAZ MARTIN, L. V.: Los oficiales de Pedro I de Castilla. Valladolid 1975
- Itinerario de Pedro I de Castilla. Valladolid 1975
- D'ESPENAY, G.: De l'influence du Droit canonique sur le developpement de la procedure civile et criminelle, en *Revue Historique de Droit Français et étranger*, 2(1856), pgs. 503-16.
- ERCOLE, : L'origine francese di una nova formula bartoliana en *Archivio storico italiano*, 1915
- Da Bartolo all' Althusio. Florencia 1932
- ERMINI, G.: Corso de diritto comune. Milan 1952
- ESCOLANO ARRIETA, P de.: Practica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen, o a cada sala en particular: y las fórmulas de las Cédulas, provisiones y certificaciones respectivas. Madrid 1796
- FERRARI, A.: La secularización de la Teoría del Estado en las Partidas en *AHDE*. 11(1934)
- FLOREZ, E.: Clave historial con que se facilita la entrada al conocimiento de los hechos ocurridos desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Madrid 1817.
- FONT RIUS, J. M.: Instituciones medievales españolas. Madrid 1949
- FRANCISCI P. de : Per lo svolgimento della episcopalis audientia. Roma 1915
- FOURNIER, P. Etudes sur les fauses decretales en *Revue d'histoire eclesiastique de Louvain*, vol. VII, (1906) y VII(1907)

- GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: Sancho IV de Castilla. Madrid 1928, 3 vols.
- GALIZIA, M.: La teoria della sovranita del Medioevo alla Rivoluzione francese Milan 1951
- GALLEGO ANABITARTE, A., : Administración y jueces: gubernetivo y contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado Constitucional y los fundamentos del Derecho Administrativo. Madrid 1971
- GARCIA DE ENTERRIA, E.: Dos estudios sobre la usucapion en el Derecho Administrativo. Madrid 1955
- La formación histórica del principio de autotutela en la Administración en Moneda y Crédito vol. I, 1974 Homenaje a Rubio Sacristán. n. 128
- GARCIA-GALLO, A.: Historia del Derecho Español. Madrid 1944
- Curso de Historia del Derecho, Madrid 1946-50, 2, vols.
- Manual de Historia del Derecho Español, 2 ed. Madrid 1964, 2 vols.
- Textos de Derecho territorial castellano en AHDE 13 (1936-1941), pgs. 308-96.
- Jueces populares y jueces técnicos en la Historia del Derecho Español, en La justicia municipal en sus aspectos históricos y científico, Ciclo de conferencias. Madrid 1946, pgs. 57-71
- El Imperio Medieval español. Arbor, Madrid 1953.
- El "Libro de las Leyes" de Alfonso el Sabio. Del Ejecculo a las Partidas. en AHDE 21-22 (1951-1952), pgs. 345-528
- La ley como fuente del Derecho en Indias en el siglo XVI. en AHDE 21-22 (1951-1952), pgs. 607-730
- Crisis de los derechos locales y su vigencia en la edad Moderna. Cuadernos de Derecho francés 10-11 Barcelona 1955
- Los orígenes de la administración territorial en Indias. El gobierno de Colón. en el vol. Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid 1972, pgs. 563-638
- Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI en AHDE 40 (1970), pgs. 313-47
- Cuestiones y problemas de Historia de la Administración Española en Actas del I symposium de Historia de la Administración. Madrid 1970
- La división en materia administrativa en España en la Edad Moderna en Actas del II Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1972.
- Los fueros de Toledo. en AHDE 45 (1975)

- - - - - Alcaldes Mayores y corregidores en Indias. en el vol. Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid 1972, pgs 695-741.
- - - - - Los Audiencias en Indias. Academia Nacional de Historia. Caac 1975
- - - - - Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X El AHDE. 46(1976)
- GARCIA MARIN, J. El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media. Sevilla 1974
- GARCIA PELAYO, M.: El Reino de Dios, arquetipo político. Madrid 1959.
- - - - - Los conceptos jurídicos en el pensamiento de San Isidoro de Sevilla. en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales. 1934
- - - - - La idea Medieval del Derecho en el vol. Del Mito y la Razón: el pensamiento político. Madrid 1968
- - - - - La puerta de Capua y la entrada en el templo de la justicia en el vol. Del Mito y la Razón. Madrid 1968
- GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las Instituciones españolas, 3 ed. Madrid 1973
- - - - - Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia, en BRAH. 103, 2, (1963)
- - - - - Sobre simbología jurídica de la España medieval en el vol. Homenaje a Esteban Uranga. Pamplona 1971
- - - - - Orígenes de la burguesía medieval. Madrid 1969
- - - - - El mercado, apuntes para su estudio en León y Castilla durante la Edad Media. Sevilla 1975 2 ed
- - - - - La pesquisa como medio de prueba en el Derecho Procesal del reino Astur-leonés. en Moneda y Crédito, Madrid 1977
- GARIBAY, E.: Compendio Historial de las Crónicas y Universal Historia de todos los Reynos de España. Barcelona 1628, 4 vols.
- GAUTIER DALCHE, J.: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos XI-XIII). Madrid 1979
- GIBERT SANCHEZ DE LA VEGA, R.: La paz del camino en el Derecho Medieval español en AHDE. 27-28(1957-1958)
- - - - - El antiguo Consejo de Castilla. Madrid 1964
- - - - - Historia General del Derecho Español, Madrid 1974
- - - - - El Derecho municipal en León y Castilla en AHDE 31(1961)
- - - - - Libertades Rurales y urbanas en León y Castilla durante la Edad Media en Libertés urbaines et rurales du XIe a XVe siècle. Bruselas 1968

- Voz "Audiencia" en la Enciclopedia RIALP, vol. III, pgs. 349-51
- GIMENEZ SOLER, Don Juan Manuel. Zaragoza 1932
- GIMENO CASALDUERO, J.: La imagen del monarca en Castilla del siglo XIV. Madrid 1972
- GONZALEZ, J.: Alfonso IX. Madrid 1944
- Repartimiento de Sevilla. Madrid 1951
- El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid 1960
- GONZALEZ ALONSO, B.: El Corregidor Castellano. Madrid 1970
- Gobernación y Gobernadores. Notas sobre la administración de Castilla en el período de formación del Estado Moderno, Madrid 1974
- Observaciones y Documentos sobre la Administración de Castilla a fines del siglo XV. en Revista Historia, Instituciones Documentos, 3(1976), pgs. 225-245
- El juicio de residencia en Castilla I. Origen y evolución hasta 1480 en AHDE. 48(1978)
- GONZALEZ MINGUEZ, J.: Fernando IV de Castilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza. Valladolid 1976
- GONZALEZ SERRANO, E.: Los oficios del Concejo en los Fueros municipales de León y Castilla. en Rev. de Ciencias Jurídicas y Sociales IV(1921) y V(1922).
- GUGLIELMI, N.: El "dominus villae" en Castilla y León. en CHE 19(1953)
- Los alcaldes reales en los concejos Castellanos. en Anales de Historia Antigua y Media. Buenos Aires 1956
- La Figura del Juez en el Concejo (León y Castilla) (siglos XI-X en Melanges R. Crozet. Poitiers 1966, vol. ii
- La Curia Regia en León y Castilla en CHE. 23-24, pgs. 116-267 y 28, pgs. 43-101.
- HASKINS, Ch. C.: The Renaissance of the 12 th. Century. Nueva York 1957
- HINOJOSA, E.: Origen del Régimen municipal en León y Castilla. Madrid 1903
- El Derecho en el Poema del Cid. en Obras de Eduardo de Hinojosa, t. I. pgs. 183-215
- HINTZE, Otto.: El comisario y su significación en la historia general de la Administración en el vol. Historia de las formas políticas. Madrid 1968.
- IGLESIA FERREIROS, A.: Las Cortes de Zamora de 1274 y los casos de Corte. AHDE 41(1971), pgs. 945-972
- Derecho municipal, Derecho señorial, Derecho Regio. en Rev. Historia, Instituciones, Documentos 4(1977)



- JAGER, H.: Justinien et l' "episcopalis Audientia" en Rev. Histoire du Droit Français et étranger IV, 38(1960).
- KAGAN, R.: Pleitos y Poder Real. La Chancillería de Valladolid. en Cuadernos de Investigación histórica 2, Madrid 1978, pgs. 291-316
- KANTOROWICZ, E. H.: The King's Two Bodies. Princeton 1957
- Mysteries of State: an Absolutist concept and its Late Mediaeval Origins, en The Harvard Theological Review, 48(1955)
- KANTOROWICZ, H.: Studies in the Glossators of the Roman Law. Cambridge 1953
- KLEIN, J.: La Mesta. Madrid 1936
- KOSCHAKER, P.: Europa y el Derecho Romano. Madrid 1935
- LA FUENTE, M.: Historia General de España por Barcelona 1669
- LALINDE ABADIA, J.: Iniciación Histórica al Derecho Español, Barcelona 1978 2.
- Los Medios personales de gestión del poder público en la Historia española. Madrid 1970
- LEFEBVRE, Ch.: voz "Rote Romaine" en fascículos 39 y 40 del Dictionnaire de Droit Canonique, Paris 1960
- LE GOFF, J.: La Baja Edad Media en Historia Universal Siglo XXI, vol. XI
- LEICHT, P. S.: Un principio político medievales en Scritti vari di Storia del Diritto italiano, Milano 1943
- LOPEZ REY, M.: La jurisdicción común castellana en el siglo XVI en la Rev. General de Legislación y Jurisprudencia 166(1935), pgs. 448-50.
- LOPEZ ORTIZ, J.: El proceso de los reinos cristianos de nuestra Reconquista has antes de la Recepción romano-canónica en AHDE 14(1942-43)
- MALDONADO FERNANDEZ DEL TORCO, J.: Líneas de influencia canónica en la Historia del Proceso español. en AHDE 23(1953)?
- Curso de Derecho Canónico para juristas Civiles. Madrid 1966
- MANZANO MANZANO, J.: Venezuela, territorio del primer adelantamiento de las Indias. Memoria del primer congreso venezolano de Historia, t. I, pgs. 403-427
- MARAVALL, J. A.: Teoría española del Estado en el siglo XVII. Madrid 1944
- Estudios de Historia del pensamiento español. Madrid 1967
- Estado Moderno y Mentalidad Social, Madrid 1972
- MARCOS PELAYO, F.: El Derecho judicial en las Partidas. Madrid 1930
- MARIANA, J.: Historia General de España. Madrid 1873, 7 vols.
- MARICHALAR Y MANRIQUE: Historia de la Legislación y recitaciones del Derecho Civil en España. Madrid 1861-1872, 9 vols.

- MARONGIU, A.: L' istituto parlamentario in Italia dalle origini al 1500. Roma 1939
- Un momento típico de la Monarquía Medieval: el Rey Juez. en AHDE 23(1953).pgs.677-715.
- MARTINEZ DIEZ, G.: Alava Medieval. Vitoria 1974
- Los oficiales públicos :de las Partidas a los Reyes Católicos en Actas del II Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1971
- MARTIN POSTIGO, M de la S.: La Cancillería Castellana de los Reyes Católicos. Valladolid 1959
- MARTINEZ MARINA, F.: Ensayo histórico crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Madrid 1808
- Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Madrid 1813, 3 vols.
- MARTINEZ RODRIGUEZ, J.: La figura histórico-jurídica del Juez Mayor de Vizcaya, en AHDE 38 (1968) pgs.641-671
- MAYER, E.: Historia de las Instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los siglos V al XIV. Madrid 1925-1926, 2 vols.
- MENDEZ DE SILVA, R.: Catálogo real y genealógico de España, ascendencias y descendencias de nuestros católicos Príncipes y Monarcas Supremos. Madrid 1656
- MENENDEZ PIDAL, R.: El imperio hispánico y los cinco reinos. Madrid 1950
- MENDIZABAL, F.: Investigaciones acerca del origen, historia, y organización de la Real Chancillería de Valladolid, su jurisdicción y competencia RABM 30 y 31 (1913-1914)
- MILLARES CARLO, A.: La Cancillería Real en León y Castilla hasta fines del Reinado de Fernando III. en AHDE 3 (1926), pgs.227-306
- MINGUIJON, S.: Historia del Derecho Español. Barcelona 1925.
- MITRE FERNANDEZ, E.: La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III. Valladolid 1969
- MOCHI ONORY, S.: Fonti Canonistiche dell' idea moderna dello Stato. Milan 19
- MONREAL CIA, G.: LAS Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya. Bilbao 19
- MONTERROSO Y ALVARADO, G.: Practica Civil, y Criminal, y instrucción de criبانos: Dividida en nueve tratados. Agora de nuevo emendada, añadida en esta postrera impresión la carta de trueque y cambio y especialmente en el quinto tratado: y sus anotaciones en el mgen. conforme a la Nueva Recopilación. Madrid 1603.

- MOUSSNIER, R.: *Histoire General des Civilizations*, vol. IV
- MOXO, S. de.: Los señoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial. *Hispania* 94(1964) y 95(1965)
- De la nobleza Vieja a la Nobleza nueva. Cuadernos de Historia. Anexos a la Revista Hispania, n.º 3
- La sociedad política castellana en la época de Alfonso XI. Cuadernos de Historia. Anexos a la Revista Hispania, 6
- La promoción política y social de los letrados en la Corte de Alfonso XI. *Hispania* 129(1975)
- El auge de la burocracia castellana en la Corte de Alfonso XI. en vol. Homenaje a Millares Carlo, vol. II Gran Canaria 1975
- NICOLINI, U.: *La proprietà, el Principe e l' espropiazione per pubblica utilità* Milan 1952
- NUÑEZ DE CASTRO, A.: *Vida de San Fernando III rey de Castilla y León*. Madrid 1787
- NUÑEZ DE ARCE, A.: *Libro histórico político. Solo Madrid es Corte y el cortejar en Madrid*. Madrid 1669
- OCHOA, J.: *Vicentius Hispanus*. Roma-Madrid 1960
- OLIVIER MARTIN, F.: *Histoire du Droit français*, Paris 1948
- PADOA SCHIOPPA, A.: *Richerche sull' apello ne' diritto intermedio*. Milan 1967,
- PACAUT, M.: *La theocratie .L' eglise et l' eglise et le pouvoir au Moyen Age*. Paris 1957
- PARADISI, B.: *Storia del diritto italiano. Le Fonti del diritto nell' epoca bolognese. I civilisti ferio a Rogerio*. Napoles 1962
- PASCUAL MARTINEZ, L.: *La cancillería de Enrique II de Castilla*. Miscelanea Medieval Murciana. Vol. I Murcia 1973
- Notas para el estudio de la cancillería castellana en el siglo XIV. Miscelanea Medieval Murciana. Murcia 1978, vol. VI
- PEREZ BUSTAMANTE, R.: *El Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474)*. Madrid 1976
- Sociedad, Economía, Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de Santillana. Santander 1979.
- PEREZ DE LA CANAL M.A.: *La Justicia de la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV*. en *Historia Instituciones Documentos* 2(1975).
- PEREZ PRENDES, J.M.: *Apuntes de Historia del Derecho español*. Madrid 1964 -
- Las Leyes de los Adelantados Mayores en Hidalguía, 1962, p. 3-1.
- Facer Justicia. Notas sobre la actuación gubernativa medieval. en *Moneda y Crédito* 128, pgs. 17-90

- PISKORSKY, W.: Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna. 1188-1520. Barcelona 1930
- POST, G.: "Blessed Lady Spain". Vicentius Hispanus and Spanish national imperialism in the thirteenth century. en *Speculum* 29(1954)
- PROCTER, E.S.: The Judicial Use of Pesquisa in Leon and Castile. 1157-1369. en *The English Historical Review* 2 (1966)
- The Castilian Chancery during the Reign of Alfons X. Oxford Essays in Honour of H.E. Salter. 1934
- PUYOL, J.: Orígenes del reino de León y de sus instituciones políticas. Madrid 1921
- RIAZA, GARCIA-GALLO.: Manual de Historia del Derecho Español. Madrid 1934
- RIVERO.: Índice de las personas, cosas y lugares que se mencionan en las tres Crónicas. *Hispania* 2(1942)
- RODRIGUEZ SOLER, J.: Madrid, sus pleitos y los letrados de la villa. Madrid 1973
- RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, I.: El Merino de la ciudad de Oviedo a mediados del siglo XV. en *AHDE* 39(1969)
- Alfonso Nicolás, Burgués de Oviedo y alcalde del Rey. *Asturiensi-Medievalia* 2 (1975).
- SACRISTAN MARTINEZ, J.: Municipales de Castilla y León. Madrid 1877
- SALAZAR DE MENDOZA, P.: Origen de las dignidades seculares de Castilla y León. Toledo 1618
- SALVIOLI, G.: Storia della procedura. Vol. III del la Storia del Diritto italiano, publicada bajo la dirección de P. del Giudice. Milan 1927
- SANCHEZ-AGESTA, L.: El poderío real absoluto en el testamento de 1554. en Carlos V, Granada 1958
- SANCHEZ ALBORNOZ, C.: El "Juicio del Libro" en León durante el siglo X, en *AHDE*. 1 (1924)
- La Curia Regia Portuguesa. Madrid 1920
- El Palatium Regis Asturleonés. *CHE*. 59-60(1976), pgs 5-104.
- Imperantes y Postetates en el reino asturleonés, en *CHE*. 45-46 (1967)
- "----- Homines Mandationis y Juniores en *CHE* 53-54(1971)
- Documentos para el estudio del procedimiento judicial en el reino asturleonés. en el Vol. Homenaje a Millares Carlo. Madrid 1975
- SANCHEZ BELDA, L.: La Cancillería Castellana durante el reinado de Sancho IV en *AHDE* 21-22(1951-1952)
- SANGRADOR VITORES, M.: Historia de la Administración de Justicia y del antiguo Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo reimpr. 1975

- SANTAYANA BUSTILLO, L.: Gobierno político de los pueblos de España. Zaragoza 1742
- Los magistrados y tribunales de España, su origen, instituto y gobierno. Zaragoza 1745
- SAVIGNY, C. F.: Storia del diritto romano nel medio evo. Turin 1857
- SCHRAMM, P.: Herrschaftszeichen und Staat symbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte von dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert. Traducido por Vázquez de Parga: Las insignias de la realeza en la Baja Edad Media española.
- SECO DE LUCENA, L.: El Juez de frontera y los fieles del resto. en Miscelánea de estudio árabes y hebraicos. 7 (1958), pgs. 137-140
- SEMPERE Y GUARINOS, J.: Histoire des Cortes d' Espagne. Burdeos 1815
- Historia del Derecho Español. Madrid 1847
- SINUES, A.: El Merino. Zaragoza 1954
- SUAREZ, F.: La colección de fazañas del ms. 431 de la Biblioteca Nacional en AHDE 14 (1942-43)
- SUAREZ FERNANDEZ, L.: Evolución histórica de las Hermandades castellanas. en CHE. 16 (1951)
- Castilla, el cisma y la crisis conciliar. Madrid 1960
- Estudio sobre el régimen monárquico de Enrique III de Castilla. Madrid 1954
- Nobleza y Monarquía. Valladolid 1975
- Juan I Rey de Castilla. (1379-1390). Madrid 1955
- Los trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. Vol. XV de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Madrid 1964
- La España de los Reyes. Católicos. Vol. XVII 1 y 2 de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Madrid 1969
- Castilla (1350-1406) vol. XIV de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Madrid 1966
- Historia del reinado de Juan I de Castilla. Madrid 1977
- TIERNEY, B.: The Crisis of Church and State 1050-1300. Englewood. N. J. 1964
- TOMAS Y VALIENTE, F.: Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de los oficios públicos en Castilla. en Actas del I Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1970
- La diputación de las Cortes de Castilla. en AHDE 32 (1962), pgs 34
- TORREANAZ, Conde de.: Los Consejos del Rey durante la Edad Media. Madrid 1890

- TORRES CAMPOS, J.: Caracter de la Conquista y colonización de las Islas Canarias. Discurso de Ingreso en la Real Academia de la Historia, 190
- TORRES FONTES, J.: Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del Dr. Galíndez de Carvajal. Murcia 1946
- - - - - El 'dicalde entre moros ./ cristianos del reino de Murcia. Hispania 88(1960)
  - - - - - El alcalde mayor de las aljamas de moros. en AHDE 32(1962).
  - - - - - Itinerario de Enrique IV de Castilla. Murcia
  - - - - - Pedro Fajardo Adelantado Mayor de Murcia. s.a. Madrid
  - - - - - El Concejo de Cartagena en el siglo XIII CDHRM. IV
  - - - - - El Estatuto concejil murciano en la época de Alfonso X el Sabio. en CDHRM II.
  - - - - - La regencia de don Fernando de Antequera. Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964
- TORRES SANZ, D.; La Administración central castellana en la Baja Edad Media. Tesis doctoral inédita. Valladolid 1979.
- ULMANN, W.: Principios de Gobierno y Política en la Edad Media. Madrid 1971
- - - - - The Growth of Papal government in the Middle Ages. Londres 1955
  - - - - - Medieval Papalism, the Political theories of the Medieval Canonists. Londres 1946
  - - - - - The medieval idea of Law as represented by Luccas Penna. Londres 1946
- VALDEON BARUQUE, J.: Las Cortes de Castilla y las luchas políticas en el siglo XV (1419-1430). en Anuario de Estudios Medievales 3(1966)
- - - - - Enrique II de Castilla. La guerra civil y la consolidación del régimen. Valladolid 1966
  - - - - - Las Cortes de castellanas en el siglo XIV. en AEM 7(1970).
- VILLAPALOS SALAS, G.: Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media. Madrid 1976
- - - - - La tramitación y gestión de los asuntos públicos en la Historia Constitucional en Actas del III Symposium de Historia de la Administración. Madrid 1974
  - - - - - Los recursos en materia administrativa en Indias en los siglos XVI y XVII. en AHDE. 46(1976). pgs. 5-76.

- VINOGRADOFF, : Il Diritto romano nell' europa Medievale. Palermo 1914
- VISMARA, G. : Episcopalis Audientia. L' autorità giurisdizionale del Vescovo per la  
risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e  
nella storia del diritto italiano al secolo nono. Milan 1973
- VON SCHOEN, W.F. : Alfonso X de Castilla. Madrid 1966
- WEBER, M. : Economía y Sociedad. México 1969
- WHITEY, J.P. The Reform of the Church. En Cambridge Medieval History, vol. V
- WOOD, C.H.T. Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII
- WOOLF, C.N.S. : Bartolus of Sassoferrato. Cambridge 1913.

-----

AVE MARIA GRATIA PLENA



BIBLIOTECA